ANUARIO

DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

AÑO

2017

PARTE II

1. NACIMIENTO, FILIACIÓN Y ADOPCIÓN

1.1 Nacimiento

1.1.1 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO FUERA DE PLAZO (INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO Y OPCIÓN A LA NACIONALIDAD. VER NACIONALIDAD 3.3.2.)

Resolución de 24 de enero de 2017 (9.^a)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.—*No es inscribible, por exigencias de los principios de veracidad biológica y de concordancia del registro con la realidad, un nacimiento ocurrido en Chile en 1986 con filiación española cuando hay datos suficientes para deducir que la pretendida filiación del interesado no se ajusta a la realidad conforme a las normas españolas.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y declaración de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Marbella (Málaga) el 12 de diciembre de 2013, el Sr. F.-J. S. G., de nacionalidad chilena y con domicilio en I. (Málaga), solicitó la inscripción de su nacimiento en el registro civil español por ser hijo de un ciudadano español. Aportaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; pasaporte chileno y certificado de nacimiento del interesado, nacido en Chile el 4 de octubre de 1986, hijo de D.-J. S. R. y de M.-G. G. A., con margi-

nales de reconocimiento del inscrito por parte de la madre el 21 de octubre de 1986 como hijo natural y de reconocimiento paterno el 16 de marzo de 2010 por matrimonio de D.-J. S. R. con la madre del inscrito el 12 de octubre de 2008; DNI e inscripción de nacimiento de D.-J. S.R., nacido en I. (Málaga) el 13 de enero de 1967; inscripción de matrimonio del anterior con M.-G. G. A., celebrado en I. el 12 de octubre de 2008, y certificado de empadronamiento.

II

Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para la inscripción, y a requerimiento del encargado de este, se realizó entrevista personal a los padres del promotor, quienes declararon que se habían conocido en España unos seis u ocho años atrás (no recuerdan exactamente) y que el ciudadano español reconoció al interesado como hijo suyo en Chile tras contraer matrimonio con la madre, aunque lo que ellos querían tramitar era la adopción, dado que el Sr. S. R. no es el padre biológico de F.-J.

III

El encargado del registro dictó acuerdo el 25 de septiembre de 2014 denegando la inscripción solicitada por no resultar acreditada la filiación española del no inscrito, sin perjuicio de que los interesados puedan incoar el correspondiente expediente para la adopción.

IV

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que, aunque no es hijo biológico del Sr. S. R., este lo ha reconocido en Chile legalmente como hijo suyo con los mismos derechos y obligaciones que si fuera biológico.

V

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 11-2.^a de noviembre de 2002; 2-2.^a de febrero de 2004; 30-2.^a de noviembre de 2005; 24-4.^a de enero de 2006; 3-5.^a y 23-3.^a de octubre y 27-5.^a de diciembre de 2007; 21-10.^a de diciembre de 2011, 10-14.^a de

febrero y 23-40.^a de agosto de 2012; 30-6.^a de enero y 15-28.^a de noviembre de 2013; 23-5.^a de abril y 4-27.^a de septiembre de 2014 y 4-1.^a de septiembre de 2015.

II. El promotor, de nacionalidad chilena, solicita su inscripción de nacimiento en el registro civil español por transcripción de la realizada en Chile, donde se ha inscrito su filiación paterna respecto de un ciudadano español tras el matrimonio contraído por este con la madre del inscrito. El encargado del registro dictó resolución denegando la inscripción por no resultar acreditada la filiación española del solicitante, dado que todos los interesados han reconocido que el promotor no es hijo biológico del ciudadano español, quien conoció a la madre años después de ocurrido el nacimiento.

III. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC) pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, segundo párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, párrafo primero, RRC).

IV. Por otra parte, la regulación de la filiación en el Código Civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que la declarada no podrá ser inscrita cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal filiación no se ajusta a la realidad. Así ocurre en este caso, a la vista de las declaraciones realizadas por los interesados, quienes han reconocido expresamente que el promotor no es hijo biológico del ciudadano español actualmente casado con la madre. A la vista de ello, no cabe por el momento practicar la inscripción pretendida porque no afecta a españoles, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en un expediente de adopción, que sería la vía adecuada según la legislación española, para el acceso al registro civil de la inscripción solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (46.^a)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.—*Una vez acreditada la filiación paterna respecto de un ciudadano español, procede continuar con el procedimiento para la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de seis hijos mauritanos (cinco de ellos menores de edad) del ciudadano español.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Nouakchott (Mauritania).

HECHOS

I

Mediante formularios presentados en el Registro Civil del Consulado General de España en Nouakchott (no consta la fecha de inicio en la documentación fotocopiada remitida por el consulado), Don S. C. C., mayor de edad y de nacionalidad española adquirida por residencia, solicitó las inscripciones de nacimiento en el registro civil español de sus seis hijos menores de edad. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI, pasaporte español e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Mollet del Vallès del promotor, nacido en M. el 31 de diciembre de 1960 (cuerpo principal de la inscripción), con marginal de 24 de marzo de 2014 de adquisición de la nacionalidad española por residencia y segunda marginal de 2 de abril de 2015 para hacer constar, en virtud de resolución registral de 25 de marzo de 2015, que la fecha de nacimiento del inscrito es el 14 de diciembre de 1960 y no lo que en principio se consignó por error; cuestionarios de declaración de datos para la inscripción; extractos de actas de nacimiento de M. (nacido el de 1997), B. (.... de 2000), M. (..... de 2002), S. (..... de 2004), T. (..... de 2006) y B. (..... de 2008) C., hijos de S. C., nacido el 14 de diciembre de 1960, y de A. C., nacida el 16 de agosto de 1971; tarjeta de identidad y acta de nacimiento mauritana de A. C., nacida en M. el 16 de agosto de 1971; extracto de acta mauritana de matrimonio celebrado el 10 de enero de 1983 entre S. C. y A. C. y certificados de identidad y residencia en Mauritania de todos los hijos.

II

Una vez acordado el inicio de expediente para la tramitación de la opción a la nacionalidad española de los menores, previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro consular dictó resolución el 1 de junio de 2015 denegando la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española por no considerar acreditada la filiación de los optantes respecto del ciudadano español en tanto que la fecha de nacimiento de este, según la inscripción practicada en España, es el 31 de diciembre de 1960 mientras que la fecha de nacimiento del padre en los certificados locales de nacimiento de los menores es el 14 de diciembre de 1960.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el promotor que, si bien es cierto que, por un error del registro, su fecha de nacimiento se consignó inicialmente de forma errónea en la inscripción practicada en España, el dato ya ha sido oportunamente corregido, tal como se puede comprobar en el propio asiento y en el DNI del inscrito.

IV

La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que, a la vista de las alegaciones, interesó su estimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Nouakchott emitió informe favorable y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 18 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 3-5.^a de mayo, 23-6.^a de junio, 17-3.^a de julio y 20-2.^a de noviembre de 2006; 16-6.^a de mayo de 2007; 27-2.^a de mayo y 28-7.^a de noviembre de 2008; 11-4.^a de marzo y 2-6.^a de julio de 2009; 7-1.^a y 15-4.^a de septiembre de 2010; 12-1.^a de enero de 2011; 19-54.^a de diciembre de 2012; 1-4.^a de marzo y 7-23.^a de mayo de 2013; 21-92.^a de febrero y 21-2.^a de abril de 2014 y 29-146.^a de agosto de 2016.

II. El promotor, mauritano de origen con nacionalidad española adquirida por residencia en 2014, pretende la inscripción de nacimiento en el registro civil español de sus seis hijos (todos menores de edad en el momento de inicio del expediente, si bien uno de ellos alcanzó la mayoría de edad posteriormente), previa opción a la nacionalidad española. La encargada del registro denegó en un principio la continuación del expediente por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna invocada en tanto que existía una discrepancia entre la fecha de nacimiento del promotor consignada inicialmente en la inscripción practicada en España y la que figuraba en las certificaciones locales de nacimiento de los hijos. Contra dicha resolución se presentó el recurso estudiado alegando que el registro español había cometido en su día un error al transcribir los datos de nacimiento pero que después fue convenientemente rectificado y la fecha que figura actualmente, coincidente con la del registro mauritano, es la correcta.

III. Una vez acreditada la rectificación del error en la inscripción de nacimiento española del promotor por medio de la correspondiente marginal, previa resolución registral, tal como han considerado tanto el órgano en fun-

ciones de ministerio fiscal como la encargada del registro consular, no se observa obstáculo alguno para la continuación del procedimiento de opción e inscripción de nacimiento de los hijos del ciudadano español previo cumplimiento de los trámites pertinentes, singularmente el consentimiento de la madre y la comparecencia de los mayores de catorce años y del que ya es mayor de edad.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y tener por acreditada la filiación paterna invocada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Mollet del Vallés (Barcelona).

Resolución de 9 de junio de 2017 (32.^a)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.—*Una vez declarada la nacionalidad española con valor de simple presunción por el Registro Civil de Requena, procede practicar la inscripción en el Registro Civil Central de un nacimiento ocurrido en S. (Sáhara Occidental) en 1976 tras resultar acreditados, mediante el expediente al que se refiere el artículo 95.5º LRC, los datos necesarios para practicarla, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento en curso para declarar que al interesado no le corresponde la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 16 de junio de 2011 en el Registro Civil de Requena (Valencia), el Sr. N. M-A. M-M., mayor de edad y con domicilio en aquel momento en B., solicitó la práctica de su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central tras haber obtenido la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción. Consta en el expediente la siguiente documentación: auto del encargado del registro de 12 de mayo de 2011 declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción del promotor por aplicación retroactiva del artículo 17.3º del Código Civil en la redacción dada por la Ley 51/1982, de 13 de julio; respuesta negativa del Archivo General de la Administración a la solicitud de copia de la partida de nacimiento del interesado indicando que,

cuando el solicitante nació, el Sáhara Occidental ya no estaba bajo administración española; permiso de residencia en España; pasaporte argelino; certificado de empadronamiento; certificados de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) legalizados por autoridades argelinas y españolas de paternidad, de nacionalidad saharauí, de nacimiento (el 1 de enero de 1976 en S.) y de residencia del promotor en los campamentos de refugiados saharauis hasta el 30 de abril de 2008; certificados expedidos por la Delegación Saharaui para la Comunidad Valenciana de nacimiento del promotor en B-B. (Sáhara Occidental) el 1 de enero de 1976, de nacionalidad saharauí y de haber residido desde 1976 en los campamentos de refugiados de Argelia; certificados de ciudadanía saharauí del promotor, nacido en O. el 1 de enero de 1976; recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO); DNI de la RASD correspondiente a N. M-A. M. M., nacido en Bojador el 1 de enero de 1976; libro de familia expedido por el Gobierno General del Sáhara en 1973 correspondiente al matrimonio de M-A. M-M. u. S. H. y S. M. A. u. H.. (resto ilegible) y ocho hijos nacidos entre 1942 y 1973; título de familia numerosa de 1975; certificados de la Dirección General de la Policía de expedición de DNI saharauí en 1972 y 1971, respectivamente, a nombre de S. A. H-M. y de M-A. M.-M. S., actualmente carentes de validez; inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central de B. M-M. A., nacido en T. (Sáhara Occidental) el 5 de mayo de 1973, hijo de M-A. M-M. S-A. y de S. A. H-M, con marginal de 15 de septiembre de 2006 de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por el encargado del Registro Civil de Valencia el 23 de septiembre de 2005 y nota para hacer constar que el inscrito usa habitualmente y es conocido por los apellidos M-A. M-M.; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; comparecencia de ratificación del interesado; providencia del encargado del Registro Civil de Requena de 16 de junio de 2011 de inicio de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo; notificación del expediente y prueba testifical practicada a dos hermanos del interesado (B. y M-F.), quienes declaran que les consta a ciencia cierta que N. nació en S. el 1 de enero de 1976; edicto publicado en el Registro Civil de Requena e informes favorables del ministerio fiscal y del encargado del registro.

II

Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para la inscripción, el ministerio fiscal emitió informe desfavorable al tiempo que interesaba el inicio de expediente para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española. El encargado del registro dictó auto el 7 de junio de 2013 denegando la inscripción pretendida por considerar que se había declarado indebidamente la nacionalidad española con valor de simple presunción.

III

Notificado el auto, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que, en resolución de 16 de septiembre de 2014 (3.^a), estimó parcialmente el recurso –por no estar facultado el encargado de practicar la inscripción para volver a enjuiciar el fondo del asunto– ordenando la práctica de un asiento soporte de nacimiento y del asiento de nacionalidad, debiendo retrotraerse las actuaciones para que el encargado se pronunciara acerca de la concurrencia o no de los requisitos necesarios para practicar la inscripción definitiva de nacimiento. Al mismo tiempo se ordenaba continuar la tramitación del expediente incoado por el ministerio fiscal para declarar que al interesado no le corres-

ponde la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, anotando marginalmente la existencia de dicho procedimiento.

IV

Una vez practicada la anotación soporte de nacimiento, el asiento para hacer constar la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción y la marginal de procedimiento en curso para su cancelación, previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó resolución el 27 de agosto de 2015 denegando la inscripción pretendida por falta de garantías de los documentos expedidos por la RASD, cuyas autoridades no cuentan con base legal suficiente para acreditar la realidad de los hechos que se pretenden inscribir y su legalidad conforme a la legislación española.

V

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que poner en duda ahora documentos que fueron tenidos por buenos durante la tramitación del expediente anterior de declaración de nacionalidad produce indefensión; que el artículo 80 del Reglamento del Registro Civil establece que la inscripción se practicará en cuanto resulte legalmente acreditado cualquier hecho de que hace fe, aun cuando no puedan constar todos los datos exigidos y sin perjuicio de las diligencias para completarla; que la inscripción en este caso deriva de un expediente previo y que los datos de identidad y filiación del interesado están acreditados no solo por los documentos de la RASD sino también por documentos argelinos, de Naciones Unidas y de las autoridades españolas. Al escrito de recurso se adjuntaba la siguiente documentación: inscripciones de nacimiento en el Registro Civil Central de M-F. y B. M-M. A., hermanos mayores del promotor, título de viaje expedido al recurrente por las autoridades españolas, solicitud de prueba de paternidad e informe de vida laboral.

VI

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1.988, y las resoluciones, entre otras, 10-3.^a de mayo y 22-2.^a de noviembre de 2002, 10-4.^a de junio de 2005, 8-2.^a de octubre de 2007, 2-17.^a de septiembre y 21-15.^a de diciem-

bre de 2010, 25-11.^a de febrero y 1-14.^a de septiembre de 2011 y 4-10.^a de marzo de 2016.

II. El promotor, que obtuvo en 2011 la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por resolución del encargado del Registro Civil de Requena, solicita su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central. El encargado, que había practicado una anotación soporte tras la resolución por parte de este centro de un recurso previo, denegó la inscripción definitiva por no considerar acreditadas las circunstancias necesarias para practicarla. Dicha denegación constituye el objeto de este segundo recurso.

III. Son inscribibles en el Registro Civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23.2 LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85.1 RRC). Pero aquí, dadas las características del caso, el encargado del Registro Civil de Requena sí consideró necesario acudir a la vía del expediente al que alude el artículo 95.5º LRC, instruyendo el procedimiento desarrollado en los artículos 311 a 316 RRC, de manera que la inscripción no se practicará exclusivamente sobre la base de la certificación de nacimiento expedida por la RASD sino a la vista del conjunto de la documentación y pruebas practicadas. En este sentido, la única duda que surge –y en la que se ha basado el encargado del registro para denegar la inscripción– es la que se refiere al lugar de nacimiento del interesado (S., B. u O.), siendo coincidentes todos los demás datos necesarios para practicar la inscripción. Pues bien, teniendo en cuenta que en la mayoría de los documentos el lugar consignado es S., que en este tipo de expedientes basta para determinar la población de nacimiento «la información de dos personas a quienes les conste de ciencia propia o por notoriedad» (art. 313, párrafo segundo, RRC), si bien se procurará la concurrencia de otras pruebas, y que han comparecido ante el registro dos de los hermanos mayores del promotor que también han declarado que el nacimiento se produjo en S., cabe dar por acreditado ese dato. Además, constando la legalización de los certificados saharauis por las autoridades tanto argelinas como españolas y en ausencia de elementos que pudieran indicar una evidente falta de garantías en cuanto a su contenido, no hay motivo para dudar en este caso de la realidad de las circunstancias consignadas en esos documentos. La falta de reconocimiento por parte de España de la denominada República Árabe Saharaui Democrática o la falta de definición del estatuto internacional del Sáhara no afectan per se al valor probatorio de los documentos emitidos por sus autoridades en cuanto a las circunstancias que contienen, que podrán tenerse por acreditadas –aunque habrá de valorarse cada caso concreto– siempre que tales documentos se pre-

senten debidamente legalizados por parte de otras autoridades de competencia reconocida y que, además, no se aprecien indicios que hagan dudar de la realidad de los hechos esenciales que deben figurar en la inscripción. Por tanto, a la vista del conjunto de los documentos incorporados al expediente y dado que sobre las demás menciones registrales no existe discrepancia alguna, procede practicar la inscripción definitiva, sin perjuicio, no obstante, de lo que resulte del procedimiento instado por el ministerio fiscal para declarar que al interesado no le corresponde la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y practicar la inscripción definitiva de nacimiento.

Madrid, 9 de junio de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de julio de 2017 (22.ª)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.—1.º *Tras la modificación del artículo 30 CC por la disposición final tercera de la Ley 20/2011, de 21 de julio, son inscribibles los nacimientos con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.*

2.º *Solo es posible practicar la inscripción en el domicilio de los progenitores, distinto del lugar real de nacimiento, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16.2 LRC.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto de la encargada del Registro Civil de Mondoñedo (Lugo).

HECHOS

I

Por medio de comparecencia en el Juzgado de Paz de Ribadeo (Lugo) el 16 de diciembre de 2014, Don J. G. V. y D.ª P. I. R., con domicilio en dicha localidad, solicitaron la inscripción de nacimiento en ese mismo registro de su hijo H. I. G., nacido en A C. el de 2014 y fallecido unas horas después, así como la rectificación de la inscripción de defunción practicada en A C. para hacer constar el apellido paterno, dado que en el asiento solo figuran los apellidos maternos. Consta en el expediente la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción con parte del facultativo que asistió al nacimiento,

certificado del centro hospitalario de A Coruña donde ocurrió el nacimiento de no haber promovido la inscripción, DNI de la promotora, pasaporte y permiso de conducción del promotor.

II

Remitido el expediente al Registro Civil de Mondoñedo, a instancia de su encargada se incorporaron desde el Registro Civil de A Coruña sendas certificaciones negativas de inscripción de nacimiento de H. I. R. (solo con filiación materna) y de H. I. G. (con doble filiación), así como una diligencia para comunicar que en la inscripción de defunción del nacido (cuya copia también se incorporó al expediente) se consignó que su nacimiento constaba inscrito en el Registro Civil de A Coruña porque en el cuestionario de declaración de datos del fallecimiento figuraba que el nacimiento se había producido allí y, por defecto, así quedó reflejado en la aplicación informática.

III

El ministerio fiscal emitió informe en el que consideraba que no procedía practicar la inscripción solicitada porque el nacido no había vivido veinticuatro horas, como exige el artículo 30 del Código Civil (CC), por lo que la inscripción pertinente era la prevista en los artículos 171 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RRC) y debía practicarse en el registro donde ocurrió el hecho. La encargada del Registro Civil de Mondoñedo dictó auto el 10 de marzo de 2015 acordando la práctica de la inscripción por considerar cumplidos los presupuestos legales.

IV

Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el no inscrito nació el 23 de noviembre de 2014 a la 1:43 y falleció a las 4:10, no llegando a vivir veinticuatro horas (*cf.* art. 30 CC), por lo que el nacimiento no es inscribible según lo establecido en el artículo 40 de la Ley del Registro Civil (LRC), que se refiere al cumplimiento de las condiciones del artículo 30 CC y, en consecuencia, deberá procederse según lo previsto en los artículos 171 y siguientes RRC.

V

La interposición del recurso se notificó a la promotora (el promotor no fue localizado), que no presentó alegaciones. La encargada del Registro Civil de Mondoñedo se ratificó en su decisión señalando que el artículo 30 CC ha sido modificado por la Ley 20/2011 del Registro Civil y remitiendo a continuación el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 30 del Código Civil, 15, 16 y 40 de la Ley del Registro Civil, 46, 66, 68 y 166 del Reglamento del Registro Civil.

II. Los promotores solicitaron la inscripción de nacimiento de su hijo, fallecido unas horas después y cuya inscripción de defunción se practicó en A C. –lugar donde también se había producido el nacimiento– en el registro del domicilio de la madre en aquel momento, R., al tiempo que solicitaban la rectificación de los apellidos que figuran en la inscripción de defunción para hacer constar el paterno. Acordada la inscripción por la encargada del registro principal del que depende el del juzgado de paz, el ministerio fiscal interpuso recurso por considerar que, no habiendo vivido veinticuatro horas el nacido, el procedimiento adecuado es el previsto en los artículos 171 y siguientes del reglamento.

III. Tal como señala la encargada en su informe posterior a la presentación del recurso, el artículo 30 del Código Civil, en efecto, ha sido modificado por la disposición final tercera de la Ley 20/20011, de 21 de julio, del Registro Civil y en su nueva redacción, en vigor desde el 23 de julio de 2011, dispone que «*La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno*», de manera que el nacimiento objeto de este expediente es inscribible en la sección primera del registro correspondiente.

IV. No obstante, en cuanto al registro competente para practicar la inscripción, cabe decir –aunque no es posible emitir aquí un pronunciamiento sobre la cuestión por falta de datos– que el artículo 16.2 LRC solo permite practicarla en el lugar del domicilio de los progenitores, distinto del lugar real de nacimiento, previa justificación del domicilio de al menos uno de ellos (aunque con el acuerdo de los dos) y siempre que se solicite dentro de plazo. En este sentido, como también indicó la encargada en la resolución recurrida, el plazo legal general para practicar la inscripción es de ocho días siguientes al nacimiento (art. 40 LRC), si bien el reglamento lo amplía a treinta días cuando se acredite justa causa, que deberá constar en la inscripción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y practicar la inscripción solicitada.

Madrid, 21 de julio de 2017.–El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Mondoñedo (Lugo).

Resolución de 21 de julio de 2017 (24.ª)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.— *Una vez declarada la nacionalidad española con valor de simple presunción por el Registro Civil de Novelda, procede practicar la inscripción en el Registro Civil Central de un nacimiento ocurrido en E. (Sáhara Occidental) en 1975 tras resultar acreditados, mediante el expediente al que se refiere el artículo 95.5º LRC, los datos necesarios para practicarla, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento en curso para declarar que al interesado no le corresponde la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2014 en el Registro Civil de Elda (Alicante), Don L. S. D., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitó la conversión en inscripción de nacimiento definitiva de la anotación soporte practicada en el Registro Civil Central tras haber obtenido la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción en N.. Consta en el expediente la siguiente documentación: anotación soporte de nacimiento del interesado, nacido en E. (Sáhara Occidental) el 12 de febrero de 1975, practicada el 26 de marzo de 2014, seguida de anotación de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por resolución de 23 de noviembre de 2012 del encargado del Registro Civil de Novelda; certificado de empadronamiento; DNI de H. A. M. expedido en A. en 1974, actualmente carente de validez; certificado de nacimiento de L. S. D., nacido en E. el 12 de febrero de 1975 e hijo de S. D. B. y de H. A. M., expedido por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 2014 y legalizado por autoridades argelinas y españolas; certificado de la Dirección General de la Policía de expedición de DNI el 7 de agosto de 1971, actualmente carente de validez, a nombre de S. D. B., nacido en H. (Sáhara) en 1922; DNI de S. H. A.i y de A. M. A., expedidos en A. el 21 de abril de 1975 y el 16 de marzo de 1971, respectivamente; DNI del solicitante en vigor en el momento de la solicitud; recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) expedido el 23 de marzo de 1998 a nombre de L. S. D., nacido en 1975 en E., y cuestionario de declaración de datos para la inscripción.

II

Ratificado el interesado y practicada prueba testifical a dos personas, el expediente se remitió al Registro Civil Central con informes favorables del ministerio fiscal y del encargado del Registro Civil de Elda.

III

Desde el Registro Civil Central se ordenó la toma de declaración al solicitante en relación a varios datos personales, así como la práctica de nueva declaración testifical de dos personas y examen por parte del médico forense.

IV

Incorporado al expediente el resultado de las diligencias anteriores, el ministerio fiscal emitió informe desfavorable al tiempo que interesaba el inicio de un expediente para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción. El encargado del registro dictó auto el 30 de septiembre de 2015 denegando la inscripción pretendida por no considerar acreditados los datos esenciales del hecho inscribible (filiación, fecha y lugar de nacimiento) y ordenando la incoación del expediente de cancelación de los asientos ya practicados.

V

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando el recurrente que la inscripción solicitada se deriva de un expediente previo en el que se declaró su nacionalidad española y que se ha producido indefensión, dado que se habían aportado variados documentos y el auto recurrido no especifica cuáles son los defectos en ellos observados que fundamentan la denegación. Añadía que, si el motivo del rechazo a la inscripción es la falta de reconocimiento oficial de la RASD, debe tenerse en cuenta que los documentos expedidos por sus autoridades sí han sido admitidos tanto en solicitudes administrativas de permisos de residencia y trabajo como en sentencias judiciales, así como por la propia DGRN en expedientes de nacionalidad por residencia, por lo que también deberían ser aceptados en el expediente de inscripción fuera de plazo de los artículos 311 y 312 del Reglamento del Registro Civil.

VI

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente –junto con el que sirvió de base para la práctica de las anotaciones de nacimiento y nacionalidad con valor de simple presunción– a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1.988, y las resoluciones, entre otras, 10-3.^a de mayo y 22-2.^a de noviembre de 2002, 10-4.^a de junio

de 2005, 8-2.^a de octubre de 2007, 2-17.^a de septiembre y 21-15.^a de diciembre de 2010, 25-11.^a de febrero y 1-14.^a de septiembre de 2011 y 4-10.^a de marzo de 2016.

II. El promotor, que obtuvo en 2012 la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por resolución del encargado del Registro Civil de Novelda, solicita su inscripción de nacimiento definitiva en el Registro Civil Central. El encargado, que había practicado una anotación soporte en 2014, denegó la inscripción definitiva por no considerar acreditadas las circunstancias necesarias para practicarla. Dicha denegación constituye el objeto del recurso.

III. Son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, *«siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española»* (art. 23.2 LRC) y siempre que el registro extranjero *«sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española»* (art. 85.1 RRC). Pero aquí, dadas las características del caso, el encargado del Registro Civil Central consideró necesario acudir a la vía a la que se refiere el artículo 95.5º LRC, instruyendo el procedimiento desarrollado en los artículos 311 a 316 RRC, de manera que la inscripción no se practicará exclusivamente sobre la base de la certificación de nacimiento expedida por la RASD sino a la vista del conjunto de la documentación y pruebas practicadas. En este sentido, la única duda que surge es la relativa a la transcripción correcta en castellano del nombre del lugar de nacimiento del interesado (E., según la mayoría de los documentos y declaraciones realizadas, o A., según el acta de declaración de los dos últimos testigos), siendo coincidentes todos los demás datos necesarios para practicar la inscripción. Pues bien, teniendo en cuenta que en la mayoría de los documentos el nombre de la localidad es E. (incluido el recibo de la MINURSO expedido en 1998, el documento más antiguo que figura en el expediente a excepción del DNI caducado de la madre), que en este tipo de expedientes basta para determinar la población de nacimiento *«la información de dos personas a quienes les conste de ciencia propia o por notoriedad»* (art. 313, párrafo segundo, RRC), si bien se procurará la concurrencia de otras pruebas, y que han comparecido ante el registro cuatro testigos que aseguran conocer al promotor desde que nació porque vivían en localidades muy cercanas, los cuales también han declarado que les consta que los datos que se pretenden inscribir son ciertos, cabe dar por acreditados los datos esenciales que deben figurar en la inscripción. Además, constando la legalización del certificado de nacimiento saharauí aportado por las autoridades tanto argelinas como españolas y en ausencia de elementos que pudieran indicar una evidente falta de garantías en cuanto a su contenido, no

hay motivo para dudar en este caso de la realidad de las circunstancias consignadas en ese documento. La falta de reconocimiento por parte de España de la denominada República Árabe Saharaui Democrática o la falta de definición del estatuto internacional del Sáhara no afectan *per se* al valor probatorio de los documentos emitidos por sus autoridades en cuanto a las circunstancias que contienen, que podrán tenerse por acreditadas –aunque habrá de valorarse cada caso concreto– siempre que tales documentos se presenten debidamente legalizados por parte de otras autoridades de competencia reconocida y que, además, no se aprecien indicios que hagan dudar de la realidad de los hechos esenciales que deben figurar en la inscripción. Por tanto, a la vista del conjunto de los documentos incorporados al expediente y dado que no se aprecia discrepancia acerca de las menciones registrales esenciales, procede practicar la inscripción definitiva, sin perjuicio, no obstante, de lo que resulte del procedimiento ya iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y practicar la inscripción definitiva de nacimiento.

Madrid, 21 de julio de 2017.–El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (6.ª)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.– *Debe inscribirse el nacimiento acaecido en Cuba en 1995 al haber quedado acreditado el hecho, el lugar y la fecha del mismo, pero no procede la inscripción de filiación paterna atribuida respecto a varón distinto de quien fue marido de la madre, por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto del cónyuge que no ha sido destruida.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento en aplicación del artículo 17.1.a del Código Civil, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 4 de junio de 2012, R. E. V. G., menor de edad, asistido por su madre como representante legal, solicita la inscripción de su nacimiento en el registro civil español como hijo de ciudadana española. Aporta la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que nació el 27 de julio de 1995 en M., L. T. (Cuba) y es hijo de R. E. V. S., nacido en G., C. en 1970 y de M. G. F., nacida en M. en 1973, ambos divorciados en el momento del nacimiento del promotor, fotocopia de la tarjeta de menor cubana y certificado no literal de nacimiento del promotor, certificado no literal de nacimiento cubano del Sr. V. S., tarjeta de identidad cubana de la madre del promotor y certificado literal español de nacimiento de la misma, hija de H. G. S. nacido en Cuba en 1941 y de nacionalidad española y de G. F. L., nacida en Cuba en 1951 y de nacionalidad cubana, certificado no literal de matrimonio de la madre del promotor con el Sr. V. S. R., celebrado en Cuba en agosto de 1991 y disuelto por sentencia de divorcio firme desde el 18 de enero de 1995.

II

La encargada del registro civil consular dictó auto el 17 de octubre de 2014 declarando que en el promotor concurren los requisitos establecidos en el artículo 17.1.a) del Código Civil, vigente en la fecha del nacimiento del mismo, que recogía que era español de origen los hijos de padre o madre españoles, ordenando que se inscriba su nacimiento con los apellidos maternos, dado que no ha quedado demostrado que concurren los requisitos exigidos por los artículos 108, 113, 116 y 120 y 124 del Código Civil y 48 y 49 de la Ley del Registro Civil, en relación con los artículos 185 a 190 del Reglamento del Registro Civil.

III

Notificada la resolución, el promotor, ya mayor de edad, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado disconforme con haber sido inscrito con los apellidos de su madre, distintos de los que actualmente tiene.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que en la tramitación del expediente se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto dictado resulta conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 31-1.^a de enero de 2004; 25-1.^a de noviembre y 9-1.^a de diciembre de 2005; 4-4.^a de junio de 2007 y 9-4.^a de julio de 2008.

II. El promotor, menor de edad asistido por su representante legal, formuló solicitud de inscripción de nacimiento en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) en base a lo establecido en el artículo 17.1.a) del Código Civil, que fue reconocida por auto de fecha 17 de octubre de 2014, dictado por la encargada del registro civil consular, si bien la inscripción de nacimiento se efectuó con los apellidos maternos.

La madre del promotor, de nacionalidad española, contrajo matrimonio con ciudadano cubano distinto del presunto padre en agosto 1991, que fue disuelto por sentencia de fecha 27 de julio de 1995. El promotor nace el 27 de julio de 1995, dentro del período de los 300 días siguientes al divorcio de su progenitora, por lo que en aplicación del artículo 116 del Código Civil no ha quedado establecida la filiación paterna no matrimonial respecto del presunto progenitor. La encargada del registro civil consular ordenó la práctica de la inscripción con la filiación materna.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento del optante practicada en el registro civil español cuando, habiendo existido un matrimonio anterior de la madre disuelto por divorcio antes del nacimiento del inscrito, pero sin que transcurra el período de 300 días posteriores legalmente establecido, se declara que el padre de este no es el exmarido sino otro ciudadano, que es quien figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 Cc) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (*cfr.* art. 386 LEC).

V. En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana, lo cierto es que no se aporta ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de

la madre y de su primer marido al menos trescientos días antes del nacimiento del hijo, ya que se aporta, copia literal incompleta de sentencia de divorcio que no establece como hecho probado la existencia de la separación previa, sentencia que además que aparece reflejada erróneamente en cuanto a su ordinal en la marginal de la inscripción de nacimiento de la madre del promotor, por lo que de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial respecto del exmarido. La mera declaración de la interesada no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrá que intentarla el recurrente en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente en el que se acredite suficientemente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento del promotor. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la práctica de una anotación marginal en la inscripción española, con valor meramente informativo, para hacer constar los apellidos del inscrito conforme a su ley personal cubana (art. 38.3º LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 8 de septiembre de 2017.–Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (31.^a)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.–*Ni consta la legitimación del promotor para instar la inscripción de nacimiento de una persona ya fallecida ni de la prueba aportada queda suficientemente acreditado el hecho cuya inscripción se pretende.*

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Tarragona.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana (Cuba) en fecha 5 de septiembre de 2012 el Sr. R.-J. H. S., de nacionalidad cubana y domiciliado en la demarcación del Consulado General de España en La Habana, solicita la inscripción fuera de plazo del nacimiento de J. M. S. V. exponiendo que es su abuelo y que nació en T. el 19 de marzo de 1894. Acompaña la siguiente documentación: testimonio de carné de identidad cubano propio, escrito de fecha 25 de marzo de 2008 por el que el juez de paz de M. (Tarragona) informa al peticionario de que el registro civil fue destruido durante la guerra pero que es posible que en la parroquia obre certificación de bautismo que permita iniciar un expediente de reconstrucción de la inscripción de nacimiento; certificación negativa de inscripción el 19 de marzo de 1894 en el Registro Civil de Tarragona de J.-M. S. V., hijo de J. y de J., y certificado cubano de inscripción en el Registro de Extranjeros, en fecha que no se indica y con 47 años de edad, de J. S. V., natural de España.

II

Ratificado el promotor en el contenido del escrito presentado, el canciller en funciones de ministerio fiscal informó que estima que debe accederse a lo solicitado y el 10 de septiembre de 2012 el encargado del registro civil consular acordó remitir lo actuado al municipal de Tarragona, en el que tuvo entrada el 29 de mayo de 2014.

III

El ministerio fiscal informó que no se opone a lo solicitado en los términos interesados y el 16 de junio de 2014 el juez encargado, razonando que únicamente ha quedado acreditado que no existe inscripción en el Registro Civil de Tarragona y que el promotor no ha aportado ningún elemento o indicio probatorio del que pueda inferirse el nacimiento en esa capital, o en otra población, como hubiese podido ser, a título de ejemplo, la certificación de defunción, dictó auto disponiendo denegar la práctica de la inscripción de nacimiento fuera de plazo instada.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 11 de noviembre de 2014, al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no puede ofrecer datos del matrimonio ni de la defunción de su abuelo porque se casó y falleció en Cuba, que está constatado que llegó al puerto de S. C. en el vapor «C.» el 24 de febrero de 1906, con 12 años de edad, que han encontrado documentos donde él jura que nació en M. el 19 de mayo de 1894 y que fue inscrito en el juzgado municipal de dicha población y que en ese registro civil podrían existir antecedentes de una hermana, J. S. V., que mantenía correspondencia con su madre, H. S. O., y residió en M. al menos hasta septiembre de 1963.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que el recurrente invoca hechos históricos pero no aporta elemento probatorio alguno que pueda amparar la inscripción y desvirtuar las argumentaciones jurídicas del auto apelado, interesó la desestimación del recurso y el juez encargado del Registro Civil de Tarragona emitió informe desfavorable, por los propios fundamentos de la resolución dictada, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 24, 41, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 311 a 316, 346 y 351 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 12 de junio de 1991, 30 de abril y 24 de junio de 1999, 11-4.^a de marzo y 9-5.^a de junio de 2008 y 28-35.^a de junio y 20-69.^a de diciembre de 2013.

II. Pretende el promotor la inscripción fuera de plazo del nacimiento de J. M. S. V., exponiendo que es su abuelo y que nació en T. el 19 de marzo de 1894, hijo de J. y de J., y el juez encargado, razonando que únicamente ha quedado acreditado que no existe inscripción en Registro Civil de Tarragona y que no se ha aportado ningún elemento o indicio probatorio del que pueda inferirse el nacimiento en esa capital o en otra población como, por ejemplo, la certificación de defunción, dispone denegar la práctica de la inscripción solicitada mediante auto de 16 de junio de 2014 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La obligación, que podría alcanzar incluso al ministerio fiscal, de promover la inscripción e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse circunscrita a los supuestos en los que persiste el interés público primordial de lograr la concordancia entre el registro y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), interés superior que subsanaría eventuales defectos en la legitimación de los promotores (*cf.* art. 348 RRC).

IV. Sin embargo, cuando la inscripción de nacimiento solicitada es de una persona fallecida, la cuestión tiene exclusivamente interés privado y por ello es forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, un interés legítimo en la incoación del expediente (*cf.* arts. 97 LRC y 346 RRC) que, en este caso, no se explicita ni en el escrito inicial ni en el de recurso y, por otra parte, aunque el peticionario manifiesta que el no inscrito es su abuelo, ni tan siquiera aporta documentación registral que dé constancia del parentesco invocado.

V. Por lo demás, el promotor, a quien incumbe la carga de la prueba del hecho cuya inscripción solicita (art. 351 RRC), no ofrece ninguna del lugar y fecha de nacimiento, nombre y filiación del no inscrito y demás datos exigidos.

dos para la inscripción y en el recurso aduce que el nacimiento ocurrió en el pueblo de M. incurriendo en contradicción respecto a un dato del que la inscripción de nacimiento hace fe (*cf.* art. 41 LRC) y que adicionalmente determina el registro competente para practicar la inscripción que, en tal caso, no sería el de T.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 29 de septiembre de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tarragona.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (22.^a)

Inscripción de nacimiento mediante gestación por sustitución.— *No es inscribible un nacimiento acaecido en la República de Guinea en 2014 por no resultar suficientemente acreditada la filiación del nacido respecto de un español.*

En las actuaciones sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de Conakry (República de Guinea).

HECHOS

I

El 19 de diciembre de 2014 Don B. C. K., nacido el 31 de mayo de 1964 en M. (Guinea), presentó en la Sección Consular de la Embajada de España en la República de Guinea, en calidad de padre, impreso de declaración de datos para la inscripción del nacimiento de A. S. C., nacido en M., C. (Guinea) el de 2014 e inscrito en el registro local el 16 de diciembre de 2014, acompañando declaración de la clínica donde acaeció el hecho, actas de nacimiento guineanas del menor, literal y en extracto, copia de tarjeta nacional de identidad y extracto de acta de nacimiento guineanas de la madre del nacido y, como documentos propios, copia de pasaporte español y certificación literal de inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Vigo (Pontevedra) el 18 de enero de 2007 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 12 de diciembre de 2006.

II

En el mismo día, 19 de diciembre de 2014, el promotor fue informado de que es preciso presentar la documentación de la madre del nacido debidamente legalizada y, cumplimentado lo anterior en diciembre de 2015, el ministerio fiscal (*cf.* art. 54 del Reglamento del Registro Civil) informó que en la documentación aportada se observan irregularidades que suscitan dudas fundadas sobre la veracidad de los hechos cuya transcripción se pretende y el 20 de enero de 2016 la encargada del registro civil consular de Conakry, razonando que de los documentos presentados resultan contradicciones respecto al lugar –población y país– y la fecha de nacimiento de la madre del no inscrito, cuya partida de nacimiento obra en registro civil de población distinta a la de nacimiento, está manipulada y enmendado con típex el año de nacimiento las tres veces que aparece, dictó auto disponiendo denegar la inscripción de nacimiento del menor.

III

Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que al expedir el acta de nacimiento de la madre de su hijo se cometió error en la fecha y el lugar de nacimiento por mal manejo del teclado del ordenador pero que, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2016, el tribunal de primera instancia de Conakry II, con jurisdicción en materia civil, concluye que es nacida el 11 de agosto de 1993 en M., República de Liberia, y aportando como prueba la sentencia invocada, que suple la falta de acta de nacimiento, y extracto de inscripción de dicha resolución en el registro civil local, documentos en lengua francesa no acompañados de la preceptiva traducción.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que no formuló alegaciones, y la encargada del Registro Civil Consular de Conakry informó que, aunque la motivación de la denegación podría entenderse desvirtuada por el documento presentado, es preciso dejar constancia de que el Registro Civil de Guinea es poco fiable y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 120 y 124 del Código civil (CC), 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 54, 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 11-3.^a de marzo de 2002, 23-38.^a de agosto de 2012, 20-71.^a de diciembre de 2013, 30-49.^a de enero y 21-29.^a de abril de 2014 y 8-17.^a de abril de 2016.

II. El promotor solicita, en calidad de padre, la inscripción en el registro civil español de un menor, nacido en la República de Guinea en de 2014, y la encargada del Registro Civil Consular de Conakry dispone denegar la

práctica del asiento, por desprenderse de la documentación aportada contradicciones respecto al lugar –población y país– y a la fecha de nacimiento de la madre del no inscrito, cuya partida de nacimiento obra en registro civil de población distinta a la de nacimiento y está enmendada, mediante auto de 20 de enero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Son inscribibles en el registro civil español los nacimientos acaecidos en territorio español y los que afectan a españoles (art. 15 LRC). «Para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que este sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española» (art. 85 RRC). La inscripción está además condicionada a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación del registro local, cuya eficacia registral en España se supedita, a su vez, a la equivalencia de garantías de autenticidad y veracidad, conforme establece el artículo 23 LRC. Habida cuenta de que la inscripción de la certificación extranjera en el registro civil español está llamada a surtir importantes efectos jurídicos, es razonable que, a través de la calificación registral, se compruebe la equivalencia de los requisitos y garantías para la inscripción en el registro extranjero con los que se imponen para la inscripción en el registro civil español. Como puso de manifiesto la dirección general en resolución de 23 de abril de 1993, «el hecho de que los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento permitan practicar sin expediente inscripciones por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros, no implica que el Encargado haya de asumir una actitud pasiva ante la presentación de tales certificaciones, limitándose a la transcripción automática de los datos en ellas consignados. Por el contrario, ha de cerciorarse de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española».

IV. Trasladando la antedicha doctrina al presente caso, del examen conjunto de la documentación registral que obra en las actuaciones no cabe considerar que la certificación de nacimiento guineana aportada, en la que no consta el estado civil de los padres, reúna las condiciones exigidas para dar fe, por sí sola, de la filiación del no inscrito, en el impreso de declaración de datos para la inscripción se ha omitido consignar en los espacios expresamente habilitados para ello el estado civil de uno y otro progenitor, no se ha presentado certificación literal de inscripción de matrimonio de los padres (art. 115 CC), tampoco consta que la filiación no matrimonial haya quedado determinada por alguno de los medios previstos en el artículo 120 CC y ni tan siquiera resulta probado que el promotor de la inscripción se encontrara en Guinea al tiempo de la concepción. Todo ello plantea fundadas dudas sobre la realidad del hecho inscrito en ese país y su legalidad conforme a la legislación española (art. 23, II LRC) y, no suficientemente acreditada la filiación biológica del no inscrito respecto de un español, no puede tenerse por probado que el hecho cuya inscripción se pretende afecte a un español.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Conakry (República de Guinea).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (7.ª)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.– *No procede practicar la inscripción solicitada mientras no resulte acreditado el lugar de nacimiento del interesado.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Mediante solicitud presentada el 20 de febrero de 2015 en el Registro Civil del Consulado General de España en Andorra, Don B. S. R., de nacionalidad andorrana, solicitó su inscripción de nacimiento en el registro civil español y el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española del artículo 20.1b) del Código Civil por haber nacido en B. en 1974, hijo de madre española y padre andorrano. Consta en el expediente la siguiente documentación: documento médico de la «Clínica D.» sobre un nacimiento ocurrido el 18 de enero de 1974, certificación negativa de inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Barcelona, certificación de nacimiento andorrana y pasaporte de G. S. M., pasaporte español y certificación de nacimiento de M.-M. R. P., nacida en S. el 13 de mayo de 1949, libro de familia, certificado de residencia en Andorra y pasaporte andorrano del promotor.

II

Una vez suscrita el acta de opción a la nacionalidad española, el expediente se remitió al Registro Civil de Barcelona, competente para la inscripción, con informe favorable del encargado del registro consular.

III

A la vista de la documentación aportada, la encargada del registro requirió al interesado la incorporación a las actuaciones del certificado médico de alumbramiento en el que conste el lugar y población donde ocurrió el nacimiento, sexo del nacido y datos de identidad de la madre, así como un certificado de matrimonio de los progenitores del solicitante.

IV

En comparecencia ante el registro consular de Andorra, D.^a M.-M. R. P., madre del promotor, declaró que no puede aportar más datos de la clínica donde nació su hijo porque el centro ya no existe y que solo conserva el documento incorporado inicialmente, donde figura la fecha de nacimiento, el peso y la huella plantar, así como la identidad del ginecólogo y el pediatra que la atendieron. Añade la compareciente que el parto fue en B. porque el médico que la atendía estaba allí y los medios en aquella época eran mejores que en Andorra. Aportaba, además, el certificado de matrimonio celebrado en 1971 e inscrito en C.V.

V

El encargado del registro solicitó entonces al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la remisión del parte de alumbramiento del promotor o bien, si no fuera posible, información acerca del hospital o institución al que fueron traspasados los archivos de la Clínica D. de B. cuando este centro cerró. La institución requerida contestó que no tenía constancia de la situación y ubicación de la documentación médica de la mencionada clínica.

VI

El ministerio fiscal emitió informe favorable a la inscripción y la encargada, antes de dictar resolución, requirió la aportación de la inscripción de nacimiento andorrana del interesado. Incorporada dicha certificación, resulta que en el documento consta, como lugar de nacimiento del inscrito, A.V.

VII

Previa ratificación del ministerio fiscal en su informe anterior, la encargada del registro dictó resolución el 3 de diciembre de 2015 denegando la inscripción por no resultar acreditado el lugar de nacimiento, dado que en la certificación andorrana figura Andorra la Vella y la documentación aportada al expediente no resulta suficiente para probar que el hecho ocurrió en B., como asegura la madre, pues no consta parte de alumbramiento ni historia clínica que corrobore ese extremo.

VIII

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que se había aportado un certificado de la clínica de B. en el que figura la historia del recién nacido, su fecha de nacimiento, peso, huella plantar y revisión por el pediatra; que no puede aportarse más documentación clínica porque el centro ya no existe y no se sabe qué ocurrió con sus archivos; que sí se ha podido localizar al pediatra que lo atendió, cuya firma aparece en el documento médico, y que este indicó que no conservaba ningún documento de la clínica pero que, indudablemente, reconocía su firma y que, efectivamente, había prestado servicios allí, en prueba de lo cual se adjunta su declaración firmada junto con un catálogo de los centros hospitalarios de C. y B. del año 1975 donde figura la Clínica D., cuya actividad era de cirugía y maternidad; y, finalmente, se alega que en el certificado andorrano de nacimiento del promotor figura Andorra como lugar de nacimiento porque esa era la práctica habitual en las inscripciones de los residentes en Andorra, aunque en realidad hubieran nacido en España o en Francia.

IX

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que se adhirió a la pretensión ratificándose en sus informes anteriores. La encargada del Registro Civil de Barcelona se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 en su redacción por Ley de 15 de julio de 1954), 20, 23 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85, 169 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1.980 y las resoluciones, entre otras, 19-1.^a de febrero de 1999, 30-2.^a de mayo y 20-1.^a de julio de 2004, 3-2.^a de enero de 2008 y 27-1.^a de noviembre de 2013.

II. Se pretende la inscripción de nacimiento fuera de plazo del promotor, nacido el 18 de enero de 1974, según su declaración y la de su madre, en B., si bien consta inscrito en el Registro Civil de Andorra como nacido en A. V.

III. Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el registro civil español competente (art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que alude el artículo 95.5º LRC, desarrollado en los artículos 311 a 316 RRC.

IV. La denegación se ha basado en que no resulta acreditado el lugar de nacimiento del promotor, circunstancia que determina el registro competente para practicar la inscripción. La única prueba aportada para intentar acreditar que el hecho ocurrió en B. es un documento de una clínica, ya desaparecida, referido a un nacimiento que tuvo lugar el 18 de enero de 1974, donde figura

el peso del nacido y el informe del pediatra, quien está identificado, al igual que el tocólogo, por un apellido. Figura asimismo una huella plantar y, en el apartado «Nombre», el apellido S. seguido de otro vocablo manuscrito por sí solo indescifrable, pero que no parece que se corresponda con el apellido materno R.. En definitiva, no hay constancia alguna de la identificación de la madre ni del nombre y sexo del nacido, sin que a estos efectos resulte relevante el hecho de que el pediatra haya reconocido su firma y declarado que, efectivamente, trabajó en aquella clínica. A ello se une que en la inscripción de nacimiento andorrana del interesado figura como lugar de nacimiento A. V., sin que se hayan incorporado al expediente, de acuerdo con el procedimiento previsto para practicar las inscripciones fuera de plazo mediante expediente registral, otras pruebas que permitan explicar esa contradicción y acreditar de forma suficiente que el lugar real de nacimiento del promotor es Barcelona. Además, tampoco se ha explicado por qué no se inscribió en su momento el nacimiento en España, pues aunque la familia residiera en Andorra y, según la ley aplicable en aquel momento, la madre no pudiera transmitir al nacido su nacionalidad española, todos los nacimientos ocurridos en España eran y son inscribibles en el registro civil español. En consecuencia, no es posible proceder a la inscripción mientras no resulte suficientemente acreditado un dato tan esencial como es el lugar en el que se produjo el nacimiento, del que la inscripción hace fe y que, además, determina cuál es el registro competente para practicar el asiento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la denegación de inscripción.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (8.^a)

Inscripción de nacimiento fuera de plazo.—*No es posible inscribir, sin previo ejercicio de la opción del artículo 20.1b) CC, el nacimiento ocurrido en 1973 en Reino Unido del hijo de madre originariamente española y padre británico casados en 1965.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante comparecencia el 19 de agosto de 2014 en el Registro Civil de Ferrol, el Sr. A.-D. G., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español por ser hijo de madre española de origen nacida en España. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; certificado de registro de ciudadano de la Unión; pasaporte británico; volante de empadronamiento; certificado de nacimiento británico del promotor, nacido en Reino Unido el 1 de mayo de 1973, hijo de P. B. G. y de C.-R. G. (de soltera F.); pasaporte británico de C. G.; certificación de nacimiento de C. F. M., nacida en E. (G.) el 9 de enero de 1942, y certificación de inscripción de matrimonio celebrado el 31 de julio de 1965 entre P.-B. G. y C. F. M.

II

Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para la inscripción, el encargado dictó acuerdo el 28 de abril de 2015 denegando la inscripción porque no resulta acreditado que la madre del interesado conservara la nacionalidad española en el momento del nacimiento, toda vez que estaba casada con un ciudadano británico y, según la legislación aplicable en aquel momento, la mujer casada seguía la nacionalidad de su marido. Todo ello sin perjuicio de que el promotor ejercite la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1b) del Código Civil.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que su madre, hija de españoles y nacida en España, no perdió la nacionalidad española al tiempo de contraer matrimonio y la conservaba cuando él nació, tal como acredita con la copia del último DNI español que se le expidió el 6 de agosto de 1991.

IV

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 23 del Código Civil (CC) en la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954; 15 y 16 de la Ley del Registro Civil (LRC);

66 y 68 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 5-2.^a de octubre de 2002, 8-1.^a de enero de 2004, 24-5.^a de octubre de 2005, 9-2.^a de febrero de 2006, 29-1.^a de junio de 2007, 11-3.^a de abril de 2008, 19-6.^a de febrero, 27-6.^a de mayo de 2009, 29-6.^a de junio de 2010, 6-25.^a de julio de 2012, 21-87.^a de junio y 15-30.^a de noviembre de 2013, 22-7.^a de enero de 2014, 10-45.^a y 17-27.^a y 28.^a de marzo de 2017.

II. Se pretende la inscripción de nacimiento en el registro civil español de un ciudadano británico nacido en Reino Unido en 1973, hijo de padre de la misma nacionalidad, alegando que su madre es española de origen y conservaba dicha nacionalidad cuando el interesado nació.

III. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (arts. 15 LRC y 66 RRC). En el momento del nacimiento del promotor, en materia de nacionalidad regía el principio de unidad de la familia, de modo que el hijo sujeto a la patria potestad seguía la nacionalidad del padre y la esposa seguía la de su marido. Así, cuando el interesado nació, estaba vigente el artículo 17.2 del Código Civil en su redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, según el cual la madre únicamente transmitía la nacionalidad en defecto del padre, que en este caso era británico y transmitió dicha nacionalidad a su hijo. Por otro lado, es cierto que la madre del solicitante era española de origen pero perdió dicha nacionalidad al contraer matrimonio con un ciudadano británico en 1965 porque, según la redacción del artículo 23.3º CC entonces vigente, la española que se casaba con un extranjero perdía su nacionalidad si adquiría la de su marido, precisando el artículo 233 RRC, también en su redacción original vigente en aquel momento, que la pérdida se producía por el hecho de la adquisición de la nacionalidad del marido, ya fuera por razón del matrimonio o por un acto anterior, simultáneo, posterior, concurrente o independiente. De manera que la madre, que ostenta la nacionalidad británica, perdió por causa de matrimonio su nacionalidad española de origen y no consta que la haya recuperado después (se requiere para ello una declaración de voluntad ante el encargado del registro y su inscripción al margen del asiento de nacimiento), por lo que no pudo transmitírsela al hijo nacido en 1973. El hecho alegado de que se le expidiera un DNI español en 1991 es un error de la administración que podrá surtir otros efectos pero no basta para probar legalmente la posesión de la nacionalidad española.

IV. La nacionalidad española de la madre no puede pues servir de base para que el hijo se inscriba directamente en el registro civil español con una nacionalidad de origen que aquella nunca le transmitió, aunque sí constituye el presupuesto, como también señala la resolución recurrida, para ejercer el derecho de opción al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.1b) CC, si bien ello requiere la tramitación de un expediente distinto. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta, además, la necesidad de aportar la documentación probatoria convenientemente subsanada, pues la madre del solicitante figura identificada en toda su documen-

tación española como C. F. M., mientras que en la certificación de nacimiento británica del hijo tiene atribuido el nombre de C.-R.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (7.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (28.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 9 de junio de 2017 (33.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 30 de junio de 2017 (24.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 7 de julio de 2017 (5.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (20.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (88.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (89.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (1.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (1.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (3.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (4.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (1.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (2.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (3.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (1.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (2.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (3.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (4.^a). Inscripción de nacimiento fuera de plazo.

1.1.2 RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO (LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS)

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (8.^a)

Rectificación registral del sexo, Ley 3/2007.—*La rectificación registral del sexo de la persona no conlleva en este caso cambio de nombre porque el inscrito, inequívocamente de varón y obtenido en expediente registral a tal fin promovido por la interesada, no resulta discordante con el sexo legal rectificado.*

En el expediente sobre sobre rectificación en inscripción de nacimiento de la mención relativa al sexo y cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Mijas (Málaga) en fecha 20 de julio de 2015 doña S. S. M., nacida el 4 de julio de 1995 en M. y domiciliada en dicha población, promueve expediente gubernativo para el cambio del sexo y del nombre inscritos por varón y «A.-A.», exponiendo que este último es el que usa habitualmente y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento de G. S. M. en la que consta practicada, en fecha

3 de abril de 2014, marginal de cambio de nombre, en virtud de resolución de 30 de enero de 2014 dictada por el encargado del Registro Civil de Fuengirola; copia simple de DNI, volante de empadronamiento en M. e informes emitidos el 18 de junio de 2015 y el 11 de febrero de 2014 por la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital Regional Universitario C.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, por la juez encargada se acordó la formación del oportuno expediente gubernativo y la remisión de lo actuado al Registro Civil de Fuengirola, en el que tuvo entrada el 27 de julio de 2015.

III

El ministerio fiscal informó que es de la opinión de que procede acceder a lo solicitado y el 15 de septiembre de 2015 el juez encargado, razonando que no ha lugar al cambio de nombre, toda vez que no ha quedado acreditado que se venga utilizando y que el actualmente inscrito es nombre masculino autorizado a la interesada cuando ya estaba en tratamiento y, por tanto, acorde con el sexo que se trata de rectificar, dictó auto disponiendo aprobar el cambio de sexo del inscrito en su inscripción de nacimiento.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, a fin de mitigar el perjuicio psicológico que le producía llamarse Gema cuando ya se estaba preparando para la reasignación de sexo, en 2014 solicitó un nombre ambiguo pero que, dado que desde hace tiempo las personas de su entorno lo llaman Adam, la denegación del cambio de S. por A.A. supondría un freno al desarrollo de su personalidad y la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que nada opone, y seguidamente el juez encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 1 de Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; 41, 53, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. Solicita la promotora la rectificación registral de la mención relativa al sexo de la persona y el cambio del nombre propio inscrito, S., por «A.-A.», exponiendo que este último es el que usa habitualmente, y el juez encargado, razonando que no ha lugar al cambio de nombre, toda vez que no ha quedado acreditado que se venga utilizando y que el actualmente inscrito es nombre masculino autorizado a la interesada cuando ya estaba en tratamiento y, por tanto, acorde con el sexo que se trata de rectificar, dispone aprobar la rectificación registral del sexo de la inscrita mediante auto de 15 de septiembre de 2015 que, en lo que a la denegación del cambio de nombre respecta, constituye el objeto del presente recurso.

III. El artículo 1 de Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, dispone, en su párrafo segundo, que tal rectificación conllevará el cambio de nombre propio a los efectos de que este no resulte discordante con el sexo registral, no cabe considerar que en la peticionaria se dé tal circunstancia porque consta que en fecha muy reciente le ha sido autorizada por el encargado, en expediente de cambio de nombre por el usado habitualmente, la sustitución del nombre inscrito a su nacimiento por otro que en principio es de varón y, por tanto, no apto para designar a quien en ese momento tiene sexo legal de mujer y por ello ha de concluirse que la promotora ha alcanzado la finalidad a la que atiende el precepto legal arriba citado en dos fases, que con la resolución dictada en este segundo expediente ha quedado resuelta la contradicción entre el sexo y el nombre de la inscrita y que la autorización de un segundo cambio de nombre en tan breve lapso de tiempo tropieza con el principio de seguridad jurídica constitucionalmente reconocido que el recurrente invoca.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar en todos sus extremos el auto apelado.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

1.2 Filiación

1.2.1 INSCRIPCIÓN DE LA FILIACIÓN

Resolución de 8 de febrero de 2017 (1.ª)

Inscripción de filiación.—*En virtud de la nueva redacción del artículo 44.5 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del registro civil, en la redacción dada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, es inscribible la filiación, como hijo matrimonial, a favor de la cónyuge de la madre biológica de un niño, sin que sea preciso justificar el uso de técnicas de reproducción asistida.*

En las actuaciones sobre inscripción de filiación remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por las promotoras contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Denia (Alicante).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Juzgado de Paz de Benidoleig (Alicante) el 4 de agosto de 2016, D.ª M. J. T.O., mayor de edad, de nacionalidad española y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la inscripción como hijo matrimonial del nacido de su cónyuge, D.ª B. K., de nacionalidad irlandesa, el de julio anterior. Previa comunicación telefónica con el registro civil principal del que depende el de Benidoleig, se trasladó a la promotora la necesidad de comparecer ante aquel, en Denia, para solicitar la inscripción acreditando que el nacimiento se había producido como consecuencia de la utilización de técnicas de reproducción asistida. El 5 de agosto de 2016, la promotora comparece ante el Registro Civil de Denia solicitando nuevamente la inscripción de nacimiento del hijo biológico de su cónyuge y la determinación a su favor de la filiación del nacido, sin necesidad de aportar justificación de haber seguido un procedimiento de reproducción asistida, en virtud de lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley del Registro Civil de 2011, reformado por la Ley 19/2015, de 13 de julio, alegando que la pareja se había casado el 14 de agosto de 2007 y que ya son madres de otros dos hijos inscritos con la doble filiación. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripciones de nacimiento

en el Registro Civil de Atzeneta del Maestrat (Castellón) de N. y F. K. T., nacidos el de 2009, hijos de B. K., de nacionalidad irlandesa, y de M.J. T.O., de nacionalidad española, inscripción practicada en virtud de resolución de consulta planteada por el registro del lugar del domicilio a la encargada del Registro Civil de Castellón; autorización de 15 de abril de 2009 por parte del encargado del Registro Civil de Castellón para proceder a la inscripción de los anteriores como hijos matrimoniales de B. K. y de M.J. T.O. y libro de familia.

II

El encargado del Registro Civil de Denia dictó auto el 22 de agosto de 2016 denegando la inscripción de la filiación del nacido respecto de la Sra. T.O. por considerar que para ello es necesario acreditar que la gestación se ha producido como consecuencia del uso de técnicas de reproducción asistida, entendiéndose que el artículo 44.5 de la nueva Ley del Registro Civil, que prácticamente reproduce el contenido del apartado tercero del art. 7 de la Ley 14/2006, no se puede interpretar desconectado del apartado cuarto, según el cual la filiación, a efectos de la inscripción de nacimiento, se determinará conforme a las leyes civiles (que siguen respondiendo al principio de unidad de la maternidad) y a la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida (que introduce una ficción legal no basada en la realidad biológica pero solo cuando la gestación es consecuencia de técnicas de reproducción asistida), no siendo tampoco aplicables las presunciones del Código Civil en tanto que responden a un esquema normativo distinto. Al mismo tiempo, se requería a la Sra. K. para que manifestara si deseaba consignar un nombre de progenitor a efectos de identificación.

III

En comparecencia de 29 de agosto de 2016, D.^a B. K. declaró que, a pesar de no estar conforme con la resolución registral, para no dejar desprotegido a su hijo, optaba por la inscripción solo con su filiación biológica, pero dejando constancia de que ello supone una situación de desigualdad en relación con los hermanos mayores del nacido, que sí están inscritos como hijos matrimoniales de la pareja.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando las recurrentes que los dos hijos mayores de la pareja fueron inscritos en 2009 como matrimoniales y sin que en aquel momento se les exigiera presentar certificado de reproducción asistida; que el artículo 44.5 de la Ley del Registro Civil de 2011, en vigor desde 2015, prevé la inscripción de la filiación matrimonial cuando la madre esté casada con otra mujer y esta última consienta en que se determine a su favor la filiación, independientemente de que hayan hecho uso o no de técnicas de reproducción asistida dado que la norma no introduce esa limitación; que la intención del legislador tiene que ser que el art. 44.5 resulte aplicable con carácter general para determinar la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por dos mujeres porque solo así tiene sentido que dicho artículo, introducido en 2015 al mismo tiempo que se reformaba el art. 7.3 de la Ley 14/2006, reproduzca el contenido de este último; que la interpretación restrictiva del auto impugnado introduciendo una limitación que la norma

no menciona atenta contra el interés superior del menor y lo coloca en una situación de desprotección en relación con sus hermanos mayores, que tienen nacionalidad española y doble vínculo materno, mientras que L. únicamente tiene reconocida la nacionalidad irlandesa y figura en un libro de familia distinto del que solo es titular la Sra. K., de manera que quien ejerce de hecho como su madre no lo es a efectos legales, lo que perjudica a la estabilidad de la familia; que aunque es cierto que nuestro ordenamiento jurídico parte del principio de veracidad biológica en materia de filiación, dicho principio no tiene carácter absoluto y ha ido evolucionando hacia un concepto más social y afectivo, debiendo prevalecer siempre el interés del menor, como han dejado establecido en diversos pronunciamientos el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, finalmente, que la interpretación de las normas debe realizarse, según el artículo 3 del Código Civil, atendiendo, entre otras cosas, al contexto y la realidad social en que han de ser aplicadas y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta la sucesión de normas aprobadas desde que en 2005 se modificó el Código Civil para dar cabida a los matrimonios entre personas del mismo sexo: la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, la Ley 3/2007 que introdujo el apartado tercero en el artículo 7 de la anterior permitiendo la determinación de la filiación matrimonial para las parejas formadas por mujeres, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que declara la ausencia de toda discriminación también en las cuestiones derivadas de la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil y, por último, la Ley 19/2015 que eliminó la necesidad de que el consentimiento de la cónyuge de la madre gestante para que se determine a su favor la filiación se manifestara antes del nacimiento y que introdujo el artículo 44 en la Ley del Registro Civil de 2011.

V

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Denia se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 10, 14 y 39 de la Constitución; 113 del Código Civil (CC); 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (LRC) y 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA) en su redacción actual a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

II. Pretenden las interesadas, quienes contrajeron matrimonio el 14 de agosto de 2007 y son madres de dos hijos nacidos el de 2009, que en la inscripción de nacimiento de otro hijo biológico de una de ellas, nacido el de 2016, se haga constar asimismo su filiación respecto de la cónyuge no gestante sin necesidad de aportar justificación de que el nacimiento se produjo como consecuencia de la utilización de técnicas de reproducción asistida, ale-

gando que el apartado 5 del art. 44 de la Ley del Registro Civil de 2011, en vigor desde octubre de 2015, no lo exige. El encargado del registro rechazó la pretensión por entender que sí es imprescindible probar que la gestación se ha producido mediante técnicas de reproducción asistida y que no es aplicable la presunción de filiación matrimonial del art. 116 CC porque el supuesto de hecho en este caso es distinto.

III. La posibilidad de reconocimiento de una doble maternidad, inicialmente limitada a la vía de la adopción, fue introducida por la Ley 3/2007, que reformó el artículo 7 de la LTRHA reconociendo, mediante una ficción legal, que en caso de matrimonio preexistente entre dos mujeres, podría determinarse la filiación del nacido mediante técnicas de reproducción asistida a favor de la cónyuge no gestante siempre que esta hubiera manifestado previamente su consentimiento al respecto ante el encargado del registro civil del domicilio conyugal. Es decir, que el art. 7.3 LTRHA introdujo en este ámbito un nuevo supuesto de determinación de la filiación matrimonial, diferente de la presunción del art. 116 CC, si bien condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. Posteriormente, la reforma operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, introdujo también una modificación en el apartado tercero del art. 7 de la LTRHA en cuanto a la forma en la que debe prestarse el consentimiento, de manera que ya no es necesario manifestarlo antes del nacimiento, quedando el artículo redactado como sigue: «Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.».

IV. Pero la misma Ley 19/2015 que reformó el precepto aludido en el fundamento anterior, introdujo un nuevo apartado en el art. 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 que reproduce prácticamente el contenido del mencionado art. 7.3 LTRHA pero de cuyo literal «También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.» cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por dos mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida. Todo ello sin perjuicio de las acciones de impugnación de la filiación que pudieran tener lugar en caso de que la gestación no lo hubiera sido como consecuencia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida contempladas en la LTRHA pues la filiación establecida en ese caso no quedaría amparada por la condición de inimpugnable que contempla el artículo 8 de la citada ley.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

Madrid, 8 de febrero de 2017.—El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Denia (Alicante).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (29.^a)

Inscripción de filiación.—*No procede la inscripción por no estar acreditado que la menor no inscrita sea hija de padre español, al resultar afectada dicha filiación por una presunción de paternidad matrimonial contradictoria que no ha resultado destruida.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 9 de julio de 2014, Don Y. C. H., mayor de edad y con doble nacionalidad cubana y española, solicitó la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad M. I. C. T. Constan en el expediente los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; tarjeta de identidad y certificación de nacimiento cubana de la menor, nacida el de 2011, hija del promotor y de Doña D. E. T. F.; carné de identidad e inscripción de nacimiento cubana de esta última; pasaporte español e inscripción de nacimiento del promotor en el registro consular español con marginal de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ejercitada el 15 de febrero de 2010; certificación de matrimonio de J. D. P. con D. E. T. F. celebrado el 23 de octubre de 2000 y escritura notarial de divorcio del matrimonio anterior el 8 de mayo de 2014.

II

Incorporada al expediente acta de consentimiento de la Sra. D. E. T. F., la encargada del registro consular dictó auto el 11 de agosto de 2014 denegando la inscripción de nacimiento de la menor por no considerar suficientemente acreditada su filiación respecto de un ciudadano español.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo el promotor en su paternidad respecto de la menor, tal como figura en la certificación de nacimiento cubana de esta. Añadía que la madre de su hija se separó de hecho de su ex marido once años antes de que se formalizara el divorcio y que, tal como consta en la escritura notarial, de dicho matrimonio solo nació una hija, C. C. D. T. Con el escrito de recurso aportaba varios documentos sanitarios relativos a M. I. en los que el recurrente figura como padre de la nacida.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, se interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 69, 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) y las resoluciones, entre otras, de 18 de enero, 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 4-4.^a de junio de 2007; 9-4.^a de julio y 9-2.^a de diciembre de 2008; 25-3.^a de febrero de 2009; 24-3.^a y 25-1.^a de febrero de 2010; 26-1.^a de octubre de 2011; 21-26.^a de junio y 18-57.^a de julio de 2013 y 27-13.^a de marzo de 2015.

II. Se pretende la inscripción de un nacimiento ocurrido en Cuba en 2011 alegando que la nacida es hija de un ciudadano español. La encargada del registro denegó la práctica de la inscripción por no considerar acreditado este hecho, ya que, cuando la menor nació, la madre estaba casada con un ciudadano cubano con el que había contraído matrimonio en 2000 y del que no se divorció hasta 2014, de manera que resulta aplicable la presunción de paternidad matrimonial del artículo 116 CC.

III. La cuestión a dilucidar pues es la de la filiación paterna de la menor, puesto que de ella depende que se pueda practicar la inscripción de nacimiento en el registro civil español, que solo procederá si se estima que es hija de padre español. A estos efectos, si la madre es casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (*cfr.* art. 385 LEC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del

nacimiento. En otro caso, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre dispuesta por el artículo 116 del Código Civil, sin que la mera declaración de las partes negando tal filiación pueda considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla. Así pues, aunque la filiación pretendida es la misma que figura en la certificación cubana de nacimiento aportada, lo cierto es que la madre estaba casada en el momento del nacimiento con otro ciudadano cubano, sin que se haya aportado prueba alguna que permita acreditar la existencia de separación de hecho del matrimonio al menos trescientos días antes del nacimiento de la hija, por lo que, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial respecto al ex marido. La simple manifestación del interesado en el sentido de que la madre estaba separada de hecho de su marido once años antes de que se declarara el divorcio no resulta suficiente, a falta de otras pruebas, para desvirtuar la presunción discutida por la vía del expediente gubernativo y, en consecuencia, no procede por el momento la práctica de la inscripción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (30.^a)

Inscripción de filiación.—1.º *No procede la atribución a una menor, cuya inscripción se solicita dentro de plazo, de filiación paterna no matrimonial por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto del marido de la madre.*

2.º *Una vez inscrita la filiación matrimonial derivada de la presunción del artículo 116 del Código Civil, la determinación de una filiación distinta solo es posible a través de la vía judicial.*

En las actuaciones sobre determinación de filiación en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la madre contra resolución de la encargada del Registro Civil de Leganés (Madrid).

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Leganés (Madrid) el 22 de mayo de 2015, Doña V. Y. A. y Don J-F. R. G. solicitaban la inscripción de nacimiento, con filiación no matrimonial, de su hija M., nacida en L. el de 2015, alegando que, aunque la declarante está casada con otra persona, se encuentra separada de hecho de su cónyuge desde agosto de 2014 y que la nacida es hija del Sr. R. G.. Consta en el expediente la siguiente documentación: volantes de empadronamiento de los declarantes en L. (la madre) y en M. (el declarante), respectivamente, libro de familia e inscripción de matrimonio celebrado en P. (Madrid) el 7 de julio de 2014 entre V. Y. A. y A. A. y cuestionario de declaración de datos para la inscripción.

II

A requerimiento de la encargada, el 3 de julio de 2015 compareció ante el registro el Sr. A. A., quien manifestó que la nacida no es hija suya y que, aunque permanece casado con la madre de la menor, se separó de ella cuando se quedó embarazada.

III

Previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 21 de julio de 2015 acordando la práctica de la inscripción de la nacida con filiación matrimonial por no considerar destruida la presunción de paternidad del artículo 116 del Código Civil.

IV

Practicada la inscripción y notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la promotora que se encuentra separada de hecho de su marido y que la nacida es hija del Sr. R. G., a quien conocía desde hacía tiempo y con el que inició una relación sentimental casi inmediatamente después de haber contraído matrimonio. Añadía que su marido y ella eran pareja de hecho desde 2012 pero que la relación empezó a deteriorarse y, con el ánimo de superar la crisis, decidieron casarse en julio de 2014, si bien la relación, lejos de mejorar, siguió empeorando.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Leganés remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 116, 134 y 136 del Código Civil (CC); 183 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); la Circular de 2 de junio de 1981 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 31-1.^a de enero de 2004; 25-1.^a de noviembre y 9-1.^a de diciembre de 2005; 4-4.^a de junio de 2007 y 9-4.^a de julio de 2008; 24-3.^a de febrero de 2010; 1-2.^a de junio y 31-10.^a de octubre de 2012; 15-44.^a de abril y 8-56.^a de octubre de 2013; 12-32.^a de marzo y 29-43.^a de diciembre de 2014.

II. Se pretende la atribución de filiación paterna no matrimonial a una menor nacida el....de 2015 asegurando que, a pesar de que la madre estaba casada con otro hombre en el momento del nacimiento de su hija, el marido, de quien se encuentra separada de hecho desde poco tiempo después de celebrado el matrimonio –según declaración de los interesados–, no es el padre. La encargada del registro, sin embargo, ordenó la práctica de la inscripción con filiación matrimonial por no considerar destruida la presunción de paternidad del art. 116 CC.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de una menor cuando, constante el matrimonio de la madre celebrado antes del nacimiento, se declara que la nacida no es hija del marido sino de otro hombre. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (*cf.* art. 386 LEC).

V. No obstante lo anterior, la circular de 2 de junio de 1981 de la DGRN sobre régimen legal de la filiación contempla la posibilidad de que, ante una declaración de filiación contradictoria con la que se deriva de la presunción matrimonial del artículo 116 CC, no se haga constar la filiación paterna del marido en la inscripción solicitada dentro de plazo cuando la presunción deje de existir a la vista de la declaración auténtica del marido (que en este caso ha negado ser el padre), de la declaración de la madre y de las demás diligencias probatorias que el encargado considere oportuno realizar en uso de las facultades que le confiere el artículo 28 LRC, pudiendo incluso hacer constar la filiación de otro progenitor distinto del marido si existe reconocimiento. Y cuando la inscripción se solicita fuera de plazo, si lo que resulta del expe-

diente es que rige la mencionada presunción pero el hijo no ostenta la posesión de estado de filiación matrimonial, solo podrá inscribirse la filiación materna, no debiendo figurar la filiación paterna correspondiente al marido ni tampoco la filiación respecto de otro progenitor distinto mientras no se destruya la presunción legal del artículo 116 CC. Sin embargo, la encargada del registro en este caso optó por practicar la inscripción de la menor atribuyendo la paternidad al marido, de manera que, una vez realizado el asiento, que hace fe de la filiación de la inscrita (art. 41 LRC), de acuerdo con la legislación aplicable no es posible ya en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial y la filiación pretendida tendrán que intentarla los interesados en la vía judicial ordinaria.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 17 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Leganés (Madrid).

Resolución de 31 de marzo de 2017 (47.^a)

Inscripción de filiación.—*Es inscribible la filiación paterna no matrimonial determinada por sentencia e inscrita en el asiento de nacimiento extranjero sin que conste concurrencia de otra filiación contradictoria de acuerdo con la legislación española.*

En las actuaciones sobre inscripción de filiación paterna no matrimonial remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el registro civil consular en La Habana el 21 de julio de 2009, Doña Y. N. Q. (según su certificación de nacimiento local), mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitó su inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad española en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por ser hija de madre española nacida en Cuba. Constan en el expediente los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscrip-

ción; modelo de anexo I cumplimentado para el ejercicio de la opción; tarjeta de identidad cubana; certificación literal de nacimiento de Y. Q. S. (inscripción inicial), nacida en Cuba el 18 de diciembre de 1962, hija de J. de la C. Q. S., con marginal de 20 de marzo de 1980 de atribución de filiación paterna respecto de R-S. N. P. en virtud de sentencia del Tribunal Municipal de Guantánamo, pasando a ser los apellidos de la inscrita N. Q.; inscripción de nacimiento en el registro civil español de J. de la C. Q. S., nacida en Cuba el 3 de mayo de 1938, con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 30 de mayo de 2001; certificación registral de la marginal de atribución de filiación paterna en la inscripción de nacimiento de la promotora; certificación de sentencia del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo según la cual, en el proceso de filiación instado en 1979 por J. de la C. Q. S., se dictó sentencia el 25 de enero de 1980 (firme el 1 de febrero siguiente) por la que se declaró que Y. Q. S. es hija legítima de R-S. N. P., pasando la hija a ostentar en lo sucesivo los apellidos N. Q., y certificación registral de soltería de J. de la C. Q. S.

II

La encargada del registro consular dictó auto el 11 de noviembre de 2011 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reclamando la promotora la inscripción de su filiación paterna y la atribución de los apellidos que ostenta en su país de origen desde que tal filiación quedó determinada por sentencia judicial en 1980.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, se interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 y 120 del Código Civil (CC); 23 y 27 de la Ley del Registro Civil (LRC); 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 24-1.^a de enero, 9 de octubre y 28 de diciembre de 2002; 15-3.^a de enero y 12-2.^a de noviembre de 2004; 24-1.^a y 2.^a de noviembre de 2005; 9-2.^a de marzo de 2009; 16-1.^a de diciembre de 2010 y 30-57.^a de enero de 2014, 27-97.^a de marzo de 2015 y 15-17.^a de enero de 2016.

II. Pretende la promotora que en su inscripción de nacimiento, practicada en el registro civil español tras el ejercicio de la opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, conste su filiación paterna no matrimonial declarada por sentencia años después de su nacimiento, inscrito originalmente solo con filiación materna. La encargada del registro ordenó la inscripción únicamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada la filiación paterna al no haberse presentado el reconocimiento de la sentencia extranjera en España mediante exequátur.

III. La filiación paterna no matrimonial queda determinada legalmente, entre otros supuestos, por sentencia firme (art. 120.4.º CC). Por otro lado, la filiación se acredita, en primer lugar, por la inscripción en el Registro Civil (art. 113 CC), no siendo eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contradictoria.

IV. Las condiciones mencionadas concurren en el presente caso, puesto que la determinación de la filiación no matrimonial se ha producido según una de las previsiones legales, no siendo necesario aportar la sentencia con el trámite del exequátur porque la filiación declarada por sentencia ya está inscrita en el registro local y no consta la existencia de otra contradictoria. Hay que recordar que las inscripciones pueden practicarse directamente por certificación de asiento extendido en un registro extranjero siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y cuando el asiento se haya realizado con garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española (arts. 23 LRC y 85 RRC). No existiendo datos en el expediente que permitan dudar de la veracidad de los hechos inscritos y no constando, como se ha dicho, otra filiación contradictoria con la que resulta del asiento practicado en el registro local, no existe obstáculo para inscribir la filiación paterna reclamada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso e inscribir la filiación paterna no matrimonial de la interesada de acuerdo con la certificación de nacimiento cubana.

Madrid, 31 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

Resolución de 5 de mayo de 2017 (21.ª)

Inscripción de filiación.—1.º *No procede la atribución a una menor de filiación paterna no matrimonial por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto del exmarido de la madre.*

2.º) *Una vez inscrita la filiación matrimonial derivada de la presunción del artículo 116 del Código Civil, la determinación de una filiación distinta solo es posible a través de la vía judicial.*

En las actuaciones sobre determinación de filiación en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la madre contra la resolución de la encargada del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

I

Mediante escrito remitido el 15 de febrero de 2013 al Registro Civil de Picassent desde el centro penitenciario de la misma localidad se solicitaba la inscripción de nacimiento de L. F. C., nacida en V. el de 2013, hija de L. F. C., interna en ese momento en el centro penitenciario remitente. Se adjuntaba la siguiente documentación: certificado de los periodos de ingreso en prisión de la madre de la no inscrita, cuestionario de declaración de datos para la inscripción y parte del facultativo que asistió al nacimiento, certificado del centro hospitalario donde se produjo el nacimiento de no haber promovido la inscripción y DNI de la madre.

II

A requerimiento del encargado, el 27 de febrero de 2013 compareció ante el registro Doña L. F. C., quien manifestó que estaba soltera, que no consignó los datos del padre de su hija aconsejada por la trabajadora social del centro penitenciario teniendo en cuenta que su pareja se encontraba en ese momento también en prisión en Villena, que es madre de otras cuatro hijas, que deseaba que los apellidos de su hija se consignaran en el mismo orden que los suyos y que se hiciera constar como nombre del padre, únicamente a efectos de identificación, el de M.J.S.

III

A la vista de las declaraciones anteriores, el encargado del Registro Civil de Picassent dictó providencia ordenando la suspensión del plazo legal para la inscripción y una nueva citación a la madre para una exhaustiva indagación de datos. Así, en comparecencia ante el registro el 12 de marzo de 2013, la progenitora declaró que el padre de su hija es M. J. S., que ambos son solteros y que desea que la niña sea inscrita con los apellidos J. F.. Vista la declaración, se acordó citar al Sr. J. F. para, en su caso, levantar acta de reconocimiento de la nacida.

IV

Sin embargo, en una nueva comparecencia en P. el 21 de marzo de 2014, la madre manifiesta que está divorciada y que el verdadero padre de su hija no es el Sr. J. S. –quien sí es

padre de tres de sus hijas—, sino un ciudadano marroquí, R. S., con quien mantenía una relación desde hacía dos años y con el que convivía antes de entrar en prisión. El mismo día comparece ante el registro el mencionado R. S., quien declaró que, en efecto, conocía a la Sra. F. C. desde hacía unos dos años, que vivían juntos en A. y que cuando a ella la detuvieron y entró en prisión estaba embarazada de unos tres meses. Ambos solicitaron entonces la inscripción de la nacida con los apellidos S. F.. Al expediente se incorporó pasaporte marroquí y certificado de empadronamiento en A. del declarante.

V

Don M. J. S., por su parte, compareció el 9 de mayo de 2014 ante el Registro Civil de Villena reconociendo como hija no matrimonial suya a la nacida y solicitando que sea inscrita con los apellidos J. F.. A la vista de tal declaración, el ministerio fiscal interesó la práctica de nueva audiencia a las partes para aclarar la verdadera identidad del progenitor.

VI

El 9 de septiembre de 2014, la Sra. F. C. comparece ante el registro insistiendo en que el padre de su hija L. es el ciudadano marroquí R. S., lo que también ratifica este último en comparecencia realizada diez días después.

VII

Remitido el expediente al Registro Civil de Valencia, competente para la inscripción, se incorpora de oficio a las actuaciones certificación literal de matrimonio celebrado el 21 de abril de 2007 en L-T. de C. (M.) entre N. C., de nacionalidad nigeriana, y L. F. C., con marginal de divorcio por sentencia de 31 de julio de 2014, al tiempo que se solicitaba a la promotora que facilitara el domicilio de su exmarido.

VIII

Por requerimiento de la encargada del Registro Civil de Valencia, comparece nuevamente el 16 de enero de 2015 Don M. J. S., quien insiste en reconocer la paternidad de L. La declaración se ratifica en otra comparecencia fechada el 27 de febrero de 2015.

IX

La encargada acuerda asimismo la comparecencia del Sr. N. C. con el fin de ser oído acerca de su posible paternidad respecto de la hija de su exesposa. Remitido el requerimiento al Registro Civil de Alcalá de Henares, localidad en la que residía el interesado según los datos proporcionados por la Sra. F. C., el intento de notificación resulta infructuoso por ser desconocido el destinatario en el domicilio indicado.

X

Previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 1 de junio de 2015 acordando la práctica de la inscripción de la nacida con filiación matrimonial, por no considerar destruida la presunción de paternidad del artículo 116 del Código Civil, atribuyéndole los apellidos C. C.

XI

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la promotora que su exmarido no es el padre de su hija y que esta no puede llevar el apellido C.

XII

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Valencia se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

XIII

No teniendo constancia este centro de que la inscripción de nacimiento ordenada por la encargada se hubiera practicado finalmente y siendo este hecho un elemento determinante para decidir el sentido de la resolución del recurso, se solicitó información al respecto al Registro Civil de Valencia. En contestación al requerimiento efectuado se remitió providencia de la encargada de 10 de abril de 2017 ordenando la práctica de la inscripción, hasta entonces no realizada, y la remisión a la DGRN del certificado correspondiente, si bien, advertido error en la atribución de los apellidos que figuraba en la resolución recurrida, previamente se dictó auto de 7 de abril para rectificar la mencionada resolución en el sentido de que el segundo apellido que correspondía atribuir a la no inscrita es F., primero de la madre, y no C. La inscripción de nacimiento de L. C. F. se practicó finalmente el 18 de abril de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 116, 134 y 136 del Código Civil (CC); 183 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); la circular de 2 de junio de 1981 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 31-1.^a de enero de 2004; 25-1.^a de noviembre y 9-1.^a de diciembre de 2005; 4-4.^a de junio de 2007 y 9-4.^a de julio de 2008; 24-3.^a de febrero de 2010; 1-2.^a de junio y 31-10.^a de octubre de 2012; 15-44.^a

de abril y 8-56.^a de octubre de 2013; 12-32.^a de marzo y 29-43.^a de diciembre de 2014 y 4-3.^a de septiembre de 2015.

II. Se pretende la atribución de filiación paterna no matrimonial a una menor nacida en 2013 asegurando que, a pesar de que la madre estaba casada con otro hombre en el momento del nacimiento de su hija, el marido, de quien se encuentra divorciada desde julio de 2014, no es el padre, dándose la circunstancia de que, además, la paternidad es reclamada por dos hombres, si bien la madre, que inicialmente la atribuyó a uno de ellos, padre de otras hijas de la declarante, posteriormente rectificó y asegura desde entonces que el padre de la nacida es el otro reclamante, un ciudadano marroquí con quien mantenía una relación estable hasta que ella ingresó en prisión. La encargada del registro, sin embargo, ordenó la práctica de la inscripción con filiación matrimonial por no considerar destruida la presunción de paternidad del art. 116 CC.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de una menor cuando, constante el matrimonio de la madre celebrado antes del nacimiento, se declara que la nacida no es hija del marido sino de otro hombre. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el nacimiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (*cfr.* art. 386 LEC).

V. No obstante lo anterior, la circular de 2 de junio de 1981 de la DGRN sobre régimen legal de la filiación contempla la posibilidad de que, ante una declaración de filiación contradictoria con la que se deriva de la presunción matrimonial del artículo 116 CC, no se haga constar la filiación paterna del marido en la inscripción solicitada dentro de plazo cuando dicha presunción deje de existir a la vista de la declaración auténtica del marido (que en este caso no ha sido localizado), de la declaración de la madre y de las demás diligencias probatorias que el encargado considere oportuno realizar en uso de las facultades que le confiere el artículo 28 LRC, pudiendo incluso hacer constar la filiación de otro progenitor distinto del marido si existe reconocimiento. Y cuando la inscripción se solicita fuera de plazo, si lo que resulta del expediente es que rige la mencionada presunción pero el hijo no ostenta la posesión de estado de filiación matrimonial, solo podrá inscribirse la filiación materna, no debiendo figurar la filiación paterna correspondiente al marido ni tampoco la filiación respecto de otro progenitor distinto mientras no se destruya la presunción legal del artículo 116 CC. Por esta razón, no teniendo

constancia este centro de que el asiento de nacimiento se hubiera practicado al tiempo de resolver el recurso, antes de emitir resolución se solicitó confirmación de ese hecho al registro, pues si la inscripción aún no se había realizado, lo procedente era inscribir a la nacida únicamente con filiación materna en tanto queda determinada –en vía judicial, necesariamente, dadas las circunstancias del caso– la paterna. Sin embargo, la encargada del registro, una vez recibido el oficio solicitando información, optó por practicar en ese momento la inscripción de la menor atribuyendo la paternidad al exmarido, tal como se había decidido en la resolución recurrida, de manera que, una vez realizado el asiento, que hace fe de la filiación de la inscrita (art. 41 LRC), de acuerdo con la legislación aplicable no es posible ya en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial y la filiación pretendida tendrán que intentarla los interesados en la vía judicial ordinaria.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 5 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

Resolución de 23 de junio de 2017 (41.^a)

Inscripción de filiación.–*No procede la inscripción de filiación paterna de un menor atribuida a un ciudadano cubano distinto de quien fue el marido de la madre por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial del artículo 116 CC, que no ha sido destruida.*

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el Consulado General de España en La Habana el 17 de octubre de 2012, Doña Y.-L. L. R., mayor de edad y con doble nacionalidad cubana y española, solicitó la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad B. C. L. Constan en el expediente los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; tarjeta de identidad e inscripción de nacimiento cubana del menor, nacido el 16

de agosto de 2003, hijo de la promotora y de A. C. C.; carné de identidad e inscripción de nacimiento cubana de este último; carné de identidad cubano e inscripción de nacimiento española de la promotora, nacida en Cuba el 26 de junio de 1977, hija de padre español; certificación cubana de matrimonio de la promotora con M. L. M. I., celebrado el 7 de diciembre de 1996, certificación de defunción de este último el 28 de mayo de 2003 y acta de consentimiento de Don A. C. C.

II

La encargada del registro consular dictó auto el 22 de julio de 2013 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento del menor pero exclusivamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la promotora atribución de filiación y apellido paterno a su hijo, tal como figura en la inscripción de nacimiento cubana, alegando que había entregado la documentación correspondiente al padre del menor.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, se interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 31-1.^a de enero de 2004; 25-1.^a de noviembre y 9-1.^a de diciembre de 2005; 4-4.^a de junio de 2007 y 9-4.^a de julio de 2008; 25-3.^a de febrero de 2009; 26-1.^a de octubre de 2011; 1-2.^a de junio y 23-36.^a de agosto de 2012; 15-44.^a de abril y 15-93.^a y 95.^a de noviembre de 2013; 22-9.^a de enero, 12-30.^a y 34.^a de marzo de 2014; 4-2.^a de septiembre y 20-17.^a de noviembre de 2015; 22-61.^a de abril, 29-24.^a de julio y 14-22.^a de octubre de 2016.

II. Pretende la promotora la inscripción en el registro civil español de la filiación paterna de su hijo menor de edad, nacido el 16 de agosto de 2003, respecto de quien consta como progenitor en la correspondiente certificación

cubana de nacimiento. La solicitante se había casado en 1996 con otro ciudadano cubano que falleció el 28 de mayo de 2003, sin que se haya acreditado documentalmente que la pareja estuviera separada de hecho y desde cuándo. La encargada del registro ordenó la inscripción del menor únicamente con la filiación y los apellidos de la madre por no considerar suficientemente probada la filiación paterna que se pretende, dado que, cuando el hijo nació, aún no habían transcurrido trescientos días desde la disolución del matrimonio por fallecimiento del cónyuge. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la inscripción de nacimiento en España del hijo de la promotora cuando, no habiendo transcurrido en el momento del nacimiento al menos trescientos días desde la disolución del matrimonio de la madre, se declara que el padre del nacido no es el marido, sino otro ciudadano que figura como progenitor en la certificación cubana de nacimiento. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y las pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el nacimiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 CC, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (*cf.* art. 386 LEC).

V. En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana del menor, lo cierto es que existió un matrimonio previo de la madre con otro ciudadano cubano entre cuya disolución, por fallecimiento del cónyuge el 28 de mayo de 2003, y el nacimiento del hijo el 16 de agosto siguiente aún no habían transcurrido los mencionados trescientos días. No habiéndose aportado prueba alguna que permita acreditar la existencia de separación previa, legal o de hecho, de los cónyuges, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de los interesados negando tal filiación no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía de un expediente gubernativo y tendrá que intentarla la interesada en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente gubernativo siempre que se acredite convenientemente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento del hijo. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la práctica de una anotación marginal en la inscripción española, con valor meramente informativo, para hacer constar los apellidos del inscrito conforme a su ley personal cubana (art. 38.3° LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (2.^a)

Inscripción de filiación.—*En tanto no quede determinada la filiación paterna, la inscripción de nacimiento ha de practicarse solo con la materna atribuyendo al inscrito los apellidos de la madre.*

En las actuaciones sobre determinación de filiación en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, madre del menor, contra auto de la encargada del Registro Civil de Parla (Madrid).

HECHOS

I

Con fecha 30 de enero de 2017, D.^a. C. E. V., nacida el 15 de junio de 1986 en Madrid, originariamente española, comparece ante el encargado del Registro Civil de Parla manifestando que contrajo matrimonio con Don H. E.-F. de quien se encontraba separada desde el año 2014, y, que su hijo E. nació en P. el de 2017, habiendo transcurrido más de 300 días desde su separación, por lo que solicita se practique la inscripción de nacimiento del menor con los apellidos maternos. Se aporta al expediente cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro Civil que incluye parte del facultativo que asistió al nacimiento; volante de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento de Parla; copia de documento nacional de identidad de la promotora y certificado literal español del matrimonio de la madre del menor con Don H. E.-F., de nacionalidad marroquí, celebrado en S. (Marruecos) el 3 de septiembre de 2012 e inscrito en el Registro Civil Consular de España en Rabat (Marruecos).

II

El encargado del registro civil dicta providencia de fecha 30 de enero de 2017, en la que se indica que vistos los documentos aportados y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 de la Ley del Registro Civil, requiere a la compareciente para que indique el domicilio de su esposo, a efectos de realizar las comprobaciones tendentes a acreditar los

extremos alegados por la promotora, manifestando la interesada que éste se encuentra en paradero desconocido desde el año 2014, requiriéndola a efectos de que indique la identidad de dos testigos.

La comparecencia de los testigos tiene lugar el día 31 de enero de 2017 en las dependencias del Registro Civil de Parla, siendo testigos el padre y una prima de la recurrente, manifestando el primero que le consta que su hija está casada con un ciudadano marroquí desde hace unos cuatro años y que no conoce al esposo, aunque sabe que desde hace casi tres años no conviven y que no tienen hijos en común, Por otra parte, la prima de la interesada manifiesta que le consta que ésta contrajo matrimonio en Marruecos con un ciudadano marroquí hace unos cuatro años, que convivieron muy poco tiempo juntos y que le consta que su prima no sabe nada del paradero del esposo; indica también que conoce al padre del bebé que se pretende inscribir y que le consta que la interesada quiere inscribirlo con apellidos maternos porque han tenido problemas entre la pareja.

III

Notificado el ministerio fiscal, emite informe con fecha 10 de febrero de 2017, por el que no se opone a lo solicitado por la interesada, considerando que han transcurrido 300 días desde la separación de hecho a partir de la cual dejaron de convivir los cónyuges, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Civil.

IV

Con fecha 7 de marzo de 2017, la encargada del Registro Civil de Parla dicta auto por el que se dispone que se practique la inscripción de nacimiento de E. como hijo matrimonial de la interesada y de su esposo, inscripción que se practicará una vez que el citado auto sea firma, por lo que hasta entonces se deja en suspenso, toda vez que del examen y valoración de la prueba aportada y practicada, no se considera acreditado, conforme al artículo 116 del Código Civil y a la circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de junio de 1981, que haya transcurrido el plazo de trescientos días señalado por la ley para que la separación de los cónyuges pueda destruir la presunción de paternidad del marido.

V

Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado indicando el nombre del padre del menor y solicitando se proceda a la inscripción de su hijo con dicha filiación paterna.

Aporta la siguiente documentación: decreto de fecha 29 de marzo de 2017 dictado por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 6 de Parla, en el procedimiento de divorcio contencioso 149/2017 por el que se admite a trámite la demanda de divorcio formulada por la interesada figurando como demandado su esposo, Don H. E.-F.; pruebas biológicas de paternidad de fecha 4 de abril de 2017.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, por informe de 4 de julio de 2017, se adhiere al recurso interpuesto por la promotora, madre del menor, interesando la revocación de la resolución recurrida y, en su lugar, se dicte otra, por la que se declare destruida la presunción de paternidad y se impongan al menor los apellidos maternos, como fue solicitado por la madre.

En el citado informe, se considera destruida la presunción de paternidad de Don. H. E.-F. en base a las declaraciones testificales que constan en el expediente y teniendo en cuenta la nueva documentación aportada por la interesada junto con el escrito de recurso e indicando que el volante de empadronamiento aportado por la promotora no es prueba suficiente que determine la convivencia.

VII

La encargada del Registro Civil de Parla remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos expresados en el auto recurrido.

VIII

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de Registros y del Notariado, se requiere a la interesada a fin de que aporte copia de la sentencia de divorcio de su matrimonio con Don H. E.-F. Atendiendo al requerimiento de documentación, la promotora aporta copia de sentencia dictada por el Juzgado de 1.^a Instancia e Instrucción núm. 6 de Parla de fecha 24 de julio de 2017, por la que se estima la demanda formulada por la interesada y se declara disuelto el matrimonio formalizado por la misma con el Sr. E.-F. En el antecedente de hecho primero de la citada sentencia se menciona que del matrimonio de las partes no hubo descendencia y el fundamento de derecho segundo de la citada sentencia se cita, en relación con la atribución de la vivienda familiar a la demandante, que el demandado, tal y como consta en las actuaciones, «reside en un domicilio diferente».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 116, 134 y 136 del Código Civil (CC); artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y artículo 49.2 de dicho texto legal; 185 del Reglamento del Registro Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); la Circular de 2 de junio de 1981, y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3.^a de abril y 20-4.^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3.^a de junio de 2003; 31-1.^a de enero de 2004; 25-1.^a de noviembre y 9-1.^a de diciembre de 2005; 4-4.^a de junio de 2007 y 9-4.^a de julio de 2008.

II. Por comparecencia en el Registro Civil de Parla, la interesada, madre del menor, solicitó se inscribiera el nacimiento de su hijo con filiación materna, alegando que, si bien se encontraba casada con ciudadano marroquí desde septiembre de 2012, se encontraban separados de hecho desde hacía más de 300 días. La encargada del Registro Civil de Parla dictó auto por el que consideraba que no se encontraba acreditada en el expediente la separación de los cónyuges, por lo que en aplicación del artículo 116 del Código Civil procedía practicar la inscripción de nacimiento del menor con filiación paterna matrimonial.

Interpuesto recurso por la solicitante, madre del menor, aporta decreto del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 6 de Parla por el que se admite a trámite la demanda de divorcio formulada por la progenitora, así como pruebas biológicas de paternidad, solicitando se inscriba al menor con la filiación paterna del padre biológico que consta en las citadas pruebas. El ministerio fiscal se adhiere al recurso formulado por la promotora, considerando destruida la presunción de paternidad matrimonial, interesando se impongan al menor los apellidos maternos, tal como solicitó la promotora en el inicio de su expediente. Con posterioridad, atendiendo al requerimiento de documentación formulado por esta Dirección General de los Registros y del Notariado, la interesada aporta sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 6 de Parla.

III. En primer lugar, hay que señalar que la promotora modifica en el recurso la *causa petendi* respecto de la inicial, pues su solicitud se dirigía a la inscripción de nacimiento del menor con los apellidos maternos, mientras que en el recurso lo que plantea es la inscripción de nacimiento con una filiación paterna no matrimonial, aportando un dictamen pericial de investigación biológica de paternidad. Se indica que las pruebas biológicas aportadas junto con el escrito de recurso no pueden ser valoradas en vía administrativa a efectos de determinar la filiación paterna, debiendo ser solicitadas y valoradas en vía judicial. Por tanto, dado que el auto emitido se refiere únicamente a la posibilidad de opción propuesta en la solicitud inicial de la interesada, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho auto y la resolución por parte de este centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si corresponde la inscripción del menor con los apellidos maternos.

IV. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento cuando, el menor nace durante la vigencia del matrimonio de la madre. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial que establece el artículo 116 CC, que indica que «se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges» queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

V. En este caso, según la documentación integrante del expediente, consta que el nacimiento del menor se produce el de 2017 en P. (Madrid), dentro de la vigencia del matrimonio de la madre formalizado con Don H. E.-F. el 3 de septiembre de 2012 en S. (Marruecos).

Sin embargo, de la prueba testifical practicada el 31 de enero de 2017 en el Registro Civil de Parla, se desprende que la madre del menor desde hace casi tres años no convive con su esposo, afirmando una de los testigos, prima de la interesada, que «le consta que su prima se casó con un ciudadano marroquí hace unos cuatro años, que convivieron muy poco tiempo juntos y que le consta que su prima no sabe nada del paradero de su esposo», añadiendo a continuación que «conoce al padre del bebé que C. pretende inscribir y que asimismo le consta que ella quiere inscribirle con los apellidos maternos únicamente porque han tenido problemas entre la pareja», por lo que queda patente que la testigo refiere que el padre del menor es la actual pareja de la interesada y no su esposo, declaración en la que se apoya la encargada del registro civil para fundamentar la no destrucción de la filiación paterna matrimonial, al considerar que las afirmaciones de la testigo se refieren al esposo.

Por otra parte, en el volante de empadronamiento aportado al expediente, expedido por el Ayuntamiento de Parla el 7 de diciembre de 2016, en el que la encargada del Registro Civil de Parla se basa para justificar que no queda acreditada la falta de convivencia entre los cónyuges, consta que Don H. E.-F. se inscribió con fecha 20 de noviembre de 2012 y la madre del menor el 4 de diciembre de 2016, por tanto, de acuerdo con el citado documento, los cónyuges habrían convivido en el mismo domicilio apenas 52 días antes del nacimiento del menor.

Asimismo, en vía de recurso, la interesada aporta decreto dictado por el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 6 de Parla de fecha 29 de marzo de 2017 por el que se admite a trámite la demanda de divorcio formulada por la interesada contra Don H. E.-F., así como copia de la sentencia dictada con fecha 24 de julio de 2017 por el citado juzgado, por el que se declara disuelto el matrimonio de la interesada, indicándose en el antecedente de hecho primero de la citada sentencia que del matrimonio de las partes no hubo descendencia, añadiendo en el último párrafo del fundamento de derecho segundo, en relación con la atribución de la vivienda familiar a la demandante, que el demandado, tal y como consta en las actuaciones «reside en un domicilio diferente». Por otra parte, se aportan pruebas biológicas de paternidad, que si bien no pueden ser tenidas en cuenta en vía administrativa a efectos de determinar la filiación paterna del menor, concluyen indicando que los resultados obtenidos son compatibles con que un tercero sea el padre biológico del menor.

Por tanto, de lo anteriormente indicado, se considera que la presunción de filiación paterna matrimonial, que es una presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, habría quedado destruida en base a las pruebas aportadas.

VI. El artículo 44.4 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, establece en su último párrafo, respecto de la filiación paterna en el momento de la inscripción del hijo que «en los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial con personal distinta de la que figura en la declaración o sea de aplicación la presunción prevista en el artículo 116 del Código civil se practicará la inscripción de nacimiento de forma inmediata sólo con la filiación materna y se procederá a la apertura de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar en parte el recurso interpuesto por la promotora, revocando el auto apelado y declarando que el menor deberá ser inscrito en el registro civil con la filiación materna, sin perjuicio de las actuaciones que puedan iniciarse por la interesada en vía judicial a efectos de la determinación de la filiación paterna del menor.

Madrid, 3 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

- Resolución de 10 de marzo de 2017** (29.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 17 de marzo de 2017** (31.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 17 de marzo de 2017** (32.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 17 de marzo de 2017** (38.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 24 de marzo de 2017** (20.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 31 de marzo de 2017** (48.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 7 de abril de 2017** (38.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 5 de mayo de 2017** (22.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 16 de junio de 2017** (33.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 16 de junio de 2017** (34.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 23 de junio de 2017** (42.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 7 de julio de 2017** (36.^a). Inscripción de filiación.
- Resolución de 1 de septiembre de 2017** (90.^a). Inscripción de filiación.

1.3 Adopción

1.3.1 INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN NACIONAL

Resolución de 24 de marzo de 2017 (19.ª)

Inscripción de adopción nacional.—*No procede consignar la modificación de apellidos del extranjero adoptado en España en forma simple en 1987 porque no consta que en la escritura de adopción posterior a la autorización judicial se conviniera la sustitución de los apellidos del adoptado por los de su adoptante.*

En las actuaciones sobre anotación de adopción simple constituida en España remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra la calificación realizada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el 17 de marzo de 2015, el Sr. A. H. R., de nacionalidad egipcia y con domicilio en M., solicitó la inscripción de su nacimiento en el registro civil español con marginal de adopción por parte de una ciudadana española. Aportaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, auto de 9 de julio de 1987 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 23 de Madrid por el que se aprueba la adopción simple de Don A. H. R. por parte de Doña M-M. G. G-C., extracto de inscripción egipcia de nacimiento de A., nacido en A. el 20 de junio de 1961, hijo de H. R. H. S. y de W. R. H., ambos de nacionalidad egipcia, certificado de empadronamiento y pasaporte egipcio del promotor.

II

Desde el Registro Civil Central se requirió al interesado la aportación de certificado literal de nacimiento de la adoptante y copia del DNI. El promotor, al tiempo que solicitaba

ser inscrito con los apellidos de la adoptante y en el mismo orden, alegó que había pedido en diferentes ocasiones al Consulado Español en Toulouse la inscripción de nacimiento de su madre con resultado infructuoso hasta el momento. Sí presentaba en cambio certificado de la Dirección General de la Policía sobre expedición de DNI correspondiente a Doña M-M. G. G. de C., nacida en F. (Francia) el 1 de agosto de 1913, y certificado literal de defunción de esta en M. el 5 de febrero de 1996.

III

El encargado del registro practicó el 25 de mayo de 2015 una anotación soporte de nacimiento del interesado con valor meramente informativo y, a continuación, la anotación de la resolución judicial de aprobación de la adopción simple dictada en 1987 haciendo constar expresamente que el adoptado no adquiere la nacionalidad española.

IV

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el promotor que en el expediente iniciado había solicitado también que se le atribuyeran los apellidos de su madre adoptiva, dado que así es conocido por vecinos y amigos desde hace años, sin que en el asiento practicado se haya hecho mención alguna a este extremo. Añadía que su petición está motivada por la relación afectiva con su madre adoptiva y para integrarse plenamente en la sociedad española en la que vive y donde quiere permanecer definitivamente, sin que ello comporte la pretensión de obtener por esta vía la nacionalidad española.

V

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 175 (en la redacción dada por la Ley 7/1970, de 4 de julio) y 180 (redacción por la Ley 11/1981, de 13 de mayo) del Código Civil (CC); 38 de la Ley del Registro Civil (LRC); 151 y 154 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. El promotor solicitó la inscripción en el registro civil español de su nacimiento y adopción simple por parte de una ciudadana española constituida en España en 1987. El encargado del registro, a la vista de que el interesado no ostenta la nacionalidad española ni ha nacido en España, practicó sendas anotaciones –la correspondiente a la adopción simple precedida de una anotación soporte de nacimiento– para dejar constancia registral del hecho de

la adopción. Dicha calificación fue recurrida por el interesado por no haberse reflejado en el asiento la petición complementaria de que se le atribuyeran los apellidos correspondientes a su madre adoptiva.

III. Son inscribibles en España los hechos concernientes al estado civil de las personas que afecten a españoles o hayan ocurrido en España. Y cuando no pueda practicarse una inscripción principal, es posible realizar una anotación del hecho al solo efecto de servir de soporte a asientos marginales. Así, tratándose en este caso de una adopción constituida en España por parte de una ciudadana española pero no siendo español ni nacido en España el adoptado, procede, como se ha hecho en este caso, practicar una anotación de nacimiento con valor meramente informativo que sirva de soporte a la anotación posterior de adopción según los datos que resultan de la documentación aportada.

IV. De acuerdo con la legislación vigente en el momento en que se constituyó la adopción objeto de anotación en este caso, tras la aprobación judicial debía otorgarse una escritura pública inscribible en el registro civil correspondiente. Y si se trataba de una adopción simple, el artículo 180 CC –en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo– permitía que en dicha escritura se pudiera convenir la sustitución de los apellidos del adoptado por los del adoptante o adoptantes o el uso de un apellido de cada procedencia. Pero a falta de pacto expreso el adoptado conservaba sus apellidos originales. Así pues, no constando en este caso pronunciamiento alguno en relación con los apellidos del adoptado, no es posible atribuirle en el registro los de su madre adoptiva.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación realizada.

Madrid, 24 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de junio de 2017 (23.^a)

Inscripción de adopción nacional.–*La posibilidad de modificar el lugar del nacimiento de un menor adoptado está prevista únicamente para las adopciones internacionales.*

En las actuaciones sobre modificación del lugar de nacimiento de una menor adoptada en España remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Fuengirola el 28 de agosto de 2015, Don M. L. y Doña R. P. D., con domicilio en F. solicitaban que se extendiera una nueva inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, S.E.L.D., en la que figuren únicamente, además de los datos de nacimiento y de la nacida, las circunstancias personales de los progenitores adoptivos, constando F. como lugar de nacimiento de la inscrita. Aportaban la siguiente documentación: tarjeta de identidad alemana del promotor y DNI español de la promotora, volante de convivencia e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Fuengirola, practicada el 24 de abril de 2015 por traslado del Registro Civil de Almería, de S.I.M. S. (cuerpo principal de la inscripción), nacida en A. el de 2007, hija de M. M. S. y de M-I. S. M., con marginal de 7 de enero de 2015 de adopción de la inscrita por los promotores en virtud de auto de 24 de septiembre de 2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Almería, pasando a ser los apellidos de la inscrita L. D.. En la inscripción consta otra marginal de 19 de agosto de 2015 para hacer constar el cambio de nombre de la inscrita por S.E. mediante resolución del encargado del registro de 9 de junio de 2015.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 12 de noviembre de 2015 denegando la pretensión de fijar como lugar de nacimiento de la inscrita el del domicilio de los progenitores porque tal posibilidad está limitada a los supuestos de adopciones internacionales.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando los recurrentes que, tanto en la instrucción de la DGRN de 15 de febrero de 1999 como en la de 1 de julio de 2004 y en la resolución-circular de 31 de octubre de 2005, está prevista la posibilidad de practicar una nueva inscripción de nacimiento en la que consten únicamente los datos resultantes de la adopción y, como lugar de nacimiento, el del domicilio de los adoptantes, sin que se excluyan las adopciones nacionales, y que la interpretación de las normas del Registro Civil debe hacerse siempre en interés del menor, que en este caso se centra en la necesidad de preservar la intimidad de su hija y evitar que la madre biológica y los padres inscritos inicialmente –todos ellos condenados en 2010 por un delito de simulación de parto, según los recurrentes– puedan localizarla. Con el escrito de recurso aportaban copia incompleta del auto de adopción de la menor de 24 de septiembre de 2014.

IV

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que se adhirió a la pretensión. El encargado del Registro Civil de Fuengirola se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 y 20 de la Ley del Registro Civil (LRC); 77 y 307 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la resolución de consulta de la DGRN de 20 de octubre de 2005 sobre inscripción de adopciones y la resolución-circular de 31 de octubre de 2005.

II. Pretenden los recurrentes que se practique una nueva inscripción de nacimiento de su hija, nacida en A. en 2007 y adoptada por ellos en 2014, en la que, además de figurar únicamente los datos resultantes de la adopción, se haga constar como lugar de nacimiento de la inscrita el del domicilio familiar, en F. El encargado del registro denegó esta última circunstancia alegando que tal posibilidad solo está prevista para el caso de las adopciones internacionales.

III. La adopción da lugar en el registro civil español a una inscripción marginal en el asiento de nacimiento del adoptado (art. 46 de la Ley del Registro Civil), de modo que, en el mismo folio registral, aparece reflejada la filiación anterior (o la ausencia de filiación) del adoptado, carente ya de relevancia jurídica, y la nueva filiación adoptiva dotada legalmente de plenitud de efectos jurídicos. Como esta superposición de filiaciones puede dar origen a molestas confusiones y a que irregularmente se dé publicidad, a través de una certificación literal, de datos que afectan a la intimidad familiar, para eliminar tales inconvenientes la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999, en aplicación del mecanismo previsto por el artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, autorizó con carácter general que la filiación adoptiva fuera objeto de una inscripción principal de nacimiento que reflejara solo los datos sobrevenidos por la adopción, con referencia a la inscripción previa de nacimiento y adopción en la que se comprende todo el historial jurídico del adoptado. Una de las circunstancias reveladora de una filiación adoptiva puede ser la relativa al lugar del nacimiento, especialmente cuando este ha acaecido en un país remoto y, por ello, es conveniente que la publicidad de este dato quede limitada y sujeta a la autorización especial que el artículo 21 del reglamento establece. A tal fin, y complementariamente a lo anterior, la Instrucción de la DGRN de 1 de julio de 2004, guiada de la misma finalidad de evitar la posibilidad de la publicidad irregular de las adopciones y, especialmente, respecto de las adopciones internacionales, autorizó que en la nueva inscripción de nacimiento y adopción que, a solicitud de los adoptantes, se practique –con inclusión exclusivamente de los datos del nacimiento y del nacido y de las circunstancias de los padres adoptivos– conste como lugar de nacimiento del adoptado el del domicilio de los adoptantes y no el lugar real donde se produjo el hecho, reconociendo así en tales casos una facultad similar a la que el artículo 16, párrafo segundo, LRC otorga a los padres biológicos. Con ello se hace efectivo, también en este ámbito, el principio constitucional de equiparación entre los hijos con independencia del origen de su filiación (*cf.* arts. 14 y 39 de la Constitución).

IV. La necesidad de dotar a esta materia de la mayor seguridad jurídica posible y de reforzar los citados principios constitucionales de protección de la intimidad personal y familiar y de igualdad jurídica y equiparación entre los hijos con independencia de su filiación, dotando a la regulación de la materia del adecuado rango normativo legal, así como la conveniencia de extender las finalidades antes expresadas a otros supuestos anteriormente no cubiertos por las instrucciones citadas, determinaron la reforma del artículo 20.1.º LRC introducida por la disposición final segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificaron el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Dicha reforma consistió en añadir un nuevo párrafo al número 1.º del artículo 20, relativo al traslado de las inscripciones principales de nacimiento al registro del domicilio del nacido o sus representantes legales, adición del siguiente tenor literal: «En caso de adopción internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16».

V. La introducción de esta modificación tiende sin duda a satisfacer la finalidad a la que respondía el párrafo segundo de la regla 1.ª añadido a la Instrucción de la DGRN de 15 de enero de 1999 por la de 1 de julio de 2004, dotando a la materia, como antes se dijo, de una adecuada cobertura legal en atención a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las situaciones y asientos registrales practicados al amparo de aquellas instrucciones. La citada reforma legal fue objeto de rápido desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, por el que se modificó el Reglamento del Registro Civil que, entre otros extremos, dio nueva redacción a los artículos 77 y 307 del citado reglamento. En cuanto al primero se añadió un nuevo párrafo que permite omitir los datos de la filiación originaria en la nueva inscripción de nacimiento practicada como consecuencia del traslado en los casos de adopción. En concreto se establece que «En caso de adopción, si los solicitantes del traslado así lo piden, en la nueva inscripción de nacimiento constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos y, en su caso, la oportuna referencia al matrimonio de estos». Se trata de una norma complementaria del artículo 20.1.º LRC que, de forma conjunta con este, viene a sustituir en su finalidad a la Instrucción de 15 de febrero de 1999, en su redacción modificada por la de 1 de julio de 2004. En consecuencia, estas instrucciones se han de entender derogadas a partir de la entrada en vigor de la citada reforma legal y reglamentaria.

VI. Explicado el alcance de las reformas operadas en este campo, cabe ya analizar la pretensión planteada en el presente caso, que es la de obtener el cambio del lugar de nacimiento, al tiempo que se suprimen los datos de la filiación biológica, tras haberse producido ya el traslado del folio registral al registro civil del domicilio. Pues bien, conforme a la reseñada reforma legal

de 2005, queda claro que los actuales artículos 77 y 307 RRC son aplicables a todas las adopciones, ya sean nacionales o internacionales, pero la posibilidad de modificar el lugar de nacimiento del adoptado por el del domicilio de los padres adoptantes queda circunscrita, como ya lo estaba a partir de la instrucción de 1999 y antes de que se materializara la reforma legal, a las adopciones internacionales (*cf.* arts. 16.3 y 20.1.º LRC). Así lo tiene también establecido la doctrina de este centro.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

1.3.2 INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

(No hay resoluciones para este apartado)

1.4 Competencia

1.4.1 COMPETENCIA EN INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO, FILIACIÓN Y ADOPCIÓN

Resolución de 12 de abril de 2017 (16.ª)

Competencia en nacimiento, filiación y adopción.—*La regla general de competencia en materia registral civil se contiene en el artículo 16.1 de la Ley del Registro Civil y, conforme a ella, «los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el registro municipal o consular del lugar en que acaecen» que, por tanto, debe ser acreditado por el promotor de la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Ponteareas (Pontevedra).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana (Cuba) en fecha 20 de junio de 2012 la Sra. D. M. G, de nacionalidad cubana, nacida en T. (Cuba) el 16 de noviembre de 1964 y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en La Habana, solicita la inscripción fuera de plazo del nacimiento de su abuelo, S. G. V., exponiendo que nació en P. el 30 de diciembre de 1902, hijo de C. G. y de M. V., y acompañando testimonio de su carné de identidad cubano y, del abuelo, certificaciones negativas de inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Ponteareas entre el 14 de junio de 1897 y el 30 de diciembre de 1905 y en el de Cangas de Morrazo (Pontevedra) entre el 1 de enero de 1902 y el 31 de diciembre de 1903 y solicitudes de certificado de nacimiento cursadas sin éxito a los registros civiles del municipio orensano de X. de L. y de los pontevedreses de A-E., V., P. y R. en las que se dan hasta tres fechas de nacimiento: el año 1900, el 12 de diciembre de 1900 y el 12 de diciembre de 1900 o 1902.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, el canciller en funciones de ministerio fiscal informó que estima que debe accederse a lo solicitado y el 25 de junio de 2012 encargado del registro civil consular acordó remitir lo actuado al municipal de P., en el que tuvo entrada el 30 de mayo de 2014.

III

El ministerio fiscal informó que se opone a lo solicitado por la promotora, toda vez que de la documentación aportada no resulta justificada su pretensión, y el 23 de enero de 2015 la juez encargada del Registro Civil de Pontearreas, razonando que de la documentación obrante en autos no ha quedado acreditado que el nacimiento cuya inscripción se pretende se produjera en esa población, dictó auto disponiendo declarar la falta de competencia territorial del órgano del que es titular.

IV

En comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 19 de mayo de 2015 se notificó la resolución a la promotora y esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, como nieta de español, ha solicitado la nacionalidad por la ley de memoria histórica, que su abuelo materno emigró a principios de siglo de España a Cuba, donde vivió y murió, que las intensas pesquisas para conocer el lugar en el que fue inscrito su nacimiento no han dado resultado y que ello le hace pensar que no fue oficialmente registrado; solicitando que este centro directivo supla la falta de competencia territorial del juzgado de Pontearreas y aportando copia simple de certificaciones cubanas de nacimiento de su madre, hija de S. G. V., natural de España, y de defunción de este, nacido en España, y constancia cubana de inscripción en el registro de extranjeros el 15 de abril de 1935, a la edad de 33 años, del nacido en P., P., España.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que el certificado del Ministerio del Interior aportado carece del rigor suficiente de autenticidad para acreditar el lugar de nacimiento del abuelo de la peticionaria, que surtiría los efectos jurídicos de otorgarle a ella la nacionalidad española, y la juez encargada del Registro Civil de Pontearreas informó que, al no haberse probado el lugar de nacimiento, se ratifica en la falta de competencia de ese registro civil y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 24, 41, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 66, 68, 346, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil

(RRC); y las resoluciones, entre otras, de 22-1.^a de mayo de 1998, 19-2.^a de octubre de 1999, 31-1.^a de marzo y 3-2.^a de junio de 2000, 15 de noviembre de 2001, 17-2.^a de octubre de 2002, 13-1.^a y 22 de febrero de 2003, 1-1.^a de abril de 2004, 18-1.^a de octubre de 2006, 17-7.^a de noviembre de 2008, 18-6.^a de febrero y 17-2.^a de diciembre de 2009 y 9-18.^a de mayo de 2013.

II. Solicita la promotora la inscripción fuera de plazo del nacimiento de quien aduce abuelo materno, exponiendo que, hijo de C. G. y de M. V., nació en P. el 30 de diciembre de 1902, y la juez encargada, considerando que de la documentación aportada no resulta acreditado que el nacimiento se produjera en esa población, dispone declarar la falta de competencia territorial del órgano del que es titular para la inscripción pretendida mediante auto de 23 de enero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general de competencia en materia registral civil se contiene en el artículo 16.1 LRC que dispone que «los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen» y, para la correcta aplicación del precepto transcrito, debe acreditarse por el promotor que el hecho cuya inscripción pretende ha ocurrido en la circunscripción del registro municipal, principal o delegado, al que dirige la solicitud.

IV. En este caso, la promotora no aporta al expediente prueba alguna que avale su manifestación de que el nacimiento acaeció en P. con el escrito de recurso presenta documentos registrales extranjeros, de nacimiento de una hija y de defunción, en los que figura España como lugar de nacimiento del padre de la inscrita y del difunto –en el de defunción constan cruzados con una raya los espacios habilitados para municipio y provincia–, y un documento administrativo cubano que, si bien expresa que nació en P., nada acredita en materia de estado civil y, además, no ofrece garantías suficientes de regularidad y autenticidad –se refiere a un asiento realizado en 1935 y a esa fecha la denominación oficial del municipio es P. y, a mayor abundamiento, la solicitante, a quien incumbe la carga de la prueba del hecho cuya inscripción solicita, aduce que ha promovido el expediente precisamente porque han fracasado las pesquisas realizadas para conocer el lugar en el que fue inscrito el nacimiento. Así pues, no acreditado el lugar de nacimiento que determina el registro en el que ha de practicarse la inscripción, sin entrar a valorar la procedencia o no de esta ha de concluirse que el Registro Civil de Ponteareas no es competente para acordarla.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ponteareas (Pontevedra).

Resolución de 28 de abril de 2017 (7.^a)

Competencia en nacimiento, filiación y adopción.—1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento, para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º *El encargado puede y debe declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del padrón municipal respecto de la persona que promueve el expediente registral ante el registro civil cuya competencia depende del domicilio del promotor al que se refiere la inexactitud.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Málaga el 2 de agosto de 2012, M. M. B. (E. M. E. M.), nacido en E-A. o en S., el 6 de junio de 1964 o 1965, según la documentación que se examine, solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en aplicación del artículo 18 del CC por haber nacido en el territorio del S. O. Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: pasaporte marroquí expedido en mayo de 2012 en E-A. y en el que consta nacido en dicha localidad en 1964 y que es de nacionalidad marroquí, certificado de empadronamiento en M. desde el 26 de julio de 2011, libro de escolaridad español expedido en el Sáhara que recoge los estudios del interesado hasta el tercer nivel desde 1971 a 1975, y en el que consta que nació en S. el 6 de junio de 1965 y residía en E-A., siendo sus padres M. y A., informe negativo respecto a su inclusión en los libros cheránicos custodiados por la Administración española, certificación marroquí de lazos de parentesco, identificado como E-M. el M. y en el que se declara que nació en E-A. en 1964, sin determinar día y hora y también su inscripción en el registro civil marroquí en 1978, hijo de M. M. hijo de E-B. y de F. hija de M., certificado marroquí de concordancia de nombre, recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental en el que consta como E. M. B., nacido en 1964, certificado de que la madre del promotor tuvo documento nacional de identidad del Sahara expedido en 1971 y fotocopia del expedido al padre del promotor en el mismo año, y, expedidos por la representación de la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) certificado de nacionalidad en el que se menciona que el interesado nació el 6 de junio de 1964, certificado de nacimiento, certificado de subsanación, certificado de paternidad en el que se declara que es hijo de M. B. M. nacido en S. (Sáhara Occidental) en 1921 y de F. E. A. nacida en E. A. en 1942, y certificado de que residió con su familia en los territorios ocupados por Marruecos por lo que no pudo optar en su momento a la nacionalidad española y, por último se aporta documento notarial del poder otorgado por el interesado, el 1 de agosto de 2012, para ser representado por persona identificada como abogado colegiado en Málaga, en dicho documento consta que el interesado es de nacionalidad marroquí, no resi-

dente en España, funcionario y vecino de El Aaiún, citando su domicilio y un domicilio en España a efectos de notificaciones que coincide con el del padrón municipal.

II

Con fecha 10 de septiembre de 2012 se dicta providencia para requerir al promotor su comparecencia para aclarar contradicciones apreciadas en la documentación presentada, respecto a su lugar y fecha de nacimiento y la identidad de su progenitora. Con fecha 17 de octubre de 2012 comparece el representante legal del promotor aportando certificado del colegio de la Misión Cultural Española en El Aaiún, relativo a que nació en 1964 y que tiene aprobados los niveles del primero al octavo, datos que no concuerdan con el del colegio de El Aaiún que constaba en el expediente, y también se aporta declaración jurada del interesado sobre su fecha de nacimiento y nombre de sus progenitores, firmada en El Aaiún el 25 de septiembre de 2012.

III

Con fecha 22 de octubre de 2012 se dictó auto por el que se declaraba la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor y declarada la firmeza del mismo se solicita por el precitado la inscripción de su nacimiento, con fecha 10 de mayo de 2013, mediante escrito cuya firma no corresponde a simple vista con la que del interesado consta en otros documentos por ejemplo en su ratificación de 3 de junio de 2013. Con esa misma fecha la encargada del registro acuerda que el promotor sea examinado por el médico forense correspondiente, se producen 3 citaciones a las que el interesado no comparece, 17 de julio, 10 de septiembre y 17 de octubre de 2013, siendo examinado el día 7 de noviembre del mismo año y con la misma fecha comparecen dos testigos, uno de ellos el abogado que representa al interesado, que declaran que le conocen por ser compañeros de estudios en el Colegio de la Misión Cultural Española en El Aaiún, y conocen a su familia y hermanos.

IV

El ministerio fiscal informa que precede acceder a lo solicitado. La encargada del Registro Civil de Málaga acuerda la remisión del expediente al Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción, teniendo entrada el 29 de noviembre de 2013. Se remite al ministerio fiscal que emite informe con fecha 6 de junio de 2014, no oponiéndose a lo solicitado. Con fecha 10 de febrero de 2015, el encargado del Registro Civil Central dicta auto por el que, no estando acreditado que el domicilio en Málaga facilitado sea el lugar de residencia habitual del promotor, habida cuenta lo consignado en el poder de representación otorgado por el promotor, no residente en España, el lugar de expedición de su pasaporte marroquí, El Aaiún, en el año 2012 cuando se supone que residía en España, declaración jurada y demás circunstancias, se declara incompetente por razón del territorio al no residir en España el promotor, declarando también la incompetencia del Registro Civil de Málaga para dictar la resolución de fecha 22 de octubre de 2012 por la misma razón.

V

Notificada la resolución el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que su domicilio quedó acreditado con los documentos del padrón municipal, aportando certificado de empadronamiento histórico en Málaga, en el que consta la inscripción el 26 de julio de 2011, un trámite de rectificación de domicilio que no es tal, en noviembre de 2013, la caducidad de la inscripción el 3 de octubre de 2014 y una nueva inscripción de fecha 24 de julio de 2015, una vez dictada la resolución impugnada y conocida por el interesado.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste pide su desestimación, mostrándose de acuerdo con la fundamentación del auto. El encargado se ratifica en su resolución y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 40 del Código Civil (CC); 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 11-4.^a y 12-1.^a de enero y 12-4.^a de diciembre de 2007 y 14-6.^a de octubre de 2008; 19-7.^a de junio de 2009; 16-1.^a de marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Málaga, solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 22 de octubre de 2012. Posteriormente se solicitó la inscripción de nacimiento del interesado en el Registro Civil Central. Previo informe del ministerio fiscal, conforme con la solicitud planteada, el encargado del Registro Civil Central dictó auto de 10 de febrero de 2015 declarándose incompetente por razón del territorio al estimar que el interesado no reside habitual y efectivamente en España sino en El Aaiún, declarando que por el mismo motivo tampoco era competente el Registro Civil de Málaga para dictar su auto de fecha 22 de octubre de 2012. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (*cfr.* art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la ano-

tación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido (.....)» lo que sucede en el caso presente ya que la competencia viene determinada por el domicilio del interesado en Málaga, domicilio cuya realidad está en cuestión.

IV. La cuestión que se plantea en el presente recurso es la posible divergencia entre el domicilio real del interesado y el declarado por el mismo en su solicitud, toda vez que dicha circunstancia es la que determina la competencia territorial del Registro Civil Central para la inscripción del nacimiento del promotor. Siendo esto así las circunstancias e informaciones, que respecto al domicilio del promotor en España constan a lo largo de los expedientes que se han examinado y que se han reflejado en los antecedentes de esta resolución, confirman las dudas suscitadas al respecto.

V. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que «El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo». Además se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para «todos los efectos administrativos», pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada del mismo fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del registro civil, en general, y por el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código Civil, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del registro civil en casos concretos: a) así, el artículo 336.3 dispone que «el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical»; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, por su parte, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, establece que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará «por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal».

VI. En consecuencia, se aprecia que ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos

citados por la legislación del registro civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VII. Por ello, como se ha dicho, el encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en éste concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual a la vista de la fecha del empadronamiento. Ello supone la práctica de las diligencias que sean necesarias para comprobar la realidad del domicilio del interesado que consta en el certificado de su empadronamiento y, según el resultado, bien declare su falta de competencia para conocer y resolver el expediente si llega a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal, bien, en caso afirmativo, continúe la tramitación del expediente con la práctica de las diligencias que procedan. En el presente caso las diligencias no parecen necesarias a la vista de lo recogido al respecto en escritura notarial, el interesado no era residente en España, se facilita un domicilio extranjero, motivo por el que otorga poder de representación en España, motivo por el que no comparece al examen forense hasta la cuarta convocatoria, motivo por el que firma en El Aaiún una declaración jurada durante la tramitación del expediente y motivo por el que se le expide pasaporte marroquí en dicha localidad extranjera, cuando se supone que residía en España.

VIII. Por todo lo anteriormente indicado, procede la desestimación del recurso interpuesto, si bien debe significarse que en el ámbito del registro civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 28 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (64.ª)

Competencia en nacimiento, filiación y adopción.—*Los nacimientos se inscriben en el registro municipal o consular del lugar en que acaecen (art. 16.1 LRC). Cuando sea competente un registro consular, la inscripción solo se practicará antes en el Registro Civil Central si el no inscrito está domiciliado en España (art. 68 RRC).*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Ávila.

HECHOS

I

Por auto de fecha 6 de agosto de 2008, dictado por la encargada del Registro Civil Carmona (Sevilla), se declara con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en los artículos 17 y 18 del Código Civil, a Doña L. A. A., nacida el 5 de febrero de 1972 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, en M. (Sáhara Occidental), de acuerdo con partida de nacimiento expedida por la Delegación Saharaui para Andalucía y en B. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino aportado al expediente.

Por el Registro Civil Central se practica con fecha 25 de noviembre de 2008 inscripción de nacimiento soporte, así como anotación de la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por la encargada del Registro Civil de Carmona (Sevilla).

II

Incoado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo en el Registro Civil de Sevilla y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, con fecha 23 de octubre de 2009, el encargado del citado registro civil dicta auto-propuesta por el que resuelve remitir lo actuado al Registro Civil Central por ser de su competencia la resolución de la solicitud, con informe desfavorable a la petición de la promotora.

III

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, por providencia de 2 de septiembre de 2010, se solicita del Registro Civil de Sevilla, requiera a la promotora a fin de que aporte certificado literal de la inscripción de su nacimiento original y traducido, expedido por el Registro Civil marroquí o argelino, o bien certificado de familia o testimonio del libro de familia de sus padres, indicándose que si el certificado de nacimiento no reuniese los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento, se deberá iniciar expediente gubernativo de nacimiento fuera de plazo, conforme a los artículos 95-5.º de la Ley del Registro Civil y artículos 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil y 341 y siguientes del citado Reglamento.

Requerida la promotora tres veces por el Registro Civil de Sevilla, mediante carta certificada con acuse de recibo, a fin de que aportase la documentación requerida, y no habiendo comparecido, por providencia de fecha 17 de marzo de 2011 dictada por la encargada del Registro Civil Central, se devuelve el exhorto sin cumplimentar al no poder practicar lo acordado en las actuaciones y se archiva el expediente sin más trámites.

IV

Con fecha 7 de septiembre de 2015, la interesada promueve ante el Registro Civil de Ávila expediente gubernativo de inscripción de nacimiento fuera de plazo. Aporta la siguiente documentación: certificado de empadronamiento de la solicitante, expedido por el Ayuntamiento de Á., con fecha de alta en el municipio de 3 de septiembre de 2014; documento nacional de identidad de la promotora; copia de la anotación soporte de nacimiento de la interesada, con inscripción marginal de la declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española por resolución registral de 6 de agosto de 2008, dictada por la encargada del Registro Civil de Carmona (Sevilla), practicada en el tomo 50978, página 059, sección 1.º del Registro Civil Central y certificado de nacimiento de la interesada, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática.

V

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, por auto de fecha 22 de marzo de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil de Ávila, se determina que no ha lugar a la inscripción de nacimiento fuera de plazo de la promotora, toda vez que los documentos aportados carecen de entidad jurídica en nuestro ordenamiento, dado que la República Árabe Saharaui Democrática es un estado auto-declarado pero inexistente en el panorama jurídico-internacional.

VI

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se inscriba su nacimiento fuera de plazo en el Registro Civil español.

VII

Notificado el ministerio fiscal de la interposición del recurso, el encargado del Registro Civil de Ávila remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Carmona (Sevilla), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 6 de agosto de 2008. Incoado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo ante el Registro Civil de Sevilla, por auto-propuesta de fecha 23 de octubre de 2009, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central, por resultar de su competencia.

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, y requerida la promotora a fin de que aportase diversa documentación, por providencia de fecha 17 de marzo de 2011 dictada por la encargada del Registro Civil Central, se archiva el expediente sin más trámites, toda vez que la interesada no atendió al requerimiento de documentación que le fue solicitada.

Solicitado por la promotora se inicie expediente gubernativo en el Registro Civil de Ávila, en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo, por auto de fecha 22 de marzo de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil de Ávila, se determina que no ha lugar a la inscripción de nacimiento fuera de plazo de la promotora, toda vez que los documentos aportados carecen de entidad jurídica en nuestro ordenamiento.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (*cfr.* art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la ano-

tación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) *la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro*», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto.

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

V. Por otra parte, en cuanto a las reglas de competencia de los registros, el art. 68 del Reglamento del Registro Civil indica que «*los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el registro municipal o consular del sitio en que acaecen, cualquiera que sea el domicilio de los afectados, la incardinación de la parroquia o el lugar de enterramiento*», añadiendo que «*cuando sea competente un registro consular, si el promotor está domiciliado en España, deberá practicarse antes la inscripción en el Registro Central y después, por traslado, en el consular correspondiente*».

Por tanto, en el caso que nos ocupa, dado que la promotora, nacida el 5 de febrero de 1972 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, en M. (Sáhara Occidental), según partida de nacimiento expedida por la Delegación Saharaui para Andalucía o en B. (Argelia), se encuentra domiciliada en España, resulta competente el Registro Civil Central para la práctica de la inscripción de nacimiento solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones a fin de que por el Registro Civil Central se dicte la resolución que proceda en el expediente de inscripción de nacimiento de la promotora.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ávila.

2. NOMBRES Y APELLIDOS

2.1 Imposición de nombre propio

2.1.1 IMPOSICIÓN DE NOMBRE PROPIO. PROHIBICIONES

Resolución de 13 de enero de 2017 (1.ª)

Imposición nombre propio. Prohibiciones.—*Es admisible «Fantaghirò» como nombre propio de fantasía apto para mujer.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Vélez-Málaga.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 24 de noviembre de 2015 en el Registro Civil de Vélez-Málaga, D.ª S. V. C. solicitaba la inscripción de nacimiento de su hija, nacida en la citada localidad el de 2015, con el nombre de Fantaghirò. Consta en el expediente DNI de la promotora y del padre de la nacida, Don P. G. M.

II

La encargada del registro dictó providencia el 4 de diciembre de 2015 denegando la inscripción con el nombre solicitado por entender que puede resultar perjudicial para la menor y resultar confusa su identificación.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la calificación efectuada insistiendo en la pretensión inicial y alegando los progenitores que el nombre solicitado es el de una princesa de ficción protagonista de películas y series de animación, en prueba de lo cual se aportan varios documentos en los que se resume la historia, al parecer basada en un cuento italiano, de una doncella guerrera llamada Fantaghirò.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Vélez-Málaga remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 25-2.^a de septiembre y 21-1.^a de octubre de 2003, 17-3.^a de noviembre de 2004, 4-1.^a de enero, 13-3.^a de abril y 16-3.^a de junio de 2005, 23-1.^a de marzo y 26-3.^a de diciembre de 2006, 16-4.^a de abril, 8-3.^a de mayo y 8-1.^a de noviembre de 2007, 17-3.^a de septiembre de 2009 y 15-75.^a de noviembre de 2013, 11-18.^a y 30-10.^a de diciembre de 2015.

II. Los recurrentes solicitaron que se practicara la inscripción de nacimiento de su hija atribuyéndole el nombre de Fantaghirò. La encargada del registro no admitió el nombre elegido porque consideró que podía resultar perjudicial para la menor y hacer confusa su identificación. La calificación fue recurrida alegando los progenitores que el nombre solicitado no es denigrante para su hija y no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC.

III. Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre propio que estimen más conveniente, no pudiendo ser rechazado el elegido más que cuando incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley del Registro Civil y 192 de su Reglamento, que han de ser restrictivamente interpretadas.

IV. El nombre solicitado fue rechazado al considerar la encargada del registro que infringía el artículo 54 LRC porque podría resultar perjudicial para la inscrita y, además, hacer confusa su identificación. La prohibición aludida se refiere, literalmente, a aquellos «nombres que objetivamente perjudiquen a la persona».

El nombre discutido en este caso corresponde, como alegan los recurrentes, a un personaje femenino de ficción de origen italiano que ha dado título a varias películas y a una serie de animación, de manera que, si bien es evidente

que no se trata de un nombre de uso corriente ni ampliamente conocido, tampoco puede afirmarse que «objetivamente» (como señala el artículo 54 LRC), perjudique a la persona, puesto que no remite de modo inequívoco e inmediato a ningún vocablo de connotación denigrante, ofensiva o siquiera inconveniente, sino más bien a un nombre de los llamados «de fantasía» apto, por otra parte, para mujer en tanto que, si bien por su morfología, dado su origen italiano, no resulta inequívocamente femenino, lo cierto es que todas las referencias consultadas por este centro directivo remiten al anteriormente mencionado personaje femenino de ficción y, en consecuencia, no incurre en ninguna de las prohibiciones legales. Ha de recordarse a este respecto que la limitación establecida en el artículo 54 LRC ha de ceñirse exclusivamente a aquellos casos en los que el nombre elegido remita inequívocamente al sexo opuesto al del nacido, pues las prohibiciones en esta materia deben ser interpretadas siempre restrictivamente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 13 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga (Málaga).

Resolución de 31 de marzo de 2017 (41.^a)

Imposición nombre propio. Prohibiciones.—*No es admisible «Eanur» porque no es notorio que sea nombre propio de mujer y, en combinación con el apellido extranjero «Merette», con apariencia y estructura de nombre francés de mujer, hace confusa la identificación de la persona, incurriendo en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación de la juez encargada del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

El 2 de octubre de 2015 don J-C. Merette M. y doña C. M. P. comparecen en el Registro Civil de Madrid a fin de solicitar la inscripción dentro de plazo legal del nacimiento de su

hija, acaecido el de 2015 en el maternidad G. de M., según se acredita con parte facultativo del centro sanitario, manifestando en dicho acto que eligen para la nacida el nombre de «Eanur». En una segunda comparecencia son notificados de la providencia de la misma fecha de la encargada, declarando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 LRC, no es inadmisibile el nombre interesado porque induce a error en cuanto al sexo y acordando requerirles para que en el plazo de tres días designen otro con apercibimiento de que, transcurrido el plazo sin que lo hayan hecho, el encargado, conforme al artículo 193 RRC, impondrá un nombre a la nacida; y en el mismo acto eligen el nombre de «Cristina-Eanur» y recurren la no inscripción del nombre inicialmente propuesto, alegando que consideran que puede utilizarse para mujer.

II

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso y solicitó la confirmación de la resolución dictada, y la juez encargada informó que procede confirmar el acuerdo apelado ya que, con independencia del uso personal que se quiera hacer del nombre, su inscripción debe ajustarse a lo dispuesto en la ley española aplicable y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 193 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 16-1.^a de marzo de 2004, 20-12.^a y 28-3.^a de noviembre de 2008, 23-2.^a de julio de 2009, 20-9.^a de abril, 1-1.^a y 20-2.^a de septiembre y 17-7.^a y 30-5.^a de noviembre de 2010, 7-61.^a de octubre de 2013, 21-18.^a de abril y 24-58.^a de junio de 2014 y 31-21.^a de julio y 9-51.^a de octubre de 2015.

II. Los progenitores solicitan inscribir a su hija, nacida el de 2015, con el nombre de «Eanur» que la juez encargada declara inadmisibile, porque induce a error en cuanto al sexo, mediante providencia de 2 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Ciertamente los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre propio que estimen oportuno y el elegido no puede ser rechazado más que cuando claramente incurra en alguna de las escasas prohibiciones subsistentes en la redacción de los artículos 54 LRC y 192 RRC actualmente vigente. En este caso, ni con la interpretación restrictiva que de dichos preceptos se impone resulta admisible el nombre propuesto porque, aunque aisladamente tomado pudiera considerarse un nombre abstracto apto para designar tanto a varones como a mujeres, no es notorio que sea nombre propio de mujer, aquí va seguido de un primer apellido, «Merette», que es extranjero y tiene apariencia y estructura de nombre francés de mujer, la combinación de nombre y apellido resultante no atiende a la primordial función identificadora que en nuestro ordenamiento desempeñan el nombre y los ape-

lidos y, en consecuencia, no resulta admisible el nombre pretendido porque hace confusa la identificación de la persona.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 31 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 7 de abril de 2017 (25.^a)

No es admisible «Texas» porque los topónimos son usualmente apellidos y como tales percibidos en nuestro entorno social y cultural y, no acreditado que este sea también nombre propio de varón, hace confusa la identificación de la persona incurriendo en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra calificación del juez encargado del Registro Civil de San Javier (Murcia).

HECHOS

I

Mediante comunicación telemática dirigida al Registro Civil de San Javier don A. E. C y la Sra. E. L. P-T. solicitan la inscripción dentro de plazo legal del nacimiento de su hijo, acaecido el..... de 2016 en el hospital clínico universitario V. de la A. de M., con el nombre de «Texas» acompañando, como ficheros adjuntos, certificado médico de nacimiento, pasaporte británico y certificado de registro en España como ciudadana de la Unión Europea de la madre, DNI del padre y formulario de declaración de nacimiento.

II

El 17 de mayo de 2016 se notifica al promotor por la misma vía que el expediente no ha podido completarse porque el nombre elegido puede inducir a error en cuanto al sexo y que, para terminar la tramitación, deberá acudir al registro civil al que dirigió la solicitud; en comparecencia conjunta de fecha 23 de mayo de 2016 los progenitores manifiestan que no entienden que Texas induzca a error, ya que en España hay nombres como Trinidad, Guadalupe, Mar o Rosario que se pueden imponer indistintamente a varones y a mujeres, y el 7 de junio de 2016 se recibe en el registro un fax del Consulado General Británico en Madrid

informando de que en el Reino Unido no existe ninguna legislación que impida el uso del nombre de Texas.

III

El ministerio fiscal se opuso al nombre elegido, habida cuenta de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil prohíbe los que hagan confusa la identificación de la persona o induzcan a error en cuanto al sexo, y el 13 de junio de 2016 el juez encargado dictó auto acordando denegar dicho nombre, porque hace confusa la identificación personal del nacido.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio, a los progenitores, el padre interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que siguen considerando adecuado el nombre, especialmente la madre, porque en ámbito anglosajón es utilizado sin problemas y que de un análisis del entorno internacional se puede deducir que es usado casi en exclusividad para nominar a menores del género masculino y aportando resoluciones de este centro directivo de 24-4.^a de marzo de 2001 declarando admisible Trinidad para varón y de 13-61.^a de febrero de 2015, declarando admisible Noah para mujer.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso, y el juez encargado dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 193 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 16-1.^a de marzo de 2004, 20-12.^a y 28-3.^a de noviembre de 2008, 23-2.^a de julio de 2009, 20-9.^a de abril, 1-1.^a y 20-2.^a de septiembre y 17-7.^a y 30-5.^a de noviembre de 2010, 7-61.^a de octubre de 2013, 21-18.^a de abril y 24-58.^a de junio de 2014 y 31-21.^a de julio y 9-51.^a de octubre de 2015.

II. Los progenitores solicitan inscribir a su hijo, nacido en 016, con el nombre de «Texas» que el juez encargado declara inadmisibles, porque hace confusa la identificación de la persona, mediante auto de 13 de junio de 2016 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el padre.

III. Ciertamente los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre propio que estimen oportuno y el elegido no puede ser rechazado más que cuando claramente incurra en alguna de las escasísimas prohi-

biciones subsistentes en la redacción de los artículos 54 LRC y 192 RRC actualmente vigente. En este caso, ni con la interpretación restrictiva que de dichos preceptos se impone resulta admisible el nombre propuesto porque, siendo usualmente apellidos en nuestro entorno social y cultural los topónimos –Asturias, Barcelona, Cáceres, Lugo, Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Zaragoza...–, «Texas» no atiende como nombre a la primordial función que en nuestro ordenamiento desempeñan el nombre y los apellidos y, en consecuencia, ha de considerarse incurso en causa de prohibición del artículo 54 LRC por hacer confusa la identificación de la persona.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en San Javier (Murcia).

Resolución de 7 de abril de 2017 (26.ª)

Imposición nombre propio. Prohibiciones.–*Es admisible para mujer «Ares», nombre de advocación mariana no incurso en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por el solo hecho de que tenga un homógrafo que designa a varón.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación del juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

El 6 de octubre de 2015 don J-J. G. A. y doña M-F. P. S. presentaron en el Registro Civil de Sevilla cuestionario para la inscripción del nacimiento de su hija, acaecido en 2015 en el hospital V. M. de dicha población según se acredita con parte facultativo del centro sanitario, con el nombre de «Ares».

II

Por el juez encargado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, se inadmite el nombre propuesto por susceptible de confusión con el nombre de

varón -Ares, el dios griego de la guerra- y se da a los padres tres días para que propongan otro con apercibimiento de que, transcurridos tres días desde la notificación sin haberlo hecho, conforme al artículo 193 del Reglamento del Registro Civil se impondrá por el encargado uno de uso corriente, y en el mismo acto solicitan que se practique la inscripción con el nombre de María Ares y recurren la no aceptación del inicialmente propuesto, alegando que es un nombre catalán reservado en el santoral para mujeres y que su onomástica es el 15 de agosto.

III

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada, y el juez encargado informó que las alegaciones efectuadas no desvirtúan el acuerdo combatido, que ha de mantenerse en todos sus términos, y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192 y 193 del Reglamento de Registro Civil (RRC), la circular de 2 de julio de 1980 y las resoluciones, entre otras, de 5-4.^a de noviembre de 2003, 14-1.^a de febrero y 22-3.^a de abril de 2004, 2 de febrero de 2008, 3-2.^a de diciembre de 2009, 7-42.^a de octubre de 2013, 13-12.^a y 20-1.^a de marzo, 31-232.^a de julio y 29-34.^a de diciembre de 2014 y 13-61.^a de febrero y 2-46.^a de octubre de 2015.

II. Los progenitores solicitan inscribir a su hija, nacida el de 2015, con el nombre de «Ares» que el juez encargado, estimando que es susceptible de confusión con el nombre de varón de igual grafía, no admite mediante acuerdo de 6 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, en el que los padres alegan que es nombre catalán de mujer.

III. Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre que estimen oportuno, no pudiendo ser rechazado el elegido más que cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 54 LRC y 192 RRC, que han de ser restrictivamente interpretadas.

IV. Así, nombres que inducen a error en cuanto al sexo son, conforme a la doctrina de la dirección general, los que designan inequívocamente al opuesto al del nacido –Juan para mujer o Juana para varón– y, siendo cierto que «Ares», por evocar al dios griego de la guerra, se asocia en principio a varón, no es menos cierta la alegación de los promotores de que también es nombre catalán de mujer –de hecho consta inscrito a más niñas que niños– y, por tanto, ha de concluirse que no incurre claramente en ninguna de las causas de prohibición subsistentes en el artículo 54 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.
- 2.º Disponer que se inscriba a la menor con el nombre de «Ares».

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla

Resolución de 16 de junio de 2017 (20.ª)

Imposición nombre propio. Prohibiciones.—*No es admisible el nombre «Adaluz» que, en esa forma, supone una desviación de las reglas registrales y de la ortografía de las lenguas españolas.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra calificación de la juez encargada del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

El 30 de noviembre de 2015 don V-M. R. C. presentó en el Registro Civil de Madrid cuestionario para la inscripción de su hija, nacida el de 2015 en el hospital N. de dicha población según se acredita con parte facultativo del centro sanitario, con el nombre de «Adaluz» e, inscrita en la forma «Ada-Luz», interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la funcionaria encargada le indicó que no era posible inscribirla con el nombre elegido, que la denegación no es encuadrable en ninguno de los supuestos contemplados por la ley y que asimismo invoca el principio de igualdad consagrado en la constitución española, toda vez que han sido aceptados e inscritos nombres como Rosangela, Marisabel, Mariangela y Maricarmen, entre otros, y aportando documentación sanitaria anterior a la inscripción en la que los nombres de la menor figuran en la forma pretendida.

II

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que el nombre solicitado por los padres para su hija no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 54 LRC y 192 RRC, se adhirió al recurso y la juez encargada informó que

procede estimar la apelación sin reserva alguna y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 16-1.^a de marzo de 2004, 20-12.^a y 28-3.^a de noviembre de 2008, 23-2.^a de julio de 2009, 20-9.^a de abril, 1-1.^a y 20-2.^a de septiembre y 17-7.^a y 30-5.^a de noviembre de 2010, 7-61.^a de octubre de 2013, 21-18.^a de abril y 24-58.^a de junio de 2014, 31-20.^a de julio, 25-38.^a de septiembre y 9-46.^a de octubre de 2015 y 8-21.^a de abril de 2016.

II. El progenitor solicita para su hija, nacida el....., el nombre de «Adaluz» e, inscrita como Ada-Luz, impugna la calificación efectuada en recurso al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. Ciertamente los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre propio que estimen oportuno y el elegido no puede ser rechazado más que cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 54 LRC y 192 RRC, que han de ser restrictivamente interpretadas. En este caso no se han objetado los nombres designados por los progenitores en detrimento de su libertad de elección sino simplemente supuesto que consten en el registro civil en la forma reglamentariamente prevista. Elegidos los nombres de Ada y Luz, han de inscribirse en la forma Ada-Luz –el art. 192 RRC establece, como regla de práctica registral, que cuando se impongan dos nombres propios simples, estos se unirán por un guion y ambos se escribirán con mayúscula inicial– y por tanto, no cabe consignarlos en la forma «Adaluz» pretendida, que supone una desviación de las reglas registrales y de la ortografía de las lenguas españolas. La anterior conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas en el escrito de recurso ya que todos los nombres aceptados e inscritos que el promotor enumera son contractos, como tales resultan de la unión de dos nombres con elisión al menos de una vocal y en los que son objeto del presente recurso no se produce ese fenómeno gramatical.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 16 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 21 de julio de 2017 (23.ª)

Competencia-cambio nombre propio.—*No es admisible Christian como nombre apto para mujer porque es inequívocamente masculino e induciría a error en cuanto al sexo de la inscrita.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado en el Registro Civil de Madrid el 1 de septiembre de 2015, Don J. V. L. y D.ª N. A. Á., con domicilio en M., solicitaron la inscripción de nacimiento de sus dos hijas adoptivas menores de edad, M. y Christian, nacidas en Etiopía. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificado de empadronamiento; certificado de idoneidad para la adopción de la Comunidad de Madrid; pasaportes y partidas de nacimiento etíopes de M., nacida de 2008, y de Christian, nacida el de 2012, J. V.; contrato de adopción de 15 de octubre de 2014; sentencia de 28 de julio de 2015 de un órgano judicial de la República Federal Democrática de Etiopía confirmando la adopción de las menores; DNI y certificados literales de nacimiento y de matrimonio de los promotores.

II

Ratificados los solicitantes, la encargada del registro dictó providencia el 4 de septiembre de 2015 declarando que no es admisible el nombre de Christian para una de las menores porque es un nombre de varón que induciría a error en cuanto al sexo de la inscrita, por lo que se requirió a los adoptantes la elección de otro.

III

Los promotores manifestaron que su hija se identifica con el nombre de Christian desde que nació y que no sería bueno para ella cambiárselo. Añadían que en muchos países europeos Christian es un nombre aceptado tanto para hombre como para mujer y que su pronunciación en este caso concreto es con acentuación fonética en la «a», lo que le confiere carácter femenino.

IV

Tras un nuevo requerimiento de la encargada para que designaran un nombre alternativo, los promotores insistieron en que deseaban que su hija conservara el nombre de Christian.

V

La encargada del registro dictó resolución de calificación el 26 de octubre de 2015 acordando la práctica de las inscripciones de nacimiento y adopción y, posteriormente, su cancelación y extensión de otras nuevas donde constaran únicamente los datos derivados de la adopción, recibiendo las adoptadas los nombres de M. y Christine V. A

VI

Practicadas las inscripciones definitivas, los progenitores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la imposición del nombre de Christine alegando que la identidad es uno de los derechos fundamentales del niño, que su hija no entendería por qué le han cambiado el nombre con el que se identifica desde que nació y que ambas hermanas podrían sentirse rechazadas al pensar que sus orígenes no son aceptados en su nuevo entorno. Añadían que no consideran que el nombre pretendido incurra en ninguna de las prohibiciones legales porque tanto en España como en Etiopía se utiliza indistintamente para hombre y para mujer. Con el escrito de recurso aportaban un informe de la entidad colaboradora para la adopción recomendando el mantenimiento de los nombres originales de los menores adoptados, un documento extraído de Facebook con una relación de mujeres que se llaman Christiane y un hombre llamado Christian y un certificado de la sección consular de la Embajada de España en Addis Abeba para hacer constar que, según sus averiguaciones, el nombre de Christian es utilizado en Etiopía de forma indistinta para varón y para mujer.

VII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Madrid ratificó la calificación realizada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 6-1.^a de febrero y 12-2.^a de mayo de 2006; 10-2.^a de octubre de 2007; 4-1.^a de enero, 10-6.^a y 30-3.^a de junio de 2008; 14-128.^a de octubre de 2014; 4-28.^a de diciembre y 9-51.^a de octubre de 2015 y 23-5.^a de diciembre de 2016.

II. Los promotores solicitaron practicar la inscripción de nacimiento en España de sus dos hijas adoptadas en Etiopía conservando los nombres que tenían atribuidos en su país de origen. La encargada del registro consideró inadmisibles los nombres de una de ellas, Christian, por considerar que incurre en una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, ya que se trata de un nombre inequívocamente masculino que, en consecuencia, induciría a error en cuanto al sexo de la inscrita. No habiendo designado los proge-

nitores, aun habiendo sido requeridos para ello, un nombre alternativo, la inscripción se practicó atribuyendo a la menor, por decisión de la encargada, el nombre de Christine, lo que constituye el objeto del recurso.

III. Dentro de los escasos límites que se establecen en materia de imposición de nombres, se encuentra la prohibición de aquellos que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo del inscrito (art. 54 LRC). Las prohibiciones en este ámbito han de ser interpretadas siempre de forma restrictiva, de manera que esta limitación, como ha señalado reiteradamente este centro, ha de ceñirse exclusivamente a aquellos casos en los que el nombre elegido remita inequívocamente al sexo opuesto al del nacido. Pues bien, eso es, precisamente, lo que aquí sucede, por más que los progenitores aleguen que el nombre pretendido es de uso indistinto para hombre y mujer en Etiopía. Debe tenerse en cuenta que el entorno social en el que, presumiblemente, se desarrollará la vida de la inscrita será España, donde Christian es nombre inequívocamente masculino, sin que conste por el momento atribuido a ninguna mujer de acuerdo con los datos ofrecidos por las bases del Instituto Nacional de Estadística, ni siquiera entre los extranjeros nacidos en España. No ocurre lo mismo con Christiane, que, en efecto, tal como se alega en el recurso, sí es nombre de mujer, pero los interesados insistieron en mantener la forma masculina, por lo que la encargada, cumpliendo lo previsto en el artículo 193 RRC, impuso a la nacida el nombre de Christine.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación realizada.

Madrid, 21 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (135.^a)

Imposición nombre propio. Prohibiciones.—*Es admisible para varón «Elur», nombre apto para designar a personas de uno y otro sexo y, por tanto, no claramente incurso en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Araba).

HECHOS

I

El 6 de agosto de 2015 Don I. P. M. y Doña E. G. S. O. presentaron en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz cuestionario para la inscripción de su hijo, nacido elde 2015 en el hospital T. de dicha población, con el nombre de «Elur», la juez encargada, estimando que dicho nombre resulta inadmisibile porque induce a error en cuanto al sexo, dictó providencia acordando requerir a los padres para que designen otro con apercibimiento de que, transcurridos tres días desde la notificación sin haberlo hecho, se impondrá por la encargada (artículo 193 del Reglamento del Registro Civil) y, visto el acuerdo calificador, en comparecencia de la misma fecha los padres manifiestan que, aunque en Euskaltzaindia «Elur» consta como nombre de niña, saben que en Gipuzkoa hay muchos niños varones así llamados y solicitan que se inscriba a su hijo con el nombre de «Elur».

II

El 24 de agosto de 2015 los progenitores presentan en el registro escrito en el que, alegando que, aunque el nombre por ellos elegido no es muy común, en España hay 35 personas de sexo masculino así llamadas, que en euskera no existe diferenciación de géneros y, por tanto, «Elur» puede ser tanto masculino como femenino y que no puede perjudicar al menor el nombre elegido por sus padres desde el afecto y el respeto, solicitan que se acepte el nombre propuesto aportando información sobre el nombre «Elur» obtenida en internet y tres documentos en los que el menor figura con dicho nombre.

III

El ministerio fiscal informó que, a la vista de la documentación aportada, señaladamente la omisión del correspondiente certificado de Euskaltzaindia, considera que el nombre de Elur puede inducir a error sobre el sexo del menor y el 5 de noviembre de 2015 la juez encargada, razonando que en este momento y lugar Elur es nombre de niña y, desde el más absoluto respeto a la elección de los padres, no puede ser aceptado porque contraviene lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil y lo manifestado por la Academia de la Lengua Vasca, dictó auto disponiendo no autorizar la inscripción del nombre solicitado.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando las alegaciones ya formuladas en el escrito dirigido al registro.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que procede la ratificación del auto recurrido por ser ajustado a derecho, y la juez encargada solicitó que se mantenga la resolución apelada ya que, tal como ha señalado Euskaltzaindia, el nombre elegido por los progenitores es de niña y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192 y 193 del Reglamento de Registro Civil (RRC), la circular de 2 de julio de 1980 y las resoluciones, entre otras, de 5-4.^a de noviembre de 2003, 14-1.^a de febrero y 22-3.^a de abril de 2004, 2 de febrero de 2008, 3-2.^a de diciembre de 2009, 7-42.^a de octubre de 2013, 13-12.^a y 20-101.^a de marzo, 31-232.^a de julio y 29-34.^a de diciembre de 2014 y 13-61.^a de febrero y 2-46.^a de octubre de 2015.

II. Los progenitores solicitan inscribir a su hijo, nacido el de 2015, con el nombre de «Elur» y la juez encargada, razonando que en este momento y lugar el nombre es de niña y, por tanto, contraviene lo dispuesto en el artículo 54 LRC y lo manifestado por la Academia de la Lengua Vasca, dispone no autorizarlo mediante auto de 5 de noviembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre que estimen oportuno, no pudiendo ser rechazado el elegido más que cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 54 LRC y 192 RRC, que han de ser restrictivamente interpretadas.

IV. Así, nombres que inducen a error en cuanto al sexo son, conforme a la doctrina de la dirección general, los que designan inequívocamente al opuesto al del nacido –Juan para mujer o Juana para varón–, aunque la denegación se fundamenta en que «Elur» es considerado nombre femenino por la Real Academia de la Lengua Vasca/ Euskaltzaindia, tal circunstancia no consta en las actuaciones, los solicitantes acreditan que es ostentado en España por decenas de varones y, por tanto, ha de concluirse que no incurre claramente en ninguna de las causas de prohibición subsistentes en el artículo 54 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
- 2.º Disponer que se inscriba al menor con el nombre de «Elur».

Madrid, 1 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Vitoria-Gasteiz (Araba).

2.1.2 NOMBRE PROPIO DEL EXTRANJERO NATURALIZADO ESPAÑOL

(No hay resoluciones para este apartado)

2.2 Cambio de nombre

2.2.1 CAMBIO DE NOMBRE. PRUEBA DEL USO HABITUAL

Resolución de 16 de junio de 2017 (21.^a)

Cambio de nombre. Prueba del uso habitual.—*Una vez acreditado el uso habitual del nombre solicitado, hay justa causa para autorizar el cambio de M.J. por S.*

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Navacarnero (Madrid).

HECHOS

I

Mediante providencia de 28 de marzo de 2017, el encargado del Registro Civil de Navacarnero acordaba la formación de expediente para reconstruir el de cambio de nombre iniciado en 2012 por D.^a M.J. P. M., parte de cuya documentación había sido extraviada. De las actuaciones practicadas a partir de ese momento resultan los hechos que se relacionan a continuación.

II

En escrito presentado el 25 de abril de 2012 en el Registro Civil de Navacarnero, D.^a M.J. P. M., mayor de edad y con domicilio actual en E. Á. (Madrid), solicitaba el cambio de su nombre por S. que es este el que siempre ha utilizado y por el que es conocida en su entorno personal, laboral y social. No consta la documentación aportada en ese momento.

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 4 de septiembre de 2012 denegando el cambio solicitado por no apreciar la concurrencia de justa causa ni considerar suficientemente acreditado el uso habitual del nombre pretendido.

IV

Notificada la resolución (no consta en qué fecha), la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, si bien fue inscrita con el nombre de M.J., ni siquiera su familia la ha llamado así nunca, siendo conocida en todos los ámbitos como S. Con el escrito de recurso aportaba la siguiente documentación: declaraciones de sus padres, su pareja, dos amigas y una compañera de trabajo confirmando que siempre han llamado S. a la recurrente, escrito de los responsables del departamento de comunicación de la empresa en la que la interesada trabaja confirmando que todo el personal se dirige a la recurrente por el nombre de S. también incluido en su dirección electrónica laboral, correos electrónicos de la empresa, perfil de Facebook, invitación y vídeo de boda y correspondencia personal y comercial.

V

Durante el procedimiento de reconstrucción del expediente, la interesada incorporó a las actuaciones nuevas declaraciones de sus padres, su marido, cinco amigos y varios compañeros de trabajo, ficha electrónica de datos del colegio de su hijo, un diploma de ofimática y correspondencia personal.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, no se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil de Navalcarnero remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209, 210 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 23-4.^a de mayo y 6-5.^a de noviembre de 2008; 18-4.^a de junio de 2010, 30-47.^a de enero de 2014 y 29-33.^a de enero de 2016.

II. Pretende la promotora el cambio de su nombre actual, M.J., por S., alegando que es este último el que utiliza habitualmente desde siempre. El encargado del registro denegó la solicitud por considerar que no concurría justa causa y que no se había probado suficientemente el uso alegado. Contra esta resolución se presentó el recurso analizado.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder

lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

IV. En este caso ha sido necesario reconstruir el expediente por extravío de la documentación en el registro y no consta qué pruebas se presentaron con la solicitud inicial, de manera que no es posible comprobar si la decisión del encargado en su momento fue o no la adecuada. No obstante, en la fase de recurso la promotora sí aporta justificación suficiente que permite apreciar la existencia de una situación de hecho y consolidada en el tiempo de utilización del nombre solicitado, que, por otra parte, no incurre en ninguna de las prohibiciones legales.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre de la interesada por S.

Madrid, 16 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Navalcarnero (Madrid).

2.2.2 CAMBIO DE NOMBRE CON CAUSA JUSTA

Resolución de 27 de enero de 2017 (17.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.–*No hay justa causa para cambiar «Cristian» por «Christian».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria en fecha 24 de febrero de 2015 don Cristian G. R., nacido el 25 de octubre de 1985 en L. P. G. C. y domiciliado en dicha población, solicita la incoación de expediente registral de cambio de nombre exponiendo que el inscrito está en evidente discordancia con el usado habitualmente en todos los actos de su vida social y privada, «Christian», y que ello le ocasiona graves perturbaciones e inconvenientes y acompañando copia simple de DNI, certificación

literal de inscripción de nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales y copia simple de diversos documentos en los que el nombre figura en la forma interesada.

II

En el mismo día, 24 de febrero de 2015, el promotor se ratificó en el contenido del escrito presentado, se tuvo por promovido el oportuno expediente gubernativo y comparecieron como testigos la pareja del solicitante y una hermana de esta, que manifestaron que lo conocen desde hace unos siete años la primera y cinco la segunda, que siempre ha escrito su nombre con hache intercalada y que así figura desde niño en todos los documentos.

III

El ministerio fiscal informó que considera que no cabe acceder al cambio solicitado, por ser mínimo, y el 29 de abril de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo denegarlo, dada su intrascendencia.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que para él el cambio no es intrascendente porque desde su nacimiento todos sus documentos reflejan su nombre con hache intercalada y la grafía distinta con la que consta inscrito le ocasiona problemas en la vida cotidiana.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, ratificándose en su informe anterior, interesó que no se acceda al cambio pretendido y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995; 10-1.^a y 2.^a de septiembre, 10-2.^a de octubre y 14-1.^a de diciembre de 1996; 4-1.^a y 21-2.^a de enero, 1-1.^a y 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 15-3.^a y 29-6.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 15-1.^a y 18-2.^a de febrero de 1999; 26-3.^a de abril, 18-3.^a de julio, 7-7.^a de septiembre y 18-1.^a y 3.^a de noviembre de 2000; 19-2.^a de enero y 19-5.^a de junio de 2001, 25-2.^a de marzo de 2002; 22-1.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de

2003; 3 de enero, 17-4.^a de febrero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 4-3.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 26-5.^a de enero, 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 11-5.^a de junio, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 15-3.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 3-44.^a y 9-14.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 4-24.^a de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la intercalación a efectos meramente gráficos de una hache, muda en las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar «Cristian» por «Christian», tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de la dirección general que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho y, por otra parte, las dos variantes del nombre constan inscritas en el registro civil a decenas de miles de españoles y por tanto, no cabe apreciar que el mero uso en la modalidad no inscrita, sin concurrencia de otros factores, constituya justa causa para autorizar el cambio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 27 de enero de 2017.—Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Resolución de 17 de febrero de 2017 (34.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Jone», nombre correctamente inscrito conforme a las reglas ortográficas de la lengua española correspondiente, por «Ione».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Miranda de Ebro (Burgos).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Miranda de Ebro en fecha 24 de octubre de 2014 doña Jone L. S., nacida el 5 de febrero de 1989 en M. de E. y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por «Ione» exponiendo que este último es el que ha usado y sigue usando en todos los actos de su vida y acompañando copia simple de partida de bautismo y de otros documentos en los que figura con el nombre pretendido.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado, compareció como testigo un amigo, que manifestó que le consta que la solicitante usa de forma habitual el nombre interesado tanto en su vida privada como en sus relaciones con entidades oficiales y en su entorno laboral, el ministerio fiscal informó que, en base a la doctrina de la dirección general sobre las modificaciones mínimas, considera que no concurre justa causa y el 10 de diciembre de 2014 la juez encargada dictó auto disponiendo no autorizar el cambio de nombre.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que existe un error ortográfico en el nombre inscrito, que la consonante jota y la vocal i no tienen en español la misma pronunciación, que a causa del sonido jota muchas veces piensan que es un chico llamado Jon o Jonás y que el artículo 54 LRC prohíbe los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa su identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo y aportando, como prueba adicional de uso, inscripción actualizada en la Oficina del Censo Electoral.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a su informe anterior, interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada y

la juez encargada informó, que siendo Jone el nombre en la lengua española correspondiente, la petición de cambio por «Ione» es «caprichosa» y carente de fundamento legal y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 8-6.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 29-5.^a de marzo de 1999, 18-3.^a de julio de 2000, 19-5.^a de junio de 2001, 7-2.^a de febrero y 20-1.^a de marzo de 2002, 30-3.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 13-1.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-3.^a de junio, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 18-4.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 13-2.^a de mayo y 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero y 13-3.^a de mayo de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-17.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a de octubre de 2014 y 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 3-44.^a y 9-14.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la sustitución en un nombre vasco correctamente escrito conforme a las reglas ortográficas de esa lengua de la consonante inicial por la vocal de igual fonética en euskera, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende

cambiar «Jone» por «Ione», no cabe invocar error del registro porque, elegido un nombre, ha de inscribirse conforme a las normas gramaticales de la lengua española correspondiente (*cf.* art. 192 RRC) y ha de estimarse inconsistente la alegación de que un nombre que ostentan miles de mujeres y ningún varón induce a error en cuanto al sexo máxime teniendo en cuenta que entre los centenares de personas que llevan el nombre con la grafía pretendida hay un considerablemente número de varones.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Miranda de Ebro (Burgos).

Resolución de 24 de febrero de 2017 (18.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar el nombre de grafía correcta «Raquel» por «Racquel».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid en fecha 24 de marzo de 2014 doña Raquel B. L., nacida el 25 de diciembre de 1995 en N., L. U. (Filipinas) y domiciliada en M., solicita la incoación de expediente de cambio del nombre inscrito por «Racquel» exponiendo que este último es el usado habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Madrid el 9 de octubre de 2013 con marginal de opción por la nacionalidad española, asistida de su representante legal, en fecha 25 de septiembre de 2013; volante individual de inscripción en el padrón de M. y copia simple de DNI y de documentación académica filipina en la que consta identificada con el nombre que solicita.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, se acordó la incoación de expediente gubernativo de cambio de nombre, el ministerio fiscal informó que, teniendo en cuenta que la grafía correcta es la inscrita, se opone al cambio interesado y el 28 de abril de 2014 el J. E. dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada, por no ser admisible el nombre en la forma solicitada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 28 de agosto de 2015, a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, salvo el DNI y el pasaporte español, tiene todos los documentos con «c» y no quiere problemas cuando tenga que volver a su país.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando su informe anterior, interesó la confirmación de la resolución impugnada, y el juez encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 15-3.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 20-2.^a de octubre de 1999, 18-3.^a de julio y 7-6.^a de septiembre de 2000, 19-5.^a de junio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 4-3.^a y 13-2.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 15-3.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo, 16-5.^a de septiembre y 27-3.^a de octubre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a

de abril, 9-40.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a de octubre de 2014 y 30-37.^a de enero, 29-15.^a de mayo, 5-40.^a de junio, 3-44.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 25-36.^o de septiembre y 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la intercalación de una «c» que, en esa posición, no altera la fonética del nombre, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Raquel por «Racquel», y en el que, según consta del asiento de nacimiento de la interesada, se da adicionalmente la circunstancia de que se intenta, por la vía indirecta de un expediente de cambio, que se mantenga el nombre con el que la solicitante figura en el registro filipino, reemplazado en el momento de la inscripción por el que se atiene a las reglas gramaticales (*cf.* 213, regla 2.^a RRC), habida cuenta de que la corrección ortográfica, expresamente contemplada en el artículo 192 RRC, informa la legislación española en la materia y esta integra el nuevo estatuto personal de la nacionalizada (*cf.* art. 9.1 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado/a del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (40.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Elia-Raysa» por «Helia-Raysa».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Segovia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Segovia en fecha 19 de noviembre de 2014 doña Elia-Raysa O. V., nacida el 29 de octubre de 1995 en S. y domiciliada en P. E. (Segovia), promueve expediente de cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente, «Helia-Raysa», acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, certificado individual de empadronamiento en P. E. y alguna documental, fundamentalmente académica, en la que consta identificada con el nombre que solicita.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado, el ministerio fiscal informó que, no habiendo justa causa para modificación de tan escasa entidad, se opone a lo solicitado y el 8 de enero de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo denegar la pretensión.

III

En comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 10 de marzo de 2015 la resolución fue notificada a la promotora, que interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en su momento se cometió en el registro el error, del que ella no es responsable, de inscribir su nombre con la grafía que consta, que sus padres le enseñaron a escribirlo con hache y siempre lo ha utilizado en esa forma, derivada del griego, que sin hache es un nombre de tradición judía directamente relacionado con una religión que no profesa y que la petición no puede considerarse intrascendente ya que se trata de dos nombres diferentes y, por tanto, de dos identidades o personas distintas.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a su informe anterior, se opuso al recurso y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 15-3.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 20-2.^a de octubre de 1999, 18-3.^a de julio y 7-6.^a de septiembre de 2000, 19-5.^a de junio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de

enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 4-3.^a y 13-2.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 15-3.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo, 16-5.^a de septiembre y 27-3.^a de octubre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a de octubre de 2014 y 30-37.^a de enero, 29-15.^a de mayo, 5-40.^a de junio, 3-44.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 25-36.^o de septiembre y 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cfr.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente inscrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la anteposición a efectos meramente gráficos de una consonante, muda en las lenguas españolas, a un nombre ortográficamente correcto, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar «Elia-Raysa» por «Helia-Raysa» tal como expresan respecto a variaciones similares las resoluciones de la dirección general que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Segovia.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (41.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*Hay justa causa para cambiar «Rosa-Ana» por «Rosana» ya que ha de estimarse modificación sustancial la sustitución de dos nombres simples por otro que tiene asimismo sustantividad como nombre simple.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Parla (Madrid).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Parla en fecha 30 de enero de 2015 doña Rosa-Ana R. M., nacida el 4 de marzo de 1976 en M. y domiciliada en P., solicita la incoación de expediente para el cambio del nombre inscrito por «Rosana» exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional y acompañando volante individual de empadronamiento en P., certificación literal de inscripción de nacimiento y alguna documental en la que figura identificada con el nombre interesado.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, comparecieron como testigos sus padres, que manifestaron que siempre la han llamado «Rosana» y que este es el nombre con el que ella firma y se identifica, el ministerio fiscal informó que procede acceder al cambio solicitado y el 12 de mayo de 2015 la juez encargada, invocando la doctrina de la dirección general sobre las modificaciones mínimas e intrascendentes, dictó auto disponiendo no estimar la petición formulada, por no existir justa causa que la ampare.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia de fecha 29 de junio de 2015, a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en resolución de este centro directivo de 24-3.ª de marzo de 2001 se acuerda autorizar el cambio que ella intenta por considerarse que existe absoluta independencia entre el nombre inscrito y el solicitado y, por tanto, no se trata de la mera contracción de dos nombres y que ha probado el uso desde la infancia con documentación oficial, como el graduado escolar, y aportando la mencionada resolución de la dirección general.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando el informe emitido en su día, se adhirió al recurso y la juez encargada informó que considera que los motivos aducidos por la recurrente no desvirtúan los razonamientos jurídicos que sustentan la reso-

lución impugnada, ajustada a derecho y a la doctrina de la DGRN que en ella se cita, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil y 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 13 de diciembre de 1996, 24-1.^a de junio de 1997, 7-4.^a de julio y 2-5.^a de diciembre de 2000, 21-2.^a y 24-3.^a de marzo de 2001, 13-6.^a de junio de 2002, 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003; 22-3.^a de abril, 26-2.^a de octubre y 2-5.^a de noviembre de 2004; 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005, 7-4.^a y 10-2.^a de marzo, 13-5.^a y 18-1.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006; 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 25-7.^a de enero y 10-6.^a de junio de 2011, 17-59.^a de abril de 2012, 4-114.^a y 15-21.^a de noviembre de 2013, 27-16.^a de enero, 30-8.^a de abril, 12-26.^a de mayo y 21-91.^a de octubre de 2014 y 6-38.^a de noviembre y 30-13.^a de diciembre de 2015.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre inscrito, Rosa-Ana, por «Rosana», exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional, y la juez encargada, invocando la doctrina de la dirección general sobre las modificaciones mínimas e intrascendentes, dispone no estimar la petición formulada, por no existir justa causa que la ampare, mediante auto de 12 de mayo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la interesada y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (*cf.* arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (*cf.* 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar Rosa-Ana, por «Rosana». De la prueba testifical y documental practicada se ha estimado suficientemente acreditado el uso habitual por la interesada del nombre que solicita y aunque, en efecto, es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho,

tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida familiar y socialmente con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación gráfica de su nombre oficial, también lo es que la antedicha doctrina viene siendo exceptuada cuando, como en este caso, no se pretende la mera contracción de dos nombres sino su sustitución por otro nombre simple con sustantividad e independencia, incluso etimológica, de los dos inscritos y, por tanto, cabe apreciar que concurre justa causa para el cambio de nombre solicitado (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, Rosa-Ana, por «Rosana», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado reglamento.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (26.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Ester» por «Esther», variante gráfica de un nombre correctamente inscrito.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Gavà (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Gavà en fecha 16 de junio de 2015 doña Ester M. D., nacida el 10 de marzo de 1996 en G. y domiciliada en dicha población, solicita la incoación de expediente gubernativo de cambio del nombre inscrito por «Esther» exponiendo que por este último es conocida habitualmente desde hace años y que la disparidad entre uno y otro le ocasiona perjuicios y acompañando copia simple de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento, volante de empadronamiento en G. y copia

simple de documentos varios, fundamentalmente académicos y sanitarios, en los que figura con el nombre interesado.

II

En el mismo día, 16 de junio de 2015, la promotora ratificó la solicitud y, acordada la tramitación del oportuno expediente, comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la peticionaria con el nombre de «Esther» desde que hace más de dieciséis años estudiaban P3.

III

El ministerio fiscal informó que no se opone a la resolución del expediente de conformidad con lo interesado y el 18 de agosto de 2015 la juez encargada, considerando que, conforme a constante doctrina de la dirección general, no existe justa causa cuando la modificación es mínima o intrascendente, dictó auto disponiendo que no ha lugar al cambio de nombre pretendido.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su solicitud no es caprichosa sino tendente evitar posibles problemas en el futuro por tener documentos oficiales con uno y otro nombre.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, entendiendo que ha quedado suficientemente acreditado lo petitionado, se adhirió al recurso y el juez encargado, considerando que se ha probado el uso habitual, emitió informe favorable y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a y 21-3.^a de enero, 10-5.^a de febrero y 30-2.^a de mayo de 1997; 17-3.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a y 25-5.^a de octubre, 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de sep-

tiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010; 21-22.^a y 28-7.^a de junio y 13-42.^a de diciembre de 2013; y 10-6.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 9-14.^a y 31-233.^a de julio, 4-77.^a de septiembre y 1-30.^a de octubre de 2014 y 30-35.^a de enero, 17-60.^a de abril, 29-15.^a de mayo, 5-40.^a de junio, 3-40.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a, 16-31.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la intercalación a efectos meramente gráficos de una hache, muda en las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar «Ester» por «Esther», tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de la dirección general que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica puesto que, admitidas las dos variantes de un nombre que ostentan decenas de miles de españolas, el solo uso en la forma no inscrita, sin la concurrencia de otros factores, no permite apreciar la existencia de justa causa para el cambio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Gavà (Barcelona).

Resolución de 19 de mayo de 2017 (21.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Joritz» por «Ioritz».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Azpeitia (Gipuzkoa).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Azcoitia (Gipuzkoa) y recibido en el Azpeitia en fecha 21 de abril de 2015 Doña M. C. S. C. y Don A. U. A., mayores de edad y domiciliados en A., solicitan el cambio del nombre inscrito a su hijo menor de edad Joritz U. S., nacido en A. el de 2014, por «Ioritz».

II

Acordada la incoación del oportuno expediente y emitido por el ministerio fiscal el preceptivo informe, el 12 de mayo de 2015 el juez encargado, razonando que es de aplicación al caso la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre las modificaciones mínimas, ya que la pretendida ni tan siquiera implica alteración fonética, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre interesado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso planteado, y el juez encargado informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución dictada, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 8-6.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 29-5.^a de marzo de 1999, 18-3.^a de julio de 2000, 19-5.^a de junio de 2001, 7-2.^a de febrero y 20-1.^a de marzo de 2002, 30-3.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 13-1.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de

febrero, 2-5.^a de marzo, 7-3.^a de junio, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 18-4.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-3.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 13-2.^a de mayo y 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero y 13-3.^a de mayo de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-17.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a y 29-25.^a de octubre de 2014; 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 3-44.^a y 9-14.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015 y 5-36.^a de febrero de 2016.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la sustitución a efectos meramente gráficos de la consonante inicial de un nombre correctamente escrito conforme a las reglas ortográficas del euskera por la vocal de igual fonética en dicha lengua, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Joritz por «Ioritz», tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de la dirección general que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 19 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Azpeitia (Guipúzcoa).

Resolución de 30 de junio de 2017 (26.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Erica» por «Erika».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Coslada (Madrid).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Coslada en fecha 17 de julio de 2015 doña Erica H. V., nacida el 4 de octubre de 1988 en Madrid y domiciliada en C., solicita la incoación de expediente de cambio del nombre inscrito por «Erika» exponiendo que este último es el usado habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, copia simple de DNI y, con el nombre interesado, certificado de empadronamiento en Coslada y copia simple de otros documentos fechados de diciembre de 2012 en adelante.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado, el ministerio fiscal informó que no está justificado el cambio cuando el nombre que se desea sustituir sigue existiendo en el nuevo y el 26 de noviembre de 2015 la juez encargada, considerando que, conforme a reiterada doctrina de la dirección general, no existe justa causa para una variación gráfica apenas apreciable en la pronunciación, dictó auto disponiendo que no ha lugar a autorizar el cambio de nombre solicitado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el cambio es procedente ya que, por no coincidir el nombre que figura en el DNI con el usado habitualmente, ha tenido que solventar contrariedades y molestias y cuando saca billetes de tren y de avión tiene que utilizar el nombre inscrito.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a lo ya informado, se opuso al recurso y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 15-3.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero, 20-5.^a de octubre y 5-2.^a de noviembre de 1998, 18-2.^a de febrero y 20-2.^a de octubre de 1999, 1-1.^a de junio, 18-3.^a de julio y 7-6.^a de septiembre de 2000, 19-5.^a de junio de 2001, 13-2.^a y 20-3.^a de septiembre de 2002, 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 4-3.^a y 13-2.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 15-3.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo, 16-5.^a de septiembre y 27-3.^a de octubre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero de 2011; 18-2.^a y 4.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 13-13.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a de octubre de 2014; 30-37.^a de enero, 29-15.^a de mayo, 5-40.^a de junio, 3-44.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 25-36.^o de septiembre y 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a y 30-17.^a de diciembre de 2015 y 18-31.^a de marzo de 2016.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 LRC y 206, último párrafo, y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la sustitución, a efectos meramente gráficos, de una consonante por otra de igual fonética en un nombre correctamente inscrito conforme a las reglas ortográficas de las lenguas españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar Erica por «Erika», tal como expresan respecto a este nombre algunas de las resoluciones de la Dirección General que, entre otras análogas, se enumeran en el primero de los fundamentos de derecho.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Coslada (Madrid).

Resolución de 7 de julio de 2017 (6.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar Clara por Klara.*

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2015 en el Registro Civil de Sevilla, Doña Clara S. P., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su nombre por *Klara*, alegando que es este el que habitualmente utiliza. Aportaba la siguiente documentación: inscripción de nacimiento de la promotora, certificado de empadronamiento, trabajo y notas de apereamiento escolares, escrito de denuncia de lesiones sufridas en un accidente de circulación, decreto de designación como abogada, una factura, dos recibos, juramento ante el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, carta de remisión de carné universitario, un documento de compra y correspondencia personal.

II

Ratificada la promotora y previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 13 de enero de 2016 denegando el cambio propuesto por falta de justa causa, ya que se trata de una modificación mínima del nombre inscrito.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo la interesada en su petición alegando que el nombre en la forma pretendida es el que utiliza habitualmente desde la infancia y que el mantenimiento en el registro del nombre actual le está causando problemas en su identificación profesional como abogada.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Sevilla se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209, 210 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 22-2.^a de octubre de 1996, 21-2.^a de abril de 1998, 18-2.^a de febrero, 5-4.^a de junio, 10-1.^a, 2.^a y 3.^a de noviembre y 19-2.^a de diciembre de 2000; 19-1.^a de enero, 19-4.^a de septiembre y 7-9.^a de diciembre de 2001; 25-2.^a de enero, 25-2.^a de marzo y 17-5.^a de septiembre de 2002; 9-1.^a de enero, 17-3.^a de mayo, 17-3.^a y 22-1.^a de septiembre de 2003; 22-2.^a de abril, 18-2.^a de septiembre y 9-4.^a de noviembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de febrero y 10-2.^a de junio de 2005; 1-2.^o de febrero y 24-1.^o de octubre de 2006; 3-7.^a de julio, 1-4.^a, 11-5.^a y 18-4.^a de octubre, 20-3.^a de noviembre y 21-3.^a de diciembre de 2007; 23 y 27-4.^a de febrero, 23-7.^a de mayo, 3-6.^a y 16-5.^a de septiembre y 29-3.^a de diciembre de 2008; 11-3.^a de febrero de 2009; 18-5.^a de marzo, 9-1.^a de abril, 19-18.^a de noviembre y 10-18.^a de diciembre de 2010; 14-13.^a de enero, 4-13.^a de abril, 13-3.^a y 27-6.^a de mayo de 2011; 18-1.^a, 2.^a y 3.^a de febrero y 27-3.^a de junio de 2013; 10-6.^a de febrero, 28-8.^a de mayo, 9-12.^a de julio y 4-78.^a de septiembre de 2014; 17-50.^a de abril y 16-31.^a de octubre de 2015 y 23-3.^a de diciembre de 2016.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre que consta en su inscripción de nacimiento, Clara, por *Klara*, alegando que es este último el que utiliza de forma habitual. El encargado denegó la pretensión por considerar que no concurre justa causa para el cambio al tratarse de una modificación mínima de un nombre correctamente inscrito.

III. El encargado del registro civil tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.^o y 365 RRC). Por otra parte, uno de los requisitos exigidos para autorizar cualquier cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del encargado del registro, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210 del RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este centro directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente, de que llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con una pequeña variación de su nom-

bre oficial correctamente escrito. Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente, en el que se solicita el mínimo cambio de Clara por Klara, modificación que ni siquiera supone variación fonética del nombre actualmente inscrito.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (65.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «Leizuri» por «Leixuri», variante del mismo nombre.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Bilbao (Bizkaia).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Bilbao en fecha 13 de noviembre de 2015 Don J. U. U. y Doña I. C. R., mayores de edad y domiciliados en dicha población, promueven expediente de cambio del nombre inscrito a su hija menor de edad Leizuri U. C., nacida en B. el de 2005, por el usado habitualmente, «Leixuri», exponiendo que por este último se identifica en todos los órdenes de la vida y acompañando copia simple del DNI de los dos progenitores, volante de empadronamiento en B., de la menor, certificación literal de inscripción de nacimiento y, en prueba del uso alegado, copia simple de un carné deportivo y de otro documento escolar y certificado expedido por la Real Academia de la Lengua Vasca para constancia de que Leixuri es nombre de persona apto para designar mujer.

II

Ratificados los promotores en el escrito presentado, comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la menor desde su nacimiento y les consta que en su entorno

familiar, social y escolar utiliza habitualmente el nombre que para ella se insta, y la juez encargada dispuso librar oficio a Euskaltzaindia, a fin de que informe si el nombre de Leizuri es apto para designar mujer y si la grafía es correcta, con el resultado de que lo forman las palabras *lei*, «escarcha», y *zuri*, blanca», y que Leizuri y Leixuri son variantes del mismo nombre.

III

El ministerio fiscal informó desfavorablemente y el 18 de diciembre de 2015 la juez encargada, considerando que no hay justa causa para modificación que solo implica una mínima alteración gráfica, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el momento de la inscripción del nacimiento la funcionaria que los atendió rectificó por su cuenta el nombre por ellos elegido, que entienden que, además de variación gráfica, hay alteración fonética y sobre todo semántica y que la menor, que ya tiene diez años, no entiende que no se acceda a corregir su nombre.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se ratificó en su dictamen anterior, y la juez encargada informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución dictada, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 8-6.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 29-5.^a de marzo de 1999, 18-3.^a de julio de 2000, 19-5.^a de junio de 2001, 7-2.^a de febrero y 20-1.^a de marzo de 2002, 30-3.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 13-1.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-3.^a de junio, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 18-4.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007;

21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 13-2.^a de mayo y 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero y 13-3.^a de mayo de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-38.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-17.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a, 18-84.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a y 29-25.^a de octubre de 2014; 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 3-44.^a y 9-14.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015; y 1-49.^a de abril, 27-22.^a de mayo, 3-22.^a de junio y 22-32.^a de julio de 2016.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del registro civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la variación de una letra, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar «Leizuri» por «Leixuri». Aunque en la apelación se aduce que el nombre elegido por los padres para la nacida fue rectificado por la funcionaria actuante, ni se prueba tal alegación ni consta que se presentara en tiempo y forma el recurso contra la calificación del encargado, que es lo que en tal supuesto habría procedido y, siendo cuestiones distintas la imposición de nombre a un recién nacido y su cambio cuando ya es mención de identidad de la persona (art. 12 RRC), nada impide que el tratamiento jurídico sea diferenciado y que el cambio esté sujeto al cumplimiento de determinados requisitos que, en este caso, no concurren ya que, constandingo que el nombre tiene dos variantes, el solo uso en la forma no inscrita, sin la concurrencia de otros factores, no permite apreciar la existencia de justa causa para la modificación pretendida.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Bilbao (Vizcaya).

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (4.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*No hay justa causa para cambiar «William-George» por «William George» que, en esa forma, supone una desviación de las reglas registrales reglamentariamente establecidas.*

En las actuaciones sobre modificación de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra acuerdo calificador de la juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

El 13 de enero de 2016 Don J. V. R. y la Sra. K. M. B., mayores de edad y domiciliados en B., comparecen ante la juez encargada del registro civil de dicha población al objeto de solicitar que en la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad William-George V. B., nacido en B. el de 2015, se suprima el guion consignado entre los dos nombres exponiendo que en la onomástica anglosajona se trata de un nombre compuesto y que la forma consignada no es acorde con la legislación canadiense aplicable al inscrito por parte de madre y acompañando, copia simple del cuestionario de declaración de nacimiento cumplimentado en su momento por el padre, del menor, certificación literal de la inscripción de nacimiento y, a fin de acreditar el uso habitual del nombre sin guion, copia simple de tarjeta sanitaria, biografía en Wikipedia de dos personajes históricos, inglés uno y estadounidense otro, así llamados y página del Instituto Nacional de Estadística sobre frecuencia del nombre.

II

El 29 de enero de 2016 la juez encargada, razonando que William y George son dos nombres simples y que el artículo 192 del Reglamento del Registro Civil dispone que cuando se impongan dos nombres simples se unirán por un guion, acordó no acceder a eliminar el signo ortográfico.

III

Notificado el acuerdo de calificación a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la desestimación trae causa en una aplicación excesivamente mecánica y estricta de la normativa aplicable, que la juzgadora ha llegado a la infundada conclusión de que William y George son dos nombres simples y no pueden ser considerados uno compuesto, que si se mantiene el guion las autoridades canadienses considerarían que V. es *middle name* y B. apellido único y, por tanto, no sería posible tramitar la doble nacionalidad del menor y que, existiendo el precedente de su primer hijo, inscrito como E. P., sin guion intermedio, debe mantenerse el mismo criterio respecto al nombre de su hermano; y aportando, como prueba documental adicional, certificación literal de inscripción de nacimiento del hermano, copia simple de certificado cana-

diense de nacimiento de la madre, guía de auxiliares de conversación en Estados Unidos 2015-2016 editada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la que, en el capítulo referido al estado de K., se señala la conveniencia de rellenar los documentos oficiales con los apellidos sin acentos ni eñes y unidos por un guion y una guía para la traducción jurada de documentos de registro civil del inglés al español.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación por sus propios fundamentos del acuerdo de calificación apelado, y la juez encargada informó que considera que no existe base legal para atender la petición formulada por los recurrentes ni para considerar William George como un nombre compuesto y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1.^a de marzo de 1995, 11-2.^a de marzo y 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero, 17-1.^a y 30-2.^a de mayo y 8-6.^a de septiembre de 1997; 7-5.^a y 17-1.^a de febrero y 20-5.^a de octubre de 1998, 18-2.^a de febrero y 29-5.^a de marzo de 1999, 18-3.^a de julio de 2000, 19-5.^a de junio de 2001, 7-2.^a de febrero y 20-1.^a de marzo de 2002, 30-3.^a de septiembre y 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1.^a de abril, 18-2.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 13-1.^a de abril, 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2.^a de febrero, 2-5.^a de marzo, 7-3.^a de junio, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 2-2.^a de enero, 11-2.^a de mayo, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 7-1.^a, 18-4.^a y 25-5.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 22-6.^a de abril, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 19-5.^a de enero y 11-3.^a de febrero de 2009, 13-2.^a de mayo y 14-17.^a de diciembre de 2010, 20-3.^a de enero y 13-3.^a de mayo de 2011; 18-2.^a de febrero, 15-53.^a de abril, 21-22.^a, 27-4.^a y 28-7.^a de junio, 18-53.^a de julio y 11-149.^a y 20-65.^a de diciembre de 2013; 10-40.^a de enero, 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-17.^a y 20-98.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a, 18-84.^a y 24-113.^a de junio, 9-14.^a de julio y 1-30.^a y 29-25.^a de octubre de 2014; 10-4.^a y 8.^a de febrero, 13-13.^a de marzo, 21-19.^a de abril, 9-40.^a de junio, 3-44.^a y 9-14.^a de julio, 28-16.^a de agosto, 2-42.^a y 30-20.^a de octubre y 18-35.^a de diciembre de 2015 y 1-49.^a de abril, 27-22.^a de mayo, 3-22.^a de junio y 22-32.^a de julio de 2016.

II. Se pretende por los promotores que en la inscripción de nacimiento de su hijo William-George, nacido en B. el de 2015, se suprima el guion

consignado entre los nombres, exponiendo que en la onomástica anglosajona se trata de un nombre compuesto y que la forma inscrita no es acorde con la legislación canadiense aplicable al menor por parte de madre, y la juez encargada, razonando que son dos nombres simples y que el artículo 192 del Reglamento del Registro Civil dispone que cuando se impongan dos nombres simples se unan por un guion, acordó no acceder a eliminarlo mediante acuerdo de calificación de 29 de enero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Aunque los promotores aducen que en el momento de declarar el nacimiento solicitaron expresamente que el nombre propio de su hijo se inscribiera sin guion, ni se prueba tal alegación ni consta que se presentara en tiempo y forma el recurso contra la calificación del encargado, que es lo que en tal supuesto habría procedido. Sin embargo, unos meses después, invocando el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos, inician unas nuevas actuaciones de las que no resulta que el encargado objetara los nombres, William y George, designados por los progenitores en detrimento de su libertad de elección sino que simplemente dispuso que se inscriban en la forma William-George y, habida cuenta de que el artículo 192 RRC establece que cuando se impongan dos nombres simples se unirán por un guion, no cabe consignarlos en la forma «William George», que supone una desviación de las reglas por las que, en aras de la claridad, se rige la práctica registral. La anterior conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas en el escrito de recurso: socialmente no se percibe que William George sea un nombre compuesto sino dos simples, totalmente independientes el uno del otro, sobre no acreditarse que la supresión del guion sea condición *sine qua non* para poder tramitar la nacionalidad canadiense del nacido, lo que al respecto disponga la legislación del otro país del que al parecer es nacional no puede condicionar la forma en la que ha de practicarse la inscripción de un español en el registro civil español y el hecho de que en la inscripción del primer hijo de los recurrentes se omitiera el guion entre dos nombres simples no ha de imponer que en la del segundo se prescinda de él por inaplicación deliberada y consciente de una de las reglas que, sin afectar directamente a la inscripción, rigen el desenvolvimiento de la actividad registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo calificador apelado.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (17.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*Mediando adopción, hay justa causa para cambiar el nombre, «Fullo Mbye», de un menor por el usado habitualmente, «Folu».*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de El Prat de Llobregat (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de El Prat de Llobregat en fecha 23 de febrero de 2015 don J.-M. D. R. y doña C. S. G., mayores de edad y domiciliados en dicha población, promueven expediente de cambio del nombre inscrito a su hijo menor de edad Fullo Mbye D. S., nacido en E.P.L. el de 2011, por el usado habitualmente, «Folu», acompañando copia simple del DNI de ambos y, del menor, justificante individual de empadronamiento en E. P. L., certificación literal de inscripción de nacimiento practicada el 11 de febrero de 2015, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley del Registro Civil, por traslado interno de la asentada la víspera y copia simple de DNI y de alguna documental reciente en la que figura con el nombre que para él se interesa.

II

Ratificados los promotores en el contenido del escrito presentado, se acordó la formación del oportuno expediente gubernativo, el ministerio fiscal, entendiéndose que la documentación aportada no es suficiente para tener por acreditada la utilización continuada y habitual del nombre propuesto y que no concurre justa causa que avale la pertinencia del cambio de nombre de un menor de tan solo cuatro años, se opuso a lo solicitado y el 23 de marzo de 2015 la juez encargada, considerando que no existe justa causa en la pretensión, dictó auto disponiendo denegar el cambio del nombre del menor por el usado habitualmente.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, desde su llegada a España con tres meses de edad, al menor se le llama «Folu» en el ámbito familiar, de amistad y escolar y no se reconoce en el nombre inscrito y aportando como prueba justificante colectivo de empadronamiento en E. P. L. que expresa que el menor causó alta, procedente del extranjero, el 22 de diciembre de 2011.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, dando por reproducidos los argumentos expuestos en su anterior informe, por no concurrir ninguna nueva circunstancia que justifique su revisión, se opuso a la petición efectuada y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13 de diciembre de 1996, 24-1.^a de junio de 1997, 7-4.^a de julio y 2-5.^a de diciembre de 2000, 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003, 22-3.^a de abril, 26-2.^a de octubre y 2-5.^a de noviembre de 2004, 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005, 7-4.^a de marzo, 13-5.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006, 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 25-7.^a de enero y 10-6.^a de junio de 2011, 17-59.^a de abril de 2012, 28-32.^a de junio y 4-114.^a y 15-21.^a de noviembre de 2013; 27-16.^a de enero, 30-8.^a de abril, 12-26.^a de mayo y 21-91.^a de octubre de 2014 y 28-4.^a de agosto, 6-38.^a de noviembre y 30-13.^a de diciembre de 2015.

II. Solicitan los promotores el cambio del nombre, «Fullo Mbye», que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad por el usado habitualmente, «Folu», y la juez encargada, si bien considera que con la documentación aportada se ha acreditado suficientemente el uso alegado, dispone denegar el cambio, por apreciar que no existe justa causa en la pretensión, mediante auto de 23 de marzo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).

IV. Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar «Fullo Mbye» por «Folu». Ciertamente el régimen legal del nombre y de los apellidos está presidido por el principio de estabilidad, es materia sustraída de la autonomía de voluntad de los particulares y su cambio se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos pero, del mismo modo que los padres biológicos tienen amplia libertad para escoger para sus hijos el nombre que estimen conveniente, los padres adoptantes pueden elegir para sus hijos adoptivos nombre distinto del inscrito en el momento del nacimiento, en interés del menor y como medio para facilitar su integración en su nueva

familia y en su nuevo medio social. El expediente ahora examinado se inicia apenas diez días después de la inscripción de nacimiento subsiguiente a la adopción del menor, de tres años, los promotores fundamentan su solicitud en el uso habitual del nombre propuesto desde que con tres meses llegara a España y a la familia, del justificante colectivo de empadronamiento aportado en fase de recurso consta lo anterior y, a mayor abundamiento, el segundo de los nombres extranjeros que le fueron impuestos en su país natal, extraño a nuestra cultura y no unido al primero por un guion (art. 192 RRC), puede ser tomado por primer apellido y hacer confusa la identificación de la persona (*cf.* art. 54 LRC). Por todo ello cabe apreciar que existe justa causa para el cambio de nombre solicitado (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre, «Fullo Mbye», inscrito al menor por «Folu», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento del interesado y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar, en su caso, las comunicaciones previstas en el artículo 217 del Reglamento.

Madrid, 20 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de El Prat de Llobregat (Barcelona)

Resolución de 20 de octubre de 2017 (19.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*Hay justa causa para cambiar el nombre inscrito, «María-Luisa», por el usado habitualmente, «Marisa,» pues ha de estimarse modificación sustancial la sustitución de dos nombres simples por uno que actualmente tiene sustantividad propia.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Jerez de la Frontera en fecha 18 de noviembre de 2014 doña María-Luisa H. G., nacida el 18 de octubre de 1967 en H., L. (Bélgica) y domiciliada en Jerez de la Frontera, insta expediente de cambio del nombre inscrito por «Marisa» exponiendo que, aunque se lo tradujeron al castellano cuando se vino a España, es el que usa habitualmente y acompañando copia simple de DNI, constancia de empadronamiento en J. F., certificación literal de inscripción de nacimiento de Marisa H. G., practicada el 28 de mayo de 1986 en el Registro Civil Consular de Amberes (Bélgica), con inscripción marginal, de fecha 9 de octubre de 1990, de adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de 1990 y una segunda marginal de la misma fecha que, bajo el título «traducción de nombre propio», expresa que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley del Registro Civil y 192 del Reglamento, se adapta el nombre del inscrito a su equivalente en lengua castellana; y diversa documental en la que figura identificada con el nombre que solicita.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado, se acordó incoar el oportuno expediente, comparecieron como testigos dos amigos, que manifestaron que les consta que la peticionaria es conocida y utiliza a todos los efectos el nombre de «Marisa», el ministerio fiscal, invocando la doctrina de la DGRN sobre los cambios mínimos -enumera más de veinte resoluciones del año 2000, entre ellas dos sobre igual cambio en el mismo nombre-, se opuso a lo interesado por no concurrir justa causa, dado que «Marisa» no es más que un diminutivo o variante familiar y coloquial de «María Luisa» que no consta que haya alcanzado sustantividad, y el 13 de febrero de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo desestimar el cambio de nombre de la inscrita por el inicialmente consignado en el asiento de nacimiento.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tras la reforma introducida en la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, no hay razón que impida la autorización del nombre propuesto, que es el usado habitualmente.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a su anterior informe, impugnó el recurso y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil y 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 13 de diciembre de 1996, 24-1.^a de junio de 1997, 7-4.^a de julio y 2-5.^a de diciembre de 2000, 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003, 22-3.^a de abril, 26-2.^a de octubre y 2-5.^a de noviembre de 2004; 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005, 7-4.^a y 10-2.^a de marzo, 13-5.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006; 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 25-7.^a de enero y 10-6.^a de junio de 2011, 17-59.^a de abril de 2012, 4-114.^a y 15-21.^a de noviembre de 2013, 27-16.^a de enero, 30-8.^a de abril, 12-26.^a de mayo y 21-91.^a de octubre de 2014; 6-38.^a de noviembre y 30-13.^a de diciembre de 2015 y 22-30.^a de julio de 2016.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre inscrito, María-Luisa, por «Marisa», exponiendo que, aunque se lo tradujeron al castellano cuando se vino a España, es el que usa habitualmente, y la juez encargada, no apreciando justa causa para modificación de tan escasa entidad, con la que la inscrita trata de sustituir su nombre por el que inicialmente se consignó, dispone desestimar la petición mediante auto de 13 de febrero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar «María-Luisa» por «Marisa». En el expediente consta que la interesada, nacida en Bélgica en 1967, fue inscrita en el registro local con el nombre, Marisa, elegido por sus padres e inscrito en el asiento de nacimiento practicado en 1986 en el Registro Civil Consular de Amberes y que, como cuando en 1990 se inscribió marginalmente la nacionalidad española adquirida por residencia no estaban legalmente admitidos los diminutivos o variantes familiares que no hubieran alcanzado sustantividad, el nombre inscrito fue reemplazado de oficio por «Maria-Luisa». De la prueba testifical y documental practicada queda acreditado que en los veinticinco años transcurridos desde entonces la promotora ha continuado usando el nombre que desde su nacimiento la había identificado oficialmente y, eliminada la susodicha prohibición en la redacción dada al artículo 54 LRC por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y consistiendo la modificación interesada en la sustitución de dos nombres simples por otro que, con

independencia de su origen, tiene actualmente sustantividad, no cabe apreciar que se trate de una pequeña variación. Por todo ello ha de estimarse que concurre justa causa para el cambio de nombre solicitado (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, María-Luisa, por «Marisa», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del reglamento.

Madrid, 20 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (8.^a)

Cambio de nombre. Justa causa.—*Hay justa causa para cambiar «María-Soralla» por «María-Soraya», grafía correcta del segundo de los nombres inscritos.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Sevilla en fecha 22 de enero de 2016 doña María-Soralla A. C., nacida el 13 de octubre de 1969 en S. y domiciliada en dicha población, solicita que se tenga por promovido expediente de cambio de nombre por el usado habitualmente, «María-Soraya», exponiendo que este último es el que viene utilizando y por el que es conocida en todos los actos de su vida y que la dualidad existente le ocasiona graves perturbaciones e inconvenientes tanto en la esfera privada como en la pública y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, copia testimoniada de DNI y, con el nombre pretendido, copia testimoniada de libro de familia, de tarjeta

de la Seguridad Social y de permiso de conducción y certificación de inscripción en el padrón de S.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, el ministerio fiscal se opuso a lo interesado por estimar que, aunque exista habitualidad en la utilización del nombre solicitado, se trata de una modificación intrascendente y el 2 de febrero de 2016 el juez encargado dictó auto disponiendo que, al faltar justa causa, no ha lugar a estimar la pretensión de cambio de nombre por uso habitual.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la doctrina de este centro directivo viene siendo exceptuada cuando el nombre está incorrectamente escrito y que, se atienda o no su pretensión, sus semejantes seguirán consignando su nombre en la forma que solicita porque no hacerlo es como escribir Beatriz con uve, por ejemplo.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, dando por reproducido su informe anterior, se opuso al recurso e interesó confirmación de la resolución apelada, y el juez encargado, reafirmando en los argumentos de la resolución dictada, informó desfavorablemente la apelación y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003, 22-3.^a de abril, 26-2.^a de octubre y 2-5.^a de noviembre de 2004; 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005, 7-4.^a de marzo, 13-5.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006; 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 21-10.^a de febrero y 10-6.^a de junio de 2011, 17-59.^a de abril de 2012, 28-32.^a de junio y 11-105.^a de diciembre de 2013, 18-69.^a de junio de 2014, 28-76.^a de agosto y 9-48.^a de octubre de 2015 y 15-35.^a de abril de 2016.

II. Solicita la promotora que se autorice el cambio del nombre, «María-Soralla», que consta en su inscripción de nacimiento por «María-Soraya», exponiendo que este último es el que habitualmente viene usando y por el que es conocida en todos los actos de su vida y que la dualidad existente le oca-

siona graves perturbaciones e inconvenientes tanto en la esfera privada como en la pública, y el juez encargado, considerando que, aunque los documentos presentados serían suficientes para acreditar la habitualidad aducida, no concurre justa causa porque se trata de una modificación intrascendente, dispone que no ha lugar a estimar la pretensión mediante auto de 2 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (arts. 60 LRC y 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar «María-Soralla» por «María-Soraya». Siendo cierto que es doctrina constante de la dirección general que no concurre la justa causa requerida cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima e intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida familiar y socialmente con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación gráfica de su nombre oficial, también lo es que la mencionada doctrina viene siendo exceptuada cuando el nombre está incorrectamente escrito o cuando la forma solicitaba es ortográficamente más correcta que la inscrita. Tal circunstancia se da en este caso ya que no se pretende una de varias grafías posibles y tan notorio es que la consignada no se atiene a las reglas gramaticales que en el expediente queda acreditado que en documentos administrativos importantes ha sido sustituida por la correcta y esta consta ya en el registro civil como mención de identidad de la contrayente en inscripción de matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, María-Soralla, por «María-Soraya», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 RRC.

Madrid, 7 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (30.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*Una vez acreditado el uso habitual del nombre solicitado, hay justa causa para autorizar el cambio de Ricardo por Richard.*

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Balmaseda (Bizkaia).

HECHOS

I

Mediante comparecencia el 8 de septiembre de 2015 en el Juzgado de Paz de Zalla (Bizkaia), Don Ricardo C. E., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio del nombre que consta en su inscripción de nacimiento por *Richard*, alegando que es este el que utiliza habitualmente. Aportaba la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento del promotor en B. el 30 de julio de 1970, volante de empadronamiento, libro de familia, notificación sobre una póliza de seguro contratada, varias facturas fechadas en 2015, una nota de entrega y un parte de revisión de instalación de gas.

II

Las actuaciones se remitieron al Registro Civil de Balmaseda para su resolución, donde se ratificó el promotor y, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 3 de noviembre de 2015 denegando el cambio solicitado por falta de justa causa, al entender que se trataba de una modificación mínima e intrascendente del nombre actual, y por no considerar suficientemente acreditado el uso alegado.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando el interesado que cuando se interesó por los trámites para solicitar el cambio de nombre por el que utiliza habitualmente, entendió que únicamente debía presentar cuatro o cinco documentos donde apareciera el nombre que pretende oficializar pero que, a la vista de la resolución dictada, aporta la siguiente documentación complementaria: libro de escolaridad de 1977, expediente académico de octavo de EGB de 1983, título de monitor de la Federación Española de Baloncesto de 1986, certificado de un centro de enseñanza de inglés (no figura la fecha), resultado de la prueba de acceso a la universidad de 1988, certificado de prestación de servicios profesionales de 1997, extracto bancario de 1997, notificación de seguro de 2011, tarjetas profesionales de visita, carné de donante de sangre y dos facturas de suministros de 2015.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Balmaseda se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 206, 209, 210, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 19-7.^a y 21-1.^a de junio de 2001; 18-1.^a de mayo de 2002; 26-2.^a de octubre de 2004; 4 de marzo y 10-3.^a de abril de 2006; 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007; 23-4.^a de mayo y 6-5.^a de noviembre de 2008; 18-4.^a de junio de 2010; 18-9.^a de marzo y 25-7.^a de enero de 2011; 15-22.^a de noviembre y 20-66.^a de diciembre de 2013; 30-47.^a de enero de 2014; 17-71.^a de abril de 2015; 29-33.^a de enero y 21-34.^a de octubre de 2016.

II. Pretende el promotor el cambio de su nombre actual, Ricardo, por Richard, alegando que es este último el que utiliza habitualmente y por el que es conocido en todos los ámbitos desde la niñez. La encargada del registro denegó la solicitud por considerar que no concurría justa causa y que no se había probado suficientemente el uso alegado. Contra esta resolución se presentó el recurso analizado.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (*cf.* 210 del RRC). La encargada invocó, como una de las causas para la denegación, la ausencia de justa causa porque consideró que la modificación pretendida suponía una mínima modificación del nombre actual. Sin embargo, es evidente que la sustitución del nombre español actual por su equivalente en lengua inglesa sí supone en este caso un cambio sustancial, tanto en su grafía como en su pronunciación, por lo que no cabe fundar la denegación en esa circunstancia. Sí es cierto, en cambio, que las pruebas de uso inicialmente aportadas –no muy numerosas y todas ellas de fechas cercanas a la presentación de la solicitud– no probaban suficientemente la habitualidad en la que se basaba la petición. Pero en la fase de recurso el promotor sí aporta justificación bastante que permite apreciar la existencia de una situación de hecho y consolidada en el tiempo de utilización del nombre solicitado, que, por otra parte, no incurre en ninguna de las prohibiciones legales.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre del interesado por Richard.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro de Balmaseda (Vizcaya).

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (34.ª)

Cambio de nombre. Justa causa.—*El principio de estabilidad que preside el régimen legal del nombre y de los apellidos impide apreciar que concurra el requisito de la justa causa cuando el nombre cuya sustitución se pretende no es el inicialmente inscrito sino el resultante de un expediente de cambio promovido por la propia interesada siendo mayor de edad.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Barcelona en fecha 21 de diciembre de 2015 doña E.-Ariana M. M., nacida el 28 de mayo de 1942 en B. (Almería) y domiciliada en B., promueve expediente de cambio del nombre inscrito por «Ariadna» exponiendo que este último es el usado habitualmente y acompañando copia simple de DNI, volante de residencia en B, certificación literal de inscripción de nacimiento de E. M. M. en la que consta practicada el 24 de noviembre de 2004 inscripción marginal de cambio de nombre por E.-Ariana en virtud de auto firme de fecha 29 de junio de 2004 dictado por el juez encargado del Registro Civil de Barcelona y alguna documental reciente en la que figura identificada con el nombre solicitado.

II

En el mismo día, 21 de diciembre de 2015, la promotora ratificó el escrito presentado, se tuvo por promovido expediente registral sobre cambio de nombre propio por el usado habitualmente y comparecieron dos testigos, que manifestaron que conocen a la peticionaria desde hace cinco y treinta años, respectivamente, y que siempre ha utilizado el nombre de «Ariadna», por el que todo el mundo la conoce familiar y socialmente.

III

El ministerio fiscal informó que no se opone a lo solicitado y el 5 de febrero de 2016 la juez encargada, entendiendo que no concurre justa causa en la pretensión de la promotora, a la que en 2004 se le autorizó el cambio del nombre inscrito a su nacimiento por el que actualmente ostenta, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre solicitado.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que de la documentación que ha aportado se comprueba que «Ariadna» es su nombre desde hace más de 35 años, que por eso lo pidió en el expediente anterior, aunque hubo un error no sabe dónde y cuándo se presentó en el registro para que se lo arreglaran le dijeron que tenía que volver a hacer el trámite, que tener un nombre en el DNI y usar otro es un problema y que, como tiene 73 años y no quiere morirse sin el nombre correcto, solicita que se corrija el error que se produjo en 2004.

V

Unido al expediente testimonio del anterior, se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista del cambio de nombre efectuado por la misma promotora con anterioridad, interesó la confirmación del auto apelado, en base a los fundamentos jurídicos en él expuestos, y la juez encargada informó que se ratifica en los argumentos de la resolución impugnada y que considera que el cambio anteriormente autorizado a la promotora respondió a su pretensión y no se desprende la existencia de error alguno en cuanto al nombre solicitado y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 206, 209, 210, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 9-4.^a de octubre de 1994, 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero y 30-2.^a de mayo de 1997; 27-3.^a de marzo, 8-4.^a de mayo y 14-7.^a de septiembre de 2000; 17-2.^a de febrero, 6-2.^a y 21-2.^a de abril, 7-2.^a de julio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 y 21-3.^a de enero, 13-1.^a de abril, 20-3.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006, 16-3.^a de abril, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 8-1.^a y 17-1.^a de octubre y 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008, 11-3.^a de febrero y 6-4.^a de abril de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 17-13.^a de marzo de 2011, 18-8.^a de febrero y 2-108.^a de septiembre de 2013, 24-115.^a de junio y 28-127.^a de octubre de 2014 y 3-46.^a de julio, 28-3.^a de agosto, 18-1.^a de septiembre y 30-21.^a de octubre de 2015.

II. La interesada que, según consta de la inscripción marginal practicada en la de nacimiento, solicitó y obtuvo por resolución del encargado del Registro Civil de Barcelona de fecha 29 de junio de 2004 el cambio del nombre inscrito a su nacimiento, «E.», por E.-Ariana, promueve ahora expediente de cambio por «Ariadna», exponiendo que este último es el usado habitualmente, y la juez encargada, entendiéndolo que no concurre justa causa para un segundo cambio, dispone denegarlo mediante auto de 5 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para autorizar un segundo cambio de nombre a quien en 2004 solicitó y obtuvo en expediente el cambio de nombre por el usado habitualmente. También en esta ocasión la promotora fundamenta su solicitud en el uso habitual del propuesto, que no resulta acreditado de la reciente documental aportada, en el recurso aduce, sin presentar prueba más antigua, que la utilización de «Ariadna» data de hace más de treinta y cinco años y que este es el nombre instado en el expediente anterior, unido testimonio de lo entonces actuado se comprueba que el auto dictado estima la solicitud en los mismos términos en que se formuló y se justificó con la prueba ofrecida y que, en comparecencia ante el encargado, la interesada solicitó que en el folio registral de nacimiento se inscribiera marginalmente la resolución (art. 218 RRC) y, en consecuencia, ha de estimarse inconsistente la alegación de que, cuando recibió contestación, se dio cuenta de que lo concedido no era lo pedido. Por otra parte, las peticiones reiteradas o sucesivas en función de una injustificada y variable voluntad no son compatibles con la estabilidad que han de tener el nombre y los apellidos, en cuanto signos de identificación y diferenciación de las personas y, por tanto, no cabe apreciar la existencia de justa causa para el cambio de nombre solicitado (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (46.^a). Cambio nombre-Justa causa.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (36.^a). Cambio nombre-Justa causa.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (51.^a). Cambio nombre-Justa causa.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (43.^a). Cambio nombre-Justa causa.

- Resolución de 12 de abril de 2017** (14.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 21 de abril de 2017 (38.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 28 de abril de 2017 (11.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 12 de mayo de 2017 (39.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 16 de junio de 2017 (23.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 14 de julio de 2017 (2.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 1 de septiembre de 2017 (18.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 1 de septiembre de 2017 (22.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 22 de septiembre de 2017 (3.^a). Cambio nombre-Justa causa.
Resolución de 1 de diciembre de 2017 (1.^a). Cambio nombre-Justa causa.
-

2.2.3 CAMBIO DE NOMBRE. PROHIBICIONES (ART. 54 LEY DEL REGISTRO CIVIL)

Resolución de 12 de abril de 2017 (13.^a)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.—*No hay obstáculo legal para cambiar «María de la Oliva» por «Marioli», nombre admisible a partir de la redacción dada al segundo párrafo del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

HECHOS

I

El 11 de junio de 2015 doña María de la Oliva R. O., nacida el 19 de febrero de 1990 en S. (S.) y domiciliada en dicha población, comparece en el Registro Civil de Salteras al objeto de promover expediente gubernativo de cambio del nombre inscrito por «Marioli», exponiendo que por este último es conocida e incluso identificada en documentos oficiales y privados y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, copia cotejada

de DNI y, en prueba del uso alegado, constancia suscrita a petición de la interesada por la coordinadora del centro infantil municipal. En el mismo día, 11 de junio de 2015, comparecieron dos testigos, que expresaron su convencimiento de que son ciertos los hechos expuestos por la peticionaria, y el juez encargado acordó remitir lo actuado al Registro Civil de Sanlúcar la Mayor.

II

El ministerio fiscal informó que nada opone a lo interesado y el 22 de julio de 2015 la juez encargada, razonando que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, quedan prohibidos los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre solicitado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ha quedado acreditada la utilización del nombre pretendido y que este ha obtenido sustantividad propia.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la resolución dictada, y la juez encargada del Registro Civil de Sanlúcar la Mayor informó que, si bien las testificales aportadas acreditan que la peticionaria es conocida en su ámbito más cercano como «Marioli», no se consideró procedente el cambio porque dicho término no ha alcanzado sustantividad para constituir el nombre de una persona y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 209, 210 y 218 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 20-2.^a de abril de 1995, 19-3.^a de diciembre de 2007, 9-1.^a de mayo y 18-8.^a de julio de 2008, 11-1.^a de febrero de 2009; 21-80.^a de junio, 15-54.^a de julio, 4-17.^a de noviembre y 11-150.^a de diciembre de 2013, 9-41.^a de junio y 19-25.^a de diciembre de 2014 y 13-29.^a de febrero de 2015.

II. Promueve la interesada expediente gubernativo de cambio del nombre inscrito, «María de la Oliva», por el usado habitualmente, «Marioli», y la juez encargada del Registro Civil de Sanlúcar la Mayor, razonando que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 54 LRC, quedan prohibidos los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado

sustantividad, dispone denegar la solicitud mediante auto de 22 de julio de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (*cf.* arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan la imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si es admisible «Marioli» como nombre y, habida cuenta de que en la redacción dada al artículo 54 LRC por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, se suprimió la prohibición de diminutivos o variantes familiares que no hayan alcanzado sustantividad, ha de concluirse que el nombre pretendido no incurre en ninguna de las causas de prohibición subsistentes en el artículo 54, II actualmente vigente y que no hay obstáculo legal para autorizar el cambio solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, «María de la Oliva», por «Marioli», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del reglamento.

Madrid, 12 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Resolución de 30 de junio de 2017 (2.ª)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.—*Es admisible el cambio de Ana por Álex, cuya progresiva extensión también como nombre de mujer impide actualmente considerarlo como inequívocamente masculino, por lo que no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC.*

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra el auto dictado por la encargada del Registro Civil de Gijón.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2015 en el Registro Civil de Gijón, Doña A. F. D., con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de nombre de su hija menor de edad, Ana M. F., por Álex, alegando que es este el que utiliza actualmente la interesada, dado que, a pesar de estar inscrita como mujer, se identifica con el sexo masculino desde los cuatro años y está siendo tratada en la unidad correspondiente en un hospital de Avilés. Aportaba los siguientes documentos: DNI de la menor y de sus progenitores, certificado de empadronamiento, inscripción de nacimiento de Ana M. F., nacida en Gijón el de 2002, hija de A-T. F. D. y de J. M. S., informe hospitalario sobre conveniencia de tratamiento en la unidad de trastornos de identidad sexual del Principado de Asturias, solicitud de autorización judicial a la madre para decidir sobre el tratamiento médico de su hija al desconocerse el paradero del padre, diligencias judiciales posteriores y providencia de 27 de julio de 2015 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 9 de Gijón otorgando la autorización solicitada.

II

El 31 de julio de 2015 comparecen ante el registro tanto la menor interesada como sus progenitores y ratifican la solicitud planteada.

III

Por requerimiento del registro, se incorpora al expediente informe del instituto donde cursa estudios la menor en el que se comunica que la familia solicitó que llamaran a su hija Álex, que se informó de ello al profesorado y a sus compañeros de clase y que en el curso 2015/16 ya figura en los listados con ese nombre, aunque no en documentos oficiales mientras no se realice el cambio legal.

IV

El ministerio fiscal emitió informe desfavorable por no resultar acreditado el uso y porque, mientras no sea posible la rectificación registral del sexo, el nombre solicitado incurre en una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) al inducir a error en cuanto al sexo por ser percibido inequívocamente como nombre de varón. La encargada del registro dictó auto el 27 de octubre de 2015 en el que autorizaba el cambio atendiendo a las circunstancias específicas de estos casos y teniendo en cuenta las normas, tanto internacionales como nacionales, sobre protección de los derechos de los menores, a las que se añade la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que ya no contempla como un límite a la imposición de nombre el de aquellos que induzcan a error en cuanto al sexo. Por otra parte, se consideraba acreditado el uso habitual a partir de las declaraciones de los progenitores, de la propia menor (que firma como Álex) y del centro educativo en el que estudia, así como la concurrencia de justa causa porque se ha diagnosticado disforia de género y el mantenimiento del nombre actual perjudicaría el libre desarrollo de la perso-

nalidad de una menor de edad. Y en relación con la aludida prohibición del artículo 54 LRC, la encargada recordaba que la Dirección General de los Registros y del Notariado admite desde principios de los ochenta tanto los cambios como la imposición de nombres ambiguos para uno u otro sexo, si bien incurriendo a veces en contradicciones que afectan a la seguridad jurídica y evidencian la falta de un patrón uniforme. Finalmente, se indicaba que las normas deben interpretarse en relación con el contexto y la realidad social y que, actualmente, Álex tiene el suficiente grado de ambigüedad como para identificar tanto a un hombre como a una mujer.

V

Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que, aunque se comprenden las razones de la solicitud planteada y aunque se diera por acreditado el requisito de la habitualidad, es evidente que el nombre elegido incurre en una de las prohibiciones del artículo 54 LRC porque induce a error en cuanto al sexo de la inscrita.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado a los interesados, que solicitaron su desestimación. La encargada del Registro Civil de Gijón se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209 y 210 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 5-2.^a de julio de 2003, 23-2.^a de julio de 2004, 31-2.^a de enero y 12-2.^a de diciembre de 2005, 21-80.^a de junio de 2013, 20-148.^a de 2014, 12-65.^a de junio de 2015 y 7-52.^a de octubre de 2016.

II. Pretenden los promotores el cambio de nombre de su hija menor de edad, actualmente Ana, por Álex, alegando que es este el que utiliza habitualmente porque desde los cuatro años se identifica con el sexo masculino, a pesar de haber sido inscrita como mujer, y que actualmente está siendo tratada en la unidad hospitalaria correspondiente por disforia de género. La encargada del registro autorizó el cambio por entender que concurrían los requisitos legales precisos. El ministerio fiscal presentó recurso alegando que no es posible autorizar dicho cambio mientras no sea modificado el sexo inscrito en tanto que el nombre solicitado es inequívocamente masculino, de manera que resulta afectado por una de las prohibiciones establecidas en el artículo 54 LRC.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

IV. En este sentido, el artículo 54 LRC establece, como se ha dicho, determinados límites, siendo uno de ellos el que se refiere a la prohibición de atribución de nombres que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo. No obstante, todas las prohibiciones del mencionado artículo han de ser interpretadas de forma restrictiva y, con mayor razón, en supuestos como el presente en los que una aplicación excesivamente rigurosa de la norma podría afectar a derechos constitucionalmente reconocidos como el libre desarrollo de la personalidad o la intimidad personal. Por ello, la mencionada prohibición se circunscribe a aquellos nombres que remiten de forma inequívoca al sexo opuesto al que figura inscrito, no existiendo ningún inconveniente cuando se trata de nombres ambiguos para uno u otro sexo. Así, este centro admite las solicitudes de cambio del nombre propio inscrito en los casos de menores transexuales, sin que se haya producido todavía una rectificación de la mención relativa al sexo, pero siempre que, entre otras condiciones el solicitado sea un nombre neutro que no induzca a error en la identificación por estar en clara discordancia con el sexo inscrito. Pues bien, en cuanto al nombre solicitado en este caso, si bien se ha utilizado mayoritariamente como nombre masculino hasta época reciente, este centro no desconoce que Álex ha ido ganando terreno en el uso social también como nombre propio de mujer y, aunque todavía con escasa frecuencia, figura inscrito como tal en varios registros civiles, especialmente de Cataluña y Madrid, de manera que no puede mantenerse en la actualidad su carácter inequívocamente masculino y así se ha reconocido ya en recientes resoluciones variando doctrina anterior (*cf.* RDGRN 12-65.^a de junio de 2015). Por lo demás, la encargada del registro ha considerado acreditado el uso, se aprecia la concurrencia de justa causa y el cambio solicitado no perjudica a tercero.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

Resolución de 6 de octubre de 2017 (39.ª)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.—*No hay obstáculo legal para cambiar «Emilia» por «Emi», abreviación del nombre inscrito apta para designar a mujer y, por tanto, no claramente incurso en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Manresa (Barcelona).

HECHOS

I

El 12 de noviembre de 2015 Doña Emilia V. S., nacida el 17 de octubre de 1966 en M. y domiciliada en A. (Barcelona), comparece en el Registro Civil de Manresa al objeto de solicitar el cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente, «Emi», exponiendo que este último es el que siempre ha utilizado y por el que se la conoce en todas sus relaciones públicas y privadas y acompañando copia cotejada de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento, certificado de inscripción en el padrón de A. y, en prueba del uso alegado, copia cotejada de algunos documentos, la mayoría de índole profesional.

II

Acordada la incoación del oportuno expediente, comparecieron como testigos la madre y una tía materna de la interesada, que manifestaron que les consta que la peticionaria es conocida por el nombre pretendido, el ministerio fiscal informó que, conforme a múltiples resoluciones de la DGRN -enumera nueve del año 1995-, el requisito de la justa causa no se da cuando la modificación instada es objetivamente mínima o intrascendente y que cabe añadir que no se admiten nombres que, como el aquí interesado, hagan confusa la identificación y el 2 de diciembre de 2015 la juez encargada, razonando que, aun cuando de la prueba practicada resulta que existe la habitualidad exigida, «Emi» infringe lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil porque podría ser también abreviación de Emilio, dictó auto disponiendo denegar la petición efectuada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que regenta desde hace más de 25 años un negocio de correduría de seguros y, como prueban el tríptico informativo y las tarjetas de visita que aportó al expediente, para todas las compañías con las que colabora es «Emi V.», que es el nombre comercial de su empresa, y que existen muchos nombres -Noa, Aris, Bla, Dory, Iñaqui, etc.- cuya inscripción en los registros civiles se permite tanto

para hombre como para mujer, porque son aplicables a ambos, y aportando un listado de los nombres, entre los que no figura «Emi», que son unisex en la provincia argentina de C.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se tuvo por notificado, y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 210 y 218 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 20-2.^a de abril de 1995, 19-3.^a de diciembre de 2007, 18-8.^a de julio de 2008, 11-1.^a de febrero de 2009; 21-80.^a de junio, 15-54.^a de julio, 4-17.^a de noviembre y 11-150.^a de diciembre de 2013, 9-41.^a de junio de 2014, 30-31.^a de enero de 2015 y 29-38.^a de agosto de 2016.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre, Emilia, que consta en su inscripción de nacimiento por «Emi», exponiendo que este último es el que siempre ha utilizado y por el que se la conoce en todas sus relaciones públicas y privadas, y la juez encargada, razonando que, aun cuando de la prueba practicada resulta que existe la habitualidad exigida, el nombre propuesto infringe lo dispuesto en el artículo 54 LRC respecto a los que induzcan a error en cuanto al sexo, porque podría ser también abreviación de Emilio, dispone denegar la petición efectuada mediante auto de 2 de diciembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el uso habitualmente (arts. 209.4.º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan la imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si es admisible «Emi» como nombre de mujer. Habida cuenta de que todas las prohibiciones han de ser restrictivamente interpretadas, solo cabe rechazar un nombre cuando claramente aparezca que incurre en alguna de las genéricamente contenidas en el artículo 54 LRC que, en la práctica, han de fijarse teniendo en cuenta la realidad cultural y social del momento, conforme a la doctrina de la dirección general inducen a error en cuanto al sexo los nombres que designan inequívocamente al opuesto -Emilio para mujer o Emilia para varón- y, no siendo «Emi» abrevia-

ción indisolublemente unida a varón, es obligado concluir que es apta para designar a mujer y que, por tanto, no tropieza con ninguna de las limitaciones subsistentes en el citado precepto legal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, «Emilia», por «Emi», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del reglamento.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Manresa.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (3.^a)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.—*No es admisible el cambio de «Ignacio» por «Violeta», nombre inequívocamente de mujer y, por tanto, no apto para varón por discordante con el sexo legal de la persona (art. 54 LRC).*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Mataró (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Mataró en fecha 4 de febrero de 2015 don I. J. G. y doña S.-F. J. R., mayores de edad y domiciliados en dicha población, promueven expediente de cambio del nombre inscrito a su hijo menor de edad Ignacio J. J., nacido en E. (Valencia) el de 2007, por «Violeta» exponiendo que este último es el que usa habitualmente desde junio de 2014, que le ha sido diagnosticada disforia de género y que los titulares de otros registros civiles han autorizado el cambio de nombre de menores transexuales y acompañando copia simple del DNI de ambos y, del menor, volante de empadronamiento en Mataró, certificación literal de inscripción de nacimiento, informe emitido por psicóloga colegiada en fecha 31 de julio de 2014, certificado del centro escolar al que asiste extendido el 27 de enero de 2015 y, en prueba de uso del nombre propuesto, informe de evaluación académica datado el 18 de diciembre de 2014; y copia simple de

autos de distintos registros en los que se autoriza el cambio a menores de un nombre de mujer por uno de varón o viceversa.

II

Acordada la formación de expediente, el ministerio fiscal informó que de momento se opone a que se autorice el cambio de nombre, dado que este viene operando desde hace escasos meses y el uso no tiene carácter permanente, prolongado en el tiempo y consolidado en todos los aspectos de la vida y, aunque la psicóloga pone de manifiesto que «hay indicios más que fundados» de disforia de género, la prudencia es aconsejable en un menor de siete años y destacable que ninguno de los autos aportados hace referencia a la edad de los menores afectados ni a si son niños o adolescentes. A la vista de lo anterior, la juez encargada acordó requerir a la promotora para que comparezca acompañada del menor a fin de llevar a cabo examen por parte del médico forense y este emitió informe al respecto el 8 de julio de 2015.

III

El ministerio fiscal se reafirmó en el contenido de su informe anterior, por entender que no es contradictorio por el forense máxime teniendo en cuenta que este indica que el diagnóstico de disforia de género infantil «en la mayoría de los casos diagnosticados a edades tempranas» (es decir, no en todos) ha persistido al cumplir los 18 años; y el 1 de octubre de 2015 la juez encargada, razonando que, si bien la solicitud podría interpretarse *a priori* contraria a lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, del estudio pormenorizado del caso concreto se desprende que el sexo inscrito difiere del sentido como propio, mostrado socialmente y diagnosticado clínicamente, dictó auto disponiendo autorizar el cambio de nombre propio del menor.

IV

Notificada la resolución a los promotores y al ministerio fiscal, este interpuso recurso de apelación argumentando que la corta edad del interesado suscita dudas sobre si el pretendido uso del nombre de Violeta es fruto de la exclusiva voluntad del menor que, con siete años, carece de vida social propia en la que efectivamente haya podido consolidarse el uso, que el certificado emitido por la escuela expresa que se ha rectificado el nombre en los documentos escolares «siguiendo la voluntad del padre y de la madre» y que con ello se ha llevado a cabo una suerte de oficialización de un cambio de nombre con carácter prematuro.

V

De la interposición del recurso se dio traslado a los promotores, que presentaron escrito de oposición alegando que el poder desarrollarse conforme a la identidad de género es, sin distinción de edad, un derecho fundamental recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que el ministerio fiscal obvió los informes de especialistas aportados y hace la inaceptable insinuación de que han sido ellos los que han provocado el uso del nombre solicitado y que el nombre que induce a error respecto al sexo que muestra y siente como propio la menor no es Violeta sino el que figura en el registro,

que ha devenido perjudicial para ella; y seguidamente la juez encargada, conforme a los fundamentos jurídicos del auto apelado, informó en sentido contrario al recurso del ministerio fiscal y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 26, 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 206, 209, 210, 358 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 19 de marzo de 1994, 11-1.^a de mayo de 1995, 4 de julio de 1998; 28 de junio, 11-5.^a de septiembre y 25-1.^a de octubre de 2001, 22-3.^a de enero y 3-3.^a, 12-5.^a y 21-1.^a de septiembre de 2002, 3-1.^a de enero de 2003, 27 de marzo de 2004, 16-5.^a de diciembre de 2005, 2-6.^a de diciembre de 2011, 18-77.^a de junio de 2014, 20-43.^a de febrero de 2015 y 1-48.^a de abril y 17-15.^a de junio de 2016.

II. Solicitan los promotores el cambio del nombre, Ignacio, inscrito a su hijo menor de edad por «Violeta», exponiendo que este último es el que usa habitualmente desde junio de 2014, que le ha sido diagnosticada disforia de género y que los titulares de otros registros civiles han autorizado el cambio de nombre de menores transexuales, y la juez encargada, razonando que, si bien la solicitud podría interpretarse contraria al artículo 54 LRC, del estudio pormenorizado del caso concreto se desprende que el sexo inscrito difiere del sentido como propio, mostrado socialmente y diagnosticado clínicamente, dispone autorizar el cambio de nombre propio del menor mediante auto de 1 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el ministerio fiscal.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio de nombre por el uso habitualmente (arts. 59.4.º LRC y 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (arts. 60 LRC y 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* art. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Esta circunstancia es la que impide autorizar el cambio solicitado: aun cuando las prohibiciones del artículo 54 LRC, como todas las prohibiciones, han de ser restrictivamente interpretadas y, con mayor razón, en supuestos en los que, como en este caso, una determinación demasiado rigurosa del alcance de la norma podría afectar a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y a la propia imagen constitucionalmente reconocidos (arts. 10.1 y 18.1 de la Constitución), no es admisible «Violeta» como nombre propio de varón porque induce a error en cuanto al sexo (art. 54, II LRC). Aunque la doctrina de la dirección general ha circuns-

crita tal prohibición a los nombres que designan inequívocamente a personas de sexo distinto al de la afectada por el cambio, la limitación alcanza indudablemente a «Violeta» como nombre para designar a quien tiene sexo legal de varón y el propósito de que el menor no conste identificado con un nombre contradictorio con el sexo sentido no ha de conseguirse sustituyéndolo por otro radicalmente discordante con el sexo del que la inscripción de nacimiento hace fe (art. 41 LRC) cuando puede obtenerse con un nombre apto para designar a personas de uno y otro sexo y, como tal, compatible tanto con el sexo inscrito como con el sentido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Mataró (Barcelona).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (4.ª)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.—*No hay obstáculo legal para cambiar Salustiana por «Salus», abreviación del nombre inscrito apta para designar a mujer y, por tanto, no claramente incurso en causa de prohibición del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Madrid en fecha 7 de diciembre de 2015 doña Salustiana M. N., nacida el 24 de diciembre de 1977 en Madrid y domiciliada en dicha población, solicita el cambio del nombre inscrito por «Salus» exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional y acompañando copia simple de certificación literal de inscripción de nacimiento y de DNI, volante de inscripción en el padrón de Madrid y copia simple de alguna documental en la que figura identificada con el nombre que pretende.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, se acordó la incoación de expediente gubernativo de cambio de nombre, el ministerio fiscal informó que se opone a lo solicitado, porque el nombre pretendido no solo es un diminutivo que no ha alcanzado sustantividad sino que induce claramente a error en cuanto al sexo, y el 18 de enero de 2016 el juez encargado dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada ya que, siendo «Salus» diminutivo tanto del nombre femenino Salustiana como del masculino Salustiano, puede inducir a error en cuanto al sexo de la persona inscrita.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que «Salus» es el nombre por el que es conocida y que no le gusta y le da vergüenza que se dirijan a ella con el que figura en su partida de nacimiento.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que solicitó la confirmación de la resolución impugnada, cuyos argumentos no han sido desvirtuados por las alegaciones formuladas, y el juez encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 210 y 218 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 20-2.^a de abril de 1995, 19-3.^a de diciembre de 2007, 18-8.^a de julio de 2008, 11-1.^a de febrero de 2009; 21-80.^a de junio, 15-54.^a de julio, 4-17.^a de noviembre y 11-150.^a de diciembre de 2013, 9-41.^a de junio de 2014, 30-31.^a de enero de 2015 y 29-38.^a de agosto de 2016.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre, Salustiana, que consta en su inscripción de nacimiento por «Salus», exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y profesional, y el juez encargado dispone desestimar la petición formulada, ya que el nombre pretendido puede inducir a error en cuanto al sexo de la persona inscrita, mediante auto de 18 de enero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 59.4.º LRC y 209.4.º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (arts. 60 LRC y 210

RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan la imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si es admisible «Salus» como nombre de mujer. Habida cuenta de que todas las prohibiciones han de ser restrictivamente interpretadas, solo cabe rechazar un nombre cuando claramente aparece incurso en alguna de las genéricamente contenidas en el artículo 54 LRC que, en la práctica, han de fijarse teniendo en cuenta la realidad cultural y social del momento; conforme a la doctrina de la dirección general inducen a error en cuanto al sexo los nombres que designan inequívocamente al opuesto –Salustiano para mujer o Salustiana para varón– y, no siendo «Salus» abreviación indisociablemente unida a varón, ha de concluirse que es apta para designar a mujer y que, por tanto, no tropieza con ninguna de las limitaciones subsistentes en el citado precepto legal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, Salustiana, por «Salus», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 RRC.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (26.^a)

Cambio de nombre. Prohibiciones artículo 54 LRC.–*No hay obstáculo legal para cambiar «Inmaculada-Concepción» por «Imma», nombre admisible a partir de la redacción dada al segundo párrafo del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Granollers (Barcelona).

HECHOS

I

El 11 de agosto de 2015 doña Inmaculada-Concepción B. A., nacida el 29 de noviembre de 1984 en B. y domiciliada en L. A. (Barcelona), comparece en el registro civil de dicha población al objeto de solicitar el cambio del nombre inscrito por «Imma» exponiendo que este último es el que siempre ha utilizado y acompañando copia simple de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento y, en prueba del uso alegado, copia simple de algunos documentos recientes. En el mismo día, 11 de agosto de 2015, comparecieron como testigos sus padres, que manifestaron que cuando nació tenían que ponerse los nombres enteros pero que siempre la han llamado «Imma», y el juez encargado acordó remitir lo actuado al Registro Civil de Granollers.

II

Acordada la incoación del oportuno expediente, el ministerio fiscal informó que no procede autorizar el cambio por ausencia del requisito de justa causa, ya que únicamente se pretende sustituir el inscrito por su diminutivo, y el 2 de febrero de 2016 la juez encargada, razonando que, de conformidad con los artículos 54 de la Ley del Registro Civil y 192 de su Reglamento, existe obstáculo para autorizar el cambio de nombre solicitado, dictó auto disponiendo no aprobarlo, por no ajustarse al requisito de justa causa contenido en la Ley.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que Imma es el nombre que siente como propio y por el que la han llamado su familia y su entorno desde que nació, que el nombre inscrito no es de su agrado por excesivamente largo y porque suena extraño y antiguo, que hay nombres como Pep o Lola que, a fuerza de uso, se han ido autorizando y que lo mismo tendría que pasar con «Imma» pues hay mucha gente que cree que ya es un nombre propio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a la resolución de este centro directivo de 29-4.^a de mayo de 2000 que desestima el cambio de Inmaculada por «Imma», informó que no concurre el requisito de justa causa y seguidamente la juez encargada del Registro Civil de Granollers dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 55, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 205, 209, 210 y 218 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las

resoluciones, entre otras, de 20-2.^a de abril de 1995, 11-6.^a de octubre y 7-5.^a y 19-3.^a de diciembre de 2007, 9-1.^a de mayo y 18-8.^a de julio de 2008, 11-1.^a de febrero de 2009, 12-5.^a de marzo de 2010; 21-80.^a de junio, 15-54.^a de julio, 4-17.^a de noviembre y 11-150.^a de diciembre de 2013, 9-41.^a de junio y 19-25.^a de diciembre de 2014, 13-29.^a de febrero de 2015 y 30-33.^a de septiembre de 2016.

II. Promueve la interesada expediente de cambio del nombre inscrito, Inmaculada- Concepción, por el usado habitualmente, «Imma», y la juez encargada del Registro Civil de Granollers, razonando que, de conformidad con los artículos 54 LRC y 192 RRC, existe obstáculo para autorizar lo solicitado, dispone no autorizar el cambio, por no ajustarse al requisito de justa causa contenido en la ley, mediante auto de 2 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan la imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. Se discute en estas actuaciones si «Imma» es admisible como nombre y, habida cuenta de que en la redacción dada al artículo 54 LRC por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, se eliminó la prohibición de diminutivos o variantes familiares sin sustantividad, ha de concluirse que el nombre pretendido no tropieza con ninguna de las escasas limitaciones subsistentes en el artículo 54, II actualmente vigente y que no hay obstáculo legal para autorizar el cambio solicitado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio del nombre inscrito, Inmaculada-Concepción, por «Imma», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 RRC.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Granollers (Barcelona)

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 28 de abril de 2017 (12.^a). Cambio nombre-Prohibiciones art.54 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2018 (66.^a). Cambio nombre-Prohibiciones art.54 L.R.C.

2.3 Atribución de apellidos

2.3.1 RÉGIMEN DE APELLIDOS DE LOS EXTRANJEROS NACIONALIZADOS

Resolución de 7 de abril de 2017 (29.^a)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.– *En la inscripción de nacimiento del extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse los apellidos fijados por tal filiación según la ley española, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.ª RRC): primero del padre y primero de los personales de la madre (art. 194 RRC).*

En las actuaciones sobre apellidos a consignar en inscripción marginal de nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado y sus representantes legales contra calificación del juez encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

En comparecencia en el Registro Civil de Torrejón da Ardoz (Madrid) de fecha 18 de junio de 2014 el menor indio S. H., nacido en M. el de 1999, asistido por sus representantes legales, manifiesta su voluntad de optar por la nacionalidad española de su padre y solicita ser inscrito con los apellidos H. H. acompañando impreso de declaración de datos para la inscripción y certificación literal de su inscripción de nacimiento y de la de su padre, G. V. H., practicada en el Registro Civil Central el 18 de noviembre de 2009 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 11 de octubre de 2005.

II

Recibidas el acta de opción y la documentación aportada en el Registro Civil de Madrid el 1 de agosto de 2014, en la misma fecha la juez encargada dictó providencia requiriendo al interesado para que acredite de forma fehaciente el apellido que ostentaba su madre antes del matrimonio y el 10 de junio de 2015 fueron presentados en el registro civil del domicilio un certificado expedido el 11 de septiembre de 2014 por la Embajada de India en Indonesia que expresa que, de acuerdo con la información contenida en el pasaporte indio emitido en Y. el 7 de noviembre de 1988, I. T. C., hija de T. D. C., nació en Y. el 11 de marzo de 1962 y otro librado el 28 de mayo de 2015 por la Embajada de India en España para constancia de que el nombre anterior de V. G. H. era I. T. C.

III

Unidos a las actuaciones los documentos aportados, el juez encargado del Registro Civil de Madrid, considerando acreditada la identidad de persona entre I. T. C. y quien figura como madre del inscrito en el asiento de nacimiento, dictó providencia de fecha 6 de julio de 2015 disponiendo que en el asiento marginal de opción por la nacionalidad española del menor se haga constar que los apellidos que le corresponden como español son V. (primero del padre tras adquirir la nacionalidad española) T.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio, al interesado y a sus representantes legales, en el mismo acto manifestaron su disconformidad, ya que V. y T. son los nombres de los abuelos paterno y materno del menor y los apellidos de las respectivas líneas H. y C., y se tuvo por interpuesto recurso.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la providencia apelada, y la juez encargada del Registro Civil de Madrid dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado con informe negativo a la estimación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC), 2, 23, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137, 194, 213 y 347 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones,

entre otras, de 25-4.^a de septiembre de 2000, 22-1.^a de mayo, 25-3.^a de junio, 6-3.^a de septiembre y 18-4.^a de diciembre de 2002; 8-4.^a de enero de 2004, 14-1.^a de marzo de 2005, 2-1.^a de enero de 2007, 14-4.^a de julio de 2008; 19-7.^a de febrero, 8-6.^a de julio y 2-12.^a de septiembre de 2010; 2-11.^a de marzo de 2011, 29-24.^a de octubre de 2012, 5-50.^a y 21-24.^a de junio y 5-42.^a de agosto de 2013; 10-5.^a de febrero, 20-100.^a de marzo y 28-34.^a de mayo, 9-42.^a de junio y 4-142.^a y 4-82.^a y 16-71.^a de septiembre de 2014 y 28-9.^a de agosto, 16-30.^a de octubre y 11-30.^a de diciembre de 2015.

II. En el acto de opción a la nacionalidad española de su padre un menor indio, asistido por sus representantes legales, solicita duplicar el apellido H. inscrito a su nacimiento de acuerdo con la ley personal de sus progenitores (art. 219 RRC) y la juez encargada acuerda la inscripción con los apellidos V. T. mediante providencia de 6 de julio de 2015 que constituye el objeto del presente recurso en el que se aduce que se han tomado por apellidos los nombres de los abuelos paterno y materno del menor y que los apellidos de las respectivas líneas son H. y C.

III. En la inscripción de nacimiento del extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse los apellidos fijados por tal filiación según la ley española, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.^a RRC) y que, establecida la filiación por ambas líneas, son el primero del padre y el primero de los personales de la madre (arts. 109 CC y 194 RRC), en el orden elegido de común acuerdo por los progenitores y, aunque en fase de recurso se alega que se han tomado por apellidos paterno y materno lo que son nombres de los abuelos, dicha manifestación no resulta acreditada de la documentación que obra en las actuaciones: respecto al apellido paterno porque, independientemente de lo que fuera en origen, la inscripción de nacimiento del padre hace fe de que, desde que en 2005 adquiriera la nacionalidad española, ostenta los apellidos V. como primero y H. como segundo (*cf.* art. 2 LRC) y, respecto al apellido materno porque, no aportada certificación de nacimiento del registro extranjero, no consta fehacientemente que T. sea el nombre y no el apellido del padre de la nacida.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid

Resolución de 28 de abril de 2017 (14.ª)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.— 1.º *En la inscripción de nacimiento del extranjero que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según las leyes españolas, que se superponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.ª RRC) y, si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos de un español serán el primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera (art. 194 RRC).*

2.º *No cabe la conservación prevista en el artículo 199 RRC si el resultado va en contra del orden público español, lo que sucede cuando, estando determinada la filiación por ambas líneas, los apellidos atribuidos provienen de una sola de ellas.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento tras la obtención de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

I

Una vez concedida la nacionalidad española mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, comparecieron ante el Registro Civil de Leganés el 16 de octubre de 2014 los Sres. D. I. D. y Z. I. D., ambos de nacionalidad búlgara, para aceptar en nombre de su hija menor de edad, J. D. D., la nacionalidad concedida y, en el mismo acto, solicitaron la conservación de los apellidos que ya constaban en la inscripción de nacimiento practicada en España conforme a su ley personal búlgara. Consta en el expediente la siguiente documentación: resolución de 5 de julio de 2013 de concesión a la menor de la nacionalidad española, acta de aceptación suscrita por los progenitores ante el Registro Civil de Leganés el 16 de octubre de 2014, cuestionario de declaración de datos para la inscripción y certificación literal de nacimiento practicada en el Registro Civil de Madrid de J. D. D., nacida en M. el.... de 2004, hija de D. (nombre) I. D. (apellidos) y de Z. (nombre) I. Y. (apellidos) con marginal de 5 de noviembre de 2010 para hacer constar la rectificación del nombre del abuelo paterno y de los apellidos de la madre de la inscrita, que son I. (primer apellido) D. (segundo apellido), en virtud de resolución registral de 26 de octubre de 2010.

II

Remitido el expediente al Registro Civil de Madrid, la encargada dictó providencia el 13 de abril de 2015 denegando la conservación de los apellidos anteriores por entender que ambos proceden de la línea paterna, de manera que los que procede atribuir a la inscrita de acuerdo con la legislación española son el primero del padre, I. (en su variante femenina de acuerdo con el artículo 200 del Reglamento del Registro Civil), y el primero de la madre, I., en ese orden o invertidos.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso contra la calificación realizada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los progenitores que habían solicitado expresamente y en plazo su deseo de acogerse a lo dispuesto en el artículo 199 del reglamento y que ambos recurrentes tienen atribuido como segundo apellido D. (la madre con terminación femenina), por lo que la conservación pretendida no es contraria a la legislación española. Añadían que los apellidos solicitados son los que la menor ha venido usando en España desde que nació y los mismos que tiene atribuidos su hermana, nacida en 2011, por lo que cambiárselos ahora supondría un gran trastorno. Con el escrito de recurso aportaban copia del libro de familia.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Madrid ratificó la calificación efectuada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

V

Posteriormente, a requerimiento de la DGRN, se incorporaron a la documentación certificada de nacimiento búlgara de la menor interesada, J. D. D., hija de Z. I. D. y de D. I. D., y de su madre, cuya identidad, según el registro búlgaro, es Z. I. Y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones, entre otras, 3-2.^a de abril de 2000; 3-2.^a de enero, 16-2.^a de marzo y 22-1.^a de mayo de 2002; 14-1.^a de marzo de 2005; 23-4.^a de mayo de 2007; 30-7.^a de enero y 7-2.^a de abril de 2009; 19-7.^a de febrero y 2-12.^a de septiembre de 2010; 2-11.^a de marzo de 2011; 5-42.^a de agosto de 2013 y 2-2.^a de diciembre de 2016.

II. Los representantes legales de la inscrita, menor de edad con nacionalidad búlgara de origen, nacida en España en 2004 y que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2014, solicitaron la conservación de los apellidos que tenía atribuidos conforme a su ley personal anterior invocando para ello la previsión contenida en el artículo 199 RRC. La encargada del registro, sin embargo, denegó la conservación porque los dos apellidos resultantes provienen de la línea paterna, determinando al mismo tiempo que los apellidos que corresponde atribuir a la inscrita de acuerdo con las normas españolas son

los que figuran como primeros de sus progenitores en la inscripción practicada en España, es decir, I. (admitiendo la variante femenina de acuerdo con el art. 200 RRC) I., y contra esa calificación se presentó el recurso estudiado.

III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el registro civil español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.^a, RRC). Además, si la filiación está determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución al nacido -en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad- del primer apellido del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera, previsión que hace referencia a aquellos supuestos, como el presente, en que los apellidos de la madre, conforme a su ley personal, se hubieren perdido o alterado por razón de matrimonio. En ese sentido, la regla segunda del artículo 137 RRC prevé expresamente que la extranjera que, con arreglo a su ley personal, ostente el apellido de su marido, será designada con este pero debe hacerse referencia, además, al apellido de nacimiento y, en este caso, de acuerdo con la certificación búlgara, la identificación de nacimiento de la madre es Z. I. Y.. En consecuencia, el apellido materno que, de acuerdo con el sistema español, debe atribuirse a la hija es el de nacimiento, no el adquirido por matrimonio. Es cierto que, para evitar los posibles inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que el nacionalizado ostentaba según su estatuto personal anterior, además de otros mecanismos legales, el artículo 199 RRC habilita un plazo de dos meses siguientes a la adquisición de la nacionalidad española para manifestar la voluntad de conservar los apellidos anteriores. En este caso, los representantes legales de la inscrita expresaron desde el principio su voluntad de acogerse a dicha posibilidad pero hay que tener en cuenta, en relación con el mencionado artículo, la regla general que establece la excepción en la aplicación de la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público internacional español (art. 12.3 CC). Esta excepción la ha aplicado este centro directivo, al menos, en relación con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el principio de la duplicidad de apellidos de los españoles (a salvo de lo que para los binacionales españoles-comunitarios resulta de la aplicación del derecho comunitario, según establece la directriz 2.^a de la instrucción de la DGRN de 23 de mayo de 2007), y el principio de la *infungibilidad* de las líneas cuando existe filiación paterna y materna. Este principio, que no se exceptiona tampoco en el ámbito de los expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia, significa que resulta contraria a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas y en el presente caso, según se ha visto, si se accediera a la pretensión de los progenitores solo estaría representada la línea paterna.

IV. Por último, en relación con los posibles perjuicios a los que se alude derivados de la atribución de unos apellidos distintos al adquirir la nacionalidad española, cabe señalar la posibilidad de solicitar la práctica de una anotación marginal en la inscripción (art. 38.3 LRC), con valor simplemente informativo, para hacer constar el nombre y apellidos que corresponden a la inscrita conforme a su anterior ley personal. Esta anotación sirve para poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y para disipar dudas en cuanto a la identidad de la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación realizada.

Madrid, 28 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 2 de junio de 2017 (33.ª)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.– *No beneficia al interesado la excepción del artículo 199 del Reglamento del Registro Civil porque ha transcurrido el plazo de caducidad y porque la conservación no puede ir en contra del orden público español, conforme al cual no es admisible ni el mantenimiento de un solo apellido ni que en los inscritos no esté representada la línea materna.*

En las actuaciones sobre conservación de apellidos anteriores a la adquisición de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Torrevieja (Alicante).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Torrevieja en fecha 31 de julio de 2015 don P. B. M. M., de nacionalidad española adquirida por residencia el 21 de mayo de 2015 con renuncia a su nacionalidad anterior, solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil, se proceda al cambio de la inscripción realizada, de forma que el nombre sea P., el primer apellido B. y el segundo apellido M., exponiendo que no se han respetado las menciones que ha usado durante toda su vida y que ello le pueden ocasionar numerosos problemas ya que en sus títulos académicos, carnets profesionales y demás documentación es identificado con las que pide conservar y acompañando copia simple de tarjeta de identidad y de pasaporte búlgaros a nombre de M., P. B

II

El ministerio fiscal se opuso a la rectificación pretendida, ya que no se dan los presupuestos previstos reglamentariamente, y el 23 de octubre de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo denegar la rectificación de apellidos solicitada una vez expirado el plazo previsto en el artículo 199 RRC.

III

Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los nombres y apellidos que ostentaba se pueden ordenar o poniendo el patronímico junto al nombre, en cuyo caso se respetaría la tradición búlgara y la persona tendría un solo apellido, o poniendo, según la normativa española, el patronímico como primer apellido y el hasta ahora apellido único como segundo y aportando certificación al respecto expedida en fecha 19 de mayo de 2015 por el Consulado General de la República de Bulgaria en Valencia, certificado de registro en España como ciudadano de la Unión Europea y copia de las páginas de su libro de familia en las que figura el matrimonio celebrado en Torreveja con ciudadana asimismo búlgara en abril de 2012.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando los argumentos expuestos en su informe anterior, interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 12.3 y 109 del Código Civil (CC); 23, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137, 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones, entre otras, de 22-1.^a de mayo, 25-3.^a de junio, 6-3.^a de septiembre y 18-4.^a de diciembre de 2002; 8-4.^a de enero de 2004, 14-1.^a de marzo de 2005, 2-1.^a de enero y 1-5.^a de marzo de 2007, 14-4.^a de julio y 23-5.^a de octubre de 2008, 19-7.^a de febrero, 8-6.^a de julio y 2-12.^a de septiembre de 2010, 2-11.^a de marzo de 2011, 29-24.^a de octubre de 2012, 5-50.^a de junio y 5-42.^a de agosto de 2013; 10-5.^a de febrero, 20-100.^a de marzo, 4-142.^a de septiembre y 12-47.^a de diciembre de 2014 y 27-90.^a de marzo de 2015.

II. Solicita el interesado, búlgaro de origen inscrito en el registro civil español como «P. B.» -nombre- M. M. -apellidos primero y segundo-, que en

virtud de lo dispuesto en el artículo 199 RRC se modifiquen las menciones consignadas a fin de que conste que su nombre es «P.» y sus apellidos «B. M.», patronímico y apellido único conforme a su estatuto personal anterior, y la juez encargada, considerando que no se dan los presupuestos reglamentariamente previstos, dispone denegar la rectificación de apellidos instada cuando ya ha expirado el plazo mediante auto de 23 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Si bien el artículo 199 RRC permite al extranjero que adquiere la nacionalidad española conservar «los apellidos» que ostente en forma distinta de la legal si así lo declara en el acto de adquirirla o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición, el interesado pretende acogerse a la posibilidad que tal precepto ofrece una vez transcurrido el plazo establecido y el resultado de su declaración de conservación tropieza con el orden público español (vid. art. 12.3 CC) en relación, al menos, con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el mantenimiento como apellido único del que como tal ostentaba conforme a su estatuto personal anterior es incompatible con la duplicidad de apellidos de los españoles y la alternativa propuesta en fase de recurso, que el patronímico, inscrito como segundo nombre, se considere primer apellido y el hasta ahora apellido único pase a segundo, contraviene el principio de infungibilidad de las líneas paterna y materna, que no se exceptúa ni siquiera en el ámbito de los expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia (vid. art. 57.3 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 02 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Torrevieja (Alicante)

Resolución de 9 de junio de 2017 (22.^a)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.— *No beneficia a la interesada la excepción del artículo 199 del Reglamento del Registro Civil porque ha transcurrido el plazo de caducidad y porque la conservación no puede ir en contra del orden público español, conforme al cual no es admisible ni el mantenimiento de un solo apellido ni que los dos inscritos procedan de la línea paterna.*

En las actuaciones sobre conservación de apellidos anteriores a la adquisición de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Torrevieja (Alicante).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Torreveja en fecha 31 de julio de 2015 doña D.-I. G. G., de nacionalidad española adquirida por residencia el 24 de mayo de 2015 con renuncia a su nacionalidad anterior, solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil, se proceda al cambio de la inscripción realizada, de forma que el nombre sea D., el primer apellido I. y el segundo apellido G., exponiendo que no se han respetado las menciones que ha usado durante toda su vida y que ello le pueden ocasionar numerosos problemas ya que en sus títulos académicos, carnets profesionales y demás documentación es identificada con las que pide conservar y acompañando copia simple de tarjeta de identidad y de pasaporte búlgaros a nombre de G., D. I.

II

El ministerio fiscal se opuso a la rectificación pretendida, ya que no se dan los presupuestos previstos reglamentariamente, y el 23 de octubre de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo denegar la rectificación de apellidos solicitada una vez expirado el plazo previsto en el artículo 199 RRC.

III

Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los nombres y apellidos que ostentaba se pueden ordenar o poniendo el patronímico junto al nombre, en cuyo caso se respetaría la tradición búlgara y la persona tendría un solo apellido, o poniendo, según la normativa española, el patronímico como primer apellido y el hasta ahora apellido único como segundo y aportando certificación al respecto expedida en fecha 19 de mayo de 2015 por el Consulado General de la República de Bulgaria en Valencia, certificado de registro en España como ciudadana de la Unión Europea y copia de las páginas de su libro de familia en las que figura el matrimonio celebrado en Torreveja con ciudadano asimismo búlgaro en abril de 2012.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando los argumentos expuestos en su informe anterior, interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 12.3 y 109 del Código Civil (CC); 23, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137, 194, 199 y 213 del Reglamento del

Registro Civil (RRC); la instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones, entre otras, de 22-1.^a de mayo, 25-3.^a de junio, 6-3.^a de septiembre y 18-4.^a de diciembre de 2002; 8-4.^a de enero de 2004, 14-1.^a de marzo de 2005, 2-1.^a de enero y 1-5.^a de marzo de 2007, 14-4.^a de julio y 23-5.^a de octubre de 2008, 19-7.^a de febrero, 8-6.^a de julio y 2-12.^a de septiembre de 2010, 2-11.^a de marzo de 2011, 29-24.^a de octubre de 2012, 5-50.^a de junio y 5-42.^a de agosto de 2013; 10-5.^a de febrero, 20-100.^a de marzo, 4-142.^a de septiembre y 12-47.^a de diciembre de 2014 y 27-90.^a de marzo de 2015.

II. Solicita la interesada, búlgara de origen inscrita en el registro civil español con los apellidos G. G., paterno y materno que resultan del certificado del registro extranjero aportado, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 RRC se modifiquen a fin de que conste que son «I. G.», patronímico y apellido único conforme a su estatuto personal anterior, y la juez encargada, considerando que no se dan los presupuestos reglamentariamente previstos, dispone denegar la rectificación instada cuando ya ha expirado el plazo mediante auto de 23 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Si bien el artículo 199 RRC permite al extranjero que adquiere la nacionalidad española conservar «los apellidos» que ostente en forma distinta de la legal si así lo declara en el acto de adquirirla o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición, la interesada pretende acogerse a la posibilidad que tal precepto ofrece una vez transcurrido el plazo establecido y el resultado de su declaración de conservación tropieza con el orden público español (vid. art. 12.3 CC) en relación, al menos, con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el mantenimiento como apellido único del que como tal ostentaba conforme a su estatuto personal anterior es incompatible con la duplicidad de apellidos de los españoles y la alternativa propuesta en fase de recurso, que el patronímico, inscrito como segundo nombre, se considere primer apellido y el hasta ahora apellido único pase a segundo, contraviene el principio de infungibilidad de las líneas paterna y materna, que no se exceptúa ni siquiera en el ámbito de los expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia (vid. art. 57.3 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 9 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrevieja (Alicante).

Resolución de 6 de octubre de 2017 (25.^a)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.— *Por aplicación del artículo 199 RRC se mantienen, tal como se ha solicitado dentro del plazo establecido, los apellidos que tenía atribuidos legalmente, según su ley personal ecuatoguineana, una menor que ha adquirido la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento tras la obtención de la nacionalidad española de una menor de edad remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el progenitor de la inscrita contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Zaragoza el 1 de julio de 2015, Doña A.-M. E. N., mayor de edad y de nacionalidad ecuatoguineana, solicitaba el ejercicio de la opción a la nacionalidad española en nombre de su hija menor de edad, Y. E. M., nacida en Z. el de 2008, por ser hija de un ciudadano ecuatoguineano de origen que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2011. En la misma comparecencia se solicitaba la atribución a la menor de los apellidos *N. E.* que legalmente le corresponden. El 24 de julio de 2015 comparece el padre de la menor, quien se muestra conforme con la opción a la nacionalidad española de su hija pero no así con los apellidos propuestos, interesando la conservación de los que la optante ostentaba hasta ese momento. Constan en el expediente las actuaciones correspondientes a una solicitud anterior de opción para la misma menor que incluyen la siguiente documentación: acta de opción a la nacionalidad española suscrita por ambos progenitores el 15 de octubre de 2012 e interesando que la menor fuera inscrita con los apellidos *N. M.*; acuerdo de la encargada de incoación de expediente previo de rectificación de varios errores relativos a las menciones de identidad de los progenitores en la inscripción de nacimiento de su hija, dejando entre tanto en suspenso las actuaciones relativas a la opción; DNI e inscripción de nacimiento, practicada en Z. el de 2011, de H. E. N. N., ecuatoguineano de origen, con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de junio de 2011; tarjeta de residencia e inscripción de nacimiento original de Y. E. M., nacida en Z. el de 2008, hija de H. E. N. N. y de A. M. E. N.; tarjeta de residencia y pasaporte ecuatoguineano de A. M. E. N.; volante de empadronamiento familiar; auto de la encargada del registro de 25 de marzo de 2013 acordando la rectificación del lugar de nacimiento del padre de la interesada; auto de 10 de julio de 2013, previo informe del ministerio fiscal, denegando la autorización para ejercitar la opción en nombre de la menor por no considerar suficientemente acreditada su relación de filiación con A. M. E. N. por discrepancias en los datos de identidad de esta que figuran en diferentes documentos; certificado ecuatoguineano de inscripción de nacimiento de A. M. E. N. y certificado de la Embajada de Guinea Ecuatorial sobre su nombre y apellidos; providencia de 8 de mayo de 2015 de incoación de procedimiento de rectificación en inscripción de nacimiento una vez acreditados los datos de identidad de la madre; inscripción de nacimiento de Y. E. M. con varias marginales de rectificación de las que finalmente resulta que el primer apellido del

padre de la inscrita es N. y el primero de la madre E. y resolución de concesión de tarjeta de residencia permanente a la menor interesada.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada dictó auto el 15 de septiembre de 2015 autorizando la opción a la nacionalidad española de la menor instada por sus progenitores. A continuación, con la misma fecha, se dictó providencia acordando la práctica de inscripción marginal de nacionalidad española por opción haciendo constar que los apellidos de la inscrita serán en los sucesivo N. E., practicándose finalmente el asiento el 19 de octubre de 2015.

III

Notificada la inscripción, el progenitor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo en que desea que su hija conserve los apellidos que tenía atribuidos originalmente, heredados de varias generaciones anteriores por ambas líneas y acordes con la legislación guineana, según la cual tales vocablos pueden formar parte tanto del nombre como de los apellidos.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza ratificó la calificación efectuada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

V

Posteriormente, a requerimiento de la DGRN, la madre de la menor ratifica el escrito de recurso presentado por el padre en el que solicitaba la conservación de los apellidos atribuidos originalmente de acuerdo con la ley ecuatoguineana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones, entre otras, de 19 de enero, 1-4.^a y 7-1.^a de junio, 8-2.^a de noviembre y 2-5.^a de diciembre de 2002, 27-6.^a de mayo de 2003 y 11-2.^a de febrero de 2004.

II. Los representantes legales de la inscrita, menor de edad con nacionalidad ecuatoguineana de origen y nacida en España en 2008, solicitaron en su

nombre la nacionalidad española por opción mediante sendas comparecencias en el registro en momentos sucesivos, de manera que, si bien la madre suscribió en su acta de comparecencia la atribución a la menor de los apellidos que le corresponden según la legislación española, el padre, sin embargo, solicitó la conservación de los que tenía atribuidos inicialmente de acuerdo con la normativa ecuatoguineana. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción con el primer apellido del padre y el primero de la madre en aplicación del artículo 194 RRC.

III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el registro civil español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.ª, RRC). Además, si la filiación está determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución al nacido -en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad- del primer apellido del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, los apellidos que corresponde atribuir a la menor interesada de acuerdo con el sistema español son los que actualmente figuran consignados por decisión de la encargada. No obstante, para evitar los posibles inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior, además de otros mecanismos legales, el artículo 199 RRC permite la conservación de los anteriores siempre que así se declare en el momento de adquirir la nacionalidad o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad. A estos requisitos se añade, según reiterada doctrina de la DGRN, el de que los apellidos pretendidos no resulten contrarios al orden público español, lo que en la práctica se traduce en la necesidad de atribuir dos apellidos y en que estén representadas tanto la línea materna como la paterna. En este caso debe tenerse en cuenta, además, que se trata de una menor de edad, por lo que, para poder hacer autorizar la conservación -al igual que para cualquier otro cambio-, lo primero que hay que acreditar es el mutuo acuerdo de los progenitores, ambos representantes legales de la hija. Pues bien, aunque en principio los progenitores, que no comparecieron a la vez, suscribieron solicitudes en sentido distinto, la madre ha prestado posteriormente de forma expresa su consentimiento a la petición de conservación planteada por el padre. En realidad, vista la discrepancia inicial, antes de dictar el acuerdo recurrido, se debió haber notificado a la madre, que había comparecido en primer lugar, la pretensión del progenitor para que expresara su parecer y, en función del resultado, adoptar a continuación la decisión pertinente. Por último, se constata que los dos apellidos con los que la menor fue inscrita al nacer proceden de ambas líneas de filiación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y practicar la corres-

pondiente marginal en la inscripción de nacimiento de la interesada para hacer constar la conservación de los apellidos que tenía atribuidos inicialmente conforme a su ley personal ecuatoguineana.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (26.ª)

Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.— *Por aplicación del artículo 199 RRC se mantienen, tal como se ha solicitado dentro del plazo establecido, los apellidos que tenía atribuidos legalmente, según su ley personal ecuatoguineana, una menor que ha adquirido la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento tras la obtención de la nacionalidad española de una menor de edad remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el progenitor de la inscrita contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Zaragoza el 1 de julio de 2015, Doña A. M. E. N., mayor de edad y de nacionalidad ecuatoguineana, solicitaba el ejercicio de la opción a la nacionalidad española en nombre de su hija menor de edad, L. M. E. M., nacida en Z. el de 2009, por ser hija de un ciudadano ecuatoguineano de origen que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2011. En la misma comparecencia se solicitaba la atribución a la menor de los apellidos *N. E.* que legalmente le corresponden. El 24 de julio de 2015 comparece el padre de la menor, quien se muestra conforme con la opción a la nacionalidad española de su hija pero no así con los apellidos propuestos, interesando la conservación de los que la optante ostentaba hasta ese momento. Constan en el expediente las actuaciones correspondientes a una solicitud anterior de opción para la misma menor que incluyen la siguiente documentación: acta de opción a la nacionalidad española suscrita por ambos progenitores el 15 de octubre de 2012 e interesando que la menor fuera inscrita con los apellidos *N. M.*; acuerdo de la encargada de incoación de expediente previo de rectificación de varios errores relativos a las menciones de identidad de los progenitores en la inscripción de nacimiento de su hija, dejando entre tanto en suspenso las actuaciones relativas a la opción; DNI e inscripción de nacimiento, practicada en Zaragoza el 5 de octubre de 2011, de H. E. N. N., ecuatoguineano de origen, con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la Dirección General de los

Registros y del Notariado de 8 de junio de 2011; tarjeta de residencia e inscripción de nacimiento original de L. M. E. M., nacida en Z. el de 2009, hija de H. E. N. N. y de A. M. E. N.; tarjeta de residencia y pasaporte ecuatoguineano de A. M. E. N.; volante de empadronamiento familiar; auto de la encargada del registro de 25 de marzo de 2013 acordando la rectificación del lugar de nacimiento del padre de la interesada; auto de 10 de julio de 2013, previo informe del ministerio fiscal, denegando la autorización para ejercitar la opción en nombre de la menor por no considerar suficientemente acreditada su relación de filiación con A. M. E. N. por discrepancias en los datos de identidad de esta que figuran en diferentes documentos; certificado ecuatoguineano de inscripción de nacimiento de A. M. E. N. y certificado de la Embajada de Guinea Ecuatorial sobre su nombre y apellidos; providencia de 8 de mayo de 2015 de incoación de procedimiento de rectificación en inscripción de nacimiento una vez acreditados los datos de identidad de la madre; inscripción de nacimiento de L. M. E. M. con varias marginales de rectificación de las que finalmente resulta que el primer apellido del padre de la inscrita es N. y el primero de la madre E. y resolución de concesión de tarjeta de residencia permanente a la menor interesada.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada dictó auto el 15 de septiembre de 2015 autorizando la opción a la nacionalidad española de la menor instada por sus progenitores. A continuación, con la misma fecha, se dictó providencia acordando la práctica de inscripción marginal de nacionalidad española por opción haciendo constar que los apellidos de la inscrita serán en los sucesivo N. E., practicándose finalmente el asiento el 19 de octubre de 2015.

III

Notificada la inscripción, el progenitor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo en que desea que su hija conserve los apellidos que tenía atribuidos originalmente, heredados de varias generaciones anteriores por ambas líneas y acordes con la legislación guineana, según la cual tales vocablos pueden formar parte tanto del nombre como de los apellidos.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza ratificó la calificación efectuada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

V

Posteriormente, a requerimiento de la DGRN, la madre de la menor ratifica el escrito de recurso presentado por el padre en el que solicitaba la conservación de los apellidos atribuidos originalmente de acuerdo con la ley ecuatoguineana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el registro civil español y las resoluciones, entre otras, de 19 de enero, 1-4.^a y 7-1.^a de junio, 8-2.^a de noviembre y 2-5.^a de diciembre de 2002, 27-6.^a de mayo de 2003 y 11-2.^a de febrero de 2004.

II. Los representantes legales de la inscrita, menor de edad con nacionalidad ecuatoguineana de origen y nacida en España en 2009, solicitaron en su nombre la nacionalidad española por opción mediante sendas comparecencias en el registro en momentos sucesivos, de manera que, si bien la madre suscribió en su acta de comparecencia la atribución a la menor de los apellidos que le corresponden según la legislación española, el padre, sin embargo, solicitó la conservación de los que tenía atribuidos inicialmente de acuerdo con la normativa ecuatoguineana. La encargada del registro ordenó practicar la inscripción con el primer apellido del padre y el primero de la madre en aplicación del artículo 194 RRC.

III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el registro civil español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1.^a, RRC). Además, si la filiación está determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución al nacido –en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad– del primer apellido del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, los apellidos que corresponde atribuir a la menor interesada de acuerdo con el sistema español son los que actualmente figuran consignados por decisión de la encargada. No obstante, para evitar los posibles inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior, además de otros mecanismos legales, el artículo 199 RRC permite la conservación de los anteriores siempre que así se declare en el momento de adquirir la nacionalidad o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad. A estos requisitos se añade, según reiterada doctrina de la DGRN, el de que los apellidos pretendidos no resulten contrarios al orden público español, lo que en la práctica se traduce en la necesidad de atribuir dos apellidos y en que estén representadas tanto la línea materna como la paterna. En este caso debe tenerse en cuenta, además, que se trata de una menor de edad, por lo que, para poder hacer autorizar la conservación –al igual que para cualquier otro cambio–, lo primero que hay que acreditar es el mutuo acuerdo de los progenitores, ambos representantes legales de la hija. Pues bien, aunque en principio los progenito-

res, que no comparecieron a la vez, suscribieron solicitudes en sentido distinto, la madre ha prestado posteriormente de forma expresa su consentimiento a la petición de conservación planteada por el padre. En realidad, vista la discrepancia inicial, antes de dictar el acuerdo recurrido, se debió haber notificado a la madre, que había comparecido en primer lugar, la pretensión del progenitor para que expresara su parecer y, en función del resultado, adoptar a continuación la decisión pertinente. Por último, se constata que los dos apellidos con los que la menor fue inscrita al nacer proceden de ambas líneas de filiación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y practicar la correspondiente marginal en la inscripción de nacimiento de la interesada para hacer constar la conservación de los apellidos que tenía atribuidos inicialmente conforme a su ley personal ecuatoguineana.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

2.3.2 RÉGIMEN DE APELLIDOS DE LOS ESPAÑOLES

Resolución de 24 de enero de 2017 (45.^a)

Régimen de apellidos de los españoles.—*Los apellidos de un español son los determinados por la filiación según la ley española, primero del padre y primero de los personales de la madre y, por tanto, no cabe atribuir al nacido como primer apellido el segundo de su padre cuya ley personal, distinta de la española, no ha de condicionar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

HECHOS

I

En escrito con entrada en el Registro Civil de Gernika-Lumo en fecha 12 de febrero de 2015 el Sr. M. A. G. F., mayor de edad y domiciliado en B. (Bizkaia), expone que el 26 de

enero de 2015 los dos progenitores de su hijo, nacido el de 2015 en el hospital de C. de B. (Bizkaia) de padre portugués y madre española, manifestaron en el Juzgado de Paz de Bermeo su voluntad de inscribir al nacido con los apellidos F.E. y que, no aceptados por el encargado de Bermeo primero y por el de Gernika después, finalmente lo registraron el día 2 de febrero con los apellidos G.E. y solicita que se le imponga al nacido el apellido paterno de su padre acompañando copia simple de certificación literal de inscripción de nacimiento del menor y de certificado expedido por el Consulado de Portugal en Bilbao para constancia de que el primer apellido del promotor es el paterno de su madre y el segundo el paterno de su padre.

II

Acordada la formación de expediente y notificada la incoación a la madre del menor, que se adhirió al escrito presentado por el padre, el ministerio fiscal informó que entiende que la inscripción se ha practicado correctamente y el 21 de mayo de 2015 la juez encargada, razonando que no puede afectar a un menor español lo establecido por la legislación portuguesa, dictó auto disponiendo que no procede imponer al menor como primer apellido el segundo de su padre.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los dos progenitores, el padre interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la transmisión a su hijo de su apellido paterno no puede verse impedida por el hecho de que él los ostente en otro orden y resida en país distinto al de su nacionalidad.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que informó que, tratándose de un menor español, se opone al recurso presentado y, por su parte, la juez encargada informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos del auto dictado, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 137, 194 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de octubre de 2000, 25-3.^a de enero de 2002, 17-2.^a de marzo de 2004, 20-5.^a de octubre de 2006, 28-4.^a de noviembre de 2007, 6-4.^a de marzo de 2008, 28-2.^a de noviembre de 2011, 6-22.^a y 9-20.^a de mayo de 2013, 27-3.^a de enero,

9-153.^a y 31-68.^a de marzo, 21-22.^a de abril, 16-26.^a de septiembre y 26-39.^a de diciembre de 2014 y 29-12.^a de mayo y 23-47.^a de octubre de 2015.

II. Los progenitores pretenden inscribir a su hijo, nacido el de 2015 de padre portugués y madre española, con los apellidos F.E., el menor es registrado con los apellidos G.E., primero del padre y primero de la madre, seguidamente los padres presentan escrito solicitando que se atribuya al nacido el apellido paterno de su padre y la juez encargada, razonando que no puede afectar a un menor español lo establecido por la legislación portuguesa, dispone que no procede imponer al nacido como primer apellido el segundo de su padre mediante auto de 21 de mayo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El artículo 194 RRC, que dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de los personales de la madre, es una norma de Derecho interno referida a la composición de los apellidos de las personas de nacionalidad española, de aplicación al hijo español de padre extranjero y, por tanto, no cabe, como pretenden los padres, aplicar la legislación lusa y hacer constar como primer apellido de un nacido en España de madre española el segundo de su padre portugués.

IV. La interpretación finalista del citado precepto que hace el recurrente no se estima conforme con la evolución y las modificaciones habidas en materia de atribución de apellidos y no puede ser aceptada: basta pensar en la facultad que tienen los padres de invertir el orden de los apellidos de sus hijos (art. 109 CC) para descartar que el artículo 194 RRC pueda interpretarse actualmente en el sentido de que sean los apellidos paternos de los progenitores los que hayan de transmitirse e inscribirse en el registro civil español a extranjeros que adquieren la nacionalidad española o a nacidos con doble nacionalidad.

V. Aun cuando podría ocurrir que el menor al que se refiere este expediente, al parecer de doble nacionalidad española y portuguesa, fuera identificado de forma distinta en los dos países de los que es nacional, para asegurar la adecuada identificación de las personas en quienes concurre esta circunstancia el Derecho Internacional Privado y los ordenamientos jurídicos internos prevén la coordinación de los registros civiles de los diferentes Estados y la legislación española admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, sea objeto de anotación registral, conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil, a fin de poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y disipar dudas en cuanto a la identidad del inscrito.

VI. De otro lado, el derecho de los interesados plurinacionales o de sus representantes legales a elegir una de las leyes nacionales concurrentes puede ejercitarse a través del expediente registral de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil, que se instruye por el registro civil del domicilio de los promotores y se resuelve por el Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la

Dirección General de los Registros y del Notariado, que puede autorizar el cambio de apellidos si resulta acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos (*cf.* arts. 57 LRC y 205 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Gernika–Lumo (Bizkaia).

Resolución de 3 de marzo de 2017 (45.^a)

Régimen de apellidos de los españoles.–*No habiendo acuerdo entre los progenitores sobre el orden de los apellidos una vez determinada la filiación paterna de un menor inscrito inicialmente solo con la materna, procede, en interés del menor, la anteposición del apellido materno decidida por la encargada del registro.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el progenitor del menor inscrito contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Gijón.

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Gijón el 6 de febrero de 2015, Doña R-A. S. G., una vez notificada la sentencia por la que se declaraba la filiación paterna de su hijo menor de edad U. S. G. respecto de Don R. N. U., solicitaba que, al inscribir en el asiento de nacimiento dicha filiación, se hiciera constar como primer apellido del inscrito el materno, de manera que resultaran los apellidos S. N.. Don R. N. U., por su parte, compareció asimismo ante el registro el 12 de febrero de 2015 para manifestar que no estaba de acuerdo con la anteposición del apellido materno, por lo que solicitaba la atribución a su hijo de los apellidos N. S.. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en G. elde 2012 de U. S. G., hijo de R-A. S. G., y sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Gijón de 5 de noviembre de 2014 por la que se declara que el menor U. S. G. es hijo biológico de Don R. N. U., debiendo inscribirse tal filiación al margen de la inscripción de nacimiento del menor. Respecto a los apellidos, menciona la sentencia en uno de sus fundamentos que, pese a que en la demanda se aludía al orden en que aquellos habían de figurar, ese orden será, según el art. 109 del Código Civil (CC), el determinado por acuerdo entre los progenitores o, en su defecto, el establecido por la ley.

II

Previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 23 de marzo de 2015 por el que se acordaba anteponer al inscrito el apellido materno en interés del menor dado que este ha sido conocido como U. S. en su entorno social y familiar desde que nació. Alegaba la resolución que la normativa vigente en ese momento no contemplaba los supuestos de falta de acuerdo de los progenitores sobre el orden de los apellidos, a diferencia de la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio –cuya entrada en vigor estaba prevista para el 15 de julio de 2015– que deroga la prevalencia del apellido paterno y que en caso de silencio o de desacuerdo otorga el poder de decisión al encargado del registro. Y en apoyo de la decisión adoptada se cita la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2013, de 7 de octubre, que en un supuesto similar de determinación sobrevenida de la filiación paterna mantuvo la atribución en primer lugar del apellido materno en atención al interés del menor porque este estaba escolarizado, había venido utilizando desde su nacimiento el primer apellido de la madre y no había tenido una relación personal estable con el padre. Por otra parte, también una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2015, siguiendo la línea marcada por el Tribunal Constitucional, estableció que no cabe estar a la interpretación literal de la norma cuando entra en cuestión el interés superior del menor, que debe ser tenido en cuenta de forma prevalente más allá de las preferencias personales de los progenitores, tutores, guardadores o administraciones públicas, de manera que, aunque la nueva ley del Registro Civil aún no hubiera entrado en vigor, estaba autorizada una interpretación correctora de la vigente porque, en los aspectos sustantivos, la vigencia constitucional de los principios que la inspiran sí se encuentran en vigor.

III

Notificada la resolución, el Sr. N. U. interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que las dos sentencias citadas en la resolución apelada poco tienen que ver con este caso, dado que en la del Constitucional se trataba de un menor de más de cinco años que, a diferencia de su hijo, estaba escolarizado y, sobre todo, se había tenido en cuenta que el padre había sido condenado por un delito de violencia de género. En la sentencia del Supremo también se trataba de un menor ya escolarizado y había transcurrido mucho tiempo entre el nacimiento y la sentencia de filiación, mientras que en este caso se trata de un niño de dos años (en el momento de la presentación del recurso), no escolarizado ni en guardería, que en su entorno es conocido simplemente por su nombre propio y entre el nacimiento y la demanda de paternidad solo había transcurrido un año. Añadía que tampoco concurre violencia de género y que la relación con el padre existió hasta que la madre, unilateralmente, decidió cortarla coincidiendo con la presentación de la demanda de filiación.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación, insistiendo en los argumentos ya expresados en el primer informe. Notificada asimismo la madre del menor, solicitó la confirmación del auto recurrido alegando que el padre se había despreocupado de su hijo durante dos años, dejando en manos de ella el cuidado y la manutención, que el menor ya está en proceso de escolarización y es conocido en múltiples centros e instituciones con el primer apellido de S., que la preferencia del apellido paterno ya ha sido debidamente matizada por el Constitucional y que, en contra de lo alegado por la otra parte, el Sr.

N. ha sido condenado por sentencia de 5 de octubre de 2012 del Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Gijón por una falta de injurias, del mismo modo que la interesada fue absuelta de una falta de incumplimiento de obligaciones familiares de la que fue acusada al tiempo que se ordenaba deducir testimonio por si el Sr. N. U. pudiera haber cometido un delito de denuncia falsa. La encargada del Registro Civil de Gijón se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) de 1957; 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; 194 y 198 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las sentencias, entre otras, del Tribunal Supremo de 17 de febrero y 22 de noviembre de 2015 y de 10 de noviembre de 2016.

II. Una vez determinada por sentencia la filiación paterna de un menor inscrito inicialmente solo con la materna, se plantea controversia acerca del orden de los apellidos que se deben atribuir al hijo en tanto que la madre solicita la anteposición del materno mientras que el progenitor insiste en la aplicación de la regla general del artículo 194 RRC consignando el apellido paterno en primer lugar. Ante la falta de acuerdo, la encargada del registro decidió mantener como primer apellido el materno que el menor tenía atribuido desde su nacimiento. El padre recurrió la decisión invocando la aplicación de la regla general del artículo 194 RRC.

III. El artículo 194 RRC dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre. La opción de atribuir al hijo como primer apellido el materno ha de ejercitarse, según el mencionado art. 109 CC, de común acuerdo antes de la inscripción, de manera que, en términos de estricta legalidad vigente en el momento en que se inició el expediente, ante la oposición del padre, cotitular de la patria potestad, debía aplicarse a este caso la regla general.

IV. Sin embargo, tal como mantiene reiteradamente el Tribunal Supremo a partir de la sentencia de 17 de febrero de 2015 en la que basa su decisión la encargada del registro, la norma no debe interpretarse literalmente cuando lo que está en juego es el interés superior de un menor, debiendo ser este el criterio determinante siempre que se trate de adoptar cualquier medida que le afecte. En este sentido, la exposición de motivos de la Ley del Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, se refiere expresamente a la configuración del nombre y apellidos como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad que, como tal, se incorpora a la inscripción de nacimiento, prescindiendo, con el fin de avanzar en la igualdad de género, de la histórica

prevalencia del apellido paterno frente al materno y permitiendo que ambos progenitores decidan el orden de los apellidos. Así, el art. 49 de la nueva ley dispone en su apartado segundo que, si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral y en caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del registro les requerirá para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de los apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

V. Queda claro pues que es el interés superior del menor el que inspira a la nueva ley para resolver los conflictos en esta materia, confiando en que sea el encargado del registro, en caso de desacuerdo, el que valore tal interés y tome la decisión. Si esta interpretación ya fue asumida por el Tribunal Supremo incluso antes de la entrada en vigor del artículo 49 en aras de una corrección de la legislación entonces todavía vigente para adecuarla a los principios constitucionales, con mayor razón debe ser sostenida tras haber sido declarada la vigencia del mencionado artículo a partir del 15 de octubre de 2015. Lo relevante, en definitiva, no es el deseo de los progenitores, sino el interés protegible del menor en relación con el cambio de los apellidos con los que ha venido siendo identificado desde que nació. En este caso debe tenerse en cuenta que el afectado fue inscrito inicialmente con una sola filiación conocida, atribuyéndole como primer apellido el primero de la madre y, si bien el niño contaba con poco más de dos años cuando quedó determinada su filiación paterna, no estando aún escolarizado, no hay que olvidar, por un lado, el tiempo transcurrido desde entonces hasta la presente resolución y, por otro, la relevancia individualizadora del primero de los apellidos a efectos de identificación no solo en el ámbito escolar sino también en el sanitario (donde el nacido estará registrado desde que nació) o en el administrativo. De manera que, ante el desacuerdo de los progenitores y en consonancia con la decisión adoptada por la encargada del registro, no constando acreditada ninguna circunstancia que aconseje el cambio del primer apellido con el que el menor aparece identificado desde su nacimiento, se concluye que no hay razón para modificar el primer apellido del inscrito, sin perjuicio, naturalmente, de que el propio interesado, una vez alcanzada la mayoría de edad, pueda solicitar la inversión mediante simple declaración ante el encargado del registro si tal fuera su deseo.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón (Asturias).

Resolución de 23 de junio de 2017 (25.ª)

Régimen de apellidos de los españoles.—*No constando que el padre y la madre decidieran de común acuerdo antes de la inscripción (cfr. arts. 109 CC y 55 LRC) el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de la madre (art. 194 RRC).*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra calificación de la juez encargada del Registro Civil de Puerto del Rosario (Las Palmas).

HECHOS

I

El 6 de noviembre de 2015 Don M. R. G. y Doña A. B. E. presentaron en el Registro Civil de Puerto del Rosario cuestionario para la inscripción de su hijo, nacido el de 2015 en el hospital de F. según se acredita con parte facultativo del centro sanitario, e inscrito el menor con el nombre de H. y los apellidos B. R., el padre interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los dos progenitores acudieron al registro civil para la inscripción del hijo común, que en ese momento no pudieron acordar el orden de los apellidos y que, por tanto, carece de justificación que se consignaran en orden inverso al interesado por él y solicitando que se requiera a la encargada para que explique el criterio seguido y, si no es el interés superior del menor, se revoque su decisión y se inscriba al nacido como H. R. B.

II

Unidas las actuaciones que precedieron a la práctica del asiento de nacimiento, el ministerio fiscal se opuso al recurso toda vez que, firmados por el padre en su momento los documentos pertinentes sin cuestionar el orden de apellidos, lo procedente no es un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado sino la tramitación *a posteriori* del oportuno expediente de cambio de apellidos y el juez encargado informó que, si bien el padre no participó en la cumplimentación del cuestionario para la declaración de nacimiento, firmó con posterioridad el boletín estadístico de parto y, por tanto, debe entenderse que prestó su consentimiento al orden de apellidos del hijo y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a este centro directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC); 2, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las

resoluciones de 20-154.^a de marzo de 2014 y 26-56.^a de junio, 10-31.^a de julio, 11-33.^a de septiembre y 23-42.^a de octubre de 2015.

II. En virtud de declaración firmada solo por la madre un nacido es inscrito con el apellido materno como primero y el paterno como segundo y el padre recurre la calificación efectuada.

III. Dispone el artículo 194 RRC que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de la madre, conforme al precepto legal citado la anteposición del apellido materno ha de ser decidida por ambos progenitores de común acuerdo antes de la inscripción, del propio asiento consta que el nacimiento ha sido declarado solo por la madre y, por tanto, rige la regla general establecida por la ley -el artículo 49 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que el recurrente invoca no ha entrado en vigor en lo que respecta a la atribución de apellidos- y no cabe considerar válidamente suplida la imprescindible anuencia del padre por la firma posterior por ambos progenitores del boletín estadístico de parto porque tal documento ni es título válido para la inscripción ni, una vez practicada esta, tiene fuerza probatoria a efectos registrales (*cf.* art. 2 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación apelada.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Puerto del Rosario (Las Palmas)

Resolución de 30 de junio de 2017 (28.^a)

Régimen de apellidos españoles.—*Los apellidos de un español son los determinados por la filiación según la ley española, primero del padre y primero de los personales de la madre en el orden elegido (art. 109 del Código Civil) y, por tanto, no cabe atribuir al nacido como apellidos primero y segundo el nombre y el apellido único de su padre cuya ley personal no ha de condicionar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Registro del Registro Civil máxime cuando dicha ley extranjera resulta contraria al orden público español (art. 12.3 CC) en relación al menos con dos principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico en la materia: la infungibilidad de las líneas paterna y materna y la duplicidad de apellidos de los españoles, incompatible con la petición alternativa de que se le atribuya como apellido único el paterno.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación del encargado del Registro Civil Consular de Viena (Austria).

HECHOS

I

El 2 de septiembre de 2015 doña A. A. H. H. I., de nacionalidad española, nacida el 15 de enero de 1993 en E. (Egipto) y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en Viena, presentó en el registro civil consular impreso de declaración de datos para la inscripción de nacimiento de su hijo A., nacido en V. (Austria) de padre egipcio el de 2015, acompañando la siguiente documentación: extracto de acta de nacimiento del registro local en la que el menor consta identificado como A. S.; copia cotejada de pasaporte y extracto de registro de nacimiento egipcios del padre, A.E.E.E.S. y, propia, copia cotejada de DNI y simple de certificación literal de inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Tarazona (Zaragoza) el 18 de marzo de 2014 con marginal de constancia de que el padre de la inscrita ha adquirido la nacionalidad española sobrevenida por residencia en fecha 21 de noviembre de 2013 y de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil, la propia inscrita ha optado por la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil de Tarazona el día 19 de febrero de 2014.

II

Inscrito el menor con los apellidos A. H. S., los progenitores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que por el maltrato que la promotora ha recibido de su padre no pueden soportar que el nombre de este, «A. H.», sea el primer apellido del menor y solicitando que se consigne como tal «A. E.», el nombre del padre del nacido, o alternativamente que, como en el registro austriaco, conste «S.» como apellido único.

III

De la interposición se dio traslado al canciller en funciones de ministerio fiscal (art. 54 RRC) que, considerando que los apellidos solicitados para el menor parecen coincidir con la tradición egipcia, que transmite al hijo en bloque el nombre completo y el apellido familiar del padre, pero no se atienen al ordenamiento jurídico español, como tampoco la alternativa de que ostente como apellido único el paterno, se opuso al recurso y el encargado del registro civil consular informó que entiende que no procede informar de manera favorable sobre las pretensiones de la promotora y seguidamente dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC), 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado de 23 de mayo de 2007 y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de octubre de 2000, 25-3.^a de enero de 2002, 17-2.^a de marzo de 2004, 20-5.^a de octubre de 2006, 28-4.^a de noviembre de 2007, 6-4.^a de marzo de 2008, 28-2.^a de noviembre de 2011, 6-22.^a y 9-20.^a de mayo de 2013; 27-3.^a de enero, 9-153.^a y 31-68.^a de marzo, 21-22.^a de abril, 16-26.^a de septiembre y 26-39.^a de diciembre de 2014 y 29-12.^a de mayo y 23-47.^a de octubre de 2015.

II. Interesa la promotora la inscripción de su hijo, nacido en Viena el..... de 2015 de madre española y padre egipcio, aportando certificación del registro local que expresa que su nombre es A y su apellido S. e, inscrito con los apellidos A. H. S., materno y paterno, los progenitores impugnan la calificación efectuada en recurso en el que solicitan que se sustituya el primer apellido por «A. E.», que es el nombre del padre del inscrito, o alternativamente que se suprima y quede «S.» como apellido único.

III. El artículo 194 RRC, que dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de los personales de la madre, es una norma de derecho interno referida a la composición de los apellidos de las personas de nacionalidad española y, por tanto, no cabe, como pretenden los recurrentes, que se hagan constar como apellidos primero y segundo de un español el nombre y el apellido de su padre egipcio.

IV. Si bien, en principio, el menor al que se refieren estas actuaciones, al parecer de doble nacionalidad española y egipcia, podría verse abocado a ser identificado de forma distinta en los dos países de los que es nacional, para asegurar la adecuada identificación de las personas en quienes concurre esta circunstancia el derecho internacional privado y los ordenamientos jurídicos internos prevén mecanismos de coordinación de los registros civiles de los Estados y la legislación española admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, sea objeto de anotación registral, conforme al artículo 38.3.º LRC, a fin de poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y disipar dudas respecto a la identidad del inscrito.

V. De otro lado, en este caso no asiste a los representantes legales del menor plurinacional el derecho a elegir una de las leyes nacionales concurrentes a través del expediente registral de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 y siguientes LRC porque nuestra legislación en la materia se basa en los principios concurrentes de duplicidad de apellidos y de infungibilidad de las líneas paterna y materna, principio que no se exceptiona ni siquiera en el ámbito de los expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia (art. 57.3.º LRC) puesto que resulta contraria al orden público español la transmisión de los dos apellidos por una sola de las líneas, sea la paterna o la materna y, por la misma razón, a salvo lo que para los binacionales de España y otro país de la Unión Europea resulta del

derecho comunitario, tampoco es admisible que un español sea designado legalmente por un solo apellido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Viena (Austria).

2.4 Cambio de apellidos

2.4.1 MODIFICACIÓN DE APELLIDOS

Resolución de 24 de febrero de 2017 (16.^a)

Modificación de apellidos.—*La inversión de apellidos del inscrito dentro de plazo requiere que la opción sea ejercitada por los padres, de común acuerdo, «antes de la inscripción».*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Inca (Illes Balears).

HECHOS

I

En escrito recibido en el Registro Civil de Inca en fecha 24 de febrero de 2015 Doña S. S. G. y Don J. A. A., mayores de edad y domiciliados en S. P. (Illes Balears) y C. (Valencia), respectivamente, exponen que por el Registro Civil de Sa Pobla se inscribió en fecha 29 de enero de 2015 a su hijo, nacido el de 2015 en el Hospital Comarcal de I., con los apellidos A. S. y que su voluntad es que se apellide S. A., tal como fue manifestado por los padres desde el momento del nacimiento, acompañando copia simple del DNI de ambos, de documento de desplazamiento temporal de A. S. A. expedido por el Servicio Balear de Salud y de certificación literal de inscripción de nacimiento del menor.

II

El ministerio fiscal informó que, acreditado suficientemente el hecho, estima que procede acceder a la petición y el 14 de mayo de 2015 la juez encargada, razonando que no se ha solicitado el orden de los apellidos en el momento de la inscripción del nacimiento,

según establecen los arts. 109 del Código Civil y 55 de la Ley del Registro Civil, dictó auto disponiendo denegar la inversión de apellidos del menor.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los progenitores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que lo único que quieren es modificar el orden de los apellidos del menor, de manera que tenga en primer lugar el materno y en segundo el paterno, tal como manifestaron desde el primer momento de su estancia en el hospital, y acompañando como prueba copia simple de copia cotejada de Boletín Estadístico del Parto.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista de que ambos progenitores están de acuerdo desde el nacimiento en invertir el orden de apellidos, se adhirió al recurso y la juez encargada dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 26-4.^a de septiembre de 2002, 1-1.^a de abril y 17-3.^a de octubre de 2003; 20-4.^a de enero, 10-1.^a de febrero, 6-2.^a de abril y 21-3.^a de mayo de 2004; 8-3.^a de julio y 19-5.^a de diciembre de 2005, 4-4.^a de septiembre de 2006; 31-2.^a de enero, 11-2.^a de abril y 14-10.^a de septiembre de 2007; 17-6.^a de noviembre de 2008, 22-9.^a de febrero y 31-7.^a de mayo de 2010; 2-40.^a de septiembre, 15-85.^a de noviembre y 13-41.^a de diciembre de 2013, 5-71.^a de diciembre de 2014 y 5-44.^a de junio y 10-33.^a y 17-13.^a de julio de 2015.

II. La decisión de atribuir a los hijos como primer apellido el materno y como segundo el paterno han de tomarla los padres, de común acuerdo, «antes de la inscripción registral» del mayor de los hermanos del mismo vínculo (art. 109 CC redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre) de modo que, aunque en determinadas instancias administrativas ya hubieran manifestado su intención de anteponer el apellido materno, no ejercitada formalmente la opción en sede registral en el momento de declarar el nacimiento, ha de inscribirse al nacido con el primer apellido paterno como primero y con el primer materno como segundo (*cf.* arts. 109 CC, 53 y 55 LRC y 194 RRC).

III. Así pues, instada por los padres el 24 de febrero de 2015 la inversión de apellidos del inscrito el 29 de enero de 2015, la solicitud ha de ser desestimada. Tendrá que ser el propio interesado quien, alcanzada la mayoría de

edad, pueda obtener la inversión extemporáneamente pretendida por sus progenitores mediante simple declaración ante el encargado del registro civil de su domicilio. Si antes de ese momento concurrieran los requisitos exigidos (*cf.* arts. 57 LRC y 205 RRC), podrían los padres obtener el mismo resultado a través de un expediente gubernativo de cambio de apellidos, que se tramita e instruye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el Ministro de Justicia y, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado/a del Registro Civil de Inca (Illes Balears).

Resolución de 24 de marzo de 2017 (16.^a)

Modificación de apellidos.—*La regularización ortográfica de un apellido por simple petición requiere que la forma inscrita no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente y, no acreditado que tal circunstancia concorra en «Arnal», no cabe sustituirlo por «Arnau».*

En las actuaciones sobre adecuación ortográfica de apellido en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

En comparecencia en el Registro Civil de Barcelona de fecha 23 de junio de 2015 don S. Arnal H., nacido el 7 de julio de 1978 en Barcelona y domiciliado en dicha población, solicita, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Registro Civil, constancia registral de la forma normativamente correcta de su primer apellido, con lo cual pasará a ser «Arnau», acompañando copia simple de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento y certificado expedido por el Institut d'Estudis Catalans para constancia de que la variante pretendida es correcta en catalán.

II

Visto que del certificado aportado parece resultar que son dos variantes ortográficamente correctas en lengua catalana, la juez encargada dispuso officiar a la referida institución, a fin de que informe si la forma inscrita es ortográficamente incorrecta o castellanizada, con el resultado de que, de acuerdo con los criterios ortográficos modernos, «Arnau» es lo correcto.

III

El 14 de agosto de 2015 la juez encargada dictó providencia disponiendo denegar la petición por considerar que, siendo «Arnal» apellido de uso generalizado en todo el territorio de la antigua corona de Aragón, no parece forma castellanizada, incorrecta conforme a las normas gramaticales de la lengua catalana y, por tanto, no se da el supuesto contemplado en el artículo 55 de la Ley del Registro Civil y debe instarse la modificación por la vía del expediente registral regulado en los artículos 205 y 206 del Reglamento del Registro Civil.

IV

Notificada la resolución al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la argumentación esgrimida ignora el certificado de la máxima autoridad lingüística catalana y aportando una segunda certificación de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans que da constancia de la filiación lingüística catalana de la forma gráfica antigua Arnal, a la que corresponde la grafía Arnau según la normativa ortográfica vigente.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista de las alegaciones formuladas y del certificado expedido por la oficina de onomástica, se adhirió al recurso y la juez encargada informó que, en contra del parecer del ministerio fiscal, de lo actuado no puede deducirse que el apellido «Arnal» figure inscrito en el registro civil con una grafía catalana normativamente incorrecta y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 55, 57 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 5-1.^a de junio de 1999, 23-4.^a de mayo y 3-6.^a de noviembre de 2000; 7-3.^a de marzo, 16, 18-3.^a y 4.^a y 24-2.^a de abril y 7-9.^a de septiembre de 2001; 22-1.^a de enero, 9-3.^a de febrero, 1-3.^a de junio, 6-4.^a de septiembre y 11-2.^a de diciembre de 2002; 23-4.^a de octubre de 2003, 22-2.^a de septiembre de 2004, 16-5.^a y 18-1.^a de febrero de 2005, 20-3.^a de diciembre de 2006, 23-1.^a de octubre y 30-1.^a de noviembre de 2007, 4-5.^a de julio y

18-8.^a de noviembre de 2008, 5-20.^a y 16-5.^a de septiembre de 2010, 5-20.^a de septiembre de 2012; 19-21.^a de abril, 21-17.^a y 28-6.^a de junio, 15-55.^a de julio, 2-42.^a y 106.^a de septiembre y 7-40.^a de octubre de 2013; 30-46.^a de enero, 17-44.^a de febrero, 17-21.^a de marzo, 3-93.^a de septiembre y 1-33.^a de octubre de 2014 y 13-12.^a de marzo, 24-21.^a de julio y 23-45.^a de octubre de 2015.

II. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 LRC «el encargado del registro, a petición del interesado o su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente». Esta norma debe interpretarse en el sentido de que es posible, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, adaptar los apellidos propios de una lengua española incorrectamente inscritos en el registro civil a la grafía normativamente correcta en dicha lengua y que la traducción o la adaptación a la grafía de una lengua española de los apellidos no pertenecientes a esa lengua ha de obtenerse por la vía del expediente de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 LRC y 205 RRC.

III. En este caso, en el que el interesado pretende obtener por simple petición constancia registral de la adaptación ortográfica del apellido «Arnal» y su sustitución por la forma que aduce normativamente correcta en lengua catalana, no se dan los presupuestos de hecho para la aplicación del artículo 55 LRC dado que, acreditado del certificado del Institut d'Estudis Catalans que la forma «Arnau» se atiene a los criterios ortográficos modernos y que «Arnal» es grafía catalana anterior a la fijación de dichos criterios, no cabe apreciar incorrección ortográfica en la forma bajo la que consta inscrito en el Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 24 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 12 de abril de 2017 (15.^a)

Modificación de apellidos.—1.º *Para que el cambio de apellido del padre alcance a los descendientes no sujetos a la patria potestad es preciso que estos, en los términos previstos en el artículo 217 del Reglamento del Registro Civil, formulen su consentimiento dentro de los dos meses siguientes a la inscripción y, transcurrido el plazo de caducidad, decae el derecho.*

2.º Acreditando la situación de hecho exigida en el artículo 57.1.º de la Ley del Registro Civil, puede obtenerse el mismo resultado a través del oportuno expediente gubernativo de cambio de apellidos.

En las actuaciones sobre modificación de apellido en inscripciones de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por las promotoras contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Santander (Cantabria).

HECHOS

I

Mediante sendos escritos presentados en el Registro Civil de Santander en fecha 20 de octubre de 2015 doña A-M. y doña M-T. G. S. de T., nacidas en Sevilla el 17 de mayo de 1962 y el 24 de julio de 1963, respectivamente, y domiciliadas en Santander, solicitan el cambio de su primer apellido por «G.V.», exponiendo que es el que actualmente ostenta su padre, que lo ha variado, y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, volante de inscripción en el padrón de Santander y copia simple de DNI de ambas y certificación literal de inscripción de nacimiento de su padre, F. G. H-R., nacido en S. el 31 de mayo de 1931, en la que consta practicada el 24 de julio de 2015 marginal de constancia de que, en virtud de resolución registral de fecha 15 de junio de 2015 del encargado del Registro Civil de Soria, los apellidos del inscrito serán en lo sucesivo G-V. H-R.

II

El 23 de octubre de 2015 la juez encargada, visto que han transcurrido más de dos meses desde que el padre de las solicitantes modificara sus apellidos, dictó auto acordando no admitir a trámite los escritos presentados.

III

Notificada la resolución a las promotoras, estas interpusieron sendos recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el registro civil no les informaron de que hubiera un plazo, que sus hermanos ya han realizado el cambio de apellido y que ellas aún no habían podido hacerlo, porque han estado desplazadas atendiendo a su padre primero en Burgos, donde fue operado de urgencia, y luego en Sevilla, durante la convalecencia, y aportando copia simple de justificante de intervención quirúrgica al padre en fecha 10 de septiembre de 2015 y de certificación literal de inscripción de nacimiento de M. G. S. de T., nacida en S. el 23 de noviembre de 1964, en la que consta practicada en fecha 27 de agosto de 2015 marginal de consentimiento por la inscrita, dentro del plazo legal, al cambio de apellido de su padre en comparecencia de la misma fecha ante el encargado del Registro Civil de Sevilla.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación de los recursos y la confirmación de la resolución apelada, y la juez encargada informó que las alegaciones efectuadas y la documental aportada no desvirtúan la fundamentación legal de la denegación y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 57 y 61 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 217, 342, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 13 de julio de 1996, 5-1.ª de julio de 2005 y 8-4.ª de mayo de 2006.

II. Las promotoras, nacidas en Sevilla el 17 de mayo de 1962 y el 24 de julio de 1963, comparecen en el registro civil de su domicilio en fecha 20 de octubre de 2015 a fin de solicitar que su primer apellido, «G.», pase a ser «G.V.» tras haber hecho su padre ese cambio y la juez encargada del Registro Civil de Santander acuerda no admitir a trámite los escritos presentados, por haber transcurrido más de dos meses desde la modificación del progenitor, mediante auto de 23 de octubre de 2015 que constituye el objeto de los presentes recursos.

III. Obtenida la modificación de un apellido a través del correspondiente expediente, el cambio alcanza a los descendientes mayores de edad siempre que, con sujeción a las reglas formales de reconocimiento ante el encargado, lo consientan expresamente en el propio expediente o dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del cambio (*cf.* arts. 61 LRC y 217 RRC), y siempre que, obviamente, el cambio de apellidos haya sido aprobado por el órgano competente (*cf.* arts. 57 y 59 LRC y 205, 209 y 365 RRC), circunstancia que es controlable en vía de calificación por el encargado del registro en el que deba practicarse la inscripción solicitada (*cf.* art. 27 LRC).

IV. En este caso, habiéndose inscrito el cambio de apellido del padre el 24 de julio de 2015 y comparecido dos hijas mayores de edad a prestar su consentimiento el 20 de octubre de 2015, es evidente que ha transcurrido el plazo de dos meses señalado en el precepto reglamentario y, por tanto, ajustada a derecho la decisión de la juez encargada del Registro Civil de Santander que, sin entrar a examinar el hecho cuya inscripción se solicita, examen que excede de su competencia, no admite a trámite los escritos presentados después del vencimiento del plazo, que es de caducidad y, por tanto, opera automáticamente *ipso iure* a partir de la fecha de la inscripción marginal causada por el cambio de apellido. Así pues, decaído el derecho que hubieran podido adquirir en virtud del expediente referido a su padre, las promotoras habrán de obtener el cambio pretendido promoviendo por sí mismas el oportuno

tuno expediente gubernativo de cambio de apellidos, que se tramita e instruye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el Ministerio de Justicia y, por delegación, (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que puede autorizarlo si queda acreditado que concurren los requisitos establecidos en los artículos 57 LRC y 205 RRC, en este caso, que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander (Cantabria).

Resolución de 26 de mayo de 2017 (26.^a)

Modificación de apellidos.–1.º *Se acumulan recursos idénticos.*

2.º *Para que la inversión de apellidos del padre alcance a los descendientes no sujetos a la patria potestad es preciso que estos, en los términos fijados en el artículo 217 del Reglamento del Registro Civil, formulen su consentimiento dentro de los dos meses siguientes a la inscripción y, no prevista por norma alguna la notificación a los hijos de tal inscripción, transcurrido el plazo de caducidad el derecho decae.*

3.º *Queda a salvo la posibilidad de obtener el mismo resultado a través del expediente gubernativo de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre modificación de apellido en inscripciones de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud de los interpuestos por los promotores contra sendos autos dictados por la juez encargada del Registro Civil de Tortosa (Tarragona).

HECHOS

I

En sendas comparencias en el Registro Civil de Traiguera (Castellón) de fecha 17 de marzo de 2015 don D. y don J. Bo. D., nacidos en T. el 16 de junio de 1983 y el 11 de junio de 1984, respectivamente, y domiciliados en T., manifiestan su voluntad de adquirir como primer apellido Be., exponiendo que su padre alteró el orden de los que ostentaba en el año

2014 y acompañando cada uno fotocopia compulsada de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento, certificación de inscripción en el padrón de T. y certificación literal de inscripción de nacimiento de su padre, J. M. Bo. Be., nacido en S. C. R. (Tarragona) el 17 de enero de 1958, en la que consta practicada el 22 de agosto de 2014 marginal de constancia de que, en virtud de comparecencia ante del encargado del Registro Civil de Vinaròs (Castellón) de fecha 2 de junio de 2014, los apellidos del inscrito serán en adelante Be. Bo.. J. aporta, adicionalmente, volante de convivencia expedido por el Ayuntamiento de T., certificación literal de inscripción de nacimiento de una hija y escrito de la madre de la menor dando su consentimiento al cambio de apellido de esta.

II

Remitidas las actas de comparecencia y la documentación aportada al Registro Civil de Tortosa, por conducto del de Vinaròs, la juez encargada, visto que han transcurrido más de dos meses desde que el padre modificara el orden de sus apellidos, dictó sendos autos de fecha 26 de abril de 2015 acordando denegar el cambio de apellido instado.

III

Notificadas las resoluciones a los interesados, estos presentaron sendos escritos de alegaciones exponiendo que en marzo de 2014 su padre entregó en el Registro Civil de Vinaròs la documentación para alterar el orden de sus apellidos y, en el mismo acto, ellos solicitaron el cambio de apellido paterno, que a ninguno de los tres se les notificó nada, que su padre tuvo conocimiento de la inversión al recibir la tarjeta censal para las elecciones locales y autonómicas de febrero de 2015, que entonces ellos se personaron en el registro civil de su domicilio para ver qué había pasado con sus solicitudes y que, informados de que no constaban ni en el Registro Civil de Vinaròs ni en el de Tortosa, reiteraron la solicitud y presentaron nueva documentación.

IV

Recibidos los anteriores escritos en el Registro Civil de Tortosa, la juez encargada dictó sendas providencias de fecha 28 de julio de 2015 disponiendo devolver las actuaciones y que se esté a lo dispuesto en los autos de 26 de abril de 2015, sin perjuicio de que los solicitantes puedan elevar sus alegaciones a la DGRN, como efectivamente hacen mediante sendos recursos de fecha 10 de noviembre de 2015.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que informó que, al no constar notificación efectiva a partir de la cual computar el plazo de dos meses para consentir el cambio de apellidos del padre, no se opone a los recursos y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 61 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 217, 342, 347, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 13 de julio de 1996, 5-1.^a de julio de 2005 y 8-4.^a de mayo de 2006.

II. Los promotores, nacidos el 16 de junio de 1983 y el 11 de junio de 1984, comparecen en el registro civil de su domicilio en fecha 17 de marzo de 2015 a fin de solicitar que su primer apellido, «Bo.», pase a ser «Be.», el primero de su padre tras haber formalizado la inversión de los que ostenta, y la juez encargada del Registro Civil de Tortosa, visto que las solicitudes se formulan cuando han transcurrido más de dos meses desde que el padre modificara el orden de sus apellidos, acuerda denegar los cambios de apellido instados mediante sendos autos de 26 de abril de 2015 que constituyen el objeto de los presentes recursos.

III. Dada la íntima conexión existente entre los dos recursos entablados, sustancialmente idénticos, y correspondiendo la competencia para resolverlos al mismo órgano, se acumulan de oficio (*cf.* art. 347 RRC).

IV. Formalizada por el padre la inversión de los apellidos que ostenta, el cambio alcanza a los descendientes mayores de edad siempre que, con sujeción a las reglas formales de reconocimiento ante el encargado, lo consientan expresamente en el expediente o dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del cambio (*cf.* arts. 61 LRC y 217 RRC).

V. En este caso, habiéndose inscrito la inversión de apellidos del padre el 22 de agosto de 2014 y comparecido dos hijos mayores de edad a prestar su consentimiento el 17 de marzo de 2015, es evidente que ha transcurrido el plazo de caducidad de dos meses señalado en el precepto reglamentario, que opera automáticamente *ipso iure* a partir de la fecha de la inscripción marginal practicada en la de nacimiento del padre y no resulta afectado por la circunstancia de que los interesados no llegaran a tener conocimiento de la modificación de apellidos del progenitor hasta después del vencimiento del citado plazo ya que, con independencia de las consideraciones que puedan hacerse sobre la conveniencia de una notificación expresa del cambio y de su inscripción a los descendientes, tal trámite no está previsto en el específico procedimiento registral reglamentariamente establecido para prestar el consentimiento al cambio de apellidos de un ascendiente, ya sea porque se considere que la información sobre el hecho del cambio de apellidos y su influencia en los hijos no sometidos a la patria potestad pertenece al ámbito de la comunicación y relación familiar, ya sea por la propia eficacia de la publicidad registral que opera en otros ámbitos de nuestro ordenamiento civil registral.

VI. Así pues, decaído el derecho que hubieran podido adquirir en virtud de la inversión formalizada por su padre, los promotores habrán de instar el cambio pretendido a través del oportuno expediente gubernativo de cambio de apellidos, regulado en los artículos 57 y siguientes LRC, que se tramita e ins-

truye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el Ministerio de Justicia y, por delegación, (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar los recursos y confirmar los autos apelados.

Madrid, 26 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tortosa (Tarragona)

Resolución de 16 de junio de 2017 (19.ª)

Modificación de apellidos.–*La inversión de los apellidos del inscrito dentro de plazo requiere que la opción sea ejercitada por los padres, de común acuerdo, «antes de la inscripción».*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra acuerdo calificador de la juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

El 30 de septiembre de 2015 doña S. B. D., mayor de edad y domiciliada en Barcelona, comparece en el registro civil de dicha población al objeto de solicitar que en la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad È. G. B., nacida en B. el de 2013, se anteponga el apellido materno al paterno exponiendo que es la voluntad de ambos progenitores y acompañando copia simple de DNI propio, escrito dirigido al registro en el que el padre y la madre piden de común acuerdo al registro el cambio de orden de los apellidos de la menor y certificación literal de las inscripciones de nacimiento de la menor y de sus padres.

II

El 13 de octubre de 2015 la juez encargada dictó acuerdo calificador disponiendo denegar la inversión de apellidos solicitada, ya que la facultad de anteponer el apellido materno no se ejercitó antes de la inscripción del recién nacido, tal como determina el artículo 109 del Código Civil, y no es posible hacer uso de ella en un momento posterior.

III

Notificada la calificación a los dos progenitores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el acto apelado, efectuando una interpretación restrictiva del art. 109 CC, no tiene en cuenta que la madre no pudo realizar la declaración de voluntad en el momento de la inscripción porque, tres días después del alumbramiento, no estaba en uso pleno de sus capacidades y se encontraba en situación de absoluta desorientación y fragilidad, que no es lógico que, cuando su estado de salud se ha normalizado, no se le permita efectuar dicha declaración de voluntad y que la alteración del orden de apellidos causa mucho mayor perjuicio a los 18 años, aunque la pida el propio interesado, que cuando el menor no tiene aún una identidad creada y, aportando informe emitido en su momento por el hospital donde acaeció el alumbramiento por cesárea y declaración de psicóloga colegiada sobre depresión postparto que requirió cinco meses de seguimiento.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación por sus propios fundamentos de la resolución apelada, y la Juez Encargada reiteró los argumentos y razonamientos expuestos en el acuerdo calificador impugnado, respecto a las alegaciones formuladas informó que considera que no cabe invocar el interés superior del menor y su derecho a tener una identidad, plenamente salvaguardados con los apellidos impuestos, ni la falta de plena capacidad de la madre por la patología depresiva que le afectó después del parto, que no supuso obstáculo para que los dos progenitores comparecieran conjuntamente para solicitar, en aplicación del artículo 16.2 de la Ley del Registro Civil, la inscripción de nacimiento en el registro civil del domicilio, y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 26-4.^a de septiembre de 2002, 1-1.^a de abril y 17-3.^a de octubre de 2003; 20-4.^a de enero, 10-1.^a de febrero, 6-2.^a de abril y 21-3.^a de mayo de 2004; 8-3.^a de julio y 19-5.^a de diciembre de 2005, 4-4.^a de septiembre de 2006; 31-2.^a de enero, 11-2.^a de abril y 14-10.^a de septiembre de 2007; 17-6.^a de noviembre de 2008, 22-9.^a de febrero y 31-7.^a de mayo de 2010; 2-40.^a de septiembre, 15-85.^a de noviembre y 13-41.^a de diciembre de 2013, 5-71.^a de diciembre de 2014 y 5-44.^a de junio y 10-33.^a y 17-13.^a de julio de 2015.

II. La decisión de atribuir a los hijos como primer apellido el materno y como segundo el paterno han de tomarla los padres, de común acuerdo, «antes de la inscripción registral» del mayor de los hermanos del mismo vínculo (*cf.* art. 109 CC redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre) y, no ejercitada

la opción en ese momento, ha de inscribirse al nacido con el primer apellido paterno como primero y con el primero materno como segundo (*cf.* arts. 109 CC, 53 y 55 LRC y 194 RRC).

III. En este caso la inversión del orden de los apellidos de la hija, nacida en 2013, es instada por los padres el 30 de septiembre de 2015 y la alegación formulada en el escrito de recurso de que cuando declararon el nacimiento, tres días después del alumbramiento, la madre no estaba en plenitud de facultades físicas y psicológicas no puede ser acogida, habida cuenta de que la declaración consta realizada ocho días después del parto por los dos progenitores y que estos solicitaron, de común acuerdo, que la inscripción se practicara en el registro civil de su domicilio. Así pues, tendrá que ser la propia interesada quien, alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, extemporáneamente pretendida por sus progenitores, mediante simple declaración ante el encargado del registro civil de su domicilio. Si antes de ese momento llegaran a concurrir los requisitos exigidos, en este caso que los apellidos en la forma propuesta constituyan una situación de hecho no creada, (arts. 57.1 LRC y 205.1 RRC), podrían los padres obtener el mismo resultado a través de un expediente gubernativo de cambio de apellidos, que se tramita e instruye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el ministro de Justicia y, por delegación, (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo calificador apelado.

Madrid, 16 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 30 de junio de 2017 (27.^a)

Modificación de apellidos.–*No puede hacer uso de la facultad de invertir los apellidos que concede al mayor de edad el artículo 109 del Código Civil quien siendo mayor de edad adquirió la nacionalidad española y en ese momento determinó el orden de los apellidos paterno y materno.*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra acuerdo calificador de la juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

En comparecencia en el Registro Civil Consular de París (Francia) de fecha 8 de septiembre de 2015 don D-J. S. C., nacido el 4 de octubre de 1987 en L. (Polonia) y domiciliado en la demarcación del Consulado General de España en París, solicita que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Civil, se realice en su asiento de nacimiento marginal de inversión de apellidos. Acompaña copia simple de pasaporte y de certificación literal de inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Barcelona el 5 de junio de 2008 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución de la DGRN de 19 de noviembre de 2007.

II

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Barcelona, se unieron certificación literal de nacimiento del interesado y copia del acta de juramento o promesa obrante en el expediente de nacionalidad y el 6 de octubre de 2015 la juez encargada, visto que el solicitante, mayor de edad en el momento de levantarse el acta de adquisición de la nacionalidad española, eligió como primer apellido el paterno y como segundo el materno, citando una resolución de la dirección general de 20 de febrero de 2015, dictada en vía de recurso contra calificación de ese mismo registro, dispuso denegar la inversión solicitada sin perjuicio de que, si concurrieran los requisitos legalmente exigidos, pueda el solicitante obtener su pretensión a través de expediente tramitado e instruido en el registro civil del domicilio y resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

III

Notificado el acuerdo de calificación al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el momento de prestación de la promesa no fue informado de la imposibilidad de invertir los apellidos en el futuro y la fecha de la resolución de la DGRN que cita la titular del registro confirmaría que en 2008 no podía saberse, que el orden de apellidos se estableció, sin que él expresara su voluntad al respecto, aplicando la ley por defecto y que la anteposición del apellido materno supone para él un modo de recompensar moralmente a su familia materna por todo el esfuerzo realizado para contrapesar la ausencia paterna.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución apelada, y la juez encargada informó que se ratifica en los argumentos expuestos en el acuerdo dictado y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 18-3.^a de septiembre, 21-5.^a de octubre y 9-2.^a de noviembre de 1999; 6 de octubre de 2000, 23-2.^a de febrero de 2001, 7-1.^a de febrero de 2002, 3-2.^a de enero y 31-1.^a de octubre de 2003, 24-2.^a de septiembre de 2004, 30-4.^a de marzo y 5-5.^a de octubre de 2006, 25-5.^a de junio, 22-6.^a de octubre y 5-4.^a de diciembre de 2007; 7-2.^a de febrero y 27-1.^a de mayo de 2008, 5-25.^a de septiembre de 2012, 19-20.^a de abril de 2013; 13-16.^a de marzo, 4-75.^a de septiembre y 19-108.^a de diciembre de 2014 y 20-44.^a de febrero y 13-9.^a de marzo de 2015.

II. El interesado, nacido polaco en 1987, adquiere la nacionalidad española por residencia en abril de 2008, en la inscripción de nacimiento se consignan como primer apellido el primero del padre y como segundo el primero de los personales de la madre y ahora intenta formalizar por simple declaración la inversión de los apellidos inscritos, solicitud que es denegada por la juez encargada, por cuanto tuvo oportunidad de anteponer el apellido materno en el momento de adquirir la nacionalidad, mediante acuerdo calificador de 6 de octubre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El régimen de apellidos de los españoles es el establecido en el artículo 194 RRC, que determina que el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de los personales de la madre. El artículo 109 CC, por su parte, permite que el hijo, una vez alcanzada la mayoría de edad, solicite la alteración del orden de los apellidos inscritos, facultad que no está sometida a trámite o requisito alguno distinto de la mera declaración de voluntad formalizada con las solemnidades exigidas por la ley.

IV. Habida cuenta de que el interesado, mayor de edad en el momento en que adquirió la nacionalidad española por residencia e instó la inscripción de su nacimiento, eligió mantener como primer apellido el paterno, único que ostentaba conforme a su ley personal anterior, e incorporar como segundo el primero de los personales de la madre, tal como consta del acta suscrita, no puede en un momento posterior beneficiarse del derecho a invertir los apellidos que concede a todo español mayor de edad el artículo 109 CC porque, determinados los que como español le corresponden siendo mayor de edad y excluyendo la aplicación de la legislación española respecto a la alteración del orden, no puede por simple declaración privar de eficacia a esa elección: del mismo modo que al mayor de edad no le es dado desdecirse de la inversión de apellidos del artículo 109 CC, por identidad de razón y atendiendo a la estabilidad y fijeza de los apellidos, cuya composición, salvo excepciones legalmente tasadas, está sustraída de la autonomía de voluntad de los particulares, no es viable que esa sola voluntad prive de eficacia a la conservación de apellidos libremente elegida sin perjuicio de que, si concurrieran los requisitos exigidos, en este caso que los apellidos en la forma propuesta constituyan una

situación de hecho no creada por el interesado (arts. 57.1.º LRC y 205.1.º RRC), pueda el solicitante obtener el mismo resultado a través del oportuno expediente de cambio de apellidos, que se tramita e instruye en el registro civil del domicilio y se resuelve por el Sr. Ministro de Justicia y, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo calificador apelado.

Madrid, 30 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gáligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 21 de julio de 2017 (19.ª)

Modificación de apellidos.–*No cabe, por simple petición, adecuar el apellido «Burusco» a la grafía euskera «Burusko».*

En el expediente sobre adecuación gráfica de apellido en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra resolución del encargado del Registro Civil de Pamplona.

HECHOS

I

Mediante comparecencia el 15 de septiembre de 2015 en el Registro Civil de Ansoain, Don A. Burusco S., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba, de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Registro Civil en la redacción dada por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, la adecuación gráfica de su primer apellido a la lengua vasca, de modo que pase a ser «Burusko». Aportaba la siguiente documentación: certificado de empadronamiento y certificado literal de su nacimiento practicado en el Registro Civil de Pamplona.

II

Remitido el expediente al Registro Civil de Pamplona, competente para su resolución, el encargado, tras realizar una consulta en la página web de la Euskaltzaindia, dictó resolución el 1 de octubre de 2015 denegando la pretensión por no resultar probado que el apellido del promotor sea específicamente vasco.

III

Notificada la resolución se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que aunque la Euskaltzaindia no recoge en su archivo onomástico el apellido Burusko, también indica que en su lista no están recogidos todos los apellidos vascos y que la grafía solicitada ha sido utilizada en documentos públicos del Gobierno de Navarra. Con el escrito de recurso adjuntaba un documento extraído de internet en el que figura su padre identificado como J.-A. Burusko Burusko, un extracto periodístico sobre el origen del apellido «Brusco» donde se dice que es una variante de «Burusco» y un certificado de la Euskaltzaindia que acredita que la transcripción del apellido Burusko según las normas de ortografía eusquerica es «Burusko».

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Pamplona se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 55 de la Ley del Registro Civil (LRC); 206 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 22-1.^a de enero, 1-3.^a de junio, 6-4.^a de septiembre y 11-2.^a de diciembre de 2002; 23-4.^a de octubre de 2003; 18-1.^a y 16-5.^a de febrero de 2005; 20-3.^a de diciembre de 2006; 30-1.^a de noviembre de 2007; 4-5.^a de julio de 2008; 5-20.^a de septiembre de 2012; 28-6.^a de junio y 7-40.^a de octubre de 2013; 17-21.^a de marzo y 9-13.^a de julio de 2014; 13-23.^a de febrero de 2015 y 1-32.^a de julio de 2016.

II. Según el artículo 55 de la Ley del Registro Civil *«el encargado del registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente»*. En virtud de esta norma, un apellido vasco inscrito incorrectamente puede ser sustituido, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, por su forma correcta en lengua vasca. Sin embargo, solo es posible realizar la corrección gramatical de los apellidos propios de una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua, pero no se puede obtener por esa vía ni la traducción de un apellido ni la adaptación gráfica a otra de las lenguas oficiales de apellidos que no sean del acervo propio de esa lengua. No se ha probado en este caso que el apellido cuya modificación se persigue sea específicamente vasco y no se aprecia ninguna incorrección ortográfica en la forma en la que figura atribuido al solicitante en el registro civil. En este sentido, el certificado de la Euskaltzaindia no recoge más que la transcripción del

apellido actual del solicitante a la lengua vasca según las normas ortográficas modernas pero no acredita de ningún modo que sea un apellido vasco incorrectamente escrito.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Pamplona (Navarra).

Resolución de 21 de julio de 2017 (20.ª)

Modificación de apellidos.–*El encargado del registro civil del domicilio puede autorizar en expediente la conservación por el mayor de edad de los apellidos que viniera usando antes de la determinación de filiación siempre que el procedimiento se inste dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la filiación.*

En las actuaciones sobre solicitud de conservación de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Ortigueira (A Coruña).

HECHOS

I

Mediante escrito fechado el 3 de agosto de 2015 y presentado en el Registro Civil del Juzgado de Paz de Cerdido (A Coruña) con sello de entrada el 8 de octubre de 2015, Don A. y D.ª S. R. S. (según se identifican en su solicitud), mayores de edad y con domicilio en N. (A Coruña), solicitaban la conservación de los apellidos que tenían atribuidos antes de la determinación de su filiación paterna por sentencia de 16 de marzo de 2015, con el fin de evitar los inconvenientes derivados del cambio de los que ambos habían venido utilizando desde su nacimiento. Consta en el expediente la siguiente documentación: exhorto del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ferrol, con entrada el 31 de julio de 2015 en el Juzgado de Paz de Cerdido, en el que se instaba la inscripción de la filiación paterna de los promotores; testimonio de la sentencia de 16 de marzo de 2015 del mismo órgano judicial por la que se declara que Don L. S. G., nacido el 2 de octubre de 1916 y fallecido el 29 de julio de 2006, es el padre de D.ª S. y Don A. R. S. y se ordena la inscripción de la filiación paterna en los asientos de nacimiento de ambos; DNI e inscripciones de nacimiento de los promotores, nacidos en C. el 20 de abril de 1947 y el 22 de enero de 1953, respectivamente, hijos de J. R. S., con marginal practicada el 1 de agosto de 2015 para hacer constar su filia-

ción paterna según la sentencia anteriormente indicada; providencia de la encargada del juzgado de paz de Cerdido de 9 de octubre de 2015 de citación a los interesados para ratificar su solicitud y comparecencia de ambos ese mismo día para expresar su deseo de continuar con el expediente iniciado.

II

Remitido el expediente al Registro Civil de Ortigueira, el encargado dictó auto el 27 de noviembre de 2015 denegando la solicitud planteada porque la solicitud de conservación de los apellidos anteriores a la determinación de la filiación paterna se presentó una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la inscripción establecido en los artículos 59.3 de la Ley del Registro Civil y 209.3 de su reglamento.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los interesados que habían presentado la solicitud de conservación en septiembre de 2015 en el Registro Civil de Cerdido, si bien, por motivos ajenos a ellos, el escrito no fue registrado hasta octubre. Para probar sus alegaciones, aportaban sendos certificados de la juez de paz y del secretario del juzgado en los que ambos declaran que, debido a la falta de personal, las instancias presentadas durante el periodo vacacional del secretario se guardan en una carpeta y se les da entrada una vez incorporado el funcionario tras las vacaciones y que los interesados en este caso presentaron su solicitud efectivamente en el mes de septiembre, es decir, aproximadamente un mes después de practicada la inscripción de la nueva filiación, aunque no fue registrada hasta los primeros días de octubre.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, a la vista de los informes presentados, no se opuso a su estimación. El encargado del Registro Civil de Ortigueira emitió informe considerando presentada la solicitud dentro de plazo y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 197, 209 y 210 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 17-1.^a de septiembre de 1997; 27 de enero, 11-1.^a de mayo y 15-1.^a de junio de 1998; 4-2.^a de diciembre de 1999; 5-4.^a de diciembre de 2000; 9-2.^a de octubre de 2008; 10-4.^a de noviembre de 2010 y 18-7.^a de septiembre de 2015.

II. Pretenden los promotores que se mantengan los apellidos que tenían atribuidos antes de la determinación de su filiación paterna, dado que son los

que siempre han usado. Los interesados nacieron en 1947 y 1953, respectivamente, y fueron inscritos únicamente con filiación y apellidos maternos, quedando determinada su filiación paterna no matrimonial mediante sentencia de 16 de marzo de 2015 e inscrita el 1 de agosto siguiente, atribuyendo a los inscritos el apellido paterno conforme a la regla general del artículo 194 RRC. La solicitud de conservación, aunque figura suscrita por los interesados el 3 de agosto, tiene sello de entrada en el registro el 8 de octubre de 2015, lo que, correctamente, llevó al encargado del registro principal a denegar la pretensión por haber sido presentada fuera del plazo legal de dos meses desde que se practicó la inscripción. No obstante, los interesados alegan que habían presentado su solicitud en septiembre y que la demora en la entrada se produjo por causas ajenas a ellos, lo que corroboran en sus respectivos informes tanto la juez de paz como el secretario del municipio en el que constan practicados los asientos aludiendo a la falta de personal y al hecho de que la solicitud se presentó durante el periodo de vacaciones del secretario.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente la conservación por el hijo de los apellidos que viniera usando antes de quedar determinada su filiación siempre que el procedimiento se inste dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de dicha filiación (arts. 209.3.º y 365 RRC) y siempre que, en todo caso, exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC). Pues bien, aunque, como se ha dicho, la denegación inicial se ajustó a las previsiones legales y no hay constancia del momento real en el que se presentó la solicitud, teniendo en cuenta tanto los informes de la juez de paz como del secretario (quien insiste en exonerar de responsabilidad a los recurrentes en un informe posterior remitido a este centro al serle requeridos los antecedentes del caso), así como los emitidos por el ministerio fiscal y el encargado de Ortigueira tras la presentación del recurso, se considera acreditado en este caso que la solicitud se presentó dentro del plazo legal. Por lo demás, se aprecia la concurrencia de justa causa (los apellidos pretendidos son los que los inscritos llevan utilizando durante toda su vida) y no se advierte perjuicio de tercero, por lo que cabe autorizar la excepción a la regla general del artículo 194 RRC que reconocen el artículo 59.3 LRC y su correlativo reglamentario 209.3.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar a los interesados la conservación de los apellidos anteriores a la determinación de su filiación paterna.

Madrid, 21 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Cerdido (A Coruña).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (99.^a)

Modificación de apellidos.—*Siendo los apellidos de un español primero del padre y primero de los personales de la madre (arts. 109 del Código Civil y 194 del Reglamento del Registro Civil), prospera el expediente incoado de oficio a fin de sustituir los inscritos en infracción de norma por los determinados por la ley.*

En el expediente sobre rectificación de apellido en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Langreo (Asturias).

HECHOS

I

Advertido error en la inscripción de nacimiento de L. A. S., nacida el de 2015 e inscrita en el Registro Civil de Langreo el 28 de diciembre de 2015 en virtud de lo dispuesto en el art. 16.2 LRC, se promueve de oficio expediente gubernativo para la rectificación del primer apellido de la menor, ya que el primero del padre es Z., uniéndose certificación literal de las inscripciones de nacimiento de la nacida y del progenitor.

II

El ministerio fiscal emitió informe favorable y el 1 de febrero de 2016 la juez encargada dictó auto disponiendo que se rectifique la mención errónea del primer apellido de la inscrita, en el sentido de que es Z. en lugar de A., como figura en la inscripción.

III

En el mismo día, 1 de febrero de 2016, la resolución fue notificada al ministerio fiscal y a los padres y estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el auto dictado es contrario al deseo y a la manifestación de voluntad de los progenitores, expresada de común acuerdo, respecto a los apellidos a transmitir a su hija por línea materna y paterna y que la propia incoación del expediente vulnera sus derechos dado que, contrariamente a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley del Registro Civil y 349 del Reglamento del Registro Civil, no han sido notificados en calidad de legítimos interesados y solicitando que se acuerde anular y dejar sin efecto la resolución dictada y mantener la inscripción registral inicial, conforme a la cual la menor tendría como primer apellido A. y como segundo S., y aportando como prueba copia del acta de la comparecencia efectuada el 28 de diciembre de 2015 en la que manifiestan su deseo de que el primer apellido de la nacida sea el segundo del padre.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso puesto que, aunque manifestan haber formulado la petición de apellidos antes de la inscripción, lo cierto es que dicha solicitud no podía prosperar sin una previa inversión por el padre de sus apellidos y el juez encargado informó que no cabe la inscripción de la nacida en los términos solicitados, no contemplada ni permitida en nuestro ordenamiento, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC); 2, 23, 26, 55, 59, 60, 93 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 209, 210, 212, 217, 305, 306 342, 349, 354, 358 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 12-2.^a de marzo de 2008 y 29-38.^a de diciembre de 2014.

II. Advertido error en el asiento de nacimiento de una menor, nacida el de 2015 e inscrita en el Registro Civil de Langreo con el segundo del padre como primero, e incoado de oficio el oportuno expediente a fin de sustituir los apellidos inscritos por los determinados por la ley, el juez encargado dispone la rectificación del primer apellido de la inscrita mediante auto de 1 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por los progenitores.

III. Como cuestión previa ha de determinarse si la omisión del trámite, exigido por los artículos 97 LRC y 349 RRC, de notificación de la incoación del expediente a quienes, por resultar afectados, tienen un interés legítimo en el mismo vicia de nulidad las actuaciones y procede retrotraerlas o si tal defecto puede estimarse subsanado dentro de la tramitación de la apelación y, visto que las alegaciones de los recurrentes, los padres de la menor a la que se refiere la inscripción, versan no solo sobre esta cuestión formal sino también sobre la de fondo y, por tanto, han manifestado lo que a su derecho conviene y atendiendo al principio de economía procesal, básico en sede registral (*cfr.* art. 354 RRC), se considera pertinente entrar a examinar el fondo del asunto.

IV. Dispone el art. 194 RRC que «si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre»; constando de la inscripción de nacimiento del padre (*cfr.* art. 2 LRC) que sus apellidos son Z. A., la atribución a la hija del apellido A. supone una infracción de los antedichos preceptos que compete al encargado subsanar (arts. 59.2.º LRC y 209.2.º RRC) y, en consecuencia, procede confirmar el auto por el que se acuerda modificar el primer apellido de la nacida.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Langreo (Asturias).

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (39.^a)

Modificación de apellidos.—*Por simple petición ante el encargado del registro civil se sustituye el apellido vasco «Jacoisti» por «Jakoisti», ortografía regularizada al euskera.*

En las actuaciones sobre adecuación ortográfica de nombre y apellido en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra providencia dictada por la juez encargada del Registro Civil de Pamplona/Iruña (Navarra).

HECHOS

I

El 9 de diciembre de 2015 don J. A. Jacoisti S., nacido el 6 de junio de 1966 en P. y domiciliado en Z. M. (Navarra), comparece en el registro civil de dicha población y manifiesta que, acogiéndose a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, solicita que su primer nombre sea sustituido por el equivalente onomástico en euskera, «X.» y su primer apellido por la grafía al euskera «Jakoisti». Acompaña copia simple de DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento y volante de empadronamiento en Z. M.

II

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Pamplona/Iruña, el 11 de enero de 2015 la juez encargada dictó providencia acordando que, sin perjuicio de que se lleve a efecto lo interesado acerca del nombre, no ha lugar a lo interesado respecto al apellido porque los informes recabados de Euskaltzaindia son negativos.

III

Notificada la resolución al interesado, este interpuso recurso alegando que, aunque la denegación se fundamenta en que «Jakoisti» no aparece en informes de la Real Academia

de la Lengua Vasca, él ha obtenido publicaciones y estudios de la propia Euskaltzaindia y de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Navarra en los que aparece aceptado en euskera y aportando copia simple de dichos documentos.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, estimando suficientemente acreditado el hecho, no se opuso a la práctica de lo solicitado por el promotor y la juez encargada informó que, a la vista de los argumentos empleados en el recurso y de la documental adjunta al mismo, podría ser pertinente su estimación y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 198 del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 9-1.^a de diciembre de 2000, 7-3.^a de marzo de 2001 y 14-4.^a de octubre de 2004.

II. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 LRC «el encargado del registro, a petición del interesado o su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente». Este precepto legal debe interpretarse en el sentido de que es posible, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, adaptar los apellidos propios de una lengua española incorrectamente inscritos en el registro civil a la grafía normativamente correcta en dicha lengua y que la traducción o la adaptación a la grafía de una lengua española de los apellidos no pertenecientes a esa lengua ha de obtenerse por la vía del expediente de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 LRC y 205 RRC.

III. En este caso, el interesado intenta obtener por simple petición la regularización ortográfica al euskera del apellido «Jacoisti» y su sustitución por la forma «Jakoisti» que aduce normativamente correcta, de la documentación aportada en fase de recurso resulta que se trata de un apellido vasco cuya grafía normativa actual es la solicitada y, en consecuencia, puede acordarse sin necesidad de expediente que en la inscripción registral conste en dicha forma.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Pamplona.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (30.^a)

Modificación de apellidos.—*El orden de los apellidos ha de determinarse «al tiempo de la inscripción» y, una vez practicada esta, no cabe la inversión de apellidos del menor por simple declaración del progenitor que reconoce su condición de tal.*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra providencia dictada por la juez encargada del Registro Civil de Móstoles (Madrid).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Boadilla del Monte (Madrid) en fecha 9 de diciembre de 2015 Doña B. G. V., mayor de edad y domiciliada en dicha población, manifiesta su voluntad de cambiar el orden de los apellidos de su hijo menor de edad E. G. V., nacido en Madrid el de 2012, exponiendo que el hecho de que madre e hijo ostenten los mismos conlleva continuos problemas y confusiones respecto al parentesco, que desconocía que la inversión podía solicitarse en el momento de la inscripción y no fue informada de ello por el funcionario que la atendió y que, además en el colegio llaman al menor por el segundo apellido para diferenciarlo de otros niños y acompañando copia simple de su DNI, volante familiar de empadronamiento en B. M. y certificación literal de inscripción de nacimiento y copia simple de DNI del menor.

II

Ratificada la peticionaria en el contenido del escrito presentado, por el juez encargado se acordó remitir lo actuado al Registro Civil de Móstoles, cuyo encargado dictó en fecha 21 de enero de 2016 providencia disponiendo que se notifique a la promotora que la inversión de apellidos de un menor por simple declaración ha de realizarse antes de que se inscriba el nacimiento, sin perjuicio de que pueda ejercitarse por el mismo inscrito a partir de la mayoría de edad y a salvo la posibilidad de que el representante legal pueda promover el oportuno expediente de cambio de apellidos.

III

Notificada la anterior providencia a la progenitora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, cuando la filiación está determinada solamente por línea materna, la facultad de inversión de los apellidos no se ceñiría al tiempo de la inscripción sino que puede realizarse en cualquier momento por la madre, según doctrina sentada por la dirección general en resolución de 13 de marzo de 1995, y que en el mismo sentido se pronuncia la circular de la DGRN de 21 de mayo de 1970, sobre cambios de apellidos de los hijos reconocidos solo por la madre, y aportando dicha circular, publicada en el BOE el 1 de junio de 1970.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que nada opone a lo solicitado e interesa que se remita el expediente al Registro Civil de Madrid, y la juez encargada del Registro Civil de Móstoles emitió el preceptivo informe y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 198, 205, 342, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 12-2.^a de noviembre de 2002, 24-4.^a de octubre de 2003, 17-6.^a de noviembre de 2008 y 15-61.^a de julio de 2013.

II. La misma Ley 40/1999, de 5 de noviembre, que en su artículo primero dio al artículo 109 CC la redacción que posibilita que en los supuestos de filiación por las dos líneas el padre y la madre, de común acuerdo, decidan el orden de transmisión a los hijos de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral modificó en su artículo tercero la redacción originaria del artículo 55 LRC, que contemplaba tal posibilidad para los «hijos naturales reconocidos solo por la madre», introduciendo el inciso de que el progenitor que reconoce su condición de tal puede determinar «al tiempo de la inscripción» el orden de los apellidos porque, equiparados los hijos por mandato constitucional, no es admisible que sean objeto de tratamiento legal distinto según la filiación esté determinada por una o por las dos líneas.

III. Así pues, instada el 9 de diciembre de 2015 por el progenitor que reconoce su condición de tal la inversión del orden de los apellidos del hijo nacido el de 2012, ha de ser desestimada. Tendrá que ser el propio interesado quien, alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, extemporáneamente pretendida por su madre, mediante simple declaración ante el encargado del registro civil de su domicilio. Si antes de ese momento concurrieran los requisitos exigidos (arts. 57 y ss. LRC y 205 y ss. RRC), podría la promotora obtener el mismo resultado a través de un expediente gubernativo de cambio de apellidos, que se tramita e instruye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el Ministerio de Justicia y, por delegación, (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 29 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Móstoles (Madrid).

Resolución de 6 de octubre de 2017 (27.^a)

Modificación de apellidos.—*Para el nacido con filiación materna y posteriormente reconocido el orden de transmisión del primer apellido de los progenitores ha de ser acordado por estos «antes de la inscripción» de la filiación paterna.*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de L'Hospitalet de Llobregat en fecha 11 de diciembre de 2015 doña A.-M. C. A., mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita ser recibida en comparecencia, a fin de invertir los apellidos de su hijo menor de edad, exponiendo que no se opone a que lleve el apellido paterno pero que, dado que tiene siete años y uso de razón y es conocido como D. C., es conveniente que este sea su primer apellido y acompañando certificación literal de nacimiento de D.-J. C. A., nacido en L. el de 2009, con inscripción marginal, practicada el 24 noviembre de 2015, de reconocimiento por A. B. E., en virtud de expediente registral de fecha 2 de junio de 2015, e indicación de que los apellidos del inscrito son B. C.

II

El 15 de diciembre de 2015 compareció el padre del menor, que manifestó que no accede a una inversión de apellidos que podrá hacer el hijo al cumplir la mayoría de edad, el ministerio fiscal, a la vista de la negativa del padre, de que el reconocimiento es muy reciente y de que las alegaciones de la madre no han venido acompañadas de justificación documental, se opuso a la pretensión de esta y el 1 de febrero de 2016 el juez encargado dictó auto disponiendo denegar la inversión de apellidos solicitada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, por los mismos motivos por los que formuló oposición a la modificación de apellidos del menor, que él no comprende, solicita que por lo menos se rectifique el orden y que es contrario al interés del menor que ahora se hayan cambiado sus apellidos de forma totalmente desmotivada, a pesar de la justa oposición de su madre y sin que conste siquiera que se haya dado traslado a la parte contraria.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando su informe anterior, manifestó su oposición a la inversión de apellidos y, por tanto, al recurso presentado y seguidamente el juez encargado dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil de 1957 (LRC), 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 26-4.^a de septiembre de 2002, 1-1.^a de abril y 17-3.^a de octubre de 2003, 20-4.^a de enero, 10-1.^a de febrero, 6-2.^a de abril y 21-3.^a de mayo de 2004; 8-3.^a de julio y 19-5.^a de diciembre de 2005, 4-4.^a de septiembre de 2006, 31-2.^a de enero, 11-2.^a de abril y 14-10.^a de septiembre de 2007, 17-6.^a de noviembre de 2008, 22-9.^a de febrero y 31-7.^a de mayo de 2010, 2-40.^a de septiembre, 15-1.^a de octubre, 15-85.^a de noviembre y 13-41.^a de diciembre de 2013, 5-71.^a de diciembre de 2014 y 5-44.^a de junio y 10-33.^a y 17-13.^a de julio de 2015.

II. El orden de transmisión a los hijos del respectivo primer apellido ha de ser acordado por los progenitores «antes de la inscripción» (art. 109 CC y art. 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil), en este caso, de la filiación paterna, de lo actuado con ocasión del reconocimiento consta que el padre solicitó la consignación en el acta de nacimiento del menor del apellido paterno, que la madre no prestó su consentimiento, manifestando que su deseo es que sea el hijo quien decida, cuando alcance la mayoría de edad, qué apellidos llevar y que el 15 de octubre de 2015 el juez encargado del Registro Civil de L'Hospitalet de Llobregat dictó auto, que devino firme por no haberse interpuesto recurso alguno, disponiendo que, a partir de ese momento, el primer apellido del menor será el primero de su padre y el segundo el primero de su madre.

III. Así pues, instada la alteración del orden de los apellidos del hijo, nacido el de 2009, después de que en fecha 24 noviembre de 2015 se inscribieran marginalmente el reconocimiento paterno y los apellidos que por tal filiación le corresponden, ha de ser desestimada. Tendrá que ser el propio interesado quien, alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, extemporáneamente pretendida mediante simple declaración solo de la madre, ante el encargado del registro civil del domicilio. Si antes de ese momento concurrían los requisitos exigidos (arts. 57 y ss. LRC y 205 y ss. RRC), podrían los representantes legales del menor, padre y madre de consuno, obtener el mismo resultado a través de un expediente gubernativo de cambio de apellidos, que se tramita e instruye por el registro civil del domicilio y se

resuelve por el Ministerio de Justicia y, por delegación, (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 6 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Resolución de 13 de octubre de 2017 (25.ª)

Modificación de apellidos.–1.º *La inversión de apellidos del mayor de edad es una facultad que se concede por una sola vez y no cabe formalizar una segunda inversión por simple declaración de voluntad.*

2.º *Por economía procesal y por delegación del ministro de Justicia, la dirección general examina si la pretensión deducida pudiera ser acogida por la vía distinta del expediente de cambio de apellidos y, no acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos, no autoriza el cambio de apellidos solicitado.*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Amurrio (Araba).

HECHOS

I

En comparecencia en el Registro Civil de Laudio-Llodio (Araba) de fecha 30 de marzo de 2017 doña A.-M. P. A., mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita, a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Civil, la alteración del orden de sus apellidos exponiendo que, debido a problemas de salud, le beneficiaría ostentar de nuevo los inscritos a su nacimiento. Acompaña certificado individual de empadronamiento en L., copia simple de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento de A.-M. A. P., nacida el 7 de marzo de 1971 en L., en la que consta practicada el 22 de enero de 2016 marginal de inversión de apellidos en virtud de providencia dictada por el encargado del Registro Civil de Amurrio, a instancia de la inscrita, en fecha 17 de diciembre de 2015.

II

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Amurrio, el ministerio fiscal informó que, teniendo en cuenta tanto la ausencia de justa causa como la reciente inversión de apellidos efectuada a instancia de la interesada, se opone a lo solicitado y el 16 de mayo de 2017 la juez encargada, razonando que la facultad del artículo 109 del Código Civil se concede por una sola vez, dictó auto disponiendo denegar la inversión de apellidos.

III

Notificada la resolución a la interesada, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la literalidad de los artículos 109 del Código Civil y 55 de la Ley del Registro Civil impide considerar que solo quepa alterar el orden de apellidos una vez, que la declaración que efectuó en diciembre de 2015 está viciada porque es persona con sintomatología psiquiátrica y en ese momento sus capacidades volitivas y cognitivas estaban mermadas, que tiene voluntad real, firme y taxativa de recobrar el orden de apellidos originario porque ello redundaría en beneficio para su salud y que, sin perjuicio de lo anterior, la dirección general, atendiendo a las circunstancias del caso, por economía procesal y por delegación del Ministerio de Justicia, podría autorizar su solicitud en expediente de cambio de apellidos y aportando informes de salud mental y, en prueba de uso de los apellidos en orden inverso, facturas de suministro de agua y electricidad del año 2017 y copia simple de su DNI anterior.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, haciendo suyos los fundamentos del auto dictado, impugnó el recurso y la juez encargada del Registro Civil de Amurrio informó que no han quedado desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución apelada y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 198, 205, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 19-2.^a de mayo de 1999, 5-1.^a de julio y 3-4.^a de septiembre de 2001, 13-1.^a y 25-5.^a de junio de 2002, 22-2.^a de noviembre de 2004, 8-3.^a de junio de 2006, 9-1.^a de marzo de 2007, 9-5.^a de mayo y 28-9.^a de noviembre de 2008, 10-3.^a de marzo de 2009, 12-2.^a y 3.^a de mayo de 2010; 30-7.^a de enero, 15-19.^a de noviembre y 11-107.^a de diciembre de 2013, 4-144.^a de septiembre de 2014, 17-54.^a de abril de 2015 y 29-141.^a de agosto de 2016.

II. Solicita la interesada la inversión del orden de los apellidos que, según resulta de la inscripción marginal practicada en la de nacimiento, instó y

obtuvo en diciembre de 2015 y la juez encargada del Registro Civil de Amurrio, razonando que la facultad del artículo 109 CC se concede por una sola vez, dispone denegar la pretensión mediante auto de 16 de mayo de 2017 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Es consolidada doctrina de la dirección general que la posibilidad de invertir los apellidos que concede al mayor de edad el artículo 109 CC se agota en su ejercicio de modo que, una vez ejercitada, no cabe dejar sin efecto la inversión obtenida por simple declaración de voluntad. Tal conclusión tiene su fundamento legal en la estabilidad del nombre y de los apellidos, signos de individualización e identificación de la persona cuyo cambio queda sustraído de la autonomía de voluntad de los particulares salvo en los casos excepcionales y taxativos determinados por la ley.

IV. Conviene no obstante examinar si, tal como solicita la interesada en el escrito de recurso, la pretensión deducida puede ser acogida, atendiendo a razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), por la vía distinta del expediente de cambio de apellidos de la competencia general del Ministerio de Justicia (*cf.* arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (orden JUS//696/2015, de 16 de abril) de la dirección general.

V. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa: los artículos 57.1.º LRC y 205.1.º RRC exigen que los apellidos en la forma propuesta constituyan una situación de hecho no creada por el interesado, ha de probarse, por tanto, que la persona afectada por el cambio usa y es socialmente conocida por los que pretende y que dichos uso y conocimiento no han sido provocados de propósito para conseguir la modificación, aunque la recurrente aporta alguna documental tendente a acreditar la concurrencia de este requisito, en el escaso tiempo transcurrido entre la formalización de la inversión y la manifestación de voluntad de desdecirse de ella, poco más de un año, no ha podido generarse y consolidarse en la interesada una situación de hecho en el uso de los apellidos en orden distinto del inscrito y, por otra parte, fallecida la solicitante en el momento en que se resuelve la apelación, la justa causa invocada, que la recuperación del orden de apellidos inicialmente inscrito puede contribuir en gran medida al restablecimiento de su salud, ha desaparecido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
- 2.º Por delegación del Sr. ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), no autorizar el cambio de apellidos interesado.

Madrid, 13 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Amurrio (Alava)

Resolución de 27 de octubre de 2017 (20.ª)

Modificación de apellidos.–1.º *Decidida la anteposición del apellido materno «antes de la inscripción» de nacimiento y opción por la nacionalidad española de una mayor de catorce años asistida de su representante legal, los progenitores no pueden obtener en un momento posterior la alteración del orden de apellidos por simple declaración.*

2.º *El orden de apellidos establecido para la primera inscripción determina el de las posteriores con igual filiación (arts. 109 CC y 55 LRC) de modo que, constando de la inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia practicada en la de nacimiento de un hermano del mismo vínculo que el primer apellido es el paterno y el segundo el materno, en este orden los tiene que ostentar la interesada.*

3.º *Por economía procesal y por delegación, la Dirección General de los Registros y del Notariado autoriza en expediente el cambio de apellidos impuestos con infracción de las normas establecidas (art. 209 RRC).*

En las actuaciones sobre inversión de apellidos remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los padres de la interesada contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Loja (Granada).

HECHOS

I

El 20 de agosto de 2014 el Sr. C.-J. Y. P. y doña E.-G. C. B., mayores de edad y domiciliados en H. T. (Granada), comparecen en el Registro Civil de Loja al objeto de solicitar que en el asiento de nacimiento y opción por la nacionalidad española de su hija mayor de catorce años N.-E. C. Y., nacida el de 2000 en Q. (Ecuador), se proceda al cambio del orden de los apellidos inscritos por el originario, acompañando certificado familiar de empadronamiento en H. T., copia simple de NIE de ambos y de la menor, certificado de nacimiento ecuatoriano de esta y certificación literal de inscripción de nacimiento de N.-E. Y. C., practicada en el Registro Civil de Loja en fecha 18 de agosto de 2014 con marginal de opción en la misma fecha por la nacionalidad española, asistida de su representante legal, y constancia de que los apellidos del inscrito serán en lo sucesivo C. Y.

II

El ministerio fiscal se opuso a lo solicitado, por haberse ya cambiado los apellidos, y el 25 de noviembre de 2014 el juez encargado, razonando que la facultad de invertir el orden de apellidos regulada en el artículo 109 del Código Civil se concede por una sola vez, dictó auto disponiendo denegar la solicitud formulada, sin perjuicio de que se inste un expediente de cambio de apellidos al amparo de lo establecido en los artículos 57 LRC y 205 RRC.

III

Notificada la resolución a los progenitores de la menor, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que por ley los apellidos del primer hijo deben ser los mismos que los de los hijos posteriores, que en la partida de nacimiento de Ecuador los de la interesada eran los mismos que los de sus hermanos y que no entienden la negativa a llevar a cabo la rectificación cuando el error no ha sido suyo y tendría que haberse corregido de oficio y aportando como prueba copia simple de libro de familia español, de inscripciones ecuatorianas de matrimonio y de nacimiento de la menor interesada y de pasaporte ecuatoriano de esta.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada, y seguidamente el juez encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC), 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 198, 205, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, de 15-5.^a de enero de 2001, 12-2.^a de noviembre de 2002, 7-2.^a de abril de 2005, 10-1.^a de mayo de 2007, 29-1.^a de abril de 2011 y 21-78.^a de junio de 2013.

II. La interesada, nacida en de 2000, adquiere el 18 de agosto de 2014, asistida de su representante legal, la nacionalidad española por opción, al practicarse la inscripción de nacimiento se consigna como primer apellido el materno y como segundo el paterno, dos días después los progenitores intentan formalizar por simple declaración la inversión de los inscritos y la solicitud es denegada por el juez encargado, por cuanto la facultad de invertir el orden de apellidos regulada en el artículo 109 CC se concede por una sola vez, mediante auto de 25 de noviembre de 2014 que constituye el objeto del presente recurso, en el que los padres alegan que por ley los apellidos de la menor deben ser los mismos que los de sus hermanos.

III. Decidida la anteposición del apellido materno en el momento de la adquisición de la nacionalidad española por opción del mayor de catorce años asistido por su representante legal, no cabe que por simple declaración los padres priven de eficacia a esa manifestación de voluntad libremente expresada de modo que en principio tiene que ser la propia interesada quien, alcanzada la mayoría de edad, inste la inversión, extemporáneamente pretendida por sus progenitores, mediante simple declaración ante el encargado del regis-

tro civil de su domicilio. Tal conclusión trae causa en la estabilidad que han de tener los signos de identificación y diferenciación de las personas, sustraídos de la autonomía de voluntad de los particulares salvo en los casos excepcionales y taxativos determinados por la ley.

IV. Sin perjuicio de lo anterior conviene examinar si la pretensión deducida puede ser acogida en expediente de cambio de apellidos, habida cuenta de que los recurrentes aducen que la interesada ostenta los apellidos en orden distinto que sus otros hijos, que en el momento de examinar lo actuado, la resolución dictada y las alegaciones formuladas este centro directivo ha obtenido constancia registral del hecho alegado y que la homopatrimonia entre hermanos del mismo vínculo es principio rector de la legislación española que informa la normativa reguladora de los apellidos y sus cambios.

V. La respuesta legal a la situación planteada viene dada en los artículos 109 CC y 55 LRC: en septiembre de 2013 se practica en el asiento de nacimiento de J.-A. Y. C., nacido en España en 2007, inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia que expresa que los apellidos del inscrito serán los que constan; adquirida la nacionalidad española por opción en octubre de 2014 por N.-E. y establecido que los menores son hermanos del mismo vínculo, el orden de apellidos inscrito al primero rige en la inscripción de la segunda, siendo irrelevante que el primeramente inscrito haya nacido en fecha posterior porque en este caso la primera inscripción no la determina la fecha de nacimiento sino la de adquisición de la nacionalidad española, los apellidos inscritos al hermano nacionalizado en primer lugar vinculan al asentar el nacimiento de la que adquiere la nacionalidad española sucesivamente y, en consecuencia, los inscritos a la interesada infringen los citados preceptos legales.

VI. Si bien corresponde al encargado del registro autorizar en expediente el cambio de apellidos impuestos con infracción de las normas establecidas (art. 59.2.º LRC), dado que el Ministerio de Justicia también es competente (art. 209.2 y último párrafo RRC), por economía procesal (*cf.* art. 354 RRC) y en evitación de dilaciones indebidas, se aprueba el cambio de apellidos consistente en invertir los inscritos si bien los efectos legales de esta autorización se condicionan a que sea la propia interesada, que consta emancipada el 12 de abril de 2017 y, por tanto, puede decidir el orden de sus apellidos con independencia del orden en que los ostentan sus hermanos menores de edad, quien solicite la inscripción de la presente resolución.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Confirmar el auto apelado.
- 2.º Por delegación del Sr. ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), autorizar el cambio de apellidos de la menor emancipada N.-E. C. Y. por «Y. C.», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras, a solicitud de la interesada, no se inscriba al margen del asiento de

nacimiento, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuarlas comunicaciones previstas en el artículo 217 del Reglamento.

Madrid, 27 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Loja (Granada).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 21 de abril de 2017 (37.^a). Modificación de apellidos.

Resolución de 16 de junio de 2017 (25.^a). Modificación de apellidos.

Resolución de 7 de julio de 2017 (3.^a). Modificación de apellidos.

Resolución de 7 de julio de 2017 (11.^a). Modificación de apellidos.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (35.^a). Modificación de apellidos.

2.5 Competencia

2.5.1 COMPETENCIA PARA EL CAMBIO DE NOMBRE PROPIO

Resolución de 3 de marzo de 2017 (39.ª)

Competencia. Cambio de nombre propio.—*El encargado no puede autorizar el cambio de nombre si la solicitud no se fundamenta en el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la dirección general examina la pretensión y la concede, por concurrir la justa causa requerida.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Mungia (Bizkaia) en fecha 9 de diciembre de 2014 don R. L. S.-M. y doña L. G. G., mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan que se autorice el cambio de nombre de su hijo Joritz L. G., nacido el de 2014 en el hospital de C. de B. (Bizkaia) e inscrito en el Registro Civil de Mungia el 28 de noviembre de 2014, por «Ioritz» exponiendo que este es el que ellos habían elegido y que, aunque en la actualidad no lo admite Euskaltzaindia, les consta que existen niños así inscritos y acompañando copia simple de su respectivo DNI, sendos volantes de empadronamiento en M. y certificación literal de inscripción de nacimiento del menor.

II

Ratificados los promotores en el escrito presentado, elevadas las actuaciones al Registro Civil de Gernika-Lumo y acordada la incoación de expediente, el ministerio fiscal

informó que no se opone a la solicitud formulada y el 21 de mayo de 2015 la juez encargada, razonando que se trata de una modificación mínima del nombre de un menor que, dada su edad, no puede acreditar uso, dictó auto disponiendo que no procede acceder a lo solicitado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la madre, los promotores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no están de acuerdo con lo resuelto en el primer expediente, en el que se denegó el nombre elegido por no aparecer en Euskaltzaindia, y que les consta que hay menores así inscritos.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso por las propias alegaciones del auto apelado, y la juez encargada informó que, no desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución dictada, estima que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354, 355 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 23-1.^a de mayo de 1998, 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003, 26-2.^a de octubre de 2004, 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005; 28-5.^a de junio, 13-5.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006, 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 18-9.^a de marzo de 2011, 15-22.^a de noviembre y 11-106.^a de diciembre de 2013; 20-104.^a de marzo, 21-24.^a de abril y 18-71.^a y 24-60.^a de junio de 2014 y 28-11.^a de mayo, 17-14.^a de julio, 28-197.^a de agosto y 18-3.^a de septiembre y 4-27.^a de diciembre de 2015.

II. Solicitan los promotores en fecha 9 de diciembre de 2014 que se autorice el cambio de nombre de su hijo Joritz, nacido el de 2014 e inscrito en el Registro Civil de Mungia el día 28, por «Ioritz», exponiendo que este último es el elegido por ellos y que, aunque en la actualidad Euskaltzaindia no admite esa grafía, hay niños así inscritos, y la juez encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo, razonando que se trata de una modificación mínima del nombre de un menor que, dada su edad, no puede acreditar uso, dispone que no procede acceder a la petición formulada mediante auto de 21 de mayo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (*cf.* arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (*cf.* 210 RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. En este caso, no fundamentada la solicitud en el uso habitual del nombre propuesto, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al encargado sino al Ministerio de Justicia (*cf.* arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden ministerial JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión de los recurrentes puede ser acogida por esta vía, habida cuenta de que en el registro civil del domicilio se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio de Justicia (*cf.* art 365 RRC) y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* 354 RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa: la imposición de nombre a un recién nacido y su cambio cuando ya es una mención de identidad de la persona son materias distintas con tratamiento jurídico diferenciado y, por tanto, no hay obstáculo legal para admitir en una inscripción inicial el nombre de «Ioritz», aunque la forma académica sea Joritz (vid. resoluciones de la Dirección General de 2-13.ª de septiembre de 2013 y 21-5.ª de abril de 2014) y para que sea de aplicación la doctrina de este centro directivo respecto a los cambios mínimos cuando en expediente se intenta sustituir la segunda grafía por la primera (vid. res. de 11-104.ª de diciembre de 2013 y 5-36.ª de febrero de 2016). En este caso, aunque el escrito presentado por los padres ha sido tramitado como si de una solicitud de cambio de nombre se tratara y como tal ha de resolverse, tanto por la fecha como por las alegaciones formuladas puede considerarse que es un recurso, interpuesto en tiempo y forma, contra la calificación por el encargado del nombre elegido por los padres y, en consecuencia, ha de estimarse suficientemente fundamentada la petición, ello permite apreciar la concurrencia de justa causa para el cambio, este no perjudica a tercero y, en definitiva, resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos para la modificación (*cf.* art. 206.III, RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Revocar el acuerdo apelado.
- 2.º Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril) autorizar el cambio del nombre inscrito, «Joritz», por «Ioritz», no

debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento del interesado y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar, en su caso, las comunicaciones previstas en el artículo 217 del reglamento.

Madrid, 3 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Gernika-Lumo (Bizkaia).

Resolución de 9 de junio de 2017 (24.^a)

Competencia. Cambio de nombre propio.–*El encargado no puede autorizar el cambio de nombre si en el expediente no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la dirección general examina la pretensión y no la concede, por no concurrir la justa causa requerida.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de El Vendrell en fecha 25 de febrero de 2015 doña S. M. C. y don F. A. M., mayores de edad y domiciliados en R. de B. (T.), solicitan la incoación del oportuno expediente de cambio de nombre de su hijo menor de edad Max A. M., nacido en R. de B. el de 2012, por el usado habitualmente, «Guerau», exponiendo que este último es el que siempre ha utilizado y por el que es conocido y acompañando copia simple del DNI de ambos y, del menor, certificación literal de inscripción de nacimiento, certificado de empadronamiento en R. de B. y, en prueba del uso alegado, un informe de la guardería a la que asiste y testimonio manuscrito de varias personas.

II

En el mismo día, 25 de febrero de 2015 los promotores se ratificaron en el contenido del escrito presentado y el 2 de marzo compareció como testigo una amiga de la madre, que manifestó que le consta que son ciertos los hechos alegados.

III

El ministerio fiscal informó que se opone, habida cuenta de que no se han aportado elementos suficientes que permitan entender que exista habitualidad de uso, poco probable dada la edad del menor, y el 25 septiembre de 2015 la juez encargada, razonando que los padres decidieron inscribir al nacido con el nombre de Max y que al día de la fecha no puede acreditarse el uso del nombre propuesto por un largo periodo de tiempo, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre interesado.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, los dos progenitores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que con la documentación aportada, entre la que destaca la certificación de la directora de la guardería «E. P.», ha quedado acreditada la utilización social y pública del nombre que interesan y aportando certificación expedida en fecha 26 de octubre de 2015 por la secretaria del centro «E. E-C.» para constancia de que, a petición de la madre, el niño es llamado Guerau pero en los documentos oficiales aparecerá como Max hasta que una resolución judicial autorice el cambio de nombre.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a su informe anterior, se opuso a los motivos esgrimidos en el recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada y la juez encargada emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 53, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 9-4.^a de octubre de 1994, 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero y 30-2.^a de mayo de 1997; 27-3.^a de marzo, 8-4.^a de mayo y 14-7.^a de septiembre de 2000; 17-2.^a de febrero, 6-2.^a y 21-2.^a de abril, 7-2.^a de julio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 y 21-3.^a de enero, 13-1.^a de abril, 20-3.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 16-3.^a de abril, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 8-1.^a y 17-1.^a de octubre, 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 11-3.^a de febrero y 6-4.^a de abril de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 13-14.^a de septiembre y

4-115.^a y 15-74.^a de noviembre de 2013; 10-7.^a y 9.^a de febrero, 30-4.^a de abril y 21-17.^a de octubre de 2014, 26-52.^a de junio, 6-35.^a de noviembre y 30-16.^a de diciembre de 2015 y 22-17.^a de abril de 2016.

II. Solicitan los promotores autorización para cambiar el nombre, Max, que consta en la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad por «Guerau», exponiendo que este último es el que siempre ha utilizado y por el que es conocido, y la juez encargada, razonando que, no transcurrido un largo periodo de tiempo desde que los padres decidieron inscribirlo con el nombre que consta, no puede acreditarse el uso del propuesto, dispone denegar la petición mediante auto de 25 septiembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El juez encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. En este caso, no justificado el uso habitual del nombre solicitado, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al encargado sino al Ministerio de Justicia (*cf.* arts. 57 LRC y 209 in fine RRC) y, por delegación (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión deducida puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* art. 354 RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa: apenas tres años después de imponer al nacido, de forma voluntaria y de común acuerdo, el nombre de Max, los progenitores pretenden cambiarlo por «Guerau» fundamentando su solicitud en un uso habitual que, sobre improbable en un menor de tan corta edad, no se acredita de la documental aportada, tan solo un informe obtenido un mes antes de la presentación del escrito inicial, y no fundamentada la petición en ningún otro hecho, la estabilidad que han de tener el nombre y los apellidos, en cuanto signos de identificación y diferenciación de las personas sustraídos de la autonomía de voluntad de los particulares, impide apreciar que exista justa causa para el cambio de nombre solicitado (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Desestimar el recurso.
- 2.º Por delegación del Sr. ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), no autorizar el cambio del nombre inscrito, Max, por «Guerau».

Madrid, 9 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona).

Resolución de 16 de junio de 2017 (18.ª)

Competencia. Cambio de nombre propio.—1.º *El encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, la solicitud no se fundamenta en el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la dirección general examina la pretensión.*

2.º *No concurre justa causa cuando el nombre cuya sustitución se pretende no es el inicialmente inscrito sino el resultante de un expediente de cambio anterior promovido por la interesada.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

El 7 de septiembre de 2015 doña Dolores N. M., nacida el 4 de noviembre de 1990 en G. y domiciliada en G. (S.), comparece en el Registro Civil de dicha población al objeto de solicitar el cambio del nombre inscrito por Lola Eufemia. Acompaña copia simple de DNI, certificación individual de inscripción en el padrón de G. y certificación literal de inscripción de nacimiento de Dolores-Araceli M. N. en la que constan practicadas inscripciones marginales de inversión de apellidos, en virtud de comparecencia efectuada ante el encargado del Registro Civil de Gelves en fecha 26 de febrero de 2014, y de cambio de nombre por el que actualmente ostenta, en virtud de resolución de 14 de marzo de 2014 dictada por el encargado del Registro Civil de Sevilla.

II

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Sevilla, el ministerio fiscal se opuso a lo interesado, por no acreditarse el uso habitual del nombre pretendido, y el 28 de septiembre de 2015 el juez encargado, razonando que la promotora no aporta una sola prueba que evidencie uso y que es el segundo cambio que intenta en un escaso periodo de tiempo, dictó auto disponiendo que no ha lugar a estimar la pretensión.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la solicitante, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que hay utilización del nombre propuesto prolongada en el tiempo y en muy diversos ámbitos públicos y privados y, por tanto, se cumplen los requisitos exigidos por la legislación aplicable y aportando diversa documental en la que consta identificada con el nombre instado.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista de la documental ahora aportada, no se opuso a lo interesado y el juez encargado informó desfavorablemente al recurso ya que, aunque se han presentado pruebas de manera extemporánea, no se acredita el uso prolongado en el tiempo y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 53, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 9-4.^a de octubre de 1994, 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero y 30-2.^a de mayo de 1997; 27-3.^a de marzo, 8-4.^a de mayo y 14-7.^a de septiembre de 2000; 17-2.^a de febrero, 6-2.^a y 21-2.^a de abril, 7-2.^a de julio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 y 21-3.^a de enero, 13-1.^a de abril, 20-3.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 16-3.^a de abril, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 8-1.^a y 17-1.^a de octubre, 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 11-3.^a de febrero y 6-4.^a de abril de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 4-115.^a y 15-74.^a de noviembre de 2013, 10-7.^a y 9.^a de febrero, 30-4.^a de abril y 21-17.^a de octubre de 2014 y 27-18.^a de noviembre y 30-16.^a de diciembre de 2015.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre inscrito, Dolores, por «Lola-Eufemia» y el juez encargado, razonando que no aporta una sola prueba que evidencie uso y que es el segundo cambio que intenta en un corto periodo de tiempo, dispone que no ha lugar a estimar la pretensión mediante auto de 28 de septiembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El juez encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. En este caso, no fundamentada la solicitud en el uso habitual del nombre propuesto, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al encargado sino al Ministerio de Justicia (*cf.* arts. 57 LRC y 209 in fine RRC) y, por delegación (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión deducida puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa: la promotora no fundamenta su pretensión en motivo alguno y, aunque en el recurso alega una utilización del nombre propuesto, «Lola-Eufemia», prolongada en el tiempo y en muy diversos ámbitos públicos y privados y, en prueba de lo aducido, aporta diversa documental, esta es muy reciente y no permite tener por acreditado uso habitual, máxime teniendo en cuenta el escaso tiempo transcurrido desde que le fuera autorizado el cambio del nombre impuesto a su nacimiento por el usado habitualmente y, por otra parte, las peticiones reiteradas o sucesivas en función de una injustificada y variable voluntad no son compatibles con la estabilidad que han de tener el nombre y los apellidos, en cuanto signos de identificación y diferenciación de las personas. Todo ello impide apreciar la existencia de justa causa para el cambio de nombre solicitado (*cf.* arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Desestimar el recurso.
- 2.º Por delegación del Sr. ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), no autorizar el cambio del nombre inscrito, Dolores, por «Lola-Eufemia».

Madrid, 16 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla

Resolución de 14 de julio de 2017 (1.ª)

No puede autorizarlo el encargado del registro civil del domicilio si no se acredita la habitualidad en el uso del nombre solicitado pero lo concede la DGRN por economía procesal y por delegación.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Toledo.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2015 en el Registro Civil de Toledo, Don Segundo. G. P. B., mayor de edad y con domicilio en L. (Toledo), solicitaba el cambio del nombre que consta en su inscripción de nacimiento por *José-Segundo*, alegando que sufre síntomas depresivos de larga duración y que una de las circunstancias que contribuye a su alteración emocional es el nombre que actualmente ostenta. Añadía que, sin embargo, deseaba mantenerlo en segundo lugar para no molestar a sus padres, quienes decidieron ponerle tal nombre en homenaje a su abuelo materno. Aportaba la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento del promotor en T. el 9 de agosto de 1973, certificado de empadronamiento, informe psicológico y declaración de dos testigos.

II

Ratificado el promotor, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 19 de noviembre de 2015 denegando el cambio solicitado por no haberse acreditado el uso habitual del nombre pretendido.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que el cambio solicitado no está basado en el uso habitual sino en la concurrencia de justa causa, como se acredita por medio de los informes psicológicos (aporta uno nuevo suscrito por la misma profesional que el anterior), y que su intención es utilizar únicamente el nombre de José, si bien, como ya manifestó en su escrito inicial, pide mantener el actual en segundo lugar en el registro para no contrariar a sus padres.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Toledo remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 206, 209, 210, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 19-7.^a y 21-1.^a de junio de 2001, 18-1.^a de mayo de 2002, 26-2.^a de octubre de 2004, 5-4.^a de abril, 9-4.^a de diciembre de 2005, 13-5.^a de julio de 2006, 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril, 2-5.^a de marzo de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010, 18-9.^a de marzo de 2011, 15-22.^a de noviembre y 11-106.^a de diciembre de 2013, 20-104.^a de marzo y 21-24.^a de abril de 2014, 6-30.^a de noviembre de 2015, 3-26.^a y 10-44.^a de junio de 2016.

II. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (*cf.* arts. 209.4.º y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (*cf.* 210 del RRC).

III. Cuando, como en este caso, la petición no está basada en el uso habitual del nombre solicitado, la competencia excede de la atribuida al encargado del registro y corresponde al ámbito general del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por ello, el encargado debió limitarse a instruir el expediente y remitirlo a este centro para su resolución (art. 365, párrafo segundo, RRC).

IV. Conviene pues examinar ahora si la pretensión planteada pudiera ser acogida por esta vía, dado que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro civil del domicilio (art 365 RRC). Razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya

que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* 354 del RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V. Desde esta perspectiva, el nombre solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones legales ni perjudica a terceros. Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza del nombre como elemento de identidad que forma parte de la esfera más personal de los derechos del individuo, aun siendo las alegaciones del interesado de índole estrictamente privada, la petición encaja en el amplio e indeterminado concepto de justa causa porque el nombre impuesto al nacer es el elegido por los progenitores, razón en la que se funda la posibilidad de un cambio posterior a instancia de los propios interesados.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Declarar la nulidad de la resolución recurrida por incompetencia del órgano que la dictó.

2.º Autorizar, por delegación del ministro de Justicia (ORDEN JUS/696/2015, de 16 de abril) el cambio de nombre de Don Segundo G. P. B. por José-Segundo, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo reglamento.

Madrid, 14 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Toledo.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (98.^a)

Competencia. Cambio de nombre propio.—*No siendo el supuesto planteado encuadrable en los artículos 59 de la Ley del Registro Civil y 209 del Reglamento del Registro Civil, el encargado no está facultado para resolver en primera instancia pero, por economía procesal y por delegación del ministro de Justicia, la dirección general examina el expediente y, acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos, autoriza el cambio de nombre solicitado.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Palencia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Palencia en fecha 25 de noviembre de 2015 doña Eutiquia A. D., nacida el 28 de octubre de 1955 en Q.O. (Palencia) y domiciliada en P., solicita el cambio del nombre inscrito por «Beatriz» exponiendo que por este último es conocida y que la inaceptación de su nombre oficial ha sido desencadenante de un trastorno obsesivo-depresivo y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, copia simple de DNI, volante individual de empadronamiento en P., constancia de consulta que no precisa revisión en el centro de salud, al que acude el día 11 de noviembre de 2015 por problemática personal derivada del rechazo al nombre, y acta notarial levantada el 20 de noviembre de 2015 que recoge las manifestaciones de dos testigos que aseveran que conocen a la compareciente desde hace más de treinta y cinco años, siempre han pensado que su nombre es «Beatriz» y hace unas pocas fechas se han enterado de su nombre legal.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado, comparecieron dos testigos, que manifestaron que siempre la han llamado «Beatriz» y que por ese nombre se la conoce entre su familia y sus amistades y en el lugar de trabajo, el ministerio fiscal informó que, no acreditada la habitualidad de uso del nombre pretendido, interesa la remisión del expediente a la DGRN para que resuelva en el ámbito de su competencia y el 2 de diciembre de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo no autorizar el cambio del nombre y elevar el expediente a este centro directivo.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en su vida ha sido y es una constante firmar con el apellido y hacerse llamar «Eti» u otros apelativos similares, que su nombre le produce tal aversión y hostilidad que cuando la llaman por él ni siquiera contesta y que existe justa causa más que acreditada para poner fin a una situación que lleva arrastrando desde su nacimiento y que le produce tremenda ansiedad, desasosiego y malestar psíquico y aportando como prueba listado de cuidados de enfermería recibidos entre 2010 y 2013 en el que figura identificada como «Eti» e informe manuscrito de psiquiatra colegiado sobre consulta en fecha 12 de enero de 2016.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que el recurso carece de objeto en la medida en que ya se ha acordado que la DGRN examine dentro del ámbito de sus facultades la solicitud de la promotora, y la juez encargada informó que, a la vista de lo actuado, fue denegada la petición de cambio de nombre por el usado habitualmente y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 206, 209, 210, 217, 218, 354, 355 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 23-1.^a de mayo de 1998, 28 de febrero y 26-1.^a de abril de 2003, 26-2.^a de octubre de 2004, 5-4.^a de abril y 9-4.^a de diciembre de 2005, 28-5.^a de junio, 13-5.^a de julio y 29-3.^a de noviembre de 2006, 8-6.^a de mayo y 7-6.^a de diciembre de 2007, 8-4.^a de abril y 1-6.^a de julio de 2008, 19-2.^a de enero y 9-1.^a de febrero de 2009, 15-7.^a de marzo de 2010 y 18-9.^a de marzo de 2011, 15-22.^a de noviembre y 11-106.^a de diciembre de 2013, 20-47.^a de marzo y 21-24.^a de abril de 2014 y 29-11.^a de mayo y 17-18.^a de julio y 4-27.^a de diciembre de 2015.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre, «Eutiquia», que consta en su inscripción de nacimiento por «Beatriz», exponiendo que por este último es conocida y que la inaceptación de su nombre oficial ha derivado en trastorno obsesivo-depresivo, y la juez encargada, considerando no acreditada la habitualidad de uso del nombre pretendido, dispone no autorizar el cambio y elevar el expediente a este centro directivo, para que resuelva en el ámbito de su competencia, mediante auto de 2 de diciembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para decidir en primera instancia expedientes de cambio de nombre en los supuestos tasados enumerados en los artículos 59 LRC y 209 RRC, si el caso planteado no tiene cabida en dichos preceptos, la competencia para resolver corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (orden ministerial JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado y el encargado del registro civil debe limitarse a tramitar el expediente «conforme a las reglas generales» (art. 365 RRC) y elevarlo a este centro directivo con el correspondiente auto-propuesta y, en consecuencia, ha de estimarse conforme a Derecho el auto por el que la juez encargada, examinada su propia competencia y la prueba aportada, dispone no autorizar el cambio de nombre por el usado habitualmente y elevar el expediente a la dirección general.

IV. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión de la promotora puede ser acogida, habida cuenta de que en el registro civil del domicilio se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* 354 RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa ya que, aun cuando de la prueba aportada al expediente no resulta acreditado el uso habitual del nombre propuesto en el que la promotora basa la solicitud, es atendible la alegación de que no se siente cómoda con el inscrito y evita utili-

zarlo siempre que le es posible, ello permite apreciar la concurrencia de justa causa para el cambio, este no perjudica a tercero y, en definitiva, resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

2.º Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril) autorizar el cambio del nombre inscrito, «Eutiquia», por «Beatriz», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del Reglamento.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Palencia.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (134.^a)

Competencia. Cambio de nombre propio.–*Los órganos registrales españoles carecen de competencia para autorizar el cambio de nombre de un ciudadano extranjero pero, sin necesidad de expediente, puede sustituirse el nombre inscrito siempre que con documentos extranjeros auténticos se acrediten la nacionalidad y que, por aplicación de la ley personal, corresponde el solicitado y no el inscrito.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Tortosa (Tarragona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tortosa en fecha 8 de octubre de 2015 la Sra. M. D. T. D. y el Sr. M. D., de nacionalidad maliense, mayores de edad y domiciliados en dicha población, solicitan que se tenga por promovido expediente de cambio del nombre de su hija Mama D., nacida en A. el de 2004, por el utilizado habitualmente, «Mama-Alimatou», exponiendo que, dado que el inscrito se presta en España a confusiones

y a bromas fáciles, ha sido necesario llamarla por el que desean añadir, que es el que la menor ha usado y sigue usando en todos los actos de su vida, y acompañando copia simple de NIE de la promotora y de pasaporte maliense del promotor, certificación literal de inscripción de nacimiento de la menor y volante de empadronamiento en T.

II

Ratificados los promotores en el contenido del escrito presentado, el ministerio fiscal, entendiendo que no ha quedado suficientemente acreditada la petición, emitió informe desfavorable y el 17 de noviembre de 2015 la juez encargada, razonando que no consta documentalmente acreditado el uso habitual del nombre pretendido, dictó auto acordando denegar el cambio.

III

Notificada la resolución a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre elegido para su hija, completamente normalizado en el país del que son originarios, en Mali no comporta ningún tipo de discriminación o estigma social pero que en España, que es donde vive la niña, el vocablo tiene un significado que frecuentemente hace que la menor se encuentre en su vida cotidiana en situaciones comprometidas y que, en aras de la protección y el bienestar de la menor, se han visto obligados a añadir un segundo nombre al inscrito para que no sea confundida con la figura materna.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, dado que los promotores no han presentado prueba documental ni propuesto testifical que acredite, en su caso, el uso habitual del nombre «Mama-Alimatou», se opuso al recurso y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil (CC), 15, 23 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); y 205, 219, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); el Convenio número 19 de la Comisión Internacional de Estado Civil sobre la Ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980 y ratificado por España (BOE de 19 de diciembre de 1989), y las resoluciones, entre otras, de 8-3.^a de octubre de 1996, 19 de mayo de 1997, 3-3.^a de febrero de 1998, 18-2.^a de septiembre de 1999, 7-4.^a de diciembre de 2001, 14-2.^a de enero de 2005, 28-6.^a de noviembre de 2007, 8-12.^a de febrero de 2011, 29-18.^a de octubre de 2012, 18-4.^a de abril y 8-111.^a de octubre de 2013, 13-11.^a de marzo de 2014 y 30-34.^a de enero de 2015.

II. Los padres malienses de una menor nacida en España el 15 de junio de 2004 solicitan que se tenga por promovido expediente de cambio del nom-

bre, Mama, inscrito a su hija por el utilizado habitualmente, «Mama-Alimatou», exponiendo que, como el que ostenta se presta en España a confusiones y a bromas fáciles, ha sido necesario llamarla por el que desean añadir, que es el que la menor ha usado y sigue usando en todos los actos de su vida, y la juez encargada, razonando que no consta documentalmente acreditado el uso habitual del nombre pretendido, acuerda denegar el cambio mediante auto de 17 de noviembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El nombre y los apellidos se rigen por la ley personal determinada por la nacionalidad y, consiguientemente, los órganos registrales españoles carecen en principio de competencia para aprobar el cambio de nombre de un extranjero (arts. 9.1 CC y 219 RRC). El artículo 1 del Convenio de Munich arriba citado dispone que el nombre y los apellidos de una persona son determinados por la ley del Estado del que es nacional y, anteriormente, el artículo 2.º del Convenio de Estambul de 1958 había establecido que «Cada Estado contratante se obliga a no conceder cambios de apellidos o de nombres a los súbditos de otro Estado contratante, salvo en el caso de que fueren igualmente súbditos suyos». Con la suscripción de estos tratados internacionales las autoridades españolas adquieren el compromiso de no modificar el nombre y los apellidos de los nacionales de otros Estados contratantes y aunque podría entenderse que, por el contrario, sí tienen competencia cuando se trata de nacionales de Estados que no son parte, no habiendo norma que regule de forma explícita esa competencia de los órganos registrales españoles, surge en este punto una laguna legal para cuya integración algunos autores han propuesto que, si los órganos registrales gozan de competencia para la inscripción de nombres y apellidos extranjeros (art. 15 LRC), con mayor razón debe admitirse su competencia para cambiarlos cuando ello proceda según la ley nacional del sujeto (art. 1 Convenio de Munich) y, en esta línea, la doctrina de la dirección general se sustenta en la idea de que el concepto de ley aplicable está indisolublemente unido al de autoridad competente para aplicarla, y, por tanto, sostiene que los órganos registrales españoles no pueden cambiar el nombre y los apellidos de los extranjeros en ningún caso, ni siquiera cuando se trata de nacionales de Estados que no son parte en los convenios de referencia.

IV. No obstante, sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 296, último párrafo, RRC), puede hacerse constar en el registro el nombre que corresponde a un extranjero por aplicación de su ley personal, siempre que dicha circunstancia, así como la nacionalidad, se justifiquen con documentos extranjeros auténticos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tortosa.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (40.^a)

Competencia. Cambio de nombre propio.—1.º *El encargado no puede autorizar el cambio de nombre si en el expediente no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la dirección general examina la pretensión y no la concede, por no concurrir la justa causa requerida.*

2.º *La petición inicial no puede modificarse en fase de recurso introduciendo extemporáneamente una cuestión nueva.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid) en fecha 21 de julio de 2015 don Alberto-Javier M. C., nacido el 8 de abril de 1981 en P. M. (Illes Balears) y domiciliado en S. R. (Madrid), solicita la incoación de expediente gubernativo de cambio de nombre por el usado habitualmente, «Albert-Xavier», exponiendo que este último, traducción al catalán del inscrito, es el que viene utilizando y por el que es conocido en su entorno familiar, social y profesional y acompañando certificación de inscripción en el padrón de S. R., copia simple de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento.

II

Ratificado el promotor en el contenido del escrito presentado, se acordó incoar el oportuno expediente, el ministerio fiscal se opuso, ya que de la documental aportada no puede desprenderse que el nombre interesado sea el que el peticionario usa habitualmente y por el que se le conoce en todos los ámbitos, y el 2 de diciembre de 2015 la juez encargada dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no estamos estrictamente ante un cambio de nombre y que lo que solicita es la sustitución de los inscritos por su traducción al catalán, que es idioma cooficial.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, en base a las alegaciones efectuadas en el recurso, se adhirió a la pretensión del solicitante y seguidamente la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 53, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 206, 209, 210, 354, 358 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 9-4.^a de octubre de 1994, 14-1.^a de marzo de 1995, 10-2.^a de octubre de 1996; 4-1.^a de enero, 10-5.^a de febrero y 30-2.^a de mayo de 1997; 27-3.^a de marzo, 8-4.^a de mayo y 14-7.^a de septiembre de 2000; 17-2.^a de febrero, 6-2.^a y 21-2.^a de abril, 7-2.^a de julio de 2001; 8-2.^a, 14-4.^a y 22-2.^a de octubre de 2003; 3 y 21-3.^a de enero, 13-1.^a de abril, 20-3.^a de septiembre, 9-3.^a y 4.^a de noviembre y 10-1.^a de diciembre de 2004; 10-1.^a y 2.^a de junio, 18-3.^a de julio y 22 de octubre de 2005; 2-5.^a de marzo, 7-5.^a de julio, 24-1.^a de octubre y 16-3.^a de noviembre de 2006; 16-3.^a de abril, 3-7.^a de julio, 3-3.^a, 8-1.^a y 17-1.^a de octubre, 11-5.^a, 17-1.^a y 20-1.^a de diciembre de 2007; 21-1.^a de febrero, 23-6.^a y 7.^a de mayo y 16-5.^a de septiembre de 2008; 11-3.^a de febrero y 6-4.^a de abril de 2009, 14-17.^a de diciembre de 2010, 13-14.^a de septiembre y 4-115.^a y 15-74.^a de noviembre de 2013; 10-7.^a y 9.^a de febrero, 30-4.^a de abril y 21-17.^a de octubre de 2014, 6-35.^a de noviembre y 30-16.^a de diciembre de 2015 y 1-45.^a de abril, 27-18.^a de mayo y 8-19.^a de julio de 2016.

II. Solicita el promotor el cambio del nombre inscrito, Alberto-Javier, por «Albert-Xavier», exponiendo que este último, traducción al catalán del inscrito, es el que usa habitualmente y por el que es conocido en su entorno familiar, social y profesional y, por tanto, se cumplen los requisitos que exigen los artículos 59.4 LRC y 209.4 RRC, y la juez encargada, razonando que de la documental aportada no se desprende que el nombre interesado sea el usado habitualmente, dispone desestimar la petición formulada mediante auto de 2 de diciembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, en el que el peticionario alega que lo solicitado es la sustitución de los nombres inscritos por su equivalente en lengua catalana, tal como prevé el artículo 54 LRC, y a cuya vista el ministerio fiscal se adhiere a la pretensión.

III. El juez encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (*cf.* arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente de cambio un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. En este caso, no justificado el uso habitual del nombre propuesto, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al encargado sino al Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 209 *in fine* RRC) y, por delegación

(orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión deducida puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan el examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta negativa: el promotor basa su petición de cambio de nombre en el uso habitual del propuesto, «Albert-Xavier», sin aportar prueba alguna que acredite los hechos alegados y, no fundamentada la petición en ninguna otra razón, la estabilidad que han de tener el nombre y los apellidos, en cuanto signos de identificación y diferenciación de las personas sustraídos de la autonomía de voluntad de los particulares, impide apreciar que exista justa causa para el cambio de nombre solicitado (arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral.

VII. De otro lado, la pretensión inicial no puede ser modificada extemporáneamente en fase de recurso, la solicitud de sustitución, a tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 54 LRC, de los nombres inscritos por sus equivalentes onomásticos en lengua catalana constituye una cuestión nueva no relacionada directa e inmediatamente con la resolución apelada y de la competencia del Registro Civil de Palma de Mallorca, a cuyo encargo corresponde acordar la práctica de la marginal previa calificación de la petición efectuada (art. 27 LRC) y, por tanto, no puede ser examinada en esta apelación (*cf.* art. 358, II, RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Desestimar el recurso.
- 2.º Por delegación del Sr. ministro de Justicia (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), no autorizar el cambio del nombre inscrito, Alberto-Javier, por «Albert-Xavier».

Madrid, 15 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (82.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (17.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (43.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 28 de abril de 2017 (9.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (38.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 16 de junio de 2017 (26.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 23 de junio de 2017 (23.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 23 de junio de 2017 (24.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (15.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (16.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (38.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (41.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (26.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (15.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (21.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (33.^a). Competencia-cambio nombre propio.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (24.^a). Competencia-cambio nombre propio.

2.5.2 COMPETENCIA PARA EL CAMBIO DE APELLIDOS

Resolución de 17 de febrero de 2017 (35.ª)

Competencia. Cambio de apellidos.—*Acreditados de la documentación oficial aportada los apellidos que corresponden a una menor extranjera por aplicación de su ley personal, procede que se hagan constar marginalmente en su inscripción de nacimiento.*

En las actuaciones sobre constancia marginal en asiento de nacimiento de apellidos de la inscrita conforme a su ley personal remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la representación legal de los promotores contra calificación de la juez encargada del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Meco (Madrid) en fecha 2 de octubre de 2014 el Sr. V. P. V., mayor de edad y domiciliado en dicha población, expone que en el asiento de nacimiento de su hija V. V.G., nacida en M. de padres búlgaros el de 2008, se observa la existencia de error en los apellidos de la nacida y solicita que se rectifique la inscripción a fin de que figuren como tales los que deben constar: Valerieva Velcheva. Acompaña copia simple de certificado de nacimiento búlgaro de la menor, de pasaporte búlgaro y de certificado de registro en España como ciudadano de la Unión Europea propios, de tarjeta de identidad búlgara y de certificado de registro en España como ciudadano de la Unión Europea de la madre de la menor y de libro de familia que incluye un segundo hijo, un varón nacido en A. de H. (M.) el 10 de diciembre de 2009, que ostenta los apellidos Valeriev Velchev.

II

Recibidos el escrito y la documentación con él presentada en el Registro Civil de Murcia, la juez encargada dispuso requerir al promotor para que aporte certificado del consulado de su país en el que conste expresamente el apellido que corresponde a la menor de conformidad con su ley personal y, cumplimentado lo anterior, se advirtieron deficiencias de tramitación -falta de ratificación del padre, no comparecencia de la madre, documentos de identificación de los padres sin testimoniar- cuya subsanación se interesó, así como que se unan certificación de inscripción de nacimiento de la menor y el legajo de nacimiento, y el 24 de junio de 2015 la juez encargada dictó providencia resolviendo que es procedente acceder a que la menor tenga como único apellido el de su padre con terminación femenina y que no procede añadir como primer apellido el patronímico «Valerieva», ya que la imposición a la menor de dos apellidos pertenecientes a la línea paterna colisiona con nuestro orden público.

III

Notificada la resolución al promotor, los dos progenitores interpusieron recurso mediante representante ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el hecho de que la menor no tenga el patronímico y su hermano lleve el apellido conforme a su ley personal puede generar conflictos personales, sociales, y de identificación del parentesco y ocasionar inconvenientes en los desplazamientos del país de residencia habitual al de nacionalidad.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la providencia dictada, y el juez encargado del Registro Civil de Murcia informó que se ratifica en sus propios términos en la resolución de la encargada y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil (CC), 15, 23 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); y 91, 205, 219, 296, 342, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); el Convenio número 19 de la Comisión Internacional de Estado Civil sobre la Ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980 y ratificado por España (BOE de 19 de diciembre de 1989), y las resoluciones de 19-3.^a de diciembre de 2000, 15-1.^a de marzo de 2001, 16-1.^a de junio de 2004, 30-19.^a de octubre de 2015 y 12-45.^a de febrero de 2016.

II. Solicitan los padres búlgaros de una menor nacida en España el 2008 e inscrita con los apellidos Velchev Georgieva, paterno y materno, que en el asiento de nacimiento se haga constar que sus apellidos son Valerieva el primero y Velcheva el segundo y la juez encargada resuelve que es procedente acceder a que la menor tenga como apellido único el paterno con terminación femenina y que no lo es anteponer como primer apellido el patronímico «Valerieva», ya que colisiona con nuestro orden público la imposición a la menor de dos apellidos pertenecientes a la línea paterna, mediante providencia de 24 de junio de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El nombre y los apellidos se rigen por la ley personal determinada por la nacionalidad y, por tanto, los órganos registrales españoles carecen de competencia para aprobar el cambio de apellidos de un extranjero (arts. 9.1 CC y 219 RRC) pero ello no es óbice para que, sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 91 y 296, último párrafo, RRC), puedan hacerse constar en el registro los que le corresponden por razón de su estatuto nacional, siempre

que con documentos oficiales se acrediten tanto la nacionalidad como que, en efecto, los solicitados son los determinados por la normativa aplicable.

IV. En este caso, si bien consta de la propia inscripción de nacimiento que se consignaron a la menor los apellidos solicitados por ambos progenitores en el momento de declarar el nacimiento, a estas actuaciones se ha aportado la inscripción búlgara de nacimiento, practicada ocho meses después, y certificado de la Sección Consular de la Embajada de Bulgaria en España que expresan que sus apellidos son los que se solicita que figuren en el registro español. Consta, por otra parte, que el segundo hijo de los promotores, un varón nacido en A. de H. (M.) el.... de 2009, fue inscrito a su nacimiento con los apellidos que, con terminación femenina, se interesan para la hija nacida en primer lugar e indicación, en el apartado habilitado para observaciones, de que se consignan conforme a su ley personal, art. 219 RRC. Así pues, acreditados fehacientemente los apellidos que los dos menores ostentan conforme a su ley personal, procede acordar que la hija conste en el registro civil español con esos apellidos y, no tratándose de ciudadanos españoles, no cabe considerar que tal decisión colisione con el orden público español por acordar la anotación marginal de dos apellidos pertenecientes a la línea paterna, máxime teniendo en cuenta que la providencia dictada sí exceptúa el otro principio rector de nuestro ordenamiento en la materia, la duplicidad de apellidos, y que el bien jurídico superior a proteger en este caso es la homopatrimonia de dos menores, hermanos de doble vínculo.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar la providencia apelada.
- 2.º Disponer que en la inscripción de nacimiento de la menor se hagan constar marginalmente los apellidos «Valerieva Velcheva» que ostenta conforme a su ley personal (art. 219 RRC).

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (34.ª)

Competencia. Cambio de apellidos.—1.º *Por incompetencia del registro civil una vez transcurrido el plazo de dos meses fijado en los artículos 59.3.º de la Ley del Registro Civil y 209.3.º del Reglamento se declara la nulidad del auto dictado en expediente de conservación de apellidos usados antes de la inscripción de la filiación.*

2.º Por economía procesal y por delegación del Ministro de Justicia, la Dirección General examina el expediente y, acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos, autoriza la conservación solicitada.

En el expediente sobre conservación de apellidos remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por las promotoras contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Santander (Cantabria).

HECHOS

I

En escrito con entrada en el Registro Civil de Santander en fecha 8 de mayo de 2015 doña M-L. y doña A. G. V., nacidas el 1 de junio de 1976 y el 13 de agosto de 1980, respectivamente, en S. y domiciliadas en dicha población, exponen que en fecha 4 de marzo de 2015 se inscribió su adopción por doña M-L. V. Gi., acordada por auto de fecha 22 de enero de 2015, y que les interesa conservar sus apellidos anteriores, G. P. Acompañan copia simple de los respectivos DNI y de certificación literal de las inscripciones de nacimiento de ambas en las que consta practicada la marginal que mencionan, sendos volantes de inscripción en el padrón de Santander y copia simple de testimonio del auto en el que trae causa la inscripción marginal asentada.

II

Ratificadas las promotoras en el escrito presentado y acordada la incoación del pertinente expediente gubernativo de conservación de apellidos, el ministerio fiscal se opuso, dado que ha transcurrido el plazo previsto en el art. 209.3.º del Reglamento del Registro Civil, y el 19 de agosto de 2015 el juez encargado dictó auto acordando que no ha lugar a autorizar la conservación pretendida por haberse presentado la solicitud fuera del plazo de dos meses desde la inscripción de la adopción previsto en el art. 59.3.º de la Ley del Registro Civil.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a las promotoras, estas interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que pensaron que, al ser mayores de edad, los apellidos no se cambiarían automáticamente y que la no aceptación de su solicitud de conservación les supondría una inacabable cascada de perjuicios.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que dio por reproducido su informe anterior, y la juez encargada informó que las alegaciones formuladas no desvirtúan la fundamentación legal de la denegación y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 48 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ); 108, 109 y 178 del Código civil (CC); 53, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 194, 197, 205, 206, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 16 de enero de 1996; 3-1.^a, 23 y 25 de febrero, 3-1.^a de marzo y 11-1.^a de mayo de 1998; 27-1.^a de enero de 2001, 30-3.^a de noviembre de 2002, 28-7.^a de mayo y 13-1.^a y 17-2.^a y 4.^a de octubre de 2003, 30-5.^a de noviembre de 2004, 31-3.^a de enero de 2005, 31-3.^a de octubre de 2006, 19-2.^a y 20-3.^a de abril de 2007, 27-5.^a de marzo y 20-10.^a de noviembre de 2008, 13-4.^a de enero de 2009, 3-26.^a de enero de 2011, 18-26.^a de septiembre y 11-148.^a de diciembre de 2013; 20-44.^a y 155.^a de marzo, 9-17.^a de julio y 21-13.^a de octubre de 2014 y 28-5.^a de agosto y 18-8.^a de septiembre de 2015.

II. Las promotoras, nacidas el 1 de junio de 1976 y el 13 de agosto de 1980, solicitan en fecha 8 de mayo de 2015 la conservación del apellido, «P.», que ostentaban como segundo hasta la inscripción, el día 4 de marzo de 2015, de la adopción por la cónyuge de su padre y el juez encargado acuerda que no ha lugar a autorizar la conservación pretendida, por haberse presentado la solicitud fuera del plazo de dos meses desde la inscripción de la adopción previsto en el art. 59.3.º de la Ley del Registro Civil, mediante auto de 19 de agosto de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para decidir en primera instancia un expediente de cambio de nombre y apellidos en los supuestos tasados enumerados en el artículo 59 de la Ley del Registro Civil. Dado que este caso no es ninguno de los contemplados en dicho precepto ya que, aunque es de aplicación el apartado 3.º, ha transcurrido el plazo de dos meses en él fijado, el expediente instruido por el registro civil del domicilio ha de elevarse al ministerio de Justicia (*cf.* art. 365 RRC) a fin de que, conforme a la competencia general que en materia de cambio de nombres y apellidos le atribuyen los artículos 57 LRC y 209 RRC, dicte la resolución que proceda.

IV. En consecuencia, ha de declararse la nulidad por incompetencia del auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Santander (*cf.* arts. 48 y 62 LEC y 238 y 240 LOPJ, en relación con la remisión contenida en el art. 16 RRC), al tiempo que razones de economía procesal aconsejan examinar si el cambio solicitado puede ser autorizado por este centro directivo, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio y sería superfluo y desproporcionado con la causa (*cf.* art. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V. Aunque la regla general en materia de atribución de apellidos es la contenida en los arts. 109, II CC, 53 y 55 LRC y 194 RRC, que son de aplicación automática y operan por ministerio de ley, la excepción aquí interesada viene avalada por lo dispuesto en el artículo 59.3.º de la Ley del Registro Civil y su correlativo reglamentario, que atienden a la finalidad de preservar el valor identificativo de los apellidos en el uso social y en el tráfico jurídico y evitar perjuicios a las personas que, teniendo por razón de edad, trayectoria vital y actividad profesional, una situación de hecho consolidada en el uso de determinados apellidos, los ven alterados a consecuencia de una tardía inscripción de la filiación y de los apellidos que conlleva. Habida cuenta de que el requisito de la justa causa ha de estimarse cumplido por la utilización durante treinta y nueve años en un caso y treinta y cinco en el otro del apellido cuya conservación se solicita y que de lo actuado no resulta que haya perjuicio de tercero (*cf.* arts. 60 LRC y 210 RRC), no hay obstáculo legal para aprobar el expediente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Santander en fecha 19 de agosto de 2015.

2.º Por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), autorizar la conservación por las promotoras de los apellidos «G. P.» que venían usando antes de la inscripción de la filiación materna adoptiva, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen de los asientos de nacimiento de las interesadas y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, tal como dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba los cambios deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado reglamento.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander (Cantabria).

Resolución de 9 de junio de 2017 (25.ª)

Competencia. Cambio de apellidos.—1.º *Pueden anotarse sin expediente el nombre y los apellidos de un extranjero según su ley personal siempre que con documentos oficiales auténticos se acrediten la nacionalidad y que los solicitados son los que corresponden por aplicación de la ley personal.*

2.º Aportados por la interesada documentos distintos de los que, para constancia de los hechos alegados, le han sido requeridos en dos providencias sucesivas, es procedente el archivo de actuaciones acordado.

En las actuaciones sobre constancia marginal en asiento de nacimiento de nombre y apellido de la inscrita conforme a su ley personal remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada y su madre contra providencia dictada por la juez encargada del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Barcelona de fecha 30 de diciembre de 2013 la Sra. X.Y., mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita que en la inscripción de nacimiento de su hija Q.M.Y.Y. nacida en M. de padres chinos el 14 de octubre de 1996, quede constancia de que, según su ley personal, le corresponden «Qiaomiao» como nombre propio y «Lin» como apellido único. Acompaña copia simple de NIE propio y de la menor, volante de empadronamiento en Barcelona de esta, certificado expedido por el Consulado General de la República Popular China en Barcelona para constancia de que la hija del señor L.Y. y la señora Y.X. debe inscribirse como Lin Qiaomiao, siendo Lin el apellido y Qiaomiao el nombre; certificación literal de inscripción de defunción de Y.L., fallecido en Barcelona el 5 de agosto de 2008, y certificación literal de inscripción de nacimiento de la menor.

II

Remitidas el acta de comparecencia y la documentación aportada al Registro Civil de Murcia, la juez encargada dictó providencia de fecha 20 de febrero de 2014 disponiendo requerir a la promotora para que aporte certificado consular que acredite que la menor es de nacionalidad china y partida de nacimiento de su padre, para constancia de que su nombre y su apellido son los aducidos, y el 10 de diciembre de 2014 la interesada, ya mayor de edad, comparece en el registro civil del domicilio, presenta otra certificación consular, similar a la que ya obra en las actuaciones, y copia de acta notarial china referida al nacimiento del padre y manifiesta que no puede aportar el certificado de nacimiento requerido porque en China no los expiden de personas fallecidas.

III

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Murcia, la juez encargada dictó el 10 de febrero de 2015 una segunda providencia disponiendo que, conforme a lo dispuesto en la primera, se acredite la nacionalidad china de la interesada y se aporte certificación de nacimiento del padre o, en su defecto, certificado consular que dé constancia de que no es posible obtener la de un difunto y certificación de defunción china y, en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 23 de marzo de 2015, la interesada presenta el certificado consular acreditativo de su nacionalidad requerido y original del acta notarial china

sobre nacimiento de su padre aportada en copia en la comparecencia anterior, a la que denomina certificado de nacimiento, y manifiesta que ha solicitado al consulado de China en Barcelona certificado que acredite qué es nombre y qué apellido en dicho certificado y que lo aportará tan pronto como le sea entregado. En comparecencia de 7 de abril de 2015 informa que el documento estará disponible a partir del 9 de abril y que lo entregará el día 13, dentro del plazo que se le ha dado, y en esa fecha presenta certificado consular que expresa que, según fotocopia de pasaporte chino cuyo número se indica, el nombre del titular es L.Y. y, según la costumbres china, el apellido va antepuesto al nombre.

IV

Unidos a las actuaciones los documentos presentados, la juez encargada del Registro Civil de Murcia, visto que entre ellos no constan los requeridos en sus dos resoluciones anteriores, dictó providencia de fecha 27 de abril de 2015 acordando el archivo de actuaciones.

V

La resolución fue notificada a la promotora en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 17 de junio de 2015 y madre e hija interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la providencia dictada ordena el archivo de las actuaciones sin argumento alguno y que es inexacto que no se presentara partida de nacimiento de Y.L.

VI

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que sí consta la partida de nacimiento solicitada, se adhirió al recurso y, unido el legajo de nacimiento, la juez encargada dictó providencia de constancia de que, observado error en el nombre de la inscrita, puesto que en la declaración de nacimiento se consignó Qiao Miao y no lo inscrito, deberá instarse el correspondiente expediente de rectificación de esa mención y, respecto a la adecuación de apellidos a la ley personal, emitió informe argumentando que, no obstante lo alegado por la recurrente, el archivo de las actuaciones tiene su base legal en la no aportación del certificado de nacimiento del padre, absolutamente necesario para determinar la filiación paterna y si realmente, con arreglo a su ley personal, corresponde a la interesada el apellido que proclama, máxime cuando en el momento del nacimiento el padre de la inscrita declaró que su nombre era «Lin» y su apellido «Yinpeng», el inscrito como primero a la nacida, y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil (CC), 2, 15, 23 y 41 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 152, 219, 296, 342, 351 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a de abril,

26-1.^a de septiembre y 7-4.^a de diciembre de 2001, 14-2.^a de enero de 2005, 28-6.^a de noviembre de 2007, 19-12.^a de abril de 2013, 10-44.^a de enero, 17-28.^a de marzo y 28-49.^a de octubre de 2014 y 20-20.^a de marzo de 2015.

II. Solicita la promotora que en la inscripción de nacimiento de su hija Quiao Miao Yinpeng Ye, nacida de padres chinos el 14 de octubre de 1996, quede constancia de que, según su ley personal, le corresponden «Qiao-miao» como nombre propio y «Lin» como apellido único, la juez encargada del Registro Civil de en Murcia requiere por dos veces a la interesada, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, a fin de que aporte certificado chino de nacimiento de su padre o, en su defecto, certificado consular que dé constancia de que no es posible obtener el de un difunto y certificado chino de defunción y, considerando que entre los documentos sucesivamente aportados no se encuentran los recabados, acuerda el archivo de actuaciones mediante providencia de 27 de abril de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por promotora e interesada y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. Sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 296 RRC) pueden hacerse constar en el registro el nombre y los apellidos que corresponden a un extranjero en virtud de su ley personal siempre que con documentos oficiales auténticos se justifiquen tanto la nacionalidad como que, en efecto, los que se pretende que consten son los determinados por la ley extranjera aplicable. En este caso la promotora, a quien incumbe la carga de la prueba (art. 351 RRC), no ha llegado a justificar la pertinencia de las menciones que solicita para la inscrita: en la comparecencia que inicia las actuaciones presenta certificación literal de inscripción de defunción de Yinpeng Lin, que hace fe de que falleció en 2008 en Barcelona, requerida a fin de que aporte certificado chino de nacimiento del finado, manifiesta que no es posible obtener el de un difunto y, en su lugar, presenta copia de acta notarial china con los datos del nacimiento, expedida el 26 de agosto de 2014 a solicitud de Lin Yinpeng, «ahora domiciliado en España»; recabado por segunda vez el certificado de nacimiento o, en su defecto, acreditación del impedimento alegado, aporta el original del acta notarial ya presentada en copia, que ahora la interesada denomina certificado de nacimiento y en el que la palabra «solicitante» aparece emborronada, y existiendo evidente contradicción en lo manifestado en una y otra comparecencia, ha de estimarse procedente el archivo de actuaciones acordado por la encargada e inconsistente la alegación formulada en el escrito de recurso de que el documento requerido ha sido presentado. A mayor abundamiento, unido por el registro en fase de apelación testimonio del cuestionario para la declaración de nacimiento en su momento cumplimentado y firmado por el padre de la interesada, se comprueba que este, al rellenar sus propios datos, consignó «Lin» en el espacio habilitado para el nombre y «Yinpeng» en el destinado al apellido y no parece probable que se equivocara por el hecho de que en China el apellido preceda al nombre ya que la confusión no afecta a las menciones de la madre de la nacida.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 9 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Murcia.

Resolución de 7 de julio de 2017 (2.ª)

Competencia. Cambio de apellidos.—1.º *Los órganos registrales españoles carecen de competencia para autorizar un cambio de apellidos que afecta a una ciudadana extranjera.*

2.º Acreditado que, por aplicación de su ley personal, a la menor recién filiada le corresponden los apellidos en el orden inscrito, no cabe hacerlos constar en el inverso.

En las actuaciones sobre inversión de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra providencia dictada por la juez encargada del Registro Civil de Bilbao (Bizkaia).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Bilbao en fecha 24 de julio de 2014 Doña M. D. G., procuradora de los tribunales y de la Diputación Foral de Bizkaia, solicita que se proceda al cambio de los apellidos inscritos a la menor I. C. On. Ob., nacida en B. el de 2010, por Ob. On., exponiendo que la entidad a la que representa asumió su tutela en septiembre de 2011, que la madre falleció ese mismo año y no existe previsión ni posibilidad de que el padre vaya a hacerse cargo de ella, que en los ámbitos escolar, social y familiar la menor se reconoce como I. C. Ob., que el apellido que se solicita como primero lo ostentan sus hermanos de vínculo sencillo y la tía materna que la tiene acogida y que pasar a apellidarse On. Ob. la va a desestabilizar y desorientar. Acompaña certificación literal de inscripción de nacimiento de I. C. Ob. M. con indicación, en el apartado habilitado para observaciones, de que la progenitora reconoce a la inscrita como hija suya para todos los efectos legales y de que los apellidos de la inscrita se consignan conforme a su ley personal, art. 219 RRC, e inscripción marginal, practicada en fecha 9 de abril de 2014, de filiación paterna respecto a un nacional ecuatoguineano determinada legalmente por sentencia firme de 15 de enero de 2014 e indicación de los apellidos On. Ob. determinados por tal filiación; y copia simple de copia de escritura de apoderamiento otorgada por la Diputación Foral de Bizkaia a una serie de letrados y procuradores de diversas poblaciones entre los que se encuentra la actuante.

II

Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, la juez encargada acordó notificar al padre de la menor, no privado de la patria potestad, y a la tía materna acogedora, esta compareció el 27 de noviembre de 2014 y manifestó que el padre se marchó a Guinea Ecuatorial y no han sabido más de él, tras unirse formulario de consulta padronal negativa, el 21 de enero de 2015 la juez encargada, visto que de la inscripción de nacimiento de la menor se desprende que es de nacionalidad ecuatoguineana y, por tanto, no procede tramitar expediente de cambio de apellidos, acordó requerir a la promotora para que aporte la legislación extranjera aplicable y esta presentó certificado de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España que da constancia de que, conforme a lo establecido en el artículo 114 del Código Civil de ese país, los hijos legítimos tienen derecho a llevar los apellidos del padre y de la madre y, conforme al derecho consuetudinario, se establece como primer apellido de la persona inscrita el primer nombre africano de su padre; y escrito en el que alega que, de conformidad con el artículo 12.3 del Código Civil, en este caso no es aplicable la previsión de la legislación extranjera por resultar contraria a la igualdad, que es cuestión de orden público internacional español, y solicitando que, acreditada la conveniencia para la menor del cambio de apellidos, se proceda al mismo.

III

A la vista de lo anterior, la juez encargada dictó providencia de 24 de septiembre de 2015 acordando que no procede la tramitación de expediente de modificación de apellidos de la menor, dado que es de nacionalidad ecuatoguineana y los apellidos que ostenta han sido consignados conforme a la legislación de Guinea Ecuatorial.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, otro procurador de los tribunales y de la Diputación Foral de Bizkaia interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que se reponga la providencia dictada, se dé continuidad al expediente y se proceda al cambio de apellidos de la menor.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que mostró su conformidad con el contenido de la providencia apelada, y la juez encargada informó que no han quedado desvirtuados los argumentos jurídicos de la resolución impugnada y dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil (CC), 15, 23 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 205, 219, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); el Convenio número 19 de la Comisión Internacional de Estado Civil

sobre la ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980 y ratificado por España (BOE de 19 de diciembre de 1989), y las resoluciones de 7-4.^a de diciembre de 2001, 14-2.^a de enero de 2005, 1-1.^a de octubre de 2007, 17-28.^a de marzo de 2014 y 12-51.^a de junio de 2015.

II. La entidad tutelar de una menor, nacida en España el de 2010 de madre ecuatoguineana, inscrita en el Registro Civil de Bilbao con indicación, en el apartado habilitado para observaciones, de que la progenitora reconoce a la inscrita como hija suya para todos los efectos legales y de que los apellidos de la inscrita se consignan conforme a su ley personal, art. 219 RRC, y en cuyo asiento de nacimiento consta practicada en fecha 9 de abril de 2014 marginal de filiación paterna respecto a un nacional ecuatoguineano determinada legalmente por sentencia firme de 15 de enero de 2014 e indicación de los apellidos determinados por tal filiación, solicita que se proceda al cambio del orden de los apellidos consignados en dicha marginal exponiendo que la menor está tutelada desde septiembre de 2011, que su madre ha fallecido y no existe previsión ni posibilidad de que su padre se haga cargo de ella, que en los ámbitos escolar, social y familiar se reconoce con el primer apellido Ob. que ostentan sus hermanos de vínculo sencillo y la tía materna que la tiene acogida y que pasar a ser designada de otro modo la va a desestabilizar y desorientar, y la juez encargada acuerda que no procede la tramitación del expediente de modificación de apellidos instado, por cuanto la interesada es de nacionalidad ecuatoguineana y sus apellidos han sido consignados conforme a la legislación de Guinea Ecuatorial, mediante providencia de 24 de septiembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto asimismo por la entidad tutelar.

III. El nombre y los apellidos se rigen por la ley personal determinada por la nacionalidad y, consiguientemente, los órganos registrales españoles carecen en principio de competencia para aprobar el cambio de apellidos de un extranjero (arts. 9.1 CC y 219 RRC). El artículo 1 del Convenio de Munich arriba citado dispone que el nombre y los apellidos de una persona son determinados por la ley del Estado del que es nacional y, anteriormente, el artículo 2.º del Convenio de Estambul de 1958 había establecido que «Cada Estado contratante se obliga a no conceder cambios de apellidos o de nombres a los súbditos de otro Estado contratante, salvo en el caso de que fueren igualmente súbditos suyos». Con la suscripción de estos tratados internacionales las autoridades españolas adquieren el compromiso de no modificar el nombre y los apellidos de los nacionales de otros Estados contratantes y aunque, al contrario, podría entenderse que sí tienen competencia cuando se trata de nacionales de Estados que no son parte, no habiendo norma que regule de forma explícita esa competencia de los órganos registrales españoles, surge en este punto una laguna legal para cuya integración algunos autores han propuesto que, si los órganos registrales gozan de competencia para la inscripción de nombres y apellidos extranjeros (art. 15 LRC), con mayor razón debe admitirse su competencia para cambiarlos cuando ello proceda según la ley nacional del sujeto

(art. 1 Convenio de Munich) y, en esta línea, la doctrina de la dirección general se sustenta en la idea de que el concepto de ley aplicable está indisolublemente unido al de autoridad competente para aplicarla, y, por tanto, sostiene que los órganos registrales españoles no pueden cambiar el nombre y los apellidos de los extranjeros en ningún caso, ni siquiera cuando se trata de nacionales de Estados que no son parte en los convenios de referencia.

IV. Ciertamente, sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 296, último párrafo, RRC), pueden hacerse constar en el registro el nombre y los apellidos que corresponden a un extranjero por aplicación de su ley personal siempre que dicha circunstancia, así como la nacionalidad, se justifique con documentos extranjeros auténticos. En este caso se ha aportado a las actuaciones certificado de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España que da constancia de que, conforme a lo establecido en el artículo 114 del Código Civil de ese país, los hijos legítimos tienen derecho a llevar los apellidos del padre y de la madre y, conforme al derecho consuetudinario, se establece como primer apellido de la persona inscrita el primer nombre africano de su padre; en la inscripción marginal de filiación practicada en la de nacimiento de la menor la indicación de los apellidos por ella determinados se atiene a lo anterior y, en consecuencia, no acreditado que el orden de apellidos de la filiada infrinja la ley personal de los padres, no cabe hacerlos constar en el inverso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 7 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Bilbao (Vizcaya).

Resolución de 13 de octubre de 2017 (28.^a)

Competencia. Cambio de apellidos.—1.º *Se declara la nulidad de actuaciones del encargado que deniega un cambio de apellidos siendo incompetente para ello.*

2.º *La Dirección General de los Registros y del Notariado, por economía procesal y por delegación del Ministro de Justicia, autoriza el cambio solicitado.*

En las actuaciones sobre cambio de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución del encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2015 en el Registro Civil de Telde, D.^a R.-P. S. M., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de sus apellidos actuales por los segundos de su padre y de su madre, *F. Z.*, alegando que son los que utiliza habitualmente y por los que es conocida. Aportaba la siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento, certificaciones literales de nacimiento de la promotora, nacida en Telde el 7 de abril de 1972, y de su padre, certificado de ausencia de antecedentes penales, varios correos electrónicos, una oferta de presupuesto y una solicitud de crédito.

II

Ratificada la interesada, practicada prueba testifical a dos amigas de la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto denegando la solicitud porque la competencia para autorizar el cambio solicitado corresponde al Ministerio de Justicia y no al registro y porque, además, no consideró acreditado el uso habitual de los apellidos propuestos.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la interesada que es conocida por los apellidos solicitados en todos los ámbitos y alegando que incluso la denominación social de la empresa familiar en la que desarrolla parte de su actividad, constituida en 2006, es «Promociones Z. F., S.L.», es decir, los mismos apellidos que ella pretende pero en orden inverso. Al escrito de recurso adjuntaba, además de los ya incorporados al expediente, los siguientes documentos: libro de familia y certificación de matrimonio de sus padres; partida de bautismo de la abuela paterna y certificación de nacimiento de la abuela materna; certificación de nacimiento y DNI de un hijo de la recurrente; copia del primer folio de la escritura de constitución de la empresa familiar; poder notarial para pleitos; facturas, faxes y correos electrónicos fechados entre 2011 y 2015 (también se incluye un documento de 2007) y declaración testifical ante notario de dos personas distintas de las que se presentaron en la fase anterior.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación reiterando el contenido del informe emitido en 2015 antes del auto de denegación. El encargado del Registro Civil de Telde remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 48 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial; 57 y 59 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 209, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 13-1.^a de octubre de 2003, 17-2.^a de diciembre de 2004, 31-3.^a de enero y 7-2.^a de abril de 2005, 20-6.^a de junio de 2006, 20-10.^a de noviembre de 2008, 31-48.^a de mayo de 2012, 21-78.^a y 84.^a de junio de 2013, 14-50.^a de octubre de 2014 y 29-27.^a y 28.^a de julio de 2016.

II. Solicita la interesada el cambio de sus apellidos actuales por los segundos tanto de su padre como de su madre, alegando que es así como se la conoce desde hace años en todos los ámbitos. El encargado del registro, denegó la solicitud, en primer lugar por no ser de su competencia la modificación solicitada y, además, por considerar que, en cualquier caso, no estaba probada la habitualidad en el uso, sin perjuicio de que la promotora instara nuevamente el cambio ante el órgano competente. Contra dicha resolución se presentó el recurso examinado.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para decidir en primera instancia un expediente de cambio de apellidos en los supuestos taxativos que señalan los artículos 59 de la Ley del Registro Civil y 209 de su reglamento. Como en este caso no se trata de ninguno de los supuestos a los que dichos artículos se refieren, una vez instruido el expediente ante el registro civil del domicilio, debió ser el propio encargado (art. 365 RRC) quien lo remitiera al Ministerio de Justicia para su resolución de acuerdo con la competencia general establecida en materia de cambio de nombre y apellidos por el artículo 57 de la Ley del Registro Civil, hoy atribuida a la Dirección General de los Registros y del Notariado por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril).

IV. Consiguientemente, ha de declararse la nulidad del auto dictado por el encargado del Registro Civil de Telde (*cf.* arts. 48 y 62 LEC y 238 y 240 LOPJ, en relación con la remisión contenida en el art. 16 RRC). Al mismo tiempo, razones de economía procesal aconsejan examinar si el cambio solicitado puede ser autorizado en esta instancia, ya que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente ante el registro civil del domicilio y resultaría superfluo y desproporcionado con la causa (art. 354 RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

V. La respuesta en este caso debe ser positiva porque los apellidos solicitados pertenecen legítimamente a la solicitante, están representadas las dos líneas y, a través de la documentación aportada en vía de recurso, se considera probada la existencia de una situación de uso de los apellidos propuestos consolidada en el tiempo, por lo que, en definitiva, resultan cumplidos todos los requisitos legalmente exigidos (arts. 57 LRC y 205 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Declarar la nulidad de la resolución de denegación de cambio de apellidos dictada por el encargado del Registro Civil de Telde.

2.º Por delegación del Ministro de Justicia (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), autorizar el cambio de apellidos de D.^a R.-P. S. M. por F. Z., no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del reglamento.

Madrid, 13 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Telde (Las Palmas).

3. NACIONALIDAD

3.1 Adquisición originaria de la nacionalidad española

3.1.1 ADQUISICIÓN NACIONALIDAD DE ORIGEN *IURE SOLI*

Resolución de 17 de febrero de 2017 (49.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.—*No es española iure soli la nacida en España de padres argentinos y nacidos en Argentina.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

I

Seguido expediente ante el Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina), Doña D. R. O., nacida el 2 de abril de 1990 en M., solicitó que se declarara su nacionalidad española con valor de simple presunción, en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil. Por auto del encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires de fecha 13 de octubre de 2011 se estimó la pretensión de la promotora, remitiéndose las actuaciones al Registro Civil de Madrid. Por providencia de 23 de diciembre de 2011, el encargado del Registro Civil de Madrid acuerda que se proceda a la práctica del asiento marginal de declaración con valor

de simple presunción de la nacionalidad española en el acta de nacimiento de la interesada y poner el hecho en conocimiento del ministerio fiscal, a los efectos oportunos.

II

El 11 de enero de 2012, el ministerio fiscal solicita al Registro Civil Consular de Buenos Aires que aporte testimonio del expediente de declaración de la nacionalidad española de la interesada, en especial, la documentación que presenta la promotora para identificarse en la actualidad. Entre la documentación remitida por el Registro Civil Consular, se observa que consta pasaporte argentino de la interesada.

III

El 30 de abril de 2012, el ministerio fiscal emite informe por el que interesa el inicio de expediente para declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, ya que de la documentación obrante en el expediente inicial consta que la promotora entró en Argentina el 18 de agosto de 1990 y que en la actualidad está documentada con pasaporte argentino. Por providencia de 7 de mayo de 2012, el encargado del Registro Civil inicia expediente para la cancelación de la anotación de la nacionalidad de la interesada.

IV

Una vez notificada la providencia de inicio a la interesada, alega que el pasaporte se lo expidieron por ser hija de ciudadano argentino, pero que no se lo han renovado precisamente por no ostentar la nacionalidad argentina y que tiene DNI para extranjeros, lo que acredita que no tiene la nacionalidad argentina.

V

El ministerio fiscal emite informe por el que interesa que se declare con valor de simple presunción que la interesada no tiene la nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil. El encargado del registro civil se ratifica íntegramente en el contenido de la providencia de 7 de mayo de 2012 por la que se iniciaba el expediente de cancelación de la anotación marginal de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, que también considera recurrida; y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

VI

Por resolución de fecha 31 de marzo de 2014 (60.ª), de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, se retrotraen las actuaciones para que se dicte auto que ponga fin al expediente por el encargado del registro civil, en el sentido que proceda, toda vez que el escrito presentado por la interesada corresponde a las alegaciones efectuadas por la misma.

VII

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 28 de mayo de 2014, por el que indica que no resulta de aplicación en el presente caso el artículo 17.1.c) del Código Civil para la atribución de la nacionalidad española *iure soli* a la promotora e interesando la cancelación de la anotación practicada, con fecha 24 de junio de 2014 se dicta auto por el encargado del Registro Civil de Madrid por el que se determina que procede cancelar la anotación practicada al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, haciendo constar que dicha anotación queda sin efecto en virtud de la declaración con valor de simple presunción de que a la inscrita no le corresponde la nacionalidad española de origen.

VIII

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, y se le reconozca la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, no aportando documentación que justifique su pretensión.

IX

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Madrid, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto junto con informe, en el que se indica que, a la vista de la documentación aportada, se estima que la finalidad del artículo 17.1.c) del Código Civil es evitar situaciones de apatridia y, en las presentes actuaciones se ha reiterado por el ministerio fiscal y en el auto que se recurre, aun cuando la interesada nació en España en 1990, que ha residido en Argentina prácticamente desde entonces, ostentando actualmente la nacionalidad argentina, por lo que se confirma en su integridad el auto recurrido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2.^a de octubre y 7-4.^a y 5.^a de noviembre de 2002; 28-4.^a de junio y 4-1.^a de julio de 2003; 28-3.^a de mayo y 23-1.^a de julio de 2004; 30-4.^a de noviembre y 7-2.^a de diciembre de 2005; 14-3.^a de febrero y 20-1.^a de junio de 2006; 17-4.^a de enero de 2007, 10-5.^a de diciembre de 2007; 11-7.^a de junio y 10-6.^a y 7.^a de julio de 2008; 27-4.^a de enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen una persona nacida en España el 02 de abril de 1990, hija de padres argentinos nacidos en Argentina. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de

padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (*cf.* art. 17.1.c) CC). Por auto del encargado del Registro Civil Consular de Buenos se estimó la pretensión de la promotora, remitiéndose las actuaciones al Registro Civil de Madrid. El encargado del registro civil inicia expediente para la cancelación de la anotación de la nacionalidad de la interesada, a la vista del informe emitido por el ministerio fiscal, que concluye por auto por el que se determina que procede cancelar la anotación practicada al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, haciendo constar que dicha anotación queda sin efecto en virtud de la declaración con valor de simple presunción de que a la inscrita no le corresponde la nacionalidad española de origen. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 346 de Ciudadanía Argentina, vigente en la fecha de nacimiento de la interesada, son argentinos: «... 2.º los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen».

IV. A la vista de la documentación integrante del expediente, se constata que la interesada, nacida en España el 2 de abril de 1990, entró en Argentina el 18 de agosto de 1990, según se hace constar en el documento nacional de identidad expedido por las autoridades argentinas que se aporta al expediente, que fue actualizado el 27 de mayo de 2008, cuando la recurrente ya era mayor de edad. Igualmente se aporta al expediente pasaporte argentino de la interesada, con fecha de expedición de 7 de septiembre de 2005 y fecha de vencimiento de 6 de septiembre de 2010. Por lo anteriormente indicado, se considera que la interesada se encuentra documentada como ciudadana argentina, no correspondiéndole la nacionalidad española conforme al artículo 17.1.c) del Código Civil, previsto para evitar situaciones de apatridia a las personas nacidas en España, circunstancia que no se produce en el presente caso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (20.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.—*No es española iure soli la nacida en España de padres paraguayos y nacidos en Paraguay.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Badalona (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Badalona (Barcelona), los ciudadanos de nacionalidad paraguaya y nacidos en Paraguay, Don C. A. F. y D.^a R. E. V. B. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija A. L. F. V., nacida el de 2013 en S. C. G. (Barcelona) al amparo de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil.

II

Con fecha 15 de diciembre de 2014, el encargado del Registro Civil de Badalona dicta auto por el que se desestima la petición formulada por los promotores, habida cuenta que, de la propia certificación negativa expedida por el Consulado de Paraguay en Barcelona, se desprende la posibilidad de que para la menor se solicite su inscripción como paraguaya cuando aquellos –los padres– radiquen en la República de forma permanente, no constando en el expediente la residencia legal de los promotores, por lo que no se cumple ninguna de las previsiones contenidas en el artículo 17 del Código Civil, toda vez que la situación de apatridia de la menor no deviene de la aplicación de la legislación de Paraguay, sino de la inactividad del progenitor, quien sin causa impeditiva alguna, omite voluntariamente la inscripción consular de nacimiento para poder elegir, a voluntad, la nacionalidad de su hija.

III

Notificada la resolución, los promotores interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se anule la resolución impugnada y se dicte otra por la que se acuerde la concesión a la menor de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción en base al artículo 17.1.c) del Código Civil, ya que la normativa de Paraguay no atribuye al nacido fuera del país la nacionalidad paraguaya, sino que establece un derecho de opción ciertamente flexibilizado, pero que de no ejercitarse, no produciría ningún efecto en cuanto a dicha nacionalidad, por tanto, si no se pusiese en marcha el mecanismo potestativo de la opción, el menor sería apátrida. Aportan la siguiente documentación: certificación expedida por el Consulado General de la República de Paraguay en Barcelona en relación con legislación paraguaya en materia de nacionalidad; certificados de empadronamiento histórico de los progenitores, expedidos por el Ayuntamiento de B. el 03 de marzo de 2015; certificados de constancia legalizados, emitidos por la Policía Nacional paraguaya, en relación con el domicilio en Brasil de los progenitores hasta el día 13 de septiembre de 2006; certificados de movimientos migratorios de los progenitores expedidos por la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior de la República del Paraguay y pasaporte paraguayo del progenitor.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, emite informe desfavorable a la pretensión de los recurrentes en fecha 23 de septiembre de 2015 y el encargado del Registro Civil de Badalona (Barcelona) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

V

Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado, se interesa del Registro Civil de Badalona requiera a los promotores a fin de que aporten certificados de empadronamiento actualizados de la menor y de sus padres, así como certificado actualizado del Consulado General de Paraguay en España informando si la menor se encuentra inscrita en los libros de nacimiento de dicha oficina consular, así como certificados actualizados de inscripción de los padres de la menor en el citado Consulado.

Remitida citación a los progenitores de la menor por el Registro Civil de Badalona al domicilio indicado a efectos de notificaciones en el escrito de recurso, con el fin de darles traslado del oficio de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el servicio de Correos devuelve el acuse de recibo de la notificación con la indicación en el primer intento de ausente y en el segundo intento de entregado.

Por diligencia de ordenación de 06 de febrero de 2017, el Registro Civil de Badalona devuelve las actuaciones, al haberse requerido la documentación solicitada a los promotores y no haberse personado en dicho Registro Civil para su aportación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2.^a de octubre y 7-4.^a y 7-5.^a de noviembre de 2002, 28-4.^a de junio y 4-1.^a de julio de 2003, 28-3.^a de mayo y 23-1.^a de julio de 2004, 30-4.^a de noviembre y 7-2.^a de diciembre de 2005, 14-3.^a de febrero y 20-1.^a de junio de 2006, 17-4.^a de enero y 10-5.^a de diciembre de 2007, 11-7.^a de junio y 10-6.^a y 10-7.^a de julio de 2008 y 27-4.^a de enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen una niña nacida en España el 22 de abril de 2013, hija de padres paraguayos, nacidos en Paraguay. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (*cf.* art. 17.1.c) CC). Por la encargada del Registro Civil de Badalona se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. En el presente expediente, solicitada mediante diligencia para mejor proveer de esta Dirección General de los Registros y del Notariado documentación actualizada a los promotores, a través de auxilio judicial, y no habiendo sido aportada la documentación requerida, no puede constatarse si en el momento actual se acreditan los requisitos establecidos en la legislación para la declaración de la nacionalidad española de origen de la menor en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.

IV. En el ámbito del registro civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Badalona (Barcelona).

Resolución de 7 de abril de 2017 (33.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.—*No es español iure soli el nacido en España en 2014 hijo de padres argelinos nacidos en Argelia, por corresponderle la nacionalidad argelina de éstos.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Bergara (Guipúzcoa).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Bergara (Guipúzcoa) el 5 de septiembre de 2014, Don K. L. D., nacido el 2 de mayo de 1979 en O. (Argelia), de acuerdo con el permiso de residencia incorporado al expediente y Doña R-U. S. B., nacida el 31 de julio de 1987 en O. (Argelia), de acuerdo con el documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario y el volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Mondra-

gón (Guipúzcoa), solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo menor de edad L. L. U., nacido el de 2014 en A. (Guipúzcoa), al amparo de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado literal español de nacimiento del menor; certificados de ciudadanía de los progenitores, expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática; volante de empadronamiento del padre del menor, expedido por el Ayuntamiento de Ponferrada (León); volantes de empadronamiento de la madre y del menor, expedidos por el Ayuntamiento de Mondragón (Guipúzcoa), tarjeta de permiso de residencia de larga duración del progenitor, en la que se hace constar que es de nacionalidad argelina y documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario de la madre del menor, en el que consta que es de nacionalidad argelina.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Bergara (Guipúzcoa) dictó auto el 6 de marzo de 2015 desestimando la solicitud de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española del menor, toda vez que, tratándose de padres de nacionalidad argelina, le corresponde *iure sanguinis* dicha nacionalidad, incluso si el menor ha nacido en el extranjero, por lo que no procede declarar la nacionalidad española del interesado con valor de simple presunción en base al artículo 17.1.c) del Código Civil.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, el padre del menor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado con fecha 12 de marzo de 2015, solicitando la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo, alegando que los progenitores no poseen la nacionalidad argelina, sino la saharauí. Aporta la siguiente documentación: documento de identidad y pasaporte de la progenitora, expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática; documento nacional de identidad y certificado español de nacimiento del padre de la progenitora, Don L. O. S. B., con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española con valor de simple presunción el 22 de agosto de 2008; pasaporte del progenitor, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática; volantes de empadronamiento del menor y de su madre, expedidos por el Ayuntamiento de Udala (Guipúzcoa); recibo MINURSO de la progenitora y certificados de nacionalidad saharauí de los progenitores, expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática.

IV

Notificado el ministerio fiscal, emite informe con fecha 10 de septiembre de 2015 por el que no se opone a la adquisición por el menor de la nacionalidad española con valor de simple presunción y la encargada del Registro Civil de Bergara (Guipúzcoa) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 16 de diciembre de 2008 y la de 21 de mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2.^a de marzo y 25 de septiembre de 2004, 16-3.^a de septiembre de 2005, 27-4.^a de diciembre de 2006, 3-5.^a de enero de 2007 y 29-2.^a de febrero de 2008; 9-5.^a y 12-4.^a de enero de 2009; 1-2.^a de febrero de 2010.

II.- Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en A. (Guipúzcoa) el 25 de junio de 2014, hijo de padres de nacionalidad argelina en el momento del nacimiento del menor, tal como consta en los permisos de residencia y en los documentos de identificación de extranjeros aportados al expediente. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1. c del Código Civil). La encargada del Registro Civil de Bergara (Guipúzcoa) desestimó la solicitud estimando que el menor posee *iure sanguinis* la nacionalidad argelina de sus progenitores. El padre del menor, interpone recurso aportando, entre otros, certificados de nacionalidad saharauí de los progenitores.

III. De la documentación incorporada al expediente, en particular tarjeta de permiso de residencia del progenitor y documento de identidad de extranjeros de la progenitora, se acredita que los padres del menor ostentaban la nacionalidad argelina en el momento del nacimiento de su hijo. Aparte de ello, los certificados de ciudadanía que se aportan expedidos por autoridades de la denominada República Árabe Saharaui Democrática no ofrecen garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española. Al respecto ha de tenerse en cuenta que las competencias de calificación del encargado respecto de la certificación extranjera se extienden al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio de cargo que le habilite para tal expedición con base legal suficiente para ello, base que en este caso no existe al no estar establecidos los órganos del registro civil en virtud de disposiciones normativas integrantes de un ordenamiento jurídico estatal internacionalmente reconocido.

IV. De acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro directivo de la legislación argelina, a los nacidos en España de padres argelinos «les corresponde la nacionalidad argelina por ser esa la de su padre» (capítulo II, artículo 6 del código sobre nacionalidad). Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código Civil es evitar situaciones de apatridia ori-

ginaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido en España ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Bergara (Guipúzcoa).

Resolución de 7 de abril de 2017 (41.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.–*Es español iure soli el nacido en España de padres colombianos y nacidos en Colombia.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Lorca (Murcia).

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Lorca (Murcia) el 30 de octubre de 2015, los ciudadanos colombianos y nacidos en Colombia, Don R. V. R. y Doña Á-M. D. C. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo D-S. V. D. nacido en L. (M.) el de 2014. Adjuntaban la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento del menor inscrito en el Registro Civil de Águilas (M.); volante de empadronamiento del menor, expedido por el Ayuntamiento de Águilas; permisos de residencia de larga duración de los progenitores; certificado expedido por el Consulado de Colombia en Valencia, en el que se indica que el menor no se encuentra inscrito en dicha sede consular; certificados de inscripción consular de los progenitores, expedidos por el Consulado de Colombia en Valencia; certificados de nacimiento de los progenitores, expedidos por el Registro Civil colombiano y certificado local de matrimonio de los progenitores celebrado el 29 de diciembre de 2004 en Colombia.

II

Ratificadas las partes en el expediente, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Lorca (Murcia) dictó auto el 15 de diciembre de 2015 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española al considerar que el

menor no ha sido inscrito en el Consulado de Colombia, por un acto de voluntad de los padres, por lo que en principio no debería otorgársele la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, ya que dicho país sí les otorga la nacionalidad, y por tanto no son apátridas.

III

Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su hijo, alegando que conforme a la vigente Constitución Política de Colombia, en su capítulo I, relativo a la nacionalidad, artículo 96 b), «son nacionales colombianos... los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registren en una oficina consular de la República...», por lo que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, sino que solo se puede adquirir por un acto posterior.

IV

Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Lorca (Murcia) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2.^a de octubre y 7-4.^a y 5.^a de noviembre de 2002; 28-4.^a de junio y 4-1.^a de julio de 2003; 28-3.^a de mayo y 23-1.^a de julio de 2004; 30-4.^a de noviembre y 7-2.^a de diciembre de 2005; 14-3.^a de febrero y 20-1.^a de junio de 2006; 17-4.^a de enero de 2007, 10-5.^a de diciembre de 2007; 11-7.^a de junio y 10-6.^a y 7.^a de julio de 2008; 27-4.^a de enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en España el 6 de septiembre de 2014, hijo de padres colombianos nacidos en Colombia. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (*cf.* art. 17.1.c) CC). Por el juez encargado se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Reiteradamente tiene establecido esta Dirección General, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (*cf.* art. 96.1.b de la Constitución Política de Colombia de 1991, modificado por el acto legislativo 01 de 2002). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importarse por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
- 2.º Declarar con valor de simple presunción que el menor es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de su nacimiento.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lorca (Murcia).

Resolución de 9 de junio de 2017 (18.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.–1.º *No es español iure soli conforme al artículo 17 del Código civil el nacido en el Sahara en 1974.*

2.º *No es posible la declaración de la nacionalidad española de origen porque no se ha acreditado que el padre la ostentase al tiempo del nacimiento del promotor.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Tudela, B. A., solicitaba la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en el Sahara Occidental, E-A., cuando éste era territorio sometido a administración española, 5 de mayo de 1974, haciéndolo al amparo del artículo 17 del Código Civil. Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: certificado de empadronamiento en Tudela desde el 1 de julio de 2015, el mismo día de la comparecencia, permiso de residencia de larga duración en España como ciudadano marroquí, nacido en L. el 5 de mayo de 1974, y en el que consta un domicilio en Canarias, pasaporte marroquí expedido en el año 2012 en el Consulado de Marruecos en Las Palmas, libro de familia correspondiente a S. B. B. M. y M. S. A., nacidos en D. en 1922 y casados en 1957, aparecen 4 hijos del matrimonio el último nacido en 1972, lo mismo sucede en la certificación de familia expedida por el gobierno español del Sáhara, certificado del Consulado marroquí en Algeciras, relativo a que según acta de nacimiento de 1978 el promotor aparece como B. A., hijo de S. B. hijo de B., nacido en D. en 1922 y de nacionalidad marroquí y de M. hija de S., nacida en la misma localidad y año y también de nacionalidad marroquí, certificado del Consulado marroquí en Las Palmas, sobre concordancia de nombres del promotor aunque no existe dato alguno que lo acredite y certificado marroquí de parentesco expedido por el registro civil de dicho país, constando el promotor como de nacionalidad marroquí.

II

Con fecha 14 de septiembre de 2015, se ratifica el interesado y comparecen dos testigos, naturales de Marruecos y España, manifestando que conocían al promotor de cuando vivían en E-A., dato éste que no está acreditado y que resulta dudoso al menos en el caso del ciudadano nacido en España, y que conocían a sus padres y les constaba que eran españoles de origen. Con fecha 16 del mismo mes el encargado del Registro Civil de Tudela solicitó informe a las autoridades policiales sobre el documento de identidad de la madre del promotor, que según contestan fue expedido en 1972 y había nacido en 1944, también se pide informe sobre la residencia efectiva del promotor en Tudela, que es comprobada por la Policía Local.

III

El Ministerio Fiscal emitió informe contrario a acceder a lo solicitado, ya que el interesado no concreta la base de su petición, refiriéndose al artículo 17 del Código Civil, que no es aplicable ya que no nació en territorio español, no ha quedado acreditada la nacionalidad española de sus padres, ni que estuvieran imposibilitados para optar en el periodo concedido en 1976, ni es apátrida puesto que tiene nacionalidad marroquí y tampoco le es aplicable el artículo 18 del CC, tras lo cual el encargado dictó auto el 7 de octubre de 2015 denegando lo solicitado por entender que en este caso no se ha demostrado que el solicitante sea persona coincidente con la que aparece en la documentación aportada, de hecho no fue inscrito en el libro de familia ni se incluyó en una certificación de familia posterior a su nacimiento.

IV

Notificada la resolución al promotor y al ministerio fiscal, el primero presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, por entender que si debe declararse su nacionalidad española al igual que a sus dos hermanos, ya que queda acreditada su identidad y su relación familiar con los documentos aportados, sobre todo el libro y certificación de familia, aunque él no pudo ser incluido por las circunstancias políticas de la época, aporta certificación de parentesco del registro civil marroquí, acta literal de nacimiento del promotor en el registro civil marroquí y certificado de este registro respecto a la concordancia de nombres del padre del promotor.

V

Del recurso se da traslado al ministerio fiscal que propone su desestimación además de ratificarse en los argumentos de su informe anterior y el encargado del registro civil se ratificó en la decisión adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 17 y 18 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 5-4.^a de noviembre de 2004; 9-1.^a de septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008, 2-4.^a de marzo de 2009, 16-3.^a de junio de 2009 y 22-3.^a de marzo de 2010.

II. El promotor mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela, solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1974 en el territorio del Sahara e hijo de español y cumplir las condiciones para obtener la nacionalidad española establecidas por el artículo 17 CC. El encargado del registro dictó auto denegando lo solicitado por no haber quedado acreditada la identidad del promotor respecto a la persona a que se refiere la documentación aportada, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. A efectos de la resolución del recurso interpuesto, hay que comenzar aclarando los estatus tanto del territorio del Sahara durante el tiempo en que estuvo sometido a soberanía española como de los nacidos en él. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se

beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

IV. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*»

entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

V. Por todo lo anterior, no puede accederse a la petición del interesado. Conforme al artículo 17.1 c) del Código Civil son españoles «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». En el presente caso, no sólo no concurre el requisito del nacimiento en España, pues el interesado declara haber nacido en el Sahara, sin que, por otra parte, haya quedado debidamente acreditado. Al respecto ha de tenerse en cuenta que las competencias de calificación del encargado respecto de la certificación extranjera se extienden al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio de cargo que le habilite para tal expedición con base legal suficiente para ello.

VI. Tampoco en el caso presente, por las razones expuestas, puede considerarse acreditado que los padres del promotor ostentasen la nacionalidad española, por lo que no pudieron transmitirla a su hijo, no está probado que optaran en su momento a la nacionalidad española para sí mismos ni para el promotor, como representantes legales del mismo dada su minoría de edad, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976 ni que estuviese imposibilitados de facto para hacerlo por haber permanecido en los territorios ocupados, de hecho la única documentación española de los padres, documento nacional de identidad del Sahara de la madre del promotor perdió su validez transcurrido el plazo señalado en dicho Decreto y tanto el libro como la certificación de familia no acreditan la nacionalidad española de los padres.

VII. Por lo que se refiere a la concesión a sus presuntos hermanos de la nacionalidad española, en prueba del presunto derecho del ahora interesado, por los documentos aportados no es posible determinar que la documentación que sirvió de base en su momento para la declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española de aquéllos era similar a la contenida en el presente expediente, no obstante si esto fuera así y si el Ministerio Fiscal

considerara que les ha sido otorgada dicha nacionalidad de modo improcedente, cabría, a instancia de dicho órgano, incoar nuevos expedientes solicitando que se declare con valor de simple presunción que los interesados no son españoles. A este respecto conviene recordar que, en desarrollo del principio básico de la legislación registral de concordancia del registro civil con la realidad, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no opera en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar los recursos interpuestos por el interesado y por el ministerio fiscal y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 9 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 23 de junio de 2017 (33.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.–*Es española iure soli la nacida en España de padres portugueses y nacidos en Portugal.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Tolosa (Guipúzcoa).

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante la encargada del Registro Civil de Tolosa (Guipúzcoa) el 31 de marzo de 2015, la ciudadana portuguesa y nacida en Portugal, Doña I. de C. P. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija M. F. de C., nacida el de 2003 en B. (G.). Se aporta al expediente poder de fecha 5 de diciembre de 2013, otorgado por Don G. F. de S., padre de la interesada, ante notario del País Vasco a favor de la progenitora. Adjuntaban la siguiente documentación: carnet de identidad portugués de la madre; certificado de empadronamiento colectivo, expedido por el Ayuntamiento de Beasaín; certificado literal español de nacimiento de la interesada y libro de familia en el que consta como hijo segundo; certificado expedido por el Consulado de Portugal en Bilbao, en el que se indica que la interesada no se encuentra inscrita en los registros de nacionales portugueses, así como información sobre la legislación portuguesa en materia de nacionalidad.

II

Ratificadas las partes en el expediente, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Tolosa dictó auto el 10 de diciembre de 2015 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española al considerar que son portugueses de origen los hijos de padre portugués o madre portuguesa nacidos en el extranjero, si declaran que quieren ser portugueses o inscriben el nacimiento en el registro civil portugués, no habiendo sido efectuado voluntariamente dicho trámite por la interesada, por lo que la misma no se encuentra en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.c) del Código Civil.

III

Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su hija, alegando error en la interpretación judicial, contraria a la doctrina sentada por esta Dirección General de los Registros y del Notariado, no habiéndose valorado el certificado negativo de inscripción de la menor en el consulado portugués.

IV

Notificado el ministerio fiscal, emite informe desfavorable, y la encargada del Registro Civil de Tolosa remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2.^a de octubre y 7-4.^a y 5.^a de noviembre de 2002; 28-4.^a de junio y 4-1.^a de julio de 2003; 28-3.^a de mayo y 23-1.^a de julio de 2004; 30-4.^a de noviembre y 7-2.^a de diciembre de 2005; 14-3.^a de febrero y 20-1.^a de junio de 2006; 17-4.^a de enero de 2007, 10-5.^a de diciembre de 2007; 11-7.^a de junio y 10-6.^a y 7.^a de julio de 2008; 27-4.^a de enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen una niña nacido en España el 24 de julio de 2003, hija de padres portugueses y nacidos en Portugal. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (*cfr.* art. 17.1.c) CC). Por la encargada del Registro Civil de Tolosa se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación portuguesa, los hijos de portugueses nacidos en el extranjero precisan para la adquisición de la nacionalidad portuguesa que los representantes legales del nacido declaren en el Registro Civil local su voluntad de que el hijo sea portugués o que inscriban su nacimiento en el Registro Consular portugués que corresponda (art. 1 de la ley 37/81, de 3 de octubre y art. 6 del Decreto-Ley 322/82 de 12 de agosto), sin que haya quedado acreditado que tales requisitos se hayan cumplido de acuerdo con el certificado consular aportado.

IV. Se da, pues, una situación de apatridia originaria de la nacida en la cual la atribución «*iure soli*» de la nacionalidad española se impone. No ha de importar que la interesada pueda adquirir más tarde «*iure sanguinis*» la nacionalidad portuguesa de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida «*ex lege*» y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

V. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
- 2.º Declarar con valor de simple presunción que la interesada es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de su nacimiento.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tolosa (Guipúzcoa).

Resolución de 7 de julio de 2017 (26.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.—*No es español iure soli el nacido en España hijo de madre pakistání y con filiación paterna pakistání determinada con posterioridad al nacimiento.*

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Barcelona el 8 de abril de 2015, I. T., nacida en G. (Pakistán) en 1983 y de nacionalidad pakistaní, solicitó que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hijo M. A. I., nacido en 2013 en B. Aportaba como documentos probatorios de la pretensión: inscripción de nacimiento del menor, hijo de la promotora y sin filiación paterna; certificado de empadronamiento en B. del menor desde su nacimiento y de su madre desde agosto de 2013, documento notarial para acreditar que la interesada dirigió escrito al Consulado de Pakistán en Barcelona en relación con la falta de inscripción en el mismo de su hijo y la negativa de aquél a documentarle, libro de familia de la promotora, pasaporte pakistaní de ésta, expedido en B. en agosto de 2013 y con validez hasta 2015, acta de la declaración de la promotora ante el encargado del Registro Civil de Barcelona, manifestando que su hijo no tiene nacionalidad pakistaní porque es un hijo extramatrimonial y no tiene filiación paterna.

II

El ministerio fiscal informó que se oponía a la concesión de la nacionalidad española, ya que la legislación pakistaní atribuye dicha nacionalidad a los hijos, nacidos fuera del país, de nacionales de Pakistán y que los padres hayan nacido en dicho país, como era el presente caso. Del anterior informe se dio traslado a la promotora que alegó que las autoridades consulares pakistaníes se negaban a documentar al menor y a certificar su nacionalidad, añadiendo que le manifestaron que no le darían el pasaporte y aporta un documento del Consulado pakistaní, sin legalizar, en el que justifican la no expedición del pasaporte por ser un hijo nacido fuera del matrimonio y cuya paternidad es confusa.

III

El ministerio fiscal se reiteró en su anterior informe. El encargado del registro civil dictó auto con fecha 7 de enero de 2016 denegando la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor, ya que de conformidad con el acta de 1951, se atribuye de forma automática la nacionalidad pakistaní al nacido en el extranjero de padre pakistaní que ostente dicha nacionalidad por haber nacido en territorio pakistaní, no estando condicionada a la previa inscripción en el correspondiente registro consular.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, la representación de ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, reiterando la negativa de las autoridades pakistaníes por no tener el menor filiación paterna, adjuntado documento del consulado para la inscripción del menor en el que es necesaria los datos del padre, si bien dicho documento es el modelo que corresponde a los hijos nacidos fuera de Pakistán de nacionales pakistaníes también nacidos fuera de Pakistán, que no es el caso.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que se reitera en sus informes previos. El encargado del registro civil emite informe acorde con el auto dictado y añade que, por escrito de la interesada anterior a dicha resolución, se ha tenido conocimiento de que la promotora había demandado judicialmente la paternidad de su hijo, por lo que el progenitor estaba identificado y con mucha probabilidad residía en España, remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado ratificándose en la resolución recurrida.

VI

Consta a este centro directivo que en la inscripción de nacimiento del menor en el Registro Civil de Barcelona se ha añadido una marginal de que por sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona, de 31 de marzo de 2016, ha quedado determinada legalmente su filiación paterna, no matrimonial, tratándose de un ciudadano nacido en Pakistán en 1976 y de nacionalidad pakistaní.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1.989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1.990; los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 337 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones 5-1.^a de mayo de 200, 10-2.^a de mayo de 2002, 23-2.^a de octubre de 2003, 22-4.^a de mayo de 2006 y 10-4.^a de noviembre de 2008.

II. Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2 LRC) que tiene la nacionalidad española de origen el nacido en España en 2013, hijo no matrimonial de madre paquistaní nacida en Pakistán y sin filiación paterna, en principio, aunque en el momento de dictar esta resolución la misma ya ha quedado determinada por sentencia judicial firme, correspondiendo a un ciudadano pakistaní y nacido en dicho país.

III. El artículo 17.1-c del Código Civil atribuye *iure soli* la nacionalidad española a los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Sin embargo, este precepto no beneficia al interesado porque, por aplicación de la ley pakistaní del padre y según resulta del conocimiento adquirido por este centro directivo de esta legislación (*cf.* art. 12-6 C.c.), los hijos nacidos en el extranjero de un nacional paquistaní nacido en Pakistán tienen por nacimiento la nacionalidad paquistaní del padre, sin que en tal supuesto –con tratamiento distinto en la legislación paquistaní al caso en que el padre o madre paquistaníes hubieren nacido fuera del territorio de Pakistán– esté condicionada la atribución de la nacionalidad a la previa inscripción en el registro consular correspondiente.

IV. Consiguientemente, como la finalidad del precepto citado del Código Civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido ostenta la nacionalidad española por aplicación del artículo 17.1.c del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (103.^a)

Declaración de nacionalidad española-*iure soli*.–*No es española iure soli la nacida en España en 2014, hija de madre marroquí nacida en Marruecos, por corresponderle la nacionalidad marroquí de ésta.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Mediante escrito dirigido al Registro Civil de Barcelona el 13 de agosto de 2014, la ciudadana marroquí K. B., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija menor de edad, R. B., nacida en B. el de 2014. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la menor inscrita sin filiación paterna, certificado de empadronamiento de la Sra. B. en B. desde el año 2001, certificado del Consulado General del Reino de Marruecos en Barcelona relativo a que la menor no está inscrita en el Registro Civil marroquí por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley del Registro Civil marroquí, permiso de residencia es España de la Sra. B., con validez hasta el año 2016 y pasaporte marroquí de la precitada, expedido por Consulado marroquí en Barcelona en 2014.

II

Ratificada la promotora y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, basado en que la legislación marroquí en casos como el presente, en el que no hay filiación paterna determinada, otorga al nacido la nacionalidad de la madre marroquí, el encargado del Registro Civil de Barcelona dictó auto el 21 de enero de 2015 denegando la solicitud de asiento marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por considerar que a la menor le correspondía la nacionalidad marroquí que ostenta su madre.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, madre de la menor, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando de nuevo la declaración de la nacionalidad española para su hija, reiterando que las autoridades consulares de su país no han inscrito a la menor ni lo van a hacer porque ha nacido fuera del matrimonio, lo que resulta contrario a la ley islámica, por lo que nunca obtendrá la nacionalidad marroquí.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste emite informe en el mismo sentido del anterior y el encargado del Registro Civil de Barcelona, informa también en el sentido de que el documento consular aportado no manifiesta cual es el requisito incumplido por la menor para ser inscrita, aunque se refiere a la legislación registral, siendo que el artículo 6 de la Ley de nacionalidad marroquí si le atribuiría la nacionalidad. Posteriormente se remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

V

En el momento actual consta a este centro directivo que la madre de la menor obtuvo la nacionalidad española por residencia con fecha 3 de junio de 2015 y optó en representación de su hija y previa autorización del encargado del Registro Civil a la nacionalidad española con fecha 14 de marzo de 2017, con base en el artículo 20 del Código Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 16 de diciembre de 2008 y la de 21 de mayo de 2009 y las resoluciones, entre otras, de 5-2.^a de marzo y 25 de septiembre

de 2004, 16-3.^a de septiembre de 2005, 27-4.^a de diciembre de 2006, 3-5.^a de enero de 2007 y 29-2.^a de febrero de 2008; 9-5.^a y 12-4.^a de enero de 2009; 1-2.^a de febrero de 2010.

II. Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de una niña nacida en España el de 2014, hija de madre marroquí y sin filiación paterna determinada. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil).

III. De acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro directivo de la legislación marroquí, en concreto, el artículo 6 del Dahir núm. 1-70-80 de 23 de marzo de 2007, por el que se promulga la Ley núm. 62-06 que modifica y completa el Dahir núm. 1-58-2050 de 06 de septiembre de 1958, que regula la nacionalidad marroquí: «será marroquí todo hijo nacido de padre o madre marroquí». En las disposiciones transitorias se establece que: «las nuevas disposiciones en materia de concesión de la nacionalidad marroquí, en virtud del artículo 6, por ser hijo de madre marroquí, serán aplicables a todas las personas nacidas antes de la fecha de publicación de la presente Ley».

Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c del Código Civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que la nacida en España ostenta la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (9.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.—*Es español «iure soli» el nacido en España hijo de padres peruanos y nacidos en Perú.*

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, progenitores del menor, contra auto del encargado del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante comparecencia realizada en el Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 14 de diciembre de 2015, los ciudadanos peruanos Don N. A. M. Y. y Doña B. D. T. Q. promueven expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española de su hijo menor de edad, D. R. M. T., nacido en B. el de 2015. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: certificación literal española de nacimiento del menor; certificado negativo de inscripción del menor en los libros de registro de estado civil del Consulado General del Perú en Barcelona; certificado colectivo de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de H. (Barcelona); pasaportes peruanos de los progenitores y documento de identidad de extranjeros, régimen comunitario de la madre.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat dictó auto con fecha 13 de enero de 2016 desestimando la petición formulada en el expediente sobre la adquisición por simple presunción de la nacionalidad española del menor, al considerar que la legislación peruana otorga la nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padre o madre peruanos, cumpliendo un mero requisito formal como es la inscripción en el registro público correspondiente.

III

Notificada la resolución a los promotores, éstos interponen recurso indicando que la legislación peruana no atribuye automáticamente la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero, recogiendo distintas resoluciones de esta Dirección General de los Registros y del Notariado resueltas en dicho sentido.

IV

Notificado el ministerio fiscal, se adhiere al recurso formulado por los promotores, en atención a los argumentos expuestos por los recurrentes que se consideran debidamente ajustados a derecho y el encargado del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

V

Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado, por oficio fecha 5 de julio de 2017, se solicita del encargado del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se requiera a los promotores a fin de que aporten certificados

de empadronamiento actualizados del menor y de los padres, así como certificados actualizados expedidos por el Consulado General de Perú en España en los que se indique si el menor se encuentra inscrito en los libros de nacimiento de dicha oficina consular y se informe acerca de la inscripción de los progenitores en la misma.

Atendiendo al requerimiento formulado, los promotores aportan en tiempo y forma la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y las resoluciones de 10 de diciembre de 1996, 11-3.^a de abril, 22-1.^a de mayo y 13 y 27-1.^a de diciembre de 2001 y 2-4.^a de febrero, y 8-2.^a de mayo de 2002 y 19-3.^a de marzo de 2004 y 10-1.^a de abril del 2004.

II. La cuestión que plantea este recurso es si puede declararse con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen el nacido en España hijo de padres peruanos nacidos fuera de España.

III. El artículo 17.1.c del Código Civil establece que son españoles de origen «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad», por lo cual resulta necesario precisar el alcance de las leyes peruanas respecto de la atribución de la nacionalidad peruana a los nacidos fuera del Perú.

IV. El caso actual está comprendido en esta hipótesis. En efecto, el nacido no tenía, en el momento de su nacimiento la nacionalidad peruana de sus progenitores ya que es necesario el hecho de la inscripción consular que no se ha producido, toda vez que el artículo 2.3 de la Ley de Nacionalidad núm. 26574 y el artículo 4 c) de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo núm. 004-97-IN, establecen que «son ciudadanos peruanos por nacimiento, las personas nacidas en territorio extranjero, hijos de padre o madre peruanos de nacimiento y que sean inscritos durante su minoría de edad en el respectivo registro de estado civil de la oficina consular del Perú correspondiente».

Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importarse que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad peruana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º- Estimar el recurso.
- 2.º- Declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (*cf.*: art. 340 RRC).

Madrid, 8 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (15.ª)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure soli*.–*Es español iure soli el nacido en España de madre brasileña y nacida en Brasil.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Barcelona, la ciudadana brasileña y nacida en Brasil, D.ª G. S. P. solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo B. S. P., nacido en B. en 2015.

Adjuntaba la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento del menor inscrito en el Registro Civil de Barcelona con filiación materna; certificado emitido por el Consulado General de Brasil en Barcelona en fecha 26 de octubre de 2015, en el que se indica que el menor no se encuentra inscrito en el registro de ciudadanos brasileños del citado consulado; pasaporte brasileño y volante de empadronamiento de la progenitora expedido por el Ayuntamiento de B.

II

Ratificadas las partes en el expediente, el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 29 de enero de 2016 indicando que, siendo la progenitora del menor de nacionalidad brasileña, no se da la situación de apatridia originaria que justifica la atribución *iure*

soli de la nacionalidad española, al poder ser solicitada la nacionalidad del menor según las leyes brasileñas con la inscripción de éste en el Consulado de Brasil en Barcelona.

III

El encargado del Registro Civil de Barcelona dictó auto el 10 de marzo de 2016 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española al considerar que el menor no ha sido inscrito en el Consulado de Brasil por un acto de voluntad de su progenitora, ya que la legislación brasileña otorga la nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padre o madre brasileños, cumpliendo un mero requisito formal como es la inscripción en el registro público correspondiente, por lo que en principio no debería otorgársele la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

IV

Notificada la resolución, la promotora, madre del menor, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su hijo, alegando que conforme a la legislación brasileña, los hijos nacidos en España de padres brasileños, no adquieren automáticamente la nacionalidad de este país, pues en el caso de Brasil, hace falta la inscripción o bien la residencia junto a la opción por el interesado al llegar a la mayoría de edad, lo que implica que el menor carece de nacionalidad al momento de nacer, quedando en situación de desprotección y riesgo, y que de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, al que se adhirió España el 24 de abril de 1997, el menor tiene derecho a una nacionalidad.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, emite informe desfavorable con fecha 11 de agosto de 2016 y el encargado del Registro Civil de Barcelona remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso junto con informe redactado en los mismos términos que la resolución recurrida.

VI

Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado, por oficio de fecha 25 de julio de 2017 se interesa del Registro Civil de Barcelona requiera a la promotora a fin de que aporte certificado de empadronamiento actualizado del menor y de su madre, así como certificados actualizados de no inscripción del menor y de inscripción de la progenitora, expedidos por el Consulado General de Brasil en España. Atendiendo al citado requerimiento, la promotora acompaña la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2.^a de octubre y 7-4.^a y 5.^a de noviembre de 2002; 28-4.^a de junio y 4-1.^a de julio de 2003; 28-3.^a de mayo y 23-1.^a de julio de 2004; 30-4.^a de noviembre y 7-2.^a de diciembre de 2005; 14-3.^a de febrero y 20-1.^a de junio de 2006; 17-4.^a de enero de 2007, 10-5.^a de diciembre de 2007; 11-7.^a de junio y 10-6.^a y 7.^a de julio de 2008; 27-4.^a de enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en Barcelona el 27 de septiembre de 2015, hijo de madre brasileña nacida en Brasil. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (*cf.* art. 17.1.c) CC). Por el juez encargado se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación brasileña, los hijos de brasileños nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad brasileña, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (*cf.* art. 12.1.c) de la Constitución Brasileña de 1988, modificado por Enmienda Constitucional de 20 de septiembre de 2007). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importarse por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
- 2.º Declarar con valor de simple presunción que el menor es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de su nacimiento.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr/a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 7 de abril de 2017 (43.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 12 de abril de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (45.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 9 de junio de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 9 de junio de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 23 de junio de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 14 de julio de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad de origen *iure soli*.

3.1.2 ADQUISICIÓN NACIONALIDAD DE ORIGEN *IURE SANGUINIS*

Resolución de 17 de febrero de 2017 (86.^a)

Declaración de la nacionalidad española.—*No es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor nacido en A. (Sáhara Occidental) porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.*

Asimismo, no es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela (Navarra) el 11 de noviembre de 2014, Don O. E. nacido el 08 de agosto de 1972 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con traducción de extracto del acta de nacimiento, expedida por el Reino de Marruecos y el 12 de agosto de 1972, de acuerdo con la documentación española de su progenitor, solicitaba el reconocimiento de la nacionalidad española por haber nacido y vivido en el Sahara cuando éste era territorio sometido a administración española.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: tarjeta de permiso de residencia temporal y resguardo de solicitud o renovación de tarjeta de extranjero del interesado; pasaporte marroquí del promotor; documento nacional de identidad bilingüe de su progenitor, Don A. S. S-B.; pasaporte español de su progenitor, expedido el 10 de enero de 1975; copia del libro de familia de sus padres, en el que se hace constar que el cuarto hijo del matrimonio es A., nacido el 12 de agosto de 1972; libro de familia numerosa de los progenitores; certificación en extracto de inscripción de nacimiento de su progenitor, expedida por el Registro Civil de El Aaiún el 11 de noviembre de 1969; volante de empadronamiento del solicitante, expedido por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra); certificado de concordancia de nombres del interesado, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos; certificado de parentesco, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos; pasaporte español de su madre, expedido el 17 de enero de 1975; traducción de extracto de acta de nacimiento del solicitante, en el que se hace constar que nació el 08 de agosto de 1972 en A. y traducción de acta de matrimonio del promotor, expedida por el Reino de Marruecos.

II

Ratificado el interesado y efectuada la comparecencia de los testigos, con fecha 24 de junio de 2015, el ministerio fiscal emite informe desfavorable, indicando que los nacidos en el Sáhara, cuando éste era posesión española, no se consideran propiamente nacionales, sino solo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española. Este principio es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975 y del Real Decreto de 10 de agosto de 1976, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sáhara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de año a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto, no encontrándose acreditado que los padres del interesado hayan ostentado la nacionalidad española,

por lo que no pudieron transmitirla a su hijo y, por otra parte, el solicitante en modo alguno ostentó la nacionalidad española, teniendo un pasaporte marroquí, por lo que tampoco se trataría de un supuesto de apátrida. Por otra parte, se indica que tampoco procede la aplicación del artículo 18 del Código Civil, que exige la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, como causa de consolidación de la nacionalidad española, toda vez que cuando España abandonó el territorio del Sáhara tenía tres años de edad y no había ostentado ninguna documentación que le acredite en posesión de la nacionalidad española.

III

Con fecha 25 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) dictó auto declarando con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

IV

Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revoque el auto recurrido y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, toda vez que no procede la aplicación del artículo 17 del Código Civil, dado que los nacidos en el territorio del Sáhara, cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por lo que no está probado que sus progenitores hayan ostentado en algún momento la nacionalidad española, ni que no hayan podido optar a la misma por encontrarse en un campo de refugiados o similar. Por otra parte, tampoco cabe la aplicación al promotor de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil, habida cuenta de que cuando España salió del territorio del Sáhara, el promotor tenía tres años de edad y no ha ostentado con posterioridad ninguna documentación que le acredite encontrarse en posesión de la nacionalidad española.

V

Notificado el interesado de la interposición del recurso por el ministerio fiscal, no formula alegaciones al mismo y el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.ª de

septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008, 2-4.^a de marzo de 2009, 16 (3.^a) de junio de 2009 y 22-3.^a de marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado en el Registro Civil Tudela (Navarra) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1972 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 y 18 del Código Civil. El encargado del registro dictó auto estimando la petición del interesado y declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio, interponiendo recurso el ministerio fiscal oponiéndose a la declaración de nacionalidad española del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consoli-

dado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente caso, el promotor se encuentra documentado con pasaporte marroquí, por lo que no es apátrida, no procediendo la aplicación retroactiva del artículo 17.3 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 51/1982. Por otra parte, no consta la nacionalidad española de su padre o de su madre al tiempo de su nacimiento para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado

De otro lado, no está probada a través de la documentación la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 CC, en el que se indica que la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado, toda vez que no ha ostentado ninguna documentación como español, teniendo pasaporte marroquí.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 12 de mayo de 2017 (30.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure sanguinis*.—*No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

No es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor nacido en 1967 en A. porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Vizcaya).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Gernika-Lumo el 30 de septiembre de 2013, Don L. S. A. (S. A. U. M. U. B. N.) nacido el 3 de mayo de 1967 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicitaba el reconocimiento de la nacionalidad española con valor de simple presunción, o bien subsidiariamente, la incoación de expediente registral de consolidación de la nacionalidad española. Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: pasaporte marroquí; certificado de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de K. (Vizcaya); certificado de concordancia de nombres, expedido por el Reino de Marruecos; certificado de nacimiento del interesado, inscrito el 9 de mayo de 1970 en el Juzgado Cheránico de El Aaiún (Sáhara); certificado en extracto de inscripción de matrimonio de los progenitores del promotor, inscrito en la oficina del Registro Civil de Aaiún; recibo MINURSO del interesado; libro de escolaridad del solicitante; certificado de familia, inscrito en la oficina del Registro Civil de Aaiún, en el que figura el interesado como tercer hijo; certificado de residencia del promotor en la ciudad de B. desde el 29 de septiembre de 1976 hasta el 29 de septiembre de 1977, expedido por el Reino de Marruecos; documento nacional de identidad bilingüe del progenitor y certificación expedida por la Dirección General de la Policía, en relación con dicha documentación, en la que se indica que el citado documento fue expedido el 30 de julio de 1970 en Aaiún y que, en la actualidad, carece de validez oficial.

II

Ratificado el interesado y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo dicta auto el 5 de agosto de 2015, por el que estima la pretensión formulada por el interesado, declarando con valor de simple presunción, su nacionalidad española de origen por consolidación.

III

Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revoque el auto recurrido y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, alegando que el interesado es nacional de Marruecos, encontrándose identificado con pasaporte marroquí; que no consta en el expediente tarjeta de residencia del mismo, ni documentación acreditativa de su situación laboral, ni medios de vida o situación familiar en España y que la fecha de empadronamiento en el Ayuntamiento de Kortezubi fue de 1 de octubre de 2013.

IV

Con fecha 22 de octubre de 2015, el promotor formula alegaciones y se opone al recurso formulado por el ministerio fiscal, solicitando se mantenga en todos sus extremos el auto recurrido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 18 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008, 2-4.^a de marzo de 2009, 16 (3.^a) de junio de 2009 y 22-3.^a de marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ger-nika-Lumo (Vizcaya) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1967 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 y 18 del Código Civil. La encargada del registro dictó auto estimando la petición del interesado y declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por aplicación del artículo 18 del Código Civil, interponiendo recurso el ministerio fiscal oponiéndose a la declaración de nacionalidad española del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio

metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los *stati* entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretario General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su

administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado, dada la minoría de edad de éste cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados «de facto» para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, toda vez que el promotor ostenta la nacionalidad marroquí, de acuerdo con el pasaporte incorporado al expediente. Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del Código Civil según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 12 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Guernika-Lumo (Vizcaya).

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (20.^a)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure sanguinis*.–*No se inscribe al nacido en S.I. (Marruecos) en 1972, al no ser hijo de español, ni haber nacido en España.*

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don I. E., nacido el 15 de noviembre de 1972 en S. I. (Marruecos), de acuerdo con el certificado de nacimiento marroquí aportado al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 16 de agosto de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que interesa se inicie expediente para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, por auto de fecha 11 de junio de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, indicando que los documentos de identificación aportados, expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, no ofrecen garantías análogas a las exigidas por la legislación española para la inscripción al no estar establecidos los órganos del registro civil en base a un ordenamiento jurídico estatal reconocido internacionalmente. Asimismo, se acuerda la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV

Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, manifiesta su disconformidad con las causas por las que se deniega la inscripción de nacimiento fuera de plazo, dado que no aportó al expediente documentación expedida por la República Árabe Saharaui Democrática, cuya falta de garantías justifica la desestimación de la inscripción de nacimiento, sino documentación expedida por el Reino de Marruecos.

Por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 30 de junio de 2017 se estima en parte el recurso interpuesto por el promotor, dejando sin efecto el auto apelado y se retrotraen las actuaciones al momento de emisión de la resolución, resolviendo el encargado del Registro Civil en el sentido que proceda, de acuerdo con la documentación aportada por el solicitante, toda vez que el promotor aportó documentación expedida por el Reino de Marruecos, en particular, copia literal de acta de nacimiento y certificado de parentesco, y no documentación expedida por la República Árabe Saharaui

Democrática, motivo este último que justifica la desestimación de la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, al considerar que la documentación expedida por la República Árabe Saharaui Democrática no ofrece garantías análogas a las exigidas por la legislación española para la inscripción, al no estar establecidos los órganos del registro civil en base a un ordenamiento jurídico estatal reconocido internacionalmente.

V

Iniciado en el Registro Civil de Tudela, a instancia del ministerio fiscal, expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española del interesado, por auto de fecha 24 de octubre de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), se desestima la petición realizada a instancia del ministerio público de que se declare con valor de simple presunción que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, toda vez que el promotor nace con anterioridad al 10 de agosto de 1976, entendiéndose que el término «territorio español» incluye el territorio del Sáhara y, por tanto, los nacidos en el mismo eran no sólo súbditos de España sino nacionales con todos los derechos.

VI

Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación de la resolución impugnada en el sentido de declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, no resultando aplicables los artículos 17 y 18 del Código Civil, no encontrándose probado que sus progenitores hayan ostentado la nacionalidad española en el momento en que estuvo en vigor el Decreto de 1976, ni con anterioridad a dicha fecha, ni consta que no hubiesen podido optar a la nacionalidad española por encontrarse en un campo de refugiados, que les haya impedido comparecer ante las autoridades pertinentes al ejercicio de dicha opción, ni acredita la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.

VII

Notificado el interesado de la interposición de recurso por el ministerio fiscal, no formula alegaciones al mismo, y el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, reiterándose en la resolución adoptada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de

marzo, 15-3-^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, nacido el 15 de noviembre de 1972 en S. I. (Marruecos) solicitó la declaración de su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela dictó auto el 16 de agosto de 2013, acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* al interesado. Solicitada ante el Registro Civil Central la inscripción de nacimiento fuera de plazo y notificado el ministerio fiscal, este emite informe desfavorable, interesando se inicie nuevo expediente de cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor.

Por auto de 11 de junio de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestimó la inscripción de nacimiento del promotor, en base a la falta de garantías de la documentación aportada, expedida por la República Árabe Saharaui Democrática. Frente al citado auto se interpone recurso por el promotor, alegando que aportó documentación expedida por el Reino de Marruecos y no por la República Árabe Saharaui Democrática, que fue estimado en parte por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 30 de junio de 2017 (6.^a), retro trayendo las actuaciones al momento de emisión de la misma para que se emita la resolución que en derecho proceda de acuerdo con la documentación aportada por el solicitante.

Iniciado en el Registro Civil de Tudela a instancia del ministerio fiscal, expediente de declaración con valor de simple presunción de que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, por auto de 24 de octubre de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) se desestimó la petición realizada a instancia del ministerio público. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso frente al auto anteriormente mencionado, solicitando se revoque la resolución impugnada y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

III. Para que un nacimiento pueda ser inscrito en el Registro Civil español es necesario que el mismo haya acaecido en territorio español o en otro caso que afecte a españoles (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC).

IV. La primera de estas condiciones no concurre en este caso, en el que se trata de un nacimiento acaecido en S. I. el 15 de noviembre de 1972, con posterioridad a la retrocesión a Marruecos del citado territorio por virtud del Tratado de 4 de enero de 1969, cuya fecha de entrada en vigor se produce el 13 de mayo de 1969, fecha en que se verifica el canje de los instrumentos de ratificación del mismo. Por tanto, el interesado no nace en territorio español sino marroquí.

V. Tampoco se da la segunda de las condiciones apuntadas. Aunque el padre del interesado pudiera haberse beneficiado de la nacionalidad española, no se ha acreditado ningún título legal de adquisición de tal nacionalidad y el beneficio de ésta cesó en el momento de aquella retrocesión a Marruecos, fecha

en que el interesado aún no había nacido, sin que conste que el progenitor, hubiese hecho uso, dentro del plazo de caducidad de tres meses, del derecho de opción a la nacionalidad española, regulado por los artículos tercero del Tratado, primero de su Protocolo anejo y por el Decreto de 26 de junio de 1969.

VI. En cuanto a la eventual consolidación de la nacionalidad española a favor del recurrente, esta Dirección General ha mantenido reiteradamente el criterio de que según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

VII. Sobre este punto, es discutible en principio que a los nacidos en el territorio de I. cuando éste era posesión española les benefició el citado artículo 18 CC porque no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la retrocesión por España de este territorio a Marruecos pudiera deducirse otra cosa. En todo caso, y dado que el interesado nace en S. I. el 15 de noviembre de 1972, con posterioridad a la retrocesión del territorio de S. I. a Marruecos, éste nunca ostentó desde su nacimiento documentación española, por lo que no resulta posible la adquisición de la nacionalidad española por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (30.ª)

Adquisición nacionalidad de origen-*iure sanguinis*.—*No corresponde la nacionalidad española iure sanguinis a la nacida en A. B. (Argelia) en 1983, al no ostentar la madre de la promotora la nacionalidad española en el momento de su nacimiento.*

No es posible por razón de patria potestad si la interesada, cuando la madre adquiere la nacionalidad española, ya era mayor de edad según su estatuto personal.

No es posible la recuperación de la nacionalidad española por la promotora, al no constar que la haya ostentado en el pasado.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 24 de octubre de 2014, en el Registro Civil de Donostia-San Sebastián comparece D.^a B. M. A., nacida el 27 de junio de 1983 en O. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino de la promotora y el 27 de enero de 1983 en A. B. (Argelia), de acuerdo con el certificado de nacimiento de la interesada expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, solicitando se inscriba su nacimiento fuera de plazo en el registro civil español.

Aportaba la siguiente documentación: interesada.- documento de identidad de extranjerorégimen comunitario; certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de O.; certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática y pasaporte argelino; progenitora D.^a G. M. E.- documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución registral de 12 de diciembre de 2007, dictada por el encargado del Registro Civil de Carmona, Sevilla.

Consta en el expediente informe médico-forense de fecha 11 de diciembre de 2014, a efectos de determinación de la edad de la interesada, por el que se concluye que la edad cronológica estimada de la misma es de 29 años y 5 meses.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el magistrado-juez encargado del citado registro dicta auto con fecha 25 de noviembre de 2015 por el que desestima la práctica de la inscripción de nacimiento de la interesada, toda vez que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 17 del Código Civil, dado que los efectos de la adquisición de la nacionalidad española con valor de simple presunción por la madre de la solicitante, se producen a partir de la fecha de la declaración, fecha en la que la interesada ya era mayor de edad, por lo que no le cabe optar a la nacionalidad española al no haber estado sujeta a la patria potestad de un español y tampoco cabe la recuperación de la nacionalidad española, ya que no consta que la haya ostentado en el pasado.

III

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando recuperar la nacionalidad española de origen, alegando que como saharai tiene derecho a ello y acompañando copia de los documentos nacionales de identidad de sus padres y de una presunta hermana, de apellidos S. M.

IV

El ministerio fiscal emite informe el 10 de octubre de 2016, por el que interesa la confirmación del acuerdo recurrido, y el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código Civil (CC); 17 y 23 del Código Civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones de 2-3.^a de febrero, 14-1.^a de marzo y 2-2.^a de diciembre de 2002; 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 19-3.^a de enero, 11-2.^a de marzo y 17-3.^a de julio de 2006; 18-8.^a de septiembre y 25-9.^a de octubre de 2007.

II. La interesada, nacida el 27 de junio de 1983 en O. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino de la promotora y el 27 de enero de 1983 en A. B. (Argelia), de acuerdo con el certificado de nacimiento de la interesada expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, solicita se le declare la nacionalidad española de origen, alegando que su madre fue declarada española de origen con valor de simple presunción por resolución registral de 12 de diciembre de 2007. El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo por el que desestima dicha petición dado que la solicitante nació en el extranjero y sus padres no ostentaban ninguno de ellos la nacionalidad española en el momento de su nacimiento, no pudiendo optar tampoco a la nacionalidad española dado que la promotora ya había alcanzado la mayoría de edad, en la fecha en que su madre adquiere la nacionalidad española, ni cabe la recuperación de la nacionalidad española, ya que no consta que la haya ostentado en el pasado. Frente dicho acuerdo se interpone recurso por la promotora.

III. El artículo 17 del Código Civil, de acuerdo con la redacción de la Ley 51/1982, de 13 de julio, vigente en la fecha de nacimiento de la interesada, establece que son españoles de origen 1.º los hijos de padres o madre españoles; 2.º los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos, uno de éstos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de padre o madre extranjeros adscritos al servicio diplomático o consular; 3.º los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad».

La promotora no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 17 del Código Civil para adquirir la nacionalidad española de origen, toda vez que no nació en España, sino en Argelia y en la fecha de su nacimiento, acaecido en 1983, su progenitora no ostentaba la nacionalidad espa-

ñaola, toda vez que ésta la adquiere con efectos de 12 de diciembre de 2007, fecha en que se dicta la resolución registral por el encargado del Registro Civil de Carmona, Sevilla, inscrita el 25 de septiembre de 2008.

IV. Por otra parte, en relación con la posibilidad de ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española de su madre, el artículo 20 del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española, «a) las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español».

En el caso que nos ocupa, cuando la progenitora de la interesada adquiere la nacionalidad española con valor de simple presunción, que se produce en diciembre de 2007, su hija nacida en 1983 ya era mayor de edad según su estatuto personal, por lo que hay que concluir que no ha estado nunca sujeta a la patria potestad de un español y no es posible la opción a la nacionalidad española por este concepto.

Igualmente, tampoco cabe la recuperación de la nacionalidad española por la interesada, tal como establece el artículo 26 del Código Civil, dado que no consta que la haya ostentado en el pasado,

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

3.1.3 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR LEY 52/2007

3.1.3.1 *Adquisición nacionalidad española de origen (Apartado 1 disposición adicional séptima de la Ley 52/2007)*

Resolución de 23 de enero de 2017 (3.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.núm. 1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Doña A.I.G.A. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuela, expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española, el 1 de febrero de 2007, por la vía del artículo 20.núm. 1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la interesada había alcanzado la mayoría de edad. También se incorpora al expediente, certificado de matrimonio canónico de los abuelos, que se celebró en Cuba en 1936, y los certificados, de inmigración y extranjería, expedidos a nombre de la abuela, cuando contaba 29 años de edad, es decir en 1934, así como la inscripción de la carta de naturalización otorgada al abuelo el 29 de diciembre de 1937.

II

El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

IV

Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre;

la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4.º, 23-5.º, 23-6.º y 24-5.ª de marzo, 28-5.ª de abril, 6-10.ª de octubre, 15-5.ª de noviembre y 1-4.ª de diciembre de 2010, 7-4.ª y 9-3.ª de marzo, 3-17.ª y 25-3.ª de octubre y 2-4.ª de diciembre de 2011, 10-42.ª, 17-30.ª y 22-53.ª de febrero, 6-5.ª y 6-16.ª de julio, 14-32.ª de septiembre de 2012 y 30-28.ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 núm. 1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española «b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», opción que fue documentada en acta suscrita el 1 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 15 de febrero de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de mayo de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 23 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los HECHOS manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo preteritorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 núm. 2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 núm. 3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles «de origen») de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 núm. 2 y 19 núm. 2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de «nacionalidad española de origen» pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que «este derecho también se reconocerá» a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el «derecho» a que se refiere es el del optar por la «nacionalidad española de origen». Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la

Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del núm. 1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I «el derecho de opción regulado en el artículo 20 núm. 1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007».

V. En el presente expediente, la progenitora de la optante, nacida el 4 de marzo 1938, cuando su padre ya había obtenido, el 29 de diciembre de 1937 la nacionalidad cubana, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.núm. 1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de españoles de los abuelos de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (*cf.* art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de aquellos, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y sí se ha acreditado que los abuelos ya residían en Cuba en el año 1934, por lo que no pueden ser considerados exiliados ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña A.I.G.A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 23 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 10 de marzo de 2017 (37.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten, a la vista de la falta de garantías de la documentación, ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Doña E-M. F. L., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado español en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, anexo I, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que hace constar que nació el 13 de julio de 1964 en Y., actualmente provincia de S. S. (Cuba), hija de E. F. F. y M. L. D., nacidos ambos en P. B., V. C. (Cuba), en 1922 y 1930, respectivamente y casados en 1947, certificado no literal de nacimiento de la promotora, en el que el lugar de nacimiento del padre es distinto al declarado por la promotora, carné de identidad cubano de la promotora, certificación no literal de nacimiento del padre de la promotora, Sr. F. F., expedido en noviembre del año 2009, inscrito en el Registro Civil de J. de P., en el municipio de C. (S. S.), hijo de D. F., natural de C. y S. F. L., natural de G., P. del R., y nieto por línea paterna de F., certificado de partida de bautismo española del abuelo paterno de la promotora, bautizado como D-J. del C. F., nacido en V., isla de L-G. (S. C. de T.) en 1892, sin que conste filiación paterna e hijo de C. F., consta su matrimonio religioso en 1914 con M. de los S. L., certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno del promotor, Sr. D. F. C., en la que no consta más que el dato de su madre y su abuela materna, que fue quién le inscribió, certificado no literal de defunción del padre de la promotora, fallecido en el año 2005 a los 83 años, certificado no literal de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en Cuba en 1947 y en el que consta como lugares de nacimiento de los contrayentes P. B., para el cónyuge e I. para la cónyuge y certificados del Ministerio del Interior cubano, Dirección de Inmigración y Extranjería, expedidos en el año 2010 a petición de la promotora, relativos a que su abuelo paterno no consta inscrito en el registro de ciudadanía y sí en el de extranjeros, habiendo formalizado la inscripción en J. (S. S.) a los 66 años, es decir en 1958. Posteriormente a requerimiento del registro civil consular la promotora aportó nuevo certificado no literal de nacimiento, sin legalizar, de su padre, expedido en el año 2011, en el que cambia el dato de sus abuelos paternos, no hay abuelo y la abuela es C. y anotación en observaciones de que el cambio es por resolución de otro registro civil cubano de fecha 13 de octubre de 2010.

II

El encargado del registro civil consular, mediante resolución de fecha 12 de septiembre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada porque no se ha acreditado que su progenitor fuera español de origen, habida cuenta las discrepancias detectadas en la documentación.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria, alegando que la filiación de su padre está clara respecto a su abuelo español, reiterando la documentación aportada.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión adoptada en su día y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. Posteriormente este centro directivo requirió de la recurrente, a través del registro civil consular, diversa documentación. Con fecha 25 de mayo de 2016 fue notificada la Sra. F. y el día 18 de agosto siguiente presenta escrito manifestando que algunos documentos de los que le han sido solicitados están en proceso de subsanación, por lo que solicita un mayor plazo para presentarlo. No consta presentación de documentación alguna posterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2.^a de octubre de 2005, 5-2.^a de enero, 10-4.^a de febrero y 20-5.^a de junio de 2006; 21-2.^a de febrero, 16-4.^a de marzo, 17-4.^a de abril, 29-1.^a de junio, 16-1.^o y 28-5.^a de noviembre de 2007, 11-3.^a de abril de 2008 y 19-6.^a de febrero y 27-6.^a de mayo de 2009; 23-9.^a de junio de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en S. S. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacio-

nalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional». La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de marzo de 2010 al amparo del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 en su directriz segunda. El encargado del registro civil consular dictó auto el 12 de septiembre de 2012 denegando la solicitud al no quedar acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios, especialmente la filiación paterna de su progenitor y su nacionalidad española originaria. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la «certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante» debiendo «proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal». Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los HECHOS y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles –*cfr.* Arts. 1 núm. 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–. En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor, E. F. F., presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente, que presentan contradicciones como el lugar de nacimiento del precitado padre del promotor, diferente según el documento cubano que se examine, así como la rectificación durante la tramitación del expediente del dato de los abuelos maternos del padre de la promotora, circunstancias que no han sido aclaradas ni subsanadas documentalmente hasta la fecha por la interesada pese al requerimiento efectuado por esta dirección general. A la vista de estas circunstancias lo cierto es que la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin

prejuzar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de abril de 2017 (3.ª)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español al no quedar desvirtuada la presunción de paternidad matrimonial.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

M. E. Q., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que nació el 17 de abril de 1949 en R., C. (Cuba), hija de M. de J. E. R., de estado civil soltero en ese momento y nacido en O. en 1900 y de M. de los Á. Q. M., de estado civil soltera en ese momento y nacida en A. (C.) en 1930, certificado no literal de nacimiento cubano de la promotora, inscrita en 1960, 11 años después de su nacimiento, por declaración de los padres, carné de identidad cubano de la promotora, certificado literal de nacimiento español del Sr. E. R., nacido en T. (O.) en 1900, hijo de A. E. y de M. J. R., naturales del mismo municipio, certificado no literal de defunción del precitado, fallecido a los 60 años en 1962, datos que no concuerdan con su documento de nacimiento español y certificado literal de nacimiento de la madre de la promotora pero identificada como M. de los Á. Q. E., no M., nacida en 1929, no 1930 e inscrita en 1935, hija de J. Q. A. y M. E., ambos naturales de A., consta en observaciones que la inscrita formalizó matrimonio con el Sr. M. L. M. el 6 de noviembre de 1944 que fue disuelto por sentencia judicial de 7 de febrero de 1949 y que falleció en 1994.

II

Con fecha 14 de noviembre de 2013 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por la promotora ya que de la documentación aportada no se establece que concurran los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la filiación paterna de la interesada respecto de un ciudadano español de origen.

III

Notificada la promotora, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, reiterando la identificación de su madre como M. de los Á. Q. M., entendiéndola acreditada su relación de filiación con el ciudadano español y añadiendo que sus hermanos ya han obtenido la nacionalidad española, adjuntando certificados del Ministerio del Interior cubano, sección de inmigración y extranjería, relativos a que el Sr. E. R. no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía cubano como naturalizado y sí en el Registro de Extranjeros con número de expediente 248543, formalizado en Cienfuegos a la edad de 35 años, es decir en 1935.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo ratificándose en su decisión y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

V

Posteriormente este centro directivo requirió, a través del registro civil consular, a la interesada para que aportara certificados literales de nacimiento propio y de su madre, lo que cumplimentó aportando certificado propio en el que consta que es hija de M. de los Á. Q. E., certificado de subsanación de errores, en el que se declara que se ha corregido por resolución de 6 de enero de 2017 en el certificado de nacimiento de la promotora el segundo apellido de su madre, es E., certificado literal de nacimiento de esta en el que ha desaparecido del apartado de observaciones la referencia a su matrimonio y divorcio y se hace constar que el certificado es «únicamente para surtir efectos fuera del territorio nacional» y certificado literal de defunción de la Sra. Q. E., fallecida en Cuba en 1994 siendo su estado civil divorciada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de

diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2.^a de octubre de 2005, 5-2.^a de enero, 10-4.^a de febrero y 20-5.^a de junio de 2006; 21-2.^a de febrero, 16-4.^a de marzo, 17-4.^a de abril, 16-1.^o y 28-5.^a de noviembre de 2007 y, por último, 7-1.^a de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1949 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de febrero de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 14 de noviembre de 2013, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado su relación de filiación con el ciudadano español de origen, M.-J. E. R., por aplicación de la presunción matrimonial de paternidad contemplada en el artículo 116 del Código Civil español, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la «certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante» debiendo «proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal». Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que

afecten a los españoles —*cf.* arts. 1 núm. 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil—.

En el presente caso lo determinante no es que la nacionalidad española originaria del Sr. E. R. no pueda entenderse acreditada, que sí lo está mediante la aportación de su inscripción literal de nacimiento en el registro civil español como hijo de ciudadanos también nacidos en España, sino que el vínculo de la relación paterno-filial entre el progenitor español y la hija optante esté determinada y acreditada legalmente.

V. En el presente caso la madre de la interesada, Sra. Q. E., había contraído matrimonio en 1944 con el Sr. L. M., vínculo matrimonial que consta disuelto en febrero de 1949, habiendo nacido la recurrente en abril siguiente, es decir no habiendo transcurrido más de 300 días entre ambas fechas, circunstancia que fue ocultada por la promotora en su declaración de datos, declaró que al momento de su nacimiento su madre era soltera cuando era divorciada y de la que el encargado del registro civil consular deriva la consecuencia de no poder entenderse acreditada la filiación de la optante respecto del Sr. E. R., de quien se afirma su nacionalidad española de origen, y en cuya filiación y nacionalidad se apoya la pretensión de la recurrente.

VI. Por tanto, se plantea en este recurso la cuestión de la filiación paterna del optante, que es previa para poder resolver sobre la procedencia o no del ejercicio de la opción a la nacionalidad española. Pues bien, sin prejuzgar el contenido del Derecho cubano sobre las formas o títulos de determinación de la filiación (*cf.* art. 9 núm. 4 del Código Civil), lo cierto es que el ejercicio de la opción está condicionado a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación de nacimiento de la optante en el registro local cubano, la cual, en cuanto a su eficacia registral en España está, a su vez, condicionada al principio de equivalencia de garantías de su autenticidad y veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento, documento en el que no consta el estado civil de los progenitores, que podría haber afectado a la determinación de la filiación, lo que exige valorar dicha certificación en virtud del canon normativo que resulta del Derecho español, con arreglo al cual, debe quedar destruida la presunción de filiación matrimonial establecida en el artículo 116 del Código Civil. Por tanto, siendo la madre casada, si el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado reconocer la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (*cf.* art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (*cf.* arts. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (*cf.* arts. 113 CC y 2 LRC). En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso —*cf.* Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su

Reglamento— no se puede estimar que las pruebas citadas sean suficientes para dar por acreditada la filiación de la interesada respecto de un ciudadano español.

VII. Debiendo significarse finalmente, respecto a la nacionalidad española otorgada a alguno de sus familiares, alegación formulada por la recurrente, que de los nombres facilitados y de los que no se presenta documento alguno, dos de ellos, ya fallecidos según la recurrente, no consta su nacionalidad española, otro de ellos del que si consta nació en 1953, es decir 4 años después del divorcio de la madre de ambos y la última es hija del ciudadano español, Sr. E. R., pero no de la Sra. Q. E., asimismo sólo cabe decir que si se observa que la documentación que sirvió de base en su momento para la concesión de la nacionalidad española de alguno de ellos era similar a la contenida en el presente expediente, procedería que, si el ministerio fiscal considerara que les ha sido otorgada dicha nacionalidad de modo impropio, cabría, a instancia de dicho órgano, incoar nuevos expedientes para dejar sin efecto la opción de nacionalidad y cancelar la inscripción practicada. A este respecto conviene recordar que, en desarrollo del principio básico de la legislación registral de concordancia del registro civil con la realidad, es doctrina reiterada de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no opera en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de mayo de 2017 (3.ª)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Doña N. C. A. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su abuelo, y el de su madre expedido por el registro civil español, en el que consta que nació en Cuba y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando la interesada ya había alcanzado la mayoría de edad. Así mismo aporta documentación relativa a su bisabuelo, nacido en España en 1891, que acredita su inscripción en el registro de extranjeros cubano en el año 1920.

II

El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 8 de enero de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

IV

Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la ley del registro civil; 66, 68, 85 y 232 del reglamento del registro civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2.^a de octubre de 2005; 5-2.^a de enero, 10-4.^a de febrero, 20-5.^a de junio de 2006; y 21-2.^a de febrero, 16-4.^a de marzo, 17-4.^a de abril, 16-1.^o y 28-5.^a de noviembre de 2007; 7-1.^a de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como española de origen, a la nacida en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre de la interesada tienen la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada ley 52/2007, opción que fue documentada, en acta suscrita el 28 de julio de 2011 e inscrita en el registro civil consular de España en La Habana el 20 de marzo de 2014, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de junio de 2011 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 8 de enero de 2014, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del núm. 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008. Por el contrario, la opción del artículo 20 núm. 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 28 de julio de 2011, la ahora optante, nacida en 1971, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española «de origen» pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su «padre o madre hubiese sido originariamente español». Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen «desde su nacimiento» (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado «De los españoles y extranjeros», por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a «los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el código por ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de «los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español» (*cfr.* artículo 19). El supuesto del «nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles» pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (*cfr.* número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por pri-

mera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española «de origen» adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que «El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español», añade un segundo párrafo para especificar que «Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen». Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22–), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3.º, regla 2.ª del Código Civil (versión dada por la Ley 51/1982) a favor de «el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada ley 51/1982. Así, el proyecto de ley del gobierno enunciaba el supuesto como referido a «El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español» (*cf.* artículo 22, párrafo 3.º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: «El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, núm. 2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española «de origen desde el nacimiento» o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española «de origen desde la adopción». La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión «...que originariamente hubieran sido españoles», y no «que sean o hayan sido españoles de origen»), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla

general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen «desde la adopción», se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la ley: «En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español». Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrenadadamente.

IX. En la proposición de ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a «aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)», supuesto que en el texto definitivo de la ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (*cf.*: artículo 2 núm. 3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo. Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la ley 18/1990, «queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles». El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: «Adoptados en forma plena antes de la ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al

cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre» (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia «a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española». En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que «La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España». Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre «que originariamente hubiera sido español», conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado I de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la constitución española, sin que por ello el

hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera «beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles»: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas «cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 núm. 1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores FUNDAMENTOS DE DERECHO de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a «b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles», frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr art. 22 núm. 2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español»), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio» (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las «personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen», pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta «amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad

española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles», sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos –, «de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la guerra civil o la Dictadura», y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general. No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 núm. 1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (*cfr.* art. 358-II RRC). Por otro lado no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmen- te, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y sí está acreditado que ya el bisabuelo de la recurrente residía en Cuba en el año 1920, que su hijo, abuelo de la interesada, nació en dicho país en 1922, por lo que se puede afirmar que su vida transcurrió en Cuba y no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña N. C. A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Madrid, 8 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 23 de junio de 2017 (22.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

M. L. G. D., ciudadana estadounidense de origen cubano, presenta escrito en el Consulado de España en Miami, Florida (Estados Unidos de América), correspondiente a su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 15 de mayo de 1961 en P. R. (Cuba), hija de R. P. G. C. y de M. R. D. B., ambos nacidos en P. R. en 1920 y 1929, respectivamente y casados en 1956, certificado no literal de nacimiento de la promotora, pasaporte estadounidense de la promotora y licencia de conducir del estado de Florida, certificado no literal de nacimiento de la madre de la promotora, hija de L. D. C., natural de O. (Asturias) y de F. A. B. V., natural de P. R. (Cuba), certificado literal de nacimiento español del padre del abuelo materno de la promotora, Sr. D. C., nacido en N., L. (Asturias) en 1904, hijo de J. D. G., natural de O. y de M. P. C. A., natural de L., certificado de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativos al Sr. D. C., expedido a petición de una tía materna de la promotora en el año 2010, declarando que consta inscrito en el Registro de extranjeros con núm. de expediente, formalizado en C. S., P. R. (Cuba) a los 38 años, es decir en 1942 y certificado no literal de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en 1956. Posteriormente la documentación es remitida al Registro Civil Consular de La Habana competente, en su caso, para la inscripción.

II

Con fecha 28 de noviembre de 2014 la encargada del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por la interesada ya que la documentación aportada, en la que se aprecia fraude verificado tras la obtención de prueba concluyente, no permite acreditar que su madre, Sra. L. D. B., es española de origen.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que nunca manifestó que su madre era ciudadana española, que ella nació en Cuba, siendo su abuelo el que era español, por lo que presentó los documentos de su abuelo, solicitando que se revise el expediente, adjunta copia de la documentación que ya consta además de, certificado de defunción de su abuelo materno y certificado de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativo a su abuelo, Sr. D. C., expedido esta vez a petición de otra tía materna de la promotora en el año 2009 y en el que los datos coinciden con el presentado anteriormente,

IV

Posteriormente el registro civil consular, ante las dudas que le suscitan las legalizaciones de parte de la documentación aportada, concretamente los certificados de nacimiento de la promotora y de su progenitora, solicita informe al Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, que lo emite en el sentido de que existe en ambos una presunción de falsedad, por lo que quedan a disposición de las autoridades competentes a los fines de la investigación correspondiente.

V

Notificado el órgano en funciones del ministerio fiscal, éste informa que en el expediente examinado se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y, en consecuencia, el auto es conforme a Derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo mostrando su conformidad con la decisión en su día adoptada, añadiendo que los documentos de nacimiento local de la interesada y de su progenitora presentan dudas de autenticidad, por lo que se aprecian irregularidades y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

VI

Posteriormente este centro directivo requiere de la promotora, a través del registro civil consular, nuevos certificados de nacimiento propio y de su madre debidamente legalizados, documentos que son aportados en octubre del año 2016 y que reiteran el contenido de los anteriores.

VII

Consta en el expediente solicitud, firmada por la interesada, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), declarando que hace constar que «la nacionalidad de origen de su progenitor es española». Se incluye un párrafo que dice textualmente «la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2.^a de octubre de 2005, 5-2.^a de enero, 10-4.^a de febrero y 20-5.^a de junio de 2006; 21-2.^a de febrero, 16-4.^a de marzo, 17-4.^a de abril, 16-1.^o y 28-5.^a de noviembre de 2007, y, por último, 7-1.^a de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en P. R. (Cuba) en 1961 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 28 de noviembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la «certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante» debiendo «proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal». Exigencia que se

conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los HECHOS y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles –*cf.* arts. 1 núm. 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–.

En el presente caso, dicha certificación no fue aportada durante la tramitación del expediente y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no pudo entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, además de existir irregularidades en la legalización del documento como también en el de nacimiento de la propia promotora, pero habiéndose aportado al tiempo de proceder a resolver el recurso interpuesto nueva documentación, de la que no existen dudas formales que actualiza la información a que se referían aquellos documentos que adolecían de irregularidades, y consta que el abuelo materno de la promotora se inscribió en el registro de extranjeros cubano a los 38 años de edad, es decir en 1942, después del nacimiento de su hija y padre de la promotora, que tuvo lugar en 1929, conviene tomar en consideración dichos datos y pese a que ha de estimarse correcto el auto recurrido que se atuvo, al tiempo de ser dictado, a los HECHOS acreditados por la interesada; no obstante constando ahora en el expediente el documento y aplicando criterios de economía procesal con el fin de evitar la reiteración del mismo debe tenerse en cuenta el mismo.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento– se ha acreditado que la progenitora de la optante ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del Registro Civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 23 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de La Habana (Cuba).

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (29.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Doña E.-T. B. G., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 1 de octubre de 1980 en P., L. H. (Cuba), hija de Don A.-A. B. A., nacido el 6 de enero de 1947 en L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Doña C.-E. G. C., nacida el 13 de octubre de 1946 en L. P., P. R. (Cuba), de nacionalidad cubana y española, carnet de identidad cubano y certificado literal local de nacimiento de la solicitante; certificado español de nacimiento de la madre de la solicitante, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española no de origen, en virtud de la opción establecida en el artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 2 de febrero de 2004 y posterior adquisición de la nacionalidad española de origen, en virtud de la opción establecida en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 12 de febrero de 2010; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno de la promotora, Don F. G. R., nacido el 24 de febrero de 1906 en S. T. A., Asturias (España); documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno, en los que se indica que formalizó su inscripción en el registro de extranjeros cubano con 26 años de edad y que adquirió la ciudadanía cubana por naturalización el 23 de julio de 1942 y certificados literales cubano de matrimonio de los progenitores y los abuelos maternos de la solicitante.

II

Con fecha 5 de mayo de 2011, el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana, dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la promotora, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, toda vez que la progenitora española de la solicitante optó por la nacionalidad española de origen de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 12 de febrero de 2010, cuando la solicitante era mayor de edad, por

lo cual no ha quedado establecido que en la interesada concurren los requisitos exigidos la citada ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente y alegando que por error utilizó el Anexo I, que corresponde a los solicitantes que son hijos de padres originalmente españoles, cuando lo correcto es el Anexo II, pues su abuelo perdió la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos expresados en el auto recurrido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4.^a), 23 de marzo de 2010 (5.^a), 23 de marzo 2010 (6.^a) 24 de marzo de 2010 (5.^a), 28 de abril de 2010 (5.^a), 6 de octubre de 2010 (10.^a) 15 de noviembre de 2010 (5.^a), 1 de diciembre de 2010 (4.^a), 7 de marzo de 2011 (4.^a), 9 de marzo de 2011 (3.^a), 3 de octubre de 2011 (17.^a), 25 de octubre de 2011 (3.^a), 2 de diciembre de 2011 (4.^a), 10 de febrero 2012 (42.^a) 17 de febrero 2012 (30.^a) 22 de febrero 2012 (53.^a) 6 de julio 2012 (5.^o) 6 de julio 2012 (16.^a) 14 de septiembre de 2012 (32.^a) y 30 de enero 2013 (28.^a).

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el

plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 5 de mayo de 2011 denegando lo solicitado.

III. En primer lugar, hay que señalar que la promotora modifica en el recurso la *causa petendi* respecto de la inicial, pues su solicitud se dirigía a la declaración de la nacionalidad española de origen en virtud de la opción establecida en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Anexo I), mientras que en el recurso lo que plantea es la adquisición de la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en el apartado segundo de dicha disposición adicional (Anexo II). La resolución de la cuestión basada en esta última posibilidad requiere un pronunciamiento previo del encargado del registro sobre ese punto. Por tanto, dado que el acuerdo emitido se refiere únicamente a la posibilidad de opción propuesta en la solicitud inicial de la interesada, el recurso interpuesto se entiende planteado contra dicho acuerdo y la resolución por parte de este centro debe encaminarse únicamente a dilucidar si corresponde declarar la nacionalidad española de la promotora en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Con independencia de lo anteriormente indicado, el modelo de solicitud Anexo II aportado por la solicitante en vía de recurso, fechado el 9 de diciembre de 2014, se encuentra formulado fuera del plazo legalmente establecido y, por otra parte, el abuelo de la solicitante, nacido en febrero de 1906, se inscribió en el registro de extranjeros cubano con 26 de años de edad, por lo que salió de España con anterioridad al período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, para su consideración de exiliado.

IV. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese originariamente española de origen, ya que la misma adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos de 12 de febrero de 2010.

V. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que

los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del núm. 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 núm. 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española de origen por el ejercicio de la opción establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos de 12 de febrero de 2010, la ahora optante, nacida el 1 de octubre de 1980, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1.º de la disposición adicional séptima.

VI. El apartado 1.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española «de origen» pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su «padre o madre hubiese sido originariamente español». Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen «desde su nacimiento» (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento –de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción–, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VII. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado «De los españoles y extranjeros», por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a «los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de «los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español» (*cf.* art. 19). El supuesto del «nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles» pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (*cf.* núm. 2 del art. 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española «de origen» adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que «El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español», añade un segundo párrafo para especificar que «Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen».

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VIII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria –art. 17– y las adquisiciones derivativas –arts. 19 a 22–), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3.º, regla 2.ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de «el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a «El nacido fuera de España de padre que sea o haya

sido español» (*cf.* art. 22, párrafo 3.º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: «El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, núm. 2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española «de origen desde el nacimiento» o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española «de origen desde la adopción». La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión «...que originariamente hubieran sido españoles», y no «que sean o hayan sido españoles de origen»), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen «desde la adopción», se inclinaba por la tesis restrictiva.

IX. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: «En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español». Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

X. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a «aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)», supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición Transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (*cf.* artículo 2 núm. 3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, «queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles».

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: «Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre» (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia «a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española». En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que «La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España».

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre «que originariamente hubiera sido español», conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan

optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

XI. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria 3.^a de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera «beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles»: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XII. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas «cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 núm. 1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a «b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles», frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la

nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (*cf.*: art. 22 núm. 2, f del Código Civil).

XIII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español»), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio» (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las «personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen», pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIV. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha ley, según la cual ésta «amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles», sin perjuicio de incluir, a través del apartado segundo de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado –nietos–, «de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura», y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 núm. 1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 29 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 27 de octubre de 2017 (27.ª)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo de la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Don P. G. M., nacido el 22 de febrero de 1961 en J., C. (Cuba), presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de Don F. G. G., nacido el 21 de agosto de 1916 en J. (Cuba), de nacionalidad cubana y de D.^a E.-Z. M. P., nacida el 27 de junio de 1927 en F. L. G., C. A. (Cuba); documento de identidad cubano y certificado local en extracto de nacimiento del promotor; certificado español de nacimiento de la madre del interesado, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española no de origen, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil, Ley 36/2002, en fecha 11 de agosto de 2003; certificado literal cubano de nacimiento de la progenitora del solicitante y certificado literal español de nacimiento de la abuela materna del interesado, D.^a C. P. T., nacida el 26 de septiembre de 1902 en E. P., T. (España).

II

Con fecha 17 de septiembre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el solicitante concurren los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, alegando que formuló su solicitud en base a que su abuela materna fue originariamente española.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme a derecho, y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que teniendo en cuenta que la progenitora española del solicitante optó por la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 11 de agosto de 2003, no ha quedado establecido que el solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora, señalando que la abuela del solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 16 de octubre de 1918, por lo que a partir de ese momento adquirió la nacionalidad cubana, según lo expresado en el artículo 22 del Código Civil según la redacción originaria de 1889, y su hija, madre del solicitante, nace el día 27 de junio de 1927, cuando su madre era cubana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4.º, 23-5.º, 23-6.º y 24-5.ª de marzo, 28-5.ª de abril, 6-10.ª de octubre, 15-5.ª de noviembre y 1-4.ª de diciembre de 2010, 7-4.ª y 9-3.ª de marzo, 3-17.ª y 25-3.ª de octubre y 2-4.ª de diciembre de 2011, 10-42.ª, 17-30.ª y 22-53.ª de febrero, 6-5.ª y 6-16.ª de julio, 14-32.ª de septiembre de 2012 y 30-28.ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en J., C. (Cuba) el 22 de febrero de 1961, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española «b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», opción que fue documentada en acta suscrita el 11 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del Registro Civil Consular se dictó auto el 17 de septiembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. La resolución apelada basa su denegación en que el interesado no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por no haber quedado establecido que en el solicitante concurren los requisitos legales exigidos, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora, posición que el órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición, y conforme a lo solicitado por el interesado en el Anexo I presentado en el Registro Civil Consular de España en la Habana (Cuba) el 31 de octubre de 2011. Se exige, en este caso, que la progenitora del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adqui-

sición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles *de origen*) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.2 y 19.2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de «nacionalidad española de origen» pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que «*este derecho también se reconocerá*» a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el «*derecho*» a que se refiere es el del optar por la «nacionalidad española de origen». Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del núm. 1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española, la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I «el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007».

Por otra parte, de la información integrante del expediente, se constata que la abuela materna del solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 16 de octubre de 1918, perdiendo la nacionalidad española en ese momento, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Código Civil, según la redacción establecida por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha

fecha, que establecía que «la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido». Por tanto, cuando nace la madre del interesado, el 27 de junio de 1927, la abuela materna del solicitante ostentaba la nacionalidad cubana, por lo que la madre del interesado no nació originariamente española.

V. En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (26.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo I Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por opción en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo de la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

D.^a A.-M. T. B., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 12 de agosto de 1962 en C., L. H. (Cuba), hija de Don H.-J. T. Q. nacido el 19 de abril de 1934 en S. B., L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana y de D.^a N.-R. B. C., nacida el 31 de agosto de

1942 en L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana y española; documento de identidad cubano y certificado local en extracto de nacimiento de la promotora; certificado español de nacimiento de la madre de la interesada, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española no de origen, en virtud de la opción establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, en fecha 28 de mayo de 1997 y certificado literal español de nacimiento del abuelo materno de la solicitante, Don R. B. S., nacido el 25 de octubre de 1907 en G., A.

II

Con fecha 5 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en L. H. (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los HECHOS a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el solicitante concurren los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, alegando la nacionalidad española de origen de su abuelo materno y acompañando acta de nacimiento del mismo, que ya se encontraba en su expediente.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme a derecho, y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que teniendo en cuenta que la progenitora española de la solicitante optó por la nacionalidad española no de origen en fecha 28 de mayo de 1997, y la misma no es originariamente española, dado que su progenitor ostentaba la nacionalidad cubana al momento de su nacimiento, no ha quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la

disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4.º, 23-5.º, 23-6.º y 24-5.ª de marzo, 28-5.ª de abril, 6-10.ª de octubre, 15-5.ª de noviembre y 1-4.ª de diciembre de 2010, 7-4.ª y 9-3.ª de marzo, 3-17.ª y 25-3.ª de octubre y 2-4.ª de diciembre de 2011, 10-42.ª, 17-30.ª y 22-53.ª de febrero, 6-5.ª y 6-16.ª de julio, 14-32.ª de septiembre de 2012 y 30-28.ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española de origen a la nacida el 12 de agosto de 1962 en C., L. H. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocida en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, conforme a la cual «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y nacido en España podrán optar a la nacionalidad española, si formalizan su declaración antes del día 7 de enero de 1997», opción que fue documentada en acta suscrita el 28 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 5 de agosto de 1997, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del Registro Civil Consular se dictó auto el 5 de junio de 2014, denegando lo solicitado.

III. La resolución apelada basa su denegación en que la interesada no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por no haber quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos legales exigidos, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora, posición que el órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición, y conforme a lo solicitado por la interesada en el Anexo I presentado en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 20 de diciembre

de 2011. Se exige, en este caso, que la progenitora de la optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles *de origen*) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.2 y 19.2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de «nacionalidad española de origen» pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que «este derecho también se reconocerá» a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpre-

tarse que el «*derecho*» a que se refiere es el del optar por la «nacionalidad española de origen». Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del núm. 1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española, la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I «el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007». La consideración hecha respecto de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código Civil, es extensible también a la opción de la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre, de la que trae causa la del artículo 20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, pues se refiere a un supuesto idéntico y contiene un régimen también idéntico, excepción hecha del plazo de duración de la misma y por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente.

V. En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (*cf.* art. 358-II RRC). Por otro lado, aun cuando el certificado literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizado para la acreditación de la nacionalidad española del mismo, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 5 de enero de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 5 de enero de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (8.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de enero de 2017 (10.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de enero de 2017 (33.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (41.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (42.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (33.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (41.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (42.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (43.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 13 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 13 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (8.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 21 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 21 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (8.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (10.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (11.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de marzo de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (49.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de abril de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 12 de abril de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 12 de abril de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 21 de abril de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (15.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de abril de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de mayo de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de mayo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de mayo de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de mayo de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de mayo de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (41.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (36.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (41.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (42.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (8.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (10.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (11.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (14.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de junio de 2017 (43.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de junio de 2017 (44.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de junio de 2017 (45.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de junio de 2017 (46.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 23 de junio de 2017 (47.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de julio de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de julio de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de julio de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de julio de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 14 de julio de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de julio de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 28 de julio de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (67.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (68.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (69.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (70.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (72.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (14.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (26.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (14.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (15.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (26.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (33.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (36.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (26.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (33.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (36.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (33.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (10.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (11.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (36.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (41.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (42.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (43.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 4 de diciembre de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 4 de diciembre de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (6.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (26.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo I Ley 52/2007.

3.1.3.2 *Adquisición nacionalidad española de origen (apartado 2, disposición adicional séptima de la Ley 52/2007)*

Resolución de 17 de febrero de 2017 (44.ª)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.—*Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

I

Don G. F. P., de nacionalidad brasileña, nacido el 03 de octubre de 1986 en C. G., M. G. del S. (Brasil), hijo de Don C. G. P., nacido el 01 de febrero de 1960 en L., E. de P. (Brasil) y de Doña A. P. da F. Pe., nacida en B., presenta en el Registro Civil Consular de España en Sao Paulo (Brasil) solicitud a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima (anexo II), sin acompañar ninguno de los documentos probatorios exigidos.

II

Con fecha 11 de mayo de 2015, el encargado del registro civil consular efectúa un requerimiento de subsanación al interesado, que le fue notificado por correo certificado el 25 de mayo de 2015, concediéndole treinta días para aportar la documentación exigida. Transcurrido dicho plazo, el solicitante no presentó ninguno de los documentos requeridos.

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en Sao Paulo (Brasil) dicta auto con fecha 30 de junio de 2015 por el que se desestima la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado, no quedando

acreditado que se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 2.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado ninguno de los documentos requeridos.

IV

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que con fecha 20 de diciembre de 2011 solicitó la nacionalidad española, llevando consigo toda la documentación debidamente autenticada por notario público y sus copias, por lo que considera que no es procedente la desestimación por no haber aportado la documentación exigible.

V

Notificado el órgano en funciones del ministerio fiscal, emite informe el 01 de septiembre de 2015, indicando que no ha quedado acreditado que la abuela del interesado fuese exiliada y que hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos que el emitido por el órgano en funciones del ministerio fiscal.

VI

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), se requiera al interesado a fin de que aporte traducción jurada y legalizada de su certificado literal de nacimiento; original del certificado español de nacimiento de su padre y de su abuela paterna; certificado de matrimonio de la abuela paterna del promotor, actualizado y legalizado, así como documentación que acredite la condición de exiliada de la abuela paterna del solicitante, traducido y legalizado. Atendiendo al requerimiento, el interesado aportó la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones de 18 de mayo de 2012

(1 séptima, 20.^a, 21.^a y 25.^a) 23 de agosto de 2012 (74.^a, 76.^a y 79.^a) 4 de octubre de 2012 (2.^a), 31 de octubre de 2012 (3.^a) 21 de noviembre de 2012 (48.^a, 50.^a y 53.^a) y 10 de diciembre de 2012 (séptima).

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido el 03 de octubre de 1986 en C. G., M. G. del S. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio». La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 30 de junio de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, al no haber aportado ninguno de los documentos requeridos dentro del plazo conferido al efecto, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe. Posteriormente, el interesado, atendiendo al requerimiento formulado, aporta en vía de recurso la documentación justificativa de su pretensión, por lo que en aras del principio de economía procesal, procede conocer del fondo del asunto.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ».

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil brasileño del solicitante y certificaciones españolas de nacimiento de su padre y de su abuela paterna. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de

abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir, el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del art. 22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (*cf.* art. 18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1.º y 2.º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al art. 17.1 del

Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado –según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001– hasta la entrada en vigor de la Constitución) Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de registro civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma «el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición». De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del registro civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la

recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cfr.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento–, se consta que la abuela del promotor es española de origen, que no pudo transmitir su nacionalidad española por matrimonio con ciudadano extranjero celebrado en Brasil el 17 de abril de 1959 y que acredita su condición de exiliada con el certificado expedido por el Archivo Público del Estado de São Paulo (Brasil), en el que se hace constar que la abuela del interesado entró en Brasil el 06 de mayo de 1951 a bordo del Barco Cabo de Hornos, en el puerto de la ciudad brasileña de S., procedente de C. (España), por lo que pueden entenderse cumplidos en su totalidad, con arreglo a los fundamentos de derecho anteriores, los requisitos para el ejercicio del derecho de opción establecidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el auto apelado, instando al encargado del registro civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 10 de marzo de 2017 (1.ª)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.—*No es posible estimar el recurso interpuesto, al haber resultado acreditado que la solicitud de opción se realizó fuera del plazo legalmente establecido.*

En las actuaciones sobre opción la nacionalidad española de origen, en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Ceuta realizada el 26 de diciembre de 2012, Doña. H. E-H., nacida el 30 de mayo de 1980 en F. (Marruecos) residente en C., solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción, de acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Aporta la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento marroquí propio; certificado literal de nacimiento español de su madre, Sra. M. E-H., nacida en C. en 1948, hija de M. B M. E-H., nacido en A. (C.) y de nacionalidad marroquí. No aporta el certificado de nacimiento de su abuelo, tan solo un certificado expedido por la Delegación del Ministerio de Defensa en Ceuta que acredita su incorporación como voluntario, en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Infantería Tetuán núm. 1 desde el 10 de agosto de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1964.

II

El encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo el 3 de junio de 2013, denegando la solicitud de opción a la nacionalidad española de origen por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

III

Notificado el acuerdo, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que entiende «que con la documental obrante la Administración en caso de no tener encaje legal en la disposición final segunda de la Ley 52/2007 en relación con la disposición adicional séptima de la misma, la Administración podría conceder la nacionalidad española por otra vía».

IV

Notificado el ministerio fiscal, informa que procede la confirmación del auto recurrido. El encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5.^a de abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4.^a y 9 de marzo, 3-17.^a y 25-3.^a de octubre de 2011 y 2, 5-75.^a y 19 -13.^a de diciembre de 2014.

II. Ha pretendido optar a la nacionalidad española una ciudadana marroquí nacida el 30 de mayo de 1980 en F. (Marruecos), en virtud del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. El encargado del Registro Civil Central inadmitió su solicitud, por entender que había sido presentada fuera del plazo legalmente establecido.

III. En relación con el plazo de presentación de este tipo de solicitudes, la directriz primera de la instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, establece que será necesario que se formalicen las declaraciones de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada disposición, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo por un año más, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Efectivamente se produjo dicha prórroga, siendo la fecha de caducidad de este derecho de opción el 27 de diciembre de 2011.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, se constata que la interesada presentó el anexo II de solicitud de nacionalidad española por opción en fecha 26 de diciembre de 2012, fuera del plazo legalmente establecido, hecho no controvertido en el escrito de recurso que aquí se solventa, por lo que no resulta posible estimar el recurso presentado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de abril de 2017 (22.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.—*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

I

J-L. J. V., ciudadano argentino, comparece en el Consulado General de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 19 de octubre de 1969 en B. A. (Argentina) hijo de J-E. J. D. y M-L. V. M., ambos nacidos en B.A. en 1935 y 1938, respectivamente, cédula de identidad argentina del promotor, certificado literal de nacimiento del promotor, literal de inscripción de nacimiento española de la madre del promotor, Sra. V. M., inscrita en el año 2012, hija de R. V. y G., nacido en B. y del que no consta fecha de nacimiento ni nacionalidad, y de R. M. y S., nacida en B. el 24 de septiembre de 1915, no constando su filiación materna ni su nacionalidad, consta anotación marginal relativa a que la inscrita optó por la nacionalidad española con fecha 9 de noviembre de 2011 y en base al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, certificado literal de nacimiento argentino de la madre del promotor, inscrita por declaración de su madre Sra. M. y S., de 22 años y casada con el Sr. V. y G., de 41 años, ambos españoles, libro de familia de los padres del promotor, casados en 1963, ambos de nacionalidad argentina y en el que consta el promotor como el segundo de los hijos del matrimonio, inscripción literal de nacimiento española de la abuela materna del promotor, inscrita como R-M. y S., nacida en B. el 24 de septiembre de 1915 hija de F. M. S. y sin que conste filiación materna, certificado literal de defunción de la precitada, fallecida en Argentina en 1999, certificado de nacionalidad del Consulado General de España en Buenos Aires, expedido en 1938 a favor de la Sra. M., con una fecha errónea de nacimiento y en el que sí consta nombre de la madre y documento argentino del Registro General de Cartas de Ciudadanía relativo a la Sra. M. S., con fecha de nacimiento 25 de septiembre de 1915, e inscrita en 1950 tras otorgársele carta de ciudadanía el 23 de mayo de 1950.

II

La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2015 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su instrucción de 4 de

noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se ha acreditado que la abuela del promotor tuviera la condición de exiliada ni que perdiera la nacionalidad española por tal circunstancia, por lo que no sería de aplicación lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, declarando que su abuela llegó a Argentina antes de 1936, antes del plazo establecido en la norma que considera injusto, que nunca perdió su ciudadanía española, entendiéndose que si tiene derecho a la nacionalidad española de sus ascendientes.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. La encargada del registro civil consular se ratifica en su acuerdo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5.^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4.^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17.^a), 25 de octubre de 2011 (3.^a), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en B. A. (Argentina) en 1969, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio». La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de diciembre de 2011, mediante formulario correspondiente al anexo II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por

la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 28 de octubre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V– sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ». En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil del solicitante, de su progenitora y de su abuela, Sra. M. y S., resultando de esta su nacimiento en España en el año 1915 y su nacionalidad originariamente española, por lo que la resolución se limitará únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la

pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del artículo 22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (*cfr.* art. 18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1.º y 2.º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado –según resolución de fecha 13 de octubre de 2001– hasta la entrada en vigor de la Constitución). Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma «el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición». De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado

2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento–, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que perdió la nacionalidad al naturalizarse argentina en 1950, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España –y no únicamente la residencia fuera de España– entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, puesto que el propio interesado en su recurso declara que su abuela llegó antes de esa fecha a Argentina, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 7 de abril de 2017 (23.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.–1. *No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

2. No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

I

T. J. V., ciudadano argentino, comparece en el Consulado General de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, anexos I y II, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 16 de mayo de 1973 en B. A. (Argentina) hijo de J-E. J. D. y M-L. V. M., ambos nacidos en B.A. en 1935 y 1938, respectivamente, cédula de identidad argentina del promotor, certificado literal de nacimiento del promotor, literal de inscripción de nacimiento española de la madre del promotor, Sra. V. M., inscrita en el año 2012, hija de R. V. y G., nacido en B. y del que no consta fecha de nacimiento ni nacionalidad, y de R. y S., nacida en Barcelona el 24 de septiembre de 1915, no constando su filiación materna ni su nacionalidad, consta anotación marginal relativa a que la inscrita optó por la nacionalidad española con fecha 9 de noviembre de 2011 y en base al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, certificado literal de nacimiento argentino de la madre del promotor, inscrita por declaración de su madre Sra. M. y S., de 22 años y casada con el Sr. V. y G., de 41 años, ambos españoles, libro de familia de los padres del promotor, casados en 1963, ambos de nacionalidad argentina y en el que consta el promotor como el cuarto de los hijos del matrimonio, inscripción literal de nacimiento española de la abuela materna del promotor, inscrita como R. M. y S., nacida en B. el 24 de septiembre de 1915 hija de F. M. S. y sin que conste filiación materna, certificado literal de defunción de la precitada, fallecida en Argentina en 1999, certificado de nacionalidad del Consulado General de España en Buenos Aires, expedido en 1938 a favor de la Sra. M., residente en su demarcación desde 1926, con una fecha errónea de nacimiento y en el que sí consta nombre de la madre y documento argentino del Registro General de Cartas de Ciudadanía relativo a la Sra. M. S., con fecha de nacimiento 25 de septiembre de 1915, e inscrita en 1950 tras otorgársele carta de ciudadanía el 23 de mayo de 1950.

II

La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2015 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se ha acreditado que la abuela del promotor tuviera la condición de exiliada ni que perdiera la nacionalidad española por tal circunstancia, y su progenitora había optado ya para sí misma a la nacionalidad española en base en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que no sería de aplicación lo previsto en ninguno de los apartados de dicha disposición.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, declarando que su abuela llegó a Argentina antes de 1936, antes del plazo establecido en la norma que considera injusto, que nunca perdió su ciudadanía española, entendiéndose que si tiene derecho a la nacionalidad española de sus ascendientes.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. La encargada del registro civil consular se ratifica en su acuerdo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5.^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4.^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17.^a), 25 de octubre de 2011 (3.^a), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en B. A. (Argentina) en 1973, en virtud del ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional» y también «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de diciembre de 2011, mediante formulario correspondiente al anexo II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 28 de octubre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer ninguna de las opciones de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio y su progenitora había optado a la nacionalidad española con base en la misma disposición normativa cuando el interesado ya era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V– sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ».

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil del solicitante, de su progenitora y de su abuela, Sra. Mercadé y Solé, resultando de esta su nacimiento en España en el año 1915 y su nacionalidad originariamente española, por lo que la resolución se limitará únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del artículo 22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (*cf.* art. 18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1.º y 2.º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado –según resolución de fecha 13 de octubre de 2001– hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma «el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición». De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuen-

cia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso —*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento—, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de

española; que perdió la nacionalidad al naturalizarse argentina en 1950, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, puesto que el propio interesado en su recurso declara que su abuela llegó antes de esa fecha a Argentina, y así consta también en su certificado consular de nacionalidad de 1938, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII. En relación con lo solicitado por el interesado al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del núm. 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 núm. 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 9 de noviembre de 2011, el ahora optante, nacido el 16 de mayo de 1973, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

IX. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor del recurrente ostentaría la nacionalidad española «de origen» pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su «padre o madre hubiese sido originariamente español». Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen «desde su nacimiento» (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento –de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción–, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

X. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado «De los españoles y extranjeros», por la que se da nueva redacción al artículo 18 del código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a «los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de «los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español» (*cf.* artículo 19). El supuesto del «nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles» pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (*cf.* número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española «de origen» adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que «El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española

cuando cualquiera de los adoptantes fuera español», añade un segundo párrafo para especificar que «Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen».

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

XI. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria –art. 17– y las adquisiciones derivativas –arts. 19 a 22–), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogándose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3.º, regla 2.ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de «el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a «El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español» (*cf.* art. 22, párrafo 3.º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: «El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, núm. 2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española «de origen desde el nacimiento» o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española «de origen desde la adopción». La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión «... que originariamente hubieran sido españoles», y no «que sean o hayan sido españoles de origen»), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen «desde la adopción», se inclinaba por la tesis restrictiva.

XII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo

bulo de la Ley: «En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español». Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

XIII. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a «aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)», supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (*cf.* art. 2 núm. 3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, «queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles».

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción —con efectos de nacionalidad de origen—, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: «Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre» (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de espa-

ñaola nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia «a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española». En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que «La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España».

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre «que originariamente hubiera sido español», conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

XIV. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del

marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera «beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles»: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XV. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas «cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (*cf.* art. 20 núm. 1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a «b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles», frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (*cf.* art. 22 núm. 2, f del Código Civil).

XVI. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español»), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio» (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las «personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen», pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XVII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley,

según la cual ésta «amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles», sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado –nietos–, «de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura», y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 núm. 1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española de la abuela del promotor, Sra. M. S., se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 2 de junio de 2017 (24.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.–*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

D.^a M.-M. P. S., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 29 de abril de 1987 en L.H. (Cuba), hija de Don R. P. F., nacido el 31 de diciembre de 1962 en L. (Cuba) y de D.^a M.-E. S. G., nacida el 16 de noviembre de 1957 en G. (Cuba); carnet de identidad cubano y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado español de nacimiento de la madre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española el 27 de agosto de 2009; certificado español de nacimiento de la abuela materna, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 19 de abril de 2007; certificado expedido por el Ministerio del Interior cubano, con fecha 05 de abril de 2007, en el que se indica que el bisabuelo de la promotora consta inscrito en el registro de extranjeros como ciudadano español con inscripción formalizada a los treinta y ocho años de edad; certificado expedido por el Ministerio del Interior cubano, con fecha 05 de abril de 2007, en el que consta la inscripción de la Carta de Naturalización a favor del bisabuelo de la interesada formalizada a los treinta y nueve años de edad, cuando su hija, abuela de la solicitante, aún era menor de edad; certificado español de nacimiento del bisabuelo de la promotora, en el que consta que nació el 23 de noviembre de 1895 en P. (Lugo).

II

Con fecha 07 de octubre de 2013, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se desestima la inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción de la nacionalidad española de origen de la promotora, ya que estima que la interesada no prueba suficientemente los HECHOS a los que se refiere en su declaración, según lo establecido en los artículos 226 y 227 del RRC, toda vez que no ha quedado acreditado que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de que su abuela perdiera o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente y se valore, nuevamente, su documentación y descendencia.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 31 de mayo de 2016, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que la abuela de la solicitante, natural de Cuba, recuperó la nacionalidad española el 19 de abril de 2007 tras haberla

perdido en el año 1940, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución de la República de Cuba y no como consecuencia del exilio, por lo que no ha quedado acreditado que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de la nacionalidad española de su abuela como consecuencia del exilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5.^a de abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4.^a y 9 de marzo, 3-17.^a y 25-3.^a de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en L. (Cuba) en 1987, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de enero de 2011, mediante formulario correspondiente al anexo II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 07 de octubre de 2013, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este

derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V– sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ».

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se ha aportado certificado local de nacimiento de la interesada y certificado español de nacimiento de la madre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española el 27 de agosto de 2009. Igualmente, se aporta certificado español de nacimiento de la abuela materna, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 19 de abril de 2007. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los

que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del artículo 22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (*cf*: art. 18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1.º y 2.º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma «el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición». De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el

principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

VII. En el presente expediente tampoco se encuentra acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España –y no únicamente la residencia fuera de España– entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 2 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 30 de junio de 2017 (4.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.—1. *No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.*

2. *No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

I

B-I. F. G., ciudadana argentina, comparece en el Consulado General de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, anexos I y II, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 22 de diciembre de 1976 en B. (Argentina), hija de O-R. F. A., nacido en B. en 1947 y de G-D. G. N., nacida en Argentina en 1949, casados en 1975, documento de identidad argentino de la promotora, certificado literal de nacimiento de la promotora, certificado literal de nacimiento español del padre de la promotora, Sr. F. A., hijo de R. F. H., nacido en P. (O.) en 1902 y de nacionalidad argentina desde 1927 y de P. A. G., nacida en L. en 1910 y de la que no se hace constar su nacionalidad, casados en 1942, con marginal de nacionalidad española por la opción del apartado 1.º de la Ley 52/2007 con fecha 18 de mayo de 2011, partida de bautismo de la abuela paterna de la promotora, Sr. A. G., bautizada en C. (L.) en

1908, donde había nacido el 25 de diciembre del mismo año, hija de Á. A. A. y de A. G. D., ambos naturales del municipio de C., consta marginal de matrimonio con A. G. M., aunque no consta fecha, libro de familia de los abuelos paternos de la promotora, certificado literal de defunción de la abuela paterna, fallecida en B., viuda y de nacionalidad española, documento argentino en el que se certifica que la abuela paterna de la promotora, Sra. A. G. no consta inscrita en el Registro Nacional de Electores argentino, por lo que no fue naturalizada y libro de familia de los padres de la promotora.

II

La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2015 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se ha acreditado que la abuela de la promotora tuviera la condición de exiliada ni que perdiera la nacionalidad española por tal circunstancia, y su progenitor había optado ya para sí mismo a la nacionalidad española en base en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que no sería de aplicación lo previsto en ninguno de los apartados de dicha disposición.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, declarando que su abuela llegó a Argentina antes de 1936, antes del plazo establecido en la norma y que nunca perdió su ciudadanía española, por lo que la denegación le parece injusta, entendiéndose que si tiene derecho a la nacionalidad española de sus ascendientes.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. La encargada del registro civil consular se ratifica en su acuerdo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5.^a de abril, 15

de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4.^a y 9 de marzo, 3-17.^a y 25-3.^a de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en B. A. (Argentina) en 1976, en virtud del ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional» y también «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio». Las solicitudes de opción cuya inscripción ahora se pretende fueron formalizadas el 13 de diciembre de 2011, mediante formulario correspondiente al anexo I y II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 18 de noviembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer ninguna de las opciones de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio y su progenitor había optado a la nacionalidad española con base en la misma disposición normativa cuando la interesada ya era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. En relación con lo solicitado por la interesada al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, hay que dilucidar si es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante). Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del núm. 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 núm. 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 18 de mayo de 2011, la ahora optante, nacida el 22 de

diciembre de 1976, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostentaría la nacionalidad española «de origen» pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su «padre o madre hubiese sido originariamente español». Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen «desde su nacimiento» (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento –de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción–, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a results de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado «De los españoles y extranjeros», por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a «los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de «los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos

anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español» (*cf.* art. 19). El supuesto del «nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles» pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (*cf.* número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española «de origen» adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que «El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español», añade un segundo párrafo para especificar que «Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen». Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 –), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3.º, regla 2.ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de «el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles».

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a «El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español» (*cf.* art. 22, párrafo 3.º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: «El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles». Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, núm. 2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión com-

prendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española «de origen desde el nacimiento» o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española «de origen desde la adopción». La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión «... que originariamente hubieran sido españoles», y no «que sean o hayan sido españoles de origen»), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen «desde la adopción», se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: «En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español». Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a «aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)», supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (*cf.* artículo 2 núm. 3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo. Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, «queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles». El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción —con efectos de nacionali-

dad de origen—, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: «Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre» (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia «a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española». En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que «La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España». Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre «que originariamente hubiera sido español», conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que

habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera «beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles»: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas «cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España», respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (*cf.* art. 20 núm. 1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a «b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles», frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (*cf.* art. 22 núm. 2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español»), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio» (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las «personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen», pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta «amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles», sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado –nietos–, «de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura», y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 núm. 1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española de la abuela de la promotora, Sra. A. G., se hubiera producido como consecuencia del exilio.

XIV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V– sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ». En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil de la solicitante y de su padre, no así de su abuela paterna, Sra. A. G., en la que basa su petición, de la que se aporta partida de bautismo en la que se recoge que sus padres eran naturales de pueblos pertenecientes al municipio de C. (León) en el que ella también nació en 1908, y aunque a esta

documentación no cabe atribuirle el mismo valor de prueba de los actos concernientes al Registro Civil en España (artículo 35 de la Ley del Registro Civil), podemos, salvo prueba en contrario, considerarla española, por lo que esta resolución se limitará únicamente a analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

XV. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando la abuela hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

XVI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada

al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

XVII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cfr.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento–, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de española, no ha quedado acreditado que la abuela perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española por causa del exilio, dado que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, y la propia interesada declara que aquella salió de España antes de 1936, por lo que no puede entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (21.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.–1. *No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español.*

2. *No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

I

F. G. S. M., ciudadano argentino, comparece en el Consulado General de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, anexo I, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 17 de diciembre de 1955 en B. A. (Argentina), hijo de G. M. S. Y., nacido en S.(Argentina) en 1926 y de L. R. M. M., nacida en B. A. en 1927, casados en 1955, documento de identidad argentino del promotor, certificado literal de nacimiento del promotor, certificado literal de nacimiento de la madre del promotor, Sra. M. M., hija de M. J. M., de nacionalidad argentina desde y de T. R. E. M., de nacionalidad española, casados, certificado literal de nacimiento español de la abuela materna, nacida en B. en 1902, certificado literal de defunción argentino de la abuela materna del promotor, fallecida en 1995 y en la que se hace constar su nacionalidad española, mismo documento relativo a la madre del promotor, fallecida en Argentina en el año 2006 y de nacionalidad argentina, certificado de la Cámara Nacional Electoral argentina relativo a que la Sra. M., abuela materna del promotor, no consta inscrita como naturalizada argentina y libro de familia de los padres del promotor.

II

La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2016 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se ha acreditado que la abuela del promotor tuviera la condición de exiliada ni que perdiera la nacionalidad española por tal circunstancia, y respecto a su progenitora no se ha acreditado su nacionalidad española de origen por lo que tampoco sería de aplicación el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, declarando que efectivamente su abuela llegó a Argentina antes de 1936, no siendo exiliada, pero que nunca perdió su ciudadanía española, y su progenitora no puede obtener esta nacionalidad por las leyes vigentes hasta el momento actual por lo que la denegación le parece injusta, entendiéndose que si tiene derecho a la nacionalidad española de sus ascendientes.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. La encargada del registro civil consular se ratifica en su acuerdo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5.^a de abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4.^a y 9 de marzo, 3-17.^a y 25-3.^a de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en B. A. (Argentina) en 1955, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1.º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de diciembre de 2011, mediante formulario correspondiente al anexo I de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 4 de febrero de 2016, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer ninguna de las opciones de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio y tampoco se ha acreditado la nacionalidad española originaria de su progenitora, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompa-

ñando a su solicitud la «certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante» debiendo «proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal». Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los HECHOS y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles –*cf.* Arts. 1 núm. 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Argentina, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, lo que concuerda con lo que declaran otros documentos obrantes en el expediente respecto a que la madre del precitado era argentina de nacimiento, hija de un ciudadano argentino y mantuvo dicha nacionalidad, como consta en su certificado de defunción.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento– no se ha acreditado que la progenitora del promotor ostentara la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley

VI. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del *exilio*.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V– sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ».

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil del solicitante, de su madre y de su abuela materna, Sra. M., en la que basa su petición, de la que se aporta certificado literal de nacimiento en el que se recoge que nació en B. en 1902, hija de ciudadanos naturales de la misma provincia y podemos, salvo prueba en contrario, considerarla española, por lo que esta resolución se limitará úni-

camente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

VII. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando la abuela hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino también cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/ 2007.

VIII. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V establece como medios de prueba: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los

españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

IX. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento–, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española, no ha quedado acreditado que la abuela perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española por causa del exilio, dado que no se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado, y el propio interesado declara que aquella salió de España antes de 1936, de hecho residía en Argentina cuando nació su hija y madre del promotor en 1927, por lo que no puede entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 núm. 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española de la abuela de promotor, Sr. S. M., se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (28.^a)

Adquisición nacionalidad española de origen-Anexo II Ley 52/2007.–*No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil Consular en México (México).

HECHOS

I

D.-F. R. Z. R. Z., ciudadano mejicano, presenta escrito en el Consulado General de España en Monterrey (México) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació en M.D.F. el 12 de enero de 1983, hijo de R.-A. R. Z. D., nacido en M. D. F. en 1946 y de P. R. Z. O., nacida en M. D. F. en 1957, casados en 1981, acta literal de nacimiento del promotor, en el que se hace constar la nacionalidad mejicana de sus progenitores y de sus abuelos tanto paternos como maternos, acta literal de matrimonio de los padres del promotor, celebrado en Méjico el 25 de marzo de 1981, acta literal de nacimiento del padre del promotor, nacido el 16 de noviembre de 1946, hijo de R. R. Z. y de I. D., ambos de nacionalidad mejicana, copia literal de inscripción de matrimonio de los abuelos paternos del promotor, R. R. Z. C, nacido en Méjico en 1911 y domiciliado en dicho país e I.-M. D. P., nacida en M. en 1923 y domiciliada en P., celebrado en Francia el 20 de febrero de 1946 e inscripción de dicho matrimonio en el Registro Civil mejicano en 1947, certificado literal de nacimiento español de la abuela paterna del promotor, hija de Á. D. H., natural de M. y de L. P. P. Q., natural de L. (Asturias), con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 10 de julio de 1996, certificado de nacionalidad expedido en 1951 por las autoridades mejicanas, relativo a que la Sra. D. P. tenía su residencia en Méjico y que había contraído matrimonio en 1946 con el Sr. R. Z., de nacionalidad mejicana por nacimiento, por lo que de acuerdo con la legislación mejicana vigente en aquél momento adquirió la nacionalidad mejicana desde la fecha de su matrimonio, pasaporte mejicano del promotor, traducción del libro de familia de los abuelos paternos del promotor, otorgado en Francia e inscripción en el Registro Civil español del padre del promotor, Sr. R. Z. D., con marginal de opción a la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil, con fecha 30 de mayo de 2006.

II

El encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de septiembre de 2013, deniega lo solicitado por el interesado, ya que no se ha acreditado que la abuela del promotor tuviera la condición de exiliada, pero en todo caso perdió la nacionalidad española como consecuencia no del exilio sino de su matrimonio en 1946 con un ciudadano de nacionalidad mejicana, por lo que no sería de aplicación lo previsto en el Apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

III

Notificado el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, relatando las circunstancias que afectaron a su familia paterna y que llevarían a considerar a su abuela como exiliada, ya que salió de España entre 1936 y 1955, concretamente en octubre de 1936, llegando a Francia, añadiendo que varios familiares suyos ya han obtenido la nacionalidad española, fundamentalmente sus hermanos y varios primos, adjuntando documentación que ya consta en el expediente y otra como referencias en prensa a su bisabuelo paterno, Sr. D. H., periodista y que vivió exiliado en P., copia de documento al parecer expedido por la asociación de la prensa en Madrid en enero de 1935, y que recoge los datos de la familia del Sr. D., esposa y 3 hijas, entre ellas la abuela del promotor, así como pasaporte español de su abuela.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Consular se ratifica en su acuerdo ya que a la interesada no le es aplicable el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la Disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la Disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5.^a), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4.^a), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17.^a), 25 de octubre de 2011 (3.^a), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en México en 1983, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de diciembre en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó acuerdo el 15 de diciembre de 2011 denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: «...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre—el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles— del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 —de dicha regla V— sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ».

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del Registro Civil del solicitante, la de su padre y la de su abuela, Sra. Díez Peláez, resultando su nacimiento en España en el año 1923 y su nacionalidad española, por lo que esta resolución se limitará únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional 7.^a de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera «*conditio iuris*» o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad

española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocerse no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del art. 22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola, (bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad), por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (*cfr.* art. 18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1.º y 2.º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al art. 17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado –según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001– hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma «el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de

entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición». De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: «a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada

al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior».

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento–, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieto de española; esta perdió su nacionalidad española por haber contraído matrimonio con un ciudadano extranjero, mejicano y haber adquirido, por aplicación de la legislación de dicho estado, por este hecho la misma nacionalidad, según se referencia en la certificación de nacionalidad mejicana de la abuela del promotor y en diversos documentos expedidos por las autoridades mejicanas, debiendo significarse que tampoco se han aportado documentos suficientes para acreditar el exilio, de hecho no ha resultado acreditada la salida de España –y no únicamente la residencia fuera de España, al menos en 1946, fecha de su matrimonio en Francia, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

VIII. Debiendo significarse finalmente, respecto a la nacionalidad española otorgada a sus familiares, alegación formulada por el recurrente, sólo cabe decir que de todos los mencionados por el recurrente sólo se tienen datos de dos de ellos, no obstante si se observa que la documentación que sirvió de base en su momento para la concesión de la nacionalidad española de aquéllos era similar a la contenida en el presente expediente, procedería que, si el ministerio fiscal considerara que les ha sido otorgada dicha nacionalidad de modo improcedente, cabría, a instancia de dicho órgano, incoar nuevos expedientes para dejar sin efecto la opción de nacionalidad y cancelar la inscripción practicada. A este respecto conviene recordar que, en desarrollo del principio básico de la legislación registral de concordancia del registro civil con la realidad, es doctrina reiterada de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no opera en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en México.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 5 de enero de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (45.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 13 de marzo de 2017 (2.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 13 de marzo de 2017 (4.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (17.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 7 de abril de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (25.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (26.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (27.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (28.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (29.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 2 de junio de 2017 (31.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 9 de junio de 2017 (43.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (15.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 16 de junio de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (3.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (5.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 30 de junio de 2017 (20.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad española de origen Anexo II Ley 52/2007.

3.1.3.3. Adquisición nacionalidad española de origen [apartado 1 disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 previa opción en aplicación del art. 20.1.b) Código Civil]

(No hay Resoluciones para este apartado)

3.2 Consolidación de la nacionalidad española

3.2.1 ADQUISICIÓN NACIONALIDAD POR CONSOLIDACIÓN

Resolución de 13 de enero de 2017 (5.ª)

Adquisición nacionalidad por consolidación.–1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria.

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de las Palmas de Gran Canaria el 07 de julio de 2015, don L. B. alega haber nacido el 30 de diciembre de 1938 en S. I., y que sus padres eran españoles de origen en el momento de su nacimiento, solicitando se promueva expediente gubernativo de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción al amparo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: pasaporte marroquí, en el que se hace constar que nació en 1940; certificado de inscripción padronal colectivo, expedido por el Ayuntamiento de L. P. G. C.; documento nacional de identidad a nombre de don H. A. E.; certificación emitida por la División de Documentación de la Dirección General de la Policía de fecha 27 de octubre de 2014, en relación al documento nacional de identidad a nombre del Sr. A. E., del que no consta ninguna renovación con posterioridad a la fecha de

expedición, que se produjo el 24 de mayo de 1969; certificado de concordancia de nombres, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos; recibo MINURSO en el que consta como fecha de nacimiento del Sr. A. E. el año 1940 y lugar de nacimiento E. A. (Sáhara Occidental); salvoconducto y pasaporte español a nombre del Sr. A. E., expedido este último el 09 de junio de 1969.

II

Ratificado el interesado, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto el 03 de agosto de 2015 denegando la nacionalidad española con valor de simple presunción al promotor al no cumplir los requisitos establecidos en los artículos 17 y 18 del Código Civil.

III

Notificada la resolución, el solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución anulando el auto impugnado y se apruebe la autorización de la inscripción de nacimiento en base a lo establecido en el artículo 18 del Código Civil alegando que la razón por la que no pudo optar a la nacionalidad española dentro del plazo concedido en el Real Decreto 2258/76 fue por la imposibilidad de realizar los trámites necesarios para ello, dado que su residencia en dicha fecha se encontraba en S. I.; en lo referente a la no renovación de su documento nacional de identidad, alega que se debió a un abandono administrativo por su parte y que el motivo de no acreditar el uso de la nacionalidad española durante 10 años se debió a que residía en I., lugar donde no se podía acreditar ni documentar como ciudadano español.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código civil (Cc); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1938 en el territorio de S. I. y cumplir los requisitos establecidos en los artículos 17 y 18 del Código Civil. La encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Para que un nacimiento pueda ser inscrito en el registro civil español es necesario que el mismo haya acaecido en territorio español o en otro caso que afecte a españoles (*cfr.* arts. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.).

IV. La primera de estas condiciones no concurre en este caso, en el que se trata de un nacimiento acaecido en S. I. en 1938. El territorio de Ifni no era ni es español, pues ésta es la conclusión que se desprende forzosamente de su retrocesión a Marruecos por virtud del Tratado de 4 de enero de 1969.

V. Tampoco se da la segunda de las condiciones apuntadas. Aunque el padre del interesado pudiera haberse beneficiado de la nacionalidad española, no se ha acreditado ningún título legal de adquisición de tal nacionalidad y el beneficio de ésta cesó en el momento de aquella retrocesión a Marruecos, fecha en que el interesado ya había alcanzado la mayoría de edad sin que conste que hubiese hecho uso, dentro del plazo de caducidad de tres meses, del derecho de opción a la nacionalidad española, regulado por los artículos tercero del Tratado, primero de su Protocolo anejo y por el Decreto de 26 de junio de 1969.

VI. En cuanto a la eventual consolidación de la nacionalidad española a favor del recurrente, esta dirección general ha mantenido reiteradamente el criterio de que según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cfr.* arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cfr.* art. 335 RRC).

VII. Sobre este punto, es discutible en principio que a los nacidos en el territorio de Ifni cuando éste era posesión española les beneficie el citado artículo 18 CC porque no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la retrocesión por España de este territorio a Marruecos pudiera deducirse otra cosa. En todo caso no se puede entender cumplido en el presente caso el requisito de la utilización de la nacionalidad española durante más de diez años ni que haya ostentado en momento alguno documento oficial de identidad español, toda vez que el interesado aporta pasaporte marroquí, por lo que no concurren los requisitos para que la consolidación de la nacionalidad española pueda tener efecto. Por otra parte, de la documentación aportada al expediente, se constatan algunas contradicciones

en cuanto a la concordancia de nombres, lugar y fecha de nacimiento del promotor; así, en el recibo MINURSO se indica que don H.A.E. nació en 1940 en L. (Sáhara Occidental); en el pasaporte marroquí aportado al expediente, se hace constar que don L. B., nació en 1940 en T. A. (Marruecos); en el documento nacional de identidad y pasaporte español expedidos en 1969, se indica que don H. A. E. nació el 30 de diciembre de 1938 en S. I. y en el certificado de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de las P. G. C., se indica que la fecha de nacimiento de don L. B. es de 01 de enero de 1940.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 13 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Resolución de 17 de febrero de 2017 (92.ª)

Adquisición nacionalidad por consolidación.–1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. *Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Carlet (Valencia).

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Silla (Valencia) el 17 de febrero de 2015, Don A-M. A. S. nacido el 22 de junio de 1971 en E-A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declara que sus padres eran españoles de origen en el momento de su nacimiento, solicitando se promueva expediente gubernativo de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción al amparo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: certificado de empadronamiento del interesado expedido por el Ayuntamiento de Silla (Valencia); documento nacional de identidad bilingüe y tarjeta de asistencia sanitaria de su progenitor; pasaporte marroquí del solicitante; pasaporte español de su progenitor, con validez hasta el 14 de abril de 1971; certificación de familia expedida por el Juzgado Cheránico de A. el 14 de marzo de 1973, en la que se incluye al interesado como hijo; certificado de nacionalidad del promotor, expedido por la Delegación Saharaui para la Comunidad Valenciana; recibos MINURSO del interesado y de sus padres, con tachaduras el correspondiente a su progenitora en el apartado de año de nacimiento; extracto de acta de nacimiento del solicitante, traducida y legalizada, expedida por el Reino de Marruecos; extracto de la ficha antropométrica de antecedentes penales del interesado, traducida y legalizada, expedida por el Reino de Marruecos y certificado de concordancia de nombres del promotor, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos.

II

Remitidas las actuaciones al Registro Civil de Carlet (Valencia) y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del citado registro civil dicta auto con fecha 05 de mayo de 2015, por el que se estima que no concurren en el interesado los requisitos exigidos en la legislación para declarar su nacionalidad española.

III

Notificada la resolución, el solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución anulando el auto impugnado y se apruebe la autorización de la inscripción de nacimiento en base a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Código Civil.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil de Carlet (Valencia) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Silla (Valencia) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1971 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en los artículos 17 y 18 del Código Civil. La encargada del Registro Civil de Carlet (Valencia) dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África

ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado, dada la minoría de edad de éste cuando estuvo en vigor el decreto de 1976, estuviesen imposibilitados «de facto» para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, toda vez que el promotor ostenta la nacionalidad marroquí, de acuerdo con el pasaporte incorporado al expediente.

Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del Código Civil según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Carlet (Valencia).

Resolución de 10 de marzo de 2017 (28.^a)

Adquisición nacionalidad por consolidación.—*No es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora porque no se ha acreditado que los padres ostentasen la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.*

No es posible la opción por razón de patria potestad si la interesada no acredita su situación conforme al supuesto contemplado por el artículo 20.1.a) del Código Civil.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil Central con fecha 13 de mayo de 2013, Don A.-B. Y. M. formuló solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo de su hija S. A.-B. Y., alegando que nació el 23 de junio de 1996 en G.. Se acompaña como documentación: certificado de nacimiento de la interesada, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática; documento nacional de identidad, certificado literal español de nacimiento de su progenitor, con inscripción marginal de la adquisición de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción por resolución registral de 20 de enero de 2004, dictada por el encargado del Registro Civil de Lorca y volante de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de Pinoso (Alicante); certificado literal español de nacimiento de la progenitora de la interesada, Doña M. S.-B. L., con inscripción marginal de

adquisición de la nacionalidad española de origen por resolución registral dictada por el encargado del Registro Civil de Sueca de 16 de septiembre de 2010.

II

Por providencia de 16 de diciembre de 2013 se requiere al interesado para hacerle saber que deberá incoarse expediente gubernativo de nacimiento fuera de plazo de la interesada en el registro civil del domicilio, en el que habrá de quedar debidamente acreditado lugar exacto y fecha de nacimiento, filiación paterna y materna solicitada por reconocimiento expreso de ambos progenitores, en alguna de las formas admitidas en derecho y, que la interesada deberá optar a la nacionalidad española de conformidad con los requisitos de los artículos 20.1.a) y 2.b) del Código Civil.

III

Con fecha 02 de diciembre de 2014, Doña S. A. B. Y. comparece ante el encargado del Registro Civil de Pinoso (Alicante) solicitando inscripción de nacimiento fuera de plazo. Se aporta la siguiente documentación: documentos nacionales de identidad de sus progenitores; pasaporte argelino de la interesada, en el que consta que nació en Orán el 23 de junio de 1991; libro de familia de sus padres, expedido el 14 de septiembre de 1970; certificados de empadronamiento de la interesada y de sus progenitores, expedidos por el Ayuntamiento de Pinoso (Alicante); acta de prueba testifical de los progenitores de la solicitante, celebrada el 02 de diciembre de 2014 en el Registro Civil de Pinoso (Alicante), en la que indican que se vieron obligados a hacer constar que su hija nació en 1991 en el pasaporte argelino de la solicitante, en lugar de 1994, para que pudiera salir de Argelia; acta de prueba testifical de dos amigos de la familia, que alegan que la interesada tiene alrededor de veinte años, así como prueba testifical de fecha 05 de diciembre de 2014 médico que conoce a la interesada y a su familia, afirmando que no tiene veintitrés años, sino unos veinte años de edad.

IV

El ministerio fiscal emite informe en fecha 26 de junio de 2015 por el que, a la vista de las discrepancias existentes en la fecha de nacimiento de la interesada, que figura nacida en 1996 en la hoja de datos y en el certificado de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, en 1991 en el pasaporte argelino y en 1994 de acuerdo con la declaración de padres y testigos, se opone a la inscripción de nacimiento solicitada.

V

Con fecha 22 de julio de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta auto por el que desestima la inscripción de nacimiento de la interesada, toda vez que no se cumple el requisito del artículo 17 del Código Civil, ya que ha de entenderse que no ha adquirido en ningún momento la nacionalidad española, toda vez que de conformidad con lo resuelto por esta Dirección General de los Registros y del Notariado, en resolución de 15 de junio de 2009, los efectos de las adquisiciones de la nacionalidad española por los padres solo tienen lugar a partir de la fecha en que a los mismos se les declara con valor de

simple presunción y, por otra parte, no habiéndose acreditado la fecha de nacimiento de la interesada, se desconoce si cumple con los requisitos del artículo 20.1.a) y si está en el límite de edad que establece el artículo 20.2.c) del Código Civil, en lo que respecta al ejercicio del derecho de opción.

VI

Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revise su expediente, anulando la resolución anteriormente citada y se autorice la inscripción de su nacimiento fuera de plazo en el registro civil español.

VII

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, mediante solicitud formulada ante el Registro Civil Central solicitó la inscripción de nacimiento fuera de plazo de su hija. Por providencia del Registro Civil Central, se informa al solicitante que deberá incoarse expediente gubernativo de nacimiento fuera de plazo en el registro civil del domicilio. Instruido el correspondiente expediente, por auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento de la interesada, al no cumplirse el requisito establecido en el artículo 17 del Código Civil y no encontrarse acreditada la fecha de nacimiento de la misma, a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 20.1.a) y 2.c) del Código Civil. Frente al citado auto se interpone recurso por la promotora que constituye el objeto del presente expediente.

III. De acuerdo con la documentación integrante del expediente, el progenitor de la interesada adquiere la nacionalidad española de origen con valor

de simple presunción con efectos de 20 de enero de 2004, fecha de la resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Lorca y la progenitora, con efectos de 16 de septiembre de 2010, fecha de la resolución registral dictada por el encargado del Registro Civil de Sueca.

IV. De este modo, no se encuentra acreditado que los progenitores de la interesada fuesen españoles al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17.1.a) del Código Civil según redacción establecida por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, aplicable al caso examinado, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

Por otra parte, tampoco procede la opción a la nacionalidad española de la interesada, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, dadas las discrepancias en cuanto a la fecha de nacimiento de la solicitante, ya que en la hoja de declaración de datos y en el certificado expedido por la República Árabe Saharaui Democrática se hace constar que nació en 1996, en el pasaporte argelino consta el año 1991 y los padres y testigos manifiestan que nació en 1994, no pudiéndose determinar si la interesada cumple los requisitos establecidos en el artículo 20.1.a) y 2.c) para el ejercicio de la opción.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de abril de 2017 (45.^a)

Adquisición nacionalidad por consolidación.—1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. *Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.*

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Doña H. K. (H. M. M. A. U. Q.), nacida el 18 de marzo de 1974 en E-A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 07 de febrero de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* de la interesada, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que interesa se inicie expediente para declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española, por auto de fecha 29 de junio de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadana saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV

Notificada la resolución la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se le declare la nacionalidad española con valor de simple presunción en base a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Código Civil, al considerar que nació en territorio español e hija de padres españoles. Por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 17 de marzo de 2017 (41.ª), se desestima la pretensión de inscripción fuera de plazo del nacimiento de la interesada, por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla y se determina la continuación de la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal.

V

Con fecha 27 de octubre de 2016, tiene entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia oficio del Registro Civil Central por el que remite documentación del expediente de referencia, en particular, diligencia de constancia de fecha 04 de marzo de 2016 dictada por el encargado del Registro Civil de Tudela, por la que pone en conocimiento que a instancias del ministerio fiscal se ha iniciado expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española de la interesada, acordándose dar traslado del mismo a la interesada para que alegue lo que a su derecho convenga, no formulando alegaciones al expediente dentro del plazo legalmente establecido.

VI

Por auto de fecha 14 de octubre de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), se desestima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal de que se declare con valor de simple presunción que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española.

VII

Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación de la resolución impugnada en el sentido de declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, no resultando aplicables los artículos 17 y 18 del Código Civil, no encontrándose probado que sus progenitores hayan ostentado la nacionalidad española en el momento en que estuvo en vigor el decreto de 1976, ni con anterioridad a dicha fecha, ni consta que no hubiesen podido optar a la nacionalidad española por encontrarse en un campo de refugiados, que les haya impedido comparecer ante las autoridades pertinentes al ejercicio de dicha opción, ni acredita la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.

VIII

Notificada la promotora, formula alegaciones oponiéndose al recurso interpuesto por el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones,

entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. La promotora, nacida el 18 de marzo de 1974 en E-A. (Sáhara Occidental) solicitó la declaración de su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela dictó auto el 07 de febrero de 2013, acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* a la interesada. Solicitada ante el Registro Civil Central la inscripción de nacimiento fuera de plazo y notificado el ministerio fiscal, este emite informe desfavorable, interesando se inicie nuevo expediente de cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor. Por auto de 29 de junio de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestimó la inscripción de nacimiento de la promotora. Interpuesto recurso por la interesada, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó resolución el 17 de marzo de 2017 desestimando la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla y acordando la continuación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal, que finalizó por auto de 14 de octubre de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) por el que se desestimó la petición realizada a instancia del ministerio público. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso frente al auto anteriormente mencionado, solicitando se revoque la resolución impugnada y se declare que a la promotora no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.^o LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del Registro Civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las con-

fusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los *stati* entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto,

finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales de la interesada, por ser la misma menor de edad cuando estuvo en vigor el decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil. Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre o la madre de la interesada fueran españoles al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado y tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí, por lo que no se encuentra en situación de apatridia.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que a la promotora no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 23 de junio de 2017 (27.^a)

Adquisición nacionalidad por consolidación.–*No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante comparecencia ante el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) el 15 de octubre de 2012, Don M. S. B., nacido el 5 de junio de 1974 en O. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino aportado al expediente, y en L., de acuerdo con el recibo MINURSO y documentación saharauí aportada al expediente, solicita se le declare, con valor de simple presunción, la nacionalidad española en aplicación del artículo 17 del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: tarjeta de permiso de residencia temporal; pasaporte argelino; recibo MINURSO con enmiendas; volante de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de T.; certificados de nacionalidad, de residencia en los campamentos de refugiados saharauíes y de parentesco, expedidos por la República Árabe Saharaí Democrática; fotocopia del documento nacional de identidad saharauí de la madre y del padre, encontrándose ilegible este último y recibo MINURSO del progenitor.

II

Ratificado el interesado, previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) dictó auto el 15 de noviembre de 2012 declarando con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

III

Con fecha 12 de mayo de 2015, el ministerio fiscal insta nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de simple presunción de que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, dictándose auto por el encargado del Registro Civil de Tudela con fecha 6 de noviembre de 2015 por el que se desestima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal.

IV

Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revoque el auto recurrido y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, indicando que no procede la aplicación del artículo 17 del Código Civil, toda vez que los nacidos en el territorio del Sáhara, cuando éste era posesión española, no eran propiamente nacionales españoles, sino súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española y que, por otra parte, el promotor no acredita que él o sus progenitores hayan ostentado en algún momento la nacionalidad española cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976 ni con anterioridad a dicha fecha, ni cumple lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil, que exige la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, ya que en el momento en que España abandonó el territorio del Sáhara tenía dos años de edad y no ostenta ninguna documentación que le acredite en posesión de la nacionalidad española y le proporcione una apariencia de haber ostentado el tiempo exigido la nacionalidad española, no cumpliendo lo dispuesto en dicho precepto legal.

V

Notificado el interesado, no formula alegaciones al recurso interpuesto por el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 18 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008, 2-4.^a de marzo de 2009, 16 (3.^a) de junio de 2009 y 22-3.^a de marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado en el Registro Civil Tudela (Navarra) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1974 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 del Código Civil. El encargado del registro dictó auto estimando la petición del interesado y declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio. Iniciado expediente a instancia del ministerio fiscal a fin de que se declare que el interesado no ostenta la nacionalidad espa-

ñaola con valor de simple presunción, es desestimado por auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela con fecha 6 de noviembre de 2015.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de

independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente caso, el promotor no ha acreditado que cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, sus representantes legales, por ser el interesado menor de edad en dicho momento, estuviesen imposibilitados para optar a la nacionalidad española por haber permanecido en los territorios ocupados, lo que requiere pruebas fehacientes. De otro lado, no está probada a través de la documentación la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 CC, en el que se indica que la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado, toda vez que ni nació en territorio español, ni ha ostentado con posterioridad ninguna documentación como español, ostentado pasaporte marroquí.

Por otra parte, no consta la nacionalidad española de su padre o madre al tiempo de su nacimiento para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado; ni ha nacido en España, para la aplicación retroactiva del artículo 17.3 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 51/1982.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 7 de julio de 2017 (7.ª)

Adquisición nacionalidad por consolidación.—1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don R. M., nacido el 20 de octubre de 1986 en A., de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 20 de febrero de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que interesa se inicie expediente para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, por auto de fecha 17 de octubre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadana saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV

Por escrito de fecha 15 de mayo de 2015, el ministerio fiscal insta al Registro Civil de Tudela, se inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de simple presunción, de que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, toda vez que el promotor no residió en territorio nacional el tiempo necesario para consolidar una nacionalidad que no acredita, puesto que nada aporta en este sentido, ni nació en territorio español y ello atendiendo a la fecha de su nacimiento, ni evidentemente es apátrida, pues aportó la posesión de la nacionalidad marroquí.

V

Por providencia de 22 de junio de 2015, dictada por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, y visto que no se ha podido localizar y, por tanto, notificar al interesado el auto de 17 de octubre de 2014, y dado que por el Registro Civil de Tudela se ha incoado expediente de cancelación a instancia del ministerio fiscal adscrito a dicho registro, de presunción de nacionalidad española del interesado con el número 987/15, se archiva provisionalmente el expediente de inscripción de nacimiento a la espera de recibir la resolución recaída en dicho expediente

VI

Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se acuerda dar traslado al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga, no efectuándose alegaciones por el mismo dentro del plazo otorgado.

Por auto de fecha 18 de agosto de 2015, dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), se estima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal, y se declara con valor de simple presunción que al interesado no le corresponde la nacionalidad española.

VII

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto impugnado, alegando que al haberle sido ya reconocida la nacionalidad española con valor de simple presunción, en auto firme, el mismo no puede ser revocado posteriormente, que le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción y que la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1984 y el Derecho Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, establecen el derecho del ser humano a tener una nacionalidad.

VIII

Notificado el ministerio fiscal, interesa la confirmación del auto recurrido por no corresponder al solicitante la nacionalidad española en base a los artículos 17 y 18 del Código Civil y, en relación con las alegaciones del interesado, relativas a la imposibilidad de modificación del auto de 2 de febrero de 2013, reitera la doctrina de esta dirección general, según la cual es un principio básico de la legislación registral el lograr la debida concordancia entre el registro civil y la realidad, por lo que, mientras subsista el interés público, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su fundamento en HECHOS descubiertos posteriormente que no pudieron ser tenidos en cuenta en la anterior resolución. El encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, nacido el 20 de octubre de 1986 en A. (Sáhara Occidental) solicitó la declaración de su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela dictó auto el 20 de febrero de 2013, acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* al interesado. Solicitada ante el Registro Civil Central la inscripción de nacimiento fuera de plazo, previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que interesa se inicie nuevo expediente de cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor, por auto de 17 de octubre de 2014 dictado por el

encargado del citado registro se desestimó la inscripción de nacimiento del promotor.

Dicho auto no pudo ser notificado al interesado, al no haber sido posible su localización, por lo que el Registro Civil Central archivó provisionalmente el expediente de inscripción de nacimiento, al haberse incoado en el Registro Civil de Tudela expediente de cancelación a instancia del ministerio fiscal. Dicho expediente concluye por auto de 18 de agosto de 2015, dictado por el encargado Registro Civil de Tudela, estimando la petición realizada a instancia del ministerio fiscal, y declarando que el interesado no ostenta la nacionalidad española con valor de simple presunción. Frente a dicho auto se interpone recurso por el solicitante, que es el objeto del presente expediente.

III. En primer lugar, y respecto de lo alegado por el interesado en su escrito de recurso, en el que manifiesta que no es posible la modificación del auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela, por el que se le declara la nacionalidad española con valor de simple presunción, se indica que en el ámbito del registro civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos ocupa.

IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación

objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo

expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, el interesado nace el 20 de octubre de 1986, es decir, con posterioridad a la salida de España del territorio del Sáhara Occidental. Aparte de ello, el interesado no ha ostentado nunca documentación española, por lo que no se acreditan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil.

Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del Código Civil según redacción establecida por Ley 51/1982, de 13 de julio, aplicable al caso examinado y tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí, por lo que no se encuentra en situación de apatridia.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (23.ª)

Adquisición nacionalidad por consolidación.–1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. *Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que la madre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Eibar (Guipúzcoa).

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Eibar (Guipúzcoa) el 5 de agosto de 2015, Don N. M. M. S. nacido el 10 de octubre de 1988 en E., de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, solicita se promueva expediente gubernativo de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción al amparo de lo dispuesto en los artículos 17.1.c) del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: certificado de nacimiento del interesado, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática; documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario del solicitante; documento nacional de identidad y certificación literal española de nacimiento de su madre, D.^a A. M. B., nacida el 10 de abril de 1970 en S. (Sáhara Occidental), con inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción por resolución registral de 21 de enero de 2007; certificado de empadronamiento del promotor expedido por el Ayuntamiento de Eibar, con fecha de alta en el municipio de 2 de mayo de 2013; certificados de ciudadanía saharauí del interesado y de su madre, expedidos por la Delegación Saharaui en Euskadi y certificado de paternidad, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática.

II

Ratificado el interesado, y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Eibar dicta auto con fecha 20 de noviembre de 2015, por el que desestima la petición formulada por el promotor, declarando que no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

III

Notificada la resolución, el solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución anulando el auto impugnado y se apruebe la autorización de su inscripción de nacimiento, alegando que siendo natural del Sáhara y sin posibilidad alguna de ejercitar cualquier tipo de derecho al encontrarse en campos de refugiados, y dado que su madre obtuvo la nacionalidad española y, por tanto, es española a todos los efectos, considera que se le debe atribuir dicha nacionalidad.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Eibar (Guipúzcoa) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Eibar (Guipúzcoa) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1988 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17.1.c) del Código Civil. La encargada del Registro Civil de Eibar (Guipúzcoa) dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.^o LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la

cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los *stati* entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca —recalcaba— ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, el interesado nace en 1988, más de doce años después de la salida de España del territorio del Sáhara y de la finalización del plazo establecido en el Decreto de 1976, para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Por tanto, no puede acreditarse que el promotor naciera en España, para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, toda vez que el promotor no ha ostentado nunca documentación española, ostentando la nacionalidad argelina, tal como se hace constar en el documento de identificación de extranjeros-régimen comunitario del mismo.

Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que la madre del interesado fuera española al tiempo del nacimiento del promotor, para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, de acuerdo con la redacción establecida según la Ley 51/1982, de 13 de julio, aplicable al caso examinado, ya que la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción a la progenitora, tiene efectos desde la fecha en que se le concede por resolución registral del encargado del Registro Civil de Vitoria, de 21 de enero de 2007, con posterioridad, por tanto, a la fecha de nacimiento del interesado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Eibar (Guipuzcoa).

Resolución de 27 de octubre de 2017 (40.^a)

Adquisición nacionalidad por consolidación.—1. *No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. *Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.*

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don L. G., nacido en 1973 en A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de julio de 2012, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central

III

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, en el que interesa se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado, por auto de fecha 1 de agosto de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV

Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se determine la inscripción de la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado, al considerar que nació en territorio español e hijo de padres españoles.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 4 de julio de 2017 y el encargado del Registro Civil Central se

ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

Por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 22 de septiembre de 2017 (33.ª), se desestima el recurso interpuesto por el promotor y se confirma el auto apelado.

VI

Incoado expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española del interesado en el Registro Civil de Tudela, por auto de fecha 6 de abril de 2017, dictado por el encargado del citado registro, se desestima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal de que se declare con valor de simple presunción que al interesado no le corresponde la nacionalidad española.

VII

Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación de la resolución impugnada en el sentido de declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, no resultando aplicables los artículos 17 y 18 del Código Civil, al no encontrarse probado que sus progenitores hayan ostentado la nacionalidad española en el momento en que estuvo en vigor el Decreto de 1976, ni con anterioridad a dicha fecha, que les haya impedido comparecer ante las autoridades pertinentes al ejercicio de dicha opción, ni acredita la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.

VIII

Notificado el interesado, formula alegaciones dentro del plazo establecido, oponiéndose al recurso interpuesto por el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3.ª de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 6-3.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006.

II. El promotor, nacido en 1973 en A. (Sáhara Occidental), solicitó la declaración de su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela dictó auto el 24 de julio de 2012, acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* al interesado. Solicitada ante el Registro Civil Central la inscripción de nacimiento fuera de plazo y notificado el ministerio fiscal, este emite informe desfavorable, interesando se inicie nuevo expediente de cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor.

Por auto de 1 de agosto de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestimó la inscripción de nacimiento del promotor. Interpuesto recurso por el interesado, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó resolución el 22 de septiembre de 2017 (33.^a) desestimando la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla, continuando la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal, que finalizó por auto de 6 de abril de 2017 dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) por el que se desestimó la petición realizada a instancia del ministerio público. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso frente al auto anteriormente mencionado, solicitando se revoque la resolución impugnada y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del Registro Civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva

que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia admi-

nistradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado, por ser el mismo menor de edad cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados *de facto* para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.

Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre o la madre del interesado fueran españoles al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado y tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí, por lo que no se encuentra en situación de apatridia.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 27 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (28.^a)

Adquisición nacionalidad por consolidación.–1. *No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

2. *Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.*

3. *No es posible la opción si el interesado no acredita su situación conforme al supuesto contemplado en el apartado b) del artículo 20.1 del Código Civil.*

4. *No es posible inscribir el nacimiento del interesado por recuperación de la nacionalidad española, al no haber ostentado nunca la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, adquisición de la nacionalidad española por opción y recuperación de la nacionalidad española, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil Único de Madrid el 26 de octubre de 2015, Don L. E. (A. L.), declara que nació el 20 de septiembre de 1972 en B. (Sáhara Occidental), que es hijo de S. A., nacido en I. (Sáhara Occidental) en 1932, con documento de identidad español y de nacionalidad española desde su nacimiento, solicitando tres peticiones alternativas: a) declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción por aplicación del artículo 17.1.a) del Código Civil como hijo de español y su consolidación conforme al artículo 18 del Código Civil, la adquisición de la nacionalidad española por opción, conforme al artículo 20.1.b) del Código Civil y la recuperación de la nacionalidad española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: certificado de familia, expedido por el Juzgado Cheránico de Aaiún; certificado de concordancia entre los nombres de L. U. S. A. U. L. y E. L., expedido por el Reino de Marruecos; copia de permiso de residencia de larga duración; volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Madrid; hoja de libro de familia español en el que como hijo seis consta L. U. S. U. L.; certificado expedido por la Unidad de Documentación de Españoles y Archivo de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de fecha 11 de mayo de 2009, en relación con el documento de identidad saharauí número a nombre de S. L. H. y certificado de nacimiento del mismo, inscrito en el Juzgado Cheránico de Aaiún (Sáhara), recibos MINURSO del interesado y de sus padres; resolución de ejecución de sentencia de la Subdelegación del Gobierno de Jaén, en relación con la concesión de la autorización de residencia de larga duración al interesado y páginas del libro de familia núm. expedido por el Gobierno General de Sáhara, en el que consta el matrimonio entre S. U. L. U. H. con H. U. H. U. T.

Consta como antecedente solicitud previa de nacionalidad española con valor de simple presunción, formulada por el interesado ante el Registro Civil Único de Madrid, con fecha 5 de noviembre de 2014. Tramitado en forma el expediente, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, finalizó por auto dictado por la encargada del Registro Civil Único de Madrid de fecha 11 de mayo de 2015, por el que se desestimó la solicitud formulada por el interesado, al no resultar acreditados los presupuestos legalmente exigidos por el artículo 18 del Código Civil. Dicho auto fue notificado al interesado, sin que conste que frente al mismo se hubiese interpuesto recurso.

II

Por providencia de fecha 2 de noviembre de 2015, dictada por la encargada del Registro Civil Único de Madrid, se acuerda incoar expediente de declaración con valor de simple

presunción sobre la nacionalidad española del interesado, en base al artículo 96 de la Ley del Registro Civil, dado que en las actuaciones registrales no se aplica el principio de cosa juzgada, y que se ha aportado documental nueva que no se unió al expediente tramitado anteriormente, requiriendo al promotor a fin de que aporte la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Jaén, de 23 de octubre de 2013, en cumplimiento de la cual se expidió al promotor autorización de residencia de larga duración, documentación que fue aportada por el interesado.

III

Con fecha 18 de abril de 2016, el ministerio fiscal emite informe desfavorable a las pretensiones del interesado, indicando que se considera que no han cambiado las circunstancias por las que se denegó la declaración de la nacionalidad española al solicitante, no procediendo, por tanto, la consolidación de la nacionalidad española al amparo de lo previsto en el artículo 18 del Código Civil. Por otra parte se indica que no concurren en el presente supuesto los requisitos exigidos en el artículo 17.1.c) del Código Civil de haber nacido en España, puesto que el interesado manifiesta haber nacido en el Sáhara, y tampoco consta acreditada la filiación del promotor respecto de un nacional español (artículo 17.1.a) CC), por lo que tampoco procede la opción a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil. Por último, no está probado que el promotor haya ostentado con anterioridad la nacionalidad española, requisito necesario para poder recuperarla, tal como establece el artículo 26 del Código Civil.

IV

Con fecha 22 de abril de 2016, la encargada del Registro Civil Único de Madrid, dicta auto por el que acuerda que no procede declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del promotor, ni su consolidación, al no resultar acreditada su filiación respecto de progenitor español en el momento de su nacimiento, ni concurrir los presupuestos legalmente exigidos por el artículo 18 del Código Civil; que no procede declarar que el promotor tenga derecho a optar por la nacionalidad española al no concurrir los presupuestos del artículo 20.1.b) del Código Civil y que tampoco procede la recuperación de la nacionalidad española, al no acreditarse que la hubiese ostentado anteriormente.

V

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revoque la resolución recurrida y se le declare la presunción de la nacionalidad española de origen y subsidiariamente, se le reconozca la nacionalidad española por opción.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil Único de Madrid remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 18, 20 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1.^a de enero, 3-1.^a; 4-4.^a de febrero, 2-4.^a, 4-3.^a, 5 y 14-3.^a de marzo, 15-3.^o de abril, 28 de mayo, 1-4.^a y 27-3.^a de septiembre, 3-1.^a de octubre de 2005; 28-4.^a de febrero, 18 y 21-4.^a de marzo, 14-5.^a y 17-1.^a de julio, 1-1.^a, 6-3.^a, 7-2.^a y 9-1.^a de septiembre de 2006.

II. El promotor, nacido en 1972 en B. (Sáhara Occidental) mediante solicitud formulada ante el Registro Civil Único de Madrid solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por aplicación del artículo 17.1.a) del Código Civil como hijo de español y su consolidación conforme al artículo 18 del Código Civil o la adquisición de la nacionalidad española por opción, conforme al artículo 20.1.b) del Código Civil o la recuperación de la nacionalidad española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Código Civil. La encargada del Registro Civil Único de Madrid dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

Consta como antecedente solicitud previa de nacionalidad española con valor de simple presunción, formulada por el interesado ante el Registro Civil Único de Madrid, que fue desestimada por auto firme dictado por la encargada del citado registro en fecha 11 de mayo de 2015, al no resultar acreditados los presupuestos legalmente exigidos por el artículo 18 del Código Civil.

III. En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en HECHOS o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión. En el caso presente, tal como se declara en la providencia dictada por la encargada del Registro Civil Único de Madrid de fecha 2 de noviembre de 2015, se ha aportado al expediente documental nueva que no se unió al expediente tramitado con anterioridad.

IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.^o LRC y 338 RRC) que decide en primera instancia el encargado del Registro Civil del domicilio (*cf.* art. 335 RRC).

V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos.

tos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia

del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado, por ser éste menor de edad cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitado «de facto» para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados.

Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, no considerando acreditada la posesión de la nacionalidad española por el promotor por el período requerido por el citado artículo del Código Civil.

Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resultan de aplicación el artículo 17 del Código Civil según la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

El artículo 20.1.b) del Código Civil dispone que tienen derecho a optar a la nacionalidad española «aquellas (personas) cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España». En el presente caso, no se encuentra acreditado que los progenitores del interesado, sean originariamente españoles, ni nacidos en España.

Asimismo, no se encuentra acreditado en el expediente que el interesado hubiera ostentado en algún momento la nacionalidad española, requisito establecido en el artículo 26 del Código Civil para poder recuperarla.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (20.ª)

Adquisición nacionalidad por consolidación.—*No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.*

Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Tudela (Navarra) el 14 de octubre de 2015, Don L. J., nacido en 1968 en E. A. (Sáhara Occidental), de nacionalidad marroquí, de acuerdo con el pasaporte marroquí aportado al expediente, declara que nació en el Sáhara cuando era territorio español, solicitando se le declare, con valor de simple presunción, la nacionalidad española en aplicación del artículo 17 del Código Civil.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: copia de permiso de residencia de larga duración; pasaporte marroquí, volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Tudela con fecha de alta en el padrón de 14 de octubre de 2015; certificado de nacimiento a nombre de Don L. M. M. S. U. M., inscrito en el Juzgado Cheránico de Aaiún (Sáhara); extracto de inscripción de nacimiento, expedida por el Reino de Marruecos; certificado de concordancia de nombres expedido por el Reino de Marruecos; recibo MINURSO a nombre de L. M. S. E., nacido en 1968 con tachaduras en el apartado de subfracción; certificado de nacimiento inscrito en el Juzgado Cheránico de Aaiún (Sáhara) de la madre del solicitante, D.ª. I. S. L.; certificado emitido por la Unidad Central de Documentación de Españoles del Ministerio del Interior, en relación con el documento saharauí

número a nombre de la Sra. S. L. y certificado literal español de nacimiento de un hermano del interesado, con inscripción marginal de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción.

II

Ratificado el interesado, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) dictó auto el 3 de noviembre de 2015 declarando con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

III

Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revoque el auto recurrido y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, indicando que no procede la aplicación del artículo 17 del Código Civil, toda vez que los nacidos en el territorio del Sáhara, cuando éste era posesión española, no eran propiamente nacionales españoles, sino súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española y que, por otra parte, el promotor o sus progenitores no acreditan la imposibilidad de haber ejercitado el derecho de opción a la nacionalidad española en el plazo de un año establecido en el Decreto 2258/1976. Por otra parte, al promotor, nacido en 1968 no puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil, que exige la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, como causa de consolidación de la nacionalidad española, dado que en el momento en que España abandonó el territorio del Sáhara, el solicitante contaba ocho años de edad.

IV

Notificado el promotor mediante edicto, no formula alegaciones al recurso interpuesto por el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.ª de septiembre, 20-2.ª y 4.ª y 22-5.ª de diciembre de 2006; 12-3.ª y 4.ª de enero, 10 de febrero, 5-2.ª de marzo, 21 de abril, 21-6.ª de mayo, 11-1.ª de junio y 20-2.ª de diciembre de 2007; 3-1.ª, 28-1.ª y 29-3.ª de enero, 22-5.ª y 29-6.ª de

febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008, 2-4.^a de marzo de 2009, 16 (3.^a) de junio de 2009 y 22-3.^a de marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado en el Registro Civil Tudela (Navarra) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1968 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 del Código Civil. El encargado del registro dictó auto estimando la petición del interesado y declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio, interponiendo recurso el ministerio fiscal oponiéndose a la declaración de nacionalidad española del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º L.R.C. y 338 R.R.C.), que decide en primera instancia el encargado del Registro Civil del domicilio (*cf.* art. 335 R.R.C.).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una expli-

cación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente caso, el promotor no ha acreditado que cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, sus representantes legales, por ser el interesado menor de

edad en dicho momento, estuviesen imposibilitados para optar a la nacionalidad española por haber permanecido en los territorios ocupados, lo que requiere pruebas fehacientes. De otro lado, no está probada a través de la documentación la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 CC, en el que se indica que la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado, toda vez que ni nació en territorio español, ni ha ostentado con posterioridad ninguna documentación como español, ostentado pasaporte marroquí.

Por otra parte, no consta la nacionalidad española de su padre o madre al tiempo de su nacimiento para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado; ni ha nacido en España, para la aplicación retroactiva del artículo 17.3 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 51/1982.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 13 de enero de 2017 (7.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (88.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (23.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 7 de abril de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 7 de abril de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 12 de abril de 2017 (11.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 21 de abril de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 21 de abril de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 28 de abril de 2017 (22.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 16 de junio de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 16 de junio de 2017 (45.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 16 de junio de 2017 (46.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 23 de junio de 2017 (30.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 7 de julio de 2017 (9.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 7 de julio de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 14 de julio de 2017 (11.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 14 de julio de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 14 de julio de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 14 de julio de 2017 (14.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 19 de julio de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 21 de julio de 2017 (12.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 21 de julio de 2017 (13.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 21 de julio de 2017 (16.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 28 de julio de 2017 (24.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 28 de julio de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 28 de julio de 2017 (40.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (52.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (36.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (37.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (35.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 11 de octubre de 2017 (1.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (32.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (18.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (19.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (21.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (38.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (39.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (34.^a). Adquisición nacionalidad por consolidación.

3.3 Adquisición de la nacionalidad española por opción

3.3.1 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR PATRIA POTESTAD [ART. 20.1.A) CÓDIGO CIVIL]

Resolución de 24 de enero de 2017 (37.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—*No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 08 de julio de 2014, en el Registro Civil de Lleida, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la cual don E. T. T., nacido el 01 de enero de 1996 en A. (Gambia), de nacionalidad gambiana, opta por la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.c) del Código Civil, prestando juramento de fidelidad a S.M. El Rey, obediencia a la Constitución y demás leyes españolas y renunciando a su nacionalidad anterior.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; optante.- documento de identificación de extranjeros, régimen comunitario; pasaporte gambiano; certificado de nacimiento, traducido y legalizado, expedido por la República de Gambia; certificado padronal colectivo de inscripción, expedido por el Ayuntamiento de A. (Lleida); presunto padre don S. T. T.- documento nacional de identidad; certificado literal español de nacimiento con

inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 11 de abril de 2013 y certificado de matrimonio con doña H. T., celebrado en Gambia el 15 de mayo de 1991.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 04 de noviembre de 2014 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre del optante, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

III

Con fecha 08 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del promotor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que en el expediente de nacionalidad por residencia del presunto padre, éste no mencionó en modo alguno al optante, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, era menor de edad.

IV

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción alegando que el motivo de que su padre no le mencionara en su expediente de nacionalidad por residencia, obedece a que no se le indicó la necesidad de mencionar a todos sus hijos y que la falta de mención pudiera suponer algún inconveniente y que se aportó al expediente un certificado de nacimiento debidamente legalizado por las autoridades españolas, del que en ningún momento se ha cuestionado su legalidad, por lo que debería presumirse su autenticidad.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de

2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los HECHOS de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 11 de abril de 2013 y pretende el promotor, asistido por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación gambiana, en la cual se hace constar que nació el 01 de enero de 1996 en A. (Gambia), si bien la inscripción de nacimiento se extendió dieciocho años después, el 24 de abril de 2014 y sin que conste la declaración del padre o madre del interesado.

IV. Se solicita la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de un hijo nacido el día 01 de enero de 1996 en Gambia al que el presunto padre no mencionó en modo alguno en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, éste era menor de edad, toda vez que el artículo 220 del RRC, establece que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: «... 2.º Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad».

V. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado el presunto padre del interesado la existencia de éste en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (*cf.* art. 20 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 24 de enero de 2017 (38.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—*No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 24 de febrero de 2015, el encargado del Registro Civil de Sevilla, dicta auto por el que autoriza a don M. M. K., con poder notarial de la madre del menor, doña M. M., para que pueda optar a la nacionalidad española en nombre de su hijo menor de catorce años S.-O. S. M., nacido el de 2003 en D. (Senegal).

Con fecha 16 de marzo de 2015, en el Registro Civil de Sevilla, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2. a) del Código Civil, por la que el Sr. M. K., opta en nombre de su presunto hijo a la nacionalidad española, aportando poder notarial de la madre del menor autorizando el trámite que se realizaba en dicho acto.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; optante.- certificado local de nacimiento, traducido y legalizado, expedido por la República de Senegal; presunto padre.- certificado literal español de nacimiento, con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 12 de enero de 2009; madre.- autorización notarial de la madre del menor para que su hijo adquiera la nacionalidad española.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 5 de junio de 2015 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre del optante, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

III

Con fecha 28 de julio de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del interesado, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que en el expediente de nacionalidad por residencia

del presunto padre, éste no mencionó en modo alguno al optante, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, era menor de edad.

IV

Notificada la resolución, el presunto padre del menor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción a su hijo, alegando que el hecho de que no mencionaría a su hijo en su expediente de nacionalidad española por residencia no puede ser obstáculo para que se le reconozca su inscripción de nacimiento.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargo del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los HECHOS de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española « (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 12 de enero de 2009 y pretende el promotor, asistido por ella, inscribir el nacimiento del menor por medio de una certificación senegalesa, en la cual se hace constar que nació el de 2003 en D. (Senegal).

IV. Se solicita la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de un hijo nacido el de 2003 en D. (Senegal) al que el presunto padre no mencionó en modo alguno en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado ya que a la fecha de la declaración efectuada

por el padre, éste era menor de edad, toda vez que el artículo 220 del RRC, establece que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: «... 2.º Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad».

V. En esta situación no puede prosperar el expediente, al no haber mencionado el presunto padre del interesado la existencia de éste en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (*cf.* art. 20 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (48.ª)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—*No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2011, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación dominicana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 16 de abril de 2013, en el Registro Civil de Arrecife (Las Palmas) se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la que Doña A. S. S., nacida el 17 de enero de 1995 en S. C. (República Dominicana), opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.c) del Código Civil, prestando juramento de fidelidad

al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y no renunciando a su nacionalidad anterior. Adjunta como documentación: tarjeta de permiso de residencia de la interesada por reagrupación familiar; pasaporte dominicano de la solicitante; certificado de nacimiento de la interesada apostillado, expedido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana; certificado de empadronamiento de la interesada, expedido por el Ayuntamiento de Arrecife; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del presunto progenitor de la interesada, Don M-A. S. A., nacido el 29 de octubre de 1966 en B. (República Dominicana), con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 13 de enero de 2011 y permiso de residencia de la madre de la solicitante.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 17 de marzo de 2014 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre de la optante, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

III

Con fecha 23 de abril de 2014, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de la interesada, toda vez que el presunto padre no mencionó a la optante en su expediente de nacionalidad española por residencia, como estaba obligado, toda vez que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, ésta era menor de edad.

IV

Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción, alegando que a dos de sus hermanos, menores de edad, se les ha reconocido la nacionalidad española por opción.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las

Resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 13 de enero de 2011 y pretende la promotora, asistida por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación dominicana en la cual se hace constar que ésta nació el 17 de enero de 1995 en S. C. (República Dominicana), constatándose que en el expediente de nacionalidad por residencia, el presunto padre de la optante manifestó en fecha 26 de diciembre de 2007, mediante solicitud formulada ante el encargado del Registro Civil de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que su estado civil era de casado con Doña M-L. A. M., de nacionalidad española, no declarando la existencia de hijos menores de edad a su cargo, no mencionando en ningún momento a la optante, que en dicha fecha era menor de edad. En el presente expediente, se solicita la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de una hija nacida el 17 de enero de 1995, a la que el presunto padre no mencionó en modo alguno en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, ésta era menor de edad, toda vez que el artículo 220 del RRC, establece que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: «... 2.º Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad»,

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente por no haber mencionado el presunto padre de la optante la existencia de ésta en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español (*cf.* art. 20 CC). Por otra parte, en relación con la alegación formulada por la interesada, de reconocimiento de la nacionalidad española por la opción establecida en el artículo 20 del Código Civil a dos de sus her-

manos, se pondrá en conocimiento del órgano competente, a los efectos oportunos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 17 de febrero de 2017 (50.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.— *Procede la inscripción en el registro civil español del nacido en Colombia en 1994 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1a) CC porque está suficientemente acreditada su filiación española y cumple los requisitos exigidos por el mencionado artículo.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (Colombia).

HECHOS

I

Mediante solicitud presentada el 21 de diciembre de 2012 en el Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá, Don N-A. P. R., de nacionalidad colombiana, nacido el 10 de agosto de 1994 en C., A. (Colombia) solicitó la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en el registro civil español, en aplicación del artículo 20.1a) del Código Civil, al ostentar su padre, Don H. de J. P. L. la nacionalidad española por residencia. Aportaba la siguiente documentación: cédula de identidad colombiana del interesado; certificado colombiano de nacimiento del solicitante apostillado, en el que se hace constar que es hijo extramatrimonial de Doña O-L. R. T. y de Don H. de J. P. L., habiendo sido reconocido por el progenitor el 30 de julio de 1999; pasaporte español y certificado literal español de nacimiento del progenitor del interesado, nacido el 15 de febrero de 1959 en A. (Colombia) con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 5 de mayo de 2011

II

Con fechas 11 de junio de 2013 tiene lugar en el registro civil consular audiencia reservada a la madre del interesado y el 01 de agosto de 2013 tiene lugar la audiencia reservada al padre del solicitante en el Registro Civil Único de Madrid, a fin de determinar la procedencia de la paternidad.

III

Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 19 de junio de 2015 la encargada del registro civil consular dicta acuerdo por el que se desestima la inscripción de nacimiento del interesado como hijo de nacional español.

IV

Notificada la resolución, la madre del interesado, con ratificación de éste, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que la inscripción de nacimiento en el registro civil de nacimiento colombiano es el único documento válido para acreditar la patria potestad y solicitando se estime la opción a la nacionalidad española para su hijo.

V

La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que emitió un informe desestimatorio. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 3-5.^a de mayo, 23-6.^a de junio, 17-3.^a de julio, 2-2.^a de julio y 20-2.^a de noviembre de 2006; 16-6.^a de mayo y 28-5.^a de noviembre de 2007; 27-2.^a de mayo, 28-7.^a de noviembre y 4-6.^a de diciembre de 2008; 25-10.^a de febrero y 9-2.^a de marzo de 2009; 19-17.^a de noviembre de 2010 y 13-28.^a de diciembre de 2013.

II. Se pretende la inscripción de nacimiento en el registro civil español, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, del nacido en Colombia el 10 de agosto de 1994, hijo de un ciudadano colom-

biano de origen que adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos desde el 05 de mayo de 2011. La encargada del registro denegó la pretensión por no considerar acreditada la relación de filiación con el ciudadano español.

III. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23 LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85 RRC).

IV. La denegación se ha basado en este caso en la sospecha, por parte de la encargada del registro, de que el ciudadano español no es el padre biológico del no inscrito pero del examen del expediente no se desprenden evidencias que permitan dudar en este caso de la veracidad del contenido y de la legalidad y autenticidad de la documentación colombiana acompañada, de la que resulta que el reconocimiento paterno de hijo extramatrimonial se produjo el 30 de julio de 1999, por declaración del progenitor y con firma de la madre del interesado, con anterioridad a la declaración de la nacionalidad española por residencia del padre del solicitante, que se produce el 5 de mayo de 2011, es decir, casi doce años después. Se considera pues probada la filiación del inscrito en Colombia respecto de ciudadano español.

V. Por otro lado, han quedado acreditadas las condiciones necesarias para optar a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en el artículo 20.1.a), dado que cuando el padre adquirió la nacionalidad española el hijo era todavía menor de edad y la solicitud se presentó antes de que este alcanzara los veinte años de edad.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.
2. Proceder a la práctica de la inscripción de nacimiento en España del interesado.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (46.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—*Se estima por razón de patria potestad la opción formulada por la promotora, dado que cuando la progenitora adquiere por residencia la nacionalidad española, el optante no había alcanzado todavía la mayoría de edad.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, presunta progenitora, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 10 de octubre de 2014, Doña J. J. A. M., nacida el 18 de septiembre de 1978 en B. (República Dominicana), de nacionalidad española adquirida por residencia, presenta en el Registro Civil de Lalín (Pontevedra), solicitud de opción a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a del Código Civil (CC), a favor de su hijo menor de catorce años, D-S. P. A., nacido el de 2002 en B. (República Dominicana). Adjunta como documentación: pasaporte dominicano, documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario y certificado de nacimiento del menor apostillado, expedido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana; certificado de inscripción consular del optante, expedido por el Consulado Honorario de la República Dominicana en La Coruña; documento nacional de identidad, pasaporte español y certificado literal español de nacimiento de la progenitora, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 05 de marzo de 2013; certificado de inscripción padronal, expedido por el Ayuntamiento de S. (Pontevedra); autorización notarial otorgada por D. A. P. S., progenitor del menor, a fin de que la Sra. A. M. pueda realizar los trámites requeridos para la adquisición de la nacionalidad española por su hijo.

II

Por auto de 26 de noviembre de 2014, dictado por el encargado del Registro Civil de Lalín (Pontevedra), se autoriza a la promotora, como representante legal del menor y en interés del mismo, para que opte por la nacionalidad española. El acta de opción se levanta en el citado registro civil con fecha 03 de diciembre de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil.

III

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 5 de marzo de 2015 se dicta providencia, interesando de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacio-

nalidad de la madre del menor, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

IV

Con fecha 22 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española del menor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que, en el expediente de nacionalidad por residencia de la progenitora, ésta no mencionó en modo alguno al optante, como venía obligada, ya que a la fecha de la declaración efectuada por la madre, era menor de edad.

V

Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción a su hijo indicando que, en el acta de audiencia reservada para comprobar su grado de adaptación y de integración en España, manifestó que tenía hijos menores de edad sujetos a su patria potestad y que se aportó al expediente de opción el acta inextensa de nacimiento del menor, debidamente legalizada, cumpliendo los requisitos necesarios para dar validez a la misma.

Alega que se ha vulnerado el principio de igualdad, dado que a su hija Génesis Noemí Peralta Adames se le reconoció el derecho de opción derivado de la adquisición de la nacionalidad de su madre, aportando copia del certificado español de nacimiento de la misma, en el que consta inscripción marginal de fecha 23 de febrero de 2015 de adquisición de la nacionalidad española por opción por el Registro Civil Central.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23, 315 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3.ª de febrero de 2003; 7-1.ª de julio y 13-1.ª de septiembre de 2004; y 20-3.ª de enero y 11-3.ª de octubre de 2005; 3-5.ª de mayo, 23-6.ª de junio, 17-3.ª de julio, 2-2.ª de julio y 20-2.ª de noviembre de 2006; 16-6.ª de mayo y 28-5.ª de noviembre de 2007; 27-2.ª de mayo, 28-7.ª de noviembre y 4-6.ª de diciembre de 2008; 25-10.ª de febrero, 11-4.ª de marzo y 22-4.ª de octubre de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cfr.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los HECHOS de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. La promotora, de nacionalidad española adquirida por residencia el 05 de marzo de 2013 solicitó la inscripción de nacimiento de su hijo menor de catorce años en el registro civil español, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a del Código Civil. La solicitud se desestimó por acuerdo del encargado del Registro Civil Central, toda vez que la progenitora no mencionó al menor en su expediente de nacionalidad por residencia, como estaba obligada, ya que en la fecha en que efectuó la solicitud este era menor de edad. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

IV. El artículo 20.1.a) del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española «las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español», y en el apartado 2.a) del citado artículo se indica que la declaración de opción se formulará «por el representante legal del optante menor de catorce años o incapacitado».

V. En el presente caso, se comprueba que, si bien en la solicitud de nacionalidad española por residencia formulada por la promotora con fecha 20 de marzo de 2012 en el Registro Civil de Lalín (Pontevedra), no mencionó la existencia de hijos menores de edad a su cargo, en la audiencia reservada realizada en la citada fecha ante el encargado del registro, concretamente en la pregunta 8, afirmó que tenía hijos menores de edad sujetos a la patria potestad, no habiéndose requerido por el encargado información adicional respecto de los menores.

Por otra parte, se ha aportado al expediente certificado español de nacimiento de G.-N. P. A., nacida el 03 de julio de 1995 en B. (República Dominicana), hermana de la menor optante, a la que se reconoció la adquisición de la nacionalidad española por opción, constando inscrito su nacimiento en el Registro Civil Central en fecha 23 de febrero de 2015.

VI. En relación con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Civil, se indica que el optante, nacido el 19 de febrero de 2002, es menor de edad en la fecha en que su progenitora adquiere la nacionalidad española por residencia, hecho que se produce el 5 de marzo de 2013, por lo que ha estado sujeto a la patria potestad de un español y, por otra parte, la opción se formuló cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2.a)

del citado artículo 20 del Código Civil, dado que el optante era menor de catorce años en la fecha de la solicitud.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.
- 2.º Ordenar que se proceda a la inscripción de nacimiento del optante y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 17 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 31 de marzo de 2017 (39.ª)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—
1.º No es posible la opción por razón de patria potestad si la interesada ya era mayor de edad cuando surte su efecto la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción del progenitor.

2.º No es posible la opción si la interesada no acredita su situación conforme a los supuestos contemplados por los apartados a) y b) del artículo 20.1 del Código Civil.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante solicitud formulada ante el Registro Civil Central, Doña S. M., nacida el 1 de enero de 1982 en A. (Marruecos), solicitó la inscripción de su nacimiento en el registro civil español, en base a la nacionalidad española de su progenitor, Don M. K-H. C-E., nacido el 1 de abril de 1949 en S. (Sáhara Occidental), que fue adquirida con valor de simple presunción por resolución registral de 20 de mayo de 2008 dictada por el encargado del Registro Civil de Villena (Alicante), inscrita el 23 de mayo de 2013. Aportaba la siguiente documentación: interesada.- pasaporte marroquí, documento de identidad marroquí, permiso de conducir y visado norteamericano, certificación expedida por la B. of M. C. C. y certificado literal de nacimiento, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos; progenitor.- documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española con valor de simple presunción, en virtud de resolución registral de 20 de mayo de 2008, dictada por el encar-

gado del Registro Civil de Villena (Alicante), inscrita el 23 de mayo de 2013 y certificado de matrimonio de los progenitores, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos.

II

Con fecha 9 de septiembre de 2015, el encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo por el que se deniega la inscripción de nacimiento de la interesada, por no haber estado sujeta a la patria potestad de un español, ya que los efectos de las adquisiciones de la nacionalidad española por los padres solo tienen lugar a partir de la fecha en que a los mismos se les declara con valor de simple presunción, fecha en que la interesada ya era mayor de edad, por lo que no le cabe optar a la nacionalidad española al no haber estado sujeta a la patria potestad de un español y tampoco cabe la recuperación, pues no consta que la haya ostentado en el pasado, por lo que procede denegar la inscripción de nacimiento solicitada.

III

Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción conforme a lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil, alegando que su padre es originariamente español y nacido en España, por lo que la opción efectuada no tiene límite de edad.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); Ley 40/1975, de 19 de noviembre; Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008 y 29-4.^a de enero de 2009.

II. La interesada, nacida el 1 de enero de 1982 en A. (Marruecos) solicitó la opción a la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento alegando que su padre es español de origen nacido en España. El encargado del Regis-

tro Civil Central denegó la inscripción de nacimiento de la interesada por no haber estado sujeta a la patria potestad de un español.

III. En relación con el supuesto de hecho del artículo 20.1.a) del Código Civil no hay duda de que la interesada no ha estado sujeta a la patria potestad de un español, puesto que en el momento en que su padre es declarado español con valor de simple presunción, el 23 de mayo de 2013, momento en el que la nacionalidad surte efectos, la interesada ya era mayor de edad según su estatuto personal.

IV. Asimismo, el artículo 20.1b) del Código Civil dispone que tienen derecho a optar a la nacionalidad española «aquellas (personas) cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España». En el presente caso, si bien consta que el padre de la interesada ha sido declarado español de origen con valor de simple presunción, de acuerdo con la certificación literal de inscripción de nacimiento que obra en el expediente, el mismo nació en S. (Sáhara Occidental), por lo que no puede ser considerado como nacido en España. Lo cierto es que los nacidos en el territorio del Sáhara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sáhara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sáhara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sáhara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada a cabo en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sáhara en relación con el territorio metropolitano según el derecho internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

VI. Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. A tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales,

caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

VII. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sáhara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los *stati* entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

VIII. No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujo al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesta finalmente de relieve con rotunda claridad por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sáhara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sáhara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– *ha formado parte del territorio nacional*».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 31 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de abril de 2017 (37.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.– *Se estima por razón de patria potestad la opción formulada por el promotor, dado que cuando el progenitor adquiere por residencia la nacionalidad española, el optante no había alcanzado todavía la mayoría de edad.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Don J. M. de L., nacido el 22 de marzo de 1997 en B. (República Dominicana), de nacionalidad dominicana, hijo de Don D-M. M. M., nacido el 27 de mayo de 1963 en L. H. (República Dominicana) y de nacionalidad española adquirida por residencia y de Doña A. de L. C., nacida el 9 de octubre de 1963 en L. H. (República Dominicana), de nacionalidad dominicana, solicitó ante el Registro Civil Consular de España en República Dominicana, solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española no de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil. Aportó como documentación: hoja declaratoria de datos; certificado de nacimiento apostillado del interesado, expedido por la República Dominicana; certificación de la Cámara Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona (República Dominicana), en relación con la sentencia de fecha 15 de marzo de 2007, relativa a la ratificación del acta de nacimiento tardía del promotor; certificación negativa de inscripción en el Registro Civil Central del interesado; certificado de constancia de nacimiento, expedido por el Hospital Regional Universitario «J.» de República Dominicana; certificado negativo de inscripción del solicitante en los libros de bautismo de la parroquia «San José» de Barahona, certificado de nacimiento apostillado de la progenitora, expedido por la República Dominicana y certificado de pruebas médicas de investigación de filiación.

II

Por resolución de 10 de diciembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), se deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del interesado, en virtud de que el mismo declaró expresamente «no querer practicar la opción de nacionalidad española, sino que prefiere solicitar el visado para poder viajar a España a reunirse con su padre», con lo que quedaba manifiestamente probada la falta de voluntad del solicitante en adquirir la nacionalidad española por opción.

III

Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción y alegando que la declaración efectuada se debió a desconocimiento del procedimiento por su parte, ya que pensaba que para solicitar la nacionalidad había que obtener el visado previamente, que nadie le informó del procedimiento establecido, manifestando su voluntad de optar a la nacionalidad española.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe de fecha 13 de julio de 2016 favorable a la estimación del recurso interpuesto por el promotor, toda vez haber quedado acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 20.1.a) del Código Civil, y el encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe favorable a la estimación del recurso, redactado en los mismos términos que el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23, 315 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; y 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 3-5.^a de mayo, 23-6.^a de junio, 17-3.^a de julio, 2-2.^a de julio y 20-2.^a de noviembre de 2006; 16-6.^a de mayo y 28-5.^a de noviembre de 2007; 27-2.^a de mayo, 28-7.^a de noviembre y 4-6.^a de diciembre de 2008; 25-10.^a de febrero, 11-4.^a de marzo y 22-4.^a de octubre de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. El promotor, nacido en República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitó en el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo

20.1.a) del Código Civil. La solicitud se desestimó por resolución del encargado del registro civil consular, en base a la manifestación del interesado de que no quería practicar la opción a la nacionalidad española, prefiriendo solicitar el visado para poder viajar a España. Interpuesto recurso por el promotor, alega que la declaración efectuada se debió a un desconocimiento por su parte del procedimiento legalmente establecido, dejando constancia en el escrito de recurso de que su voluntad expresa es solicitar la inscripción de su nacimiento por opción a la nacionalidad española.

IV. El artículo 20.1.a) del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española «las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español», y en el apartado 2.c) del citado artículo se indica que la declaración de opción se formulará «por el propio interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años».

V. En el presente caso, el padre del interesado adquiere la nacionalidad española por residencia por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de agosto de 2011, compareciendo ante el encargado del Registro Civil de Madrid el 13 de marzo de 2013, prestando promesa en los términos del artículo 23 del Código Civil y, el interesado nace el 22 de marzo de 1997, por lo que se constata que es menor de edad en la fecha en que su progenitor adquiere la nacionalidad española, por lo que ha estado sujeto a la patria potestad de un español y, por otra parte, la opción se formuló en fecha 23 de septiembre de 2015, cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2.c) del citado artículo 20 del Código Civil, dado que el optante era mayor de dieciocho años en la fecha de la solicitud.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.
- 2.º Establecer que se proceda a la inscripción de nacimiento del optante y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 12 de mayo de 2017 (16.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.– *Se estima por razón de patria potestad la opción formulada por la promotora, nacida en 1995 en República Dominicana, porque está suficientemente acreditada su filiación española y cumple los requisitos exigidos por el artículo 20.1.a) del Código Civil.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Doña Y.- E. M. P., nacida el 27 de diciembre de 1995 en A. (República Dominicana), de nacionalidad dominicana, hija de Don J. R. M. N., nacido el 5 de septiembre de 1972 en A. (República Dominicana), de nacionalidad dominicana y de Doña R. P. M., nacida el 29 de julio de 1969 en P. d. I. C. (República Dominicana), de nacionalidad española adquirida por residencia el 23 de abril de 2010, formuló ante el Registro Civil Consular de España en República Dominicana, solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española no de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil.

Aportó como documentación: hoja declaratoria de datos; cédula de identidad dominicana, pasaporte dominicano y certificado de nacimiento de la interesada, expedido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana, en el que se hace constar que la misma nació en el Hospital de Azua el 27 de diciembre de 1995; cédula de identidad dominicana y certificado de nacimiento del progenitor, expedido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana; pasaporte español y certificado literal español de nacimiento de la progenitora de la interesada.

II

Por resolución de 23 de diciembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), se deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de la interesada, por presentar el expediente incompleto, al no haberse aportado el certificado de nacimiento expedido por el hospital donde nació la interesada.

III

Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción y alegando que la legislación civil española sujeta la concesión de la nacionalidad por opción a la aportación del certificado literal de nacimiento, que fue aportado por la interesada debidamente apostillado, en el que se hace constar que nació en el hospital de Azua y del que en ningún momento se ha cuestionado por el consulado su legalidad y autenticidad. Por otro lado indica que, en la resolución denegatoria se hace alusión al certificado de nacimiento expedido por el hospital donde nació la interesada, indicando que los hospitales no expiden certificados de nacimiento en República Dominicana, sino la Junta Central Electoral a través de la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe de fecha 14 de julio de 2016 favorable a la estimación del recurso interpuesto por la promotora, toda vez haber quedado acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 20.1.a) del Código Civil, y la cónsul-adjunta, encargada del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe favorable a la estimación del recurso, redactado en los mismos términos que el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23, 315 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; y 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 3-5.^a de mayo, 23-6.^a de junio, 17-3.^a de julio, 2-2.^a de julio y 20-2.^a de noviembre de 2006; 16-6.^a de mayo y 28-5.^a de noviembre de 2007; 27-2.^a de mayo, 28-7.^a de noviembre y 4-6.^a de diciembre de 2008; 25-10.^a de febrero, 11-4.^a de marzo y 22-4.^a de octubre de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. La promotora, nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitó en el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana), solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil. La solicitud se desestimó por auto del encargado del Registro Civil Consular, en base a que el expediente se encontraba incompleto, al faltar el certificado de nacimiento de la interesada, expedido por el hospital en el que nació la solicitante. Frente a dicha resolución se interpone recurso por la promotora.

IV. Examinada la documentación integrante el expediente, se constata que, junto con la solicitud de opción a la nacionalidad española, se aportaron certificados locales de nacimiento de la promotora y de su progenitor, así como certificado español de nacimiento de la progenitora de la solicitante, lo

que prueba la filiación de la interesada en relación con nacional español, dado que el registro civil constituye la prueba de los hechos inscritos.

V. El artículo 20.1.a) del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española «las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español», y en el apartado 2.c) del citado artículo se indica que la declaración de opción se formulará «por el propio interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años».

VI. En el presente caso, la madre de la interesada adquiere la nacionalidad española por residencia por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de febrero de 2010, compareciendo ante el encargado del Registro Civil de Torremolinos el 23 de abril de 2010, prescindiendo de la promesa en los términos del artículo 23 del Código Civil y, la interesada nace el 27 de diciembre de 1995, por lo que se constata que es menor de edad en la fecha en que su progenitora adquiere la nacionalidad española, por lo que ha estado sujeto a la patria potestad de un español y, por otra parte, la opción se formuló cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2.c) del citado artículo 20 del Código Civil, dado que la optante era mayor de dieciocho años en la fecha de la solicitud.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.
- 2.º Establecer que se proceda a la inscripción de nacimiento de la optante y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

Madrid, 12 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 23 de junio de 2017 (18.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.—

1.º No es posible la opción por razón de patria potestad si el interesado ya era mayor de edad cuando surte su efecto la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción de los padres.

2.º No es posible la opción si el interesado no acredita su situación conforme a los supuestos contemplados por los apartados a) y b) del artículo 20.1 del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 25 de octubre de 2012, en el Registro Civil de Quart de Poblet (Valencia), se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la que Don M. N. C. A. (A. B.), nacido el 8 de febrero de 1986 en E. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el certificado de nacimiento, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática aportado al expediente, opta la nacionalidad española de sus padres, Don C. A. B. y Doña N. B. D., de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, con efectos de 14 de julio de 2009 y 17 de octubre de 2006, respectivamente, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, jurando o prometiendo fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y renunciando a su nacionalidad anterior.

Aporta como documentación: hoja declaratoria de datos; promotor.- pasaporte argelino; certificados de paternidad y de nacimiento expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática y certificado de inscripción padronal colectivo, expedido por el Ayuntamiento de M. (Valencia); progenitores.- documentos nacionales de identidad, certificados literales españoles de nacimiento y acta de matrimonio expedida por la República Árabe Saharaui Democrática.

II

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, con fecha 7 de marzo de 2014, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento y la de la opción efectuada por el interesado, toda vez que no se cumple el requisito establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, ya que en la fecha en la que sus padres adquieren la nacionalidad española con valor de simple presunción, el optante tenía ya 18 años y era, por tanto, mayor de edad, por lo que no ha estado sujeto a la patria potestad de un español.

III

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se apruebe su inscripción de nacimiento y opción por la nacionalidad española, alegando que sus padres habían sido inscritos en un registro civil heránico español, por lo que son originariamente españoles, por lo que al momento de nacer el interesado lo hizo de un padre y madre españoles y que de acuerdo con el artículo 20.3 del Código Civil, el ejercicio del derecho de opción para aquéllos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España, no estará sujeto a límite alguno de edad.

IV

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a de septiembre, 20-2.^a y 4.^a y 22-5.^a de diciembre de 2006; 12-3.^a y 4.^a de enero, 10 de febrero, 5-2.^a de marzo, 21 de abril, 21-6.^a de mayo, 11-1.^a de junio y 20-2.^a de diciembre de 2007; 3-1.^a, 28-1.^a y 29-3.^a de enero, 22-5.^a y 29-6.^a de febrero, 3-2.^a y 4.^a de marzo y 25-3.^a y 4.^a de noviembre de 2008 y 29-4.^a de enero de 2009.

II. El interesado, nacido el 8 de febrero de 1986 en E. (Sáhara Occidental), solicitó la opción a la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento alegando que sus padres son españoles de origen nacido en España. El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central denegó la inscripción de nacimiento del interesado por no haber estado sujeto a la patria potestad de un español.

III. En relación con el supuesto de hecho del artículo 20.1.a) del Código Civil no hay duda de que el interesado no ha estado sujeto a la patria potestad de un español, puesto que en el momento en que sus padres son declarados españoles con valor de simple presunción, 17 de octubre de 2006 y el 14 de julio de 2009, respectivamente, momento en el que la nacionalidad surte efectos, el interesado ya era mayor de edad según su estatuto personal, ya que tenía 20 años.

IV. Asimismo, el artículo 20.1.b) del Código Civil dispone que tienen derecho a optar a la nacionalidad española «aquellas (personas) cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España». En el presente caso, si bien consta que los progenitores del interesado han sido declarados españoles de origen con valor de simple presunción, de acuerdo con la certificación literal de inscripción de nacimiento que obra en el expediente, los mismos nacieron en A. (Sáhara Occidental) y E. J. (Sáhara Occidental), por lo que no pueden ser considerados como nacidos en España.

Lo cierto es que los nacidos en el territorio del Sáhara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sáhara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sáhara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las con-

fusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sáhara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada a cabo en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sáhara en relación con el territorio metropolitano según el derecho internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

VI. Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. A tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de auto-determinación en el Sahara.

VII. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sáhara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretario General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

VIII. No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como

Carta Magna de descolonización), condujo al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesta finalmente de relieve con rotunda claridad por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sáhara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sáhara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– *ha formado parte del territorio nacional*».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 23 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de julio de 2017 (7.ª)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.–*No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere la nacionalidad española, ya era mayor de edad según su estatuto personal.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 25 de abril de 2014, en el Registro Civil de Gerona, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la que Don A. J., nacido el 25 de marzo de 1992 en G. (Gambia), hijo de Y. J. M., nacido en G. (Gambia), de nacionalidad española adquirida por residencia el 28 de octubre de 2013 y de D.ª F. M., nacida en G. (Gambia) de nacionalidad gambiana, opta la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, jurando o prometiendo fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y renunciando a su nacionalidad anterior.

Aporta como documentación: hoja declaratoria de datos; promotor.- permiso de residencia temporal; certificado literal de nacimiento, traducido y legalizado, expedido por la República de Gambia, en el que se hace constar que la inscripción se realizó el 3 de

febrero de 2014 por declaración de tercero y volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de S. (Gerona); progenitor.- documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 28 de octubre de 2013; progenitora.- permiso de residencia de larga duración y certificado de matrimonio de los padres, celebrado en Gambia el 28 de julio de 1995.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 23 de septiembre de 2014 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre del promotor, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

Recibido el expediente de nacionalidad española por residencia del Sr. J. M., presunto padre del interesado, en solicitud formulada el 19 de marzo de 2010 ante el encargado del Registro Civil de Gerona, indicó que su estado civil era casado con D.ª F. M. y que tenía seis hijos sujetos a su patria potestad, citando a A. J., si bien indica que nació en Gambia el 25 de marzo de 1993, cuando el año de su nacimiento fue 1992, de acuerdo con el certificado gambiano de nacimiento del interesado aportado al expediente.

III

Con fecha 26 de marzo de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo por el que se deniega la inscripción de nacimiento y la de la opción efectuada por el interesado, sin perjuicio de que pueda solicitar la nacionalidad española por residencia y del derecho que le asiste a solicitar la inscripción de su nacimiento al amparo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, sin prejuzgar la nacionalidad española, toda vez que no se cumple el requisito establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, ya que en la fecha en la que su padre adquiere la nacionalidad española por residencia, el optante tenía ya 21 años y era, por tanto, mayor de edad, según las legislaciones española y gambiana. Por otra parte, se indica que, dado que el plazo para efectuar la opción vence a los 20 años cumplidos o pasados dos años después de la emancipación según la mayoría de edad en el país de nacimiento, cuando el interesado opta en fecha 25 de abril de 2014 ante el encargado del Registro Civil de Gerona, ya tiene 23 años de edad, por lo que la opción se habría producido fuera del plazo legalmente establecido.

IV

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se apruebe su inscripción de nacimiento y opción por la nacionalidad española.

V

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código Civil (CC); 17 y 23 del Código Civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones de 2-3.^a de febrero, 14-1.^a de marzo y 2-2.^a de diciembre de 2002; 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 19-3.^a de enero, 11-2.^a de marzo y 17-3.^a de julio de 2006; 18-8.^a de septiembre y 25-9.^a de octubre de 2007.

II. El interesado, nacido en G. (Gambia) el 25 de marzo de 1992, ha intentado optar a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando la nacionalidad española de su padre adquirida por residencia por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de julio de 2013, prestando el juramento establecido en el artículo 23 del Código Civil ante notario de S. (Gerona) el 28 de octubre de 2013. La solicitud del interesado se desestimó por resolución de 26 de marzo de 2015 dictada por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, al considerar que el interesado era mayor de edad cuando su padre adquiriere la nacionalidad española.

III. En el presente caso, de la documental obrante en el expediente, se constata que el interesado nace el 25 de marzo de 1992 en G. (Gambia), de acuerdo con el certificado gambiano de nacimiento aportado al expediente, en el que consta que la inscripción se realizó el 3 de febrero de 2014 por declaración de un tercero, alcanza mayoría de edad a los 18 años el 25 de marzo de 2010, y que el padre del promotor adquiere la nacionalidad española por residencia el 28 de octubre de 2013, fecha en que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil

De este modo, y dado que según su estatuto personal el promotor accedió a la mayoría de edad al cumplimiento de los 18 años, ya era mayor de edad en la fecha en que su padre adquiere la nacionalidad española por residencia y hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a la nacionalidad española por este concepto.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (16.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.— *No procede la inscripción de una menor de 14 años, nacida en Cuba en 2000, cuyos representantes legales ejercitan la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1.a) del Código Civil, porque no resulta acreditado que la menor interesada sea hija de padre español, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.*

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS**I**

Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 27 de junio de 2011, Don R. L. M. F., mayor de edad, nacido en B., G. (Cuba) el 16 de mayo de 1967 y de nacionalidad española, obtenida por la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitaba la inscripción del nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de su hija R. M. F., nacida en B. en 2000. Adjuntaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, en el que se hace constar que el progenitor, Sr. M., era soltero cuando nació la optante y la progenitora, Z. M. F. G., casada, certificación no literal de nacimiento cubana de la optante, tarjeta de identidad del menor de la optante, carné de identidad cubano de la madre de la optante, pasaporte español e inscripción de nacimiento en el registro civil español del Sr. M. F., con marginal de nacionalidad española con fecha 26 de mayo de 2010 con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, certificación no literal de nacimiento cubana de la madre de la menor y certificación de notas marginales del matrimonio de la Sra. F. G., contraído con J. A. H. S. el 24 de diciembre de 1987 y disuelto por escritura notarial de fecha 15 de enero de 2010 y del contraído con el Sr. M. F. el 19 de enero de 2010.

II

Una vez suscrita el acta de opción correspondiente, previa autorización otorgada por el encargado del registro civil consular, por el Sr. M. F. en nombre de la menor optante y prestado el consentimiento por parte de la madre, el encargado dictó auto el 12 de noviembre de 2012 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación paterna de la optante y por tanto no cumplirse los requisitos del artículo 20 del Código Civil.

III

Notificada la resolución, el Sr. M. F., como representante legal de la menor optante, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que su relación con la madre de su hija existía aunque no fue formalizada y que la madre de la menor estuvo casada anteriormente, relación que terminó aunque no realizó los trámites legales de divorcio, solicitando que se revise su expediente aportando testimonio ante notario propio, de la madre de la menor y varias personas que conocen a los interesados por relaciones de amistad y vecindad.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró la resolución recurrida conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se muestra de acuerdo con la resolución en su día dictada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil (CC); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 23-2.^a de mayo, 7-4.^a de noviembre de 2007; 21-1.^a de mayo, 16-7.^a de julio y 14-3.^a de octubre de 2008; 28-4.^a de enero de 2009; 24-3.^a y 25-1.^a de febrero de 2010; 26-1.^a de octubre y 28-1.^a de noviembre de 2011.

II. Se pretende la inscripción del nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de una ciudadana nacida en Cuba en 2000, alegando la nacionalidad española de su padre, adquirida al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La petición se basa en el artículo 20.1.a) CC, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. La encargada del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1.a) CC, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre es casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es

necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la madre de la optante estaba casada desde 1987 con un ciudadano cubano, Sr. H. S., hasta el 15 de enero de 2010, fecha en que se otorgó escritura notarial de divorcio, por lo que cuando se produjo el nacimiento, octubre de 2000, dicho matrimonio seguía vigente, por lo que no habiéndose acreditado la existencia de separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 6 de octubre de 2017 (29.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.— *No es posible por razón de patria potestad si el interesado ejercita el derecho fuera de plazo.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en Mendoza (Argentina).

HECHOS

I

Con fecha 14 de julio de 2015, Don E. N. M. L., nacido el 23 de enero de 1995 en C., M. (Argentina), presenta cuestionario de solicitud de nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en Mendoza, por ser hijo de Doña M. B. L. Y., nacida el 18 de junio de 1964 en M. y de nacionalidad española de origen, en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con efectos de 16 de diciembre de 2009.

Adjunta como documentación: certificado literal de nacimiento del interesado, legalizado, expedido por el Registro del Estado Civil de Mendoza y certificado literal español de nacimiento de su progenitora, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad

española de origen, de acuerdo con la opción establecida en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

II

Con fecha 20 de octubre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en Mendoza (Argentina) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, toda vez que pese a haber vivido bajo la patria potestad de su madre, tras haber optado ésta por la nacionalidad española el 16 de diciembre de 2009, no declara su voluntad de optar por la nacionalidad española antes de los dos años posteriores a la emancipación según su ley personal.

III

Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción alegando que en ningún momento su madre fue informada desde el Consulado General de España en Mendoza acerca del momento en el que debía realizar la opción por la nacionalidad española de sus hijos o si dicha opción se extendía directamente a sus hijos menores de edad y que, de haber estado informado, hubiese formulado su solicitud en tiempo y forma. Asimismo indica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 del Código Civil, todavía se encontraría en plazo para formular la opción.

IV

Previo informe desfavorable del canciller del Consulado General de España en Mendoza (Argentina), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, ratificándose plenamente en la resolución adoptada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones de 22 de octubre y 3-6.^a de noviembre de 2001; 2-3.^a de febrero, 14-1.^a de marzo y 2-2.^a de diciembre de 2002; 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; y 20-3.^a de enero 13-1.^a de junio de 2005; 4-2.^a de julio de 2006; y 16-5.^a de marzo de 2007.

II. Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano argentino, nacido el 23 de enero de 1995 en C., M. (Argentina), alegando que su madre había adquirido la nacionalidad española en virtud de la opción establecida en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 16 de

diciembre de 2009. La encargada del registro civil consular dictó resolución de fecha 20 de octubre de 2015, por la que denegaba la opción pretendida por haberse ejercitado el derecho pasada la fecha de caducidad.

III. Para resolver el recurso procede comprobar la edad del promotor en la fecha en que ejercita el derecho. Ejerció el derecho el 14 de julio de 2015 y la fecha de su nacimiento fue la de 23 de enero de 1995, por lo que al optar tenía ya cumplidos veinte años. Según el conocimiento adquirido de la legislación argentina, la mayoría de edad, se alcanza a los 18 años. El artículo 20.2.c) CC dispone que la declaración de opción ha de formularse por el interesado, por sí solo, si es mayor de dieciocho años y que la opción caduca a los veinte años de edad, salvo que el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, lo que aquí no sucede. Consecuentemente, el derecho de optar se ha ejercitado una vez que el plazo para hacerlo había caducado.

Por otra parte, el artículo 17.2 del Código Civil al que alude el interesado en su escrito de recurso, versa sobre la filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, circunstancia que no se produce en el caso que nos ocupa.

IV. Ha de quedar a salvo que, si así se solicita, pueda inscribirse el nacimiento del recurrente en el registro civil español, por afectar el hecho al estado civil, a la relación materno-filial respecto de un español, pero en tal caso habría de hacerse constar expresamente en el asiento que no está acreditada conforme a Ley la nacionalidad española del nacido (*cfr.* art. 66 «fine» RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Mendoza (Argentina).

Resolución de 27 de octubre de 2017 (18.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.— *No es posible la opción por razón de patria potestad si el interesado ya era mayor de edad cuando el padre obtuvo la nacionalidad española por residencia.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad por razón de patria potestad remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. D. B., mayor de edad y de nacionalidad española, obtenida por residencia, solicita mediante comparecencia en el Registro Civil de Las Palmas, autorización para ejercer la opción de nacionalidad del artículo 20.1.a en nombre de su hijo, M. D. I., nacido en B. (Marruecos) en julio de 1989. Se adjuntan los siguientes documentos: permiso de residencia en España del optante, con validez hasta el año 2019, certificado de empadronamiento colectivo en L. P. en el que consta que el optante reside en dicha localidad desde el año 2004, certificación literal de nacimiento marroquí del optante, documento nacional de identidad español del Sr. D. B., certificación literal de la inscripción de nacimiento del padre del optante en el Registro Civil español, con marginal de nacionalidad por residencia con fecha 24 de septiembre de 2010, resolución de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, dictada en noviembre de 2010, declarando la incapacidad física y psíquica del optante, revisable en el año 2014, consentimiento de la madre del optante, Sra. T. I., ciudadana marroquí, para que el promotor realice los trámites necesarios para la obtención de documentación española de sus hijos, entre ellos el interesado y pasaporte marroquí del optante, expedido en el año 2014 en Marruecos.

II

El encargado del Registro Civil de Las Palmas dictó acuerdo el 3 de diciembre de 2014 autorizando el ejercicio de la opción porque en el caso del interesado se cumplen los requisitos del artículo 20.1.a del Código Civil. Posteriormente, con fecha 5 de marzo de 2015, se levanta acta de opción suscrita por el Sr. D. B. en nombre de su hijo, cumpliendo los requisitos legales y se remite la documentación al Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción.

III

Con fecha 20 de mayo de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta providencia requiriendo del promotor que aporte la sentencia que declaraba la incapacidad del optante habiendo pasado el trámite de *exequator* para su ejecución en España. El interesado aporta sentencia de los tribunales marroquíes, de fecha 11 de marzo de 2014, que atendiendo a la demanda del Sr. D. B., previo informe médico de fecha 20 de enero de 2014 que sitúa el inicio de las perturbaciones físicas y mentales que afectan al optante en septiembre del año 2008, y presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta que la sentencia aportada no necesita legalización en base al convenio suscrito entre España y Marruecos y que además la incapacidad del optante está también reconocida por el Gobierno de Canarias.

IV

El ministerio fiscal emite informe, con fecha 23 de septiembre de 2015, oponiéndose a lo solicitado ya que cuando el promotor obtuvo la nacionalidad española su hijo ya era mayor de edad y también lo era cuando se le declaró judicialmente incapaz y su padre y promotor del expediente fue nombrado tutor, no habiéndose rehabilitado la patria potestad, por lo que el Sr. M. D. no estuvo nunca bajo la patria potestad de un ciudadano español. En

el mismo sentido se expresa el auto dictado, con fecha 25 de septiembre siguiente, por el encargado del Registro Civil Central, denegando la opción de nacionalidad solicitada, sin perjuicio de que se inscriba el nacimiento del interesado por afectar al estado civil de un español, artículo 15 de la Ley del Registro Civil.

V

Notificada la resolución al promotor, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que el optante se encuentra bajo la tutela de un español, que la discapacidad ha sido ratificada por el Gobierno de Canarias mediante resolución del año 2015 y que si sería aplicable el artículo 20.1.a del Código Civil.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se reafirma en su informe previo e interesa la confirmación del auto impugnado por sus propios fundamentos jurídicos. El encargado del Registro Civil Central emitió informe ratificándose en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 13-3.^a de febrero de 2003; 7-1.^a de julio y 13-1.^a de septiembre de 2004; y 20-3.^a de enero y 11-3.^a de octubre de 2005; 3-5.^a de mayo, 23-6.^a de junio, 17-3.^a de julio, 2-2.^a de julio y 20-2.^a de noviembre de 2006; 16-6.^a de mayo y 28-5.^a de noviembre de 2007; 27-2.^a de mayo, 28-7.^a de noviembre y 4-6.^a de diciembre de 2008 y 11-4.^a de marzo de 2009.

II. El promotor, como representante legal de su hijo mayor de edad y declarado incapaz, pretende la inscripción del mismo, nacido en Marruecos el 9 de julio de 1989, en el Registro Civil español previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando que él es ciudadano español por haber obtenido la nacionalidad por residencia en el año 2010.

III. La documentación aportada al expediente acredita la discapacidad del optante, pero lo cierto es que la sentencia de declaración de incapacidad y el nombramiento del padre como tutor no se produjo hasta el año 2014, habiéndose reconocido por la administración autonómica de Canarias, a los efectos legalmente establecidos, en noviembre del año 2010. En la fecha en que la madre recupera la nacionalidad española la hija tenía ya 23 años y era mayor de edad, de modo que, según la documentación aportada, nunca estuvo bajo la patria potestad de un español y, aunque así fuera, lo cierto es que ya

había transcurrido el plazo establecido en el artículo 20.2 CC para el ejercicio de la opción. Hay que concluir pues, que no es posible la opción a la nacionalidad española de la interesada por este concepto.

IV. Consta documentalmente que al promotor y padre del optante se le concedió la nacionalidad española por residencia mediante resolución de fecha 19 de mayo de 2010, y fue inscrito, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil, con fecha 24 de septiembre siguiente en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). El artículo 23 del Código Civil establece que es requisito para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por residencia que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes y, en su caso, renuncie a su anterior nacionalidad, este juramento en el caso presente se produjo por el Sr. D. B. el 24 de septiembre de 2010, fecha en la que su hijo y ahora optante ya había cumplido la mayoría de edad, según su ley personal, siendo posteriormente declarada judicialmente su incapacidad y el nombramiento de su padre como tutor, sin que por otro lado se rehabilitara la patria potestad sobre su hijo, por lo que no puede considerarse que éste haya estado sujeto a la patria potestad de un español, no siendo por tanto aplicable el artículo 20.1.a del Código Civil.

V. No obstante, ha de quedar a salvo, si así se solicita, la posibilidad de inscribir el nacimiento en el Registro Civil español por afectar el hecho al estado civil del padre español, pero teniendo en cuenta que en tal caso habría de hacerse constar expresamente en el asiento que no está acreditada conforme a ley la nacionalidad española del inscrito (*cf.* art. 66, in fine, RRC.).

Por otro lado, cabe asimismo la posibilidad de que el promotor, en nombre de su hijo, solicite el acceso a la nacionalidad española por residencia.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (18.^a)

Opción a la nacionalidad española por patria potestad. Artículo 20.1.a) CC.— *No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación ecuatorio-guineana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 11 de septiembre de 2015, en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la que Don J. A. O. N., nacido el 4 de julio de 1997 en E. (República de Guinea Ecuatorial), de acuerdo con certificado en extracto de acta de nacimiento y el 4 de junio de 1997, de acuerdo con certificación literal de inscripción de nacimiento, opta a la nacionalidad española de su presunta madre, D.^a T.-N. O. N. nacida el 4 de julio de 1978 en M. E.-E. (Guinea Ecuatorial), de nacionalidad ecuato-guineana y española, adquirida esta última por residencia, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.c) del Código Civil, prestando juramento de fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, no renunciando a su nacionalidad anterior.

Aporta la siguiente documentación: volante de empadronamiento del solicitante, expedido por el Ayuntamiento de V.-G.; pasaporte ecuato-guineano del interesado; certificado en extracto de acta de nacimiento del optante, expedido por la República de Guinea Ecuatorial en fecha 20 de agosto de 2013, en el que consta que el interesado nació el 4 de julio de 1997 en E.; certificado literal de inscripción de nacimiento del solicitante, expedido por la República de Guinea Ecuatorial el 20 de abril de 2015, en el que consta que nació el 4 de junio de 1997, encontrándose rectificado en cuanto al día y año del nacimiento; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento de la presunta madre del optante, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia con efectos de 23 de septiembre de 2013.

II

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 9 de diciembre de 2015 se dicta providencia, interesando de la Dirección General de los Registros y del Notariado se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad de la presunta madre del promotor, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

III

Con fecha 1 de abril de 2016, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del optante, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que la presunta madre no le menciona en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligada, al ser ésta menor de edad, por lo que existen dudas racionales de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española, por aplicación del artículo 23 de la Ley del Registro Civil.

IV

Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción, alegando que su madre sí le citó en su solicitud de nacionalidad española por residencia, si bien por error indicó que su nacimiento se había producido el 4 de julio de 2002, cuando lo correcto es 4 de julio de 1997.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC).

III. En este caso la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el 23 de septiembre de 2013 y pretende el promotor, asistida por ello, inscribir su nacimiento por medio de una certificación literal de inscripción de nacimiento de Guinea Ecuatorial, expedida el 20 de abril de 2015, que se encuentra rectificada en cuanto al día y año del nacimiento del optante y en la cual se hace constar que éste nació el 4 de junio de 1997 en M.-E. E. (Guinea Ecuatorial), siendo la fecha en que se efectúa la inscripción de 10 de agosto de 2012, es decir quince años después de producido el hecho inscribible. Por otra parte, se aporta certificado en extracto de acta de nacimiento del interesado, en el que consta que éste nació el 4 de julio de 1997 en E., no coincidiendo, por tanto, el mes de nacimiento del interesado en ambos documentos.

Igualmente se constata que en el expediente de nacionalidad por residencia, la presunta madre del interesado manifestó en fecha 9 de noviembre de 2009, mediante solicitud formulada en el Registro Civil Exclusivo de Murcia, que su estado civil era de soltera y que tenía un hijo menor de edad a su cargo, de nombre J. A., nacido el 4 de julio de 2002, no citando en modo alguno al optante, nacido en 1997, como estaba obligada, ya que en la fecha de su declaración era menor de edad y el artículo 220 del RRC, establece que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: «... 2.º *Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad*».

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado la presunta madre del interesado la existencia de éste en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (*cf.* art. 20 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 13 de enero de 2017 (3.ª). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (6.ª). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (36.ª). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (39.ª). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (40.ª). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (41.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (42.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de enero de 2017 (43.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (47.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (77.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (83.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (84.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (89.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (90.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (91.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (22.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (23.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (27.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (23.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (48.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (39.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (42.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (44.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (45.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (47.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (48.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de marzo de 2017 (1.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (27.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (37.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (38.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (40.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (35.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de abril de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de abril de 2017 (2.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de abril de 2017 (4.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de abril de 2017 (10.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de abril de 2017 (12.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de abril de 2017 (18.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (3.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (7.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (8.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (9.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (14.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (18.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (23.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (27.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (16.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (18.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (1.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (2.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (3.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (4.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 2 de junio de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 2 de junio de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 2 de junio de 2017 (22.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 2 de junio de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 9 de junio de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 9 de junio de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 9 de junio de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (39.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (40.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (41.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (42.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (43.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 16 de junio de 2017 (44.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (16.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (7.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (13.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (49.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (35.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (37.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (39.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (40.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 14 de julio de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 14 de julio de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 14 de julio de 2017 (18.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 14 de julio de 2017 (23.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (1.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (2.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (3.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (4.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (5.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (8.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (9.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (10.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (11.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 21 de julio de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de julio de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de julio de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de julio de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 28 de julio de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (57.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (59.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (61.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (73.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (92.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (93.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (102.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (105.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (106.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (107.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (1.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (3.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (4.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (5.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (8.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (18.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (38.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (40.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (22.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (27.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (7.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (8.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (9.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (10.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (21.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (15.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (30.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (25.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (32.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (34.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (37.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (19.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (22.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (24.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (35.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (39.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (40.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (26.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (33.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 4 de diciembre de 2017 (1.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 4 de diciembre de 2017 (2.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (17.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (20.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (36.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (38.^a). Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20.1.a) CC.

3.3.2 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR SER HIJO DE ESPAÑOL DE ORIGEN [ART. 20.1.B) CÓDIGO CIVIL]

Resolución de 7 de julio de 2017 (27.^a)

Opción a la nacionalidad española por hijo español de origen. Artículo 20.1.b) CC.–1.º *Procede la inscripción al estar acreditada la filiación respecto de un español.*

2.º *Afectando a un mayor de edad, se requiere de este que formule por sí solo la declaración de opción, artículo 20.2.c del Código Civil, no siendo así en el caso presente.*

3.º No es posible la opción por razón de patria potestad por cuanto el interesado era mayor de edad, según su estatuto personal, cuando la madre opta por la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento en Paraguay remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Asunción (Paraguay).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en Asunción el 16 de diciembre de 2011, C. R. N., nacida en A. el 28 de octubre de 1938 y de nacionalidad española, solicitó la inscripción del nacimiento en el registro civil español de su hijo, J. M. Z. R., nacido en A. el 27 de marzo de 1964. Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que el interesado es hijo de la solicitante y de A. P. Z. A., nacido en C. (Paraguay) en 1934 y de nacionalidad paraguaya, acta literal de nacimiento paraguaya del interesado, Sr. Z. R., en la que consta la nacionalidad paraguaya de sus progenitores, cédula de identidad civil del interesado, inscripción literal de nacimiento en el Registro Civil Español de la solicitante, Sra. R. N., con anotación marginal de que la madre de la inscrita, Sra. M. P. N. R. había recuperado su nacionalidad española con el año 2003 y la inscripción marginal de que la inscrita había optado a la nacionalidad española con base en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con fecha 24 de julio de 2009, pasaporte español de la solicitante, certificado no literal de nacimiento del padre del interesado y su cédula de identidad civil paraguaya, certificado literal de matrimonio de los padres del interesado, celebrado en 1958 y disuelto en 1997 y libro de familia de éstos, en el que el interesado ocupa el quinto lugar.

II

Con fecha 14 de octubre de 2015, la encargada del registro civil consular dictó auto en el que se muestra conforme con la inscripción de nacimiento solicitada, haciendo constar que la misma ya se practicó, concretamente el 16 de enero de 2013, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, teniendo en cuenta no obstante lo previsto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil sobre la falta de acreditación de la nacionalidad española del inscrito, ya que no se puede realizar actuación alguna en relación con la opción a la nacionalidad española del Sr. Z. R. ya que la solicitud formulada por la Sra. R. N. no se sujeta a los requisitos y presupuestos exigidos por el artículo 20 del Código Civil.

III

Notificada la resolución al interesado, este en el plazo de recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, presentó documento notarial que recogía sus alegaciones en relación con su derecho a la nacionalidad española porque su madre optó a la nacionalidad española de origen, solicitando que se le otorgue la misma.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa en el sentido de que no considera acreditados los requisitos para la obtención de la nacionalidad española. La encargada del registro civil consular se ratificó en su resolución y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 y 23 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9 y 5-2.^a de diciembre de 2001, 16-3.^a de enero, 15-2.^a de febrero, 14-9.^a de mayo de 2002, 21-5.^a de enero, 5 de mayo, 8-1.^a de julio y 6-3.^a de noviembre de 2003, 24-2.^a de junio y 20-1.^a de julio de 2004; 20-3.^a de septiembre de 2005; 20-5.^a de noviembre de 2006; 2-4.^a de junio, 1-1.^a de septiembre y 4-7.^a de diciembre de 2008; 21-4.^a de abril de 2009, 16-2.^a de febrero y 6-2.^a de abril de 2010.

II. Se pretende por la solicitante la inscripción del nacimiento de su hijo, producido en A. (Paraguay) en 1964, por ser hijo de una ciudadana española de origen, nacionalidad obtenida por ésta por la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La encargada del registro civil consular dictó acuerdo de 14 de octubre de 2015 estimando la solicitud con base en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil en relación con el 66 del Reglamento del Registro Civil, practicándose la inscripción pero no realizando actuación alguna respecto a la opción de nacionalidad del inscrito por no cumplir los presupuestos del artículo 20 del Código Civil. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. Un nacimiento acaecido en el extranjero y que afecte a españoles debe inscribirse en el registro civil español, pudiendo prescindirse de la tramitación de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo *«siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española»* (art. 23, 2.º párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero *«sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española»* (art. 85 RRC). En el caso presente el nacimiento tuvo lugar en Paraguay el 27 de marzo de 1964 y no hay motivos para dudar de la legalidad y autenticidad de la certificación paraguaya de nacimiento acompañada, de la que resulta que el interesado, Sr. J. M. Z. R., es hijo de la solicitante española C. R. N., de ahí que la encargada estimara la petición e inscribiera al interesado, si bien teniendo en cuenta el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil, que establece que en las inscripciones que

se hayan practicado sin que esté acreditada, conforme a la Ley, la nacionalidad del nacido, lo que sucede en el presente caso, se hará constar expresamente esta circunstancia.

IV. En relación con lo anterior y respecto a la posible opción a la nacionalidad española del interesado, Sr. Z. R., debe señalarse en primer lugar un problema procedimental que se aprecia en la tramitación del expediente; en el caso del interesado se trata de una persona mayor de edad, nació en 1964, por lo que habría sido necesario que el propio Sr. Z., por sí solo, formulara su declaración de opción a la nacionalidad española ante la encargada del registro civil, artículo 20.2.c del Código Civil, circunstancia que no concurre en el presente caso, la solicitud de inscripción de nacimiento la presenta la madre del interesado y esté no consta que comparezca en el expediente hasta la notificación de la resolución y posterior presentación del recurso de apelación, este incumplimiento conlleva la no admisión de la opción pretendida.

V. Además de la cuestión procedimental, debe significarse que el artículo 20.1.a del Código Civil dispone que tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, pero dado que en la fecha en que la madre optó ante el encargado del registro por la nacionalidad española el interesado ya era mayor de edad, según su estatuto personal, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto ya que no se cumplían las exigencias de la normativa aplicable.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Asunción (Paraguay).

Resolución de 7 de julio de 2017 (30.^a)

Opción a la nacionalidad española por hijo español de origen. Artículo 20.1.b) CC.– 1.º *Procede la inscripción al estar acreditada la filiación respecto de un español.*

2.º *Afectando a un mayor de edad, se requiere de este que formule por sí solo la declaración de opción, artículo 20.2.c del Código Civil, no siendo así en el caso presente.*

3.º *No es posible la opción por razón de patria potestad por cuanto el interesado era mayor de edad, según su estatuto personal, cuando la madre opta por la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento en Paraguay remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Asunción (Paraguay).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en Asunción el 16 de diciembre de 2011, C. R. N., nacida en A. el 28 de octubre de 1938 y de nacionalidad española, solicitó la inscripción del nacimiento en el registro civil español de su hijo, F. J. Z. R., nacido en A. el 7 de septiembre de 1962. Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que el interesado es hijo de la solicitante y de A. P. Z. A., nacido en C. (Paraguay) en 1934 y de nacionalidad paraguaya, acta literal de nacimiento paraguaya del interesado, Sr. Z. R., en la que consta la nacionalidad paraguaya de sus progenitores, cédula de identidad civil del interesado, inscripción literal de nacimiento en el registro civil español de la solicitante, Sra. R. N., con anotación marginal de que la madre de la inscrita, Sra. M. P. N. R. había recuperado su nacionalidad española con el año 2003 y la inscripción marginal de que la inscrita había optado a la nacionalidad española con base en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con fecha 24 de julio de 2009, pasaporte español de la solicitante, certificado no literal de nacimiento del padre del interesado y su cédula de identidad civil paraguaya, certificado literal de matrimonio de los padres del interesado, celebrado en 1958 y disuelto en 1997 mediante sentencia cuya copia se adjunta y libro de familia de éstos, en el que el interesado ocupa el cuarto lugar.

II

Con fecha 14 de octubre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular dictó auto en el que se muestra conforme con la inscripción de nacimiento solicitada, haciendo constar que la misma ya se practicó, concretamente el 16 de enero de 2013, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, teniendo en cuenta no obstante lo previsto en el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil sobre la falta de acreditación de la nacionalidad española del inscrito, ya que no se puede realizar actuación alguna en relación con la opción a la nacionalidad española del Sr. Z. R. ya que la solicitud formulada por la Sra. R. N. no se sujeta a los requisitos y presupuestos exigidos por el artículo 20 del Código Civil.

III

Notificada la resolución al interesado, este en el plazo de recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, presentó documento notarial que recogía sus alegaciones en relación con su derecho a la nacionalidad española porque su madre optó a la nacionalidad española de origen, solicitando que se le otorgue la misma.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa en el sentido de que no considera acreditados los requisitos para la obtención de la nacionalidad española. La encargada del registro civil consular se ratificó en su resolución y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 y 23 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9 y 5-2.^a de diciembre de 2001, 16-3.^a de enero, 15-2.^a de febrero, 14-9.^a de mayo de 2002, 21-5.^a de enero, 5 de mayo, 8-1.^a de julio y 6-3.^a de noviembre de 2003, 24-2.^a de junio y 20-1.^a de julio de 2004; 20-3.^a de septiembre de 2005; 20-5.^a de noviembre de 2006; 2-4.^a de junio, 1-1.^a de septiembre y 4-7.^a de diciembre de 2008; 21-4.^a de abril de 2009, 16-2.^a de febrero y 6-2.^a de abril de 2010.

II. Se pretende por la solicitante la inscripción del nacimiento de su hijo, producido en A. (Paraguay) en 1962, por ser hijo de una ciudadana española de origen, nacionalidad obtenida por ésta por la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La encargada del registro civil consular dictó acuerdo de 14 de octubre de 2015 estimando la solicitud con base en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil en relación con el 66 del Reglamento del Registro Civil, practicándose la inscripción pero no realizando actuación alguna respecto a la opción de nacionalidad del inscrito por no cumplir los presupuestos del artículo 20 del Código Civil. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. Un nacimiento acaecido en el extranjero y que afecte a españoles debe inscribirse en el registro civil español, pudiendo prescindirse de la tramitación de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo «*siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española*» (art. 23, 2.º párrafo, LRC) y siempre que el registro extranjero «*sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española*» (art. 85 RRC). En el caso presente el nacimiento tuvo lugar en Paraguay el 7 de septiembre de 1962 y no hay motivos para dudar de la legalidad y autenticidad de la certificación paraguaya de nacimiento acompañada, de la que resulta que el interesado, Sr. F. J. Z. R., es hijo de la solicitante española C. R. N., de ahí que la encargada estimara la petición e inscribiera al interesado, si bien teniendo en cuenta el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil, que establece que en las inscripciones que

se hayan practicado sin que esté acreditada, conforme a la Ley, la nacionalidad del nacido, lo que sucede en el presente caso, se hará constar expresamente esta circunstancia.

IV. En relación con lo anterior y respecto a la posible opción a la nacionalidad española del interesado, Sr. Z. R., debe señalarse en primer lugar un problema procedimental que se aprecia en la tramitación del expediente; en el caso del interesado se trata de una persona mayor de edad, nació en 1962, por lo que habría sido necesario que el propio Sr. Z., por sí solo, formulara su declaración de opción a la nacionalidad española ante la encargada del registro civil, artículo 20.2.c del Código Civil, circunstancia que no concurre en el presente caso, la solicitud de inscripción de nacimiento la presenta la madre del interesado y esté no consta que comparezca en el expediente hasta la notificación de la resolución y posterior presentación del recurso de apelación, este incumplimiento conlleva la no admisión de la opción pretendida.

V. Además de la cuestión procedimental, debe significarse que el artículo 20.1.a del Código Civil dispone que tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, pero dado que en la fecha en que la madre optó ante el encargado del registro por la nacionalidad española el interesado ya era mayor de edad, según su estatuto personal, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha nacionalidad por este concepto ya que no se cumplían las exigencias de la normativa aplicable.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Asunción (Paraguay).

Resolución de 20 de octubre de 2017 (22.^a)

Opción a la nacionalidad española por hijo español de origen. Artículo 20.1.b) CC.–
No es posible la opción si el interesado no acredita su situación conforme al supuesto contemplado por el apartado b) del artículo 20.1 del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso, en virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Andújar (Jaén) el 5 de enero de 2009, N. S., nacida el 6 de marzo de 1975 en B. (Sáhara Occidental), según documento de nacimiento o en B. (Argelia) según pasaporte argelino, solicitaba su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español previa opción de nacionalidad española. Adjuntaba, entre otra, la siguiente documentación: pasaporte argelino, expedido en el año 2006, permiso de trabajo y residencia en España como ciudadana argelina y que vencía en julio de 2010, certificado de empadronamiento en A. desde el 17 de enero de 2008, recibo de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, nacida en A. (Sáhara Occidental), en 1975, tarjeta identificativa del Colegio Oficial de médicos de Jaén de la optante, pasaporte español del esposo de la interesada, declarado español con valor de simple presunción con fecha 14 de septiembre de 2007, documento nacional de identidad del Sáhara de la madre de la optante, contrato de arrendamiento y documentos laborales de la optante y, expedidos por los representantes de la denominada República Árabe Saharui Democrática, documento de identidad, acta de matrimonio de la optante, celebrado el 22 de abril de 2007, en el que la fecha de nacimiento del cónyuge no coincide con la que de la misma persona consta en el Registro Civil español, certificado de nacionalidad, de paternidad, en el que consta que la optante es hija de S. A. A., nacido en 1924 en Y. y de M. M. B., nacida en A., certificado de que estuvo viviendo en los campamentos de refugiados desde 1975, certificado de nacimiento y fotocopia de certificado de antecedentes penales,

II

Ratificada la optante, el ministerio fiscal informa que no se opone a la petición. Con fecha 12 de febrero de 2009 el encargado del Registro Civil de Andújar dicta auto en el que declara que la interesada reúne los requisitos previstos en el artículo 20.1.b del Código Civil para ejercer la opción a la nacionalidad española, entendiéndose que la Sra. S. es hija de padre español y nacido en una provincia española, en consecuencia informa favorablemente la opción de nacionalidad de la interesada, eleva el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución y otorga plazo para la interposición de recurso de apelación ante el mismo centro directivo. Esta Dirección General devuelve el expediente por no resultar competente para proceder en su caso a la inscripción de nacimiento, previa opción de nacionalidad, solicitada, sino que debe existir resolución del encargado del Registro Civil competente.

III

Con fecha 17 de septiembre de 2014 el encargado del Registro Civil de Andújar dicta nuevo auto declarando que a la Sra. S. le corresponde la nacionalidad española por la opción del artículo 20.1.b del Código Civil y acordando que se remita acta de opción al Registro Civil Central para que se proceda a la inscripción de su nacimiento.

IV

Recibida la documentación en el Registro Civil Central, el encargado dicta auto, con fecha 24 de junio de 2015, declarando su competencia para conocer sobre la opción de nacionalidad ejercida por la Sra. S. y, en su caso, proceder a la inscripción de nacimiento y, habida cuenta que en el presente caso el hecho inscribir no afecta a un español, puesto que no se ha acreditado que a la optante le corresponda dicha nacionalidad por ser hija de ciudadano originariamente español y nacido en España.

V

Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que nació en el Sáhara Occidental cuando era provincia española y que su madre que tenía documento nacional de identidad español y ostentaba dicha nacionalidad, y así se lo reconoció el Registro Civil de Andújar en un auto anterior y firme, aporta copia de documentación que ya constaba en el expediente.

VI

Del recurso interpuesto se dio traslado al ministerio fiscal que informa en el sentido de que debe confirmarse la resolución apelada por no quedar desvirtuados sus argumentos. El encargado del Registro remite la documentación del expediente a esta Dirección General para la resolución del recurso presentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 de la redacción vigente del Código Civil; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9.^a de septiembre y 5-2.^a de diciembre de 2001; 21-5.^a de enero, 5 de mayo y 6-3.^a de noviembre de 2003; 20-1.^a de julio de 2004; 20-3.^a de septiembre de 2005; 20-5.^a de noviembre de 2006; 2-4.^a de junio y 4-7.^a de diciembre de 2008 y 21-4.^a de abril de 2009; 16-2.^a de febrero y 6-2.^a de abril de 2010.

II. La interesada, nacida en B. (Sahara Occidental) o en B. (Argelia) según la documentación que se examine, en marzo de 1975, ha pretendido optar a la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el vigente artículo 20.1.b del Código Civil. El encargado del Registro Civil Central denegó la petición mediante auto de 24 de junio de 2015 por estimar que no se cumplían los requisitos necesarios. Contra el acuerdo de denegación se interpuso el recurso actual.

III. El artículo 16 de la LRC establece que los nacimientos se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen, en el mismo sentido se pronuncia el correspondiente artículo del Reglamento del Registro Civil, el 68, añadiendo éste en su párrafo segundo que cuando sea competente un Registro Consular, si el promotor está domiciliado en España, deberá practicarse la inscripción antes en el Registro Central y, después por traslado en el Consular correspondiente, siendo éste último el supuesto que ahora examinamos y que por tanto ha sido resuelto por el órgano registral competente, el Registro Civil Central.

IV. El artículo 20.1.b) del Código Civil dispone que tienen derecho a optar a la nacionalidad española «aquellas [personas] cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España». En el presente caso, por la documentación aportada no consta dicha circunstancia, no hay documentación alguna sobre el padre de la Sra. S. y de la madre de la misma, Sra. M. M. B., sólo consta documento de identidad expedido por el Gobierno español del Sahara en el año 1971, documento que perdió su validez por aplicación del Decreto 2258/1976, disposición final segunda, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara. En consecuencia no es posible estimar el presente recurso, al no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 20.1.b) del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 7 de julio de 2017 (28.^a). Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen. Art. 20.1.b) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (29.^a). Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen. Art. 20.1.b) CC.

Resolución de 7 de julio de 2017 (31.^a). Opción a la nacionalidad española por hijo de español de origen. Art. 20.1.b) CC.

3.3.3 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 21 de abril de 2017 (6.ª)

Opción a la nacionalidad española-supuestos artículo 20.1.c) CC.—*No es posible inscribir a la nacida en Venezuela en 1985 que ejercita la opción a la nacionalidad española fuera del plazo legalmente establecido de dos años a contar desde el reconocimiento de paternidad, de acuerdo con el artículo 17.2 del Código Civil.*

Tampoco es posible la inscripción en virtud de la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20. 1. b) del Código Civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque no está acreditado que el padre hubiese nacido en España.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 24 de abril de 2015, en el Registro Civil de Granada, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la cual Doña M-G. M. T., nacida el 12 de mayo de 1985 en V. (Venezuela), hija de Don J-P. M. H. y de Don Z. de L. T. P., opta por la nacionalidad española de su progenitor, al amparo de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil, prestando juramento o promesa de fidelidad a S.M. el Rey de España, obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y no renunciando a su nacionalidad anterior. Adjunta como documentación: certificados de empadronamiento, individual y colectivo, expedidos por el Ayuntamiento de Granada; pasaporte venezolano de la interesada; certificado de nacimiento apostillado de la interesada, expedido por la República de Venezuela; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del progenitor de la interesada, nacido el 3 de marzo de 1945 en C. (Francia), con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 9 de julio de 2003; declaraciones de reparación y reconocimiento personal, efectuadas a favor del progenitor y de los abuelos paternos de la interesada; certificados literales españoles de nacimiento de los abuelos paternos de la promotora, Don J. M. C. y Doña R. H. D. y documento nacional de identidad y contrato de arrendamiento de vivienda en Granada, a nombre de un hermano de la interesada.

II

Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, con fecha 7 de julio de 2015, se solicita del Registro Civil de Granada, requiera a la promotora a fin de que aporte, entre otros, certificado literal de nacimiento original, expedido por el registro civil de su país de origen, debidamente apostillado o legalizado, en el que se vea claramente la marginal de reconocimiento y la fecha, ya que la documentación aportada se encuentra ilegible. Aten-

diendo a lo solicitado, por comparecencia de la solicitante y de su progenitor, en el Registro Civil de Granada el 28 de agosto de 2015, aportan certificado literal de nacimiento apostillado de la promotora, expedido por la República de Venezuela, en el que consta al pie de dicho documento, inscripción de fecha 29 de noviembre de 2011, en la que se hace constar que la interesada fue reconocida por su padre, el ciudadano Jean Muela Huguet, venezolano, cédula de identidad núm., mediante acta núm. tomo III, de los libros de nacimiento llevados por dicho despacho del estado de Carabobo durante el año 2011. Asimismo, en dicha comparecencia, el progenitor reconoce a la promotora como su hija, a la cual no pudo reconocer desde un primer momento por desconocer su paradero.

III

Por acuerdo de 2 de octubre de 2015, el encargado del Registro Civil Central desestima la opción a la nacionalidad española de la promotora, al no encontrarse comprendida en ninguno de los supuestos legalmente establecidos, toda vez que en la fecha en que se determina su filiación respecto a un súbdito español, ya era mayor de edad, y en el momento en que manifiesta su voluntad de adquirir la nacionalidad española, habían transcurrido en exceso los dos años fijados en el artículo 17.2 del Código Civil.

IV

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que, si bien su filiación respecto de ciudadano español queda reflejada en su partida de nacimiento venezolana de fecha 29 de noviembre de 2011, no es hasta el 28 de agosto de 2015, cuando se personan en el Registro Civil de Granada la interesada y su progenitor, reconociendo este último a la compareciente como hija suya, y señalando que «no la pudo reconocer desde un primer momento por desconocer su paradero, ya que la madre falleció y la compareciente fue acogida por la familia de su madre, y una vez fue mayor de edad buscó al padre encontrándolo». De este modo, considera que su filiación quedó determinada el 28 de agosto de 2015, por lo que su solicitud se encontraría dentro del plazo establecido en el artículo 17.2 del Código Civil, por lo que procede se estime su solicitud de opción a la nacionalidad española.

V

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 20 del Código Civil (CC); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 347 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9.^a de septiem-

bre y 5-2.^a de diciembre de 2001; 21-5.^a de enero, 5 de mayo y 6-3.^a de noviembre de 2003; 20-1.^a de julio de 2004; 20-3.^a de septiembre de 2005; 7-2.^a de octubre de 2005; 5-2.^a de enero, 10-4.^a de febrero, 20-5.^a de junio y 20-5.^a de noviembre de 2006; 21-2.^a de febrero, 16-4.^a de marzo y 17-4.^a de abril de 2007 y 7-1.^a de febrero y 7-6.^a de mayo de 2008.

II. La interesada, nacida en Valencia (Venezuela) el 12 de mayo de 1985, formula solicitud de opción por la nacionalidad española por ser hija de padre nacido en C. (Francia), que recupera su nacionalidad española de origen el 9 de julio de 2003. Basaba su petición en el artículo 20.1.b) CC, en su redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española «aquellas [personas] cuyo padre o madre hubiere sido originariamente español y nacido en España». Por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central se dictó acuerdo denegando la solicitud, toda vez que la interesada era mayor de edad en el momento en que se determina su filiación respecto de un nacional español, habiendo transcurrido en exceso el plazo de los dos años que el artículo 17.2 del Código Civil establece para el ejercicio del derecho de opción. Dicho acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. La pretensión de la interesada no puede ser estimada, porque son dos los requisitos que exige el artículo 20.1.b) CC para que prospere el ejercicio del derecho de opción y uno de ellos no resulta acreditado en el presente caso, cual es, el del nacimiento en España del padre, puesto que en la inscripción de nacimiento de éste consta que nació en C. (Francia). Dado que el padre de la promotora, siendo español de origen, no nació en España, no puede prosperar la opción ejercitada prevista en el artículo 20.1.b) del vigente Código Civil, al no cumplir con uno de los requisitos exigidos en el mismo. Por otra parte, tampoco puede prosperar la opción a la nacionalidad española, establecida en el artículo 20.1.c) del Código Civil, en relación con el artículo 17.2 del Código Civil, de acuerdo con los cuales, tienen derecho a optar por la nacionalidad española, en los casos en que la filiación o el nacimiento en España, se produzca después de los dieciocho años de edad, si la solicitud de opción se formula en el plazo de dos años a contar desde dicha determinación, toda vez que la filiación o el nacimiento en España no son por sí solas causa de adquisición de la nacionalidad española. En el presente caso, el reconocimiento paterno se encuentra inscrito con fecha 29 de noviembre de 2011 en el certificado venezolano de nacimiento de la promotora, habiéndose levantado el acta de opción en el Registro Civil de Granada con fecha 24 de abril de 2015, fuera del plazo legalmente establecido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (34.ª)

Opción a la nacionalidad española-supuestos artículo 20.1.c) CC.-1.º *No puede prosperar la opción por la nacionalidad española por razón de patria potestad cuando la adopción de la interesada es posterior a la adquisición de la nacionalidad española por la adoptante.*

2.º No obstante, no puede considerarse válida en España la adopción constituida en Guinea Ecuatorial por una ciudadana de origen ecuatoguineano y nacionalidad española, respecto de una persona menor de edad cuando no se acredite en el expediente que dicha adopción sea equivalente a la regulada en el derecho español.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS**I**

Con fecha 11 de junio de 2015, D.ª R. M. N., ciudadana española de origen ecuatoguineano, promueve ante el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) expediente para la inscripción en el Registro Civil español, previa opción de nacionalidad, de su hija B. S. M. N., menor de edad y nacida en B. (Guinea Ecuatorial) el....2010. Con fecha 22 de abril de 2015 la encargada del precitado registro, mediante auto, concede autorización a la promotora para ejercitar la opción de nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2.a.

Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en la que se hace constar que la menor es hija de la promotora y no tiene filiación paterna, permiso de residencia en España de la menor como familiar de ciudadano de la Unión Europea, válida hasta el año 2019, certificado de empadronamiento de la menor en Las Palmas de Gran Canaria desde el 18 de septiembre de 2014, certificado literal de nacimiento local de la menor, en el que se hace constar que la inscripción se practica en virtud de expediente fuera del plazo legal, tramitado y aprobado por el Registro Civil de Bata por auto de 6 de agosto de 2014, también se hace constar que la Sra. M. N. es de nacionalidad ecuatoguineana, documento nacional de identidad español de la Sra. M. y certificado literal de nacimiento español de la misma, con marginal de nacionalidad por residencia con fecha 22 de febrero de 2014 e inscripción practicada con fecha 23 de abril siguiente y acta de opción suscrita por la promotora ante la encargada del Registro Civil de Las Palmas. Posteriormente se remitió la documentación al Registro Civil Central competente, en su caso, para la inscripción.

II

Con fecha 28 de septiembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta providencia, solicitando testimonio del expediente de nacionalidad de la Sra. M. N., especialmente en lo relativo a la mención de la existencia de hijos menores de edad. Consta que fue

aportada al expediente copia de la solicitud formulada por la interesada con fecha 11 de febrero de 2013, en ella se declara soltera, residente en España desde el año 2003 y no menciona hijos menores de edad.

III

El encargado del Registro Civil Central dictó auto el 13 de enero de 2016 denegando la inscripción solicitada ya que no puede tenerse por acreditado el hecho que se pretende inscribir, puesto que cuando la interesada tramitó su nacionalidad española por residencia no mencionó, como estaba obligada, la existencia de hijos menores, pese a que la optante era menor de edad en aquél momento.

IV

Notificada la resolución a la promotora, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su hija no fue declarada cuando solicitó la nacionalidad española porque fue adoptada con posterioridad, añadiendo que tramitó ante el Consulado español en B. el visado para que la menor viniera a España y se le concedió sin ningún problema, solicitando que se le dé un plazo razonable para aportar los documentos que acreditan la filiación adoptiva de la menor.

V

Posteriormente la Sra. M. aporta documento denominado certificado de adopción, expedido el 28 de julio de 2014, por la Delegada Provincial encargada del Registro Civil de B.-L. en el que se hace constar que la madre biológica de la menor es F. B. N. y que ésta, al no poder seguir cuidando de su hija, la cede voluntariamente en adopción a R. M. N. y documento de la misma fecha, expedido por el Jefe del Consejo de Poblado de los C., dependiente del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales de Guinea Ecuatorial, que recoge que la comparecencia de la madre biológica y la adoptiva de la menor, hermanas por vía materna, en la que la primera cede voluntariamente a su hija, B. S., en adopción.

VI

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 12, 19, 20, 175, 176, 177, 178 y 180 del Código Civil (CC); artículo 41 de la Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria, artículos 14 a 20 y 26 de la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción

internacional, artículos 1, 15, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 6-1.^a de abril y 24-1.^a de junio de 2006; 21-2.^a de octubre de 2008; 4-1.^a y 2.^a de enero de 2010; 1-34.^a y 35.^a de abril, 29-27.^a de octubre de 2012 y 4-163.^a de noviembre de 2013.

II. Se pretende en el presente expediente la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1a) CC de una ciudadana ecuatoguineana, nacida en B. el 10 de mayo de 2010, como hija de una ciudadana de origen ecuatoguineano y nacionalizada española en febrero del año 2014. El encargado del Registro Civil Central denegó la inscripción porque la promotora no mencionó la existencia de hijos menores de edad cuando solicitó en el año 2013 la nacionalidad española. Posteriormente en su recurso la promotora alega que su hija fue adoptada en Guinea Ecuatorial en julio del año 2014, aportando documentos que a su juicio así lo acreditan.

III. Por aplicación del artículo 19.1 del Código Civil, el extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen, por tanto en este caso de acreditarse la filiación adoptiva de la menor en cuestión no procedería instar una opción de nacionalidad española, ya que la tendría de origen. Ahora bien, la autoridad española ante la que se plantee la validez de una adopción con ocasión de cualquier otro trámite o actuación de su competencia –en este caso la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española– debe proceder a realizar el reconocimiento incidental para verificar si la adopción constituida por la autoridad extranjera reúne o no los presupuestos y requisitos exigidos en el artículo 26 de la Ley de Adopción Internacional para acceder al Registro Civil español. Dichos presupuestos son los siguientes: 1) que la adopción haya sido constituida por autoridad extranjera competente; 2) que se haya constituido con arreglo a la ley o leyes estatales designadas por las normas de conflicto del país del que depende la autoridad extranjera que constituyó la adopción; 3) cuando el adoptante o el adoptado sea español, la adopción constituida por autoridad extranjera debe surtir los efectos jurídicos que se corresponden, de modo sustancial, con los efectos de la adopción regulada en Derecho español y, en particular, las autoridades españolas controlarán que la adopción constituida por autoridad extranjera produzca la extinción de vínculos jurídicos sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, que haga surgir los mismos vínculos de filiación que los de la filiación por naturaleza y que sea irrevocable por los adoptantes; 4) cuando el adoptante sea español y residente en España, la entidad pública española competente deberá declarar su idoneidad previamente a la constitución de la adopción por el órgano competente extranjero; 5) el documento en el que conste la adopción constituida ante autoridad extranjera deberá reunir los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalización o apostilla y en la traducción al idioma oficial español.

IV. En este caso, como se ha dicho, originariamente se solicitó la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad sobre la base de la patria potestad ejercida por una ciudadana española sobre su hija menor de edad, si bien posteriormente en vía de recurso se alegó la filiación adoptiva de la menor en base a la adopción constituida en Guinea Ecuatorial, al parecer según la normativa local, no quedando debidamente acreditada puesto que no se ha aportado resolución que constituya dicha adopción, pero además se produce cuando la adoptante ya era ciudadana española, por lo que le era de aplicación lo establecido en la Ley 54/2007 de adopción internacional que establece la competencia y el procedimiento a seguir, que salvo casos establecidos incluye la intervención de entidades públicas que aseguran la idoneidad de la persona que pretende adoptar, no siendo así en el caso aquí examinado por lo que, en consecuencia, no existe la correspondencia de efectos exigida por el artículo 26 de la Ley de Adopción Internacional para que pueda acceder al Registro Civil español.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

3.4 Adquisición de la nacionalidad española por residencia

(No hay Resoluciones para este apartado)

3.5 Conservación. Pérdida. Renuncia a la nacionalidad española

3.5.1 CONSERVACIÓN, PÉRDIDA, RENUNCIA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 13 de enero de 2017 (2.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que la inscripción de la interesada en el registro civil español se produce con posterioridad a la adquisición de su mayoría de edad y la misma reside en España.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Con fecha 17 de julio de 2015, el Canciller del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana) solicita se instruya expediente de pérdida de la nacionalidad española conforme al artículo 24.3 del Código Civil a D.ª Z. R. R. nacida el 16 de febrero de 1989 en S. D. (República Dominicana), hija de don P. R. V., nacido en R. S. J. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana y de D.ª Z. R. L., nacida en R. S. J. (República Dominicana), de nacionalidad española.

II

El Cónsul Adjunto de España en Santo Domingo acuerda instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española, levantándose acta de notificación a la interesada, compareciendo ésta el día 17 de julio de 2015 ante el encargado del registro civil consular, informándole de la instrucción del expediente, por no haber manifestado su voluntad de conservar la

nacionalidad española ante el encargado del registro civil consular, en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad, no formulando la interesada alegaciones al respecto.

III

El órgano en funciones del ministerio fiscal emite informe en fecha 17 de julio de 2015 estimando cumplidos los requisitos del artículo 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española.

IV

Con fecha 17 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo dicta auto por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española de la interesada, que consta inscrita en el Registro Civil Central, Tomo 51114, Página 87.

V

Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y alegando que ha vivido la mayor parte de su vida en España y que, desde el año 2010 convive con su madre en L. B. (León). Aporta como documentación: certificado de inscripción padronal, expedido por el Ayuntamiento de L. B. (León) con fecha de alta en el padrón de 09 de julio de 2010; certificado de inscripción padronal de su progenitora, expedido por el Ayuntamiento de L. B. (León), con fecha de alta en el padrón de 20 de diciembre de 2004; certificado local de nacimiento de la interesada; permiso de conducir español con fecha de validez de 17 de agosto de 2011 hasta el 17 de agosto de 2021; comunicación de mantenimiento del derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social desde el 01 de julio de 2015, expedido por la Dirección Provincial del INSS de León y certificado de inscripción en la Universidad APEC de Santo Domingo en el cuatrimestre de mayo-agosto de 2015.

VI

Notificado el recurso al órgano en funciones del ministerio fiscal, no formula alegaciones al respecto y el encargado del registro civil consular, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe en el que indica que, hechas las comprobaciones oportunas, se considera probada la residencia en España de la recurrente entre los años 2007 a 2010, por lo que no habría incurrido en causa de pérdida de la nacionalidad española, de conformidad con el artículo 24.3 del Código Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposi-

ción adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000; y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. Se pretende por la interesada, nacida en S. D. (República Dominicana) el 16 de febrero de 1989, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, alegando su residencia en España. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 17 de julio de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento del promotor, la pérdida de la nacionalidad española. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que «Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación».

IV. Examinados los datos del interesado resulta que ésta nació en S. D. (República Dominicana), encontrándose probada su residencia en España desde el año 2007, y su madre, de nacionalidad española, también nació en el extranjero, R. S. J. (República Dominicana), alcanzó la mayoría de edad el 16 de febrero de 2007, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (*cf.*: disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida.

Sin embargo, en el caso examinado, no procede la aplicación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que la redacción del mismo se entiende referida a aquellos supuestos en los que la inscripción de nacimiento en el registro civil español se ha producido con anterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad por los interesados, por la voluntad de sus representantes legales y no de los menores inscritos, motivo por el cual, en el precepto citado, se otorga en estos casos un plazo de tres años a contar desde el cumplimiento de su mayoría de edad o emancipación para que los inscritos manifiesten su voluntad de conservar la nacionalidad española, efectuando al efecto declaración ante el encargado del registro civil.

En el caso que nos ocupa, la interesada adquirió la mayoría de edad el 16 de febrero de 2007 y la inscripción en el Registro Civil Central de la misma se produce el 09 de septiembre de 2010, cuando la promotora contaba con 21 años de edad. Por otra parte, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, se considera probada la residencia en España de la interesada entre los años 2007 a 2010, habiéndose aportado al expediente certificado de

empadronamiento de la misma en el Ayuntamiento de L.B. (León), con fecha de alta en el padrón de 09 de julio de 2010.

Por tanto, la solicitud y posterior inscripción de nacimiento de la interesada, se produce con posterioridad a la adquisición de la mayoría de edad de la recurrente y al período establecido para la declaración de conservación de la nacionalidad española por el artículo 24.3 del Código Civil de acuerdo con la redacción establecida en la Ley 36/2002, de 8 de octubre, por lo que no se dan las circunstancias establecidas en dicho precepto legal para la pérdida de la nacionalidad española. Por otra parte, de acuerdo con la documentación integrante del expediente, resulta acreditado que la interesada residía en España con anterioridad al cumplimiento de los 21 años, por lo que no estaba obligada a realizar la declaración de conservación prevista en el artículo 24.3 del Código Civil para evitar la pérdida de la nacionalidad española y la inscripción de la pérdida se realizó, por tanto, sin que resultara procedente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 13 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 24 de enero de 2017 (5.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.–*Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del Código Civil al concurrir en la interesada todos los condicionantes previstos.*

En las actuaciones sobre declaración de pérdida de la nacionalidad española adquirida por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Por medio de informe fechado el 30 de junio de 2014, el órgano en funciones de ministerio fiscal del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana),

instaba expediente de pérdida de la nacionalidad española de D.^a Y. S. G., dominicana de origen que adquirió la nacionalidad española por opción en 2001, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Código Civil por haber utilizado durante más de tres años de estancia en el extranjero exclusivamente su nacionalidad dominicana. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central de Y. S. G., nacida el 20 de marzo de 1986 en la República Dominicana, hija de padres dominicanos, con marginales de adquisición de la nacionalidad española por residencia de la madre en 2000 y de opción de la inscrita a la misma nacionalidad el 26 de noviembre de 2001; inscripción de nacimiento de la madre practicada en el Registro Civil Central el 30 de mayo de 2000 con marginal de nacionalidad española por residencia; pasaporte español de la interesada caducado el 4 de junio de 2009; pasaporte dominicano en vigor; resolución de 30 de agosto de 2013 de un órgano judicial dominicano declarando el cumplimiento definitivo y extinción de la pena impuesta a la interesada por sentencia de 28 de agosto de 2007; correo electrónico del consulado español en junio de 2014 solicitando información acerca de la fecha de caducidad del DNI extraviado de la interesada y respuesta del órgano correspondiente informando de que se le había expedido un DNI el 13 de mayo de 2002.

II

Notificada la interesada y emitido un nuevo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro dictó resolución el 30 de junio de 2014 acordando la declaración de pérdida de la nacionalidad española y su inscripción en el asiento de nacimiento por uso exclusivo de la nacionalidad extranjera durante más de tres años a partir del 20 de noviembre de 2009, cuando la inscrita salió de prisión en libertad condicional.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la interesada que cuando obtuvo la libertad condicional se dirigió al consulado español para renovar su pasaporte y comunicar el motivo por el que no lo había podido hacer antes, requiriéndole entonces las autoridades españolas la presentación de varios documentos necesarios para realizar la gestión, si bien, por diferentes circunstancias, no pudo reunirlos todos hasta bastante tiempo después (no especifica la fecha de presentación en el consulado) y que cuando, finalmente, fue citada en las oficinas de la embajada, se le comunicó que había perdido su nacionalidad española, lo que la recurrente considera que no es ajustado a derecho por haber concurrido en su caso circunstancias excepcionales.

IV

Del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC), 46 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC), 66 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 17-1.^a de mayo de 2013; 20-19.^a de mayo de 2014 y 30-52.^a de marzo de 2015.

II. La recurrente, dominicana de origen nacida en marzo de 1986, pretende que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española –adquirida por opción en noviembre de 2001– que fue acordada por el encargado del registro por utilización exclusiva de la nacionalidad dominicana durante más de tres años residiendo en el extranjero.

III. Dispone el artículo 24.1 CC que «Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil». La recurrente obtuvo la nacionalidad española por opción en 2001 y se le expidió un pasaporte español que caducó el 4 de junio de 2009, cuando ya se encontraba residiendo nuevamente en su país de origen y sin que conste acreditada actuación alguna por su parte para la renovación del documento hasta 2014. Se da la circunstancia, no obstante, de que la interesada fue condenada penalmente por un tribunal dominicano en 2007 a una pena de prisión, habiendo obtenido la libertad condicional el 20 de noviembre de 2009, de manera que el cómputo del referido plazo de tres años debe hacerse desde esta fecha en tanto que es evidente que hasta entonces no habría podido presentarse en el consulado para renovar su documentación caducada. Pero, en cualquier caso, no consta que desde que obtuvo la libertad condicional y hasta 2014 la interesada realizara ninguna actividad que implicara de algún modo la utilización de su nacionalidad española, de manera que concurren todas las circunstancias previstas en el artículo 24 CC como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 3 de marzo de 2017 (22.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que la interesada manifestó su voluntad de conservar la nacionalidad española dentro de los tres años siguientes a su mayoría de edad.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en Río de Janeiro (Brasil).

HECHOS

I

Con fecha 21 de febrero de 2011, D.ª C. B. F., nacida el 22 de enero de 1986 en R. J. (Brasil), hija de Don I. B. S., nacido en Brasil y de nacionalidad española y de D.ª V. M. F. S., nacida en Brasil, de nacionalidad brasileña, presenta escrito ante el Registro Civil Consular de España en Río de Janeiro (Brasil), en relación con su solicitud de nacionalidad española, que había formulado con anterioridad.

II

A la vista de la instancia presentada, con fecha 02 de mayo de 2012, el encargado del registro civil consular, procede a instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que la interesada entre los 18 y los 21 años no realizó la declaración de conservación de la nacionalidad española.

III

Notificada la interesada de la incoación del expediente de pérdida de la nacionalidad española, comparece en fecha 12 de noviembre de 2012 ante el encargado del registro civil consular, alegando que desconocía el contenido del artículo 24.3 del Código Civil y que con fecha 08 de noviembre de 2005 presentó solicitud de nacionalidad española a través del «cuestionario para la nacionalidad» facilitado por el registro civil consular, concediéndole cita para el día 06 de enero de 2006, que dicho día compareció ante el registro civil con la documentación exigida, faltando la certificación de nacimiento de su madre, documento que no consiguió hasta el año 2009, considerando que el día que formuló la solicitud de nacionalidad española, cuando tenía diecinueve años, manifestó expresamente la voluntad de conservar la nacionalidad española.

IV

Con fecha 14 de noviembre de 2012, el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe por el que, vistas las alegaciones de la interesada, considera que la interesada

manifestó su deseo de conservar la nacionalidad española en los plazos establecidos en el artículo 24.3 del Código Civil.

V

Con fecha 19 de noviembre de 2012, el encargado del registro civil consular dicta auto por el que se desestima el expediente de pérdida de la nacionalidad española y se autoriza por anotación marginal, la conservación de la nacionalidad española de la interesada en el acta de su inscripción de nacimiento obrante en el tomo, página de la sección de dicho registro civil consular. Dicha anotación marginal se llevó a cabo por el encargado del registro civil consular con fecha 20 de noviembre de 2012.

VI

Con fecha 19 de junio de 2012, la encargada del Registro Civil Consular de España en Río de Janeiro (Brasil), dicta providencia por la que establece que procede de oficio instruir expediente para cancelar la anotación marginal de conservación de la nacionalidad española de la interesada, ya que ha tenido acceso a este registro civil consular en virtud de «título manifiestamente ilegal», al no quedar acreditado que la interesada haya realizado la declaración de voluntad de conservación de la nacionalidad española en la forma y plazo legalmente previstos en el artículo 24.3 del Código Civil.

VII

Citada la interesada en las dependencias del registro civil consular de España en Río de Janeiro, en relación con el expediente de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Código Civil, no formula alegaciones al respecto.

VIII

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 02 de julio de 2015 emite informe por el que no aprecia en modo alguno la evidencia de título manifiestamente ilegal que, en su caso, daría lugar a la incoación de expediente gubernativo para la supresión o cancelación de la nota marginal de la interesada, indicando que la anotación marginal de conservación de la nacionalidad española de la promotora fue practicada en base a la consideración de que las actuaciones y/o declaraciones acreditadas por la misma dentro de los tres años siguientes a su mayoría de edad, constituirían manifestación inequívoca de su voluntad de mantener vivos sus vínculos con la sociedad y cultura españolas y, en definitiva, de conservación de la nacionalidad española.

IX

Por auto de fecha 06 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en Río de Janeiro acuerda que procede se cancele la marginal de conservación de la

nacionalidad española de la interesada, que figura inscrita en la página del tomo de la sección de dicho registro civil consular, por haberse practicado basándose en «título manifiestamente ilegal» y que se anote la pérdida de la nacionalidad por la causa recogida en el artículo 24.3 del Código Civil, de conformidad con el artículo 232 del Reglamento del Registro Civil.

En el fundamento de derecho 4.º del citado auto se recoge que el informe del órgano en funciones de ministerio fiscal fue favorable a la cancelación de la anotación marginal de conservación de la nacionalidad española de la interesada, circunstancia que no se corresponde con la realidad, de acuerdo con lo recogido en el hecho anterior de esta resolución.

X

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que con fecha 08 de noviembre de 2005, cuando tenía diecinueve años, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Consulado General de España en Río de Janeiro, siendo citada para la entrega de documentación el 06 de enero de 2006, no pudiendo aportar en dicha fecha el certificado de nacimiento de su progenitora, que consiguió tres años después, dadas las dificultades de su localización.

XI

Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable considerando procedente su estimación y el encargado del registro civil consular se manifiesta en el mismo sentido, considerando que la anotación marginal fue practicada en base a la consideración de que las actuaciones y/o declaraciones acreditadas por la interesada dentro de los tres años siguientes a su mayoría de edad –plazo establecido en el artículo 24.3 el Código Civil, en la redacción dada por la Ley 36/2002 de 08 de octubre– constituían manifestación inequívoca de su voluntad de mantener vivos sus vínculos con la sociedad y la cultura españolas y, en definitiva, de conservación de la nacionalidad española, no considerando procedente la cancelación de la anotación marginal de conservación de la nacionalidad española y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

XII

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, por oficio de 11 de noviembre de 2016 se solicita del registro civil consular nos confirmen la fecha en que la interesada formuló solicitud de nacionalidad española. Atendiendo al requerimiento formulado, el encargado del registro civil consular manifiesta que la promotora presentó su solicitud el 08 de noviembre de 2005, a través del «cuestionario para la nacionalidad», cuya respuesta le fue enviada el día 08 de diciembre de 2005, citándola para la presentación de la documentación para la inscripción de su nacimiento en dicho registro civil consular el día 06 de enero de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981, 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989, 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000 y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. Se pretende por la interesada, nacida en R. J. (Brasil) en 1986, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez haber manifestado su voluntad de conservar su nacionalidad española dentro de los tres años siguientes a su mayoría de edad. La encargada del registro civil consular emitió auto en fecha 06 de julio de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, la pérdida de la nacionalidad española. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que «Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación».

IV. Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Brasil) y su padre, de nacionalidad española, también nació en el extranjero (Brasil) y alcanzó la mayoría de edad el 22 de enero de 2004, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (*cfr.* disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida.

Sin embargo, en el caso examinado, no procede la aplicación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que, de acuerdo con la documentación integrante del expediente y la información facilitada por el encargado del registro civil consular, la interesada formuló solicitud de nacionalidad española el 08 de noviembre de 2005 en las dependencias del citado registro, a través del cuestionario para la nacionalidad, dentro del plazo de los tres años siguientes a la mayoría de edad establecido en la legislación, considerando que dicha solicitud de nacionalidad española constituye una manifestación de la voluntad de conservarla.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Río de Janeiro (Brasil).

Resolución de 31 de marzo de 2017 (24.^a)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la pérdida de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra acuerdo del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Don W. S. M., nacido el 23 de noviembre de 1992 en S-D. (República Dominicana), hijo de Don W. S. A., nacido el 9 de julio de 1968 en República Dominicana, de nacionalidad dominicana y de Doña A-M. M. R., nacida el 16 de julio de 1970 en República Dominicana, de nacionalidad española adquirida por residencia, adquirió la nacionalidad española por la opción efectuada por su representante legal ante el encargado del Registro Civil de Barcelona el 12 de mayo de 2005, en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil.

II

Con fecha 6 de octubre de 2015, el órgano en funciones de ministerio fiscal del Registro Consular de Santo Domingo pone en conocimiento del encargado que el interesado, mayor de edad, había utilizado durante más de tres años su nacionalidad dominicana, no siendo español de origen, por lo que se entendía que debería declararse que ha perdido la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil.

III

Con la misma fecha el encargado dicta providencia por la que acuerda instruir el correspondiente expediente, se notifique al interesado, se practiquen las diligencias oportunas y el órgano en funciones de ministerio fiscal emita su informe. El Sr. S. M. comparece ante el registro civil y es notificado de la instrucción del expediente no formulando alegación alguna. El ministerio fiscal informa que se han cumplido los requisitos para que se declare la pérdida de la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 24 del Código Civil y se proceda a inscribir marginalmente la misma en la inscripción de nacimiento del interesado. El encargado del registro civil consular, dicta auto con fecha 6 de octubre de 2015, declarando que el interesado ha perdido la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Código Civil, por haber utilizado en el extranjero por más de tres años su nacionalidad dominicana exclusivamente.

IV

Notificado el acuerdo al interesado, el mismo presenta recurso por el que reitera su solicitud, alegando que una vez que recibió su certificado literal de nacimiento español el 26 de julio de 2011, procedió a solicitar cita previa en el Consulado de España en Santo Domingo para inscribirse como español residente y tramitar su pasaporte español, aportándose copia de dicha citación que le fue concedida para el día 15 de noviembre de 2011. Al personarse en dicha fecha y entregar la documentación solicitada, se constata por el consulado de la existencia de varios errores en su certificado literal de nacimiento español, y se le indicó que debía corregirlos antes de que pudiera ser documentado como español. La rectificación de errores fue llevada a cabo por auto dictado por el encargado del Registro Civil Central de fecha 2 de diciembre de 2014, que se aporta al expediente, por lo que una vez con su certificado de nacimiento correcto, volvió a solicitar en el Consulado de España en Santo Domingo su pasaporte español, considerando el promotor que desde que cumplió la mayoría de edad, ha hecho todo lo posible para poder documentarse como español, solicitando se deje sin efecto la pérdida de su nacionalidad española.

V

Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable a su estimación, indicando que, una vez examinado el expediente y estudiado el escrito de recurso, se constata que existió una clara voluntad por parte del interesado de hacer uso de su nacionalidad española, manifestada en el inicio de los trámites administrativos de obtención del primer pasaporte español, antes del cumplimiento del plazo de los tres años establecido por la normativa vigente, no siendo imputable al recurrente la imposibilidad de llevar a término dichos trámites en el plazo legal establecido.

VI

El encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, emite informe favorable a la estimación del recurso, en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal y remite el expediente a esta Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC), 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000; y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. El órgano en funciones de ministerio fiscal ante el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo interesa que se declare que el interesado, nacido en República Dominicana en 1992, ha perdido la nacionalidad española

que había obtenido por opción con fecha 12 de mayo de 2005, y que se inscriba dicha declaración de pérdida por haber utilizado durante más de tres años exclusivamente su nacionalidad dominicana de origen. El encargado del registro civil consular dicta auto de fecha 6 de octubre de 2015, declarando la pérdida de la nacionalidad española del interesado. Esta resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el artículo 24.1 del Código Civil, que «pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil».

IV. De acuerdo con lo establecido en la instrucción de 20 de marzo de 1991 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, «no se producirá pérdida cuando el interesado justifique haber utilizado, dentro del plazo de tres años que señala el artículo (24.1), de algún modo, la nacionalidad española. Tener documentación española en vigor, haber otorgado como español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el consulado y otras conductas semejantes, serán un índice de que el interesado no habrá podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española».

V. Examinados los datos del interesado, aparece anotada marginalmente a su inscripción de nacimiento la adquisición de la nacionalidad española por opción conforme al artículo 20 del Código Civil el 12 de mayo de 2005, practicándose la inscripción de nacimiento y marginal de opción a la nacionalidad española el 19 de noviembre de 2007. El promotor adquirió su mayoría de edad el 23 de noviembre de 2010, saliendo de España para regresar a República Dominicana, sin haber solicitado hasta ese momento documentación española. Se ha aportado al expediente citación por correo electrónico para la obtención del pasaporte español con fecha 15 de noviembre de 2011, efectuada por el Consulado General de España en Santo Domingo, informando el encargo del registro civil consular que esta es la vía establecida para la solicitud del primer pasaporte español. De este modo, ha quedado acreditado que existió voluntad por parte del interesado de hacer uso de su nacionalidad española, dentro del plazo legal establecido de tres años a contar desde su emancipación, no siendo imputable al mismo la imposibilidad de llevar a términos los trámites administrativos de obtención del pasaporte español en el plazo legalmente establecido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 31 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 7 de abril de 2017 (21.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando el interesado alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil).

HECHOS

I

Con fecha 1 de octubre de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) acuerda instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española conforme al artículo 24.3 del Código Civil a R. C. Q., nacido el 11 de enero de 1990 en P. A., R. G. del S. (Brasil), hijo de D-A. C. R., nacido en P. A. en 1953 y de nacionalidad brasileña y de E. Q. C., nacida en C. (R. G. del S.) en 1954 y de nacionalidad española, casados en 1980.

II

Notificado el interesado del inicio del expediente de pérdida de la nacionalidad española, se le cita para que comparezca el 21 de octubre de 2015 en el registro civil consular para formular las alegaciones que estime pertinentes. El interesado se dirige al registro para manifestar su imposibilidad de acudir antes del 25 de octubre, siendo citado de nuevo para el día 9 de noviembre de 2015, sin que compareciera a la misma.

III

El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que entiende acreditado que el inscrito ha incurrido en causa de pérdida de la nacionalidad española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, puesto que no declaró su voluntad de conservarla en el plazo establecido para ello. El encargado del registro civil consular dicta resolución en fecha 16 de noviembre de 2015 declarando la pérdida de la nacionalidad española del inscrito y la correspondiente anotación en su inscripción de nacimiento, porque no ha declarado ante el encargado del registro civil su voluntad de conservarla en el plazo de tres años desde su mayoría de edad o su emancipación.

IV

Notificado el acuerdo al interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que desconocía que existiera la obligación de declarar que quería mantener su nacionalidad española, que no había sido informado de ello pese a que solicitó y le fue expedido su pasaporte español en enero de 2011, siendo luego en 2015 cuando se le comunica que ha perdido su nacionalidad española.

V

Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable a anotar marginalmente la pérdida de la nacionalidad española del interesado en su inscripción de nacimiento. El encargado se ratifica en su decisión y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000; y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. Se pretende por el interesado, nacido en Porto Alegre (Brasil) el 11 de enero de 1990, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su madre, española nacida en el extranjero. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 16 de noviembre de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento del interesado la pérdida de dicha nacionalidad española. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que «Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación». Examinados los datos del interesado resulta que éste nació y reside en el extranjero (Brasil) y su madre de nacionalidad española también nació en el extranjero. Alcanzó la mayoría de edad el 11 de enero de 2008, o sea, después de que entrase en vigor el

precepto transcrito (*cf.* disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

IV. Finalmente, en cuanto a las alegaciones realizadas por el interesado en su escrito de recurso, en las que indica que en diciembre del año 2010 solicitó en el Consulado General de España en Porto Alegre la expedición del pasaporte español y le fue expedido el 27 de enero de 2011, hay que recordar que el hecho de estar incluido en el registro de matrícula o de estar en posesión de pasaporte y de documento nacional de identidad son errores de la Administración que podrán surtir otros efectos, pero no bastan para probar legalmente la nacionalidad española. Es cierto que el DNI sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular (*cf.* art. 1 núm. 2 del RD 1553/2005, de 23 de diciembre), pero, como viene reiterando este centro directivo a partir de la resolución de 18 de mayo de 1990 (vid. v.gr. resolución de 6-1.ª de noviembre de 2002), esa presunción no es absoluta pues su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos e, incluso en éstos, puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el mismo expediente (*cf.* art. 2 LRC e Instrucción DGRN de 7 de febrero de 2007 sobre los requisitos registrales para expedir la certificación literal de la inscripción de nacimiento para la obtención del DNI) y, en cualquier caso, no rige en el ámbito del registro civil por afectar a materias de Derecho privado en cuya tramitación se aplican supletoriamente las leyes procesales (*cf.* arts. 16 y 349 RRC). De este modo, la declaración de conservación de la nacionalidad española que establece el artículo 24.3 del Código Civil, ha de ser realizada en tiempo y forma, es decir, se exige que se realice dentro del plazo indicado de los tres años desde la mayoría de edad o emancipación y, desde el punto de vista formal, la mencionada declaración de conservación de la nacionalidad española deberá ser efectuada en forma expresa ante el encargado del registro civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Porto Alegre (Brasil).

Resolución de 28 de abril de 2017 (30.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que ni el interesado, al no estar capacitado para ello, ni sus representantes legales, al no obtener la sentencia de incapacitación hasta abril de 2012, pudieron formular en plazo la declaración de conservación.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los progenitores del interesado, incapacitado judicialmente, contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

I

Con fecha 11 de diciembre de 2015, el canciller del Consulado General de España en São Paulo (Brasil) solicita se instruya expediente de pérdida de la nacionalidad española conforme al artículo 24.3 del Código Civil a Don F. B. D., nacido el 8 de junio de 1985 en S. P. (Brasil), hijo de Don C. B. F., nacido en Brasil y de nacionalidad española y de Doña S. C. D. B., nacida en Brasil, de nacionalidad brasileña.

II

El cónsul adjunto de España en São Paulo (Brasil) acuerda instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española, levantándose acta de notificación al padre y a la madre, esta última representante legal del interesado, compareciendo éstos el día 11 de diciembre de 2015 ante el encargado del registro civil consular, informándole de la instrucción del expediente, por no haber manifestado el interesado su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil consular, en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad, informándoles que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 del Reglamento del Registro Civil, pueden formular las alegaciones que estime conveniente dentro del plazo de diez días naturales.

III

Dentro del plazo establecido al efecto, los progenitores del interesado presentan escrito de alegaciones ante el registro civil consular alegando la imposibilidad de declaración de conservación de la nacionalidad española por su hijo, ya que el mismo se encuentra incapacitado judicialmente por situación de minusvalía psíquica, por sentencia de 16 de abril de 2012, dictada por el Juzgado de Derecho número 3 de la Familia y de las Sucesiones de São Paulo (Brasil), que se aportó al expediente y que tampoco pudieron realizar los progenitores dicho trámite, en su nombre y representación, toda vez que no obtuvieron la sentencia de incapacitación hasta abril de 2012.

IV

El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en fecha 29 de diciembre de 2015 estimando cumplidos los requisitos del artículo 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española, ya que ni el interesado, ni sus representantes legales, comparecieron en el plazo previsto para declarar su voluntad de conservar la nacionalidad española.

V

Con fecha 29 de diciembre de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española del interesado en el tomo 128, página 147, de la sección primera de dicho registro civil, al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 24.3 del Código Civil.

VI

Notificados los representantes legales y progenitores del interesado, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise el expediente de su hijo, y alegando que el mismo padece una enfermedad mental desde su nacimiento en 1985 y que se encuentra impedido desde entonces para regir su propia persona, tal y como se desprende de la sentencia dictada por el Juzgado de Derecho número 3 de la Familia y de las Sucesiones de São Paulo (Brasil), en la que se nombra tutora del incapacitado a su madre, por lo que el interesado no pudo realizar el trámite de conservación de la nacionalidad española en el plazo legalmente previsto, al no estar capacitado para ello, y que tampoco los progenitores pudieron realizar dicho trámite en su nombre y representación, porque no obtuvieron la sentencia de incapacitación de su hijo hasta abril de 2012, fecha en la que se nombró tutora del interesado a su madre, cuando éste contaba 26 años.

VII

Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable a su estimación, indicando que, si bien el artículo 24.3 del Código Civil no contiene excepciones o reglas especiales para los supuestos de personas con discapacidad, lo cierto es que, a juicio del citado órgano, ha quedado plenamente acreditado que ni el interesado ni sus representantes legales, pudieron formular en plazo la declaración de conservación que expresamente exige para estos casos el artículo 24.3 del Código Civil, por lo que resultaba materialmente imposible el cumplimiento de lo establecido en el artículo citado, proponiéndose la posibilidad de dejar sin efecto el auto impugnado. El encargado del registro civil consular, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe favorable a su estimación, redactado en los mismos términos que el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000; y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. Se pretende por los progenitores del interesado, nacido en São Paulo (Brasil), que se deje sin efecto la declaración de pérdida de la nacionalidad española de su hijo en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que ni el interesado, ni la representante legal del mismo pudieron formular en plazo la declaración de conservación que expresamente exige dicho artículo.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que «Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación».

IV. Examinados los datos del interesado resulta que éste nació y reside en el extranjero (Brasil) y su padre, de nacionalidad española, también nació en el extranjero (Brasil) y alcanzó la mayoría de edad el 8 de junio de 2003, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (*cf.* disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida. Sin embargo, en el caso examinado, no procede la aplicación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que, si bien el citado artículo no contiene excepciones o reglas especiales para los supuestos de personas con discapacidad, lo cierto es que queda acreditado que el interesado no pudo realizar el trámite de conservación de la nacionalidad española al no encontrarse capacitado para ello, de acuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de Derecho número 3, de la Familia y de las Sucesiones de São Paulo (Brasil) en fecha 16 de abril de 2012, por la que se incapacita al interesado al presentar un retraso mental, con incapacidad absoluta y permanente desde el nacimiento, resultando incapaz para los actos de la vida civil, declarando tutora del mismo a su progenitora. Por otra parte, los padres del interesado tampoco pudieron realizar el trámite de conservación de la nacionalidad española dentro del plazo legalmente establecido, toda vez que no obtuvieron la sentencia de incapacitación de su hijo hasta el 16 de abril de 2012, fecha en la que el interesado tenía 26 años. Por tanto, ha quedado acreditado que, ni el interesado, ni su progenitora y tutora del mismo, pudieron materialmente formular en plazo la declaración de conservación de la nacio-

nalidad española establecida en el artículo 24.3 del Código Civil de acuerdo con la redacción establecida en la Ley 36/2002, de 8 de octubre, no procediendo, de este modo, la inscripción de la pérdida de la nacionalidad española del interesado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 28 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 30 de junio de 2017 (11.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de conservación de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre conservación de la nacionalidad española, remitidas a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 26 de marzo de 2015, se levanta acta de conservación de la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en Chicago (Estados Unidos de América), por la que Don J. C. P., mayor de edad, nacido en C. de Á. (Cuba) el 11 de julio de 1985, y de nacionalidad española y estadounidense, obtenida en el caso de la española por opción en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.b) del Código Civil, con efectos de 13 de julio de 2001, solicita conservar la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, alegando que no habiendo transcurrido tres años desde la adquisición de la nacionalidad estadounidense, es su voluntad conservar la nacionalidad española. Aporta como documentación; pasaporte español y estadounidense, certificado literal español de nacimiento inscrito en el Registro Civil Central, con anotación marginal de obtención de la nacionalidad española no de origen por opción, en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.b) del Código Civil y original de certificado de adquisición de la nacionalidad estadounidense por naturalización.

II

Remitida toda la documentación al Registro Civil Central, el magistrado-juez encargado del citado registro dicta acuerdo el 13 de enero de 2016 por el que deniega la solicitud en base a que el artículo 24.1 del Código civil es aplicable únicamente a los españoles de origen, circunstancia ésta de la que no goza el interesado pues ha obtenido la nacionalidad española de forma derivada, en concreto en virtud de la opción establecida en el artículo 20.1.a) y 2.b) del Código Civil, con efectos de 13 de julio de 2001.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la conservación de la nacionalidad española, alegando que a su entender no está claro que el artículo 24.1 del Código Civil sea aplicable sólo a los españoles de origen, no adjuntando nueva documentación que justifique su pretensión.

IV

Notificado el ministerio fiscal interesa la desestimación del recurso y, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución informando de que a su juicio procede la confirmación de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 24 del Código civil (CC); 2, 15, 16, 23, 46 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 231 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones 27-4.^a y 5.^a de marzo de 2002; 13-5.^a de marzo de 2007; 4-5.^a y 6.^a de febrero de 2009.

II. Se pretende por el interesado, nacido en C. de Á., Cuba en 1985 y de nacionalidad española adquirida por opción, que se haga constar marginalmente en su inscripción de nacimiento la declaración de conservación de la nacionalidad española. Para ello comparece ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Chicago (EEUU), declarando su voluntad de conservar la nacionalidad española a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Código Civil. Así consta en el acta extendida el 26 de marzo de 2015, la cual fue remitida al Registro Civil Central donde se hallaba inscrito el nacimiento del interesado. Por el magistrado-juez encargado de dicho registro se emitió acuerdo señalando que no procedía practicar la citada declaración de conservación de la nacionalidad española, porque el artículo 24.1 del Código Civil es aplicable únicamente a los españoles de origen, circunstancia ésta de la que no goza el interesado, por constar que adquirió la nacionalidad por la

opción establecida en el artículo 20.1.a) y 2.b) del Código Civil. Dicho acuerdo desestimatorio constituye el objeto del presente recurso.

III. Entre las modificaciones que introdujo en la regulación de la nacionalidad en el Código Civil la Ley 36/2002, de 8 de octubre, deben a los efectos de resolución de este recurso, destacarse los relativos a la materia de pérdida (*cf.* art. 24 y 25 CC). Así, si se sigue perdiendo la nacionalidad española por los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero, adquieren voluntariamente otra nacionalidad o utilizan exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación, produciéndose la pérdida una vez que transcurren tres años a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación, se introduce, no obstante, la novedad de que los interesados pueden evitar la pérdida si dentro del plazo establecido declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil, lo que supone rehabilitar en cierta medida la conservación de la nacionalidad española para los emigrantes que había introducido la Ley 51/1982, de 13 de julio y que, como había hecho notar la doctrina, había quedado suprimida, sin explicación clara para ello, por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre.

IV. Pues bien, en la tradición histórica española, nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos tipos distintos de nacionalidad española, la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil, y sin perjuicio de la retroacción de los efectos favorables al momento de la concepción que resulta del artículo 29 del Código Civil (*vid.* resolución 26-1.º de diciembre de 2002). Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen, además de poder ser tutores del Rey (*vid.* art. 60 núm. 1 de la Constitución), no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 núm. 2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española, según resulta de lo establecido en el artículo 11 núm. 3 de la Constitución española y 24 del Código Civil. Pero en todo caso es evidente que la conservación de la nacionalidad presupone necesariamente, por un lado, la previa tenencia de la nacionalidad española, lo que queda demostrado por la documentación obrante en el expediente, pero también es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 del Código Civil, que si bien no lo señala expresamente, cabría entender aplicable a nacionales originarios, ya que el artículo 25 del CC sí que aclara

expresamente que se refiere a los españoles que no sean de origen. En este sentido, se estima que el hecho de que el interesado no sea español de origen, constituye uno de los supuestos regulados en los artículos 24 y 25 del Código Civil, que establecen los límites en los que se desarrolla la diferencia de status constitucional establecida entre españoles de origen y españoles no originarios. Así, cabe concluir que la facultad de conservación de la nacionalidad española regulada en el apartado 1.º del artículo 24 del CC sólo está prevista para los nacionales españoles de origen y no para aquellas personas que han adquirido la nacionalidad española no de origen, como ocurre en el caso del interesado, ya que de la certificación literal de nacimiento aportada se observa que adquirió la nacionalidad por la opción establecida en el artículo 20.1.a) y 2.b) del Código Civil, sin necesidad de renuncia a su nacionalidad anterior. En conclusión, se estima que el interesado no puede acogerse a la facultad de conservación de la nacionalidad española regulada en el artículo 24.1 del Código Civil, por estar prevista para españoles de origen.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 30 de junio de 2017 (47.^a)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española por no resultar acreditado que la interesada se encuentre en los supuestos establecidos por los artículos 24 y 25 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Doña R-E. L. S., nacida el 22 de mayo de 1959 en S-J. de la M. (República Dominicana), adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos de 4 de noviembre de 1998, no renunciando a su anterior nacionalidad dominicana.

II

Con fecha 12 de mayo de 2015, el canciller del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana), en funciones de ministerio fiscal, solicita la incoación de expediente gubernativo promoviendo la inscripción de la pérdida de la nacionalidad española en el certificado de nacimiento de la interesada, inscrito en el Registro Civil Central, argumentando que habiendo adquirido la nacionalidad española por residencia ante el encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid) el 4 de noviembre de 1998, utilizó por más de tres años su nacionalidad dominicana exclusivamente, siendo española no de origen.

III

Por providencia de 12 de mayo de 2015, dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, se instruye el expediente gubernativo solicitado, dando audiencia a la interesada con dicha fecha, no formulando alegaciones al respecto.

IV

Previo informe del ministerio fiscal de fecha 12 de mayo de 2015, en el que se indica que la promotora ha incurrido en pérdida de la nacionalidad española de acuerdo con el artículo 24.1 del Código Civil, por auto de la misma fecha dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, se establece que procede practicar la inscripción marginal de pérdida de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la interesada, que consta en el Registro Civil Central, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil.

V

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del acuerdo recurrido alegando que no puede aplicarse el supuesto contemplado en el artículo 24.1 del Código Civil, ya que en el mismo se establece que para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española, se contempla el supuesto de adquisición de otra nacionalidad, no concurriendo esta circunstancia en la recurrente, ya que no obtuvo ninguna otra nacionalidad tras adquirir la española. Indica que tampoco ha utilizado en exclusiva la nacionalidad dominicana que tenía atribuida antes de emanciparse, ya que ha venido utilizando su permiso de conducir español a fecha 25 de julio de 2009 y que durante dicho año acudió al Consulado de España en Santo Domingo, en calidad de española, para tramitar la inscripción consular de su hija, también española, ni tampoco se dan los supuestos de pérdida contemplados en el artículo 24.2 y 24.3 del Código Civil.

VI

Notificado el recurso, el órgano en funciones de ministerio fiscal no formula alegaciones al mismo y el encargado del registro civil consular, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe en el que indica que en resoluciones recientes este centro directivo ha establecido como criterio de interpretación del mencionado precepto que el artículo 24 del Código Civil se refiere únicamente a los espa-

ños de origen, quedando los supuestos de pérdida de nacionalidad regulados por el artículo 25 del Código Civil, reservado para los españoles de no origen, por lo que cabría concluir, que la interesada no habría incurrido en causa de pérdida de nacionalidad española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 y 25 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2.^a de septiembre, 4-1.^a de diciembre de 2000; y 8-6.^a de noviembre de 2006.

II. Se pretende por la interesada, nacida en San Juan de la Maguana (República Dominicana) el 22 de mayo de 1959, la conservación de la nacionalidad española y que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida por residencia el 4 de noviembre de 1998. La encargada del registro civil consular emitió auto en fecha 12 de mayo de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, la pérdida de la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil dado que siendo española por residencia desde noviembre de 1998, utilizó por más de tres años su nacionalidad dominicana exclusivamente. La interesada interpone recurso frente al citado auto alegando que no se encuentra comprendida dentro del supuesto de pérdida establecido en el artículo 24.1 del Código Civil. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Entre las modificaciones que introdujo en la regulación de la nacionalidad en el Código Civil la Ley 36/2002, de 8 de octubre, deben a los efectos de resolución de este recurso, destacarse los relativos a la materia de pérdida (*cfr.* art. 24 y 25 CC). Así, si se sigue perdiendo la nacionalidad española por los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero, adquieren voluntariamente otra nacionalidad o utilizan exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación, produciéndose la pérdida una vez que transcurren tres años a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. Se introduce, no obstante, la novedad de que los interesados pueden evitar la pérdida si dentro del plazo establecido declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil, lo que supone rehabilitar en cierta medida la conservación de la nacionalidad española para los emigrantes que había introducido la Ley 51/1982, de 13 de julio y que, como había hecho notar la doctrina, había quedado suprimida, sin explicación clara para ello, por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. Pero en todo caso es evidente que la conservación de la nacionalidad presupone necesariamente, por un lado, la previa tenencia de la nacionalidad española, lo que queda demostrado por la documentación obrante en el expediente, pero tam-

bién es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 del Código Civil, que si bien no lo señala expresamente, cabría entender aplicable a nacionales originarios, ya que el artículo 25 del Código Civil sí que aclara expresamente que se refiere a los españoles que no sean de origen y, por lo tanto, al presente caso, puesto que la interesada obtuvo la nacionalidad española por residencia el 4 de noviembre de 1998. Así, si bien la interesada ostenta la nacionalidad dominicana desde su nacimiento, no resultaría procedente inscribir una declaración de conservación de la nacionalidad española, ya que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el artículo 24 se referiría únicamente a los españoles de origen. En este sentido, se estima que el hecho de que la interesada no sea española de origen, constituye uno de los supuestos regulados en los artículos 24 y 25 del Código Civil, que establecen los límites en los que se desarrolla la diferencia de *status* constitucional establecida entre españoles de origen y españoles no originarios. Así, cabe concluir que la facultad de conservación de la nacionalidad española regulada en el apartado 1.º del artículo 24 del Código Civil sólo está prevista para los nacionales españoles de origen y no para aquellas personas que han adquirido la nacionalidad española no de origen, como ocurre en el caso de la interesada, ya que de la certificación literal de nacimiento inscrita en el Registro Civil Central se comprueba que ésta adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos de 4 de noviembre de 1998, sin renunciar a su anterior nacionalidad dominicana. En conclusión, se estima que la interesada no puede acogerse a la facultad de conservación de la nacionalidad española regulada en el artículo 24.1 del Código Civil, por estar prevista para españoles de origen.

IV. Dispone el artículo 25 del Código Civil en su apartado 1 que «los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española».

Las condiciones señaladas por este artículo no concurren en el presente caso, ya que si bien la interesada nació en S.-J. de la M. (República Dominicana) el 22 de mayo de 1959, se observa de la certificación literal de nacimiento de la promotora que adquirió la nacionalidad española por residencia en noviembre de 1998, es decir, que no es española de origen, sin embargo, no tuvo que renunciar a su nacionalidad anterior, la dominicana, en virtud de lo dispuesto por los artículos 11.3 de la Constitución Española y 24.1 del Código Civil. Por otra parte, la promotora tampoco incurre en los supuestos de pérdida de la nacionalidad española establecidos en el artículo 25 CC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la resolución apelada.

Madrid, 30 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 13 de octubre de 2017 (6.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de conservación de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre conservación de la nacionalidad española, remitidas a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 27 de mayo de 2015, se levanta acta de conservación de la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en Miami, Florida (Estados Unidos de América), por la que Doña M.-I. J. G., mayor de edad, nacida el 11 de marzo de 1973 en L. H. (Cuba), y de nacionalidad cubana y española, adquirida esta última por residencia en fecha 10 de septiembre de 2004, solicita conservar la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, alegando que no habiendo transcurrido tres años desde la adquisición de la nacionalidad norteamericana, hecho que se produce el 31 de enero de 2014, es su voluntad conservar la nacionalidad española.

Aporta como documentación: certificado literal español de nacimiento de la interesada, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 10 de septiembre de 2004; pasaportes español y norteamericano de la promotora y certificado de naturalización estadounidense de la solicitante, en el que consta adquisición de la nacionalidad norteamericana el 31 de enero de 2014.

II

Remitida toda la documentación al Registro Civil Central, el magistrado-juez encargado del citado registro dicta acuerdo el 1 de febrero de 2016 por el que deniega la solicitud en base a que el artículo 24.1 del Código Civil es aplicable únicamente a los españoles de origen, circunstancia ésta de la que no goza la interesada pues ha obtenido la nacionalidad española no de origen por residencia, sin renunciar a su nacionalidad anterior.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se estime su declaración de conservación de la nacionalidad española, alegando que entregó toda la documentación requerida en el registro del Consulado General de España en Miami, Florida el 27 de mayo de 2015 y que otras personas que ostentaban nacionalidad española por residencia pudieron inscribir la declaración de conservación de la misma.

IV

Notificado el ministerio fiscal interesa la desestimación del recurso y, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución ratificándose en el acuerdo adoptado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 24 del Código Civil (CC); 2, 15, 16, 23, 46 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 231 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 27-4.^a y 5.^a de marzo de 2002; 13-5.^a de marzo de 2007; 4-5.^a y 6.^a de febrero de 2009.

II. Se pretende por la interesada, nacida en L. H. (Cuba) y de nacionalidad cubana y española, adquirida esta última por residencia, que se haga constar marginalmente en su inscripción de nacimiento la declaración de conservación de la nacionalidad española. Para ello comparece ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Miami, Florida (EEUU), declarando su voluntad de conservar la nacionalidad española a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Código Civil. Así consta en el acta extendida el 27 de mayo de 2015, la cual fue remitida al Registro Civil Central donde se hallaba inscrito el nacimiento de la interesada. Por el magistrado-juez encargado de dicho registro se emitió acuerdo señalando que no procedía practicar la citada declaración de conservación de la nacionalidad española, dado que esta facultad, que se encuentra regulada en el apartado primero del artículo 24 del Código Civil solo está prevista para los nacionales españoles de origen y no para aquellas personas que han adquirido la nacionalidad española no de origen, como ocurre en el caso de la interesada, que adquirió la nacionalidad española no de origen por residencia. Dicho acuerdo desestimatorio constituye el objeto del presente recurso.

III. Entre las modificaciones que introdujo en la regulación de la nacionalidad en el Código Civil la Ley 36/2002, de 8 de octubre, deben a los efectos de resolución de este recurso, destacarse los relativos a la materia de pérdida (*cf.* art. 24 y 25 CC). Así, si se sigue perdiendo la nacionalidad española por los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero, adquieren voluntariamente otra nacionalidad o utilizan exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación, produciéndose la pérdida una vez que transcurren tres años a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. Se introduce, no obstante, la novedad de que los interesados pueden evitar la pérdida si dentro del plazo establecido declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil, lo que supone rehabilitar en cierta medida la conservación de la nacionalidad

española para los emigrantes que había introducido la Ley 51/1982, de 13 de julio y que, como había hecho notar la doctrina, había quedado suprimida, sin explicación clara para ello, por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre.

IV. Pues bien, en la tradición histórica española, nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos tipos distintos de nacionalidad española, la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil, y sin perjuicio de la retroacción de los efectos favorables al momento de la concepción que resulta del artículo 29 del Código Civil (vid. resolución 26-1.º de diciembre de 2002).

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen, además de poder ser tutores del Rey (vid. art. 60 núm. 1 de la Constitución), no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 núm. 2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española, según resulta de lo establecido en el artículo 11 núm. 3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Pero en todo caso es evidente que la conservación de la nacionalidad presupone necesariamente, por un lado, la previa tenencia de la nacionalidad española, lo que queda demostrado por la documentación obrante en el expediente, pero también es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 del Código Civil, que si bien no lo señala expresamente, cabría entender aplicable a nacionales originarios, ya que el artículo 25 del CC sí que aclara expresamente que se refiere a los españoles que no sean de origen.

En este sentido, se estima que el hecho de que la interesada no sea española de origen, constituye uno de los supuestos regulados en los artículos 24 y 25 del Código Civil, que establecen los límites en los que se desarrolla la diferencia de «*status*» constitucional establecida entre españoles de origen y españoles no originarios. Así, cabe concluir que la facultad de conservación de la nacionalidad española regulada en el apartado 1.º del artículo 24 del CC sólo está prevista para los nacionales españoles de origen y no para aquellas personas que han adquirido la nacionalidad española no de origen, como ocurre en el caso de la interesada, ya que de la certificación literal de nacimiento aportada se observa que adquirió la nacionalidad española por residencia, sin necesidad de renuncia a su nacionalidad anterior. En conclusión, se estima que la interesada no puede acogerse a la facultad de conservación de la nacio-

nalidad española regulada en el artículo 24.1 del Código Civil, por estar prevista para españoles de origen.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (21.ª)

Pérdida de la nacionalidad española.—*No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que la inscripción del interesado en el registro civil español se produce con posterioridad a la adquisición de su mayoría de edad.*

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil).

HECHOS

I

Con fecha 28 de marzo de 2016, el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) dicta propuesta por la que declara que procede instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española de Don P. R. A. B., nacido el 4 de septiembre de 1986 en P. A. (Brasil), hijo de Don A. A. A., nacido el 7 de noviembre de 1965 en P. A. (Brasil), de nacionalidad española y de D.ª E. P. B., nacida el 26 de octubre de 1966 en U. (Brasil), de nacionalidad brasileña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil (CC), redactado conforme a la Ley 36/2002 y en virtud de velar por el principio de concordancia entre el registro civil y la realidad (artículo 26 LRC).

II

Notificado el interesado, con fecha 4 de abril de 2016 formula alegaciones ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre, indicando que no procedió a efectuar la declaración de conservación de la nacionalidad española de la que trae

causa el expediente, porque nadie le comunicó que debía hacerlo, ni siquiera al solicitar su primer pasaporte cuando ya había cumplido veintiún años de edad.

III

Con fecha 5 de abril de 2016, el canciller en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que examinada la documentación integrante del expediente y la audiencia del interesado, resulta comprobado que éste incurrió en causa de pérdida de la nacionalidad española de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, puesto que no declaró su voluntad de conservar la nacionalidad española en el plazo legalmente establecido.

IV

Con fecha 6 de abril de 2016, el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) dicta auto por el que se declara la pérdida de la nacionalidad española del interesado en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez que el interesado no formuló declaración de conservación de la nacionalidad española en el plazo legalmente establecido, resolviendo que por anotación marginal se inscriba dicha pérdida en el acta de nacimiento del promotor obrante en el tomo 20, página 433/4 del citado registro civil consular.

V

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y alegando que su nacimiento se inscribió en el Registro Civil Consular de España en Porto Alegre, con fecha 18 de enero de 2007, cuando contaba 20 años de edad, por lo que la declaración de voluntad de obtener y conservar la nacionalidad española se produjo en el plazo de tres años a partir de su mayoría de edad, tal como establece la legislación española, por lo que el citado acto de declaración de conservación debe considerarse válido y eficaz.

VI

Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable a las pretensiones del recurrente en fecha 27 de abril de 2016, en el que indica que dado que el interesado instó su inscripción en el Registro Civil Consular de España en Porto Alegre dentro del plazo de tres años establecido por ley para efectuar la declaración de conservación de la nacionalidad española, estima que no procede practicar nota marginal de pérdida de la nacionalidad española y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos que el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14-33.^a –de octubre de 2016; 13-2.^a de enero de 2017 y 17-49.^a de marzo de 2017.

II. Se pretende por el interesado, nacido en P. A. (Brasil) el 4 de septiembre de 1986, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Código Civil, toda vez haber solicitado la inscripción de su nacimiento con posterioridad a su mayoría de edad, dentro del período establecido para formular la declaración de conservación de la nacionalidad española. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 6 de abril de 2016 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento del promotor, la pérdida de la nacionalidad española. Frente a dicho auto se interpone recurso por el promotor, emitiéndose informes favorables a su estimación por el órgano en funciones de ministerio fiscal y por el encargado del registro civil consular.

III. Dispone el artículo 24.3 CC que «Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación».

IV. Examinados los datos del interesado resulta que éste nació y reside en el extranjero (Brasil) y su padre, de nacionalidad española, también nació en el extranjero (Brasil) y alcanzó la mayoría de edad el 4 de septiembre de 2004, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (*cf.* disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida.

Sin embargo, en el caso examinado, no procede la aplicación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 CC, toda vez que la redacción del mismo se entiende referida a aquellos supuestos en los que la inscripción de nacimiento en el registro civil español se ha producido con anterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad por los interesados, por la voluntad de sus representantes legales y no de los menores inscritos, motivo por el cual, en el precepto citado, se otorga en estos casos un plazo de tres años a contar desde el cumplimiento de su mayoría de edad o emancipación para que los inscritos manifiesten su voluntad de conservar la nacionalidad española, efectuando al efecto declaración ante el encargado del registro civil.

En el caso que nos ocupa, el interesado adquirió la mayoría de edad el 4 de septiembre de 2004 e instó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil

Consular de España en Porto Alegre (Brasil) el 18 de enero de 2007, cuando el promotor contaba con 20 años de edad. Por tanto, la solicitud y posterior inscripción de nacimiento del interesado, se produce con posterioridad a la adquisición de la mayoría de edad del recurrente, dentro del periodo establecido para la declaración de conservación de la nacionalidad española por el artículo 24.3 CC de acuerdo con la redacción establecida en la Ley 36/2002, de 8 de octubre, por un acto de declaración de la voluntad del interesado de ostentar la nacionalidad española, por lo que no se dan las circunstancias establecidas en dicho precepto legal para la pérdida de la nacionalidad española y la inscripción de la pérdida se realizó, por tanto, sin que resultara procedente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Porto Alegre (Brasil).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (35.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (30.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (31.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (32.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (33.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (34.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (35.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (36.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (18.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (19.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (43.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (49.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (22.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 12 de abril de 2017 (17.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 21 de abril de 2017 (10.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 21 de abril de 2017 (11.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 30 de junio de 2017 (9.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 30 de junio de 2017 (10.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 30 de junio de 2017 (12.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 30 de junio de 2017 (48.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 21 de julio de 2017 (6.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (60.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (74.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (96.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (7.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (33.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (11.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (3.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (4.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (5.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (17.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (26.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (29.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (22.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (23.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (24.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (35.^a). Pérdida de la nacionalidad española.

3.6 Recuperación de la nacionalidad española

3.6.1 RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 17 de febrero de 2017 (85.ª)

Recuperación a la nacionalidad española.—*La promotora puede recuperar porque acredita que adquirió sanguinis al nacer la nacionalidad española, conforme al artículo 17.2.º del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, y que posteriormente perdió esta nacionalidad.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Guadalajara (México).

HECHOS

I

Con fecha 27 de mayo de 2011, en el Registro Civil Consular de España en Los Ángeles (USA), se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual Doña A. S. B., nacida el 27 de noviembre de 1950 en S-G., N. L. (Méjico), hija de padres españoles, nacidos en España, declara que siendo residente en Estados Unidos, es su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen que perdió por razones de emigración y por adquisición voluntaria de la nacionalidad estadounidense. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado español de nacimiento de la interesada, inscrito en el Registro Civil Consular de España en Guadalajara (Méjico), con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 07 de abril de 2000; pasaporte español de la solicitante, con fecha de caducidad de 08 de agosto de 2010; certificado de matrimonio de la interesada, expedido por el Registro Civil de Denver, Colorado (USA); pasaporte norteamericano de la interesada, con

fecha de caducidad de 18 de agosto de 2014 y certificado de naturalización como estadounidense de la promotora de fecha 28 de julio de 2004.

II

Trasladadas las actuaciones al Registro Civil Consular de España en Guadalajara (México), con fecha 03 de noviembre de 2014, el encargado del citado Registro Civil Consular dicta acuerdo por el que declara la pérdida de la nacionalidad española de la interesada, toda vez que el 28 de julio de 2004 se naturalizó estadounidense y no realizó la oportuna declaración de conservación de la nacionalidad española antes de transcurrir tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, notificar la pérdida de la nacionalidad española a la promotora y su derecho a manifestar las alegaciones que considere oportunas en comparecencia personal ante el encargado del registro civil consular que suscribe en el plazo de treinta días naturales a contar desde su notificación. Asimismo, deniega la solicitud de recuperación de la nacionalidad española, ya que no puede considerarse a la interesada como emigrante o hija de emigrante, ya que nació en Méjico y, ni sus padres, ni la propia interesada, nunca se trasladaron desde España a los Estados Unidos por razón alguna que pudiera considerarse como motivadora de emigración.

III

Notificado el órgano en funciones del ministerio fiscal de la declaración de pérdida de la nacionalidad española, con fecha 05 de diciembre de 2014, emite informe en el que desiste de presentar alegaciones y ratifica la propuesta del encargado del Registro Civil Consular de España en Guadalajara (Méjico).

IV

Notificada la interesada de la declaración de pérdida de la nacionalidad española, con fecha 23 de febrero de 2015 formula escrito de alegaciones, en el que indica que no realizó la oportuna declaración de conservación de la nacionalidad española, establecida en el artículo 24.1 del Código Civil, al no tener conocimiento de que debía realizarla al haber adquirido por naturalización la ciudadanía estadounidense.

V

Con fecha 09 de abril de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Guadalajara (Méjico), dicta acuerdo por el que declara la pérdida de la nacionalidad española de la interesada, en virtud de que con fecha 28 de julio de 2004, se naturalizó estadounidense y no hubo realizado la oportuna declaración de conservación de nacionalidad española antes de transcurrir tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera, al no constar en dicho registro civil consular solicitud alguna de la misma.

VI

Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la recuperación de la nacionalidad española, alegando que desconocía que debía haber declarado su voluntad de conservar la nacionalidad española, al haberse naturalizado estadounidense, solicitando se incoe el preceptivo expediente de dispensa de residencia legal en España y la reconsideración de las resoluciones dictadas.

VII

El encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil en su redacción original por Real Orden de 24 de julio de 1889, 26 del Código Civil en su redacción actual; 46 y 64 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 22 de marzo de 2001; 6-1.^a de marzo de 2002; 21-3.^a de abril de 2004; 12-1.^a y 16 de julio de 2005; 12-1.^a de noviembre de 2008.

II. Se pretende por la interesada, nacida en S-G., N. L. (Méjico), hija de padres españoles y nacidos en España, la recuperación de la nacionalidad española. Por el encargado del Registro Civil Consular de España en Guadalajara (Méjico) se dictó acuerdo por el que se denegaba la inscripción de la recuperación por estimar que en la misma no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 26 del Código Civil. La promotora interpone recurso frente al citado auto, solicitando se revise su expediente.

III. Para poder inscribir una recuperación de la nacionalidad española es necesario, como es obvio, que se pruebe suficientemente que la interesada ha ostentado *de iure* y perdido, en un momento anterior, la nacionalidad española. En este sentido, se aporta al expediente certificado literal español de nacimiento de la interesada, en el que consta inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de fecha 07 de abril de 2000, en virtud de lo establecido en el artículo 17-2.º del Código Civil, en su redacción originaria que indica que son españoles «los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España». La interesada nace en Méjico en noviembre de 1950, hija de padres españoles y nacidos en España, por lo que adquirió al nacer la nacionalidad española de origen *iure sanguinis*.

IV. De acuerdo con la documentación integrante del expediente, se constata que ésta reside habitualmente en Estados Unidos, habiendo adquirido dicha nacionalidad de forma voluntaria el 28 de julio de 2004, de acuerdo con certificado de naturalización aportado al expediente. Tal como establece el

artículo 24.1 del Código Civil, la pérdida de la nacionalidad española se produce una vez que transcurran tres años a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación y no declarar la voluntad de conservarla al encargado del registro civil en dicho plazo, circunstancia que se produce en el presente caso.

V. Dispone el artículo 26 CC en su número 1. a) que «quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales».

VI. Procede determinar en el presente caso es si a la interesada le es exigible la residencia legal en España o, por el contrario, está exceptuada de dicho requisito como emigrante. A este respecto conviene recordar que a los efectos de la recuperación de la nacionalidad española, es emigrante el nacido en España que ha adquirido la nacionalidad española, trasladado su domicilio al extranjero y adquirido otra nacionalidad, sin necesidad de investigar los motivos de la emigración ni los de la adquisición de la nacionalidad extranjera. Este concepto amplio, pero literal, de la expresión «emigración» es el que prevaleció oficialmente en la interpretación de las Leyes 51/1982, de 13 de julio y 18/1990, de 17 de diciembre, en materia de nacionalidad (*cf.* respectivamente las Instrucciones de 16 de mayo de 1983 y de 20 de marzo de 1991) y no hay ningún motivo para cambiar de criterio en su interpretación de la redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre.

VII. Por tanto, en este caso, la prueba de que la interesada es hija de emigrantes se impone por sí misma con evidencia, ya que sus progenitores nacieron en España y trasladaron su domicilio al extranjero, sin que haya razón alguna para investigar cuáles son los motivos que hayan llevado a esta emigración.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y:

- 1.º Revocar el auto recurrido.
- 2.º Instar que se inscriba, al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora y luego de la inscripción de la pérdida previa, la recuperación de la nacionalidad española formalizada en el acta levantada en el Consulado General de España en Los Ángeles (USA).

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Guadalajara (México).

Resolución de 10 de marzo de 2017 (22.ª)

Recuperación a la nacionalidad española.—*No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en C. (Filipinas) en 1961 que pretende la recuperación de la nacionalidad española, porque no se acreditan los requisitos establecidos en el artículo 26 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en Manila (Filipinas).

HECHOS

I

Que, con fecha 16 de junio de 2014 en el Consulado General de España en Nueva York (Estados Unidos), se levantó acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual Doña. M-T. A. M., nacida el 10 de diciembre de 1961 en C. (Filipinas), quien optó por la nacionalidad española de origen el día 07 de enero de 1993, de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 18/1990 y, posteriormente la perdió el 23 de marzo de 2009, toda vez que adquirió la nacionalidad norteamericana el 24 de marzo de 2006 y dejó transcurrir tres años desde la adquisición sin haber formulado declaración ante el encargado del registro civil de su voluntad de conservarla, manifiesta su voluntad de recuperar su nacionalidad española. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la interesada, inscrito en el Registro Civil Consular de España en Manila; copia de pasaporte español caducado de la promotora y de pasaporte estadounidense válido; certificado español de nacimiento del abuelo materno de la interesada, Don C. M. I., nacido en L. el 01 de julio de 1895; pasaporte español y certificado español de nacimiento de su progenitora, Doña F. M. R., nacida el 13 de septiembre de 1924 en C. (Filipinas) y certificado de naturalización de la interesada, expedido por las autoridades estadounidenses, concediendo dicha nacionalidad a la promotora con fecha 24 de marzo de 2006.

II

Trasladadas las actuaciones al Registro Civil Consular de España en Manila (Filipinas), con fecha 18 de septiembre de 2014 la encargada del citado registro dicta auto por el que acuerda no practicar la anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española de la interesada al estimar que, no siendo emigrante ni hija de emigrante, debe ser residente legal en España, a tenor de lo establecido en el artículo 26.1 del Código Civil.

III

Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando recuperar la nacionalidad española para renovar su pasa-

porte español, alegando que no informó al consulado español de la adquisición de la ciudadanía estadounidense debido a la enfermedad de su madre.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil Consular de España en Manila (Filipinas) remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que se ratifica en la resolución adoptada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil; 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. La interesada, nacida el 10 de diciembre de 1961 en C. (Filipinas), de nacionalidad estadounidense, solicitó el 16 de junio de 2014 la recuperación de la nacionalidad española, que adquirió el día 07 de enero de 1993, de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 18/1990, y que posteriormente perdió al adquirir en 2006 la nacionalidad estadounidense. Por el Registro Civil Consular de España en Manila se dictó auto el 18 de septiembre de 2014 denegando la solicitud en base a no reunir los requisitos establecidos en el artículo 26 del vigente Código Civil.

III. El artículo 24.1 del vigente Código Civil establece que «pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieren voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación». Igualmente el citado artículo establece que «los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil»,

IV. En el presente caso, la promotora ostentó la nacionalidad española hasta el 23 de marzo de 2009, en que la perdió al haber adquirido la nacionalidad estadounidense por naturalización el 24 de marzo de 2006 y no formular declaración de su voluntad de conservación ante el encargado del registro civil en el plazo de los tres años siguientes desde la adquisición de la nacionalidad extranjera.

V. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del vigente Código Civil, quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: «Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales». En el expediente que nos ocupa, la promotora no reside en España, tampoco tiene la consideración de emigrante ni hija de emigrante, toda vez que ni la interesada ni sus padres han nacido en España y no ha sido dispensada del requisito de la residencia legal en España.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Manila (Filipinas).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (27.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.—*No cabe recuperación de la nacionalidad española porque para ello es necesario probar que antes se ha sido español y no lo era la nacida en Cuba en 1970 de padre cubano y madre nacida en Cuba que había perdido su nacionalidad española de origen antes del nacimiento de la hija.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 20 de noviembre de 2014 el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba), la Sra. M. P. G., mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la recuperación de su nacionalidad española por ser hija de española de origen. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la ins-

cripción; carné de identidad y certificación cubana de nacimiento de la promotora, nacida en Cuba el 7 de mayo de 1970, hija de E. P. P. y de H. M. C. G. C.; inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de H-M. G. C., nacida en Cuba el 15 de marzo de 1938, hija de J. G. S., de nacionalidad española, y de M. M. C. G., de nacionalidad cubana, con marginal de recuperación de la nacionalidad española de la inscrita el 19 de mayo de 2000; certificación cubana de matrimonio celebrado el 29 de diciembre de 1961 entre E. P. P. y H. M. de la C. G. C.

II

Suscrita por la promotora acta de recuperación de la nacionalidad española, la encargada del registro consular dictó resolución el 19 de febrero de 2015 denegando la recuperación solicitada porque no resulta acreditado que la interesada haya ostentado anteriormente la nacionalidad española.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que había presentado todos los documentos necesarios para la adquisición de la nacionalidad española por ser hija de una ciudadana española, al igual que ya habían hecho sus hermanas, una de las cuales ya ostenta la reclamada nacionalidad sin haber encontrado ningún impedimento.

IV

La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 23 del Código Civil (CC) en su redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954 y 26 en su redacción actual; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66 y 68 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; 9-2.^a de febrero de 2006; 25-7.^a de septiembre de 2007; 4-1.^a y 10-3.^a de julio de 2008; 10 de enero de 2009; 29-6.^a de junio de 2010 y 29-3.^a de mayo de 2013.

II. La interesada, nacida en 1970 y de nacionalidad cubana, solicitó la recuperación de su nacionalidad española alegando que es hija de madre española de origen. La encargada del registro consideró que la solicitante

nunca antes ha ostentado la nacionalidad española y, en consecuencia, no puede recuperarla.

III. Para recuperar la nacionalidad española es preciso probar que antes se ha sido español y posteriormente se ha perdido dicha nacionalidad, lo que no ocurre en el presente caso. En primer lugar hay que decir que en el momento del nacimiento de la promotora estaba vigente el artículo 17.2 del Código Civil en su redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, según el cual la madre únicamente transmitía la nacionalidad en defecto del padre, que en este caso era cubano y transmitió dicha nacionalidad a su hija. Por otro lado, es cierto que la madre de la solicitante nació española al ser hija de padre español de origen pero perdió dicha nacionalidad al contraer matrimonio con un cubano en 1961 porque, según la redacción del artículo 23.3.º CC vigente en ese momento, la española que se casaba con un extranjero perdía su nacionalidad si adquiría la de su marido, precisando el artículo 233 RRC, también en su redacción original vigente en aquel momento, que la pérdida se producía por el hecho de la adquisición de la nacionalidad del marido, ya fuera por razón del matrimonio o por un acto anterior, simultáneo, posterior, concurrente o independiente. De manera que la madre, que ya ostentaba la nacionalidad cubana, perdió por causa de matrimonio su nacionalidad española de origen y no la recuperó hasta 2000, por lo que no pudo transmitírsela a la hija nacida en 1970.

IV. La nacionalidad española de la madre no puede pues servir de base para que la hija recupere una nacionalidad que aquella nunca le transmitió, aunque sí constituía el presupuesto para ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española al amparo del supuesto previsto en la disposición transitoria séptima de la Ley 52/2007, si bien ello requería la tramitación de un expediente distinto que, en cualquier caso, debió haberse instado durante el plazo de vigencia de la mencionada ley, que finalizó, después de haberse prorrogado un año, el 27 de diciembre de 2011.

V. Finalmente, cabe decir que es posible practicar la inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español por afectar el hecho a una ciudadana española, su madre (arts. 15 LRC y 66 RRC), pero ha de hacerse constar expresamente en el asiento que no está acreditada conforme a ley la nacionalidad española de la inscrita (art. 66, párrafo final, RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 26 de mayo de 2017 (40.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *No puede recuperar quien no prueba haber sido antes española y no resulta suficientemente acreditado en el presente caso a la vista de la documentación aportada.*

En las actuaciones sobre recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Consulado español en La Habana el 7 de octubre de 2013, M. S. C., nacida en S. C. (Cuba) el 1 de diciembre de 1942, declaraba su voluntad de recuperar la nacionalidad española que tuvo en su origen, por ser hija de ciudadana española. Adjuntaba diversa documentación; hoja declaratoria de datos en la que menciona que nació el 1 de diciembre de 1943 y se hace constar que es hija de R. A. S. L., nacido en S. C. en (año ilegible) y de D. C. L., nacida en S. C. en 1908, certificado de nacimiento cubano de la interesada en el que consta que su nacimiento es el 1 de diciembre de 1942, carné de identidad cubano de la interesada, certificado de matrimonio de los padres de la interesada, celebrado en Cuba el 27 de octubre de 1941, inscripción de nacimiento de la madre de la interesada en el registro civil español, de fecha 21 de agosto de 2001, con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 30 de julio del mismo año, hija de J. S. C. Ca., nacido en S. (Barcelona) en 1875 y de nacionalidad española y de A. L. nacida en S. C. en 1883 y de nacionalidad cubana y certificado de matrimonio cubano de los abuelos maternos de la interesada, celebrado en Cuba en 1906.

II

Con la misma fecha se levanta acta de la comparecencia firmada por la interesada y por la encargada del registro civil consular en la que aquélla manifiesta que su madre era originariamente española y ostentaba esta nacionalidad cuando ella nació. La encargada de éste dictó auto el 16 de abril de 2014 denegando la posibilidad de que la interesada recupere la nacionalidad española, ya que no ha probado que la ostentó en algún momento, condición indispensable para haberla perdido. En dicho auto se daba a la interesada la posibilidad de recurso ante la Dirección General de los Registro y del Notariado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que manifiesta que ella

no pretendía recuperar la nacionalidad del artículo 26 del Código Civil, si no que quería optar en base al artículo 20 del mismo texto, poniendo de manifiesta que dos familiares suyas, primas, ya obtuvieron la nacionalidad española. Adjunta como documentación nueva certificado de nacimiento cubano de su madre, certificado literal de nacimiento español de su abuelo materno, acreditación de que éste, Sr. C. C. declaró en 1900 su voluntad de conservar la nacionalidad española de acuerdo con el Tratado de París de 1898, certificados consulares de nacionalidad del Sr. C. emitidos en diferentes fechas, certificación negativa de inscripción de nacimiento en el registro civil cubano del abuelo materno de la interesada y copia de las inscripciones de nacimiento en el registro civil español de dos primas de la interesada, también nietas del Sr. C. C., que optaron por la nacionalidad española el 24 de febrero de 2009 con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal éste informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y, en consecuencia el auto que se recurre resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 26 del Código Civil (CC); 15, 16 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85, 86 y 88 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 17-1.^a de junio de 2003, 2005 21-1.^a de abril y 25-4.^a de octubre de 2004, 24-1.^a de mayo y 19-4.^a de diciembre de 2005, 9-2.^a de febrero de 2006, 29-1.^a de junio de 2007, 11-3.^a de abril de 2008; 19-6.^a de febrero y 27-6.^a de mayo, 23-1.^a de diciembre de 2009 y 28-10.^a de junio de 2012.

II. La promotora, nacida en Cuba en 1942, instó la recuperación de la nacionalidad española que habría ostentado, de acuerdo con su alegación, en el momento de su nacimiento al ser su madre española. La encargada del registro civil consular dictó resolución denegando la solicitud. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso

III. El artículo 26 del Código Civil establece que quién haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo una serie de requisitos, el primero ser residente legal en España, salvo que sea emigrante o hijo de emigrante, en los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales, el segundo declarar ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española y por último inscribir la recuperación en el registro civil.

IV. Respecto a la alegación de la promotora de que ostentó la nacionalidad española que posteriormente perdió, no puede acogerse dado que para

recuperar la nacionalidad española es preciso probar suficientemente que en un momento anterior se ha ostentado *de iure* tal nacionalidad y posteriormente se ha perdido. En el presente caso, por tanto, la promotora debería haber acreditado que su madre, Sra. C. L., nacida en Cuba en 1908, tenía dicha nacionalidad al momento de su nacimiento, 1942 y se la transmitió, lo que no ha hecho, puesto que según la certificación de la inscripción de nacimiento de la madre en el registro civil español es hija de ciudadano español y nacido en España, pero perdió posteriormente la nacionalidad española, recuperándola en el año 2001 y, además según el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en aquél momento, la española que contraía matrimonio con un ciudadano extranjero, la Sra. C. L. lo hizo en 1941, seguía la condición y nacionalidad de su marido.

V. Por lo que se refiere a la concesión a sus familiares de la nacionalidad española, a la vista de los documentos aportados al expediente se observa que ambas optaron por la nacionalidad española en el año 2009 con base en una norma, disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyo en diciembre del año 2011 y la ahora recurrente declaró su voluntad de obtener la nacionalidad española en octubre del año 2013.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 26 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 16 de junio de 2017 (9.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.—*No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en Cuba en 1964 por recuperación de la nacionalidad española, al no haber ostentado nunca la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 20 de noviembre de 2013, en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española por la que D.^a C. L. R. S., nacida el 08 de febrero de 1964 en P. R. (Cuba), de nacionalidad cubana, hija de Don E. R. C., de nacionalidad cubana y de D.^a M. C. S. F., de nacionalidad cubana, declara que ostentaba la nacionalidad española de origen al momento de su nacimiento y que es su voluntad recuperarla, prestando juramento o promesa de fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, no renunciando a su anterior nacionalidad.

Aporta la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació 08 de febrero de 1964 en P. R. (Cuba), hija de Don E. R. C., nacido el 13 de febrero de 1937 en L. H. (Cuba) y de D.^a M. C. S. F., nacida el 12 de marzo de 1938 en L. H. (Cuba); carnet de identidad cubano y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado local de nacimiento de la madre de la promotora; certificado local de matrimonio de los progenitores de la solicitante; certificado local de defunción de la madre de la solicitante y certificado español de nacimiento del abuelo materno de la solicitante, Don J. S. L., en el que consta que nació el 05 de enero de 1905 en B. (León).

II

La encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto con fecha 21 de noviembre de 2014, denegando la inscripción de nacimiento y el asiento registral de la recuperación de la nacionalidad española de la interesada, ya que estima que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que la solicitante haya ostentado nunca la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la inscripción de nacimiento y el asiento registral de la Opción de Origen a la nacionalidad española y alegando que su abuelo materno era originariamente español.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que en el caso de referencia la solicitante nunca ha ostentado la nacionalidad española, destacando asimismo que la madre de la solicitante es natural de P. R. (Cuba), nacida el 08 de febrero de 1964, hija de emigrante español, por lo que no ha quedado establecido que la solicitante haya ostentado nunca la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil; 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. La interesada, nacida en P. R.(Cuba) en 1964, solicitó ante el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) la recuperación de la nacionalidad española por ser hija de madre originariamente española. La encargada del registro civil consular dictó auto el 21 de noviembre de 2014 denegando la solicitud en base a que la promotora no había ostentado nunca la nacionalidad española, por lo que no cabía su recuperación.

III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del vigente Código Civil, quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: «Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales».

IV. En el presente expediente se constata que la promotora, no ha ostentado nunca la nacionalidad española, requisito establecido en la legislación para poder recuperarla, por lo que no procede acceder a lo solicitado.

V. Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo materno de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (*cf.* art. 358-II RRC). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento, bajo ciertas condiciones pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno que el mismo mantuviera su nacionalidad española o que en su caso la pérdida o renuncia de la misma haya sido como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, circunstancia esta del exilio que debe confluir en la persona del abuelo de la optante de forma ineludible, sin que conste acreditada la salida de España –y no únicamente la residencia fuera de España– en el periodo de exilio, comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 16 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 16 de junio de 2017 (35.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.–*No es posible inscribir la recuperación de la nacionalidad española del nacido en Cuba en 1955, toda vez que el solicitante es originariamente español y no ha incurrido en pérdida de la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 9 de junio de 2011, en el Consulado General de España en La Habana (Cuba), se levantó acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual Don J. C. B. L., nacido el 2 de marzo de 1955 en S. C., V. C. (Cuba), de nacionalidad española, declara ser hijo de Don M. B. C., originariamente español, quien ostentaba su nacionalidad de origen al momento del nacimiento del interesado, siendo su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen, prestando juramento o promesa de fidelidad a S.M. El Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, no renunciando a su anterior nacionalidad.

Adjuntaba la siguiente documentación: carnet de identidad cubano y certificado literal español de nacimiento del interesado, inscrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba); certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado literal español de nacimiento del padre del interesado, nacido en L. L., Pontevedra, el 5 de enero de 1901 y fotocopia del carnet de residente permanente del progenitor de fecha 26 de enero de 1976.

II

La encargada del registro civil consular dicta auto con fecha 05 de mayo de 2014, declarando que el interesado no ha incurrido en pérdida de la nacionalidad española, por lo que no procede la solicitud de inscripción de la nota marginal de recuperación de la misma.

III

Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, indicando que su objetivo es obtener la ciudadanía española y que le aconsejaron en el consulado que la vía para su tramitación era solicitar una recuperación.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste informa que el auto que se recurre resulta conforme a derecho y se ratifica en todos los extremos en el informe emitido en su día y previo al auto que se recurre. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el solicitante es originariamente español y dado que el mismo no ha incurrido en causa de pérdida de la nacionalidad española, no procede la solicitud de recuperación formulada el 9 de junio de 2011, en virtud del artículo 26 del Código Civil vigente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil (CC); 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. El interesado, nacido en Cuba el 2 de marzo de 1955, de nacionalidad española, solicitó en junio de 2011 la recuperación de la nacionalidad española por ser hijo de padre español nacido en España. Por el registro civil consular se dictó auto el 5 de mayo de 2014 desestimando la solicitud formulada, toda vez que el solicitante es originariamente español y dado que el mismo no ha incurrido en pérdida de la nacionalidad española, no procede la solicitud de recuperación formulada.

III. El registro civil constituye la prueba de los hechos inscritos. En el presente caso, el interesado es originariamente español, hijo de ciudadano español nacido en España, e inscrito en el tomo 32, libro 3131, página 7 del

Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), no habiendo incurrido en causa de pérdida de la nacionalidad española.

El artículo 26 del Código Civil establece que, quien haya perdido la nacionalidad española, podrá recuperarla, siendo residente legal en España, no siendo de aplicación este requisito a emigrantes o hijos de emigrantes.

El interesado ostenta la nacionalidad española y no ha incurrido en causa de pérdida de la misma, por lo que no cabe la presentación de solicitud de recuperación de una nacionalidad que no ha perdido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 16 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (24.ª)

Recuperación a la nacionalidad española.—*No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en Cuba en 1977 por recuperación de la nacionalidad española, al no haber ostentado nunca la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 13 de mayo de 2015, en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la que D.ª J. J. V. A., nacida el 2 de enero de 1977 en M. (Cuba), declara ser hija de Don M. W. V. N., nacido el 2 de julio de 1951 en J.,M. (Cuba), quien ostentaba su nacionalidad española al momento del nacimiento de la solicitante, que es su voluntad recuperar la nacionalidad española no renunciando a su anterior nacionalidad cubana, al amparo de lo establecido en el artículo 26 del Código Civil.

Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad cubano de la promotora; certificado cubano de nacimiento de la interesada; certificado cubano de nacimiento de su promotor; certificado cubano de nacimiento de la abuela

paterna del interesado, D.^a J. N. G., nacida el 8 de abril de 1923 en J., M. (Cuba) y certificado de matrimonio de los padres de la interesada.

II

Con fecha 18 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), dicta auto por el que se desestima la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española de la interesada, toda vez que la peticionaria no prueba suficientemente los HECHOS a los que se refiere su declaración, ya que no ha quedado establecido que la solicitante haya ostentado la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando ser descendiente de bisabuelo originariamente español y nacido en España y que tiene dos tías paternas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley 52/2007.

Aporta la siguiente documentación: certificados cubanos de nacimiento y de matrimonio de la interesada; certificado cubano de nacimiento de su padre; certificado cubano de matrimonio de su abuela paterna, D.^a J. N. G., con ciudadano natural de Cuba, formalizado el 24 de diciembre de 1942 en Cuba; certificado cubano de matrimonio del bisabuelo de la solicitante, Don F. N. P., formalizado en Cuba el 5 de abril de 1906, en el que se indica que éste es nacido en L. (España); certificados cubanos de defunción de la abuela y el bisabuelo de la promotora; certificado español de nacimiento del bisabuelo y certificado de matrimonio religioso del mismo, expedido por la Diócesis de M. (Cuba) y documentos de inmigración y extranjería del bisabuelo de la solicitante, en los que se indica que no consta que el mismo adquiriera la ciudadanía cubana por naturalización y que consta inscrito en el registro de extranjeros cubano.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste emite informe desfavorable y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que la solicitante nunca ha ostentado la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa exigida por el artículo 26 del Código Civil vigente y que el padre de la solicitante es natural de J., M. (Cuba), nacido el 2 de julio de 1951, hijo de padres naturales de Cuba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil; 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del

Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. La interesada, nacido en Cuba en 1977, solicitó mediante acta firmada el 13 de mayo de 2015 ante la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana, la recuperación de la nacionalidad española por ser hija de padre español nacida en Cuba. Por el registro civil consular se dictó auto el 18 de mayo de 2015 denegando la solicitud en base a que la promotora no había ostentado nunca la nacionalidad española, por lo que no cabía su recuperación. Interpuesto recurso por la interesada, solicita se revise su expediente alegando que su bisabuelo es originariamente español y nacido en España y que dos de sus tías paternas han obtenido la nacionalidad española, en virtud de la opción establecida en la Ley 52/2007.

III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del vigente Código Civil, quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: «Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales».

IV. En el presente expediente no se encuentra acreditado que la promotora hubiese ostentado en algún momento la nacionalidad española. Así, si bien el bisabuelo de la interesada nació en España originariamente español y de acuerdo con los certificados de inmigración y extranjería del mismo aportados al expediente, no consta que hubiera perdido su nacionalidad española, su hija (abuela de la solicitante) y originariamente española, contrajo matrimonio el 24 de diciembre de 1942 en J., M. (Cuba) con ciudadano cubano, perdiendo su nacionalidad española en aplicación de lo establecido en el artículo 22 del Código Civil, según la redacción originaria establecida por Real Orden de 24 de julio de 1889, que establecía que «la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido». De este modo, en la fecha de nacimiento de su padre, que se produce el 2 de julio de 1951, su abuela ya no ostentaba la nacionalidad española, por lo que el mismo adquirió al nacer la nacionalidad cubana, que transmitió a la solicitante.

De este modo, no se encuentra justificado que la promotora hubiese ostentado en algún momento la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para su recuperación.

Por último, y en relación con la alegación formulada por la interesada en su escrito de recurso, relativa a que dos de sus tías paternas adquirieron la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007, se indica que la directriz primera de la instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, establece que será necesario que las solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen, en

virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se formalicen en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada disposición, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo por un año más, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. Efectivamente se produjo dicha prórroga, siendo la fecha de caducidad de este derecho de opción el 27 de diciembre de 2011, por lo que la solicitud formulada por la interesada, con fecha 13 de mayo de 2015, se encontraba fuera del plazo legalmente establecido, indicándose que tampoco se encuentran acreditados los requisitos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 27 de octubre de 2017 (19.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *La promotora, nacida en España en 1986 e hija de ciudadana estadounidense también nacida en España, puede recuperar porque acredita que adquirió la nacionalidad española de origen, conforme al artículo 17.2 del Código Civil en su redacción dada por la Ley 51/1982 de 13 de julio, y que posteriormente perdió esta nacionalidad.*

En las actuaciones sobre solicitud de recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil de Castellón.

HECHOS

I

Con fecha 23 de octubre de 2015, en el Registro Civil Consular de Chicago, Illinois (EE.UU), domicilio de la interesada, se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual M.-L. F., nacida el 9 de agosto de 1986 en C., hija de padre nacido en M. (EE.UU) y de nacionalidad estadounidense y de madre también nacida en C. y originariamente española, declara que siendo residente en Estados Unidos, es su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen siendo eximida de ser residente legal en España.

Adjuntaba la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento de la interesada, en el que consta que ambos progenitores eran de nacionalidad estadounidense, casa-

dos en Estados Unidos en 1979 y que la madre, H. T. G., había nacido en C. en 1944, pasaporte estadounidense de la interesada, expedido en el año 2006, certificado literal de nacimiento español de la madre de la interesada, hija de S. T. A., nacido en C. y de V. G. B., nacida en V., pasaporte español y documento nacional de identidad de la madre de la interesada, expedidos en el año 2010, certificado de matrimonio estadounidense de los padres de la interesada, celebrado en D. S. (EE.UU) el 26 de febrero de 1979, informe de las autoridades españolas sobre la expedición y renovaciones del pasaporte y documento nacional de identidad españoles de la madre de la interesada y certificado de naturalización estadounidense de la Sra. T. G., nacionalidad obtenida con fecha 17 de septiembre de 1984.

II

Trasladadas las actuaciones al Registro Civil de Castellón, lugar de nacimiento de la Sra. F., con fecha 22 de marzo de 2016 la encargada del citado Registro Civil dicta acuerdo por el que deniega la recuperación de la nacionalidad española a la interesada ya que nunca la tuvo, puesto que en su inscripción de nacimiento consta que es hija de ciudadanos estadounidenses y, por tanto estadounidense de origen ella misma, ya que su madre aunque originariamente española era estadounidense desde el año 1984 sin que constara que declarara su voluntad de conservar la nacionalidad española.

III

Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que a tenor del artículo 17.1.b del Código Civil ella nació española de origen puesto que su madre también había nacido en España, por lo que sí podría acceder a recuperar su nacionalidad de origen, reiterando la documentación que ya constaba en el expediente.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste informa que debe confirmarse por sus propios fundamentos el auto impugnado y, por tanto desestimar el recurso presentado y la encargada, ratificándose en la resolución dictada, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil en su redacción dada por la Ley 51/1982 de 13 de julio, y la redacción actual; artículo 24.1 y 26 también del Código Civil, 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 25 de abril de 1988, 28 de enero, 18-8.^a y 26-3.^a de marzo, 31 de mayo, 13-3.^a de septiembre y 30 de noviembre de 1994, 1-2.^a de marzo de 1995, 9 y 20 de enero, 13 de abril, 28 de mayo y 28 de noviembre de 1996, 22-3.^a de septiembre y 1 de diciembre de

1997, 1-1.^a de abril y 21-3.^a de octubre de 1998, 20-1.^a de febrero de 1999 y 21-3.^a de abril de 2004, 23-1.^a de marzo de 2007 y 23-8.^a de mayo de 2008.

II. Se pretende por la interesada, nacida en Castellón, hija de padre estadounidense y nacido en Estados Unidos y madre estadounidense pero nacida en España y originariamente española, la recuperación de la nacionalidad española. Por la encargada del Registro Civil de Castellón se dictó acuerdo por el que se denegaba la inscripción de la recuperación por estimar que en la misma no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, fundamentalmente al no haber ostentado originariamente la nacionalidad española. La promotora interpone recurso frente al citado auto, solicitando se revise su expediente.

III. Para poder inscribir una recuperación de la nacionalidad española es necesario, como es obvio, que se pruebe suficientemente que el interesado ha ostentado *de iure* en un momento anterior la nacionalidad española. Tiene razón la encargada en su calificación al sostener que en la interesada no concurrió al tiempo de su nacimiento título atributivo alguno de la nacionalidad española por la vía del *iure sanguinis*. En efecto, el artículo 17 del Código civil, en la redacción dada por la Ley 51/1982 de 13 de julio, vigente al tiempo del nacimiento de la promotora, establecía que eran españoles, entre otros, los hijos de padre o madre españoles – en este caso el padre tenía la nacionalidad estadounidense y la madre aunque nacida en España también había adquirido la nacionalidad estadounidense a la fecha del nacimiento de su hija. Estas razones son las que han llevado a la encargada del Registro Civil de Castellón a dictar el auto apelado. Sin embargo, con ser todo ello correcto, no cabe confirmar la decisión denegatoria, pues, como vamos a ver, la pretensión de la recurrente encuentra amparo legal en el hecho de que, si por la vía indicada no adquirió la nacionalidad española, sí la obtuvo por la del *iure soli*.

IV. En efecto, como antes se ha adelantado, concurren en el supuesto de hecho del presente caso las siguientes circunstancias respecto de la recurrente: 1.^a) ha nacido en España en 1986; 2.^a) su madre española nació también en España, y atendiendo a lo que disponía la normativa vigente en aquél momento y que se mantiene actualmente, en particular el artículo 17.2.º del Código Civil, actualmente artículo 17.1.b, a cuyo tenor eran españoles: «los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de éstos hubiere nacido en España. Se exceptúan los hijos de padre o madre extranjeros adscritos al servicio diplomático», por tanto la interesada nació originariamente también española.

V. De acuerdo con la documentación integrante del expediente, se constata que la interesada reside habitualmente en Estados Unidos, por lo que tal como establece el artículo 24.1 del Código Civil, «pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida de la nacionalidad española se produce una vez que transcurran tres

años a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil». En el caso de la Sra. F. la pérdida de la nacionalidad española se produjo en agosto del año 2007, ya que no consta que manifestara su voluntad de conservarla a partir de su mayoría de edad en agosto de 2004.

VI. El artículo 26 CC en su número 1. a) que «quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales», b) declarar ante el encargado del Registro Civil la voluntad de recuperar la nacionalidad española y c) inscribir la recuperación en el Registro Civil.

VII. Procede determinar en el presente caso es si a la interesada le es exigible la residencia legal en España o, por el contrario, está exceptuada de dicho requisito como emigrante. A este respecto conviene recordar que a los efectos de la recuperación de la nacionalidad española, es emigrante el nacido en España que ha adquirido la nacionalidad española, trasladado su domicilio al extranjero y adquirido otra nacionalidad, sin necesidad de investigar los motivos de la emigración ni los de la adquisición de la nacionalidad extranjera. Este concepto amplio, pero literal, de la expresión «emigración» es el que prevaleció oficialmente en la interpretación de las Leyes 51/1982, de 13 de julio y 18/1990, de 17 de diciembre, en materia de nacionalidad (*cf.* respectivamente las Instrucciones de 16 de mayo de 1983 y de 20 de marzo de 1991) y no hay ningún motivo para cambiar de criterio en su interpretación de la redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre.

VIII. Por tanto, en este caso, la prueba de que la interesada es hija de emigrante se impone por sí misma con evidencia, ya que su progenitora nació en España y trasladó su domicilio al extranjero, sin que haya razón alguna para investigar cuáles son los motivos que hayan llevado a esta emigración.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Revocar el auto recurrido.
- 2.º Instar que se inscriba, al margen de la inscripción de nacimiento de la interesada y luego de la inscripción de la pérdida previa, la recuperación de la nacionalidad española formalizada en el acta levantada en el Consulado General de España en Chicago (USA).

Madrid, 27 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Castellón

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (23.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *El promotor puede recuperar porque acredita que adquirió la nacionalidad española, conforme al artículo 17.1 del Código Civil, hijo de ciudadano español, y que posteriormente perdió esta nacionalidad.*

En las actuaciones sobre solicitud de recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 25 de febrero de 2013, en el Registro Civil Consular de España en La Habana se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual J.-R. S. R., nacido el 5 de junio de 1928 en S. C. (Cuba), hijo de padre nacido en España y de madre nacida en Cuba, ambos de nacionalidad cubana, declara que siendo residente en Cuba, es su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen, como hijo de ciudadano español en el momento del nacimiento y que perdió posteriormente.

Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento cubano, expedido en julio del año 2012, en el que consta que nació el 5 de febrero de 1928, hijo de A. S. S., nacido en L. y de C. R. Q., nacida en S. C., carné de identidad cubano, copia de documento del Registro Civil cubano, sin legalizar, por el que el interesado, con fecha 9 de julio de 2012, solicita que se subsane en su inscripción de nacimiento la fecha, siendo la correcta el 5 de febrero de 1928, según acta notarial de 4 de julio del mismo año, certificado de partida de bautismo del interesado, celebrado en S. C. el 9 de septiembre de 1928 y en el que consta que el bautizado nació el 5 de febrero de 1928 y que su padre había nacido en O. (L.) y, por último se incluye certificado literal de nacimiento español del interesado, inscrito el 1 de agosto de 2003 y en el que consta su nacimiento el 5 de junio de 1928 y que su padre, Sr. S. S., había nacido en L. en 1900, con marginal de opción a la nacionalidad española, por aplicación del artículo 20.1.b del Código Civil con fecha 7 de julio de 2003.

II

El encargado del citado Registro Civil Consular dicta acuerdo, con fecha 7 de marzo de 2013, por el que se deniega la solicitud de recuperación de la nacionalidad española, ya que no puede considerarse acreditado que el Sr. S. R. hubiera ostentado la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido y para acceder a su recuperación, según el artículo 26 del Código Civil.

III

Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la recuperación de la nacionalidad española, alegando que

si el problema era su fecha de nacimiento y la ciudadanía que ostentaba su padre en ese momento, este dato ya se corrigió ante Notario en Cuba, con la comparecencia de dos testigos que le conocían desde su infancia, y había sido admitido y autorizado por el Registro Civil cubano según resolución que había aportado, solicitando la reconsideración de la resolución dictada.

IV

Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste no formula alegaciones y el encargado remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución con informe en el que manifiesta que el padre del interesado adquirió la ciudadanía cubana en abril de 1928. Posteriormente este centro directivo requirió, a través del Registro Civil consular, al interesado nuevo certificado de nacimiento cubano, debidamente legalizado, así como legalización de la resolución registral cubana que autorizaba la subsanación del error en la fecha de nacimiento del interesado. La documentación ha sido aportada al expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos, 17 y 18 del Código Civil en su redacción originaria y 24 y 26 del Código Civil en su redacción actual; 46, 64 y 67 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 17- 1.^a de mayo de 2013; 20-19.^a de mayo de 2014; 30-52.^a de marzo de 2015.

II. Se pretende por el interesado, nacido en S. C. (Cuba), hijo de padre nacido en España y originariamente español, la recuperación de la nacionalidad española. Por el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) se dictó acuerdo por el que se denegaba la inscripción de la recuperación por estimar que no había quedado acreditado que el interesado hubiera ostentado de origen la nacionalidad española y la hubiera perdido, por lo que no era aplicable el art. 26 del Código Civil. El interesado interpone recurso frente al citado auto, solicitando se revise su expediente.

III. Para poder inscribir una recuperación de la nacionalidad española es necesario, como es obvio, que se pruebe suficientemente que el interesado ha ostentado *de iure* y perdido, en un momento anterior, la nacionalidad española. En este sentido, se aporta al expediente certificado literal español de nacimiento del interesado, en el que consta inscripción marginal de opción a la nacionalidad española ejercida con fecha 7 de julio de 2003, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b del Código Civil, que indica que tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y nacido en España, ya que constaba que el interesado había nacido en junio de 1928 cuando su padre, español nacido en L., había adquirido la ciudadanía cubana en abril de dicho año, sin embargo la documentación aportada, debidamente legalizada, acredita la sub-

sanación por el Registro Civil cubano de la fecha de nacimiento en dicho país del Sr. S. R., el 5 de febrero de 1928.

IV. De acuerdo con lo expresado el interesado ostentó desde su nacimiento la nacionalidad española de su padre, artículo 17.1 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en dicho momento, si bien perdió dicha nacionalidad en abril de 1928, siendo menor de edad, cuando su padre obtuvo la ciudadanía cubana y también él a tenor del artículo 18 del mismo texto legal «los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres.

V. Dispone el artículo 26 CC en su número 1. a) que «quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales».

VI. Procede determinar en el presente caso es si al interesado le es exigible la residencia legal en España o, por el contrario, está exceptuado de dicho requisito como emigrante. A este respecto conviene recordar que a los efectos de la recuperación de la nacionalidad española, es emigrante el nacido en España que ha adquirido la nacionalidad española, trasladado su domicilio al extranjero y adquirido otra nacionalidad, sin necesidad de investigar los motivos de la emigración ni los de la adquisición de la nacionalidad extranjera. Este concepto amplio, pero literal, de la expresión «emigración» es el que prevaleció oficialmente en la interpretación de las Leyes 51/1982, de 13 de julio y 18/1990, de 17 de diciembre, en materia de nacionalidad (*cf.* respectivamente las Instrucciones de 16 de mayo de 1983 y de 20 de marzo de 1991) y no hay ningún motivo para cambiar de criterio en su interpretación de la redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre.

VII. Por tanto, en este caso, la prueba de que el interesado es hijo de emigrante se impone por sí misma con evidencia, ya que su progenitor nació en España y trasladó su domicilio al extranjero, sin que haya razón alguna para investigar cuáles son los motivos que hayan llevado a esta emigración.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Revocar el auto recurrido.
- 2.º Instar que se inscriba, al margen de la inscripción de nacimiento del interesado y luego de la inscripción de la pérdida previa, la recuperación de la nacionalidad española formalizada en el acta levantada en el Consulado General de España en La Habana (Cuba).

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (35.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *La promotora puede recuperar porque acredita que adquirió «sanguinis» al nacer la nacionalidad española, conforme al artículo 17.2.º del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, y que posteriormente perdió esta nacionalidad.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela (La Coruña).

HECHOS

I

Con fecha 4 de octubre de 2013, en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual D.^a M.-A. P. S. nacida el 18 de febrero de 1951 en S. C. (L. C.), hija de Don E. P. R., nacido el 26 de diciembre de 1922 en G., L. H., quien recupera la nacionalidad española el 31 de enero de 2000 y de D.^a E. S. F., nacida el 24 de agosto de 1920 en P. T. (O.), originariamente española, declara que siendo residente en L. H. (Cuba), es su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen no renunciando a su anterior nacionalidad cubana, solicitando se inscriba esta recuperación en el acta de su nacimiento que consta en el Registro Civil de Santiago de Compostela.

Adjuntaba la siguiente documentación: carnet de identidad cubano de la solicitante y certificado literal español de nacimiento de la interesada, nacida el 18 de febrero de 1951 en S. Co. (L. C.), en el que consta inscrita como M.-A.-J. P. S.; certificado cubano de nacimiento (reinscripción) de la solicitante, con fecha de inscripción de 18 de octubre de 1972, certificado literal español de nacimiento del padre de la promotora, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 31 de enero de 2000 y certificado literal español de nacimiento de la madre de la solicitante.

La Encargada del Registro Civil Consular de España en la Habana, por escrito de 4 de octubre de 2013, informa que la solicitante, en lugar de adquirir la carta de ciudadanía cubana se reinscribió en un registro civil local cubano, práctica muy usual en aquella época, por lo que en la inscripción cubana de la interesada aparece como nacida en Cuba, cuando la realidad es que su nacimiento se produjo en España, según consta en el certificado español correspondiente que se aporta al expediente.

II

Trasladadas las actuaciones al Registro Civil de Santiago de Compostela (La Coruña), con fecha 30 de mayo de 2014, el encargado del citado registro civil dicta auto por el que se declara que no ha lugar a practicar en el acta de nacimiento de la interesada, inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española, al no constar que la inscrita hubiese sido española en momento alguno, toda vez que su padre era cubano al tiempo de naci-

miento de su hija, como lo demuestra el hecho de que el progenitor recuperó la nacionalidad española con fecha 31 de enero de 2000. Por otra parte, el progenitor se encontraba casado en el momento del nacimiento de la interesada, por lo que la madre de la solicitante, originariamente española, habría perdido la nacionalidad española por razón de matrimonio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, con anterioridad, por tanto, al nacimiento de la solicitante.

III

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y se estime su recuperación de la nacionalidad española. Aporta la siguiente documentación: carnet de identidad cubano, certificado literal español de nacimiento y certificado cubano de nacimiento (reinscripción) de la interesada; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, Don J. P. M., nacido el 12 de febrero de 1882 en A. (Z.), originariamente español; certificado literal español de nacimiento de la abuela paterna de la solicitante, D.^a A. R. V., nacida el 6 de octubre de 1900 en S. V. C. (L.), originariamente española; certificado de matrimonio religioso de los abuelos paternos de la solicitante, celebrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Casa Blanca, Archidiócesis de La Habana, el 31 de agosto de 1931; certificado literal español de matrimonio de los padres de la solicitante y certificado canónico del mismo, celebrado en S. C. el día 30 de julio de 1947; certificado literal español de nacimiento del progenitor de la promotora, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 31 de enero de 2000; expediente militar y cartilla militar del padre de la interesada; pasaporte español del padre de la interesada, expedido en L. C. el 10 de febrero de 1951 con inscripción en el mismo de visado de emigrante de fecha 21 de febrero de 1951, que autorizaba a salir de España dentro del plazo de noventa días desde dicha fecha; certificado expedido por la Directora General del Archivo Nacional de la República de Cuba, en el que se indica que el padre de la solicitante entró en Cuba el 9 de abril de 1951, procedente de L. C., en el vapor Monte Urbasa; documento de identidad cubano y certificado literal español de nacimiento de la madre de la interesada y pasaporte español de la misma, expedido en L. C. el 5 de septiembre de 1951; documentos de inmigración y extranjería de la madre de la solicitante y certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela de los padres de la interesada en el año 1950.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, emite informe favorable a su estimación, toda vez que a la vista de la nueva documentación aportada por la interesada, se encuentra acreditado que el padre de la recurrente era español al tiempo del nacimiento de la promotora y el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil en su redacción original por Real Orden de 24 de julio de 1889, 26 del Código Civil en su redacción actual;

46 y 64 de la Ley del Registro Civil; 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 22 de marzo de 2001; 6-1.^a de marzo de 2002; 21-3.^a de abril de 2004; 12-1.^a y 16 de julio de 2005; 12-1.^a de noviembre de 2008.

II. Se pretende por la interesada, nacida en S. C. (La Coruña), hija de padres originariamente españoles, nacidos Cuba y España, respectivamente, la recuperación de la nacionalidad española. Por el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela se dictó acuerdo por el que se denegaba la inscripción de la recuperación al no constar que la inscrita hubiese sido española en momento alguno. Interpuesto recurso por la promotora, aporta nueva documentación no incorporada en su solicitud inicial. El ministerio fiscal, a la vista de la documentación incorporada al expediente, emite informe favorable a la estimación del recurso.

III. Dispone el artículo 26 CC en su número 1. a) que «quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales».

IV. Para poder inscribir una recuperación de la nacionalidad española es necesario, como es obvio, que se pruebe suficientemente que la interesada ha ostentado *de iure* y perdido, en un momento anterior, la nacionalidad española.

Si bien el auto dictado por el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela se encontraba dictado con arreglo a derecho de acuerdo con la documentación que constaba aportada al procedimiento, la interesada acompaña nueva documentación junto con su escrito de recurso que permite determinar que el padre de la recurrente era español al tiempo de nacimiento de la misma.

Así, el progenitor de la solicitante, nacido el 26 de diciembre de 1922 en G., L. H. (Cuba), originariamente español, recuperó la nacionalidad española en fecha 31 de diciembre de 2000. Se aporta al expediente cartilla militar del progenitor número 146706, caja de reclutas de L., incorporándose al servicio militar el 18 de abril de 1944; pasaporte español del padre de la solicitante, expedido en L. C. el 10 de febrero de 1951, en el que consta visado de emigrante de fecha 21 de febrero de 1951, por el que se le autorizaba para salir de España en el plazo de noventa días a partir de la fecha del citado visado y certificado expedido por la Directora del Archivo Nacional de la República de Cuba fechado el 6 de febrero de 2013, en el que se indica que el progenitor se encontraba incluido en la lista de pasajeros del vapor Monte Urbasa procedente de L. C., que entró en L. H. (Cuba) el 9 de abril de 1951, con veintiocho años de edad y de nacionalidad española.

De este modo, el padre de la solicitante ostentaba la nacionalidad española en el momento del nacimiento de la solicitante, acaecido el 18 de febrero de

1951 en S. C. (L. C.), por lo que la misma adquirió al nacer la nacionalidad española *iure sanguinis* en aplicación de lo establecido en el artículo 17.2.º del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en la fecha del nacimiento de la interesada y luego la perdió con fecha 18 de octubre de 1972 al adquirir la nacionalidad cubana, de acuerdo con el certificado cubano (reinscripción) de nacimiento aportado al expediente.

V. Procede determinar en el presente caso si a la interesada le es exigible la residencia legal en España o, por el contrario, está exceptuada de dicho requisito como emigrante. A este respecto conviene recordar que a los efectos de la recuperación de la nacionalidad española, es emigrante el nacido en España que ha adquirido la nacionalidad española, trasladado su domicilio al extranjero y adquirido otra nacionalidad, sin necesidad de investigar los motivos de la emigración ni los de la adquisición de la nacionalidad extranjera. Este concepto amplio, pero literal, de la expresión «emigración» es el que prevaleció oficialmente en la interpretación de las Leyes 51/1982, de 13 de julio y 18/1990, de 17 de diciembre, en materia de nacionalidad (*cf.* respectivamente las Instrucciones de 16 de mayo de 1983 y de 20 de marzo de 1991) y no hay ningún motivo para cambiar de criterio en su interpretación de la redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre.

VI. Por tanto, en este caso, la prueba de que la interesada tiene la condición de emigrante se impone por sí misma con evidencia, ya que la interesada nació en S. C., L. C. (España) el 18 de febrero de 1951, trasladándose a Cuba junto con su madre y un hermano también menor de edad en fecha 21 de diciembre de 1951, de acuerdo con el sello de entrada del departamento de inmigración de la República de Cuba que consta en el pasaporte de su progenitora, sin que haya razón alguna para investigar cuáles son los motivos que hayan llevado a esta emigración. De este modo, la solicitante acredita los requisitos establecidos en el artículo 26 del Código Civil para recuperar la nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Revocar el auto recurrido.
- 2.º Instar que se inscriba, al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, la recuperación de la nacionalidad española formalizada en el acta levantada en el Consulado General de España en La Habana (Cuba).

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro de Santiago de Compostela (La Coruña).

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (36.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *No puede recuperar quien no prueba haber sido antes española y no resulta suficientemente acreditado en el presente caso a la vista de la documentación aportada.*

En las actuaciones sobre recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Consulado español en La Habana el 6 de noviembre de 2013, A. B. A. B., nacida en M. (Cuba) el 26 de agosto de 1961, declaraba su voluntad de recuperar la nacionalidad española que tuvo en su origen, por ser hija de ciudadano español en el momento de su nacimiento. Adjuntaba diversa documentación; hoja declaratoria de datos en la que menciona que es hija de E. C. A. A., nacido en M. en 1938 y de M. T. B. B., nacida en M. en 1941, certificado no literal de nacimiento cubano de la interesada, carné de identidad cubano de la interesada, certificado no literal de nacimiento cubano del padre de la interesada, hijo de E. M. Al. G., natural de A. y de M. A. L., natural de M. y certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativos a que el abuelo paterno de la interesada, Sr. A. G. no consta inscrito en el Registro de Extranjeros y si consta inscrita la Carta de Ciudadanía que le fue concedida en 1946, a los 44 años de edad.

II

Con la misma fecha se levanta acta de la comparecencia firmada por la interesada y por la encargada del registro civil consular en la que aquélla manifiesta que su padre era originariamente español y ostentaba esta nacionalidad cuando ella nació. La encargada del Registro dictó auto el 21 de noviembre de 2014 denegando la posibilidad de que la interesada recupere la nacionalidad española, ya que no ha probado que la ostentó en algún momento, condición indispensable para haberla perdido. En dicho auto se daba a la interesada la posibilidad de recurso ante la Dirección General de los Registro y del Notariado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la interesada, esta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que manifiesta que solicita la nacionalidad española por ser nieta de ciudadano español, nacido en Asturias no por su padre, que a su vez había tramitado su nacionalidad española sin que hasta el momento se haya resuelto. Adjunta como documentación certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, nacido en G. (A.) el 5 de agosto de 1902, copia de la Carta de Ciudadanía expedida por las autoridades cubanas en octubre de 1946, copia literal de la declaración de

opción a la ciudadanía cubana, con renuncia a la española, formulada por el Sr. A. G. el 15 de mayo de 1946, en la que declara que nació en A. el 27 de junio de 1902, dato incorrecto, que llegó a La Habana en 1921, que está casado con una ciudadana cubana y tiene dos hijos, uno de ellos el padre de la interesada, nacido el 30 de octubre de 1938 y pasaporte cubano del Sr. A., con visados para estancia en España en 1958.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal éste informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y, en consecuencia el auto que se recurre resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 26 del Código Civil (CC); 15, 16 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85, 86 y 88 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 17-1.^a de junio de 2003, 2005 21-1.^a de abril y 25-4.^a de octubre de 2004, 24-1.^a de mayo y 19-4.^a de diciembre de 2005, 9-2.^a de febrero de 2006, 29-1.^a de junio de 2007, 11-3.^a de abril de 2008; 19-6.^a de febrero y 27-6.^a de mayo, 23-1.^a de diciembre de 2009 y 28-10.^a de junio de 2012.

II. La interesada, nacida en Cuba en 1961, instó la recuperación de la nacionalidad española que habría ostentado, de acuerdo con su alegación, en el momento de su nacimiento al ser su padre español. La encargada del registro civil consular dictó resolución denegando la solicitud. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso

III. El artículo 26 del Código Civil establece que quién haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo una serie de requisitos, el primero ser residente legal en España, salvo que sea emigrante o hijo de emigrante, en los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales, el segundo declarar ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española y por último inscribir la recuperación en el registro civil.

IV. Respecto a la alegación de la interesada de que ostentó la nacionalidad española que posteriormente perdió, no puede acogerse dado que para recuperar la nacionalidad española es preciso probar suficientemente que en un momento anterior se ha ostentado «de iure» tal nacionalidad y posteriormente se ha perdido. En el presente caso, por tanto, la promotora debería haber acreditado que su padre, Sr. A. A., nacido en Cuba en 1938, tenía dicha nacionalidad al momento de su nacimiento, 1961, lo que no ha hecho, puesto que según documentación correspondiente al abuelo paterno de la interesada, este era español cuando nació su hijo y padre de la Sra. A. B. en 1938 pero

perdió dicha nacionalidad en 1946 por adquirir la ciudadanía cubana y con él la perdió su hijo, por aplicación del artículo 18 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en aquél momento, que establecía que los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (27.^a)

Recuperación a la nacionalidad española.— *No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en D. (Sáhara Occidental) en 1975 que pretende la recuperación de la nacionalidad española, porque no está acreditada suficientemente la filiación española de la solicitante y no se encuentra acreditado que hubiese ostentado dicha nacionalidad en el pasado.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 4 de noviembre de 2014, en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, se incoa expediente gubernativo en materia de recuperación de la nacionalidad española a instancia de D.^a M. H., nacida en 1975 en D. (Sáhara Occidental), titular de pasaporte marroquí, alegando que originariamente ostenta dicha nacionalidad por ser hija de madre originariamente española y que la perdió posteriormente, por haber hecho uso voluntariamente de otra nacionalidad, haciendo constar que actualmente reside en España y que presta juramento de fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas.

Adjuntaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; interesada.- documento de identidad de extranjeros-familiar ciudadano de la UE; pasaporte marroquí; certificado de inscripción padronal expedido por el Ayuntamiento de L. P. G. C., con fecha de alta en el municipio de 19 de diciembre de 2013; partida de nacimiento literal expedida por

el Reino de Marruecos, traducida y legalizada, en la que consta que la madre de la solicitante es B., hija de G., de nacionalidad marroquí, nacida en D. en 1957; presunta madre.- documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento de D.^a B. B. M., nacida el 6 de enero de 1958 en A. (Sáhara Occidental), con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por resolución registral de 1 de diciembre de 2006, dictada por el encargado del Registro Civil de Jaén e inscripción marginal en la que se hace constar que la interesada usa habitualmente y es conocida por el nombre de B., el primer apellido G. y el segundo apellido B.

El acta de recuperación de la nacionalidad española se levanta en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria en fecha 4 de noviembre de 2014.

II

Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, por ser competente para calificar la procedencia de la inscripción de nacimiento solicitada, el magistrado-juez encargado del citado registro, dicta acuerdo con fecha 6 de marzo de 2015 por el que se deniega la inscripción de nacimiento con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de la solicitante, sin perjuicio de que pueda solicitar la nacionalidad española por residencia y la inscripción de su nacimiento al amparo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, sin prejuzgar la nacionalidad española, por afectar al estado civil de un español y siempre que quede acreditada la relación de filiación entre la persona solicitante y la que se encuentra inscrita como española en dicho Registro Civil Central, y dado que los efectos de las adquisiciones de la nacionalidad española por los padres solo tienen lugar a partir de la fecha en que a los mismos se les declara con valor de simple presunción, habiendo adquirido la madre de la interesada la nacionalidad española con valor de simple presunción en el año 2006, cuando su hija y promotora del expediente ya era mayor de edad y porque la legislación española en vigor en el año del nacimiento de la interesada no permitía que la mujer transmitiese la nacionalidad española.

III

Notificada la interesada, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se le conceda la recuperación de su nacionalidad española de origen, alegando que adquirió esta nacionalidad en virtud de lo establecido en el artículo 17.3.º del Código Civil, en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954, y que es hija de madre española de origen y residente en España. Por otra parte, indica que su padre es español de origen, por lo que considera que su nacionalidad es la española, por haber nacido en territorio español y ser hija de padres españoles en el momento de su nacimiento.

Aporta, entre otros, certificado de concordancia de nombres, expedido por el Reino de Marruecos entre A. B. U. A. S. U. A. y M. L. H., presunto progenitor; copia incompleta de libro de familia número 01806 expedido por el Gobierno General de Sáhara el 18 de mayo de 1971, en el que no consta la promotora y tarjeta de afiliación a la seguridad social del Sr. A. S. A.

IV

Notificado el ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste emite informe desfavorable, considerando que la interesada no nació en 1975 hija de madre española, por

cuanto ésta fue declarada nacional española en el año 2006, ni tampoco cabe la recuperación de la nacionalidad española de la solicitante, dado que para ello es necesario haberla ostentado antes, lo que no se produce en el presente caso y el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción conforme a la Ley de 15 de julio de 1954 y 26 del Código Civil en su redacción actual; 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. La interesada, nacida en 1975 en D. (Sáhara Occidental), solicitó la inscripción de su nacimiento y recuperación de la nacionalidad española por haber nacido en territorio español y ser hija de padres originariamente españoles. Por el Registro Civil Central se dictó acuerdo denegando la solicitud en base a que la promotora nunca adquirió la nacionalidad española, dado que a su madre le fue reconocida la nacionalidad española con valor de simple presunción cuando la solicitante ya era mayor de edad y porque la legislación en vigor en el momento del nacimiento de la interesada no permitía que la mujer transmitiese la nacionalidad española. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (*cf.* art. 96-2.º L.R.C. y 338 R.R.C.), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (*cf.* art. 335 R.R.C.).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el

reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I. y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «*stati*» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como

Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975, de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales de la interesada, dada la minoría edad de ésta, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976 estuviesen imposibilitados «de facto» para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, dado que la interesada nació en 1975, por lo que contaba menos de un año de edad cuando se produce la salida de España del territorio del Sáhara, ostentado en la actualidad pasaporte marroquí, ni tampoco consta la nacionalidad española de su padre para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya nacido en España.

VII. La recuperación de la nacionalidad española regulada en el artículo 26 del Código Civil, exige como requisito que en algún momento anterior ésta se haya ostentado y posteriormente perdido y estos extremos, no pueden darse por acreditados en el expediente.

Así, en la partida literal de nacimiento marroquí de la solicitante aportada al expediente se indica que la solicitante es hija de B., hija de G., de nacionalidad marroquí, nacida en D. en 1957, mientras que en la certificación literal española de nacimiento de la presunta progenitora se indica que B. B. M. (conocida como B. G. B.), nació el 6 de enero de 1958 en A. (Sáhara Occidental), por lo que no coinciden ni el lugar ni la fecha de nacimiento de la misma entre ambos documentos.

Por otra parte, y aun cuando pudiera acreditarse la filiación de la interesada con ciudadana originalmente española, la Sra. B. M. es declarada española de origen con valor de simple presunción en virtud de resolución registral dictada por el encargado del Registro Civil de J. de 1 de diciembre de 2006,

fecha en que se producen los efectos de la citada declaración, momento en el que la promotora, nacida en 1975, ya era mayor de edad. Igualmente, el artículo 17.2 del Código Civil, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en la fecha de nacimiento de la solicitante, establecía que son españoles «los hijos de madre española, aunque el padre sea extranjero, cuando no sigan la nacionalidad del padre», por lo que la interesada siguió al nacer la nacionalidad de su progenitor, del que no consta su nacionalidad española.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (97.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (28.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (30.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (31.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (45.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (28.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (35.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (37.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (27.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (43.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (44.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 16 de junio de 2017 (36.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 14 de julio de 2017 (21.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (30.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (31.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (32.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (33.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (34.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (35.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (36.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (37.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (38.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (41.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 28 de julio de 2017 (42.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (25.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (26.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (27.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (28.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (29.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (30.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (31.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (32.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (33.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (35.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (36.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (37.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (38.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (53.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (94.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (95.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (28.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (7.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (9.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (10.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (41.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (32.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (33.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (34.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (35.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (36.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (28.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (16.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (37.^a). Recuperación de la nacionalidad española.

3.7 Vecindad civil y administrativa

3.7.1 VECINDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA

Resolución de 3 de marzo de 2017 (48.ª)

Recursos sobre vecindad civil.—*Procede la inscripción marginal de cambio de vecindad civil por resultar acreditada la residencia continuada de al menos dos años en el territorio de la nueva vecindad que se pretende.*

En las actuaciones sobre cambio de vecindad civil remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Ponteareas (Pontevedra).

HECHOS

I

Mediante la remisión de escritura notarial al Registro Civil de Salvaterra de Miño (Pontevedra), con fecha de recepción de 23 de enero de 2014, Don C. V. G., mayor de edad y con domicilio en M. (Bizkaia) declaraba su voluntad de adquirir la vecindad civil de su lugar de residencia en lugar de la gallega que le corresponde por nacimiento. Aportaba la siguiente documentación: acta notarial otorgada por el solicitante en Bilbao el 30 de diciembre de 2013, certificado de una residencia de M. según el cual el interesado permanece allí ingresado desde el 16 de septiembre de 2011, certificado de empadronamiento en M. desde el 23 de diciembre de 2013 e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Salvaterra de Miño (Pontevedra) de C. V. G., nacido el 15 de septiembre de 1930.

II

Remitidas las actuaciones al Registro Civil de Ponteareas, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 23 de octubre de 2014 denegando la pretensión por no considerar acreditada la residencia del solicitante en B. durante

un mínimo de dos años, dado que en el certificado de empadronamiento aportado figura como fecha de alta en el municipio de M. el 23 de diciembre de 2013.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que el empadronamiento no es la única forma de acreditar la residencia y que en la documentación remitida al registro también se incluía un certificado que acreditaba su ingreso en la Residencia Pobeña de M. el 16 de diciembre de 2011, con lo que en el momento de la solicitud ya se superaban los dos años de residencia. Como pruebas complementarias adjuntaba copia del contrato de alojamiento en la residencia y recibos de pago.

IV

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que, examinada la nueva documentación, interesó su estimación. La encargada del Registro Civil de Pontearreas emitió informe favorable estimando cumplidos los requisitos legales y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 14 del Código Civil (CC); 1, 46 y 64 de la Ley del Registro Civil (LRC); 225, 226, 228, 229 y 236 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 19-5.^a y 20-1.^a de febrero de 2007 y 13-63.^a de febrero de 2015.

II. El interesado, cuyo nacimiento consta inscrito en el Registro Civil de Pontearreas, solicitó en 2014 que se hiciera constar en la inscripción el cambio de vecindad civil tras efectuar la declaración de voluntad correspondiente en acta notarial otorgada en Bilbao y remitida al registro, alegando que llevaba más de dos años residiendo en la localidad de M. (B.). La encargada del registro competente denegó la práctica de la marginal solicitada por no considerar acreditado en ese momento el periodo mínimo de residencia de dos años previsto por la legislación aplicable.

III. La vecindad debidamente acreditada, como hecho que concierne al estado civil de las personas, ha de hacerse constar en el registro civil (art. 1.7.º LRC) al margen de la inscripción de nacimiento (art. 46 LRC). El CC, por su parte, dispone en el artículo 14.5 que la vecindad civil se adquiere: «1.º Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. 2.º Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo. Ambas declaraciones se harán constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas.» La solicitud del promotor se encuadra en el primer supuesto de los señalados en el artículo transcrito, esto

es, la adquisición voluntaria de vecindad civil condicionada al transcurso del plazo de residencia continuada de dos años, constando, por medio de la comparecencia del interesado ante notario, su voluntad de adquirir la vecindad civil foral vasca. Pero la cuestión que plantea controversia en este caso es la acreditación de la efectiva residencia en la provincia de B. durante ese periodo mínimo de dos años, en tanto que el empadronamiento en la localidad de M. no se efectuó hasta diciembre de 2013, mientras que la solicitud se presentó en el registro en enero de 2014.

IV. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que «El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo». Además se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para «todos los efectos administrativos», pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil, en general, y por el artículo 365 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código Civil, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del Registro Civil en dos casos concretos: a) el artículo 336.3, que dispone que «el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical»; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, que establece, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará «por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal».

V. En consecuencia, ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del Registro Civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta,

actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VI. Por ello, como se ha dicho, el encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en este concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual. En el presente caso la encargada del registro no consideró suficiente el único documento presentado inicialmente en prueba de la residencia habitual en M. desde 2011, de manera que, no habiéndose requerido otras pruebas ni realizado diligencias complementarias, se dictó resolución denegatoria. Sin embargo, con el escrito de recurso se aportaron otros documentos de los que se desprende que, en efecto, el interesado llevaba residiendo en territorio del País Vasco más de dos años. Por ello, teniendo en cuenta estos datos, así como el concepto de domicilio antes apuntado como aquel lugar en el que la persona reside con cierta permanencia, a pesar de la fecha de alta que figura en el certificado de empadronamiento, resulta acreditado el domicilio efectivo del promotor en M. durante más de dos años anteriores a la solicitud y así lo han considerado también tanto el ministerio fiscal como la propia encargada en su informe posterior a la presentación del recurso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y practicar el asiento correspondiente de cambio de vecindad civil solicitada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ponteareas (Pontevedra).

3.8 Competencia en expedientes de nacionalidad

3.8.1 COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Resolución de 16 de junio de 2017 (22.ª)

Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.—*Se declara la nulidad de la resolución de la encargada que acuerda el archivo de una solicitud de nacionalidad española por residencia sin previa remisión del expediente a la DGRN porque carece de competencia para ello.*

En las actuaciones sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Arrecife.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 11 de marzo de 2014 en el Registro Civil de Arrecife, el Sr. G.-D. C. S., mayor de edad y de nacionalidad uruguaya, presentó solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia, sin que conste la documentación aportada aparte de la tarjeta de residencia.

II

La encargada del registro dictó providencia el 11 de marzo de 2014 acordando el archivo del expediente por no haber aportado el solicitante certificado de ausencia de antecedentes penales.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso alegando el interesado que no aportó el día de la cita la documentación señalada porque, a pesar de haberla solicitado con bastante antelación, no la había recibido a tiempo para ese día por circunstancias imputables a la situación en su país de origen, si bien solicitaba que le fuera admitida su presentación posterior.

IV

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Arrecife ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil (CC); 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 24-6.^a de 2009; 13-1.^a de enero y 25-8.^a de noviembre de 2010; 15-42.^a de abril y 7-63.^a de octubre de 2013; 6-69.^a de febrero y 17-45.^a de abril de 2015.

II. En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 CC). Por ello, si el encargado que había de instruir la primera fase del expediente (art. 365 RRC) –conforme al procedimiento anterior a la reforma operada a partir de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil– estimaba que no se cumplían los requisitos legales para la concesión, debía limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable.

III. No se hizo así en este caso, en el que ni siquiera se llegó a requerir al interesado, antes de acordar el archivo, la presentación de la documentación que faltaba otorgándole un plazo razonable para ello, de modo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia del órgano que resolvió. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

IV. Por lo demás, no habiéndose completado la tramitación del expediente, es oportuno devolver las actuaciones al Registro Civil de Arrecife para que se realicen los trámites necesarios, elevándose a continuación a esta dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y declarar la nulidad de la resolución recurrida.
- 2.º Retrotraer las actuaciones devolviendo el expediente al registro de procedencia para que se complete la tramitación oportuna y se remita lo actuado a este centro para la resolución de la solicitud.

Madrid, 16 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Arrecife (Las Palmas).

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (21.ª)

Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.–*Se declara la nulidad del auto de la encargada que declara la ineficacia de una resolución de concesión de nacionalidad española por residencia, para lo que carece de competencia.*

En las actuaciones sobre declaración de ineficacia de la concesión de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución de la encargada del Registro Civil de Santander.

HECHOS

I

Por medio de resolución fechada el 30 de mayo de 2014, la Dirección General de los Registros y del Notariado concedía la nacionalidad española por residencia, una vez tramitado el correspondiente expediente, a la ciudadana peruana E.-L. W. T.

II

La resolución se remitió al registro civil competente para su notificación formal a la interesada, con la advertencia de la necesidad de cumplimiento a continuación de los trámi-

tes necesarios para la validez de la concesión. Intentada infructuosamente la citación a través de teléfono y, a continuación, por medio del servicio de Correos, se procedió a publicar un edicto el 4 de noviembre de 2014.

III

El 13 de noviembre de 2014 tiene entrada en el registro un escrito de la interesada en el que solicita poder efectuar los trámites necesarios para formalizar la adquisición de la nacionalidad, tras haber recibido una negativa verbal por no tener NIE en vigor, alegando que puede identificarse con su pasaporte.

IV

El 2 de diciembre de 2014, comparece la interesada nuevamente en el registro para declarar que en ese momento no tenía tarjeta de residencia en vigor porque cuando se cumplió el plazo para renovarla se encontraba en Perú por enfermedad de su madre pero que, una vez enterada de que había sido citada para completar los trámites de adquisición de la nacionalidad, había solicitado un visado de turista para volver a España y presentarse en el registro.

V

La encargada del registro dictó auto el 9 de enero de 2015 denegando la realización del trámite de jura o promesa y posterior inscripción por falta de residencia legal de la promotora, entendiendo que el requisito de la permanencia legal y continuada en España que exige el artículo 22.3 del Código Civil (CC) debe cumplirse a lo largo de todo el procedimiento, incluido el acto de jura o promesa.

VI

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando la interesada que se personó en el registro dentro del plazo legal y que el artículo 22.3 CC solo exige que el periodo de residencia legal y continuada sea inmediatamente anterior a la petición de la nacionalidad.

VII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil de Santander remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso con informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil (CC); 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 25-8.^a de noviembre de 2010; 5-17.^a y 18.^a de septiembre de 2012; 2-47.^a de septiembre de 2013; 30-3.^a de enero de 2014 y 8-20.^a de abril de 2016.

II. La recurrente solicitó en 2013 la nacionalidad española por residencia, que fue concedida mediante resolución de la DGRN de 30 de mayo de 2014 remitida al registro civil de procedencia para su comunicación a la interesada. Sin embargo, cuando la promotora compareció ante el registro para completar los trámites de adquisición, la encargada dictó auto denegando la tramitación del acta de jura o promesa previa a la práctica de la inscripción porque la compareciente no tenía residencia legal en vigor en ese momento. Contra dicha resolución se presentó el recurso estudiado.

III. En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 CC). Por lo tanto, de acuerdo con la normativa aplicable en el momento de la tramitación del expediente del que aquí se trata, si el encargado instructor (art. 365 RRC) hubiera estimado que no se cumplían los requisitos legales para la concesión, debía limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable. En este caso se da la circunstancia de que, una vez dictada la resolución de concesión, cuando la interesada se presenta en el registro para completar los trámites de adquisición, la encargada deniega su práctica porque la compareciente no ha renovado su permiso de residencia y no tiene NIE en vigor en ese momento. En línea con lo anteriormente expuesto, si la encargada albergaba dudas acerca de la procedencia o no de hacer efectiva la concesión a la vista de que la interesada no disponía en ese momento de residencia legal, pudo haber dirigido una consulta a este centro acordando entre tanto la suspensión de las actuaciones, pero lo cierto, en cualquier caso, es que en el momento de la concesión resultaban acreditados los requisitos necesarios y siendo, como se ha dicho, el órgano decisor en estos expedientes el Ministerio de Justicia, procede ahora declarar la nulidad de la resolución apelada por incompetencia del órgano que la dictó, tal como resulta de la normativa citada en el fundamento primero.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º) Estimar el recurso y declarar la nulidad, por incompetencia, de la resolución apelada.

2.º) Citar nuevamente a la interesada para continuar la práctica de los trámites de adquisición de la nacionalidad por residencia.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (29.ª)

Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.— *Se declara la nulidad de la resolución de la encargada que inadmite a trámite una solicitud de nacionalidad española por residencia sin previa remisión del expediente a la DGRN porque carece de competencia para ello.*

En las actuaciones sobre solicitud de nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de El Ejido (Almería).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de El Ejido (Almería) el 26 de noviembre de 2013, la Sra. N. E. N., en ese momento todavía menor de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaba, asistida de sus padres, la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Aportaba los siguientes documentos: tarjetas de residencia en España y pasaportes marroquíes de la interesada y de sus progenitores, certificado de empadronamiento, certificación de nacimiento, certificado de matrícula en un centro educativo, resolución de reconocimiento de alta en el régimen de autónomos del padre de la interesada, varios documentos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social e informe de vida laboral.

II

Ratificados los promotores y previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 29 de abril de 2014 inadmitiendo a trámite la solicitud presentada por falta de acreditación del periodo mínimo de residencia legal en España.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la interesada que cumple los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad. Con el escrito de recurso se adjuntaba certificado expedido por la Dirección General de la Policía de residencia continuada en España desde el 21 de febrero de 2002.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de El Ejido se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 63 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 25-8.^a de noviembre de 2010; 13-1.^a de enero y 25-8.^a de noviembre de 2010; 15-42.^a de abril y 7-63.^a de octubre de 2013; 6-69.^a de febrero y 17-45.^a de abril de 2015.

II. En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 CC). Por lo tanto, si el encargado que instruyó la primera fase del expediente, conforme al procedimiento aplicable en el momento de la solicitud, estimaba que no se cumplían los requisitos legales para la concesión, debió limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado según las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable (art. 365 RRC).

III. No se hizo así en este caso, en el que ni siquiera se llegó a requerir a la interesada, antes de acordar el archivo, la aportación de documentación complementaria, de modo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia del órgano que resolvió. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

IV. Por lo demás, no habiéndose completado la tramitación del expediente, es oportuno devolver las actuaciones al registro de procedencia para que se realicen los trámites necesarios, elevándose a continuación a esta dirección general.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y declarar la nulidad de la resolución recurrida.
- 2.º Retrotraer las actuaciones devolviendo el expediente al Registro Civil de El Ejido para que se complete la tramitación oportuna y se remita lo actuado a este centro para la resolución de la solicitud.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de El Ejido (Almería).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 6 de octubre de 2017 (22.^a). Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (31.^a). Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (21.^a). Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (22.^a). Competencia material del Registro Civil en expedientes de nacionalidad por residencia.

3.8.2 COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR MOTIVOS DISTINTOS A LA RESIDENCIA

Resolución de 17 de febrero de 2017 (78.^a)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.–*El encargado puede y debe declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del padrón municipal respecto de la persona que promueve el expediente ante el registro civil, cuya competencia depende del domicilio del promotor al que se refiere la inexactitud. No obstante, a la vista de las pruebas presentadas, cabe declarar acreditada la residencia habitual en el municipio que consta en el expediente y, en consecuencia, la competencia del registro para su tramitación.*

En las actuaciones sobre declaración de incompetencia territorial del registro en un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el Registro Civil de Zaragoza el 16 de junio de 2015, el Sr. N. P. N., mayor de edad y de nacionalidad senegalesa, solicitaba la concesión de la nacionalidad española por residencia. Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: tarjeta de residencia, pasaporte senegalés, volante de empadronamiento, certificados senegaleses de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales, informe de vida laboral, certificado de prestación contributiva del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y certificado de nacimiento senegalés de una hija del promotor.

II

Ratificado el interesado y practicada audiencia personal, la encargada del registro, a la vista de que, según el informe laboral aportado al expediente, el solicitante había estado trabajando hasta fecha reciente en J. y anteriormente en L., requirió informe policial con objeto de determinar si el domicilio efectivo de aquel era el declarado en Z. para así poder comprobar la competencia territorial del registro. La oficina correspondiente de policía judicial de Z. comunicó, en informe fechado el 18 de septiembre de 2015, que, personados los agentes en la vivienda declarada por el promotor, los inquilinos manifestaron que este se encontraba en A. por razones de trabajo, desconociendo su dirección.

III

Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 30 de septiembre de 2015 declarando su incompetencia territorial por considerar que el interesado no tenía su domicilio habitual en Z.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) reiterando el promotor que su domicilio habitual está ubicado en Z., junto a varios familiares cercanos (hermana, cuñado, sobrinas y otro hermano) desde que llegó a España, aunque en determinados momentos ha tenido que desplazarse a otras localidades por motivos laborales de carácter temporal, pero que nunca ha trasladado su residencia de forma permanente a otra ciudad, que el piso en el que reside es propiedad de su hermana y de su cuñado desde 2006, que en el momento de presentación de la solicitud se encontraba en situación de desempleo en Z., por lo que, si encuentra algún trabajo temporal en otra localidad, lo acepta para contribuir a los gastos de la vivienda y para enviar

dinero a su esposa e hija residentes en Senegal y que, habiendo sido todos los trabajos realizados fuera de Z. de carácter temporal, no podría haber solicitado la nacionalidad española en ninguna de las localidades en las que ha trabajado, pues siempre ha estado empadronado en Z. y nunca ha permanecido en otro lugar con la continuidad suficiente como para poder fijar su residencia definitiva. En prueba de sus alegaciones, con el escrito de recurso aportaba los siguientes documentos: certificado de empadronamiento en Z. donde consta su inscripción desde el 4 de febrero de 2002, tarjetas de residencia y DNI de los familiares con los que comparte vivienda, declaraciones testificales de la hermana y el cuñado del recurrente, escritura de préstamo hipotecario de febrero de 2006 para la compra de un inmueble en Z. por parte de aquellos, tarjeta a nombre del promotor de usuario de Bibliotecas Públicas Municipales de Z., tarjeta ciudadana de Z., tarjeta de la Red de Bibliotecas de Aragón expedida el 26 de diciembre de 2008, tarjeta de farmacia con aportación del Gobierno de Aragón con fecha de caducidad de mayo de 2015, comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 1 de septiembre de 2015 de modificación de la cuantía de la prestación por desempleo y resolución de aprobación de las prestaciones por desempleo fechada el 26 de marzo de 2015.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 40 del Código Civil (CC); 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 220 a 224 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 1-42.^a de marzo, 5-37.^a de julio y 15-234.^a de noviembre de 2013; 20-37.^a de marzo, 4-89.^a y 189.^a de septiembre y 28-110.^a de octubre de 2014; 13-42.^a de mayo, 4-13.^a y 8-21.^a de julio de 2016.

II. El interesado presentó en el Registro Civil de Zaragoza la solicitud de concesión de nacionalidad española por residencia. La encargada del registro, a la vista de la información contenida en el informe de vida laboral incorporado a las actuaciones, tras solicitar y obtener un informe policial acerca del domicilio efectivo del solicitante, dictó auto declarando la incompetencia territorial del registro por no considerar acreditada la residencia habitual del promotor en su demarcación. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se plantea pues es la posible divergencia entre el domicilio real del interesado y el que declaró en su solicitud, toda vez que dicha circunstancia es la que determina la competencia territorial del registro civil en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.

Siendo esto así, deben disiparse las dudas posibles sobre su veracidad mediante la práctica de las diligencias de investigación y comprobación que fuesen necesarias y, en ese sentido, la encargada del Registro Civil de Zaragoza solicitó informe a la policía judicial acerca de la realidad del domicilio declarado por el interesado.

IV. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que «El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo». Además se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para «todos los efectos administrativos», pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada del mismo fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil, en general, y por el artículo 365 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código civil, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del registro civil en dos casos concretos: a) el artículo 336.3, que dispone que «el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical»; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, que establece, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará «por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal».

V. En consecuencia, ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del registro civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal

Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VI. Por ello, como se ha dicho, el juez encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en este concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual a la vista de la fecha del empadronamiento. Ello supone la práctica de las diligencias que sean necesarias para comprobar la realidad del domicilio del interesado que consta en el certificado de su empadronamiento y que, según el resultado, bien declare su falta de competencia para conocer y resolver el expediente si llega a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal, bien, en caso afirmativo, continúe la tramitación del expediente con la práctica de las diligencias que procedan. En el presente caso esas diligencias han sido requeridas y practicadas, constanding en el expediente un informe de la policía local según el cual, en una sola visita realizada al domicilio declarado, los inquilinos presentes en ese momento manifestaron que el promotor no se encontraba allí porque estaba trabajando en A. Es en este informe, junto con los datos ofrecidos por el informe de vida laboral, en el que se basó la encargada para fundamentar la declaración de incompetencia territorial. Sin embargo, a la vista del conjunto de la documentación disponible, no cabe atribuir a dichos documentos carácter de prueba concluyente en este caso en tanto que, por un lado, resulta acreditado que el interesado lleva empadronado sin interrupción en la ciudad de Z. desde 2002 y, si bien es cierto, y el recurrente no lo niega, que a lo largo de este tiempo se ha desplazado a otras localidades para trabajar, del propio informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se desprende que hasta 2011 estuvo trabajando en Z. y, desde 2012, en diferentes empresas de Andalucía y Cataluña pero siempre en periodos discontinuos de corta duración (entre unos días y seis meses el más largo, solo uno), lo que justificaría suficientemente que no modificara su residencia habitual anterior al no contar con una perspectiva razonable de permanencia durante cierto tiempo en otro lugar. Por otra parte, en todos los documentos referidos al solicitante, tanto oficiales como particulares, figura siempre el mismo domicilio y, aunque no constan, por señalar los supuestos más frecuentes, facturas de suministros a su nombre (lo que se explica porque la vivienda en la que reside es propiedad de su hermana y su cuñado) o de otras actividades sociales que reflejen continuidad en un lugar, como la asistencia a un centro deportivo o educativo, por poner algún ejemplo (lo que también parece justificado por la naturaleza temporal de los trabajos desempeñados), sí figuran en cambio otros documentos, como las tarjetas de la red

local de bibliotecas y una de farmacia, que a su vez contribuyen, consideradas en el conjunto del expediente, a dar por acreditada la realidad de la residencia habitual del recurrente en Z. a efectos civiles en los términos expresados por el art. 40 CC («para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles») según se ha descrito en el fundamento V de la resolución. De manera que, a falta de prueba en contrario, puede darse por acreditado que el domicilio habitual del promotor se encuentra, desde 2002 y, al menos, hasta el inicio del expediente, en la ciudad de Z. y, en consecuencia, correspondía a ese registro la competencia para tramitarlo en el momento en que se presentó la solicitud de nacionalidad por residencia.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso, dejar sin efecto el auto recurrido y devolver las actuaciones para la continuación de la instrucción del procedimiento.

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (20.^a)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.–*Corresponde al registro civil del domicilio de la declarante, representante legal de la menor de catorce años, la competencia para otorgar la autorización para ejercer la opción a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.a) del Código Civil.*

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador).

HECHOS

I

Mediante escrito de fecha 09 de junio de 2015, formulada ante el Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador), Don. R. A. R. B., en virtud del poder notarial conferido por Doña M-L. R. B., nacida el 05 de octubre de 1975 en R., C. (Ecuador), de nacionalidad española por residencia, solicita la opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil, a favor de A-A. R. B., nacida el 02 de enero de 2002 en R., C. (Ecuador).

Aportaba la siguiente documentación: pasaporte ecuatoriano y certificado local de nacimiento de la menor, en el que consta inscrita con filiación materna, siendo hija de Doña M-L. R. B.; documento nacional de identidad, pasaporte español y certificado literal español de nacimiento de la progenitora, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 05 de marzo de 2013; pasaporte ecuatoriano, cédula de identificación ecuatoriana y certificado local de nacimiento de la madre de la interesada.

II

Con fecha 21 de septiembre de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito dicta resolución por la que acuerda declarar desistida la petición relativa a la solicitud de opción a la nacionalidad española de la menor de 14 años, toda vez que al residir en España la progenitora que ostenta la patria potestad sobre la misma, deberá promover el expediente y optar en nombre de su hija en su lugar de residencia.

III

Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que el artículo 20 del Código Civil establece que «la opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante», considerando que el domicilio del declarante es el de la persona que opta a la nacionalidad y no el domicilio de su representante, por lo que considera que la competencia para conocer de la autorización de la opción es del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador).

IV

Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe en el que se ratifica en los términos de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos el artículo 20 y 154 del Código Civil; 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 26 de julio de 2007 de la D.G.R.N y las resoluciones 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 24-6.^a de 2009; 13-1.^a de enero y 25-8.^a de noviembre de 2010.

II. La instrucción de 20 de marzo de 1991 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre nacionalidades, apartado IV «Opción a la nacionalidad española», en relación con el artículo 20.2 del Código Civil, por el que el representante del menor de catorce años o del incapacitado puede

optar, en nombre de éste, por la nacionalidad española, siempre que se obtenga la autorización del encargado del registro civil del domicilio, previo dictamen del ministerio fiscal, en atención al interés del menor, indica que «como esta autorización está encomendada al encargado del registro civil, hay que estimar que se trata de una actuación registral de la competencia de los Jueces o Cónsules encargados del registro y que da origen a un expediente de los regulados por la legislación del Registro Civil, sujeto a sus normas específicas y a su régimen propio de recursos (*cf.* artículo 97 de la Ley del Registro Civil)» y que «para conceder la autorización al representante legal, sólo es competente el encargado del registro civil del domicilio del declarante». Igualmente, en el apartado VIII de la citada instrucción, declaración cuarta, se establece que «la autorización para que el representante legal del menor de catorce años pueda optar, en nombre de éstos, por la nacionalidad española es una actuación registral, sometida a las normas de los expedientes del registro civil. Tal autorización, aunque la inscripción de la opción haya de extenderse en otro registro, corresponde siempre concederla al juez o cónsul encargado del registro civil del domicilio del declarante». Se plantea el problema de determinar el registro civil competente cuando la menor reside en Ecuador y la progenitora, representante legal de la misma y titular de la patria potestad, reside en España. En este sentido, la instrucción de 26 de julio de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia (BOE núm. 189 de 08 de agosto de 2007), aplicable a los supuestos de adquisición por opción, establece en su apartado 3.2.b) respecto de los menores cuyos progenitores residen en distintos municipios que «la norma específica a tener en cuenta en materia de competencia para obtener la autorización preceptiva la constituye el artículo 20.2.a) del Código Civil, la cual, exige para formalizar la solicitud de nacionalidad en favor de un menor de catorce años, la autorización del encargado del registro civil del domicilio del declarante. En este punto, no rigen las normas de competencia registral (*cf.* art. 365 RRC), sino la competencia por conexión del artículo 20.2.a) del Código Civil, que la atribuye el Registro Civil del «domicilio del declarante», esto es, del representante legal del menor»

III. En el expediente que nos ocupa, y dado que la interesada era menor de 14 años en la fecha en que se dictó la resolución impugnada, resultaba competente para la autorización de la opción a la nacionalidad española el registro civil del domicilio de la declarante, es decir, de la progenitora de la misma y titular de la patria potestad, que reside en España.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Quito (Ecuador).

Resolución de 28 de abril de 2017 (16.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.—*Se declara la nulidad de la resolución del encargado que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el promotor ante esta dirección general, porque carece de competencia para ello y se retrotraen las actuaciones al momento de la interposición del recurso.*

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013, porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal).

HECHOS

I

Con fecha 29 de abril de 2014, Don S. L. K. nacido el 2 de diciembre de 1995 en B. (Senegal), presunto hijo de Don I. L. C., nacido el 27 de octubre de 1976 en B. (Senegal), de nacionalidad española adquirida por residencia y de D.ª M. K., de nacionalidad senegalesa, presenta en el Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal), solicitud de opción a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código Civil.

Acompaña la siguiente documentación: sentencia de autorización de inscripción de nacimiento del interesado, dictada por el Tribunal Departamental de Sédhiou (Senegal) el 2 de junio de 2004; copia literal y extracto de acta de certificado de nacimiento del interesado, expedido por la República de Senegal; certificado de alumbramiento del promotor, expedido por la Región Médica de Sedhiou (Senegal); carnet de identidad senegalés del promotor; documento nacional de identidad, pasaporte español y certificado literal español de nacimiento del presunto progenitor, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 30 de julio de 2013; certificado literal local de nacimiento del presunto progenitor; documento de identidad senegalés y copia literal de acta de nacimiento de la presunta progenitora.

II

El órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 30 de marzo de 2015, emite informe desfavorable, indicando que en audiencia reservada en expediente de inscripción de matrimonio, la Sra. K. declaró no ser la madre biológica del interesado, siendo éste hijo de una relación anterior de su cónyuge, lo que pone en duda la veracidad del contenido de los documentos presentados; que la inscripción de nacimiento del solicitante se realizó el 1 de septiembre de 2014, en virtud de sentencia de 2 de junio de 2004 y que el promotor pre-

senta unos rasgos físicos notablemente mayores que no coinciden con los de un joven de dieciocho años.

III

Con fecha 4 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal) dicta auto por el que desestima la nacionalidad por opción solicitada por el promotor, por estimar que existen dudas fundadas sobre la veracidad de la documentación aportada y, por tanto, sobre la verdadera identidad del solicitante, que permitiría optar a la nacionalidad española.

IV

Notificada la resolución, el promotor formula recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tiene entrada en el registro general del Ministerio de Justicia el 24 de junio de 2015, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción, alegando que la resolución desestimatoria adolece de falta de motivación, toda vez que en su certificado de nacimiento se hace constar que su madre es D.^a M. K., por lo que su filiación, demostrada y acreditada, debe primar sobre las presunciones de la administración y que, por otra parte, resulta contradictorio el hecho de que la Administración española haya otorgado la nacionalidad a su padre y ahora se cuestione la filiación de su hijo.

V

Trasladado el recurso de apelación al Consulado General de España en Dakar (Senegal), se califica erróneamente como recurso potestativo de reposición, dictándose resolución con fecha 30 de julio de 2015, por el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal), por la que se desestima la solicitud formulada por el interesado, indicándose que la misma pone fin a la vía administrativa y que contra ella cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

VI

El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe desestimatorio al recurso formulado por el interesado y el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal) remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 225.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 20 del Código Civil (CC); 15, 23 y 29 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 66,

68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Se pretende por el interesado, nacido el 2 de diciembre de 1995 en B. (Senegal), la opción por la nacionalidad española de su padre, nacido en Senegal en octubre de 1976 y que la adquirió por residencia con fecha 30 de julio de 2013. La solicitud formulada fue desestimada por auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar (Senegal), por existir dudas fundadas sobre la veracidad de la documentación aportada. Frente a dicha resolución, el interesado interpone recurso de apelación ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado por el interesado, al que erróneamente se califica de recurso potestativo de reposición y se resuelve desfavorablemente por el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar.

III. En primer lugar, procede considerar la competencia del encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar para la resolución del recurso de apelación interpuesto por el promotor. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Registro Civil, «las decisiones del encargado del registro son recurribles durante treinta días en vía gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con apelación en igual tiempo ante la dirección general, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, cuando corresponda, la vía judicial ordinaria».

Por tanto, una vez dictado el auto, notificado al interesado y presentado el recurso, las demás actuaciones practicadas son improcedentes, dado que en ese momento procedimental, la competencia para conocer y resolver no corresponde al registro sino a esta dirección general, que debe resolver el recurso y pronunciarse sobre la procedencia de declarar la nacionalidad española por opción solicitada.

IV. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.*: art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los HECHOS de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española « (art. 85, I, RRC).

V. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 30 de julio de 2013 y pretende el promotor asistido por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación senegalesa, en la cual se hace constar que nació el 2 de diciembre de 1995 en B. (Senegal), si bien fue

inscrito el 10 de septiembre de 2004, nueve años después de producido el nacimiento, por sentencia dictada por el Tribunal Departamental de Sedhiou (Senegal) el 2 de junio de 2004. En dicho certificado de nacimiento, se hace constar que su madre es D.^a M. K.

Por otra parte, consta en el expediente, copia de la audiencia reservada realizada el 20 de enero de 2015 por la Sra. K., ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar, en expediente de inscripción de matrimonio, en la que declara en el apartado trece que «tienen cuatro hijos que se llaman S. L., nacido el 20 de diciembre de 1998, M. O. L., nacido el de 2003, S. L., que nació el de 2008 y S. L. que nació el de 2013, y los cuatro residen en Dakar con ella». En el apartado catorce indica que «su esposo tiene hijos de otra anterior relación: S. y S., nacidos el 2 de diciembre de 1995 que viven en Senegal con ella».

Asimismo, se aporta al expediente un certificado de alumbramiento de fecha 11 de abril de 2015, en el que consta que la Sra. K. dio a luz un varón el 2 de diciembre de 1995, lo que resulta de todo punto contradictorio con las declaraciones efectuadas por la presunta progenitora en la audiencia reservada de fecha 20 de enero de 2015. Igualmente, existe contradicción entre las declaraciones de la Sra. K. formuladas en audiencia reservada y el certificado local de nacimiento del interesado aportado al expediente, toda vez que en el mismo se hace constar que su madre es D.^a M. K., cuando la misma declaró que el promotor era hijo de una relación anterior de su esposo.

VI. En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la certificación local aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (*cf.* art. 20 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que procede:

1.º Declarar la nulidad, por incompetencia, de la resolución dictada por el encargado del registro civil consular por la que se decidió sobre el recurso de apelación interpuesto por el promotor y retrotraer las actuaciones al momento de la interposición del recurso.

2.º Desestimar el recurso interpuesto por el promotor y confirmar el auto apelado.

Madrid, 28 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Dakar (Senegal).

Resolución de 5 de mayo de 2017 (1.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.— 1.º) *Advertido error en los presupuestos en los que se basaba su conclusión, se revoca la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 2016 (46.ª) porque no existe solicitud posterior de nacionalidad por residencia del interesado admitida a trámite en el mismo registro que se declaró incompetente para tramitar la presentada el 15 de mayo de 2013.*

2.º) *Examinado el fondo del asunto, el encargado puede y debe declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del padrón municipal respecto de la persona que promueve el expediente ante el registro civil, cuya competencia depende del domicilio del promotor al que se refiere la inexactitud.*

En las actuaciones sobre declaración de incompetencia territorial del registro en un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Cerdanyola del Vallès el 15 de mayo de 2013, el Sr. R. A., mayor de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaba la concesión de la nacionalidad española por residencia. Adjuntaba los siguientes documentos: tarjeta de residencia en España, pasaporte marroquí, certificado de empadronamiento histórico en Cerdanyola (hasta el 31 de agosto de 2011), certificado de empadronamiento en Ripollet desde el 13 de mayo de 2013, certificados de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales en el país de origen, informe de vida laboral, contratos de trabajo y nóminas.

II

La encargada del registro, a la vista de los datos históricos de altas y bajas y de la fecha de empadronamiento del promotor en el municipio de residencia declarado en la solicitud, requirió informe a la policía local de Sabadell y de Ripollet con objeto de determinar el lugar del domicilio efectivo y así poder comprobar la competencia territorial. La policía local del ayuntamiento de Ripollet comunicó que, personado un agente en el domicilio indicado, un familiar del solicitante había manifestado que el Sr. A. residía allí y trabajaba en un restaurante de Cerdanyola del Vallès. La policía municipal de Sabadell, por su parte, remitió asimismo informe según el cual los agentes encargados de la diligencia se habían entrevistado en un domicilio de la localidad con el interesado, quien les había manifestado que también se le podía encontrar en una dirección de Ripollet.

III

A la vista de los informes anteriores, previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 4 de marzo de 2014 declarando su incompetencia territorial por considerar que, según se desprende de las averiguaciones e informes incorporados al expediente, aunque el interesado figuraba empadronado en la fecha de la solicitud en Ripollet, no resultaba acreditado que su domicilio efectivo estuviera situado en la referida localidad.

IV

Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que desde que llegó a España ha estado residiendo en diferentes domicilios situados en localidades pertenecientes al partido judicial de Cerdanyola del Vallès, que únicamente estuvo residiendo fuera de dicha demarcación entre el 16 de junio de 2013 y el 15 de enero de 2014 y que desde esta última fecha reside nuevamente en Cerdanyola con su esposa, habiendo arrendado ambos una vivienda el 27 de noviembre de 2013. Con el escrito de recurso adjuntaba acta de matrimonio, contrato de arrendamiento de vivienda y nuevos justificantes de empadronamiento histórico en Cerdanyola y en Ripollet.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Cerdanyola del Vallès se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 40 del Código Civil (CC); 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 64 de la Ley del Registro Civil (LRC); 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 11-4.^a de enero de 2007, 16-6.^a de junio y 10-1.^a y 8.^a de julio de 2008, 19-7.^a de junio y 31-1.^a de julio de 2009, 2-18.^a, 23-2.^a y 30-5.^a de septiembre de 2010, 23-10.^a, 11.^a y 12.^a de marzo de 2011, 28-11.^a de junio de 2012, 17-33.^a, 34.^a y 35.^a de marzo de 2014 y 24-40.^a de abril de 2015.

II. El interesado presentó en el Registro Civil de Cerdanyola del Vallès su solicitud de concesión de nacionalidad española por residencia. La encargada del registro, vistos los justificantes de empadronamiento, tras solicitar y obtener informes policiales acerca del domicilio efectivo del solicitante, dictó auto declarando la incompetencia territorial del registro por no considerar

acreditada la residencia habitual del promotor en su demarcación. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. En primer lugar, hay que decir que el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que estas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Pues bien, habiéndose detectado que el presupuesto en el que se basaba el archivo de las actuaciones, por considerar decaído el objeto del recurso, era erróneo, procede revocar de oficio la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 2016 (46.^a) porque no existe una solicitud posterior de nacionalidad por residencia del interesado presentada el 24 de septiembre de 2015 y admitida a trámite en el mismo registro que se había declarado incompetente para iniciar el procedimiento en 2013. En consecuencia, una vez comprobado el error, procede practicar la rectificación de oficio y entrar a examinar el fondo del asunto.

IV. La cuestión que se plantea pues es la posible divergencia entre el domicilio real del interesado y el que declaró en su solicitud, toda vez que dicha circunstancia es la que determina la competencia territorial del Registro Civil en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia. Siendo esto así, deben disiparse las dudas posibles sobre su veracidad mediante la práctica de las diligencias de investigación y comprobación que fuesen necesarias y, en ese sentido, la encargada del Registro Civil de Cerdanyola del Vallès solicitó informes a la policía local de Sabadell y de Ripollet para intentar averiguar el domicilio real del interesado.

V. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por la Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que «El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo». Además, se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para «todos los efectos administrativos», pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada del mismo fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil, en general, y por el artículo 365 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código Civil, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual

constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del Registro Civil en dos casos concretos: a) el artículo 336.3, que dispone que «el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical»; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, que establece, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará «por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal».

VI. En consecuencia, ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del Registro Civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (*vid.* sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cfr.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VII. Por ello, como se ha dicho, el encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en este concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual a la vista de la fecha del empadronamiento. Ello supone la práctica de las diligencias que sean necesarias para comprobar la realidad del domicilio del interesado que consta en el certificado de su empadronamiento y que, según el resultado, bien declare su falta de competencia para conocer y resolver el expediente si llega a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal, bien, en caso afirmativo, continúe la tramitación del expediente con la práctica de las diligencias que procedan. En el presente caso esas diligencias han sido requeridas y practicadas, constando en el expediente que el solicitante, que llevaba empadronado en Sabadell desde el 31 de agosto de 2011 (a diferencia de lo que sostiene en el escrito de recurso), se dio de alta en Ripollet solo dos días antes de la presentación de la solicitud de nacionalidad, causando baja apenas un mes después para volver a empadronarse en Sabadell en el

mismo domicilio anterior, donde permaneció hasta el 14 de enero de 2014, fecha en la que finalmente se empadronó en Cerdanyola. Es cierto que, según los datos históricos, el promotor parece haber residido la mayor parte del tiempo de su estancia en España en los municipios de Ripollet y Cerdanyola y que estuvo trabajando en esta última localidad al menos dos meses antes de iniciar el procedimiento de nacionalidad, pero eso no significa que tuviera fijada su residencia efectiva en alguna de las mencionadas localidades en ese momento, no constando otras pruebas complementarias que puedan dar por acreditada su afirmación. En realidad, a la vista de la documentación disponible, es difícil determinar dónde tenía verdaderamente establecido su domicilio el recurrente en mayo de 2013, pues ni siquiera los informes de la policía local son concluyentes. Así, según el de Ripollet, aunque el interesado no se encontraba en el domicilio indicado el día que se practicó la diligencia, sí estaba un familiar suyo que declaró que el Sr. A. residía en efecto en ese domicilio y trabajaba en Cerdanyola; sin embargo, los agentes de Sabadell sí lograron entrevistar al promotor en el domicilio en el que se había empadronado en 2011, si bien el interpelado aseguró que también estaba localizable en la dirección de Ripollet. No obstante, a la vista del conjunto de las informaciones y documentos aportados, independientemente de cuál fuera la residencia efectiva anterior y posterior, lo cierto es que no cabe dar por acreditado que el domicilio del promotor estuviera fijado en territorio de la competencia del registro de Cerdanyola del Vallès entre el 31 de agosto de 2011 y el 15 de enero de 2014.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado. .

Madrid, 5 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 23 de junio de 2017 (42.^a)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.–*Corresponde al registro civil del lugar de nacimiento del solicitante, y no al del domicilio, la calificación y la inscripción de la nacionalidad española de origen en virtud de la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima.*

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen, por virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, remitido a este centro directivo en trámite de recurso entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil Consular en Miami, Florida (Estados Unidos de América).

HECHOS

I

Don E. F. R., ciudadano estadounidense, presentó escrito en el Consulado de España en Miami, lugar de su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima y adjuntó, en apoyo de su solicitud, entre otros, los siguientes documentos: hoja declaratoria de datos en la que se hace constar que nació en B. (Cuba) el 11 de diciembre de 1969, hijo de P. F. H., nacido en D., B. (Cuba) el 10 de enero de 1948 y de N. R. G., nacida en B. (Cuba) el 21 de abril de 1951; pasaporte estadounidense y cubano del promotor; licencia de conducción del Estado de Florida del promotor; tarjeta de residencia permanente del promotor; certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado español de nacimiento del padre del interesado, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española el 21 de abril de 2003, en virtud del artículo 20.1.b del Código Civil vigente; certificado cubano de nacimiento del padre del interesado; certificación literal de ciudadanía, expedida por la registradora del Registro del Estado Civil de Banes, en el que consta la renuncia del abuelo del promotor, Don R. F. B., a la ciudadanía española y la opción a la ciudadanía cubana por naturalización.

II

El encargado del Registro Civil Consular en Miami, mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2013, denegó lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, al considerar que no concurrían en ella los requisitos de la Ley 52/2007.

III

Notificado el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando lo que estima pertinente en apoyo de su pretensión y solicitando nuevamente la inscripción.

IV

Notificado el órgano en funciones del ministerio fiscal, que no hizo alegaciones y el encargado del Registro Civil Consular en Miami emitió su informe preceptivo ratificándose en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; los artículos 15, 16, 23 y 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 66,

68, 85, 220 y siguientes, 232 y 358 del Reglamento del Registro Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones de 29-2.^a de octubre de 1999; 13-1.^a de febrero y 22 de marzo de 2003; 15-3.^a de octubre de 2008; 13-6.^a de abril de 2009; 1-6.^a de diciembre de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en B. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual «1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de junio de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 20 de marzo de 2013, denegando lo solicitado.

III. El auto impugnado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no reunía los requisitos para la aplicación de dicha norma al no quedar acreditada la nacionalidad española de su progenitor, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

No es posible no obstante a la vista de las actuaciones examinar el fondo del asunto, pues existe un problema previo de competencia. En efecto, como establece la directriz segunda de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, la solicitud de opción formalizada en el modelo correspondiente se presentará ante el encargado del registro civil español —consular o municipal— correspondiente al lugar del domicilio del interesado. Después de levantar éste acta por duplicado, remitirá uno de los ejemplares al registro civil español consular o municipal correspondiente al lugar del nacimiento que procederá a la práctica de la inscripción principal de nacimiento del interesado y de la inscripción marginal de su nacionalidad española de origen. Este régimen extiende para esta opción, por lo tanto, el procedimiento general previsto en los artículos 226 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (ver en especial el art. 229).

IV. En el presente caso, en el que el nacimiento que se pretende inscribir acaeció en B., Cuba, la competencia para calificar el acta de opción y practicar la inscripción, si procediese, corresponde como se ha dicho al encargado del registro civil consular en cuya demarcación se encuentre el lugar de nacimiento (artículo 16.1 de la Ley del Registro Civil) y no al del domicilio, M., que se extralimitó en sus competencias al adoptar el auto recurrido. Procede por tanto declarar la nulidad del mismo por aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de competencia territorial y de fuero personal de las personas físicas (*cf.* art. 50 L.E.C. 1/2000, de 7 de enero), aplica-

bles por la remisión que realiza el artículo 16 de la Ley del Registro Civil, que contiene un llamamiento supletorio a las normas de jurisdicción voluntaria.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad del auto apelado y retrotraer las actuaciones al momento de la recepción de las mismas por el Consulado General de España en Miami a fin de que se dé traslado de ellas al registro civil competente.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Miami (Estados Unidos de América).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (91.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.— *Corresponde al registro civil del domicilio de la declarante, representante legal del menor de catorce años, la competencia para otorgar la autorización para ejercer la opción a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.a) del Código Civil.*

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Villajoyosa (Alicante).

HECHOS

I

Mediante comparecencia, el día 1 de agosto de 2014, ante el Registro Civil de Callosa d'en Sarriá (Alicante), D.ª. E. L. D., nacida el 5 de noviembre de 1979 en B., C. (Ecuador) y de nacionalidad española por residencia, solicita autorización judicial previa para ejercer la opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) en relación con el 20.2.a del Código Civil, a favor de su hijo, W. A. L. D., nacido el de 2001 en B.. Aportaba la siguiente documentación: pasaporte ecuatoriano y certificado local de nacimiento del menor, en el que consta inscrito sólo con filiación materna, documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento de la progenitora, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 11 de abril de 2014, certificado de empadronamiento de la declarante en C. S. desde el año 2002 e informe de vida laboral y documentos fiscales de la Sra. L.

II

Con la misma fecha se ratifica la declarante en lo solicitado y el encargado del registro civil dicta providencia para remitir las actuaciones al Registro Civil de Villajoyosa. El 11 de septiembre de 2014 el ministerio fiscal emite informe solicitando que se requiera de la promotora que se acredite la escolarización del menor optante y su empadronamiento. Con fecha 10 de octubre siguiente la Sra. L. manifiesta ante el registro civil que su hijo reside en Ecuador y está escolarizado allí. Como consecuencia el ministerio fiscal emite nuevo informe en sentido de que al residir el optante, hijo de la promotora, fuera de España la solicitud debe realizarse a través del registro civil consular correspondiente.

III

Con fecha 27 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil de Villajoyosa dicta resolución por la que acuerda declararse incompetente para conceder la autorización previa a la solicitud de opción a la nacionalidad española del menor, W. A. L. D., al no residir éste en España y entender que correspondería que la solicitud se hiciera en el registro civil consular correspondiente. En este momento procesal el menor ya había cumplido los 14 años.

IV

Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que el artículo 20.2.a del Código Civil establece que para el caso de que el optante sea menor de 14 años «la opción requiere autorización del encargado del registro civil del domicilio del declarante», considerando que el domicilio del declarante es el de la persona que legalmente tiene atribuida dicha condición, los representantes legales del menor, que en este caso sólo es ella, al carecer de filiación paterna, por lo que considera que la competencia para conocer de la autorización es del registro civil español correspondiente a su domicilio en España.

V

Previo informe del ministerio fiscal, en el sentido de que el menor ya había cumplido 14 años y por tanto le sería aplicable el artículo 20.2.b del Código Civil, siendo competente para recoger la declaración de opción el registro civil consular correspondiente a la residencia del menor. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe en el que se ratifica en los términos de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos el artículo 20 y 154 del Código Civil; 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 26 de julio de 2007 de la D.G.R.N y

las resoluciones 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 24-6.^a de 2009; 13-1.^a de enero y 25-8.^a de noviembre de 2010.

II. La Instrucción de 20 de marzo de 1991 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre nacionalidades, apartado IV «Opción a la nacionalidad española», en relación con el artículo 20.2 del Código Civil, por el que el representante del menor de catorce años o del incapacitado puede optar, en nombre de éste, por la nacionalidad española, siempre que se obtenga la autorización del encargado del registro civil del domicilio, previo dictamen del ministerio fiscal, en atención al interés del menor, indica que «como esta autorización está encomendada al encargado del registro civil, hay que estimar que se trata de una actuación registral de la competencia de los jueces o cónsules encargados del registro y que da origen a un expediente de los regulados por la legislación del registro civil, sujeto a sus normas específicas y a su régimen propio de recursos (*cf.* artículo 97 de la Ley del Registro Civil)» y que «para conceder la autorización al representante legal, sólo es competente el encargado del registro civil del domicilio del declarante».

Igualmente, en el apartado VIII de la citada Instrucción, declaración cuarta, se establece que «la autorización para que el representante legal del menor de catorce años pueda optar, en nombre de éstos, por la nacionalidad española es una actuación registral, sometida a las normas de los expedientes del registro civil. Tal autorización, aunque la inscripción de la opción haya de extenderse en otro registro, corresponde siempre concederla al juez o cónsul encargado del registro civil del domicilio del declarante».

Se plantea el problema de determinar el registro civil competente cuando el menor reside en Ecuador y la progenitora, representante legal de la misma y titular de la patria potestad, reside en España. En este sentido, la Instrucción de 26 de julio de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia (BOE núm. 189 de 08 de agosto de 2007), aplicable a los supuestos de adquisición por opción, establece en su apartado 3.2.b) respecto de los menores cuyos progenitores residen en distintos municipios que *«la norma específica a tener en cuenta en materia de competencia para obtener la autorización preceptiva la constituye el artículo 20.2.a) del Código Civil, la cual, exige para formalizar la solicitud de nacionalidad en favor de un menor de catorce años, la autorización del encargado del registro civil del domicilio del declarante. En este punto, no rigen las normas de competencia registral (*cf.* art. 365 RRC), sino la competencia por conexión del artículo 20.2.a) del Código Civil, que la atribuye el registro civil del «domicilio del declarante», esto es, del representante legal del menor»*

III. En el expediente que nos ocupa, y dado que el interesado era menor de 14 años en la fecha en que se solicitó la autorización previa a la opción de

nacionalidad, resultaba competente para decidir sobre la autorización de la opción a la nacionalidad española el registro civil del domicilio de la declarante, es decir, de la progenitora del mismo y titular de la patria potestad, que reside en España, por lo que procede estimar el recurso en cuanto a la competencia discutida, dejando sin efecto la resolución impugnada, no obstante y habida cuenta que en este momento procesal el menor tiene 16 años, resulta procedente retrotraer las actuaciones para que éste formule por sí mismo, asistido por su representante legal, la declaración de opción a la nacionalidad española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2.b del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución apelada.

2.º Retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno para que el menor de edad, pero mayor de 14 años, optante formule su declaración de opción cumpliendo los requisitos del artículo 20.2.b, y previas las diligencias que estime oportunas y previo informe del ministerio fiscal, se acuerde por el encargado del registro civil competente lo que en derecho proceda.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Villajoyosa (Alicante).

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (5.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.— *Debe prevalecer la competencia del registro civil correspondiente al padre o madre en cuya compañía se encuentra el hijo menor de 14 años que opta a la nacionalidad española, por ser ambos progenitores titulares conjuntamente de la patria potestad, correspondiendo a ambos la representación (cfr art. 154 Código Civil) y teniendo distinto domicilio.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la representación legal de la optante contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Lleida el 24 de octubre de 2014, Don I. K. C., nacido en Costa de Marfil y de nacionalidad española, obtenida por residen-

cia con fecha 1 de febrero de 2013, solicitaba autorización judicial para ejercitar la opción a la nacionalidad española de su hija, menor de 14 años, A. K., nacida y domiciliada en Costa de Marfil, en base al artículo 20.1.a en relación con el 20.2.a del Código Civil. Adjuntaba entre otros los siguientes documentos: certificado de convivencia del Ayuntamiento de L., que incluye al solicitante, residente en la localidad desde el año 2004, y otras tres personas, ninguna de ellas la menor optante, certificado de nacimiento en extracto de la menor, nacida en K. (Costa de Marfil) el de 2003, inscrita en el registro civil local en de 2014 como hija de I. K. y A. C., de los que no consta su lugar ni fecha de nacimiento y si el domicilio de ambos en K., pasaporte de la menor expedido por Costa de Marfil en septiembre de 2014, documento nacional de identidad español del Sr. K. e inscripción de este en el registro civil español, nacido en A. (Costa de Marfil) el 9 de marzo de 1970, con marginal de nacionalidad española por residencia con fecha 1 de febrero de 2013.

Consta igualmente, previo requerimiento del Registro Civil de Lleida, declaración notarial efectuada en Costa de Marfil por la madre de la menor optante, prestando su consentimiento a que su hija obtenga la nacionalidad española.

II

La encargada del Registro Civil de Lleida, previo informe favorable del ministerio fiscal, dictó acuerdo de 27 de marzo de 2015, autorizando a los Sres. K. C. y C. para que formulen solicitud de opción a la nacionalidad española con base en los artículos 20 y 22 del Código Civil. Con la misma fecha se levanta acta de opción a la nacionalidad española de A. K., formulada por el Sr. K. C. como padre y representante legal de la misma. Con fecha 25 de abril siguiente el encargado del Registro Civil de Lleida dicta nuevo acuerdo declarando que concurren los requisitos para aplicar el artículo 20 del Código Civil, por lo que procedería la inscripción de nacimiento de la menor, remitiendo el expediente al Registro Civil Central como competente para la inscripción.

III

Entre la documentación remitida consta la solicitud de nacionalidad española por residencia formulada por el Sr. K. en octubre del año 2009, y en la que no se menciona a la menor optante como hija del solicitante y sí a otro menor nacido en España en el año 2008. Con fecha 14 de julio de 2015 el encargado del Registro Civil Central dictó auto denegando la inscripción solicitada, habida cuenta que la falta de mención de la menor por el Sr. K. hace dudar de la realidad del hecho que se pretende inscribir por no quedar acreditada la relación de filiación. En el primero de los razonamientos jurídicos del auto se hace constar que el interesado en el expediente tiene su domicilio en España.

IV

Notificada la resolución, el Sr. K. en representación de la menor optante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando lo que estima oportuno en apoyo de su pretensión.

V

Recibido el recurso se le notificó al ministerio fiscal que se mostró de acuerdo con el auto impugnado. El encargado del Registro Civil Central elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso. Posteriormente este centro directivo solicitó, a través del registro civil correspondiente, la acreditación del domicilio en España de la menor optante. Con fecha 19 de junio de 2017 el Sr. K. C. acredita su empadronamiento en Lleida y declara que la optante A. K. reside en Costa de Marfil, aportando los datos de su domicilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos el artículo 20 y 154 del Código Civil; 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 26 de julio de 2007 de la DGRN y las resoluciones 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.^a de enero de 2002; 17-3.^a de mayo de 2004; 30-1.^a de noviembre de 2006; 27-1.^a y 2.^a de marzo y 15-3.^a de octubre de 2008; 24-6.^a de 2009; 13-1.^a de enero y 25-8.^a de noviembre de 2010.

II. La Instrucción de 20 de marzo de 1991 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre nacionalidades, apartado IV «Opción a la nacionalidad española», en relación con el artículo 20.2 del Código Civil, por el que el representante del menor de catorce años o del incapacitado puede optar, en nombre de éste, por la nacionalidad española, siempre que se obtenga la autorización del encargado del registro civil del domicilio, previo dictamen del ministerio fiscal, en atención al interés del menor, indica que «como esta autorización está encomendada al encargado del registro civil, hay que estimar que se trata de una actuación registral de la competencia de los Jueces o Cónsules encargados del registro y que da origen a un expediente de los regulados por la legislación del registro civil, sujeto a sus normas específicas y a su régimen propio de recursos (*cf.* art. 97 de la Ley del Registro Civil)» y que «para conceder la autorización al representante legal, sólo es competente el encargado del registro civil del domicilio del declarante».

Igualmente, en el apartado VIII de la citada Instrucción, declaración cuarta, se establece que «la autorización para que el representante legal del menor de catorce años pueda optar, en nombre de éstos, por la nacionalidad española es una actuación registral, sometida a las normas de los expedientes del registro civil. Tal autorización, aunque la inscripción de la opción haya de extenderse en otro Registro, corresponde siempre concederla al Juez o Cónsul Encargado del Registro Civil del domicilio del declarante».

Se plantea el problema de determinar el registro civil competente cuando, siendo el declarante el representante legal del menor, ambos progenitores sean titulares conjuntamente de la patria potestad y se encuentren domiciliados en distintas localidades. En este sentido, la Instrucción de 26 de julio de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia (BOE núm. 189 de 08 de agosto de 2007), aplicable a los supuestos de adquisición por opción, establece en su apartado 3.2.b) respecto de los menores cuyos progenitores residen en distintos municipios que «la norma específica a tener en cuenta en materia de competencia para obtener la autorización preceptiva la constituye el artículo 20.2.a) del Código Civil, la cual, exige para formalizar la solicitud de nacionalidad en favor de un menor de catorce años, la autorización del encargado del registro civil del domicilio del declarante. En este punto, no rigen las normas de competencia registral (*cf.* art. 365 RRC), sino la competencia por conexión del artículo 20.2.a) del Código Civil, que la atribuye el registro civil del «domicilio del declarante», esto es, del representante legal del menor. En caso de que, por ser ambos progenitores titulares conjuntamente de la patria potestad, la representación corresponda a ambos (*cf.* art. 154 Código Civil) y tengan distinto domicilio debe prevalecer la competencia del registro que corresponda al padre o madre en cuya compañía se encuentra el hijo».

III. En el expediente que nos ocupa, ambos progenitores son titulares de la patria potestad respecto de la menor optante, salvo prueba en contrario, habiendo manifestado el Sr. K. que ésta residía en Costa de Marfil, país en el reside también su madre, la Sra. C. De este modo, en aplicación de las Instrucciones de 20 de marzo de 1991, ampliada en este punto por la de 26 de julio de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado debe prevalecer la competencia del registro civil consular que corresponda a la madre en cuya compañía se encuentra la hija, dándose además la circunstancia de que en el actual momento procedimental la interesada, A. K., ya es mayor de 14 años y por tanto en aplicación del artículo 20.2.b del Código Civil debe efectuar personalmente su declaración de opción, asistida por su representante legal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso, dejando sin efecto el auto impugnado y retrotraer las actuaciones para que se proceda a dar traslado de la documentación del expediente al Registro Civil Consular de España en Abidjan (Costa de Marfil).

Madrid, 22 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Abidjan (Costa de Márfil).

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (23.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.—*El encargado puede y debe declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del padrón municipal respecto de la persona que promueve el expediente ante el registro, cuya competencia depende del domicilio del promotor al que se refiere la inexactitud.*

En las actuaciones sobre declaración de incompetencia territorial del registro en un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

HECHOS

I

Mediante formulario dirigido al Registro Civil de Catarroja el 26 de septiembre de 2011, el Sr. B.O., mayor de edad y de nacionalidad nigeriana, solicitaba la concesión de la nacionalidad española por residencia. Aportaba los siguientes documentos: tarjeta de residencia de régimen comunitario, certificado de nacimiento, declaración jurada de edad, certificado de ausencia de antecedentes penales en su país de origen, certificado de ciudadanía nigeriana, DNI e inscripción de nacimiento de R. S. C., certificado de matrimonio de la anterior con el promotor celebrado en V. el 8 de febrero de 2005, informe de vida laboral, certificado de prestación por desempleo y pasaporte nigeriano.

II

Desde el Registro Civil de Catarroja se requirió la presentación de certificado de empadronamiento histórico y, una vez entregado, previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 21 de noviembre de 2011 declarando la incompetencia territorial del registro para la tramitación del expediente porque, según el certificado de empadronamiento aportado, el interesado se había dado de alta en el municipio de residencia declarado (si bien hay un error material en la consignación de la localidad en la resolución) unos días después de presentar su solicitud de nacionalidad, por lo que no se consideraba acreditada la residencia efectiva en dicho municipio.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que se encontraba domiciliado, como acreditó

con el certificado de empadronamiento, en la localidad de M. y que nunca había residido en B., municipio que figura en la resolución recurrida, por lo que consideraba que se había producido un error y que su expediente debía tramitarse en el Registro Civil de Catarroja.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

V

Posteriormente, tuvo entrada en este centro un escrito del interesado en el que comunica que su domicilio se encuentra en V. desde 2014 y solicita el traslado del expediente a ese registro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 40 del Código Civil (CC); 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 64 de la Ley del Registro Civil (LRC); 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 11-4.^a de enero de 2007, 16-6.^a de junio y 10-1.^a y 8.^a de julio de 2008, 19-7.^a de junio y 31-1.^a de julio de 2009, 2-18.^a, 23-2.^a y 30-5.^a de septiembre de 2010, 23-10.^a, 11.^a y 12.^a de marzo de 2011, 28-11.^a de junio de 2012, 17-33.^a, 34.^a y 35.^a de marzo de 2014 y 24-40.^a de abril de 2015.

II. El promotor presentó en el Registro Civil de Catarroja su solicitud de concesión de nacionalidad española por residencia. La encargada del registro, a la vista de la documentación aportada, dictó auto declarando su incompetencia territorial por no considerar acreditada la residencia habitual del solicitante en su demarcación. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se plantea, por tanto, es la posible divergencia entre el domicilio real del interesado y el que declaró en su solicitud, toda vez que dicha circunstancia es la que determina la competencia territorial del registro en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.

IV. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que *«El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos consti-*

tuyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo». Además se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para «todos los efectos administrativos», pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada del mismo fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del registro civil, en general, y por el artículo 365 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código civil, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del registro civil en dos casos concretos: a) el artículo 336.3, que dispone que «el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical»; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, que establece, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará «por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal».

V. En consecuencia, ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del registro civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 C.C.) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administra-

ción de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VI. Por ello, el juez encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en este concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual a la vista de la fecha del empadronamiento. Ello supone la práctica de las diligencias que sean necesarias para comprobar la realidad del domicilio del interesado que consta en el certificado de su empadronamiento y que, según el resultado, bien declare su falta de competencia para conocer y resolver el expediente si llega a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal, bien, en caso afirmativo, continúe la tramitación del expediente con la práctica de las diligencias que procedan. En este caso la encargada no consideró necesaria la práctica de otras diligencias porque del certificado aportado por el propio interesado resultaba que se había empadronado en el municipio de residencia declarado después de presentar su solicitud de nacionalidad. Dejando aparte la referencia errónea en la resolución recurrida al nombre de la localidad en cuestión, pues, a la vista del conjunto de la documentación, parece claro que se trató de un simple error material y que donde dice B. debía decir M., lo cierto es que son razonables las dudas de la encargada en aquel momento sobre la realidad del domicilio del interesado, quien tampoco aportó con el recurso ninguna prueba de que su residencia efectiva, con esa idea de cierta estabilidad y permanencia a la que se ha hecho referencia en los fundamentos anteriores, se encontrara desde entonces –o incluso antes de empadronarse– en la localidad de M., aunque se hubiera empadronado formalmente en el municipio en fecha tan cercana al inicio del expediente. Por otra parte, el propio interesado indica en su última comunicación dirigida a este centro, que antes de empadronarse en M. (donde asegura que vivió hasta 2014, aunque sigue sin aportar ninguna otra prueba de ese hecho), residía en V., ciudad a la que volvió después y en la que tiene su domicilio actualmente. En definitiva, teniendo en cuenta el concepto de domicilio antes descrito y la documentación incorporada al expediente, no puede darse por acreditado que el domicilio efectivo del recurrente se hallara en M. en el momento de presentación de la solicitud de nacionalidad y, en consecuencia, debe confirmarse el auto dictado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (41.ª)

Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.— *Se declara la incompetencia del registro municipal correspondiente al lugar de domicilio de la interesada, nacida en 1947 en G., Ciudad de la Habana (Cuba), que ha resuelto sobre la solicitud de opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y se retrotraen las actuaciones al Registro Civil Central, que es el verdaderamente competente para resolver.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

HECHOS

I

D.ª A. Y., ciudadana cubana, presenta escrito en el Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de sus solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 23 de diciembre de 1947 en G., C. H. (Cuba), hija de Don A. S. H. y de D.ª. B. E. B. C., ambos nacidos en C. (Cuba) en 1917 y 1923, respectivamente; permiso de residencia en España; certificado literal de nacimiento cubano de la promotora, inscrita en 1952, 5 años después de su nacimiento, en el que se hace constar que sus abuelos maternos son originarios de España y con marginal de matrimonio celebrado en 1965; certificado literal de nacimiento español de la madre de la promotora, Doña B. E. B. C., hija de Don A. B. A., nacido en L. C. en 1882 y de D.ª. R. V. C. S., nacida en Asturias en 1892, con marginal de opción a la nacionalidad española al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995 en fecha 26 de octubre de 1998 y posterior inscripción de adquisición de la nacionalidad española de origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 el 18 de febrero de 2009; certificado literal de nacimiento del abuelo materno de la promotora, Don A. B. A., hijo de Don J. B. C. y Doña A. A.; certificado de empadronamiento en Granadilla de Abona desde el año 2005 y acta levantada en el Registro Civil de Granadilla de Abona, el 7 de julio de 2011, como diligencia de autenticación de la solicitud y en la que la interesada *«declara su voluntad de adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo/a de padre o madre originariamente españoles y que la nacionalidad de origen de su progenitor es española»*. De la documentación se dio traslado al Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción.

II

El encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 28 de septiembre de 2012 deniega lo solicitado por la interesada, «la nacionalidad española de origen por ser

nieta de abuelo que perdió o renunció a la nacionalidad española como consecuencia del exilio», según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, porque no concurren los requisitos de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la circunstancia del exilio del abuelo materno de la promotora.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que su abuelo, residente en Cuba, no pudo volver a España por su filiación política, por lo que en 1937 optó por la ciudadanía cubana y reiterando su solicitud, aporta como documentación añadida, inscripción de nacimiento propia en el registro civil español como consecuencia de haber obtenido la nacionalidad española por residencia con fecha 26 de enero de 2012, certificado de defunción del abuelo materno de la recurrente, Sr. B. A., fallecido en Cuba en 1947 a los 61 años de edad y certificación literal de la comparecencia del Sr. B. A. ante el registro civil cubano, en 1946, para ratificar su opción por la ciudadanía cubana con renuncia a la nacionalidad española que había declarado en 1937, en ella manifiesta que llegó a Cuba en el año 1901.

Por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 31 de julio de 2015 (27.^a) se revoca el auto apelado y se retrotraen las actuaciones al momento oportuno para continuar el procedimiento sobre la base de la solicitud de la interesada, toda vez que la resolución recurrida deniega la opción a la nacionalidad española de origen de la promotora en base a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, sin pronunciarse acerca de la petición contenida en el acta suscrita por la interesada en el Registro Civil de Granadilla de Abona, con fecha 7 de julio de 2011, en la que solicitaba su voluntad de adquirir la nacionalidad española de origen por opción, por ser hija de padre o madre originariamente español, tal como establece el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

IV

Por providencia de fecha 22 de septiembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Central se remiten las actuaciones al Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) por entender que es el competente para dictar la resolución, toda vez que la promotora se encuentra inscrita en dicho registro civil al haber adquirido la nacionalidad española por residencia con efectos de 26 de enero de 2012.

V

Por auto de 20 de abril de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), se deniega la práctica de la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, nacida en Cuba el 23 de diciembre de 1947, toda vez que no ha quedado acreditado que su abuelo perdiera o tuviera que renunciar a la nacionalidad española por razón de exilio, ya que la entrada en Cuba del mismo se produce en fecha anterior a 1936. En el fundamento de derecho primero del citado auto se indica que «la competencia para conocer y resolver el presente expe-

diente corresponde al Registro Civil Central, a tenor de lo dispuesto en los artículos 68 y 342 del Reglamento del Registro Civil, al darse la circunstancia de que la parte promotora se encuentra domiciliada en España».

VI

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto anteriormente citado, indicando que la resolución desestimatoria dictada en base al apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 resulta contradictoria con el acta levantada en dicho Registro Civil de Granadilla de Abona en fecha 7 de julio de 2011, donde la interesada expresaba su voluntad de adquirir la nacionalidad española por ser hija de padre o madre originariamente español, tal como se recoge en el apartado primero de dicho texto legal y con la resolución dictada por esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 31 de julio de 2015 (27.^a), solicitando se estime su solicitud de opción a la nacionalidad española de origen en virtud de dicha opción.

VII

Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) emite su informe preceptivo ratificándose en su decisión y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 y 26 del Código Civil (CC), la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 66, 68, 85 y 335 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de y las Resoluciones de 29-2.^a de octubre de 1999, 13-1.^a de febrero, 22 de marzo, 3 de abril y 15-2.^a de diciembre de 2003; 24-1.^a de abril, 17-2.^a de julio, 11-5.^a de octubre de 2006; 2-5.^a y 10-3.^a de enero de 2007; 15-3.^a de octubre de 2008; 28-10 de noviembre de 2008; 27-4.^a de febrero, 13-6.^a de abril y 13 de junio de 2009; 1-1 de febrero de y 1-6.^a de diciembre de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil español como española de origen a la nacida en Ciudad de la Habana (Cuba) en 1947, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de julio de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda; no obstante, en el acta levantada por el encargado del registro civil del domicilio, G. A., con la misma fecha de la solicitud se hace constar que la interesada «declara su voluntad de adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hijo/a de padre o madre originariamente españoles y que la nacionalidad de origen de su progenitor es española», este contenido correspondería a una solicitud con base en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por el encargado del Registro Civil Central se dictó acuerdo el 28 de septiembre de 2012, denegando la opción a la nacionalidad española de origen al no cumplir los requisitos establecidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Interpuesto recurso por la promotora, con fecha 31 de julio de 2015 (27.^a) esta Dirección General de los Registros y del Notariado dicta resolución por la que se revoca el auto apelado y se retrotraen las actuaciones al momento oportuno para continuar el procedimiento sobre la base de la solicitud de la interesada.

El Registro Civil Central remite las actuaciones al Registro Civil de Granadilla de Abona por considerar que es competente para conocer del asunto, dictándose auto por dicho registro civil con fecha 20 de abril de 2016, por el que se deniega la práctica de la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, al no haber quedado acreditado que su abuelo perdiera o tuviera que renunciar a la nacionalidad española por razón de exilio, constatándose que en el fundamento de derecho primero del citado auto se indica que «la competencia para conocer y resolver el presente expediente corresponde al Registro Civil Central, a tenor de lo dispuesto en los artículos 68 y 342 del Reglamento del Registro Civil, al darse la circunstancia de que la parte promotora se encuentra domiciliada en España», lo que entra en contradicción con el hecho de que el Registro Civil de Granadilla de Abona entre a conocer y resuelva sobre el fondo del asunto. Frente a dicha resolución interpone recurso la promotora, que es el objeto del presente expediente.

III. Con carácter previo a entrar a conocer del fondo del asunto planteado, procede determinar si el Registro Civil de Granadilla de Abona es competente para resolver la solicitud de opción por la nacionalidad española de origen, solicitada por la promotora, nacida en Cuba el 23 de diciembre de 1947, en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

IV. La instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, establece en su directriz IV «Reglas de competencia para el ejercicio de la opción. Documentación que debe aportarse», que «la declaración de opción a la nacionalidad española y el juramento o promesa exigidos, serán formulados

ante el encargado del registro civil del domicilio...» y que «es registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al lugar del nacimiento del optante (arts. 16 y 46 LRC). Cuando esté en otro término municipal o demarcación consular el registro competente para practicar la inscripción, el encargado ante el que se formule debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto. Uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al registro competente para, en su virtud, practicar la inscripción».

V. La regla general de competencia en materia registral civil se contiene en el artículo 16, apartado primero, de la Ley del Registro Civil al disponer que «*la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el registro municipal o consular del lugar en que acaecen*». En el supuesto de tratarse de hechos ocurridos en España no se plantea problema alguno, aplicándose el principio de competencia territorial que se desprende del transcrito precepto, el hecho deberá inscribirse en el registro municipal, principal o delegado, en cuya circunscripción territorial acaece.

Para el supuesto de hechos ocurridos en el extranjero, inscribibles por afectar a un español, el artículo 12 de la Ley dispone que «Los cónsules extenderán por duplicado las inscripciones que abren folio en el Registro de su cargo, uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Central para su debida incorporación. En uno y otro registro se extenderán en virtud de parte, todas las inscripciones marginales que se practiquen en cualquiera de ellos». En la Ley del Registro Civil no existe ningún otro precepto que determine o aclare la competencia concreta del Registro Central para practicar las inscripciones que abren folio.

Por otra parte, en el apartado segundo del artículo 68 del Reglamento del Registro Civil, tras reiterar en el apartado primero la regla general de competencia, se dice que «Cuando sea competente un registro consular, si el promotor estuviere domiciliado en España, deberá practicar antes la inscripción en el Registro Central y después, por traslado, en el consular correspondiente» y el artículo 342 del Reglamento del Registro Civil indica que «Si la inscripción hubiera de practicarse en los Registros Consular y Central, la competencia será del primero si el promotor está domiciliado en el extranjero, y del segundo, en otro caso».

Por tanto, el Registro Central surge inicialmente como un registro supletorio y de centralización de los asientos de los registros consulares, pero tal caracterización queda en parte modificada en el sentido de configurarse simultáneamente como un registro civil ordinario en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, con la particularidad, por otro lado, de que a partir de la reforma de este precepto por el Real Decreto 3455/77, de 1 de diciembre, se rompe además, el criterio general de competencia del artículo 16 de la Ley para la práctica de la inscripción respecto de los hechos ocurridos en el extranjero, criterio que ya no va a ser el lugar de acaecimiento del hecho, sino la cir-

cunstancia de que el promotor esté domiciliado en España. Pues bien, ninguna razón jurídica abona que este criterio se vea alterado o abrogado en el ámbito de la inscripción de nacimiento y de opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007, reconociéndose la competencia propia del Registro Civil Central cuando, por razón del domicilio en España del solicitante, éste sea el funcionalmente competente para practicar la inscripción, en aplicación de la regla de competencia contenida en el párrafo 2 del artículo 68.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad del auto apelado y retrotraer las actuaciones a fin de que se dé traslado de ellas al Registro Civil Central competente para la resolución del expediente.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (79.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (87.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (12.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (23.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (35.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (29.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 9 de junio de 2017 (34.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (54.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (55.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (19.^a). Competencia territorial en expedientes de nacionalidad.

3.8.3 EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD. ALCANCE DE LA CALIFICACIÓN (ART. 27 LEY DEL REGISTRO CIVIL)

Resolución de 13 de enero de 2017 (4.^a)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.–1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3.º No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), D.^a C. U. H. nacida el 29 de diciembre de 1986 en M. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática y en O. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 01 de octubre de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* de la interesada, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal, con fecha 22 de octubre de 2014 emite informe desfavorable al reconocimiento de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la

promotora, indicando que la interesada no se encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 17.3 del Código Civil, toda vez la misma, documentada con pasaporte argelino y solicitante de estatuto de apátrida, nació en M. el 29 de diciembre de 1986, es decir, con posterioridad a la Ley de descolonización de 19 de noviembre de 1975 y al Decreto 2258/76, fecha de la salida de España del territorio del Sáhara. Por otra parte, indica que tampoco se encuentra acreditada la filiación de la interesada en relación con un ciudadano español, por lo que no procede la inscripción pretendida, sin perjuicio de que se anote conforme al artículo 340 RRC el auto de fecha 1 de octubre de 2013 de declaración de la nacionalidad española, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española de la interesada.

IV

Por auto de fecha 3 de noviembre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central, se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción, haciéndose constar que a instancias del representante del ministerio fiscal se incoa expediente de cancelación de la anotación soporte practicada.

V

Notificada la resolución la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se le declare la nacionalidad española con valor de simple presunción.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 14 de septiembre de 2015 y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

VII

Con fecha 23 de febrero de 2016, tiene entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia oficio del Registro Civil Central por el que remite documentación del expediente de referencia, en particular, providencia de fecha 25 de noviembre de 2015 dictada por el encargado del Registro Civil de Tudela, por la que pone en conocimiento que a instancias del ministerio fiscal se ha iniciado expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española de la interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 01 de octubre de 2013. Por auto de 03 de noviembre de 2014 el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley

del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a una ciudadana de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción. Así, no queda acreditado en el expediente la filiación de la interesada con ciudadano español, toda vez que en el certificado de familia expedido por el Registro Civil del Sáhara no figura la interesada, indicándose que en el certificado de paternidad expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, se hace constar que el presunto progenitor, don U. H. B., nació en M. (Sáhara Occidental) el 02 de marzo de 1941 y la presunta progenitora, D.^a J. S. E., nació en B. el 23 de febrero de 1953, mientras que en el certificado de familia expedido por las autoridades españolas en el Sáhara Occidental el 14 de marzo de 1974, aportado al expediente, se indica que los mismos nacieron el 26 de enero de 1941 en I. y el 11 de enero de 1953 en B., respectivamente.

Por otra parte, de la información testifical practicada, no cabe deducir que los padres sean los que constan en el expediente toda vez que lo único que manifestaron es que les une una relación de amistad con la interesada, sin mencionar en ningún momento el nombre de los padres, fecha de nacimiento, lugar e hijos que tienen.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (*cf.* arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un

nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (*cf.* Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla y continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal.

Madrid, 13 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de abril de 2017 (12.ª)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.— 1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3.º Es inscribible el nacimiento porque se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don A. A. M-A. (A. L.), nacido en A. el 29 de diciembre de 1969 solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 19 de abril de 2013, el Encargado del Registro Civil de Tudela (N.), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 23 de diciembre de 2014, indicando que no resulta de aplicación el artículo 17.3 del Código Civil, pues el interesado no reúne las condiciones exigidas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, ya que no consta que haya estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Decreto 2258/76, ni documentado como español, ni en posesión y utilización de la nacionalidad española, ni ha nacido en territorio español, ni es apátrida pues aportó pasaporte marroquí, argumentando que no procede la inscripción pretendida al no haber ocurrido el nacimiento en España ni afectar a ningún ciudadano español, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del interesado.

IV

Por auto de fecha 13 de mayo de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central se acuerda la aprobación del expediente y se procede a practicar en el libro de nacimientos correspondiente a la Sección Primera de dicho registro, la inscripción del interesado con el nombre de A. y apellidos A. M-A., nacido el 29 de diciembre de 1969 en A. (Sáhara), haciéndose constar al margen la nacionalidad española del inscrito declarada con valor de simple presunción por auto dictado el 19 de abril de 2013 por el Registro Civil de Tudela, así como nota marginal al amparo de lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley del Registro Civil, haciendo constar que a instancias del representante del ministerio fiscal adscrito a

dicho registro, se incoa expediente de cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del interesado.

V

Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y la inscripción de su nacimiento fuera de plazo, alegando que la resolución recurrida no explica ni motiva suficientemente la denegación de la declaración de presunción de nacionalidad española ni la negativa a acatar el auto dictado en su día por el encargado del Registro Civil de Tudela.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida, por entender que el recurso carece de eficacia al haberse, no solo admitido la inscripción, sino haberse practicado en el libro 51500, página 299 del Registro Civil Central, debiendo mantenerse la nota marginal a tenor del artículo 38.1 de la Ley del Registro Civil, al darse por iniciado expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del promotor, de conformidad con lo solicitado por dicho ministerio fiscal en escrito de 23 de diciembre de 2014. El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 19 de abril de 2013. Por auto de 13 de mayo de 2015 el encargado del Registro Civil Central acordó estimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al resultar acreditada la filiación de la persona no inscrita, practicándose anotación marginal al amparo del artículo 38.1 de la Ley del Registro Civil, haciendo constar que a instancias del representante del ministerio fiscal

se inicia expediente de cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del interesado. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado, por el que se solicita se proceda a la inscripción de nacimiento del interesado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (*cf.* art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento. En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, habiéndose acreditado suficientemente su filiación. La inscripción de nacimiento se ha efectuado en la página ... del Libro del Registro Civil Central, por lo que el recurso presentado por el promotor, en el que solicita se proceda a la inscripción de su nacimiento, carece de eficacia. Asimismo, en base a lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley del Registro Civil, se hace constar anotación marginal de incoación de expediente gubernativo de cancelación de la inscripción practicada a instancia del ministerio fiscal.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (*cf.* Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procu-

rar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral. En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española. La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (*cf.* arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 21 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 12 de mayo de 2017 (26.^a)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.—1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Málaga, Don M.-S. B. M. (A. S. E- B. M.), nacido el 20 de mayo de 1963 en A. (Argelia), de acuerdo con pasaporte argelino aportado al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 1 de julio de 2014, el encargado del Registro Civil de Málaga, acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción del interesado, por consolidación, por aplicación de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Málaga, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal, con fecha 28 de octubre de 2014 emite informe desfavorable, alegando que, teniendo en cuenta que el promotor, según su pasaporte nació en 1963 en Argelia, no son de aplicación los citados artículos 17.3 y 18 del Código Civil, ni el interesado reúne las condiciones exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998 y, por otra parte, aporta libro de familia donde se dice inscrito como hijo primero, con los nombres de M. S. u B. u M., nacido el 4 de diciembre de 1963, este último dato emborronado, nombre y fecha distintos de los que figuran en su documentación argelina, aportando como documento de subsanación certificado que no ofrece garantías bastantes. De este modo, se considera que al no haber ocurrido el nacimiento en España, ni a afectar a ningún ciudadano español, no procede la inscripción pretendida, sin perjuicio de que se anote conforme al artículo 340 del Código Civil, el auto de declaración de la nacionalidad española, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del interesado.

IV

El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta auto de fecha 4 de diciembre de 2014, por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filia-

ción, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

V

Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución oponiéndose al contenido de la cancelación de la anotación practicada en el Registro Civil Central, alegando que la regla general en esta materia requiere de sentencia firme en juicio ordinario, y solo es posible por expediente, suprimir asientos no permitidos o cuya práctica se haya basado en modo evidente según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal, circunstancias que no concurren en su caso. Asimismo, indica que ha acreditado suficientemente la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española por posesión de estado, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para la consolidación y que los datos contenidos en su pasaporte argelino, que motivan el expediente incoado a instancia del ministerio fiscal, son erróneos, dado que cuando las autoridades argelinas documentan a un ciudadano saharauí, le asignan un lugar de nacimiento de alguna ciudad argelina con objeto de emitir un pasaporte de conveniencia, que es un mero título para viajar.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 22 de octubre de 2015 y el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Málaga, solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 1 de julio de 2014. Por auto de 4 de diciembre de 2014, el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el pro-

motor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imposible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano que, de acuerdo con el pasaporte argelino aportado, nació en A. (Argelia) el 20 de mayo de 1963. Por otra parte, aporta libro de familia, expedido por las autoridades españolas el 9 de enero de 1971, en el que supuestamente figura como hijo primero, con el nombre de M. S. u B. u M., nacido el 4 de diciembre de 1963 en S. (Sáhara Occidental). Sin embargo, en el certificado de subsanación, expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, se establece la concordancia entre la persona que figura en el libro de familia español y E. B. M. A. S., titular de pasaporte argelino, nacido el 4 de diciembre de 1963 en S., lo que resulta contradictorio con el pasaporte aportado, ya que no coincide ni la fecha ni el lugar de nacimiento. Se aporta un supuesto recibo MINURSO del promotor, en el que figura el nombre de M. S. B. M., nacido en 1962 en S. E- H. (Sáhara Occidental).

Asimismo, de la información testifical practicada no cabe deducir que los progenitores del interesado, sean los que constan en el libro de familia aportado como E-B. u M. u B. y M. M., toda vez que únicamente manifiestan que

les une una relación de amistad con el interesado, sin citar en ningún momento, sus nombres, fechas y lugar de nacimiento e hijos que tienen.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (11.ª)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.— 1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º *No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don B. B., nacido en 1971 en H. (Marruecos), de acuerdo con el certificado literal de nacimiento expedido por el Reino de Marruecos y Don B. M., nacido en H. (Sáhara Occidental) el 10 de noviembre de 1970, de acuerdo con libro de familia expedido por el Gobierno General de Sáhara, soli-

cita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 4 de abril de 2014, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal, con fecha 2 de julio de 2015 emite informe desfavorable, alegando que en este caso no resulta de aplicación el artículo 17.1.c) del Código Civil, ya que no consta que haya estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Decreto 2258/76, ni documentado como español, ni en posesión y utilización de la nacionalidad española, ni ha nacido en territorio español, ni es apátrida pues aportó pasaporte marroquí, existiendo dudas respecto de la identidad del solicitante, por lo que, además de no proceder la inscripción de nacimiento solicitada, se interesa se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado.

IV

El encargado del Registro Civil Central dicta auto de fecha 11 de noviembre de 2015, por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

V

Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se le declare la nacionalidad española con valor de simple presunción en base a lo establecido en el artículo 17 del Código Civil.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 4 de agosto de 2016 y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

VII

Con fecha 27 de octubre de 2016, tiene entrada en el registro general del Ministerio de Justicia oficio del Registro Civil Central por el que remite documentación del expediente de referencia, en particular, diligencia de constancia de fecha 15 de septiembre de 2016 dictada por el letrado de la Administración de Justicia del Registro Civil de Tudela, por la que pone en conocimiento que a instancias del ministerio fiscal se ha iniciado expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española del interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 4 de abril de 2014. Por auto de 11 de noviembre de 2015, el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (*cfr.* art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo

tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso existen dudas respecto de la identidad del reclamante, ya que en el libro de familia expedido por el Gobierno General de Sáhara el 5 de abril de 1971, con el número, consta como hijo tercero del matrimonio celebrado el 6 de abril de 1960 entre M. U. A. U. E., nacido en E. G. el 5 de febrero de 1935 y F. M. J. U. S. E., nacida en H. el 6 de abril de 1946, con el nombre de B. U. M., nacido en H. el 10 de noviembre de 1970, indicándose que se encuentra con tachaduras el número de página de inscripción del nacimiento.

Por otra parte, se aporta certificado literal de nacimiento, expedido por el Reino de Marruecos, en el que se hace constar que B. B. nace en 1971 en E. H., hijo de M. hijo de A. hijo de M. M., nacido en E. H. en 1935 y de F., hija de Y., nacida en E. H. en 1946. En el recibo MINURSO, consta como B. M. A., nacido en 1971 en L. (Sáhara Occidental).

Por otra parte, la información testifical practicada resulta contradictoria, toda vez que los testigos manifestaron conocen al promotor desde hace unos cinco años que residían en los campamentos de refugiados en el Sáhara y, de acuerdo con la información del expediente, se aporta resolución de fecha 27 de septiembre de 2005 dictada por la Delegación del Gobierno en Extremadura, por la que se reconoció al interesado la autorización de residencia permanente en España, por lo que si se conocieron desde hacía unos cinco años no pudieron coincidir en los campamentos de refugiados en el Sáhara.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 8 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (25.ª)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.–1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º *No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el representante de la promotora contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), D.ª M. M.L., nacida el 24 de enero de 1957 en B. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino aportado al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 11 de octubre de 2012, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* de la interesada, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal, con fecha 27 de junio de 2014 emite informe desfavorable, alegando que en el presente supuesto no resultan de aplicación los artículos 17.1.c) y d) y 18 del Código Civil, ni la interesada reúne las condiciones exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, ya que ni ha estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Real Decreto citado, ni documentada como española, ni en posesión y utilización de la nacionalidad española durante 10 años, ni ha nacido en territorio español ni es apátrida, pues aportó pasaporte argelino. Por otra parte, indica que tampoco ha quedado acreditada la filiación de la promotora ni la supuesta concordancia de su identidad con la de un ciudadano saharauí, por lo que, además de no proceder la inscripción de nacimiento solicitada, se interesa se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada.

IV

El encargado del Registro Civil Central dicta auto de fecha 29 de agosto de 2014, por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

Consta en el expediente providencia de fecha 14 de marzo de 2016 dictada por el encargado del Registro Civil de Tudela, por la que pone en conocimiento que a instancias del ministerio fiscal se ha iniciado expediente de cancelación de presunción de nacionalidad española de la interesada.

V

Notificada la resolución el representante de la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se le declare la nacionalidad española con valor de simple presunción en base a lo establecido en el artículo 17.1.a) del Código Civil, al considerar que es hija de padres españoles. La recurrente no aporta autorización o poder notarial que acredite la representación otorgada a favor de quien presenta el recurso, no habiendo sido posible requerir a la misma, al no haber sido hallada y encontrarse en ignorado paradero.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 13 de junio de 2017 y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto

de 11 de octubre de 2012. Por auto de 29 de agosto de 2014, el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro», no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a una ciudadana nacida en B.(Argelia) el 24 de enero de 1957, de acuerdo con su pasaporte argelino y en 1957 en T. (Sáhara Occidental), de acuerdo con recibo MINURSO, cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción.

Así, no queda acreditado que la interesada, identificada con NIE núm., nacida en B. (Argelia) o T. (Sáhara Occidental) en 1957, sea hija de N. L. B., de la que figura copia de documento de identidad saharauí bilingüe, y que figura en copia de certificado de nacimiento de registro cheránico expedido por el Archivo General de la Administración a nombre de N. L. B. nacida el 7 de marzo de 1919.

Por otra parte, de la información testifical practicada en junio de 2013 se deducen contradicciones, ya que los testigos indican que conocen a la interesada desde hace unos dos años, en un caso, y desde hace seis años en otro caso, en los campamentos de refugiados, manifestando posteriormente que les consta que su amiga lleva viviendo en España desde hace siete años.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

Por otra parte, la interesada no aportó al expediente autorización o poder notarial que acreditase la representación otorgada a favor de quien presenta el recurso, no habiendo sido posible requerir a la misma, al encontrarse en paradero ignorado, y habiendo sido citada por medio de edicto colocado en el tablón de anuncios del Registro Civil de Tudela, sin haber comparecido en el citado registro.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (32.^a)

Expediente de nacionalidad. Alcance de la calificación. Artículo 27 LRC.—1.º *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el artículo 27 LRC.*

2.º *No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), Don A.-S. H. A., nacido el 12 de abril de 1971 en O. (Argelia), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 23 de abril de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela, acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artículo 17.3.º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

II

Tramitado el expediente en el Registro Civil de Tudela, se remiten las actuaciones en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central.

III

Notificado el ministerio fiscal, con fecha 28 de agosto de 2014 emite informe desfavorable, indicando que no resultan aplicables al interesado los artículos 17.1.c) y d) y 18 del Código Civil, ni el promotor reúne las condiciones exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, ya que ni ha estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Real Decreto 2258/76, ni documentado como español, ni en posesión y utilización de la nacionalidad española durante 10 años, ni ha nacido en territorio español, ni es apátrida, pues aportó pasaporte argelino, considerando que no procede la inscripción de nacimiento solicitada e interesando que se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado.

IV

El encargado del Registro Civil Central dicta auto de fecha 9 de junio de 2015, por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordando la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

V

Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se inscriba su nacimiento en el registro civil, alegando, en relación con la documentación aportada y expedida por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que este centro directivo está otorgando validez a los certificados

de nacimiento y de antecedentes penales emitidos por la RASD, por lo que la documentación aportada debe tener alcance probatorio.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por informe de 27 de septiembre de 2016 y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1.^a y 14 de enero, 28 de abril, 31-2.^a de mayo y 14-4.^a de octubre de 1999; 26-1.^a de abril de 2001; 10-6.^a de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3.^a de enero, 3-1.^a de abril y 25-4.^a de julio de 2006; 17-5.^a de mayo de 2007; 3-2.^a de enero, 14-5.^a de abril, 22-3.^a de octubre y 11-8.^a de noviembre de 2008; 8-4.^a de enero de 2009 y 10-95.^a de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela, solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 23 de abril de 2013. Por auto de 9 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible, habiéndose emitido previo informe desestimatorio por el ministerio fiscal, en el que instaba al inicio de nuevo expediente para declarar que al interesado no le correspondía la nacionalidad española. Contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil Central se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (*cfr.* art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de «(...) *la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio Registro*», no estando facultado el encargado para volver

a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1.º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el Registro Civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano nacido el 12 de abril de 1971 en O. (Argelia), de acuerdo con el pasaporte argelino aportado al expediente, cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción.

Así, no queda acreditada en el expediente la fecha y el lugar de nacimiento del interesado, toda vez que en el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática consta que nació el 12 de abril de 1971 en O. (Argelia), mientras que en los certificados expedidos por la Delegación Saharaui para N., consta como nacido en T. (Sáhara Occidental) en dicha fecha y en la tarjeta del Instituto Nacional de Previsión, expedida en A. el 13 de septiembre de 1974, consta entre los familiares a cargo del beneficiario, a un hijo de nombre A., nacido el 25 de junio de 1972.

Por otra parte, tampoco queda acreditado en el expediente que los titulares de los documentos de identidad saharauis números B-4130036 a nombre de H. A. A. y B-4146292 a nombre de S. H. A., correspondan a los progenitores del interesado.

Asimismo, la información testifical practicada no aporta datos acerca de la filiación del promotor, tal como nombre y apellidos de los progenitores, fechas de nacimiento o hijos habidos, dado que los testigos manifiestan únicamente que conocen al promotor desde hace un año y medio, en un caso, y desde hace diez años en otro, que coincidieron en los campamentos de refugiados y después en España y que les une una relación de amistad.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular

de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 13 de enero de 2017 (6.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de enero de 2017 (34.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (25.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (25.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (26.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (27.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (26.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (27.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (40.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (41.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (52.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (24.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (23.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (26.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (29.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (35.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 7 de abril de 2017 (42.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 7 de abril de 2017 (44.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de abril de 2017 (5.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de abril de 2017 (6.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de abril de 2017 (7.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de abril de 2017 (8.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de abril de 2017 (19.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 21 de abril de 2017 (4.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 21 de abril de 2017 (13.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 28 de abril de 2017 (18.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 28 de abril de 2017 (19.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (18.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (19.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (22.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (27.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (41.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (25.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (7.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (8.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (31.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (32.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (35.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (36.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (37.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 9 de junio de 2017 (15.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 9 de junio de 2017 (19.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 16 de junio de 2017 (29.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 16 de junio de 2017 (37.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (17.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (19.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (31.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (32.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (35.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (8.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (14.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (15.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (16.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (32.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 7 de julio de 2017 (8.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 14 de julio de 2017 (10.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 14 de julio de 2017 (16.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 28 de julio de 2017 (27.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (56.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (58.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (62.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (63.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (10.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (27.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (29.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (31.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (33.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (42.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (33.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (40.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (33.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (23.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (14.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (16.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (21.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (23.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (25.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (31.^a). Expedientes de nacionalidad-Alcance de la calificación. Artículo 27 L.R.C.

3.9 Otras cuestiones en expedientes de nacionalidad

3.9.1 EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD CONCERNIENTES A MENORES. AUTORIZACIÓN PREVIA Y OTRAS PECULIARIDADES

Resolución de 31 de marzo de 2017 (48.^a)

Expediente de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades.—*Procede conceder la autorización a los progenitores, representantes legales de un menor de 14 años, para que soliciten en nombre de su hijo la nacionalidad española por residencia mediante un expediente posterior cuya resolución es competencia del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.*

En las actuaciones sobre autorización a los representantes legales para instar un expediente de nacionalidad por residencia de un menor de catorce años remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Tolosa (Gipuzkoa).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el Registro Civil de Tolosa el 11 de febrero de 2015, los Sres. G. M. y R. B., mayores de edad y de nacionalidad paquistaní, solicitaban autorización para instar expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia en nombre de su hijo menor de edad B. A., nacido en P. el de 2003. Aportaban los siguientes

documentos: permisos de residencia en España de los interesados, pasaporte paquistaní del menor, certificados de empadronamiento, certificado paquistaní de nacimiento del menor y solicitud de subsidio de desempleo del padre.

II

Ratificados ambos progenitores y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 10 de junio de 2015 denegando la autorización solicitada por no resultar acreditado el periodo mínimo de diez años de residencia legal en España del menor interesado.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los progenitores que su hijo reside legalmente en España desde el 7 de junio de 2004, en prueba de lo cual aportaban el correspondiente certificado del Ministerio del Interior.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Tolosa remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil (CC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 348, 355 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 26-3.^a de marzo de 2007, 4-3.^a de julio de 2008, 1-10.^a de septiembre de 2009, 28-111.^a de octubre y 26-67.^a de diciembre de 2014, 6-70.^a de febrero de 2015 y 21-36.^a de octubre de 2016.

II. Se plantea en este expediente si procede o no otorgar autorización por parte del registro a los padres de un menor de nacionalidad paquistaní nacido en Paquistán en 2003 para que, posteriormente, puedan solicitar la nacionalidad española por residencia en nombre su hijo. La encargada del registro, previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, denegó la autorización por no considerar acreditado el periodo mínimo de residencia de diez años del interesado en nuestro país.

III. La concesión de la nacionalidad española por residencia es competencia del Ministerio de Justicia previo expediente instruido por la Dirección General de los Registros y del Notariado (Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia), si bien en el momento de emitirse la resolución recurrida, la instrucción de tales expedientes correspondía al registro civil del domicilio de los interesados. De cualquier forma, cuando la nacionalidad se solicita para un menor de 14 años, como en este caso, antes de la instrucción del expediente existe una fase previa en la que sus representantes legales deben obtener una autorización para solicitar la nacionalidad en nombre del menor. Dicha autorización debe ser concedida por el encargado del registro civil del domicilio de los solicitantes (*cf.* art. 20.2a y art. 21.3c CC) y en esta fase los únicos requisitos que deben tenerse en cuenta son la acreditación de la filiación de los solicitantes respecto del menor interesado, la solicitud conjunta o el consentimiento de ambos –a no ser que se pruebe que la patria potestad está atribuida a uno solo de ellos– y que la petición se realiza en interés del menor. En este caso los dos primeros extremos están perfectamente acreditados y, por lo que se refiere al tercero, se presume que los padres actúan siempre en beneficio e interés de los hijos. Debe tenerse en cuenta, además, que el menor interesado reside en España. En consecuencia, en esta fase resulta irrelevante la acreditación suficiente del tiempo de residencia legal en España (aunque cabe señalar, por otro lado, que en fase de recurso se ha aportado el certificado expedido por el Ministerio del Interior), circunstancia que sí será determinante, en su caso, en el expediente posterior para la obtención de la nacionalidad cuando deba comprobarse, en la fase correspondiente, por parte del órgano instructor la concurrencia o no de los requisitos necesarios para concederla. Por todo ello, no se aprecia obstáculo legal alguno para la concesión de la autorización solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado autorizando a los representantes legales del menor interesado para solicitar en su nombre la nacionalidad española por residencia.

Madrid, 31 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Tolosa (Guipuzkoa).

Resolución de 9 de junio de 2017 (20.^a)

Expediente de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades.—*Procede retrotraer las actuaciones al momento de la solicitud de opción ya que no se actuó conforme al artículo 20.2.b del Código Civil, al ser la optante menor de edad y siendo actualmente ya mayor de edad, se actúe según lo previsto en el artículo 20.2.c del Código Civil.*

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el padre de una menor de edad, como representante legal de la misma, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Santo Domingo el día 2 de febrero de 2015, Don F-I. M. C., mayor de edad, nacido en A. (República Dominicana) en 1976 y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2012, solicitaba la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española por patria potestad de su hija menor de edad P. B. M. M., nacida en A. el 27 de diciembre de 1998 e hija de W-N. M. M., nacida en Santo Domingo en 1979 y de nacionalidad dominicana. Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos para la inscripción, en la que se hace constar que no existe matrimonio entre los padres del menor, acta inextensa de nacimiento local de la optante, inscrita por declaración del Sr. M., resultando ambos progenitores de nacionalidad dominicana y casados, cédula de identidad y electoral dominicana de la madre de la optante, con validez hasta 2024 y en la que consta como soltera, pasaporte dominicano de la menor, expedido en el año 2015, cédula de identidad de la menor, pasaporte español del Sr. M. C., expedido en el año 2013, inscripción de nacimiento en el registro civil español del Sr. M. C., con marginal de nacional española por residencia con fecha 22 de febrero de 2013, documento médico relativo a prueba de análisis de ADN y certificado del Registro Civil Central relativo a que la menor no está inscrita en dicho registro.

II

El encargado del registro civil consular dictó auto el 10 de noviembre de 2015 denegando la opción de nacionalidad solicitada porque se habían apreciado alteraciones en el acta inextensa de nacimiento de la menor.

III

Notificado el auto al promotor, el Sr. M. C. presenta escrito de recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, aunque erróneamente calificado de reposición, alegando que encargó a una persona la tramitación de la rectificación de un dato

erróneo en el acta de nacimiento, concretamente la fecha de nacimiento de la madre, pero que aquella en vez de hacer los trámites legales le engañó facilitándole el documento que según el registro civil está alterado, por lo que él ha sido víctima del engaño, aportando certificado del centro escolar al que asiste la menor y constancia de la denuncia formulada por la madre de la optante contra la persona que les engañó con el documento cuestionado.

IV

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que emite informe oponiéndose a la inscripción de nacimiento previa opción a la nacionalidad. La encargada del registro civil consular informa que se adjuntó acta de nacimiento de la interesada con signos de alteración en sus elementos de seguridad y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículos 20 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. El declarante, de nacionalidad española obtenida por residencia en diciembre del año 2012, solicitó la inscripción de nacimiento en el registro civil español y el ejercicio de la opción a la nacionalidad española por patria potestad para su hija menor edad, de nacionalidad dominicana. El encargado del registro civil consular, dictó el auto recurrido denegando la solicitud por entender que el documento de nacimiento de la menor está manipulado.

III. Hay que comenzar señalando que siendo entonces la optante menor de edad pero mayor de 14 años, tenía 16, es necesario que la misma, P-B. M. M., hubiera formulado la declaración de opción, asistida por su representante legal (artículo 20.2.b del Código Civil). Este trámite no consta efectuado en cuanto a la optante, que no ha intervenido en la solicitud y tramitación del expediente, sólo consta la declaración de su progenitor, Sr. M. C.. El auto dictado debió tener en cuenta la falta de estos requisitos previos al ejercicio del derecho.

IV. Vistos el defecto procesal apreciado y teniendo en cuenta que actualmente la optante ya es mayor de edad, tiene 18 años, se estima procedente dejar sin efecto el auto de fecha 10 de noviembre de 2015 y retrotraer las actuaciones al momento procedimental en el que P-B. M. M., declare su voluntad de optar a la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.a del CC y 20.2.c, por haber estado bajo la patria potestad de un ciudadano español, el Sr. M. C., naturalizado español cuando la optante tenía 14 años, se levante acta de la declaración, se acredite la concurrencia de los requisitos necesarios

y, previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, se dicte nueva resolución por parte del encargado del registro civil consular.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Revocar el auto apelado.
- 2.º Retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno para que la optante, actualmente mayor de edad, declare su voluntad de optar a la nacionalidad española, se levante acta de la declaración, se acredite la concurrencia de los requisitos necesarios y, previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, se dicte nueva resolución por parte del encargado del registro civil consular.

Madrid, 9 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 13 de octubre de 2017 (30.ª)

Expediente de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades.—*La solicitud de nacionalidad española por residencia para una menor de catorce años no requiere la acreditación del grado de integración social en España de sus progenitores pero sí debe acompañarse de la autorización previa del encargado del registro civil del domicilio a los representantes legales, autorización que se concederá siempre en interés del menor cuando se acredite la filiación y el consentimiento conjunto de aquellos.*

En las actuaciones sobre solicitud de nacionalidad española para una menor de catorce años remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado en el Registro Civil de Melilla el 20 de diciembre de 2016, los Sres. A. B. y J. B., mayores de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaban la nacionalidad española por residencia en nombre de su hija menor de edad N. B., nacida en M. el de 2015. Aportaban los siguientes documentos: otorgamiento de poder de representación *apud acta*; volante de empadronamiento colectivo; justificante de pago de tasa

para la solicitud; tarjeta de residencia e inscripción de nacimiento marroquí de la promotora; tarjeta sanitaria, permiso de residencia, pasaporte marroquí e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Melilla de la menor interesada; pasaporte y certificación de nacimiento marroquíes del promotor; inscripción de matrimonio de los promotores en el Registro Civil de Melilla; libro de familia; contratos de trabajo y contrato de arrendamiento de vivienda.

II

Ratificados ambos progenitores, se les requirió, mediante providencia de 20 de diciembre de 2016, la aportación de documentación relativa a su grado de integración en la sociedad española (superación de los exámenes de lengua española y de conocimiento de aspectos históricos, constitucionales y socioculturales de España), apercibiéndoles de que, en caso de no presentarla en el plazo de tres meses, se les tendría por desistidos de su pretensión.

III

En comparecencia ante el registro el mismo día, los promotores manifestaron que no iban a presentar la documentación requerida porque su hija, al ser menor, está exenta de tal requisito.

IV

Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 1 de marzo de 2017 declarando que se tenía por desistidos a los promotores, en virtud de lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 1004/2005, de 6 de noviembre, por no haber aportado la documentación requerida.

V

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los progenitores que la menor, por su edad, está exenta de acreditar el grado de integración y que dicho requisito está previsto para el propio interesado en adquirir la nacionalidad pero no es exigible a sus representantes legales, debiendo acreditar estos únicamente la representación que ostentan, tal como ha declarado la Dirección General de los Registros y del Notariado en múltiples ocasiones, por lo que solicitan la continuación del procedimiento de solicitud de nacionalidad para su hija.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Melilla remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil (CC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 348, 355 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 5, 6 y 10 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia; 3, 4 y 7 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia y las resoluciones, entre otras, 26-3.^a de marzo de 2007, 4-3.^a de julio de 2008, 1-10.^a de septiembre de 2009, 28-111.^a de octubre y 26-67.^a de diciembre de 2014; 6-70.^a de febrero de 2015 y 21-36.^a de octubre de 2016.

II. Se plantea en este expediente si procede o no continuar con la tramitación de la solicitud de nacionalidad española por residencia instada por los padres de una menor de nacionalidad marroquí nacida en España en 2015. La encargada del registro, previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, dio por desistidos a los promotores al no haber sido atendido por estos el requerimiento efectuado por el registro de aportación de la documentación relativa a su propio grado de integración en la sociedad española.

III. La concesión de la nacionalidad española por residencia es competencia del Ministerio de Justicia previo expediente instruido, según reciente modificación legal, por la Dirección General de los Registros y del Notariado (Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia). Es cierto que entre la documentación que debe acompañar necesariamente a la solicitud de nacionalidad se encuentra la relativa al grado de integración de los interesados pero, en el caso de los menores de catorce años, dicha exigencia se limita a un certificado del centro de formación cuando se trate de niños en edad escolar y cuando, como en el caso presente, la nacionalidad se pide para una menor en edad preescolar ni siquiera es preceptiva su presentación (art. 5.2a, 2.^a, RD 1004/2015). Es a este certificado al que también alude el artículo invocado por la encargada en el auto recurrido (art. 6.6 RD 1004/2015), pero igualmente se refiere a la persona para la que se solicita la nacionalidad, siendo irrelevante a estos efectos el grado de integración social de sus representantes legales, circunstancia que, naturalmente, habría de tenerse en cuenta para valorar la concurrencia o no de los requisitos necesarios para conceder la nacionalidad a los progenitores si estos la solicitaran para sí mismos pero que nada tiene que ver, como reiteradamente ha manifestado este centro directivo en múltiples resoluciones, con la solicitud que realizan en nombre de su hija menor de edad.

IV. Dicho lo anterior, no obstante, también hay que recordar que cuando la nacionalidad se solicita para un menor de 14 años, antes de la instrucción del expediente existe una fase previa en la que sus representantes legales deben obtener una autorización para solicitar la nacionalidad en nombre del menor, documento este que sí debe acompañar necesariamente a la solicitud posterior que se remita a la DGRN (art. 5.2.a, 1.^a, RD 1004/2015). Dicha autorización debe ser concedida por el encargado del registro civil del domicilio de los solicitantes (*cf.* art. 20.2a y art. 21.3c CC) y en esta fase los únicos requisitos que deben tenerse en cuenta son la acreditación de la filiación de los solicitantes respecto del menor interesado, la solicitud conjunta o el consentimiento de ambos –a no ser que se pruebe que la patria potestad está atribuida a uno solo de ellos– y que la petición se realiza en interés del menor. En este caso, los dos primeros extremos están perfectamente acreditados y, por lo que se refiere al tercero, se presume que los padres actúan siempre en beneficio e interés de los hijos. Hay que tener en cuenta, además, que la menor interesada nació y reside en España.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado

- 1.º) Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
- 2.º) Devolver las actuaciones al registro y que los promotores soliciten la autorización pertinente para instar la nacionalidad española por residencia en nombre de su hija.

Madrid, 13 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 9 de junio de 2017 (21.^a). Expediente de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (5.^a). Expediente de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades.

3.9.2 EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD. RENUNCIA A LA NACIONALIDAD ANTERIOR

(No hay Resoluciones para este apartado)

3.9.3 CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 24 de enero de 2017 (11.ª)

Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo 224 RRC.—*No resultando acreditado que el vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 del Código Civil sea imputable a la interesada, procede dejar sin efecto la resolución de caducidad de la concesión prevista en el artículo 21.4 CC.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución del encargado del Registro Civil de Fuengirola (Málaga).

HECHOS

I

Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Fuengirola (Málaga) el 21 de mayo de 2010 por la Sra. C. O. N., de nacionalidad senegalesa, y una vez realizados los trámites necesarios, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), con fecha de 26 de diciembre de 2014 y en trámite de resolución de recurso de reposición, dictó resolución de concesión a la interesada de la nacionalidad española por residencia.

II

Tras un único intento de notificación por parte del registro el 12 de junio de 2015, con resultado infructuoso por ser la dirección incorrecta, en el domicilio de la interesada que figuraba consignado en la resolución de concesión, la notificación se realizó mediante edicto publicado en el registro el 1 de julio de 2015, permaneciendo expuesto hasta el 3 de agosto siguiente.

III

El 12 de enero de 2016 se ordenó el traslado de las actuaciones al ministerio fiscal para informe sobre la posible declaración de caducidad y, una vez emitido dicho informe en sentido favorable, el encargado del registro dictó providencia el 16 de marzo de 2016 declarando la caducidad del expediente en virtud de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la interesada que se había realizado un único intento de notificación personal en una dirección incorrecta que no correspondía al domicilio efectivo de la recurrente al ser erróneos tanto el número del inmueble como el piso; que, en cualquier caso, en el recurso de reposición estimado en su día por la Dirección General de los Registros y del Notariado se había señalado un domicilio distinto a efectos de notificaciones; que el registro no había agotado los intentos de notificación en la forma legalmente prevista y que cuando se inició el procedimiento de caducidad tampoco había transcurrido el plazo señalado en el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil de Fuengirola remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 del Código Civil (CC); 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 9-2.^a de enero y 27-6.^a de noviembre de 2007 y 20-26.^a de mayo de 2016.

II. La recurrente solicitó la nacionalidad española por residencia y, una vez dictada –en trámite de recurso de reposición contra una denegación anterior– resolución de concesión, tras un intento fallido de notificación por correo postal, la resolución se notificó mediante la publicación de un edicto, declarando finalmente el encargado del registro la caducidad de la concesión por el transcurso del plazo previsto en el artículo 224 RRC. Contra este auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que «Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23». En el mismo

sentido se pronuncia el artículo 224 RRC. En este caso, el registro efectuó la notificación de la concesión mediante edicto publicado en el tablón de anuncios (*cf.* art. 349 RRC) tras un intento infructuoso de realizarla en la dirección que figuraba consignada en la resolución emitida por la DGRN y que, según la interesada, contiene datos erróneos tanto en el número de la calle como en el piso. A través de la documentación disponible en este centro no ha sido posible comprobar si tal error es imputable a la recurrente, quien podría haber facilitado los datos equivocados al comunicar su cambio de domicilio una vez iniciado el expediente, o bien a la Administración, donde también pudo haberse producido un fallo en la grabación de los datos proporcionados. No obstante, lo que sí resulta acreditado es que en el recurso de reposición interpuesto contra la denegación inicial de 20 de febrero de 2013 se designaba claramente un único domicilio a efectos de notificaciones correspondiente al representante legal de la recurrente y distinto, en todo caso, del que se hizo constar tanto en la resolución estimatoria del recurso como en la nueva resolución de concesión. De manera que, independientemente de que el registro no agotara los intentos de notificación por otros medios y de que los datos del domicilio personal estuvieran equivocados, es evidente que se produjo un error, no imputable a la interesada, al omitir la consignación del domicilio que había sido designado expresamente para la notificación de la resolución del recurso de reposición, por lo que no se considera procedente la declaración caducidad en este caso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad recurrida.

2.º Retrotraer las actuaciones al momento en que la interesada debió ser notificada del contenido de la resolución de estimación del recurso de reposición y de la concesión de la nacionalidad española por residencia.

Madrid, 24 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Fuengirola. (Málaga).

Resolución de 2 de junio de 2017 (38.^a)

Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo 224 RRC.—
1.º Cuando no conste el paradero del interesado, la notificación se realizará por anuncio general mediante edictos (cfr. art. 349 RRC).

2.º Dictada la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el plazo, de caducidad, para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código Civil es de seis meses contados desde la notificación de dicha resolución (art. 21.4 CC).

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de la concesión de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Zaragoza por el Sr. S. K., de nacionalidad gambiana, y una vez realizados los trámites necesarios, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dictó resolución de concesión al interesado de la nacionalidad española por residencia fechada el 15 de diciembre de 2015.

II

La encargada del registro dictó providencia el 25 de enero de 2016 ordenando la notificación al promotor de la resolución de concesión al tiempo que se le citaba para comparecer ante el registro el 25 de febrero de 2016 con el fin de completar los trámites de adquisición.

III

No habiendo comparecido en la fecha señalada, la encargada dictó providencia el 14 de marzo de 2016 para dirigir oficio a la policía con objeto de que se averiguara el domicilio del promotor. En informe fechado el 22 de marzo siguiente, la unidad policial correspondiente remitió informe comunicando que todas las gestiones realizadas al respecto habían resultado infructuosas.

IV

A la vista del informe anterior, la encargada dictó nueva providencia el 22 de marzo de 2016 acordando librar oficio al centro penitenciario de Z. (Zaragoza), por si el interesado se encontrara interno en dicho centro o en algún otro. La institución comunicó que no constaba ninguna persona ingresada con los datos facilitados.

V

La encargada dictó providencia el 4 de abril de 2016 ordenando que la notificación se realizara mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del registro, por no constar el

domicilio del interesado. El edicto se publicó ese mismo día y se retiró el 21 de abril siguiente, comenzando a computar el plazo de ciento ochenta días establecido en el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil.

VI

El 24 de octubre de 2016 se ordenó el traslado de las actuaciones al ministerio fiscal para informe sobre la posible declaración de caducidad y, una vez emitido dicho informe en sentido favorable, la encargada del registro dictó auto el 31 de octubre de 2016 declarando la caducidad de la concesión en virtud de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil.

VII

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que, según los datos contenidos en el auto recurrido, la notificación mediante edictos se había realizado el 24 de octubre de 2016, por lo que en la fecha en que se dictó el auto (31 de octubre siguiente) aún no había transcurrido el plazo de ciento ochenta días. Añadía que su residencia siempre ha estado fijada en Zaragoza, si bien, por motivos laborales, durante la campaña agrícola debe desplazarse a otras localidades donde es contratado en periodos de uno o dos meses, en prueba de lo cual aportaba informe de vida laboral. Finalmente, alegaba que la notificación mediante edictos es un remedio excepcional y supletorio que requiere el agotamiento previo de los medios ordinarios y la convicción de que la comunicación de otro modo es inviable por ser desconocido el domicilio o paradero del interesado, por lo que no se entiende que no fuera posible la comunicación de la concesión y sí la de la resolución de caducidad en su domicilio.

VIII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza se ratificó en su decisión, si bien deja constancia de la existencia de un error en el auto recurrido, puesto que se hizo constar que la publicación del edicto se había realizado el 24 de octubre de 2016 cuando en realidad, tal como figura en la correspondiente diligencia, dicha publicación se realizó el 4 de abril de 2016, permaneciendo expuesto el anuncio durante quince días naturales, transcurridos los cuáles comenzó a contar el plazo de ciento ochenta días del artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. El expediente se remitió a continuación a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 23 del Código Civil (CC); 2, 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 27-3.^a

de marzo, 9-4.^a de junio y 17-2.^a de diciembre de 2008; 9-4.^a de junio de 2009; 25-3.^a de junio de 2010; 11-3.^a de abril de 2011; 13-11.^a de enero, 9-18.^a de julio y 4-105.^a de septiembre de 2014 y 25-21.^a de septiembre de 2015.

II. El recurrente solicitó la nacionalidad española por residencia y, una vez dictada resolución de concesión, tras los intentos fallidos de notificación en el único domicilio que constaba en el expediente y de averiguación de su nuevo paradero, la notificación de la resolución se realizó mediante la publicación de un edicto, declarando finalmente el encargado del registro la caducidad de la concesión por el transcurso del plazo previsto en el artículo 224 RRC. Contra este auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que «Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23». En el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC y lo cierto es que constan en las actuaciones los intentos realizados por el registro para notificar personalmente al interesado la concesión de la nacionalidad y para averiguar su paradero. Finalmente, ante la imposibilidad de comunicación directa, se efectuó la notificación mediante edicto publicado en el tablón de anuncios (*cf.* art. 349 RRC). Hay que recordar que es obligación de los interesados comunicar al registro o al órgano competente para resolver su expediente los cambios de domicilio, lo que no consta que se hiciera en este caso a pesar de que el recurrente residía en una dirección distinta desde el 9 de julio de 2015, es decir, antes de que se dictara la resolución de concesión. Así resulta del volante de empadronamiento incorporado a las actuaciones tras la presentación del recurso, por lo que no son admisibles sus alegaciones. En definitiva, transcurrido el plazo de ciento ochenta días señalado legalmente sin que el promotor se presentara en el registro o facilitara un nuevo domicilio a efectos de notificación, la concesión de la nacionalidad española por residencia debe tenerse por caducada en virtud de lo dispuesto en el 224 RRC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 22 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Zaragoza.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (29.^a)

Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo 224 RRC.– *No habiéndose acreditado la correcta notificación de la concesión de la nacionalidad a la promotora, no cabe tampoco considerar que el vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 CC es imputable a aquella, por lo que procede dejar sin efecto la resolución de caducidad de la concesión prevista en el artículo 21.4 CC.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de una concesión de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

En comparecencia ante el Registro Civil de Barcelona el 14 de octubre de 2016, la Sra. E.-A. S., de nacionalidad brasileña, solicitaba cita para completar los trámites de adquisición de la nacionalidad española por residencia concedida en resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de abril de 2013. En el mismo acto, tras ser preguntada al respecto, declaró que conocía la concesión desde 2013 y que no había podido acudir antes porque retornó voluntariamente a su país de origen ese mismo año por enfermedad de su madre y que, una vez cumplido el periodo exigido de tres años fuera de España, ha decidido volver y desea quedarse a vivir definitivamente en España dedicándose a la hostelería, sector en el que trabajó en su anterior estancia en este país durante once años. Consta en el expediente la siguiente documentación: resolución de concesión de nacionalidad española por residencia, certificado brasileño de inscripción de nacimiento de la promotora, consulta telemática de expedientes de nacionalidad por residencia, resguardo de solicitud de tarjeta de extranjero y pasaporte brasileño.

II

Previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 10 de noviembre de 2016 declarando la caducidad de la concesión de nacionalidad por haber quedado extinguida la residencia legal en España de la interesada en la misma época en que se dictó la resolución y porque, en todo caso, el plazo de caducidad de la concesión es de seis meses desde su notificación, habiendo reconocido la interesada que sabía de la existencia de la resolución desde que le llegó una carta en 2013, sin que en el mencionado plazo se hubiera presentado ante el registro para completar los trámites.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que, tras más de diez años de residencia en

España y habiendo cumplido todos los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad española, tuvo que regresar a su país de origen por enfermedad de su madre, razón por la cual decidió acogerse al programa de retorno voluntario, que no le permitía regresar hasta pasados tres años. Añadía que, aunque había solicitado la nacionalidad tres años antes, cuando regresó a su país todavía no había sido emitida la resolución de concesión, lo que considera que es un mal funcionamiento del sistema de gestión de expedientes del Ministerio de Justicia que le perjudicó, pues si el expediente se hubiera resuelto antes, ella podría haber completado los trámites antes de volver a Brasil. Finalmente, la recurrente alega que el acto de notificación formal de la concesión nunca se produjo, por lo que tampoco pudo empezar a contar el plazo de caducidad de ciento ochenta días.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Barcelona ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 del Código Civil (CC); 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 9-2.^a de enero y 27-6.^a de noviembre de 2007, 20-26.^a de mayo de 2016, 24-11.^a de enero, 24-13.^a de febrero y 1-19.^a de septiembre de 2017.

II. Solicita la recurrente la reanudación de las actuaciones derivadas de la concesión de la nacionalidad española por residencia que se declararon caducadas por resolución del encargado del registro basándose en la incomparecencia de la interesada una vez transcurridos más de ciento ochenta días desde que conoció la resolución de concesión. La recurrente alega que no ha existido una notificación formal, por lo que no ha podido empezar a contar el plazo de ciento ochenta días, y que no compareció antes porque, a causa de la enfermedad de su madre, se acogió en 2013 al programa de retorno voluntario y no podía regresar a España hasta pasados tres años.

III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que «*Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23*». En el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC. En este caso, la resolución de concesión se dictó el 26 de abril de 2013 y se remitió a continuación al registro con el mandato, incorporado al texto de la propia resolución, de que se notificara formalmente a la interesada, informándole

de los trámites siguientes y advirtiéndolo de la posibilidad de declarar la caducidad prevista en los artículos mencionados. Sin embargo, no consta que por parte del registro se realizara, o al menos se intentara, la referida notificación. De hecho, en contestación a los requerimientos de este centro solicitando información al respecto, la letrada de la Administración de Justicia admite que no consta realizada dicha notificación porque la práctica del registro, debido al elevado número de expedientes que allí se tramitan, era que los interesados, una vez conocida la concesión a través de la página web del Ministerio de Justicia, comparecieran por su propia iniciativa en el registro para ser notificados formalmente. Pues bien, es cierto que la interesada, como ella misma reconoce, conocía la concesión de la nacionalidad pero debe recordarse que la consulta telemática de expedientes ofrecida por la página web del Ministerio de Justicia es un servicio complementario de información al ciudadano que en ningún caso, como expresamente advierte la aplicación, tiene el carácter de una notificación formal. Por otra parte, la apreciación del encargado sobre la extinción de la residencia legal en España al haberse acogido la interesada al retorno voluntario, no puede servir de base para una declaración de caducidad, cuya única causa legal es la prevista en el artículo 21 CC. En ese sentido, lo cierto es que, en el momento de la concesión, la solicitante cumplía todos los requisitos exigidos. La solicitud de retorno es posterior a la resolución –a diferencia, por cierto, de lo que la interesada alega en su recurso, pues si hubiera sido anterior, su petición habría sido denegada– y, en cualquier caso, esa circunstancia sería relevante para determinar la procedencia o no de conceder la nacionalidad por residencia, pero la resolución de tales expedientes es competencia atribuida al Ministerio de Justicia. En definitiva, no constando acreditada la notificación formal (bien personalmente o bien, en última instancia, a través de edictos si no hubiera podido localizarse a la interesada), no procede la declaración de caducidad en este caso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º) Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad.
- 2.º) Retrotraer las actuaciones al momento en que la interesada debió ser notificada formalmente de la concesión de la nacionalidad española por residencia.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de febrero de 2017 (13.^a). Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo 224 RRC.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (19.^a). Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo 224 RRC.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (9.^a). Caducidad de la concesión de la nacionalidad española. Artículo. 224 RRC.

4. MATRIMONIO

4.1 Inscripción de matrimonio religioso

4.1.1 CELEBRADO EN ESPAÑA

Resolución de 3 de marzo de 2017 (1.ª)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en España.—*Procede la inscripción con la simple presentación del acta de matrimonio extendida con los requisitos necesarios.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio religioso remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

HECHOS

I

Don L-F. M. S. y Doña M. S. M., ciudadanos españoles, contrajeron matrimonio religioso por el rito de los Testigos de Jehová el 17 de septiembre de 2016 en la localidad de P., presentando posteriormente el certificado de la celebración del matrimonio para su inscripción en el registro civil de la misma localidad. Aportan como documentación: certificado de capacidad matrimonial y certificado de matrimonio.

II

Mediante auto de fecha 17 de octubre de 2016, el encargado del registro civil deniega la inscripción del matrimonio ya que los interesados han contraído matrimonio religioso por el rito de los Testigos de Jehová al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 15/2015 de 15 de julio de la Jurisdicción Voluntaria, siendo que esta disposición, no entrará en vigor sino hasta el día 30 de julio de 2017 y mientras no entre en vigor dicha disposición no se permite que las bodas religiosas de otras confesiones distintas a la católica, musulmana, evangélica o judía también puedan ser reconocidas civilmente por la mera tramitación del expediente de capacidad matrimonial y la acreditación de notable arraigo.

III

Notificados los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio, alegando que el auto apelado vulnera el artículo 60 del Código Civil y la disposición transitoria quinta punto cuarto de la Ley 15/2015 de 15 de julio de la Jurisdicción Voluntaria, añadiendo que el auto también yerra al afirmar que sólo las confesiones que hayan obtenido notorio arraigo y que además tengan acuerdo de cooperación, están habilitadas para celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles. Aportan como documentación: certificado de condición de ministro de culto y certificado emitido por la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opone al mismo. El juez encargado ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49, 60, 63 y 65 del Código Civil; 15, 16, 69 y 70 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil; Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de Libertad Religiosa y Real Decreto 593/2015 de 3 de julio por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España.

II. Los interesados presentaron en el registro civil certificación de matrimonio religioso celebrado por el rito de los Testigos de Jehová el 17 de septiembre de 2016. Mediante auto dictado por el encargado del registro civil con fecha 17 de octubre de 2016, se deniega la inscripción del matrimonio. Esta resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. Establece el artículo 49 del Código Civil que «cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:... 2.º En la forma religiosa legalmente prevista», igualmente el artículo 59 establece que «el consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste». El artículo 60 del Código Civil, tras su reforma por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, queda redactado de la siguiente manera: 1. «El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas produce efectos civiles. 2. «Igualmente se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de

Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España...» siempre que se cumplan los requisitos previstos en el mismo artículo a saber, la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad. La modificación del artículo 60 del Código Civil entró en vigor el 23 de julio de 2015, ya que según dispone la disposición final vigésimo primera de la citada Ley, ésta entra en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el «BOE», es decir el 23 de julio de 2015, estableciéndose excepciones que no afectan al caso ahora examinado, por lo que a partir de dicho momento los matrimonios celebrados tanto en la forma prevista por las confesiones que tengan acuerdos de cooperación con el estado español, como aquellos realizados en la forma prevista por confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que hayan tenido el reconocimiento de notorio arraigo, verán reconocidos sus efectos civiles si cumplen los requisitos como es este caso, debiendo significarse que confesión de Testigos de Jehová obtuvo la declaración de notorio arraigo en el año 2006, según se acredita documentalmente en el expediente. En el mismo sentido la Orden JUS/577/2016 de 19 de abril, sobre inscripción en el registro civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso («BOE» de 22 de abril de 2016), declara que «la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria modifica determinados artículos del Código Civil y en concreto el artículo 60 cuya entrada en vigor se produjo el 23 de julio de 2015. Dicha modificación implica que según establece el artículo 2 de dicho artículo, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, que hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo». Sigue diciendo la citada Orden «a la entrada en vigor de la presente Orden se ha declarado el notorio arraigo en España... la Iglesia de los Testigos de Jehová (2006)...».

IV. A este respecto se ha de recordar que la instrucción de 20 de marzo de 2006 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre prevención del fraude documental en materia de estado civil, acordó hacer públicos los textos de la recomendación núm. 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil, relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil, y de su memoria explicativa, adoptadas por su Asamblea General en Estrasburgo el 17 de marzo de 2005, y comunicar a todos los encargados de los registros civiles españoles –municipales, consulares y Central– que los criterios y orientaciones prácticas que en orden a la prevención del fraude documental en materia de estado civil se contienen en la citada Recomendación deberán ser valorados y, en su caso, invocados, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento, en la calificación de las certificaciones de las actas de los registros civiles extran-

jeros que se presenten en un registro civil español, bien como título directamente inscribible, bien como documento complementario en cualquier tipo de expediente o actuación registral. Por identidad de causa y de razón, los mencionados criterios y orientaciones prácticas deben aplicarse analógicamente al caso ahora examinado de certificaciones eclesiásticas de matrimonio. Entre dichas recomendaciones se incluye la de que «Cuando existan indicios que hagan dudar de la exactitud de los datos que figuran en el documento presentado o de la autenticidad de las firmas, el sello o el documento en sí mismo, la autoridad competente en el asunto realizará todas las comprobaciones necesarias, en particular con el interesado», y la de que «Cuando de los elementos verificados se desprenda el carácter fraudulento del documento presentado, la autoridad competente se negará a otorgarle efecto alguno».

V. Por tanto, en el presente caso, ha de examinarse la certificación de matrimonio que constituye el título para la inscripción, con el fin de comprobar si reúne los requisitos exigibles tanto por su tenor literal (*cf.* art. 69 LRC) –que contenga todos los datos de que la inscripción hace fe–, como en los aspectos formales (*cf.* art. 81 RRC) –que no adolezca de tacha por la que pueda imputarse nulidad al matrimonio celebrado-. El documento aportado cumple las exigencias de la Orden JUS/577/2016 en lo relativo al modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
2. Inscribir en el registro civil el matrimonio celebrado por el rito Testigos de Jehová entre Don L. F. M. S. y Doña M. S. M.

Madrid, 3 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Parla (Madrid).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (76.^a)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en España.– *Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

I

Doña S. E. M. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1987 y Don M. R. A. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, presentaron en el registro civil hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Ceuta por el rito coránico el 30 de abril de 2005. Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio expedido por la Comunidad Islámica A. B. de Ceuta, certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada y partida literal de nacimiento y certificado de soltería del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que este matrimonio no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal no se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 4 de julio de 2016, el encargado del registro civil deniega la inscripción del matrimonio, ya que según el informe del médico forense con respecto a la interesada, ésta presenta una enfermedad psicofísica que altera su capacidad para el adecuado gobierno de su persona y la administración de sus bienes.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que impugna el mismo por considerar la resolución recurrida ajustada a derecho. El encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por

la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España; la instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2.^a de diciembre de 2004; 24-2.^a, 25-4.^a de enero, 3-3.^a, 9-1.^a de febrero, 2-1.^a, 3-4.^a, 17-1.^a, 23-4.^a de marzo, 19-1.^a y 20-2.^a y 3.^a de abril, 19-3.^a, 20-1.^a y 3.^a, 26-2.^a de mayo, 8-4.^a, 20-3.^a de junio y 19-2.^a de julio y 9-3.^a de septiembre de 2005; 24-5.^a de mayo de 2006, 4-4.^a de marzo y 11-9.^a y 24-6.^a de noviembre de 2008 y 9-1.^a de agosto de 2010.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contratante (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado Español legalmente prevista como suficiente por la ley española (art. 256-2.º RRC). El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación requiere que por medio de la calificación de la certificación expedida y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su reglamento. El citado artículo 256 remite al 63 CC que, con referencia a los matrimonios celebrados en España en forma religiosa, dispone en su párrafo 2 que «Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título» y uno de esos requisitos,

esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (*cf.* art. 45 y 73.1.º CC).

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso se pretende inscribir un matrimonio islámico celebrado en España el día 30 de abril de 2005 entre una ciudadana española, de origen marroquí y un nacional marroquí, inscripción que es denegada por el encargado, por estimar que el matrimonio no se ha celebrado con los fines propios de la institución matrimonial, ya que según el informe del médico forense la interesada presenta una enfermedad psicofísica que altera su capacidad para el adecuado gobierno de su persona y la administración de bienes. El auto no suscita cuestión acerca de determinadas formalidades y requisitos que derivan del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, como la acreditación de la pertenencia del Imam autorizante a una de las Comunidades Islámicas enunciadas en el artículo 1.1 del Acuerdo de Cooperación (*cf.* art. 7.1, en relación con el art. 3.1). Respecto al fondo del asunto, si los contrayentes deseaban inscribir el matrimonio en el registro civil español para obtener el pleno reconocimiento de sus efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial mediante certificación expedida por el registro civil correspondiente (*cf.* art. 7.2 del Acuerdo). No constando la obtención en su momento del mencionado documento, por el juez encargado se ha procedido a comprobar la posterior concurrencia de los requisitos exigidos por el Código Civil. Por otro lado los interesados habían solicitado en el año 2007 y en el Registro Civil de Ceuta autorización para contraer matrimonio civil, y ahora presentan un certificado de matrimonio celebrado el 30 de abril de 2005 por el rito islámico en la comunidad islámica A. B. Dicha solicitud de autorización de matrimonio fue denegada por el encargado del Registro Civil de Ceuta mediante auto de fecha 19 de marzo de 2009, en este caso también mediaba un informe pericial psicológico de la interesada que concluyó que ésta unas capacidades cognitivas muy reducidas; dicho auto fue ratificado por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 12 de abril de 2011. De las audiencias reservadas que se les ha practicado a los interesados se derivan una serie de incongruencias, así la interesada dice que se conocieron hace trece años cuando se vieron en la calle y comenzaron a hablar, el interesado sin embargo, dice que se conocieron en 2004 porque él trabaja en casa de ella. Ella desconoce la fecha de nacimiento de él, dice que tiene cuatro hermanos cuando él da el nombre de ocho, dice que es pintor sin embargo él dice que es obrero, declara que él gana 20 euros al día cuando él dice que

entre 10 y 15; desconocen gustos y aficiones, comidas favoritas, etc. Ella dice que no padece enfermedades y no tiene tratamientos, sin embargo él dice que ella tiene depresión y toma pastillas para ello. En otra entrevista que se les practicó, el interesado dice que la conoció en 2004, que ella tiene una enfermedad de asfixia, que se casaron en 2005, que ella tiene una enfermedad que le da por romper la ropa, salir a la calle, etc, y ella declara que tiene una ayuda por enfermedad y su madre es su tutora. En el informe médico forense que obra en el expediente la interesada dice que su marido tiene problemas en la frontera y necesita los papeles, en ese mismo informe consta entrevista del interesado que dice que sabe que ella tiene una enfermedad pero que él necesita los papeles porque si no tiene problemas con la policía.

VI. De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro civil que, por su intermediación a los hechos, es quien más fácilmente ha podido apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (5.ª)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en España.—No procede su inscripción por falta de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio canónico remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil de Chantada.

HECHOS

I

Doña M. C. R. V. nacida en España y de nacionalidad española solicita la inscripción de su matrimonio eclesiástico contraído con Don J. M. V. C., nacido en España y de nacionalidad española, el 24 de agosto de 1996 en la Parroquia de S. M. P. en L. Adjunta como documentación el certificado eclesiástico de matrimonio.

II

Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los promotores. El interesado manifiesta su oposición a que se inscriba el matrimonio. Comparecen dos testigos que manifiestan que los interesados están casados por la Iglesia y que los dos manifestaron su deseo de casarse y se encontraban muy felices por este motivo. El ministerio fiscal informa desfavorablemente. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2016 deniega la inscripción del matrimonio por no existir consentimiento matrimonial.

III

Notificada la resolución a los interesados, la interesada solicita la inscripción del matrimonio y el interesado solicita se confirme el auto apelado y que se desestime el recurso de la promotora.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo. El encargado ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que se ratificaba en la misma resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49, 63 y 65 del Código Civil; 15, 16, 69 y 70 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 81, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil; y VI de los acuerdos vigentes sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede; resolución 2.^a de 19 de noviembre de 2004, resolución 1.^a de 17 de julio de 2009 y resolución 2.^a de 29 de septiembre de 2009.

II. Los interesados contrajeron matrimonio canónico el 24 de agosto de 1996, en la Iglesia de S. M. P. de L., asistiendo al matrimonio el presbítero Don F. S. V., no obstante no es hasta el año 2016 cuando la interesada solicita la inscripción de matrimonio, a la que se opone el promotor. El encargado

deniega la inscripción por falta de consentimiento matrimonial. Este auto es objeto de recurso por parte de la interesada.

III. Establece el artículo 49 del Código Civil que «Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:... 2.º En la forma religiosa legalmente prevista». Entre estas formas religiosas legalmente previstas está la del matrimonio canónico, regulado en España por los Acuerdos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, cuyo artículo VI dispone que «El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria la inscripción en el registro civil, que se practicará con la simple presentación de la certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio». A estos efectos el protocolo final de los citados acuerdos prevé que «Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el registro civil».

IV. En coherencia con lo anterior el artículo 63 del Código Civil, adaptado al mencionado acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede mediante reforma introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio, dispone que «la inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del registro civil». Así se recordó en la circular de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1980, sobre inscripción en el Registro Civil de los matrimonios canónicos, insistiendo en que el «único título para practicar la inscripción es la simple certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio, bien la presenten directamente los interesados, bien sea remitida por el párroco al registro competente».

V. No obstante, si bien es cierto que la misma circular establece que «El encargado del registro civil practicará la inscripción mediante transcripción de los datos oportunos de la certificación eclesiástica, sin que pueda denegar el asiento a pretexto de que pudiera haber algún error u omisión en las circunstancias exigidas y a salvo lo que dispone el artículo 252 del Reglamento del Registro Civil», igualmente lo es que en su apartado 4.º insta a los encargados a recabar la colaboración de los párrocos de sus respectivos territorios, a fin de que las certificaciones eclesiásticas contengan las circunstancias para la inscripción, «especialmente los datos registrales de los asientos de los nacimientos de los esposos», extremo que ya resultaba de gran importancia en la fecha de aquella circular y que hoy la tiene aún mayor, a la vista del fraude documental en materia de estado civil que, como fenómeno creciente, se viene observando en diversos países europeos.

VI. Por otra parte, el artículo 63 del Código Civil, tras prever que la inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respec-

tiva, dispone en su párrafo segundo que «Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título.» Es cierto que este precepto no ha de ser literalmente interpretado en el supuesto de matrimonios canónicos celebrados en el extranjero que, conforme al artículo 73 de la Ley del Registro Civil, requieren para su inscripción en el registro civil español la tramitación de un expediente previo, como medio para que el encargado del registro compruebe, antes de practicar el asiento, si concurren los requisitos legales para su celebración. Pero este criterio no procede aplicarlo cuando se trata de matrimonios religiosos celebrados en España, para cuya inscripción basta como se ha visto, con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva (*cfr.* art. 63 CC).

VII. En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente y de las manifestaciones de ambos promotores se constata que han estado usando el estado civil de solteros, así consta en el libro de familia, en la inscripción de nacimiento de su hijo en común, en la escritura de compra-venta de un piso, etc. La interesada además, nunca ha estado empadronada en el domicilio familiar. La interesada declaró que ambos decidieron no inscribir el matrimonio par que ella pudiera seguir cobrando una subvención económica y el interesado declara que la ceremonia fue un «paripé» porque ella estaba cobrando una pensión y si se casaba se la quitaba, además en aquella época en una aldea, era un escándalo vivir en «concubinato», él no tenía intención de contraer matrimonio con ella, y los padres de ella le hicieron un regalo económico al cura para que no inscribiera el matrimonio, por el favor que les había hecho.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Chantada (Lugo).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 23 de junio de 2017 (12.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (10.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (8.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (2.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (18.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en España.

4.1.2 CELEBRADO EN EL EXTRANJERO

Resolución de 17 de febrero de 2017 (17.^a)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en el extranjero.—*Es inscribible el matrimonio celebrado en Guinea por un ciudadano español, de origen guineano y una ciudadana guineana, porque se ha aportado certificado de matrimonio expedido por autoridad o funcionario ghanés.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don B. D. D. nacido en C. (Guinea) y de nacionalidad española por residencia adquirida el 27 de julio de 2013 presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en C. (Guinea) el 15 de marzo de 2002 con Doña O. B. nacida en M. (Guinea) y de nacionalidad guineana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: fotocopia de extracto de acta de matrimonio local traducida y legalizada, documentos de identidad de los interesados, certificación literal de nacimiento del interesado, certificados de empadronamiento de los interesados.

II

Mediante resolución de fecha de 11 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida al no existir en este caso el oportuno certificado de matrimonio válido.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que impugna el mismo interesando la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2.^a de junio de 2001; 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002; 13-3.^a de octubre de 2003; 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005 y 17-3.^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, los interesados pretenden inscribir un matrimonio que se celebró en Guinea Ecuatorial, según afirman, en 2002. Al efecto presentan junto con el impreso de declaración de datos una fotocopia a color del extracto del acta de matrimonio. El encargado del Registro Civil de Puerto del Rosario, mediante diligencia de 4 de febrero de 2015 requiere a los interesados para que aporten certificado original e inextenso del matrimonio, siguiendo la solicitud de cooperación judicial expedida por el Registro Civil Central el 25 de noviembre de 2014. Finalmente la inscripción que es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe, en particular por las discrepancias existentes entre el contenido de ambos certificados presentados, dado que en el primero se afirma que el matrimonio se celebró con fecha de 15 de marzo de 2002, y en el segundo, con fecha de 15 de marzo de 2013. Posteriormente, en el trámite de recurso, los interesados aportan una sentencia supletoria que, conforme a la legislación guinenana, según se afirma dicha sentencia, hace las veces de partida de matrimonio. En este documento se afirma de nuevo que el matrimonio se celebró en 2002. A la sentencia se acompaña el extracto de partida de matrimonio expedido, una vez se transcribió la sentencia antes mencionada, por el Registro Civil de Guinea en el que consta como fecha de celebración.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cfr.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Sáhara Occidental en 1972.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (*cfr.* art. 68 II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cfr.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, se pretende la inscripción de un matrimonio por transcripción de la certificación de un registro extranjero. El artículo 85 del RRC dispone al respecto que «para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación del registro extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española». Vistos los antecedentes de hecho, y teniendo en cuenta el contenido de la sentencia supletoria aportada en trámite de recurso, han de considerarse despejadas las dudas sobre la realidad del hecho, basadas en las discrepancias existentes en las certificaciones presentadas. En efecto, las discrepancias radican en cuanto al año en el que se afirma celebrado el matrimonio, por cuanto que el día y mes coinciden, además 2013 es el año en que se expide la segunda certificación. Por ello debe considerarse plausible la existencia de un error en la expedición de la certificación. Finalmente, las dudas se despejan en la sentencia supletoria, en la que, oídos el requirente y ministerio fiscal y tras las prácticas de las pruebas oportunas se afirma que el matrimonio se celebró en 2002. Dicha sentencia, además, fue objeto de transcripción en el Registro Civil de Guinea, y así se acredita con la partida de matrimonio que se acompaña al escrito de recurso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Guinea el 15 de marzo de 2002 entre Don B. D. y Doña O. B.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (12.ª)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en el extranjero.—1.º *Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2.º *Cuando el matrimonio extranjero se ha celebrado en forma canónica y se solicita su inscripción por transcripción de la causada en el registro civil del lugar de celebración, el encargado puede y debe practicar las audiencias reservadas de ambos contrayentes para comprobar que el matrimonio reúne todos los requisitos que para su validez exige el Código Civil.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña I-I. R. M. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio canónico celebrado en Colombia el 18 de diciembre de 2010 con Don O. B. C. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 21 de abril de 2016 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el recurso interpuesto e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005; 23-3.^a y 5.^a de junio, 3-1.^a, 21-1.^a y 5.^a, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a y 26-5.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 5.^a y 6.^a y 11-1.^a de septiembre; 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007; 29-7.^a de abril, 27-1.^a de junio, 16-1.^a y 17-3.^a de julio, 30-2.^a de septiembre y 28-2.^a de noviembre de 2008; 19-6.^a y 8.^a de enero y 25-8.^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contratante (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir

otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se pretende inscribir un matrimonio canónico celebrado en Colombia entre dos ciudadanos colombianos y del trámite de audiencia reservada, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Declaran los interesados que se conocen desde niños y que decidieron contraer matrimonio tres años antes de casarse, sin embargo la interesada contrajo matrimonio civil en Colombia con un ciudadano colombiano en el año 2007 y se divorció del mismo el 9 de noviembre de 2010, para contraer matrimonio con el interesado un mes después (el interesado dice que ella se divorció en 2009). Ella declara que el promotor tiene un hijo de otra relación que vive con él pero él no hace mención de ello. Ella declara que tiene cuatro hermanos y él dice que ella tiene tres hermanos incluyendo a ella y por parte de padre son once hermanos más. Ella dice que ha viajado a Colombia tres o cuatro veces, sin embargo él dice que ella ha ido dos veces. Ambos declaran que no han convivido ni antes ni después del matrimonio y que desde que contrajeron matrimonio ella no ha vuelto a Colombia. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Civil Central quien, por su inmediatez a los hechos, es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

VII. No obstante, antes de confirmar la anterior conclusión, ha de examinarse si constituye obstáculo el hecho de que el matrimonio extranjero examinado tenga carácter canónico, dado el particular régimen jurídico que los matrimonios autorizados bajo tal forma tienen en el Derecho español.

Pues bien, antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, si el matrimonio de españoles en el extranjero en forma religiosa se celebraba en forma canónica, bastaba para la inscripción la simple certificación eclesiástica

(Circular de 15 de febrero de 1980) y, si se trataba de otra forma religiosa era necesario acudir al expediente previsto en el artículo 73 de la Ley del Registro Civil (resolución de 25 de noviembre de 1978). La entrada en vigor de la citada Ley 30/1981 suscitó ciertas dudas ya que de la vigente redacción del artículo 63 del Código Civil podría deducirse que, a diferencia del matrimonio canónico celebrado en España, el que tuviera lugar en el extranjero exigiría para su inscripción en el registro civil español la tramitación del expediente previo previsto en el citado artículo de la Ley del Registro Civil. Ciertamente una interpretación literal de los artículos 63 y 65 del Código Civil llevaría a la conclusión de que en la legalidad actual, y con respecto de los matrimonios contraídos una vez entrada en vigor la citada Ley 30/1981, la inscripción del matrimonio celebrado fuera de España en forma religiosa requeriría, además de la presentación de la certificación de la Iglesia y de que, de los documentos presentados o de los asientos del registro, no resulte la nulidad del matrimonio, que el encargado del registro compruebe, antes de practicar el asiento, si concurren los requisitos legales para su celebración.

Las dudas surgen porque tal interpretación literal tropieza con la disposición general contenida en el artículo 49 del propio Código Civil que, sin distinciones y, por tanto, con un carácter indiferenciado y general, permite a cualquier español contraer matrimonio en la forma religiosa legalmente prevista «dentro o fuera de España». Igualmente podría entenderse que el artículo VI, número 1, de los acuerdos vigentes sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede constituye otro elemento obstativo a aquella interpretación literal, dado que, también en este caso sin distinciones por razón del lugar de celebración, establece que la inscripción en el registro civil «se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio». Esta aparente contradicción con una norma que refleja un compromiso internacional suscrito por España fue lo que llevó a este centro directivo a estimar en su resolución de consulta de 2 de noviembre de 1981 que no existen en nuestro ordenamiento jurídico motivos suficientes para establecer, a efectos de su inscripción en el registro, una diferencia tajante entre los matrimonios en forma canónica celebrados dentro o fuera del territorio español, especialmente porque todos ellos están sometidos al control impuesto por el segundo párrafo del artículo 63 del Código Civil, a cuyo tenor «se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título», por lo que, concluíamos entonces, resulta excesivo obligar, además, al encargado a comprobar por otros medios no concretados, si concurren los requisitos legales para su celebración.

Sin embargo, lo anterior no ha de impedir, antes al contrario, que cuando se solicite la inscripción, como en este caso, por transcripción de la certificación de la inscripción causada por el matrimonio canónico en el registro civil extranjero del lugar de celebración, el encargado cumpla con su función de comprobación de que el matrimonio que se pretende inscribir reúne todos los requisitos

legales exigidos para su validez a la vista de los documentos presentados, entre los cuales figurará no sólo «la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (*cf.* art. 256-3.º RRC), sino también «las declaraciones complementarias oportunas» exigidas por el párrafo final del citado precepto reglamentario, tendentes a formar la convicción del encargado sobre la «realidad del hecho y su legalidad conforma a la ley española», lo que obliga a examinar con tal objeto el contenido de las audiencias reservadas practicadas a cada uno de los contrayentes de acuerdo con el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, tal y como hizo el encargado, alcanzando con ello la conclusión examinada en los anteriores fundamentos jurídicos que, por ser ajustada a derecho, este centro directivo debe confirmar.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 20 de octubre de 2017 (8.ª)

Inscripción de matrimonio religioso celebrado en el extranjero.—*No es inscribible el matrimonio celebrado en Sáhara por un español, de origen saharauí porque la certificación del Registro sobre los hechos de que da fe no reúne garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña A. A. M. nacida en Sáhara occidental y de nacionalidad española, con valor de simple presunción desde el año 2006 y Don H. M. L., nacido en Sáhara occidental y de nacionalidad española con valor de simple presunción desde el año 2011, solicitaban la inscripción de su matrimonio celebrado en el Sáhara occidental el 28 de diciembre de 1990. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio expedida por el Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos de la Repú-

blica Árabe Saharaui Democrática, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

El ministerio fiscal se opone a lo solicitado. Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2016, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que no ha quedado suficientemente acreditada la celebración del matrimonio, el lugar y la fecha en que tuvo lugar el mismo, así como la identidad, capacidad y libertad de consentimiento y falta de impedimento de los contrayentes.

III

Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la confirmación del auto recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2.^a de junio de 2001; 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002; 13-3.^a de octubre de 2003; 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005 y 17-3.^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, los interesados, ambos de nacionalidad española con valor de simple presunción, la interesada desde el año 2006 y el interesado desde el año 2011, pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Sáhara Occidental en el año 1990, sin embargo la inscripción que es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cfr.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Sáhara Occidental en 1990.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (*cfr.* art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cfr.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC., bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, se pretende la inscripción de un matrimonio por transcripción de la certificación de un registro extranjero. El artículo 85 del RRC dispone al respecto que «para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de registro extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española». La calificación por el encargado de la certificación extranjera se extiende al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio de cargo que la habilite para tal expedición con base legal suficiente, base que en este caso, en el que los interesados aportan un acta de matrimonio expedida por el departamento de contratos y documentación de la República Árabe Saharaui Democrática. Observándose que el título aportado no reúne los requisitos que señala el artículo reglamentario transcrito para que pueda practicar la inscripción. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir al expediente del artículo 257 RRC «En cualquier otro supuesto el matrimonio sólo puede inscribirse en virtud de expediente, en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 27 de enero de 2017 (7.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (23.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (57.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (1.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (8.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (10.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 7 de abril de 2017 (5.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (7.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 7 de julio de 2017 (13.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 28 de julio de 2017 (10.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

Resolución de 28 de julio de 2017 (11.^a). Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero.

4.2 Expediente previo para la celebración de matrimonio civil

4.2.1 AUTORIZACIÓN DEL MATRIMONIO

Resolución de 27 de enero de 2017 (8.ª)

Autorización de matrimonio.-1. *Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2. *No es válido el poder otorgado por un marroquí residente en su país para celebrar matrimonio en España en contra de la legislación nacional que rige su estado civil y la normativa que regula las relaciones internacionales de carácter consular.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

I

Doña H. M. G. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la autorización para contraer matrimonio por poder con Don H. B. B., nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal del acta de nacimiento, certificado administrativo de estado civil y certificado de residencia del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a

la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 9 de febrero de 2016, deniega la autorización del matrimonio.

III

Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.^a de diciembre de 2005; 31-3.^a de mayo, 27-3.^a y 4.^a de junio, 10-4.^a, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a y 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a, 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007, 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que

por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poder entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados no tienen idioma común como se evidenció en la entrevista que se le practicó al interesado, necesitó de un traductor y él mismo dice que se comunican mediante traductor, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. El interesado declara que desea contraer matrimonio por poderes en Barcelona, sabe que este tipo de matrimonio no es válido en Marruecos por no efectuarse conforme al ordenamiento jurídico marroquí cuya legislación no admite el matrimonio por poderes, pero que han decidido casarse en España por las obligaciones laborales de la promotora, sin embargo la promotora ha viajado varias veces a Marruecos y declara que quiere celebrar allí la boda. El interesado indica que se conocieron porque ella es amiga de su hermana F. que vive en España y fueron juntas a Marruecos entre septiembre y octubre de 2014, por la fiesta «A. K.», declara que no conoce a la familia de la interesada, pero ella sí conoce a la suya porque ha viajado seis veces a Marruecos; desconoce su salario ya que como no han hablado todavía de planes de futuro no sabe con qué ingresos contaría para vivir en España. La interesada declara que se conocieron cuando ella viajó a Marruecos con una amiga en casa de su familia, declara que aunque él no conoce a su familia ha hablado con su hermano por Skype. Ella declara que el interesado quiere vivir en Marruecos y más adelante pueden plantearse vivir en España, dice que quiere celebrar una fiesta de boda en Marruecos e invitar a amigos y familiares. Por otro lado como ha puesto de manifiesto el Cónsul General de España en Tánger sobre la validez del poder otorgado por un nacional marroquí, residente en Marruecos, para contraer matrimonio en España, el Código de familia marroquí única-

mente contempla la posibilidad de celebración del matrimonio en la forma religiosa establecida en la ley islámica, teniendo por lo tanto prestar consentimiento ante un dirigente islámico y al menos dos testigos mayores de edad y musulmanes. Por lo que con arreglo a la legislación personal del interesado y conforme al artículo 5 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, no se puede dar validez al consentimiento de poder para contraer matrimonio en España de un nacional marroquí residente en Marruecos, porque se estaría dando validez por parte de autoridades españolas a un acto contrario a la legislación marroquí sobre un nacional marroquí residente en su país.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 3 de marzo de 2017 (50.ª)

Autorización de matrimonio.—*No se autoriza la celebración de matrimonio civil entre una española, de origen marroquí y un egipcio porque la común manifestación de que se encuentran vinculados entre sí por matrimonio islámico, vertida durante la audiencia reservada celebrada durante la tramitación del expediente previo, hace dudar sobre la concurrencia del impedimento de ligamen*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ordes.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña W. L. B., mayor de edad, divorciada, de nacionalidad española adquirida por residencia el 2005 y de origen marroquí y Don M-A. A. H., mayor de edad, soltero y de nacionalidad egipcia, solicitan autorización para contraer matrimonio. Acompañan la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento de la promotora, certificado de empadronamiento de ambos interesados en el mismo domicilio en O., L-C., declaración jurada de soltería de la interesada y certificación de matrimonio de la misma con nota al margen de divorcio de su anterior matrimonio, extracto de inscripción de nacimiento del interesado y declaración jurada de su soltería.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 5 de noviembre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio ya que no se ha acreditado la ausencia de impedimento de vínculo matrimonial en la persona de los contrayentes, ya que los interesados aunque dicen ser solteros (se verifica documentalmente) sin embargo en las audiencias reservadas dicen que han contraído matrimonio coránico.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio, argumentando que no se han casado sino que lo que hicieron fue una petición de mano.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste se opone. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 46, 60, 61, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.^a de diciembre de 2005; 31-3.^a de mayo, 27-3.^a y 4.^a de junio, 10-4.^a, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 9-3.^a y 9-5.^a de octubre, 14-2.^a, 14-5.^a y 14-6.^a de noviembre y 13-4.^a y 13-5.^a de diciembre de 2006, 25-1.^a, 25-3.^a y 25-4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a y 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 11-4.^a, 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 29-6.^a de noviembre, 14-1.^a y 14-4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007, 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. No pueden contraer matrimonio los que estén ligados por vínculo matrimonial (*cf.* art. 46.2.º CC). Precisamente la función propia del expediente previo regulado en los artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil es prevenir la celebración de matrimonios nulos mediante la verificación de que concurren todos los requisitos legales (*cf.* art. 65 CC), entre los que se encuentra la ausencia de impedimento personal de ligamen.

IV. En el caso actual nos encontramos ante una solicitud de autorización para contraer matrimonio entre una ciudadana española de origen marroquí y un ciudadano egipcio. Según las declaraciones juradas de ambos interesados que se acompañan como documentación acreditativa de su pretensión, las partes declaran estar divorciada y soltero respectivamente. Sin embargo, en las audiencias reservadas son preguntadas las partes, por separado si han contraído matrimonio con anterioridad a lo que responden afirmativamente diciendo que ya están casados entre sí por la ley musulmana en una mezquita. La realidad del vínculo matrimonial, reconocido por ambos resulta igualmente por el hecho de que viven juntos, y esto no es posible en la religión musulmana si ambos no han contraído matrimonio religioso (único válido en Marruecos), extremo que resulta de las certificaciones de empadronamiento de los interesados si bien tanto en las audiencias reservadas como en declaración posterior al juzgado se ha dicho que el interesado vive en París, acudiendo una vez al mes a España, alguna visita con duración de dos semanas. Este matrimonio declarado por las partes se presume válido y produce todos sus efectos desde su celebración como se deduce de los artículos 60 y 61 del Código Civil, por lo que ello llevaría consigo la existencia de un posible impedimento de ligamen de acuerdo con el artículo 46. Procede que los interesados, mediante la presentación de la certificación expedida por la autoridad religiosa competente soliciten la inscripción del mismo. Sólo si de la documentación presentada resultase acreditado que en realidad no se casaron si no que, como señalan en las alegaciones practicadas en el recurso interpuesto, se limitaron a celebrar promesa de matrimonio, podrán entonces solicitar autorización para contraer matrimonio ya que así habrá quedado suficientemente desvirtuada las declaraciones que ambos interesados, y por separado, realizaron ante el encargado del Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ordes (A Coruña)

Resolución de 17 de marzo de 2017 (33.ª)

Autorización de matrimonio.—1.º *Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2.º *En los expedientes del registro civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el registro civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la juez encargada del Registro Civil de Manresa (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Manresa, Don R. C. M., nacido en T. (Marruecos) el día 26 de julio de 1976 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 26 de junio de 2006 y Doña. H. G. E-A., de nacionalidad marroquí, nacida en T. el 12 de mayo de 1986, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor; documento nacional de identidad español, certificado de inscripción en el registro civil español con fecha 26 de junio de 2006, no constando en estos documentos la misma identidad, declaración jurada de estado civil, divorciado, certificación de matrimonio civil anterior de fecha 1 de julio de 1977, con una ciudadana española nacida en C., con nota marginal de separación legal del matrimonio con fecha 11 de mayo de 2006, sentencia de divorcio de fecha 19 de mayo de 2011 y volante de empadronamiento en M. desde el año 2000 y de la interesada, pasaporte marroquí, expedido en marzo del año 2010 y con visado del Consulado español en Tánger para una estancia de 90 días pero con acceso limitado a la ciudad de C. con entrada y salida en el mismo día, acta literal de nacimiento marroquí, certificado de soltería y certificado de residencia en T.

II

Con fecha 29 de junio de 2011 los interesados ratificaron la solicitud y fue oído el testigo presentado. Posteriormente se celebran las audiencias reservadas, con el promotor en el Registro Civil de Manresa el 15 de julio de 2011 y con la promotora el 29 de noviembre siguiente en el Registro Civil Consular de Tánger. El ministerio fiscal emite informe contrario a la autorización, poniendo de manifiesto el escaso tiempo transcurrido desde el divorcio del promotor y la solicitud del nuevo matrimonio, la manifestación de la promotora de que el matrimonio se celebraría por poder sin que conste el mismo, la declaración de la interesada de que es consciente de que su matrimonio no tiene efecto ante las autoridades marroquíes y, por último el tiempo transcurrido entre las entrevistas a ambos promotores que permitiría el conocimiento por la interesada de las cuestiones planteadas a su pareja.

III

Con fecha 12 de marzo de 2012 la encargada del registro civil estimando que existen circunstancias personales de los promotores y de su relación, que suscitan dudas sobre el consentimiento prestado y dictó auto disponiendo denegar la autorización para contraer matrimonio civil.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando falta de motivación de la resolución, justificando el poco tiempo transcurrido desde su divorcio al nuevo expediente de matrimonio en el hecho de que había existido una separación de unos años previa al divorcio.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que propone su desestimación, ratificándose en su informe anterior y la encargada informa en el mismo sentido y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Posteriormente los interesados presentan nueva documentación para justificar la relación entre los mismos, entre ella pasaporte español del promotor, expedido en septiembre del año 2011 en el que su filiación coincide con la que consta en el registro civil español no así en el Documento Nacional de Identidad, expedido unos meses antes. Por último esta dirección general requiere de los interesados, a través del registro civil, la identidad de la persona que intervendrá como apoderado de la interesada y el documento de apoderamiento, sin que hasta la fecha se haya aportado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; y 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a, 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a y 12-3.^a de septiembre,

29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007; 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008 y 23-6.^a y 7.^a de abril y 12-2.^a de mayo de 2009.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cfr.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cfr.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cfr.* art. 386 LEC).

V. En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana de esta misma localidad, resultan del trámite de audiencia determinados hechos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución, así al ser preguntados como se conocieron manifiestan que son primos hermanos por lo que conocen sus datos personales y familiares fundamentales. No obstante la interesada manifiesta que desea contraer matrimonio civil por poderes pero que aún no ha otorgado el poder notarial y que es consciente de que su matrimonio carece de validez ante las autoridades marroquíes por lo que ante estas sería soltera a todos los efectos. El promotor no hace manifestación alguna sobre si el matrimonio lo será mediante apoderado. No existe constancia de comparecencia hasta el momento actual para presentar la documentación requerida por este centro directivo, entre la que se encontraba la que aclarase la discrepancia sobre la identidad completa del promotor entre el documento de identidad y el pasaporte españoles. No obstante lo anterior en los expedientes del registro civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el registro civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Manresa (Barcelona).

Resolución de 31 de marzo de 2017 (51.ª)

Autorización de matrimonio.–*Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial*

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

I

Doña S. M. H., mayor de edad, soltera, de nacionalidad española adquirida por opción en 2004 y Doña S. B., mayor de edad, divorciado, de nacionalidad marroquí, presentaron, ante el Registro Civil de Melilla solicitud para obtener autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación acreditativa de su pretensión: fotocopia del DNI de la interesada y pasaporte marroquí de él; certificación literal de nacimiento de la interesada y fe de vida y estado de la misma acreditativa de su soltería; extracto de la partida de nacimiento del interesado; fe de vida del mismo; acta de repudio de su anterior matrimonio; certificación de su residencia y volante de empadronamiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que no existe impedimento legal alguno para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal informa favorablemente a la autorización del matrimonio. Con fecha 16 de mayo de 2016 el juez encargado del registro civil deniega la autorización del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhiere al recurso presentado por los interesados. El juez encargado del registro civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil (CC); 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 16-1.^a de octubre, 3-1.^a de noviembre, 21-2.^a y 3.^a y 28-2.^a de diciembre de 2006; 6-3.^a y 14-3.^a de febrero, 30-4.^a de abril, 10-2.^a, 28-5.^a de mayo, 9-4.^a de julio y 28-6.^a de septiembre, 1-3.^a de octubre, 181.^a de diciembre de 2007; y 31-3.^a de enero de 2008.

II. Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil es trámite esencial la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido por el secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC e Instrucción de 9 de enero de 1995, regla 3.^a).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero –en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia del matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulten para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no

debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73.1.º CC)

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar un matrimonio entre un ciudadano marroquí y una ciudadana de nacionalidad española y los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las escuetas audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial, coincidiendo en cómo y cuándo se conocieron, datos sobre familiares, trabajo, circunstancias personales, etc. En este sentido las partes han coincidido en los detalles básicos de su relación tales como duración o cómo se conocieron, ambos conocen las respectivas profesiones del otro, las familias de uno y otro se conocen entre sí, saben detalles como si tienen carnet de conducir y coche sus respectivas parejas así como aficiones de uno y otro. Aunque es cierto que a la interesada ha confundido la fecha de nacimiento de su pareja, puesto que es el 10 de septiembre de 1983 y no octubre como por error se ha indicado en la audiencia, este hecho por sí solo junto a otras discrepancias de carácter menor, no son bastantes para asegurar sin género de duda que estamos ante un supuesto de matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial.

VI. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubi*», este centro directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (*cf.* art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso
2. Declarar que no hay obstáculo para que se autorice el matrimonio entre Doña S. M. H. y Don S. B.

Madrid, 31 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla

Resolución de 21 de abril de 2017 (44.ª)

Autorización de matrimonio.—*Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

Se deniega también por falta de capacidad natural para prestar consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el registro civil, Don D. L. T., mayor de edad, de nacionalidad malí, soltero y Doña S. L. Q., mayor de edad, soltera, de nacionalidad española, con discapacidad psíquica declarada del 65% revisable, solicitan autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación acreditativa de su pretensión: del interesado, copia del extracto de acta de nacimiento, certificado de célibe, volante de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; y de ella, fotocopia de su DNI, certificación literal de nacimiento y volante de empadronamiento emitido por el mismo ayuntamiento,

II

Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que le consta que para el matrimonio proyectado no existe prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 17 de junio de 2016 no autoriza la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso por considerar la resolución ajustada a Derecho, remitiéndose a las alegaciones a la fundamentación jurídica del auto recurrido, especialmente a su fundamento segundo. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 56, 73 y 74 del Código Civil (CC); 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.^a de diciembre de 2005; 31-3.^a de mayo, 27-3.^a y 4.^a de junio, 10-4.^a, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a y 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a, 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007, 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros

medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano malí en situación irregular en España según informe de la Policía de fecha 20 de agosto de 2015 y de las audiencias reservadas se deducen una serie de hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que aquí se pretende no persigue finalidades propias de esta institución. En primer lugar debe señalarse un desconocimiento recíproco profundo en cuestiones básicas, impropio de quienes mantienen una relación estable de convivencia y desean contraer matrimonio con un proyecto de vida en común. En este sentido, el interesado ha manifestado desconocer lo que estudió Sandra. Además dice que ésta tiene una pensión por haber sido militar cuando el hecho es que la tiene por su minusvalía psíquica. También debe señalarse que ella ha declarado haber empezado a estudiar auxiliar de farmacia y no ha hecho referencia a su supuesto trabajo como militar. El interesado sabe que su pareja tiene problemas médicos pero no sabe cuáles, siendo éstos numerosos y de índole importante tal y como se recogen en los informes médicos presentados, entre los que se encuentran patologías como esquizofrenia indiferenciada y trastorno depresivo recurrente. Por último manifiesta conocer a la madre de Sandra, algo que ha sido negado por el testigo en su comparecencia. Ella, por su parte, desconoce que existan dos órdenes de expulsión de su pareja y manifiesta que cree que ésta lo desconoce también, cuando el hecho es que él manifestó tal circunstancia de existir dichas órdenes en su declaración. Desconoce también cuándo llegó su pareja a España. También existen serias discrepancias en cuanto a cómo se conocieron, puesto que ella ha manifestado que a través de una amiga común, mientras que él, a través de un amigo común, un señor de 92 años al que él paseaba.

VI. En este presente caso, debe recordarse que la interesada sufre una discapacidad psíquica del 65%, y, solicitado el informe médico pertinente a los efectos del artículo 56 del código civil, éste ha concluido que «Tras valorar tanto a la informada, como sus antecedentes médicos, ésta presenta en la actualidad, desde el punto de vista médico una limitación de su capacidad para la prestación del consentimiento al matrimonio...» Por todo ello, existen hechos que llevan a la conclusión, en modo alguna arbitraria, de que el matrimonio que se pretende es nulo, por un lado, por falta de verdadero consentimiento matrimonial, y, de otro, por falta de capacidad para contraerlo. Así lo

entiende esta subdirección y el encargado del registro civil y el ministerio fiscal quienes, por su proximidad con los hechos, más acertadamente pueden asegurarse de los mismos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Vitoria-Gasteiz (Álava).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (9.ª)

Autorización de matrimonio.—*No procede la autorización porque, no habiendo comparecido los contrayentes para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.*

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

I

Doña M. C. C. M. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil con Don A. O., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaban como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y extracto de acta de nacimiento, acta de soltería y certificado de residencia del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio no incurre en prohibición legal alguna. Mediante cédula de citación de fecha 5 de abril de 2016, el encargado del registro civil requiere a los interesados a fin de que comparezcan en el Registro Civil de Melilla el 30 de agosto de 2016 para practicar la audiencia reservada a los mismos. Los interesados no comparecen.

III

Mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2016 el encargado del registro civil acuerda el archivo del expediente ya que los interesados no han comparecido en la fecha señalada para la práctica de la audiencia reservada.

IV

Notificados los interesados, la interesada interpone recurso alegando que por motivos personales no ha podido acudir a la entrevista ya que tiene un hijo minusválido y su padre estaba enfermo, aporta documentación al respecto.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa el mantenimiento del acuerdo recurrido ya que aunque la interesada alega que no ha podido asistir por motivos personales, el interesado no ha alegado ninguna causa que le impidiese su presentación ese día, entendiéndose por tanto, que uno de los promotores deja de tener interés en la prosecución del presente expediente. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 23, 26, 29, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a de junio de 2001, 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002, 13-3.^a de octubre de 2003, 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005, 7-1.^a de febrero y 13-1.^a de noviembre de 2006, 30-2.^a de enero de 2007, 24-3.^a de abril de 2008 y 3-8.^a de octubre de 2011.

II. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada

contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la ley y 85 de su reglamento.

III. En el presente caso los promotores solicitan la autorización para contraer matrimonio civil. Los interesados son citados mediante cédula de citación de fecha 5 de abril de 2016 a fin de que comparezcan en el registro civil el 30 de agosto de 2016 para la práctica de la preceptiva audiencia reservada. Los interesados no comparecen por lo que el encargado mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2016 acuerda el archivo del expediente porque al no haber comparecido los promotores no se ha podido cumplimentar la audiencia reservada. Este auto es el objeto del recurso.

IV. En el recurso la interesada alega que por motivos personales, de los que aporta documentación, no ha podido comparecer para dicha audiencia, sin embargo, como bien dice el ministerio fiscal, el promotor no alega ninguna causa que le impidiera comparecer en el registro civil en la fecha señalada. La audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido los promotores, queda imposibilita la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su celebración.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (1.ª)

Autorización de matrimonio.—1. *La competencia del registro civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del Reglamento del Registro Civil), por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.*

2. *Sin esperar a que el auto por el que se autoriza el matrimonio, recurrido en tiempo y forma por el ministerio fiscal, adquiera firmeza, la encargada ha dado traslado de los datos a la autoridad municipal ante la que se ha celebrado el matrimonio, circunstancia que si bien no afecta a la validez del matrimonio supone una irregularidad.*

3. *Examinada la cuestión de fondo, de las declaraciones de los interesados ante la encargada en el trámite de audiencia reservada resultan datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto de la encargada del Registro Civil de Villamiel de Toledo (Toledo).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Villamiel de Toledo (Toledo) el día 15 de septiembre de 2016, Don C.-A. M. S., nacido en M. el 31 de marzo de 1987 y de nacionalidad española, iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil con S. S. M., nacida en S. D. (República Dominicana) el 28 de mayo de 1988 y de nacionalidad dominicana, haciendo constar que se proponen realizar dicho enlace en el propio registro civil. Acompañaba la siguiente documentación: del promotor, declaración jurada de estado civil, soltero, en ella hace constar que su domicilio es T., documento nacional de identidad, en el que consta su domicilio en A. (Madrid), certificado literal de nacimiento, en cuya solicitud electrónica de expedición hace constar su domicilio en M., certificado de empadronamiento en A. desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 27 de junio de 2016, fecha de baja con destino a V. T. y certificado de empadronamiento colectivo en esta última localidad, en el domicilio de un familiar y como documentación de la interesada; declaración jurada de estado civil, soltera, presentando acta notarial dominicana extendida el 26 de julio de 2016, que recoge el testimonio de 3 personas que dicen conocer a la Sra. S., le atribuyen un domicilio en República Dominicana y declaran su soltería y que no tiene hijos, certificado de empadronamiento individual en M. desde el 16 de marzo de 2016, certificado de nacimiento en extracto, tarjeta de autorización de estancia en España como estudiante, válida hasta el 31 de enero de 2017, inscripción consular de la interesada, inscrita en el año 2016, sin especificar fecha, certificado consular relativo a la capacidad matrimonial y demás disposiciones legales de la República Dominicanas para contraer matrimonio, certificado consular de estado civil de la interesada y de su domicilio en S. D. hasta el 23 de septiembre de 2015, declarando su llegada a España al día siguiente y pasaporte dominicano, expedido en el año 2011 y con validez hasta diciembre de 2017.

II

Con fecha 19 de septiembre de 2017 comparecen los interesados y se ratifican en la solicitud, se otorgan mutuamente poder de representación en relación al expediente que se está tramitando, la encargada dicta providencia ordenando la publicación de edictos y acuerda también por providencia la realización de las entrevistas por separado a los promotores.

III

Con la misma fecha fueron oídos los testigos presentados, uno de ellos la madre del promotor, se llevaron a cabo las audiencias reservadas y, con fecha 10 de octubre de 2016, se da por finalizado el plazo de publicación de edictos. El ministerio fiscal emite informe oponiéndose a la autorización solicitada habida cuenta las contradicciones apreciadas en las declaraciones de los interesados, fundamentalmente sobre la fecha en que se conocieron, en la que iniciaron su relación y decidieron celebrar el matrimonio, así como el lugar en que sucedió, teniendo en cuenta además la fecha de llegada a España de la Sra. S. Posteriormente con fecha 10 de noviembre de 2016 el ministerio fiscal se ratifica en su oposición a la autorización del matrimonio.

IV

Con fecha 21 de noviembre de 2016 la encargada del registro civil dicta auto autorizando la celebración del matrimonio, considerando que se ha acreditado la capacidad de los contrayentes, la inexistencia de impedimentos legales y que en las audiencias no se ha apreciado en la actitud de los interesados la posible existencia de un consentimiento simulado, pese a reconocer la existencia de incongruencia en las respuestas relativas al tiempo que hace que los interesados se conocen, no obstante las atribuye a los nervios de los mismos en la entrevista y entiende justificada la relación de los futuros cónyuges por la documentación aportada. En el auto no se hace constar el recurso que cabe contra el mismo ni el plazo para interponerlo.

V

Notificada la resolución, aunque no consta acreditada la recepción de la misma a los interesados y al ministerio fiscal, éste con fecha 29 de noviembre de 2016, formula recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, haciendo constar que la notificación de la resolución es defectuosa al no mencionar el recurso pertinente para su impugnación y, respecto al fondo del asunto se ratifica en los argumentos ya puestos de manifiesto en sus informes previos.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado a los interesados que, con fecha 9 de febrero de 2017, presentan escrito manifestando que iniciaron los trámites para su matrimonio civil el 24 de septiembre de 2016, que no se trata de un matrimonio simulado, que son pareja desde octubre del año 2015, que residían juntos desde el mes de septiembre de 2016,

que han comprado una vivienda en enero de 2017, fuera de la localidad del matrimonio y que han contraído matrimonio religioso en La República Dominicana.

Aportan la siguiente documentación; pasaporte de la Sra. S. con visado para viajar a España entre el 20 de septiembre de 2015 y el 1 de abril de 2016 para una estancia máxima de 180 días, contrato de arrendamiento de domicilio en la C/N. B. (Madrid), documento de inscripción en un centro de estudios de diseño de mobiliario para un curso que concluye el 31 de diciembre de 2016, prórroga de su autorización de estancia por estudios hasta el 31 de enero de 2017 y con fecha 15 de marzo de 2016, contrato de alquiler para su domicilio de la C/C., numerosos correos electrónicos conteniendo documentos de viaje y billetes de avión, algunos de ellos a nombre de sólo uno de los interesados y otros conjuntos, el primero de ellos de 21 de octubre de 2015 y los siguientes prácticamente cada mes y dos viajes a Santo Domingo, el primero del interesado entre el 26 de diciembre de 2015 y 7 de enero de 2016 y el siguiente en agosto de este mismo año, contrato de préstamo hipotecario de ambos suscrito el 27 de octubre de 2016 sobre una vivienda sita en Pozuelo de Alarcón que adquieren por compraventa según escritura de la misma fecha, en ambos documentos consta como domicilio de los interesados la nueva vivienda no los domicilios en que están empadronados, tanto este domicilio de la localidad de P. A. como el anterior de la Sra. S., C/C., constan como domicilio social y de contacto de una empresa relacionada con el interesado y cuya referencia aparece en alguno de los correos electrónicos presentados.

Posteriormente la encargada dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

VII

Consta entre la documentación que con la misma fecha del auto, 21 de noviembre de 2016, la encargada del Registro Civil de Villamiel de Toledo da traslado de los datos para la celebración del matrimonio en el Ayuntamiento de dicha localidad y se dicta al día siguiente un decreto de la Alcaldía delegando la facultad de celebrar la boda civil en una Concejal de dicho Ayuntamiento, que es familiar directo del promotor y en cuyo domicilio en la localidad de V. éste estaba empadronado.

VIII

Con fecha 26 de noviembre se celebra el matrimonio del que se levanta la correspondiente acta, que consta en el expediente, siendo inscrito el matrimonio en el Registro Civil de Villamiel de Toledo con fecha 28 del mismo mes. Consta igualmente por la documentación aportada por los interesados que éstos contrajeron posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2016, matrimonio religioso en la República Dominicana, manifestando que su estado civil era el de solteros, en el acta de ese matrimonio constan como domicilio de los contrayentes, A. y República Dominicana y es remitida al registro civil dominicano, haciendo constar en observaciones la existencia del matrimonio civil en España.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; y 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a, 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a y 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007; 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008 y 23-6.^a y 7.^a de abril y 12-2.^a de mayo de 2009, 12-31.^a de septiembre de 2013 y 21-84.^a de abril de 2014.

II. Pretenden los solicitantes, de nacionalidad española y dominicana, obtener autorización para contraer matrimonio en el Registro Civil de Villamiel de Toledo, para lo cual presentan, entre otra documentación, volante de empadronamiento del promotor, Sr. M. S., en dicha localidad realizado tres meses antes de la solicitud. De acuerdo con el artículo 238 del Reglamento del Registro Civil, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del registro civil correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. En este sentido, hay que señalar que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del registro civil en general y por el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. En consecuencia, corresponde al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y de las circunstancias acreditadas, como, por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (*cf.* art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple

declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (*cf.* arts. 48 y 58 LEC) y, en su caso declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral, en el caso presente el registro civil no cuestionó la residencia efectiva del promotor aunque por el relato de los hechos que consta en esta resolución, en la que el domicilio en V. T. sólo consta en el documento de empadronamiento, se deberían haber realizado las diligencias necesarias para comprobar la residencia efectiva del Sr. M. en dicha localidad y como consecuencia la competencia del propio registro.

III. En relación con el procedimiento seguido, debe significarse que el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, relativo a los recursos, establece que la notificación de las resoluciones expresará si son definitivas o el recurso que proceda, órgano ante quien haya de interponerse y plazo para entablarlo, añadiendo que *la notificación defectuosa será eficaz respecto de la parte que consienta expresamente la resolución o interponga el recurso pertinente*, en el caso presente dichas notificaciones no constan pero sí el auto que puso fin al procedimiento y éste incumple lo establecido en la norma citada, por tanto debe considerarse como fecha de notificación la del 29 de septiembre de 2016 en la que el representante del ministerio fiscal interpone el correspondiente recurso de apelación ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado, en dicho momento, y pese a que la resolución no era firme (art. 249 del RRC), se había dado traslado de los datos al Ayuntamiento de V. T. y el matrimonio ya había sido celebrado por la autoridad municipal correspondiente, concretamente un familiar consanguíneo del promotor, por delegación del Alcalde e inscrito posteriormente por el registro civil.

IV. Una vez examinadas las cuestiones anteriores, y en relación con la autorización de matrimonio solicitada debe significarse que en el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matri-

monio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

VI. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

VII. En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana, resultan del trámite de audiencia, pese a no ser demasiado amplia, determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. Ambos declaran que la nacionalidad de la Sra. S. al tiempo de contraer matrimonio es española y dominicana, dato incierto, el interesado no contesta respecto a si ha contraído matrimonio anterior, discrepan respecto al tiempo que hace que se conocieron, según la interesada fue 2 años antes, es decir en septiembre de 2014 y según el Sr. M. fue 1 año y medio antes, es decir en abril del año 2015, en ambos casos faltan a la realidad ya que la interesada no tenía visado para entrar en España hasta el 20 de septiembre de 2015 viajando el día 24 siguiente, según declaró en el Consulado de su país al inscribirse en el mismo.

Según la interesada iniciaron su relación sentimental en el mes de mayo, aunque no menciona año, pero debe corresponder al 2016 y el promotor declara que fue en la fecha en que se conocieron, que tampoco concreta, y que decidieron casarse en mayo de 2016, es decir recién iniciada su relación sentimental según la Sra. S., ésta por su parte dice que decidieron casarse en verano. Respecto a su posible convivencia el promotor declara que viven juntos cuando pueden y su pareja declara que han convivido durante un año, no constando que hayan tenido un domicilio común antes del matrimonio.

En relación con otros datos puestos de manifiesto en las audiencias reservadas, el promotor declara que viajan juntos a República Dominicana mientras que su pareja menciona genéricamente que viajan y ninguno concreta la duración de los viajes, el promotor manifiesta que una vez casados van a vivir en España y la interesada concreta que en M., y ésta como cónyuge extranjero declara que sí ha pensado que la inscripción del matrimonio le permite adquirir la nacionalidad española con menor tiempo de residencia, aunque advierte que no es ese su propósito. de estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio proyectado no tenía como fin el propio de la institución y que no existía verdadero consentimiento matrimonial por lo que no debió ser autorizado, tal y como puso de manifiesto el ministerio fiscal cuyo recurso procede estimar.

VIII. Habida cuenta que el matrimonio ya fue celebrado e inscrito en el registro civil su validez no se vería afectada por las circunstancias de competencia y procedimentales recogidas en los fundamentos II y III de esta resolución, en el caso de la competencia del autorizante siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquél ejerciera sus funciones públicamente (art. 53 del Código Civil), sin embargo la inexistencia de verdadero consentimiento determina la nulidad del matrimonio, así el artículo 45 del Código Civil establece que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial y el 73 del mismo texto legal declara que es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial y, habida cuenta que la inscripción ya practicada sólo puede ser rectificadora por sentencia firme recaída en juicio ordinario, artículo 92 de la Ley del Registro Civil, sin que se pueda aplicar ninguna de las excepciones previstas en los artículos 93 a 95 de la misma ley, deberá procederse a pedir la nulidad del matrimonio mediante la acción prevista en el artículo 74 del CC., para lo cual está legitimado, entre otros, el ministerio fiscal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal puesto que no procedía autorizar el matrimonio entre el Sr. M. S. y la Sra. S. M. por falta de verdadero consentimiento matrimonial.

2.º Solicitar del representante del ministerio fiscal que inste, en su caso, la acción de nulidad del matrimonio prevista en el artículo 74 del Código Civil.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Villamil de Toledo (Toledo).

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (13.^a)

Autorización de matrimonio.—*Se retrotraen las actuaciones para que se practique las audiencias reservadas por separado a los interesados.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ginzo de Limia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el registro civil, Don M. S. C. nacido en España y de nacionalidad española y Doña E.-C. d. S. S. nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña solicitaban autorización para contraer matrimonio civil en España. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento del interesado, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, el ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 17 de abril de 2017 no autoriza la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el recurso interpuesto, emitiendo un informe desfavorable. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3.^a de enero de 2002, 17-3.^a de mayo de 2004, 29-1.^a de enero de 2007, 2-6.^a de abril y 5-13.^a de noviembre de 2008 y 27-1.^a de enero de 2009.

II. En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe

efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. Como viene reiteradamente insistiendo esta dirección general a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73.1.º CC).

IV. En este caso en el expediente no constan las entrevistas en audiencia reservada a los interesados, por lo que no se puede comparar preguntas y respuestas. Debe constar una entrevista para cada promotor con las mismas preguntas para poder comparar las respuestas dadas, y además las entrevistas deben ser amplias y detalladas.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones para que sean oídos por separado en audiencia reservada a los interesados y, a la vista de dichas actuaciones, se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Xinzo de Limia (Orense).

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (2.^a)

Autorización de matrimonio.—*Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Cerdanyola del Vallés.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el registro civil, Don A.A.S. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, y Doña M. D. V. T., nacida en España y de nacionalidad española, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y certificación en extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 14 de agosto de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, el 22 de octubre de 2015 los interesados comparecen en el registro civil y manifiestan que no desean recurrir la resolución dictada. Posteriormente dos meses después vuelven a solicitar la autorización para contraer matrimonio. Mediante providencia de fecha 2 de febrero de 2016 el encargado del registro civil da traslado al ministerio fiscal de toda la documentación a fin de proceder al archivo del expediente. El ministerio fiscal no se opone al archivo del expediente. Mediante providencia de fecha 17 de junio de 2016 el encargado del registro civil ordena el archivo del expediente.

IV

Notificados los interesados éstos interponen recurso volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

V

Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto, y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de

los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.^a de diciembre de 2005; 31-3.^a de mayo, 27-3.^a y 4.^a de junio, 10-4.^a, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a y 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a, 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007, 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado no contesta a la mayor parte de las preguntas porque no las entiende a pesar de declarar que se comunican en español. El interesado dice que entró en España con visado desde Bélgica en el año 2010. Se conocieron en 2014 a través de una emisora de radio, el interesado no puede decir cuando iniciaron la relación como pareja, ella dice que fue en

septiembre de 2014 cuando se fueron a vivir juntos (según ella se conocieron en marzo de 2014). Ella dice que la casa donde viven tiene tres habitaciones sin embargo él dice que cuatro. No coinciden en gustos, aficiones, programas de televisión que les gusta, regalos que se han hecho, etc. El interesado dice que ella trabaja de limpiadora en un colegio, dice que tiene tarjeta de servicios sociales y bajan cada 15 días por comida, sin embargo ella dice que es monitora de patios en un colegio, trabaja todos los meses de verano, tiene 630 euros cuando trabaja en verano y 127 cuando va solo los fines de semana, el padre de sus hijos le da 300 euros de manutención y tiene un subsidio de 227 euros. El interesado dice que no trabaja a veces coge chatarra y le dan entre 60 y 80 euros, sin embargo ella dice que trabaja con un amigo buscando chatarra y le dan entre 200 y 300 euros. Ella desconoce cómo entró el interesado en España, declara que el interesado trabajaba en su país haciendo ventanas y de lampista, montando muebles, etc, sin embargo él declara que en su país no trabajaba. Ella declara que no van a tener hijos porque ella está operada, situación que él desconoce declarando que le gustaría tener hijos con ella. El interesado dice que se casa porque es mayor y se puso de acuerdo con ella para casarse, ella declara que decidieron casarse en Navidad de 2014 y la idea fue de ella. Por otro lado las manifestaciones de los testigos no coinciden así uno de ellos dice que se conocieron en 2011 en S. C. G. desconociendo el lugar concreto, desconociendo cualquier detalle de la relación, y el otro dice que se conocieron en 2014, uno dice que ella presta servicios de limpieza en un colegio y el otro dice que trabaja en una tienda. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución de 24 de enero de 2017 (4.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución de 24 de enero de 2017 (16.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución de 24 de enero de 2017 (18.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución de 24 de enero de 2017 (20.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (16.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (18.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (21.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (22.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (23.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (55.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (56.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (1.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (4.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de marzo de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (52.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (53.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 6 de abril de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (1.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (8.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (10.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 7 de abril de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 21 de abril de 2017 (32.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 21 de abril de 2017 (33.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 21 de abril de 2017 (34.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 21 de abril de 2017 (45.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de abril de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución de 24 de abril de 2017 (4.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución 2 de junio de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 2 de junio de 2017 (19.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (5.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (8.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 9 de junio de 2017 (26.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (48.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (50.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (51.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (52.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (53.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (54.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (56.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (58.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (59.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 16 de junio de 2017 (60.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (1.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (5.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 23 de junio de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (35.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (38.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (39.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (40.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (41.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (44.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 30 de junio de 2017 (45.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (17.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (41.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (42.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (44.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 7 de julio de 2017 (46.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 28 de julio de 2017 (4.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 28 de julio de 2017 (5.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 28 de julio de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 28 de julio de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 28 de julio de 2017 (8.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 1 de septiembre de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.

Resolución 29 de septiembre de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (5.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 29 de septiembre de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (8.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (10.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 6 de octubre de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (14.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (18.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (19.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (20.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (22.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (23.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 13 de octubre de 2017 (24.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (1.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (2.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (4.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (10.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 20 de octubre de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (3.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (6.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (7.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (10.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (11.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (15.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 27 de octubre de 2017 (16.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 3 de noviembre de 2017 (5.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 3 de noviembre de 2017 (9.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 3 de noviembre de 2017 (12.^a). Autorización de matrimonio.
Resolución 3 de noviembre de 2017 (13.^a). Autorización de matrimonio.

4.2.2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD MATRIMONIAL

Resolución de 17 de febrero de 2017 (10.^a)

Expedición de certificado de capacidad matrimonial.—*Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesado contra auto del juez encargado del Registro Civil Consular de Tánger.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don J. B-K. I. E-F. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña N. F. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y copia literal de acta de nacimiento, certificación de soltería y certificación de residencia de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular dictó auto en fecha 12 de abril de 2016 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2.^a de septiembre de 2004; 3-3.^a de marzo, 26-4.^a de octubre, 3-5.^a de noviembre de 2005; 26-5.^a de mayo, 13-4.^a y 26-4.^a de junio, 18-2.^a y 3.^a y 25-2.^a de diciembre de 2006; 26-4.^a de enero, 9-5.^a de febrero, 30-3.^a de abril, 10-6.^a y 29-4.^a de mayo y 22-6.^a de junio de 2007; 24-3.^a de enero, 25-6.^a de abril, 17-4.^a y 7.^a de julio y 1-4.^a y 5.^a de septiembre de 2008; 6-5.^a de febrero, 31-6.^a de marzo, 8-1.^a de mayo y 2-6.^a de junio de 2009.

II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (*cf.* art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (*cf.* Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.^a), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en la Marruecos, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio con un ciudadano español en el año 2007 y se divorció del mismo en el año 2011. La interesada es menor de edad y declara que no le importa la diferencia de edad que hay entre ellos, declara que su tío lleva hablándole de la persona del interesado desde que ella tenía doce años de edad porque es amigo de él, sabe que estuvo casado en España pero desconoce los detalles de la anterior pareja del interesado y los motivos de su divorcio(el interesado estuvo casado en España con una persona de su mismo sexo), declara que su padre aún no ha tramitado los permisos correspondientes a la celebración del enlace atendiendo a su minoría de edad (el interesado declara que el padre de ella sí ha gestionado los permisos para que ella se pueda casar dada su minoría de edad), desconoce todo lo relacionado con la vida del interesado, desconoce su nivel de estudios, salario, etc. El interesado declara que ella desconoce que él estuvo casado con una persona de su mismo sexo y sus futuros suegros tampoco lo saben, aunque el padre de ella es su amigo. Declara que lleva viviendo cuatro años en T. y que no puede ofrecer detalles de su vida anterior por seguridad personal, y que son detalles que no conoce ni su propia familia. Declara que prefiere que su pareja sea joven para ir «moldeándola», declara que ella trabajará en una tienda de ropa y cosmética, proyecto que comparte con ella (ella lo desconoce ya que declara que se dedicará a la casa y cuidar de la familia). Por otro lado el interesado es 24 años mayor que ella.

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el ministerio fiscal y el juez encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediatez, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Tánger (Marruecos).

Resolución de 6 de abril de 2017 (1.ª)

Expedición de certificado de capacidad matrimonial.—*Se estima porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En el expediente sobre solicitud de expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Linares.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Linares, Don J-M. O. R., nacido en Ú. y de nacionalidad española, solicitaba la expedición de certificado de capacidad matrimonial para celebrar en el extranjero matrimonio con Doña C. B. nacida en K. (Marruecos) y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: documentos de identidad y pasaporte de los interesados, certificación literal de nacimiento, certificado de empadronamiento del interesado, certificados de empadronamiento, de soltería y acta literal de nacimiento de la interesada, traducidos y legalizados

II

Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal emite informe oponiéndose a la expedición del certificado matrimonial. El encargado del registro civil, mediante auto de fecha 9 de mayo de 2016 deniega la expedición del certificado.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste emite informe interesando la estimación del recurso, y por tanto la expedición del certificado. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil (CC); 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 238, 245, 246, 247, 252 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.^a de diciembre de 2005; 31-3.^a de mayo, 27-3.^a y 4.^a de junio, 10-4.^a, 13-1.^a y 20-3.^a de julio, 1-4.^a, 7-3.^a y 9-2.^a de septiembre, 9-1.^a, 3.^a y 5.^a de octubre, 14-2.^a, 5.^a y 6.^a de noviembre y 13-4.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 25-1.^a, 3.^a y 4.^a de enero, 2-1.^a, 22-2.^a, 27-3.^a y 28-4.^a de febrero, 30-5.^a de abril, 28-6.^a y 30-4.^a de mayo, 11-3.^a y 4.^a, 12-3.^a de septiembre, 29-4.^a y 6.^a de noviembre, 14-1.^a y 4.^a y 26-5.^a de diciembre de 2007, 24-4.^a de abril y 19-2.^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de expedición de certificado de capacidad matrimonial, para contraer matrimonio en el extranjero entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí. Dicho certificado se exige por el artículo 252 del Reglamento del Registro Civil, para el caso en que los contrayentes manifiesten su propósito de contraer matrimonio en el extranjero, y se expide previa tramitación de expediente matrimonial, destinado a comprobar los requisitos de capacidad de los contrayentes e inexistencia de impedimentos que puedan afectar al matrimonio proyectado. Los hechos comprobados por medio de las declaraciones complementarias oportunas no son lo suficien-

temente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente.

VI. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (*cf.* art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y autorizar la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

Madrid, 6 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Linares (Jaén).

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (30.ª)

Expedición de certificado de capacidad matrimonial.—*Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil de Sagunto.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el registro civil, Don S.-E. J. S. nacido en España y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2001, solicitaba la expedición del cer-

tificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña R. O. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia de la interesada.

II

Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la expedición del certificado de capacidad matrimonial. El encargado del registro civil dictó auto en fecha 16 de marzo de 2017 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

IV

Notificado el ministerio fiscal, el encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2.^a de septiembre de 2004; 3-3.^a de marzo, 26-4.^a de octubre, 3-5.^a de noviembre de 2005; 26-5.^a de mayo, 13-4.^a y 26-4.^a de junio, 18-2.^a y 3.^a y 25-2.^a de diciembre de 2006; 26-4.^a de enero, 9-5.^a de febrero, 30-3.^a de abril, 10-6.^a y 29-4.^a de mayo y 22-6.^a de junio de 2007; 24-3.^a de enero, 25-6.^a de

abril, 17-4.^a y 7.^a de julio y 1-4.^a y 5.^a de septiembre de 2008; 6-5.^a de febrero, 31-6.^a de marzo, 8-1.^a de mayo y 2-6.^a de junio de 2009.

II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (*cf.* art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (*cf.* Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.^a), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Según el informe forense que obra en el expediente, el interesado presenta una capacidad mermada que le impide conocer el sentido y significado, así como la extensión, responsabilidad y consecuencias de otorgar el consentimiento matrimonial. Por otro lado el matrimonio parece concertado ya que fue el primo de ella, amigo de él que se lo presentó, en noviembre de 2015 fue a pedirla a casa de los padres de ella, no se volvieron a ver. Desconoce el lugar de nacimiento de él, su dirección, dice que se comunican una vez al mes, declara que él no está siguiendo tratamiento alguno, no sabe el nivel de estudios de él, ni sus gustos, comidas favoritas, aficiones, etc. Por su parte el interesado desconoce el número y nombres de los hermanos de ella, desconoce el lugar y la fecha de nacimiento, etc.

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el ministerio fiscal y el encargado del registro civil hayan

deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sagunto (Valencia).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (74.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (43.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (17.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (19.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (20.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (13.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (36.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (9.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (3.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (15.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (9.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (4.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (2.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (6.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (8.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución 30 de junio de 2017 (36.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 30 de junio de 2017 (46.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 7 de julio de 2017 (15.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 7 de julio de 2017 (16.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (2.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (5.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (10.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (48.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (77.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (80.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (84.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (122.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (23.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (26.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (27.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (10.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (14.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (7.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (29.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (11.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (13.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (16.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (5.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (14.^a). Expedición de certificado de capacidad matrimonial.

4.3 Impedimento de ligamen

4.3.1 IMPEDIMENTO DE LIGAMEN EN EXPEDIENTE PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 21 de abril de 2017 (36.ª)

Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio.—*Se deniega la autorización para la celebración en España de un matrimonio civil entre un español, de origen marroquí y una marroquí que ya se encuentran vinculados entre sí por un matrimonio islámico anterior celebrado en Marruecos que genera impedimento de ligamen.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ceuta Don A. A. M., nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1989 iniciaba expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil con Doña A. Z., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaban la siguiente documentación: acta de matrimonio, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y copia literal de acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio revocable, acta de divorcio irrevocable y certificado de residencia de la interesada.

II

Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 22 de marzo de 2016 deniega la autorización del matrimonio, por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que se adhiere al recurso interpuesto. El encargado ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 46, 49, 56, 60, 61, 63, 65, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 238, 245, 246, 247, 258 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 13 de septiembre de 1997, 12-4.^a de septiembre de 2002, 15-1.^a de abril y 20-4.^a de octubre de 2004; 20-2.^a de septiembre de 2005, 29-3.^a de septiembre y 27-1.^a de octubre de 2006, 4-1.^a de junio de 2007 y 21-1.^a de enero de 2009.

II. No pueden contraer matrimonio los que estén ligados por vínculo matrimonial (*cf.* art. 46.2.º CC). Precisamente la función propia del expediente previo regulado en los artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil es prevenir la celebración de matrimonios nulos mediante la verificación de que concurren todos los requisitos legales (*cf.* art. 65 CC), entre los que se encuentra la ausencia de impedimento personal de ligamen.

III. Los interesados, él español, de origen marroquí y ella marroquí presentan una solicitud para la celebración de un matrimonio civil en España, sin embargo los interesados como ellos mismos declaran en las audiencias están ya casados por el rito islámico en Marruecos (se casaron en 2003), aportan además el acta de matrimonio correspondiente, por lo cual al estar ya casados este matrimonio genera impedimento de ligamen.

IV. Por otro lado cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebra-

ción y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (*cf.* art. 252 RRC), el expediente previo a la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (*cf.* instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.^a), siendo pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

V. En este caso en el matrimonio celebrado con la señora A. Z., el interesado, español desde 1989, debería de haber solicitado un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (39.^a)

Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio.— *Se deniega la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración en Marruecos de un matrimonio entre un español, de origen marroquí y una marroquí que ya se encuentran vinculados entre sí por un matrimonio islámico anterior celebrado en Marruecos que genera impedimento de ligamen.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil de El Ejido.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de El Ejido Don M. M. M. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008 iniciaba expediente en solicitud de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Doña N. H., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaban la siguiente documentación: copia de acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de divorcio del interesado y acta de nacimiento de la interesada.

II

El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio ya que los interesados contrajeron matrimonio en Marruecos el 30 de marzo de 2011 y no consta que se hayan divorciado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2015 deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la desestimación del recurso interpuesto. El encargado ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 46, 49, 56, 60, 61, 63, 65, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 238, 245, 246, 247, 258 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 13 de septiembre de 1997, 12-4.^a de septiembre de 2002, 15-1.^a de abril y 20-4.^a de octubre de 2004; 20-2.^a de septiembre de 2005, 29-3.^a de septiembre y 27-1.^a de octubre de 2006, 4-1.^a de junio de 2007 y 21-1.^a de enero de 2009.

II. No pueden contraer matrimonio los que estén ligados por vínculo matrimonial (*cf.* art. 46.2.º CC). Precisamente la función propia del expediente previo regulado en los artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil es prevenir la celebración de matrimonios nulos mediante la verificación de que concurren todos los requisitos legales (*cf.* art. 65 CC), entre los que se encuentra la ausencia de impedimento personal de ligamen.

III. El interesado, de nacionalidad española desde el año 2008, presenta una solicitud de expedición de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos, sin embargo los interesados están ya casados por el rito islámico en Marruecos (se casaron el 30 de marzo de 2011), aportan el acta de matrimonio correspondiente, por lo cual al estar ya casados este matrimonio genera impedimento de ligamen.

IV. Por otro lado cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (*cf*:art.252 RRC), el expediente previo a la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (*cf*: Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.^a), siendo pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf*: art.246 RRC).

V. Los interesados además habían solicitado la inscripción de su matrimonio ante el Registro Civil Central, que se lo denegó mediante acuerdo de fecha 14 de abril de 2014, ya que el interesado, español desde el año 2008, no solicitó el certificado de capacidad matrimonial que se requiere en estos casos, el acuerdo fue recurrido por el interesado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que desestimó el recurso y ratificó el acuerdo apelado mediante resolución de fecha 12 de febrero de 2016. Ahora el interesado solicita la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos, matrimonio que ya ha sido contraído y del que no consta divorcio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de El Ejido (Almería).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (1.^a). Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (11.^a). Impedimento de ligamen en expediente previo a la celebración del matrimonio.

4.3.2 IMPEDIMENTO DE LIGAMEN EN INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 17 de febrero de 2017 (70.^a)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.—*Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsistía el anterior matrimonio del interesado.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don I. D. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 19 de marzo de 2010 con Doña N. E. M. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio, extracto de la partida de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento y sentencia de divorcio de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 26 de febrero de 2016 deniega la inscripción del matrimonio ya que en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Doña M-J. C. P. de la que se divorció mediante sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia núm. 66 de Madrid el 24 de enero de 2011.

III

Notificada la resolución, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es plenamente ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 19-3.^a de abril, 14-4.^a de mayo y 5-2.^a y 31-8.^a de octubre de 2001 y 1-2.^a y 19-1.^a de febrero, 15-1.^a de junio y 4 de julio de 2002; 20-3.^a y 24-3.^a de octubre de 2005; 27-1.^a de octubre de 2006 y 4-3.^a de 6 de junio de 2007 y 8-2.^a de enero de 2009.

II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.^o del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...». Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV. El matrimonio celebrado en Marruecos el 19 de marzo de 2010, entre un ciudadano marroquí, y una ciudadana marroquí, que obtuvo la nacionalidad española en el año 2015 es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con Doña M-J. C. P. de la que se divorció mediante sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia núm. 66 de Madrid el 24 de enero de 2011. El estado civil de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el registro civil español no puede practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso el español, está casado cuando se celebra el acto.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (7.ª)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.—*No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que adquirió posteriormente la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don D. M. D. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 5 de mayo de 1988 con Doña S. M. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificación literal de acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificación de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 6 de noviembre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que aportan y el libro de familia, el interesado opta por la poligamia, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2.^a de mayo de 2001, 23-3.^a de noviembre y 4-7.^a de diciembre de 2002; 10-3.^a de septiembre de 2003; 15-1.^a de enero, 15-1.^a de abril y 22-1.^a de octubre de 2004 y 19-3.^a de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2013, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 5 de mayo de 1988, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (*cf.* art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio y en el libro de familia senegalés el interesado opta por la poligamia.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (*cf.* art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial. Por otro lado el certificado que aporta no es válido según el artículo 257 del RRC ya que consta que los interesados comparecen en el ayuntamiento de T., el 29 de abril de 2006, y declaran que se han casado en T. el 5 de mayo de 1988, con constando hora ni autoridad que los casó ni testigos. Con el recurso los interesados presentan un documento en el que el interesado renuncia a la poligamia y elige la monogamia, presentan otro certificado literal de matrimonio donde consta que los interesados comparecen el 29 de diciembre de 2006 y el interesado opta por la monogamia. Dicho certificado tampoco se puede considerar como válido.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de abril de 2017 (4.ª)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.—*No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Mali, por un maliense que adquirió posteriormente la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don F. T. S. nacido en Mali y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2002, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Mali el 24 de diciembre de 1987 con Doña M. K. S. nacida en Mali y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2002. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio donde el interesado opta por la poligamia, certificado de nacimiento del interesado y certificación de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 26 de febrero de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que aportan el interesado opta por la poligamia, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2.^a de mayo de 2001, 23-3.^a de noviembre y 4-7.^a de diciembre de 2002; 10-3.^a de septiembre de 2003; 15-1.^a de enero, 15-1.^a de abril y 22-1.^a de octubre de 2004 y 19-3.^a de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, los promotores, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2002, solicitan que se inscriba en el registro civil español su matrimonio que se celebró en Mali el 24 de diciembre de 1987, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar los interesados domiciliados en España (*cf.* art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento maliense, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (*cf.* art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el Registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contra-

yentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 23 de junio de 2017 (14.^a)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.–*Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsistía el anterior matrimonio del interesado.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don H. B. B. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 9 de febrero de 1979 con Doña K. H. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio, certificado de nacimiento, acta de matrimonio y acta de divorcio del interesado y acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de divorcio de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 26 de mayo de 2016 deniega la inscripción del matrimonio ya que en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Z. B. H. de la que se divorció mediante sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia de Nador, Marruecos el 8 de febrero de 1981.

III

Notificada la resolución, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 19-3.^a de abril, 14-4.^a de mayo y 5-2.^a y 31-8.^a de octubre de 2001 y 1-2.^a y 19-1.^a de febrero, 15-1.^a de junio y 4 de julio de 2002; 20-3.^a y 24-3.^a de octubre de 2005; 27-1.^a de octubre de 2006 y 4-3.^a de 6 de junio de 2007 y 8-2.^a de enero de 2009.

II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...». Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV. El matrimonio celebrado en Marruecos el 9 de febrero de 1979, entre un ciudadano marroquí, que obtuvo la nacionalidad española en el año 2013 y una ciudadana marroquí, es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con Z. B. H. I. de la que se divorció mediante sentencia firme del Juzgado de Primera Ins-

tancia de Nador, Marruecos, el 8 de febrero de 1981. El estado civil de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el registro civil español no puede practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso el español, está casado cuando se celebra el acto.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 23 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de julio de 2017 (43.^a)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.—*No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Gambia, por un gambiano que luego adquirió la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. T. G. nacido en Gambia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó en el registro civil, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Gambia el 6 de junio de 1996 con Doña J. B. nacida en Gambia y de nacionalidad gambiana. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 2 de octubre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio celebrado conforme al ordenamiento de matrimonio al estilo del país es decir, de forma consuetudinaria, este tipo de

matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico de nuestro país al tratarse de un matrimonio poligámico.

III

Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado. El encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2.^a de mayo de 2001, 23-3.^a de noviembre y 4-7.^a de diciembre de 2002; 10-3.^a de septiembre de 2003; 15-1.^a de enero, 15-1.^a de abril y 22-1.^a de octubre de 2004 y 19-3.^a de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2014 solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Gambia el 6 de junio de 1996, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (*cf.* art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio se trata de un matrimonio poligámico.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento gambiano, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (*cf.* art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta en el apartado 15 «matrimonio legal» en el que ambas partes aceptan sin condiciones lo preceptuado en la ley que lo regula *sharia* por tanto es un matrimonio poligámico. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (8.^a)

Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.—*No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Bangladesh, por un ciudadano de ese país que adquirió posteriormente la nacionalidad española.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don M. B. B. nacido en Bangladesh y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó en el Registro Civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Bangladesh el 4 de julio de 2003 con Doña J. nacida en Bangladesh y de nacionalidad bangladesí. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificación de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 20 de noviembre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que

aportan el interesado opta por la poligamia, al considerarse expresión equivalente a la misma que «el contrayente no podrá contraer matrimonio de nuevo sin la previa autorización de la novia».

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2.^a de mayo de 2001, 23-3.^a de noviembre y 4-7.^a de diciembre de 2002; 10-3.^a de septiembre de 2003; 15-1.^a de enero, 15-1.^a de abril y 22-1.^a de octubre de 2004 y 19-3.^a de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2013, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Bangladesh el 4 de julio de 2003, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (*cf.* art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia, considerándose como tal que « el interesado no puede contraer otro matrimonio sin el permiso de la esposa»

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento bangladeshí, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (*cf.* art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el Registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (*cf.* arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC. En este caso en el apartado 17 del certificado de matrimonio aportado se consigna que «el novio no podrá contraer segundas nupcias sin permiso de la novia».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 27 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de febrero de 2017 (39.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (9.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (10.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 23 de marzo de 2017 (2.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (8.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 7 de abril de 2017 (12.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (10.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 2 de junio de 2017 (5.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 9 de junio de 2017 (10.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 23 de junio de 2017 (9.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (8.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (127.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (16.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (20.^a). Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio.

4.4 Matrimonio celebrado en el extranjero

4.4.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO POR ESPAÑOL/EXTRANJERO NATURALIZADO

Resolución de 17 de febrero de 2017 (55.ª)

Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.—*Por exigencias del principio de concordancia entre el registro y la realidad, no puede tenerse en cuenta el desistimiento a la inscripción del interesado.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Á. E. G. C., nacida en España y de nacionalidad española, presentó ante el Registro Civil Central, hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en L. V. (Estados Unidos) el 18 de febrero de 2012 con Don A. C. N., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Mediante providencia de fecha 13 de febrero de 2014 el encargado del registro civil solicita al Registro Civil de Hospitalet en Barcelona se practique a los interesados las

audiencias reservadas. Con fecha 13 de marzo de 2014 comparece en el Registro Civil de Hospitalet de Llobregat de Doña E. N. V., madre del promotor informando que los interesados residen en Londres, a fin de que se pueda practicar a los interesados la entrevista en el Consulado de España en Londres.

III

Mediante providencia de fecha 16 de mayo de 2014, el encargado del Registro Civil Central solicita al encargado del Registro Civil Consular en Londres se practique las audiencias reservadas a los interesados. Mediante oficio del Registro Consular de Londres se informa que no se ha podido realizar las entrevistas dado que los interesados no están inscritos en ese registro civil ni haberse presentado a la cita concedida.

IV

Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2014 la interesada desiste de la inscripción de matrimonio solicitada.

V

El Registro Civil Central mediante sendas providencias de fecha 2 de julio de 2015 y 11 de septiembre de 2015 solicita del Registro Civil de Hospitalet se practiquen las audiencias reservadas a los interesados. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2015 el encargado del registro informa que no se han podido llevar a cabo las entrevistas dado que los interesados no han mostrado interés tras ser citados en forma.

VI

El encargado del Registro Central inscribe el matrimonio con fecha 9 de marzo de 2016.

VII

Notificados los interesados, la interesada interpone recurso contra la inscripción de su matrimonio.

VIII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que informa que en la legislación registral rige el principio de concordancia entre el registro y la realidad extrarregistral, por tanto la inscripción del matrimonio no puede quedar sujeta a la voluntad de los contrayentes. El encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 11-1.^a de septiembre, 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007 y las de 26-2.^a de octubre de 2001, 13-4.^a de octubre de 2003, 29-6.^a de junio y 16-1.^a de julio de 2007, referidas al desistimiento.

II. No cabe el desistimiento formulado por el recurrente, porque lo impide el carácter obligatorio de la inscripción y el principio de concordancia entre el registro y la realidad jurídica extrarregistral (*cf.* arts. 15 y 26 de LRC), ya que este principio superior está sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el registro civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes en el caso del matrimonio (*cf.* arts. 24 y 71 LCR). Por lo demás, no ha de olvidarse que, conforme a los artículos 61 del CC y 70 de la LCR, los efectos civiles del matrimonio se producen desde su celebración.

II. En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. Como viene reiteradamente insistiendo esta dirección general a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73.1.º CC).

VI. En este caso concreto los interesados fueron citados varias veces a fin de poder llevar a cabo las audiencias reservadas, y los interesados no mostraron interés en que se les practicaran como informan los encargados de los registros pertinentes. Por ello el encargado del registro civil lleva a cabo la inscripción del matrimonio regido por el principio de concordancia que ya se ha mencionado antes (art. 15 y 26 de LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la inscripción apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (5.^a)

Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.—*Se retrotraen las actuaciones para que se amplíen las audiencias reservadas a los interesados y por ello se dicte seguidamente la resolución motivada que proceda.*

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Consular de Bogotá.

HECHOS

I

Doña A. C. C. C., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana presentó en el Registro Civil Consular de Bogotá hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Colombia el 25 de mayo de 2015 con Don A. M. R. T., nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebran escuetas entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil consular mediante auto de fecha 6 de mayo de 2016 no autoriza la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

IV

Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 9-1.^a y 2.^a de julio, 19-2.^a de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3.^a de enero de 2002, 17-3.^a de mayo de 2004, 29-1.^a de enero de 2007, 2-6.^a de abril y 5-13.^a de noviembre de 2008 y 27-1.^a de enero de 2009.

II. En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 R RC).

III. Como viene reiteradamente insistiendo esta dirección general a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73.1.º CC).

IV. Habida cuenta de que en este expediente de inscripción de matrimonio, celebrado en Colombia, entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana se ha oído a los interesados en audiencia reservada, pero siendo las entrevistas tan sucintas e incompletas en el caso de la audiencia de la interesada no hay preguntas y respuestas cruzadas que permitan contrastar si los interesados incurren en contradicciones, apreciar el

grado de conocimiento recíproco que hay entre ellos y, en definitiva, formar la convicción de la existencia o no de consentimiento matrimonial válido, procede dejar sin efecto el auto dictado y retrotraer las actuaciones para que los promotores del expediente sean oídos reservada y separadamente, a los efectos señalados en el artículo 246 del RRC, y continuar con la tramitación reglamentaria.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones para que amplíen con todo detalle las audiencias reservadas a los interesados y a la vista de todo ello se dicte una nueva resolución.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

Resolución de 23 de marzo de 2017 (1.ª)

Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.—*No procede la inscripción porque, no habiendo comparecido los contrayentes para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña S-V. P. N., nacida en D. (República Dominicana), de nacionalidad española adquirida por residencia el 29 de junio de 1998, presentó escrito en el Registro Civil Central a fin de inscribir su matrimonio celebrado en República Dominicana el 20 de septiembre de 1990 con Don M-E. G. U., nacido en B. y de nacionalidad, según consta en la declaración de datos, española. Acompañaban como documentación acreditativa de su solitud: acta de matrimonio local, certificados de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada.

II

Con fecha 27 de febrero de 2014, se dictó providencia a fin de que se oyera a los interesados en audiencia reservada conforme a lo previsto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil. Comparece únicamente la interesada, ignorándose el paradero de Don E., y por diligencia de 25 de marzo de 2014 se hace constar la imposibilidad de efectuar la citación al interesado.

III

El 1 de octubre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción del matrimonio con el razonamiento jurídico de que, no practicada a los interesados la audiencia a que se refiere el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos.

IV

Notificados los interesados, interponen recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 23, 26, 29, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a de junio de 2001, 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002, 13-3.^a de octubre de 2003, 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005, 7-1.^a de febrero y 13-1.^a de noviembre de 2006, 30-2.^a de enero de 2007, 24-3.^a de abril de 2008 y 3-8.^a de octubre de 2011.

II. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II de la Ley y 85 de su reglamento.

III. Mediante este expediente se pretende la inscripción de un matrimonio celebrado en República Dominicana el 20 de septiembre de 1990 entre dos ciudadanos de nacionalidad dominicana en el momento de celebrarse el matrimonio y actualmente de nacionalidad española. La solicitud es denegada por el Registro Civil Central el 08 de noviembre de 2012 con el razonamiento jurídico de que, no oídos los promotores, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos. En particular en el acuerdo inicial se afirma que, fallecido uno de los contrayentes, no es posible verificar la audiencia reservada. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

IV. Como ha quedado dicho en el fundamento II, el título para practicar la inscripción del matrimonio ha de ser en este caso la certificación expedida por la autoridad o funcionario del país de celebración (*cf.* art. 256.3.º RRC) y las declaraciones complementarias oportunas (*cf.* art. 256, II RRC). El Registro Civil Central notificó a los interesados a fin de que comparecieran para oírlos en audiencia reservada, audiencia a la que únicamente compareció Doña S.. Ciertamente, tal y como se expresa en el escrito de recurso, el interesado no ha fallecido, pero, por otra parte se admite el desconocimiento de su paradero. Así las cosas, por acuerdo de 21 de abril de 2016 el encargado del Registro Central aclara la resolución que se impugna, en el sentido de hacer constar que el interesado se encuentra en paradero desconocido y no fallecido. Sea como fuere, no ha sido posible practicar la audiencia reservada a D. E., y dicha audiencia no deja de ser un trámite esencial según lo expuesto. Así, la audiencia reservada solo puede cumplir su finalidad primordial de formar

convicción sobre la existencia o no de consentimiento matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo comparecido los promotores ni en primera instancia ni en fase de recurso, queda imposibilita la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad jurídica extrarregistral (*cf.* arts. 15 y 26 LRC), sea factible reiterar el expediente y obtener una resolución sobre el fondo del asunto, siempre que se haya completado la tramitación legalmente prevista.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 23 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (14.ª)

Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.—*No es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos, por quien luego se hizo español, porque no aporta poder para la celebración del matrimonio conforme al artículo 55 del Código Civil.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. S. Y. nacido en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en 2009, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Marruecos el 17 de septiembre de 1995 con Doña F. R. C. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Con fechas 18 de noviembre de 2014 y 22 de abril de 2015 se requiere a los interesados a fin de que aporten el poder otorgado para contraer matrimonio, ya que según se desprende del acta de matrimonio aportada se casaron por poder. Ante tal requerimiento el interesado trae un acta de continuidad de matrimonio, dejando anulado el poder y conformado el matrimonio por el propio contrayente. En el segundo requerimiento el interesado comparece en el registro civil y manifiesta que no puede aportar el poder y aporta con fecha 22 de febrero de 2016 un documento de anulación de poder con el sello del Consulado de Marruecos en Barcelona.

III

Mediante auto de fecha 8 de septiembre de 2016 el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción de matrimonio ya que en el acta de matrimonio aportada se observa que se casan por poder otorgado a favor de Don A. M. S., en Barcelona con fecha 22 de agosto de 1995, y legalizado en el Consulado de Marruecos en Barcelona para que actúe en su nombre en el acto del matrimonio. Requerido el interesado para que aporte dicho poder, aporta una anulación de poder, por lo que procede atendiendo al artículo 55 del CC, denegar la inscripción de matrimonio.

IV

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 55 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil.

II. En el presente caso los interesados de nacionalidad española, de origen marroquí, pretende inscribir un matrimonio que se celebró por poder en Marruecos en 1995 sin embargo la inscripción que es denegada por el encargado porque los interesados, requeridos para que aporten el poder, no lo aportan porque dicen que no lo tienen, aportan primero un acta de continuidad de matrimonio (en esta figura el interesado presente en la ceremonia) y luego una anulación del poder.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Marruecos en 1995.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar los promotores domiciliados en España. (*cf.* art. 68,II LRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cf.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RCC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, los interesados aportan un acta matrimonial en la que consta que el interesado otorga poder a favor de Don A. M. S., en B. con fecha 22 de agosto de 1995 y legalizado en el Consulado de Marruecos en Barcelona, en la misma fecha para que actúe en su nombre en el acto de matrimonio. Se requiere al interesado para que aporte dicho poder pero no lo aporta, en su lugar aporta primero un acta de continuidad de matrimonio y en después una anulación de poder. Por lo que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Civil para su inscripción: «podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente no resida en el distrito o demarcación del juez, alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (10.^a)

Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.—*No es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos, por quien luego se hizo español, porque no hay certificación del Registro correspondiente y porque en el*

expediente del artículo 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don C. M. M. nacido en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en 2007, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado, en Marruecos con Doña H. S. B. nacida en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en el año 2011. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, copia de acta de confirmación de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2015 deniega la inscripción de matrimonio ya que no consta la existencia del matrimonio ya que no ha quedado acreditada el lugar, la fecha y demás circunstancias del mismo.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2.^a de junio de 2001; 9-2.^a y 24-2.^a de

mayo de 2002; 13-3.^a de octubre de 2003; 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005 y 17-3.^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, los interesados de nacionalidad española obtenida por residencia, el interesado en el año 2007 y la interesada en el año 2011, pretenden inscribir un matrimonio que se celebró en Marruecos según ellos, sin embargo la inscripción que es denegada por el encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Marruecos.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (*cf.* art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cf.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, los interesados aportan unos documentos marroquíes que constituyen una información testifical que efectúan ante notarios por la que doce testigos declaran la legitimidad y continuidad del matrimonio y manifiestan que la unión matrimonial persiste desde que contrajeron matrimonio, pero no precisan las circunstancias de celebración como lugar, hora, día, mes, autoridad ante la que se celebró, etc. Después aportan un acta rectificando el acta de confirmación en donde, según manifestaciones del interesado el matrimonio se celebró el 28 de noviembre de 1970, declarando el mismo en la audiencia reservada que se le practicó que contrajo matrimonio en 1971. Por lo tanto no es posible determinar las circunstancias en que se celebró el matrimonio y por tanto, no se considera suficientemente acreditada la existencia del mismo.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Central.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (69.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (96.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (14.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (32.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (16.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (2.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (6.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 2 de junio de 2017 (11.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 9 de junio de 2017 (13.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 30 de junio de 2017 (37.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (140.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (2.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (42.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (8.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (3.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (21.^a). Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado.

4.4.1.1 *Se deniega la inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial*

Resolución de 24 de enero de 2017 (15.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.— 1.º *Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2.º *Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. V. S., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2012 presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 1 de mayo de 2007 con Doña C. A. S., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2.^a de diciembre de 2004; 19-1.^a y 20-2.^a y 3.^a de abril, 19-3.^a, 20-1.^a y 3.^a, 26-2.^a de mayo, 8-4.^a, 20-3.^a de junio, 7-1.^a de julio y 29-4.^a de diciembre de 2005; 27-4.^a de enero, 22-1.^a y 24-3.^a de febrero, 28-4.^a de marzo y 6-2.^a de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído La República Dominicana el 1 de mayo de 2007 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2012.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contratante (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el

central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (*cf.* art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (*cf.* art. 9 núm. 1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro Ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (*cf.* art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 («BOE» del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (*cf.* art. 12 núm. 3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (*cf.* art. 74 CC), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados contrajeron matrimonio en 2007 y tienen dos hijos en común, ella tiene tres hijos de otra relación y el interesado tiene un hijo A. J. V. J., nacido en el año 2013 y en el certificado de nacimiento del menor aparecen el interesado y la madre del menor Doña E. J. G. en estado civil casados. En la audiencia reservada el interesado se contradice con respecto al estado civil ya que primero dice que sí habían contraído matrimonio

y luego dice que no. El interesado no recuerda la fecha del matrimonio dice que fue hace siete u ocho años. El interesado dice que vive en España desde 2003, sin embargo ella dice que hace diez años (la entrevista se realizó en 2015 por lo que sería desde 2005). Dicen ambos que él ha viajado seis o siete veces pero no especifica fechas. El interesado no da con exactitud el nombre de uno de los hijos de ella, declara que decidieron contraer matrimonio en casa de ella en La República Dominicana cuatro años antes, ella sin embargo dice que él se lo pidió dos veces y la segunda vez aceptó y en ese momento se casaron. No coinciden los nombres de los hermanos que dan ambos del otro. El interesado dice que se comunican a diario por teléfono sin embargo ella dice que dos o tres veces por semana. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella y ella tampoco sabe el año de nacimiento de él. El interesado dice que ella no tiene familiares en España pero ella dice que tiene una prima.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (35.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.–*No procede la inscripción porque el contrayente español fallecido antes de la solicitud de inscripción del matrimonio no ha sido posible oírlo reservadamente en los términos previstos en el artículo 246 RRC, la validez del documento presentado resulta afectada.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo del encargado del Registro Civil Consular en Lima.

HECHOS

I

Doña P. L. C. A., nacida en Perú y de nacionalidad peruana, presentó, con fecha 1 de junio de 2015, en el Registro Civil del Consulado de España en Lima, hoja declaratoria de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Perú el 29 de diciembre de 2012 con Don E. C. D., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntaba como documentación: acta de matrimonio, certificado de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción de la pri-

mera esposa del interesado y acta de defunción del propio interesado (falleció el 16 de marzo de 2013) y certificado de matrimonio y certificado de soltería de la interesada.

II

Se celebra la entrevista en audiencia reservada con la interesada. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. El encargado del registro civil consular mediante auto de fecha 8 de marzo del 2016, deniega la inscripción del matrimonio por no existir un verdadero consentimiento matrimonial.

III

Notificada la resolución a la interesada ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 45, 49, 65 y 73 del Código Civil (CC); 23, 24, 29, 32, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 252, 256, 257, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a de junio de 2001, 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002, 13-3.^a de octubre de 2003, 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005, 7-1.^a de febrero y 13-1.^a de noviembre de 2006, 30-2.^a de enero de 2007, 24-3.^a de abril de 2008 y 3-8.^a de octubre de 2011.

II. La solicitante, de nacionalidad peruana promueve, con fecha 1 de junio de 2015 expediente a fin de que sea inscrito en el registro civil español matrimonio celebrado en Perú, según la ley local, el día 29 de diciembre de 2012 con un ciudadano español fallecido el 16 de marzo de 2013, en Perú. El 8 de marzo de 2016 el encargado del registro civil consular dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio, ya que celebrada la entrevista en audiencia reservada con la interesada se deduce que no tenía un conocimiento suficiente de la vida de su cónyuge fallecido y no ha habido verdadero consentimiento matrimonial. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. El matrimonio tuvo lugar en el extranjero, conforme a *lex fori*, y se pretende su inscripción con la mera aportación de la certificación expedida por el registro civil del país de celebración (*cf.* art. 256. 3.º RRC). Sin embargo esta, por sí sola, no es documento bastante en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo 256 RRC, que prevé que el título para la inscripción en los casos, como el que es objeto del presente recurso, a que dicho artículo se refiere será la expresada certificación «y las declaraciones complementarias oportunas». Es decir, que siempre que no haya duda de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española, el acta aportada y las declaraciones complementarias oportunas constituyen, conjunta e indisolublemente, el título para practicar la inscripción. Habida cuenta de que, fallecido uno de los contrayentes, no ha sido posible oírlo reservadamente en los términos previstos en el artículo 246 RRC, la validez del documento presentado resulta afectada y la inscripción no puede practicarse.

IV. Por otro lado en la entrevista que se le practicó a la interesada, ésta no supo facilitar la fecha de nacimiento del interesado. Declara la interesada que inició una relación sentimental con el fallecido a los dos años de haberse conocido, en 2010, sin embargo el interesado contrajo matrimonio con una ciudadana peruana el 30 de septiembre de 2010, la señora H. P. M.. Manifiesta la promotora que tomaron la decisión de casarse al fallecer la madre del fallecido y quedarse éste viudo (su anterior mujer falleció en 2012), el fallecido tenía problemas de movilidad e iba en una silla de ruedas, al quedarse atascada un día la silla de ruedas en un ascensor él le propuso matrimonio a ella. El interesado fallecido quedó viudo el 21 de octubre de 2012 y contrajo matrimonio con la interesada el 29 de diciembre de 2012 tan sólo dos meses después del fallecimiento de su anterior esposa. Cuando se le preguntó a la interesada las razones que motivaron su solicitud de inscripción del matrimonio contestó que estaba tramitando su pensión de viudedad. Según informe del Consulado el finado facilitó una copia de su testamento de fecha 11 de diciembre de 2012 en el que dejaba un inmueble a la promotora, el 13 de febrero de 2013 se modificó el testamento en el que dejaba todos sus bienes de Perú y España a la promotora, según el Consulado este hecho llama la atención si se tiene en cuenta que el matrimonio se celebró el 29 de diciembre de 2012. Siguiendo con el informe del Consulado se aprecia que los trazos de la firma del señor C. D. en el acta de celebración del matrimonio no coinciden con los que figuran en su pasaporte y DNI.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Lima (Perú).

Resolución de 7 de abril de 2017 (6.ª)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.— 1.º *Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2.º *Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

I

Doña Y-E. F. L. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana presentó ante el Consulado de España en Santo Domingo hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 27 de marzo de 2014 con Don G. A. P. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento, acta inextensa de matrimonio, acta inextensa de divorcio y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y acta inextensa de divorcio de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 12 de abril de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe favorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la

Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2.^a de diciembre de 2004; 19-1.^a y 20-2.^a y 3.^a de abril, 19-3.^a, 20-1.^a y 3.^a, 26-2.^a de mayo, 8-4.^a, 20-3.^a de junio, 7-1.^a de julio y 29-4.^a de diciembre de 2005; 27-4.^a de enero, 22-1.^a y 24-3.^a de febrero, 28-4.^a de marzo y 6-2.^a de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 27 de marzo de 2014 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2015.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65

CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (*cf.* art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (*cf.* art. 9 núm. 1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro derecho (*cf.* art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 («BOE» del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público. Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (*cf.* art. 12 núm. 3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (*cf.* art. 74 CC), y ello cualquiera sea la causa *simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu* que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocen desde el año 1995, contrajeron matrimonio entre sí en el año 2000, se divorciaron el 3 de febrero de 2005. El interesado contrajo matrimonio con una ciudadana española de origen dominicano el 12 de agosto de 2005, y se divorció de la misma en el

año 2013, contrajo matrimonio con la promotora por segunda vez en el año 2014 y obtuvo la nacionalidad española en el año 2015. La interesada desconoce la dirección y el teléfono del interesado en España, menciona varios hermanos del interesado sin embargo él sólo menciona a dos. El interesado dice que han convivido antes del matrimonio pero ella dice que no. El interesado dice que después de casarse ha ido a su país dos veces, sin embargo ella dice que ha ido tres veces. El interesado dice que decidieron casarse antes de conocerse personalmente y ella dice que no. Ella desconoce los ingresos que él percibe.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 24 de abril de 2017 (2.ª)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.–*Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

No resulta acreditado el estado civil a los efectos de comprobar la existencia de un eventual impedimento de ligamen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

I

Doña R-E. R. P., mayor de edad, soltera, de nacionalidad dominicana, presentó ante el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, República Dominicana, solicitud de inscripción de su matrimonio contraído con Don J. C. C., mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, en Santo Domingo el 6 de abril de 2016. Adjuntan como documentación la siguiente: acta inextensa de matrimonio cuya inscripción se pretende, acta inext-

tensa de nacimiento de la interesada, declaración jurada de su soltería y certificación literal de nacimiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados en el Registro Civil Consular en Santo Domingo. Con fecha 5 de agosto de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe favorable. El encargado del registro civil consular, a la vista de las alegaciones practicadas, no se opone a la inscripción de este matrimonio y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil (CC); 23 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 54, 85, 241, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005; 23-3.^a y 5.^a de junio, 3-1.^a, 21-1.^a y 5.^a, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a y 26-5.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 5.^a y 6.^a y 11-1.^a de septiembre; 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007; 29-7.^a de abril, 27-1.^a de junio, 16-1.^a y 17-3.^a de julio, 30-2.^a de sep-

tiembre y 28-2.^a de noviembre de 2008; 19-6.^a y 8.^a de enero y 25-8.^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana entre una ciudadana dominicana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos y contradicciones entre los contrayentes de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así, en primer lugar cabe destacar que él no

sabe el día concreto de nacimiento de su pareja y ella también desconoce la fecha de nacimiento de él. Él confunde el nombre de los hermanos de ella. Por su parte ella ignora qué estudió él. Además ha declarado que su pareja utiliza gafas para ver mejor cuando él ha indicado que no es así. El interesado ha declarado que su pareja dio a luz de forma natural y que si fue por cesárea no ha visto la cicatriz y a este respecto la interesada ha respondido que uno de los partos fue por cesárea. La promotora ha confundido en dos ocasiones el nombre de la ex mujer de su pareja e ignora cuándo se divorciaron. En cuanto a su relación sentimental cabe señalar lo siguiente: respecto de la boda, no coincide el número de invitados que según sus respuestas asistieron, según él 6 o 7 personas, según ella, «veinte y pico». Y también debe señalarse que él ha declarado que comenzaron a vivir juntos en enero mientras que ella ha declarado que en marzo. Para concluir, en cuanto a los planes de vida, él ha declarado que por el momento no tienen intención de viajar a España, sino de vivir en República Dominicana. Ella sin embargo ha declarado que quieren irse a vivir a España ya que él tiene los hijos allí y que quiere llevarse los suyos allá. Todos estos hechos no han quedado desvirtuados por las alegaciones practicadas en el recurso presentado.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

VII. Aunque lo anterior por sí solo es suficiente para denegar el recurso interpuesto, en el presente caso encontramos que el interesado ha declarado que su estado civil es el de divorciado sin que se haya acompañado certificación literal de su anterior matrimonio con nota al margen de haberse tomado razón del divorcio, lo cual es necesario para acreditar la inexistencia de un posible impedimento de ligamen y así exigirlo el art. 241 del Reglamento del Registro Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 7 de julio de 2017 (45.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.—*Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. F. J. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en La República Dominicana el 29 de agosto de 2013 con Doña Y. C. V. S. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2016 deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005; 23-3.^a y 5.^a de junio, 3-1.^a, 21-1.^a y 5.^a, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a y 26-5.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 5.^a y 6.^a y 11-1.^a de septiembre; 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007; 29-7.^a de abril, 27-1.^a de junio, 16-1.^a y 17-3.^a de julio, 30-2.^a de septiembre y 28-2.^a de noviembre de 2008; 19-6.^a y 8.^a de enero y 25-8.^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales—sin excepción alguna— para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocen desde pequeños, en 2012 iniciaron la relación por redes sociales, el interesado fue en 2013 «para estar con ella y decidieron casarse». No coinciden en el número de viajes que el interesado ha realizado y la duración de los mismos, el interesado duda sobre el lugar de nacimiento de ella y ella no da con exactitud la fecha de nacimiento de él. Ella declara tener siete hermanos y él dice que ella tiene tres hermanas; declara el interesado que ella comenzó estudios de Psicología pero no llegó a terminarlo, ella dice que inició la universidad e hizo secretariado ejecutivo. Ella declara que han convivido dos semanas antes de casarse, sin embargo él dice que no han convivido ya que cuando la visitaba estaban cada uno en su domicilio.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el encargado del registro civil, quien por su inmediación a los HECHOS es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (4.ª)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.— 1.º *Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

2.º *Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña E. P. C. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 22 de agosto de 2008 presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 2 de agosto de 2008 con Don O. A. M. P., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio, certificado de nacimiento de la interesada y acta inextensa de nacimiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Mediante acuerdo de fecha 14 de abril de 2016 el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio.

III

Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2.^a de diciembre de 2004; 19-1.^a y 20-2.^a y 3.^a de abril, 19-3.^a, 20-1.^a y 3.^a, 26-2.^a de mayo, 8-4.^a, 20-3.^a de junio, 7-1.^a de julio y 29-4.^a de diciembre de 2005; 27-4.^a de enero, 22-1.^a y 24-3.^a de febrero, 28-4.^a de marzo y 6-2.^a de abril de 2006.

II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído La República Dominicana el 2 de agosto de 2008 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia el 22 de agosto de 2008.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así

lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la ley y 85 de su reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (*cf.* art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (*cf.* art. 9 núm. 1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurí-

dico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro derecho (*cf.* art. 45 CC) y en el derecho internacional convencional y, en particular, el convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (*cf.* art. 12 núm. 3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (*cf.* art. 74 CC), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Declaran que se conocían desde pequeños porque eran vecinos del mismo barrio, la interesada declara que decidieron casarse en Santo Domingo cuando ella fue de viaje en 2008, pero él indica que siempre lo habían hablado, sin embargo la interesada tiene dos hijos de otras relaciones, uno nacido al 30 de abril de 2008 (en agosto contrajo matrimonio con el interesado) y otro nacido en junio de 2011, ya casada con el interesado. Ella dice que vive en España desde 1999, y que ha ido a su país en tres ocasiones, la primera vez a los dos años de estar en España (2001), la segunda a los dos o tres años siguientes (2003-2004) y la tercera para casarse en 2008, desde que contrajeron matrimonio hasta que el interesado vino a España en septiembre de 2015, prácticamente no han tenido

contacto y no se han visto ni un sola vez. Desconocen gustos y aficiones, ella desconoce los estudios que tiene el interesado, ella dice que no han convivido y él dice que han convivido cuando ella iba de viaje (pero no ha vuelto desde 2008).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (9.ª)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.—*Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña H.-A. S. nacida en Rumanía de nacionalidad rumana, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Rumanía el 29 de junio de 2016 con Don J.-M. G. N. nacido en España y de nacionalidad española. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 2 de marzo de 2017 deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005; 23-3.^a y 5.^a de junio, 3-1.^a, 21-1.^a y 5.^a, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a y 26-5.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 5.^a y 6.^a y 11-1.^a de septiembre; 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007; 29-7.^a de abril, 27-1.^a de junio, 16-1.^a y 17-3.^a de julio, 30-2.^a de septiembre y 28-2.^a de noviembre de 2008; 19-6.^a y 8.^a de enero y 25-8.^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene

el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contratante (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Rumanía entre un ciudadano español y una ciudadana rumana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocen desde hace once años porque los padres de ella cuidaban del promotor y acabó vendiéndoles la casa de su propiedad, como los padres de ella acabaron separándose, volviendo ella a Rumanía, el interesado fue atendido por la promotora y comenzaron a viajar a Rumanía, donde reside a temporadas, cuando viene a España, se queda en A. donde reside el hermano de ella. Declaran que la decisión y la celebración del matrimonio fue muy rápido y fue idea del promotor. El interesado es 60 años mayor que la promotora. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el encargado del registro civil, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe pres-

cindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 20 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (18.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.—*Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado de España en Bogotá.

HECHOS

I

Doña J.-C. V. R. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana presentó ante el Consulado de España en Bogotá hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Colombia el 23 de abril de 2016 con Don B. S. L., nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 27 de marzo de 2017 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4.^a de diciembre de 2005; 23-3.^a y 5.^a de junio, 3-1.^a, 21-1.^a y 5.^a, 25-2.^a de julio, 1-4.^a y 5-4.^a de septiembre, 29-2.^a y 5.^a de diciembre de 2006; 29-2.^a y 26-5.^a de enero, 28-5.^a de febrero, 31 de marzo, 28-2.^a de abril, 30-1.^a de mayo, 1-4.^a de junio, 10-4.^a, 5.^a y 6.^a y 11-1.^a de septiembre; 30-6.^a de noviembre y 27-1.^a y 2.^a de diciembre de 2007; 29-7.^a de abril, 27-1.^a de junio, 16-1.^a y 17-3.^a de julio, 30-2.^a de septiembre y 28-2.^a de noviembre de 2008; 19-6.^a y 8.^a de enero y 25-8.^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada

contrayente (*cf.* art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (*cf.* art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos declaran que se conocieron en el año 2010 en España pero ninguno recuerda fecha concreta. Los presentó una hermana de ella en V. cuando ella vivía en España. Tampoco recuerdan cuando iniciaron la relación sentimental, tan sólo declaran que fue en 2010. Ella declara que vivirán en España y el interesado dice que por el momento están en Colombia pero más adelante no saben. En general las respuestas son muy escuetas y con monosílabos. Por otro lado y aunque no es determinante el interesado es 16 años mayor que la interesada. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria, entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,

del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (*cf.* art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (19.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (21.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (22.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de enero de 2017 (23.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de enero de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de enero de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de enero de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de enero de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de enero de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (31.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (56.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (58.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (60.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (62.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (63.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (64.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (66.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (67.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (71.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (72.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (73.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (95.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (41.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (53.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (55.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (53.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (54.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de abril de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de abril de 2017 (18.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de abril de 2017 (47.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de abril de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (22.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (23.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (24.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (25.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (26.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (27.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (28.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (30.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (31.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 21 de abril de 2017 (35.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de abril de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (32.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (33.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (35.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (37.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (38.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (39.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de abril de 2017 (40.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (18.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (28.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (30.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (31.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (18.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (21.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (42.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (43.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 2 de junio de 2017 (16.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 9 de junio de 2017 (27.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 16 de junio de 2017 (47.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 16 de junio de 2017 (49.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 16 de junio de 2017 (55.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 16 de junio de 2017 (57.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 16 de junio de 2017 (61.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 23 de junio de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 30 de junio de 2017 (43.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de julio de 2017 (18.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 7 de julio de 2017 (19.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 28 de julio de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (40.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (42.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (43.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (44.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (45.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (46.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (50.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (51.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (75.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (82.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (86.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (87.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (108.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (113.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (114.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (120.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (125.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (126.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (133.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (137.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (138.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (139.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (20.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (21.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (24.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (29.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (32.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (16.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (2.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (16.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (24.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (27.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (28.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (18.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (19.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (1.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (23.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (3.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (7.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (10.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (14.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (17.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero-Ausencia de consentimiento matrimonial.

4.4.1.2 *Se inscribe, no puede deducirse ausencia de consentimiento matrimonial*

Resolución de 24 de enero de 2017 (1.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Se inscribe.—*Se inscribe porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo.

HECHOS

I

Don A. E. L. H., mayor de edad, de nacionalidad dominicana, presentó, ante el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, solicitud de inscripción de su matrimonio celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de septiembre de 2013 con Doña A. M. C. T., mayor de edad de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2015. Adjuntan como documentación acreditativa de su solicitud: certificación literal de nacimiento de la interesada, fe de vida y estado de la misma, acta inextensa de matrimonio cuya inscripción se pretende, acta inextensa de nacimiento del interesado y declaración jurada de su soltería.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados en Santo Domingo. Ambos manifiestan tener un conocimiento recíproco adecuado y dicen tener una relación desde 2008. Desde que contrajeron matrimonio en 2013, dicen que la interesada, de nacionalidad española, ha viajado cinco veces a República Dominicana a visitar a su marido sin que se haya acreditado este punto lo suficientemente y durante esos viajes dicen haber convivido juntos. También conocen recíprocamente la vida sentimental del otro y han hecho constar que el interesado tiene un hijo de nueve años fruto de otra relación anterior que vive con su madre y al cual el padre pasa una manutención sin que exista pensión impuesta. Por último, aunque han cometido alguna discrepancia en las declaraciones, las partes manifiestan tener conocimiento de sus respectivos familiares y otros datos de carácter personal, como la profesión gustos, etcétera.

III

El Cónsul Adjunto deniega la inscripción del matrimonio civil con fecha 26 de abril de 2016, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges al no haberse acreditado que existe una suficiente convivencia estable para determinar que son una pareja estable.

IV

Notificados los interesados, el interesado interpone recurso, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y donde volvió a incorporarse la documentación, esta vez con inclusión de la acreditativa de los viajes realizados por ella a República Dominicana.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal quien, a la vista de la documentación aportada, estima suficientemente acreditada la relación conyugal y, a su entender, declara que no existe obstáculo que impida la inscripción de este matrimonio. El encargado del registro civil consular igualmente emite informe en términos análogos a los del ministerio fiscal, declarando su no oposición a una eventual inscripción de este matrimonio y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3,

6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 31-1.^a y 5.^a de mayo, 23-2.^a de junio, 25-1.^a de julio, 5-2.^a de septiembre, 30-2.^a de octubre, 11 de noviembre y 28-5.^a de diciembre de 2006; 29-3.^a y 4.^a de enero, 28-1.^a y 2.^a de febrero, 25-7.^a de abril, 31-2.^a de mayo, 1-2.^a y 3.^a de junio 11-2.^a, 5.^a y 6.^a de septiembre, 26-5.^a de noviembre, 28-5.^a de diciembre de 2007; 11-1.^a y 31-1.^a y 4.^a de enero de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierten contradicciones de relevancia en las respuestas dadas a las preguntas que se le formularon, lo que no proporciona elementos de juicio necesarios para deducir una utilización fraudulenta del matrimonio. Existen ciertas discrepancias que ciertamente llevaron al encargado del registro civil consular a denegar la inscripción de este matrimonio. En este sentido, en el propio auto se señala como fundamento el hecho de que no existen pruebas que avalen una relación sentimental y una convivencia suficiente para determinar que son pareja. Sin embargo, en las alegaciones practicadas por las partes en la interposición del recurso, se ha demostrado la existencia de los viajes a los que se refirieron en sus declaraciones, por lo que a juicio del encargado del registro civil consular y del ministerio fiscal, se ha salvado este defecto de forma que queda suficientemente acreditado que existe un consentimiento válido y propio para la celebración del matrimonio.

VI. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.^a de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha elegido la primera alternativa». Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (*cf.* Art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular de Santo Domingo el matrimonio celebrado el 26 de septiembre de 2013 entre don A. E. L. H. y Doña A. M. C. T.

Madrid, 24 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 3 de marzo de 2017 (16.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Se inscribe.—*Se inscribe porque una vez subsanado el error de la fecha de divorcio del primer matrimonio del interesado no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don R. R. M., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 23 de marzo de 1968 en Venezuela, según la ley local, con Doña A. H. C. nacida en Venezuela y de nacionalidad venezolana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado

del anterior matrimonio y certificado de divorcio (con auto otorgando el exequátur a la misma, expedido por el Juzgado de primera instancia núm. 4 de San Cristóbal de la Laguna) del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 30 de mayo de 2014 deniega la inscripción del matrimonio por impedimento de ligamen ya que el interesado, al momento del matrimonio estaba casado con Doña G. S. M., matrimonio que quedó disuelto el 11 de abril de 1976.

III

Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, alegando que ha habido un baile de cifras porque el matrimonio quedó disuelto en 1967.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que solicita la aclaración del acuerdo de 30 de mayo de 2014 en lo relativo a la fecha real de divorcio del interesado. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 19-3.^a de abril, 14-4.^a de mayo y 5-2.^a y 31-8.^a de octubre de 2001, 1-2.^a y 19-1.^a de febrero, 15-1.^a de junio y 4 de julio de 2002, 20-3.^a y 24-3.^a de octubre de 2005, 27-1.^a de octubre de 2006, 4-3.^a de junio de 2007 y 8-2.^a de enero de 2009.

II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...». Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV. En este caso se solicita la inscripción del matrimonio celebrado en Venezuela el 23 de marzo de 1968, entre un ciudadano español y una ciudadana venezolana. El encargado del Registro Civil Central lo deniega, mediante acuerdo de fecha 30 de mayo de 2014, por impedimento de ligamen, según la sentencia que obra en el expediente, ya que según dicho acuerdo, el interesado estaba casado con Doña G. S. M., y dicho matrimonio quedó disuelto el 11 de abril de 1976, sin embargo como bien dicen los interesados en el recurso ha habido un baile de cifras porque el matrimonio quedó disuelto en 1967, acompañando el certificado de la sentencia de divorcio dictada el 11 de abril de 1967. El informe del ministerio fiscal dice que se aclare el acuerdo del 30 de mayo de 2014 en lo relativo a la fecha de divorcio, pero también solicita al interesado que inscriba el primer matrimonio con el correspondiente divorcio para poder inscribir el segundo. Sin embargo el interesado presenta auto otorgando exequátur de dicha sentencia de divorcio dictado el 24 de junio de 2005 por el Juzgado de primera instancia núm. 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). El matrimonio produce efectos plenos desde su celebración, la inscripción en el registro civil es obligatoria, pero no constitutiva y sólo tiene por objeto que éste produzca efectos. De igual modo el divorcio también produce efectos desde que la sentencia que lo declara deviene firme, no desde la inscripción en el registro civil. Por otro lado el interesado ha obtenido el exequátur de la sentencia de divorcio que ha dictado un tribunal extranjero para que pueda ser reconocido en el ordenamiento jurídico español, y por tanto desaparece el impedimento de ligamen que supuestamente existe. Por ello no sería necesaria la inscripción previa del matrimonio y primer divorcio para la inscripción de este segundo matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso.
2. Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Venezuela el 23 de marzo de 1968 entre R. R. M. y A. H. C.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (5.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Se inscribe.—*Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado de España en Bogotá.

HECHOS

I

Don J-A. S. R. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana presentó en el Consulado de España en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 5 de octubre de 2015 con Doña C. G. C. nacida en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 10 de mayo de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre pro-

tección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción del 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4.^a de diciembre de 2005; 16-1.^a de marzo, 7-2.^a y 3.^a y 11-4.^a de abril, 31-1.^a y 5.^a de mayo, 23-2.^a de junio, 20-5.^a, 22 y 25-1.^a de julio, 5-2.^a de septiembre, 30-2.^a de octubre, 10-5.^a y 11 de noviembre y 28-5.^a de diciembre de 2006; 5-3.^a y 29-3.^a y 4.^a de enero, 28-1.^a y 2.^a de febrero, 25-7.^a de abril, 31-2.^a de mayo, 1-2.^a y 3.^a de junio, 11-2.^a, 5.^a y 6.^a de septiembre, 26-5.^a de noviembre y 28-5.^a de diciembre de 2007; 11-1.^a y 31-1.^a y 4.^a de enero, 4-3.^a y 5-1.^a de marzo, 13-1.^a, 2.^a, 3.^a y 5.^a de mayo, 8-6.^a de septiembre y 22-1.^a de diciembre de 2008; 29-8.^a y 10.^a de enero y 6-1.^a de marzo de 2009.

II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contratante (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el registro civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (*cf.* art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las

respuestas dadas en las entrevistas, no existen prácticamente contradicciones y han mantenido una relación continuada a lo largo del tiempo, los interesados presentan numerosas pruebas, que evidencian una relación continuada.

V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la resolución de 9-2.^a de octubre de 1993, «ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha elegido la primera alternativa». Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (*cf.* Art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso
2. Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 5 de octubre de 2015 entre J-A. S. R. y C. G. C.

Madrid, 31 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá (Colombia).

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (5.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero-Se inscribe.—*Se inscribe porque vista la documentación obrante en el expediente se llega a la conclusión de que no concurre impedimento de ligamen.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado de España en Bogotá.

HECHOS

I

Don A. G. C. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007, presentó en el Registro Civil del Consulado de España en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 20 de diciembre de 2013 con Doña S.-L. P. M. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

II

Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. Mediante auto de fecha 27 de septiembre de 2016, el encargado del registro civil consular deniega la inscripción del matrimonio ya que la sentencia de divorcio española del primer matrimonio del interesado es de 21 de junio de 2016, según consta en la sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción núm. 1 de Martos, aportada por los interesados.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, manifestando que la sentencia de divorcio es de fecha 2 de febrero de 2012, aportando dicha sentencia.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73 de la Ley del Regis-

tro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3.^a de abril, 14-4.^a de mayo y 5-2.^a y 31-8.^a de octubre de 2001 y 1-2.^a y 19-1.^a de febrero, 15-1.^a de junio y 4 de julio de 2002; 20-3.^a y 24-3.^a de octubre de 2005; 27-1.^a de octubre de 2006 y 4-3.^a de 6 de junio de 2007 y 8-2.^a de enero de 2009.

II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...». Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV. En este caso el interesado pretende inscribir un matrimonio celebrado en Colombia el 20 de diciembre de 2013, el encargado del registro civil consular deniega la inscripción porque la sentencia española del primer matrimonio del interesado es de 21 de junio de 2016, según consta en la sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción núm. 1 de Martos, aportada por los interesados. Sin embargo en la documentación obrante en el expediente se observa que la sentencia de divorcio aportada por el interesado es de 2 de febrero de 2012 y en la inscripción marginal que consta en la certificación del anterior matrimonio del interesado, se dice «por escritura pública e 2 de febrero de 2012, autorizado por la notaría única del Círculo de la Tebaida, departamento de Quindío, República de Colombia, reconocida por resolución de fecha 18 de julio de 2016, dictada por el juez encargado del Registro Civil Central de Madrid, se ha establecido el divorcio de A. G. C. y M.-L. Z. O.», es decir que la inscripción marginal simplemente reconoce el divorcio del interesado que ya se produjo en 2012, en Colombia y no en España. Por tanto en este caso no concurre impedimento de ligamen.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso
2. Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en Colombia el 20 de diciembre de 2013 entre A. G. C. y S.-L. P. M.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 27 de enero de 2017 (20.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (24.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe

Resolución de 17 de febrero de 2017 (52.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (68.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (40.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (11.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (5.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (6.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 9 de marzo de 2017 (8.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (4.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (15.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (50.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 7 de abril de 2017 (16.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 21 de abril de 2017 (43.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 21 de abril de 2017 (46.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 5 de mayo de 2017 (12.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (9.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (27.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (13.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 30 de junio de 2017 (33.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

Resolución de 30 de junio de 2017 (34.^a). Matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe.

4.4.1.3 *Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado de acuerdo con la legislación de su anterior nacionalidad*

Resolución de 3 de marzo de 2017 (52.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero.—*No procede la inscripción porque, antes del matrimonio, el contrayente de nacionalidad española adquirida por residencia no obtuvo en expediente registral certificado de capacidad matrimonial. Se deniega también por falta de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio coránico remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Doña H. B. M., mayor de edad, nacida en Melilla de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 1986, presentó ante el Registro Civil Central solicitud de inscripción de su matrimonio contraído con Don M. B., mayor de edad de nacionalidad marroquí celebrado en N., Marruecos, el 31 de agosto de 2007. Acompañan a sus solicitud, certificados respectivos de nacimiento, marroquí en el caso de él, español en el de ella, copia de acta de matrimonio cuya inscripción se pretende, certificado de vigencia de la relación matrimonial, volante de empadronamiento de la interesada y certificado de residencia del interesado en Marruecos y declaración jurada de soltería de los interesados. En la copia de acta de matrimonio se identifica a la promotora con otro nombre al que consta en el registro civil, si bien se la identifica además con el DNI español de la promotora así como su fecha de nacimiento y filiación coincidente con las que constan en la certificación de nacimiento de la interesada.

II

El encargado del Registro Civil Central solicita mediante diligencia para mejor proveer que se requiera a los interesados a través del registro civil de su domicilio para que realicen declaración taxativa y que se aporte por éstos certificado de capacidad matrimonial expedido por el registro civil del domicilio del cónyuge español en España, obtenido antes de la celebración del matrimonio. Con fecha 2 de julio de 2014 se celebra, en el Registro Civil de Melilla, la audiencia reservada y por separado de los promotores, no aportándose el certificado de capacidad matrimonial solicitado por no haberse obtenido en su día.

III

Con fecha 7 de julio de 2014, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta Acuerdo por el que se deniega la inscripción del matrimonio de los promotores, indicándose en los fundamentos jurídicos de la resolución que «para los efectos del ordenamiento jurídico español, el supuesto se ha de calificar como de matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjera y, en estos casos, el artículo 252 del Reglamento del Registro Civil establece que cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero y esta Ley exige la presentación del certificado de capacidad matrimonial, es preciso aportar dicho certificado; sin embargo, en el caso que nos ocupa el esposo no lo aportó porque no tramitó el oportuno expediente ante el registro civil español de su domicilio».

IV

Notificados los interesados, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revocación del Acuerdo impugnado y la inscripción de su matrimonio.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesó su desestimación por informe de fecha 13 de junio de 2016 y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en su denegación y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 45, 49, 65, 73, 74 y 76 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 238, 245, 246, 247, 252, 256 y 358 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 («BOE» 16 mayo de 1988); la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las instrucciones de 9

de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las resoluciones, entre otras, de 29-2.^a de mayo de 1999, 17-2.^a de septiembre de 2001, 14-1.^a de junio y 1-2.^a de septiembre de 2005, 20-3.^a de marzo de 2007, 6-5.^a de mayo, 28-6.^a de octubre y 3-6.^a de noviembre de 2008.

II. Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero «con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración» (*cf.* art. 49-II CC) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (*cf.* art. 65 CC), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (*cf.* art. 256 núm. 3 RRC) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III. En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en N. (Marruecos) el día 31 de agosto de 2007 entre un ciudadano marroquí y una ciudadana española nacida en M. y adquirida la nacionalidad española por residencia en 1986. La interesada renunció en su momento a su anterior nacionalidad marroquí, y ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales la validez y eficacia de la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad de *facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (*cf.* art. 9 núm. 9 CC). Por tanto, para el ordenamiento jurídico español, se trata de un matrimonio de española celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 núm. 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial de la contrayente española. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se «interiorizan» las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de española de la contrayente,

no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

IV. Aunque lo expuesto en el anterior punto es suficiente por sí sólo para desestimar el recurso interpuesto denegando la inscripción solicitada, debe señalarse que los promotores ya presentaron en su día solicitud de autorización para contraer matrimonio ante el Registro Civil de Melilla el 29 de diciembre de 2006, habiéndose practicado las audiencias reservadas el 11 de diciembre de 2007. En este supuesto, tanto el encargado del registro civil como esta subdirección consideraron que el matrimonio cuya autorización se pretendía era nulo por falta de consentimiento. Debe además señalarse que en sus declaraciones los interesados no hicieron referencia al hecho de que ya se habían casado con arreglo a la ley marroquí en el agosto anterior. Pues bien, si en el momento de la celebración de las audiencias reservadas a juicio de esta subdirección no había consentimiento matrimonial, en el supuesto de que el matrimonio celebrado en agosto de 2007 hubiese reunido todos los requisitos formales o procedimentales, seguiría siendo nulo por falta de consentimiento matrimonial, sin que pudiese convalidarse ulteriormente este matrimonio por no ser un supuesto de nulidad del matrimonio de los previstos en el artículo 76 del código civil (arts. 6.3, 45, 73 y siguientes del CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de abril de 2017 (29.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero.— *Si el matrimonio se ha contraído cuando los dos contrayentes eran dominicanos y uno de ellos ha adquirido después la nacionalidad española, es inscribible la certificación dominicana porque no hay puntos de conexión que justifiquen la aplicación de las leyes españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado de España en Santo Domingo.

HECHOS

I

Doña S-M. R. R. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado de España en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 12 de marzo de 2014 con Don J. A. C. N. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en noviembre de 2014. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Mediante acuerdo de fecha 23 de junio de 2016, el encargado del registro civil consular deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe favorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, emitiendo un informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 26-1.^a de noviembre de 2001 y 24-1.^a de mayo, 29-3.^a de junio y 11-2.^a, 11-3.^a y 11-4.^a de septiembre de 2002 y 26-3.^a de febrero, 10-4.^a de octubre, 13-1.^a y 2.^a de noviembre de 2003 y 4.^a de 2 de junio de 2004.

II. El matrimonio anterior subsistente celebrado en el extranjero de quien ha adquirido después la nacionalidad española debe inscribirse en el registro civil español competente, siendo la vía normal para obtener la inscripción el certificado expedido por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º RRC).

III. Como en este caso los dos contrayentes eran dominicanos cuando se celebró el matrimonio (12 de marzo de 2014), el interesado obtuvo la nacionalidad española en noviembre de 2014 por lo que, su capacidad para contraer matrimonio se rige por su ley nacional (*cf.* art. 9-1 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1º. Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.
- 2º. Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Central el matrimonio contraído en La República Dominicana el 12 de marzo de 2014 entre Don J. A. C. N. y Doña S.-M. R. R.

Madrid, 21 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 12 de mayo de 2017 (10.^a). Inscripción matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (1.^a). Inscripción matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad.

4.4.2 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO POR EXTRANJEROS

Resolución de 24 de enero de 2017 (3.^a)

Matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros.–*No es inscribible el matrimonio celebrado en Senegal, por quien luego se hizo español, porque no hay certificación del registro correspondiente y porque en el expediente del artículo 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Don A. A. S. D., nacido en Senegal y de nacionalidad española adquirida por residencia el año 2015 presentó ante el Registro Civil Central solicitud de inscripción de su matrimonio contraído con Doña A. F. en Senegal, nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa, el 3 de septiembre de 2000. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio constatado y certificado de nacimiento del interesado y acta de nacimiento de la interesada, así como de los hijos que declaran tener en común.

II

Mediante auto de fecha 29 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que se trata de un matrimonio conforme a la costumbre musulmana, es decir, en forma consuetudinaria, y esa forma de matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial de nuestro país.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es conforme a Derecho. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2.^a de junio de 2001; 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de

2002; 13-3.^a de octubre de 2003; 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005 y 17-3.^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado de nacionalidad española desde el año 2014, pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Senegal en el año 2000, sin embargo la inscripción que es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del matrimonio.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cf.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Senegal en 2000.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España (*cf.* art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cf.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, los interesados aportan un «certificado de matrimonio constatado», en el que consta que los interesados contrajeron matrimonio, según la costumbre musulmana el 3 de septiembre de 2000, siendo el mismo registrado por la oficina de estado civil senegalesa, el 9 de diciembre de 2000. Este matrimonio se ha celebrado «según la costumbre musulmana», es decir en forma consuetudinaria. Este tipo de matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país, y así, como acertadamente expone el ministerio fiscal en su informe, no ha resultado acreditado, ni la autoridad ante quien se celebró el matrimonio, ni si éste se celebró en forma civil o religiosa, ni se ha practicado audiencia a la interesada a los efectos de examinar que no existe impedimento alguno que impida la celebración del matrimonio. Por todo ello no es susceptible de inscripción, ni tampoco de la anotación prevista en el artículo 271 del Reglamento o, a través de un expediente con valor de presunción (*cf.* art. 38-2.º LRC) de la regulada por los artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

**4.4.3 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL
EXTRANJERO POR MENOR DE EDAD**

(No hay Resoluciones para este apartado)

4.5 Matrimonio civil celebrado en España

4.5.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL CELEBRADO EN ESPAÑA

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (20.^a)

Inscripción de matrimonio civil celebrado en España.—1.º *Para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte, sin haberse tramitado por razones de urgencia el expediente previo (cfr. art. 52 CC), es necesario comprobar que no existen impedimentos legales mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas.*

2.º *Se deniega la inscripción porque en el expediente posterior no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la celebración (cfr. art. 65 CC).*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio civil celebrado en peligro de muerte remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del juez encargado del Registro Civil de San Cristóbal de la Laguna.

HECHOS

I

Doña R.-M.-V. D. G., nacida en España y de nacionalidad española, comparece el 16 de noviembre de 2016 en el Registro Civil de San Cristóbal de la Laguna, solicitando autorización para contraer matrimonio en peligro de muerte con Don D. N. M., quien se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de C., manifestando que ella es divorciada y él es soltero. Aportan como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento y fe de vida y estado y documentación clínica del interesado.

II

Una vez examinada la documentación clínica por el médico forense, éste refiere que el interesado se encuentra en tratamiento paliativo por cáncer con pronóstico malo por lo que se recomienda se acceda al trámite iniciado. El ministerio fiscal, no se opone a lo solicitado. Se celebra el matrimonio con fecha 18 de noviembre de 2016 en el Hospital Universitario de C. en presencia del encargado del registro civil, el médico forense y dos testigos.

III

Mediante providencia de fecha 25 de noviembre de 2016 el encargado del registro civil acuerda practicar nueva comparecencia en el centro hospitalario con la finalidad de que el interesado aclare la contradicción existente en cuando a las manifestaciones sobre su estado civil al tiempo de inicio del procedimiento y lo que figura en la aplicación Inforeg, concretamente en la certificación literal de nacimiento de uno de los hijos del mismo Don J.-C. N. M., figura que el estado civil del promotor es el de casado, matrimonio que tuvo lugar en C. el 21 de febrero de 1972 con Doña A. M. T., según certificación legal. Mediante auto de fecha 29 de noviembre de 2016 el encargado del registro civil deniega la inscripción del matrimonio ya que no existe ningún documento que acredite la falta de certeza del hecho que consta en el Registro al no ser el promotor soltero o divorciado legalmente en España. El interesado fallece el 27 de noviembre de 2016

IV

Notificada la interesada, ésta, interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y aportando una sentencia de divorcio del interesado.

V

De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida al constar que uno de los contrayentes estaba ligado por vínculo matrimonial previo. El encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7,

44, 45, 52, 53, 56, 65 y 73 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 245, 246, 253, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 31 de marzo de 1987 y 19-1.^a de enero de 2004.

II. Para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte es necesario, puesto que no ha podido tramitarse el expediente previo, que se compruebe, antes de la inscripción, que concurren los requisitos legales exigidos para la celebración (*cf.* art. 65 CC), lo cual ha de hacerse mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas, que lleve al convencimiento de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad (*cf.* art. 256 RRC), o mediante expediente, cuando no se haya extendido la oportuna acta (*cf.* art. 257 RRC).

III. El matrimonio celebrado con fines distintos de aquellos para los que está pensada la institución es indudablemente nulo en nuestro derecho (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de matrimonios celebrados con otros fines y su inscripción en el registro civil, es esencial el trámite de las audiencias reservadas y por separado previsto en el artículo 246 RRC como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando exista una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso se celebra un matrimonio en peligro de muerte el 18 de noviembre de 2016 pero es denegada su inscripción en el registro civil por el encargado del mismo ya que para inscribir un matrimonio es necesario que se compruebe antes de la inscripción, que concurren los requisitos legales necesarios. En este caso en la inscripción de nacimiento de uno de los hijos del interesado éste aparece como casado, matrimonio que tuvo lugar en C. el 21 de febrero de 1972 con Doña A. M. T., no existiendo ningún documento que acredite la falta de certeza del hecho que consta en el Registro. El interesado fallece el 26 de noviembre de 2016. Se aporta una sentencia de divorcio del interesado pero ésta no consta inscrita en el registro español, por lo que según el principio de legalidad básico en el registro civil, este segundo matrimonio no puede acceder al registro civil mientras no se acredite eficazmente la disolución del vínculo matrimonial previo. Todo lo cual no obsta para que el matrimonio celebrado pueda inscribirse una vez acreditado tal extremo mediante la aportación de testimonio apostillado de la sentencia extranjera de divorcio.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil DE San Cristobal de la Laguna (Tenerife).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (15.^a)

Inscripción de matrimonio civil celebrado en España.–1.º *Para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte, sin haberse tramitado por razones de urgencia el expediente previo (cfr. art. 52 CC), es necesario comprobar que no existen impedimentos legales mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas.*

2.º *Se deniega la inscripción porque en el expediente posterior no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la celebración (cfr. art. 65 CC).*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio civil celebrado en peligro de muerte remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del juez encargado del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

I

Doña M.-L. O. R. nacida en España y de nacionalidad española, y D. G.-J. R. C., nacido en España y de nacionalidad española, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil, interesando que éste se celebrara en el Ayuntamiento de Valencia. Aportan como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. El ministerio fiscal informa favorablemente. El encargado del registro civil autoriza la celebración del matrimonio, mediante auto de 31 de enero de 2017.

III

El 24 de febrero de 2017 comparece la interesada en el registro civil solicitando la inscripción del matrimonio aportando la escritura de matrimonio legalizada y autorizada por el notario señor D. J. B., con la escritura también aporta un certificado médico de fecha 10 de febrero de 2016, donde se certifica que el promotor se encuentra en estado muy grave pero consciente y con juicio para prestar consentimiento matrimonial. El matrimonio se celebró el 11 de febrero de 2017, según la interesada «por la tarde» y el promotor fallece el mismo día a las 22.10 horas.

IV

Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2017 el encargado del Registro Civil de Valencia deniega la inscripción del matrimonio ya que de la calificación del documento no se observan los requisitos legales para su celebración, toda vez que en el acta aportada se observa que el certificado médico aportado hace dudar de la realidad del hecho y de su legalidad habida cuenta que amén de ser un certificado médico oficial y privado certifica que «el paciente G.-J R. C. padece en el momento actual de enfermedad muy grave encontrándose en estado crítico con pronóstico reservado... se encuentra consciente» tal certificado lleva la fecha de 10 de febrero de 2016. El acta notarial en su encabezamiento lleva fecha de 11 de febrero de 2017, no consta la hora y carece de nota aclaratoria alguna de la imposibilidad de aportar parte médico alguno que acredite la capacidad natural de uno de los contrayentes para prestar el consentimiento, así como las declaraciones complementarias oportunas como hubiese sido el parte médico del facultativo de planta que le asistía en el hospital donde se supone que estaba ingresado para dar validez al requisito de capacidad.

V

Notificada la interesada, ésta interpone recurso alegando que hubo un error en la fecha del certificado médico aportado. Aportando la escritura notarial de matrimonio y el certificado médico con la fecha corregida. El 28 de abril de 2017 la interesada presenta un nuevo escrito desistiendo de su solicitud de recurso aportando «escritura notarial de matrimonio concluida «solicitando la inscripción del matrimonio en base a la misma. El encargado del registro civil deniega mediante auto de fecha 8 de junio de 2017 la inscripción del matrimonio.

VI

Notificada la interesada ésta interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

VII

Notificado el ministerio fiscal éste interesa la desestimación del recurso y la confirmación del auto apelado. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 7, 44, 45, 52, 53, 56, 65 y 73 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 245, 246, 253, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 31 de marzo de 1987 y 19-1.^a de enero de 2004.

II. Para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte es necesario, puesto que no ha podido tramitarse el expediente previo, que se compruebe, antes de la inscripción, que concurren los requisitos legales exigidos para la celebración (*cf.* art. 65 CC), lo cual ha de hacerse mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas, que lleve al convencimiento de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad (*cf.* art. 256 RRC), o mediante expediente, cuando no se haya extendido la oportuna acta (*cf.* art. 257 RRC).

III. El matrimonio celebrado con fines distintos de aquellos para los que está pensada la institución es indudablemente nulo en nuestro derecho (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de matrimonios celebrados con otros fines y su inscripción en el registro civil, es esencial el trámite de las audiencias reservadas y por separado previsto en el artículo 246 RRC como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (*cf.* arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando exista una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (*cf.* art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso los interesados solicitan autorización para contraer matrimonio en el Registro Civil de Valencia presentando la documentación requerida y haciendo constar que quieren celebrar el matrimonio en el Ayuntamiento de Valencia. El encargado autoriza la celebración del matrimonio. Sin embargo por encontrarse en peligro de muerte el promotor el matrimonio se celebró ante el notario de Valencia D. J. B. el día 11 de febrero de 2017, no consta en dicha escritura la hora de la celebración, el interesado fallece el

mismo día de la celebración del matrimonio a las 22.10 horas. La interesada insta la inscripción de matrimonio presentado la escritura notarial y un certificado médico donde se hace constar que el contrayente estaba consciente y lúcido y conocimiento para prestar consentimiento, la fecha de dicho certificado es de 10 de febrero de 2016, aunque posteriormente fue rectificado en el sentido de que la fecha que constaba era errónea en la mención del año y que la correcta era el 10 de febrero de 2017. Previamente a la rectificación de la fecha del certificado el encargado del registro civil deniega la inscripción del matrimonio. No se ha aportado certificado médico que acredite que el interesado estuviera en condiciones de prestar consentimiento en el momento de la celebración, es decir el 11 de febrero de 2017 por la tarde, el certificado del día anterior no acredita que reuniera las condiciones para prestar consentimiento válido el día siguiente, de hecho falleció el mismo día 11 poco tiempo después de celebrarse el matrimonio. Por ello hay dudas sobre la validez del matrimonio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

4.6 Capitulaciones matrimoniales

4.6.1 RECURSOS SOBRE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Resolución de 3 de marzo de 2017 (46.ª)

Recursos sobre capitulaciones matrimoniales.—*No tienen acceso al registro civil las capitulaciones matrimoniales que no contienen pactos que modifiquen el régimen económico del matrimonio.*

En las actuaciones sobre indicación de capitulaciones matrimoniales en inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Sevilla el 13 de febrero de 2015, Don C. D. M., con domicilio en la misma localidad, solicitaba la práctica de indicación marginal de capitulaciones matrimoniales otorgadas ante notario en su inscripción de matrimonio con Doña C-M. P. C., celebrado en L. (Francia) el 18 de diciembre de 1971, que figura registrado en el consulado correspondiente. Aportaba escritura de capitulaciones otorgada ante notario en Sevilla el 9 de enero de 2015.

II

Remitido el expediente al Registro Civil Central, el encargado dictó providencia el 23 de abril de 2015 denegando la práctica de la indicación solicitada porque las capitulaciones otorgadas no suponen un cambio del régimen de sociedad de gananciales por el que se ha regido el matrimonio hasta el momento, sino que únicamente tienen por objeto el estableci-

miento de una serie de reglas a aplicar en la liquidación de la sociedad cuando esta se disuelva por causa de muerte.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el Código Civil prevé que en capitulaciones matrimoniales los otorgantes puedan estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualquier otra disposición por razón del mismo, que el mismo texto legal prevé la mención de las capitulaciones que se hayan otorgado en la inscripción de matrimonio sin distinguir si dichas capitulaciones deben tener por objeto la modificación del régimen matrimonial y que la Ley del Registro Civil dispone que, junto a la inscripción de matrimonio, se hagan constar los pactos y demás hechos que le puedan afectar.

IV

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 1.325 y 1.333 del Código Civil (CC), 77 de la Ley del Registro Civil (LRC), 266 de su reglamento (RRC) y las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de septiembre de 1995, 19-4.^a de junio de 2003, 22-5.^a de noviembre de 2005 y 5-1.^a de mayo de 2011.

II. Pretenden los interesados que tengan acceso al registro civil unas capitulaciones matrimoniales que no modifican el régimen matrimonial preexistente y que únicamente tienen por objeto establecer una serie de reglas para la liquidación de la sociedad de gananciales en el momento en que se disuelva por causa de muerte. El encargado del registro denegó la práctica del asiento porque las mencionadas capitulaciones no suponen un cambio del régimen económico del matrimonio.

III. Las capitulaciones matrimoniales son un contrato accesorio del matrimonio que tiene por fin fijar el régimen económico del consorcio conyugal, siendo este el objeto de la publicidad que brinda el registro civil. Dicho de otro modo, en el registro civil no se inscriben las capitulaciones matrimoniales en todo caso sino solo aquellas en las que se establece el régimen económico matrimonial, su modificación o su sustitución, de manera que no es aplicable a este caso el artículo 77 de la Ley del Registro Civil (cabe apuntar aquí que el art. 60 de la nueva Ley del Registro Civil de 2011 invocado por el recurrente aún no ha entrado en vigor) que regula la indicación, al margen de

la inscripción de matrimonio, de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Las capitulaciones pueden contener «*cualesquiera otras disposiciones por razón de matrimonio*» (*cfr.* art. 1325 CC), como disposiciones que por vía de donación o de cualquier otro acto uno de los cónyuges hace a favor del otro o las que les hace un tercero, que en modo alguno son objeto de publicidad en el registro civil, sin perjuicio de que algunas de ellas deban inscribirse en el Registro de la Propiedad. Es evidente que las reglas aplicables a la liquidación de la sociedad de gananciales quedan al margen de la publicidad registral, pues no determinan ni la constitución formal de un régimen económico de sociedad conyugal (*cfr.* art. 1315 CC) ni una modificación del ya existente (*cfr.* arts. 77 LRC y 1333 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

4.7 Competencia

4.7.1 COMPETENCIA EXPEDIENTES DE MATRIMONIO

Resolución de 24 de marzo de 2017 (14.^a)

Competencia en expedientes de matrimonio.—*Tratándose de matrimonio celebrado en el extranjero y estando el promotor domiciliado en España, es competente para calificar el encargado del Registro Civil Central, por lo que se declara la nulidad de la decisión del encargado del registro municipal que no ha dado trámite a la petición.*

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, Don J. P. B. B., nacido en India y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2000, solicitaba la inscripción de su matrimonio celebrado en India, el 18 de abril de 1975 con Doña S. J. B., nacida en India y de nacionalidad india. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y permiso de residencia de la interesada.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan asistieron a la celebración del matrimonio y desconocen si el matrimonio se ha inscrito en el registro civil de India. El ministerio fiscal se opone a lo interesado por los promotores. El juez encargado

del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, mediante auto de fecha 16 de junio de 2016, deniega la inscripción del matrimonio al no estar suficientemente probada la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto siendo el auto apelado ajustado a Derecho. El juez encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2.^a de junio de 2001; 9-2.^a y 24-2.^a de mayo de 2002; 13-3.^a de octubre de 2003; 17-2.^a de febrero, 31-5.^a de mayo y 2-2.^a de noviembre de 2004; 16-2.^a de noviembre de 2005 y 17-3.^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2000 pretende inscribir un matrimonio que se celebró en India, en 1978. El encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, mediante auto de fecha 16 de junio de 2016, deniega la inscripción de matrimonio al no estar lo suficientemente probada la celebración del matrimonio.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (*cfr.* arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central. por estar el promotor domiciliado en España. (*cfr.* art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (*cfr.* arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos».

V. En el caso actual, el encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, ha dictado auto denegado la inscripción del matrimonio, no siendo

su competencia, ya que ésta corresponde al encargado del Registro Civil Central al tratarse de un matrimonio celebrado en el extranjero.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad de la decisión del encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, que no ha dado trámite a la petición, es decir que el expediente debe enviarse al Registro Civil Central competente para resolver.

Madrid, 24 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (1.ª)

Competencia en expedientes de matrimonio.—*La competencia del registro civil para instruir un expediente de autorización de matrimonio viene determinada en función del domicilio de los contrayentes (artículo 238 del RRC) por lo que debe quedar acreditada la residencia efectiva de al menos uno de ellos en el municipio correspondiente.*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil de Palencia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Palencia Don V. R. M. nacido en España y de nacionalidad española y Don J. V. O. nacido en Bélgica y de nacionalidad belga, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del señor R., donde figura que reside en P. y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del señor V. O. donde figura que reside en Bélgica.

II

Los interesados fueron citados para comparecer y practicar las audiencias reservadas el 29 de septiembre de 2016, llegado el día, éstos presentaron un escrito interesando nuevo señalamiento que les fue fijado para el 9 de enero de 2017, con fecha 4 de enero de 2017

presentaron un nuevo escrito interesando un cambio de señalamiento por indicar que vivían y trabajaban en Bélgica. A la vista de lo manifestado se pasó el expediente al ministerio fiscal a fin de que a la vista de que los interesados tienen el domicilio real en Bélgica el competente sería el Consulado de España en Bélgica, informe sobre la conveniencia de trasladar el expediente matrimonial al citado consulado. El ministerio fiscal no se opone a la posible competencia para tramitar el expediente por el Consulado de España en Bélgica. Con fecha 17 de enero de 2017 el encargado del registro civil dicta auto mediante el cual remite el expediente al Consulado de España en Bélgica por ser el competente para la tramitación del expediente y ello con independencia del empadronamiento del señor R. el cual tiene naturaleza administrativa.

III

Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio alegando que el señor R. vive en P. y quien vive en Bélgica es el señor V. O.

IV

Notificado el ministerio fiscal, de la interposición del recurso, éste interesa su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, manteniéndose en su anterior informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 40, 51 y 57 del Código Civil y los artículos 238 y 247 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 11-4.^a y 12-1.^a de enero y 12-4.^a de diciembre de 2007; 14-6.^a de octubre de 2008; y 30-9.^a de abril de 2009.

II. Pretenden los solicitantes, español y belga obtener autorización para contraer matrimonio civil en la localidad de P., alegando que el señor R. vive allí, ya que el señor V. O. vive en Bélgica. Sin embargo después de ser citados varias veces por el Registro Civil de Palencia para efectuar las entrevistas en audiencia reservada, los interesados presentaron varios escritos para cambiar las fechas señaladas por el registro civil alegando que vivían y trabajaban en Bélgica, por lo que a la vista de la documentación obrante en el expediente se dictaminó que el competente para instruir y tramitar el expediente era el Consulado de España en Bélgica, por lo que se dictó auto el 17 de enero de 2017 así acordándolo. Dicho auto fue notificado al domicilio de la madre de uno de los solicitantes en la calle P. O., núm. 1 en P., pasados quince días desde la notificación, el 1 de marzo de 2017 fue declarado firme por cómputo de plazos y remitido al Consulado de España en Bélgica para que tramitasen el

expediente matrimonial por ser el competente. Los interesados interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, de forma telemática contra el auto del encargado del Registro Civil de Palencia. El informe final del encargado confirma el auto apelado declarando que es competente el Consulado de España en Bélgica por tener los interesados el domicilio allí, y todo ello independientemente del empadronamiento del señor R. el cual tiene naturaleza administrativa.

III. De acuerdo con el artículo 238 RRC, la competencia para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio corresponde al encargado del registro civil correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. En este sentido, hay que señalar que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se ha de entender invocado por la legislación del registro civil en general y por el artículo 238 RRC en particular, se encuentra definido en el artículo 40 CC, conforme al cual «el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual», esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. En consecuencia, corresponde al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y de las circunstancias acreditadas, como, por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia –no de mera estancia– respecto de los extranjeros, etc. (*vid.* sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (*cf.* art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (*cf.* art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (*cf.* arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral.

IV. A la vista de estas circunstancias, y de todo lo expuesto anteriormente, no se considera acreditada la residencia efectiva de los interesados ya que a tenor de los certificados de empadronamiento aportados y sus propias declaraciones los interesados viven en Bélgica, aunque el señor R. presente un certificado de empadronamiento en P.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por los interesados y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Palencia.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (13.ª)

Competencia en expedientes de matrimonio.—*Es competente el Juez de Paz de una localidad, bajo la dirección del encargado y por delegación de éste, para instruir el expediente previo al matrimonio y para autorizar o denegar su celebración (art. 239 del RRC).*

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto del encargado del Registro Civil de Cella.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el registro civil, Doña L. V. P. nacida en España y de nacionalidad española y Don P. M. O., nacido en España y de nacionalidad española, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil en C. (Teruel). Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Mediante oficio de fecha 26 de julio de 2016 se remite el expediente a la fiscalía de la Audiencia provincial de Teruel para que emita el preceptivo informe. El ministerio fiscal nada opone a la celebración del matrimonio. Mediante auto de fecha 2 de agosto de 2016 el encargado del juzgado de paz de C., autoriza la celebración del matrimonio.

III

Notificados los interesados, y el ministerio fiscal (fiscalía provincial de Teruel) éste interponen recurso, solicitando la nulidad de actuaciones ya que se han infringido las normas de procedimiento en tanto se ha sustanciado el expediente sin la preceptiva dirección del juzgado de primera instancia encargado del Registro Civil de Teruel, que se viene realizando de ordinario por todos los juzgados de paz de Teruel, y que en este caso ha dado lugar a la inusual notificación que se pretende a la fiscalía, que no se admite siendo el registro civil del juzgado de primera instancia quien ha de autorizar el expediente una vez recabada la documentación legal por el juzgado de paz correspondiente y también será el Registro Civil de Teruel quien ha de efectuar la notificación de la conclusión en forma de dicho expediente al ministerio fiscal, remitiendo a fiscalía el expediente completo y no en el modo en que se ha realizado sin perjuicio de la validez del mismo en cuanto al fondo de la pretensión de los contrayentes y de los documentos aportados. Por tanto se solicita la nulidad de actuaciones elevándose el expediente debidamente tramitado al Registro Civil de Teruel donde se dispondrá lo procedente para la continuación en relación con el matrimonio solicitado.

IV

Notificados los interesados, éstos no formulan alegaciones y solicitan se dicte inmediatamente resolución. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2.ª de diciembre de 2005; 31-3.ª de mayo, 27-3.ª y 4.ª de junio, 10-4.ª, 13-1.ª y 20-3.ª de julio, 1-4.ª, 7-3.ª y 9-2.ª de septiembre, 9-1.ª, 3.ª y 5.ª de octubre, 14-2.ª, 5.ª y 6.ª de noviembre y 13-4.ª y 5.ª de diciembre de 2006; 25-1.ª, 3.ª y 4.ª de enero, 2-1.ª, 22-2.ª, 27-3.ª y 28-4.ª de febrero, 30-5.ª de abril, 28-6.ª y 30-4.ª de mayo, 11-3.ª y 4.ª, 12-3.ª de septiembre, 29-4.ª y 6.ª de noviembre, 14-1.ª y 4.ª y 26-5.ª de diciembre de 2007, 24-4.ª de abril y 19-2.ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (*cf.* art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (*cf.* arts. 45 y 73-1.º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (*cf.* art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil de dos ciudadanos españoles en el juzgado de paz de C. (Teruel) el ministerio fiscal no se opone al matrimonio y el encargado del juzgado de paz dicta auto autorizando el matrimonio. El ministerio fiscal interpone recurso solicitando la nulidad de actuaciones alegando que se ha sustanciado el expediente sin la dirección del juzgado de primera instancia encargado del Registro Civil de Teruel, sin embargo según el artículo 47 del Reglamento del Registro Civil «corresponde a los jueces de primera instancia, ilustrar y dirigir a los jueces de paz, aclarando sus dudas, corrigiendo sus errores dándoles las instrucciones necesarias para el desempeño de su cometido y encareciéndoles la máxima diligencia y la consulta en los casos dudosos». Según este artículo no se ha vulnerado ninguna de las instrucciones que al respecto y con carácter general se han dictado por la Dirección General de los Registros y del Notariado (directriz primera de la Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre autorización del matrimonio civil por los alcaldes). Por otro lado según el artículo 239 del Reglamento del Registro Civil «el Juez de Paz es competente, bajo la dirección del encargado y por delegación de éste, para instruir el expediente previo al matrimonio y para autorizar o denegar su celebración. Firme el auto favorable dictado por el Juez de Paz y si los interesados hubiesen solicitado que el alcalde autorice el matrimonio, se celebrará el casamiento ante él, quien levantará acta con todos los requisitos exigidos en el Código Civil y en esta legislación y la remitirá inmediatamente al registro de la localidad para su inscripción».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 13 de octubre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Cella (Teruel).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 6 de octubre de 2017 (4.^a). Competencia en expedientes de matrimonio.

Resolución de 27 de octubre de 2017 (12.^a). Competencia en expedientes de matrimonio.

5. DEFUNCIÓN

5.1 Inscripción de la defunción

5.1.1 INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN FUERA DE PLAZO

Resolución de 24 de enero de 2017 (47.^a)

Inscripción de la defunción fuera de plazo.—*Correspondiendo a la autoridad judicial militar instruir y resolver el expediente cuando el fallecimiento ha ocurrido en campaña, se declara la nulidad de las actuaciones seguidas ante órgano incompetente para decidir sobre la inscripción de defunción de un soldado fallecido durante la guerra civil española.*

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de defunción remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

Doña E. H. D., mayor de edad y domiciliada en M. (Badajoz), comparece en el registro civil de dicha población a fin de solicitar que se inscriba en ese registro la defunción de su tío A. D. M. exponiendo que, acaecida el 31 de diciembre de 1938, no consta inscrita en ningún registro y acompañando copia simple de DNI propio, de escrito fechado en junio de 1989 por el que su madre pide al Gobierno Militar de M. certificado de defunción de su hermano o información sobre donde obtenerlo y de respuesta recibida, de instancia dirigida en junio de 1943 por su abuela materna a la Comisión Liquidadora del Batallón de S. F. interesándose por los trámites a seguir para percibir los haberes de su hijo, fallecido a causa de las heridas recibidas en el Frente, y la pensión que a ella le corresponde, de papeleta de alistamiento del difunto en 1938, para el reemplazo de 1941, y de posterior exclusión por

haber fallecido en campaña y de telegrama de fecha 21 de enero de 1939 por el que los mandos militares comunican al padre el fallecimiento de su hijo soldado.

II

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Llerena (Badajoz) en fecha 31 de octubre de 2013, por la juez encargada se acordó remitir al Registro Civil de Madrid exhorto, en el que se indica que el deceso acaeció en el Hospital Militar de C., a fin de que se aporte certificado de defunción o, en su defecto, certificado negativo, el 5 de marzo de 2014 el Registro de Madrid expidió certificación negativa de defunción en el tiempo comprendido entre el 31 de diciembre de 1938 y el 31 de enero de 1939, el ministerio fiscal informó que nada opone a la inscripción de defunción fuera de plazo y el 31 de marzo de 2014 el juez encargado del Registro Civil de Llerena informó que, conforme establece el art. 342 del Reglamento del Registro Civil, corresponde resolver el expediente al Registro Civil de Madrid.

III

Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de Madrid en fecha 9 de abril de 2014, el ministerio fiscal interesó que se notifique a las personas interesadas, requerida a tal fin la promotora en el Registro Civil de procedencia, designó a una hermana, domiciliada en S. J. D. (Barcelona) y manifestó que el fallecido tiene otros sobrinos cuyos datos no puede facilitar porque no mantiene contacto con ellos, por la encargada de Madrid se dispuso notificar a la hermana, diligencia que se practicó el 24 de julio de 2014 en el registro civil de su domicilio, y dar traslado al ministerio fiscal, este interesó que se oficie al Archivo Histórico del Ministerio de Defensa para que aporte los antecedentes que consten respecto al fallecimiento y este informó que no le ha sido transferida la documentación específicamente referida a los fallecidos en campaña y que los Archivos Históricos de los respectivos Ejércitos conservan documentación (hojas de servicio) de militares profesionales y tropa.

IV

El ministerio fiscal informó que, suficientemente acreditado por la documentación aportada el fallecimiento en M. el 31 de diciembre de 1938, no se opone a la inscripción de defunción solicitada y el 18 de marzo de 2015 el juez encargado del Registro Civil de Madrid, razonando que los documentos aportados, esencialmente de naturaleza militar, no permiten determinar con suficiente grado de certeza si el fallecimiento fue en el Hospital «G. U.» o en el frente y, en este último caso, en qué frente, dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada por no cumplirse la exigencia legal y reglamentariamente establecida respecto a la prueba del fallecimiento en términos que excluyan cualquier duda racional.

V

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que los documentos aportados, no exclusivamente militares, determinan inequívocamente el fallecimiento de su tío a consecuencia de heridas recibidas en campaña y, además, se da el informe favorable del

ministerio fiscal exigido por el art. 278 del Reglamento del Registro Civil y que asimismo es de aplicación al caso la disposición adicional octava de la Ley 20/2011, de 20 de julio, del registro civil, que regula la inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura, y aportando certificación literal de inscripción de nacimiento de A. D. M., nacido en M. el 24 de julio de 1920.

VI

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, reiterando su informe anterior, se adhirió al recurso e interesó la inscripción de defunción solicitada y el juez encargado del Registro Civil de Madrid informó que en el expediente han quedado acreditados el hecho del fallecimiento en campaña y la fecha en que este acaeció pero que, respecto al lugar, se ha establecido la relación con M. a partir del dato más reciente y menos fiable de defunción por enfermedad en el Hospital G. U. cuando el telegrama informando al padre del deceso fue remitido por los mandos militares desde la localidad de A. (Badajoz); y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ); 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 86 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 68, 278, 279 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 13 de mayo y 25 de noviembre de 1961, 19 de enero y 12 de mayo de 1962, 1 de agosto de 1970, 13 de septiembre y 5 de diciembre de 1972; 24 de enero, 17 de septiembre, 6 de noviembre y 18 de diciembre de 1979; 6 de mayo de 1980, 28 de septiembre de 1982 y 5-10.^a de mayo de 2014.

II. Solicita la promotora que se inscriba fuera de plazo en el Registro Civil de Malcocinado (Badajoz) la defunción de un tío suyo exponiendo que acaeció el 31 de diciembre de 1938 y que no está inscrita en ningún registro, elevadas las actuaciones al Registro Civil de Llerena, el juez encargado instruye el expediente y lo remite al Registro Civil de Madrid por entender que es el competente para resolver, y el juez encargado de Madrid, considerando que los documentos aportados no permiten determinar con suficiente grado de certeza si el fallecimiento fue en el Hospital «G. U.» de esa población o en el frente y, en este último caso, en qué frente, dispone desestimar la petición formulada mediante auto de 18 de marzo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la promotora y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. Habida cuenta de que de la documental aportada resulta que el fallecimiento acaeció en campaña durante la guerra civil española y que el difunto era un soldado integrado en una unidad militar, ha de considerarse que, con-

forme dispone el art. 279 RRC y recoge la doctrina de la Dirección General, corresponde a la autoridad judicial militar instruir y resolver el expediente de inscripción de defunción cuando el cadáver ha desaparecido o ha sido inhumado y, en consecuencia, el recurso interpuesto debe decidirse declarando la nulidad de las actuaciones seguidas ante órgano incompetente (cfr. arts. 238 y 240 LOPJ y 48 LEC, aplicables en este ámbito en virtud de la remisión contenida en el art. 16 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad de lo actuado, a salvo la posibilidad de que la promotora ejercite su derecho ante el órgano que corresponda.

Madrid, 24 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

6. TUTELAS

6.1 Inscripción de tutelas

6.1.1 RECURSOS SOBRE TUTELA, PATRIA POTESTAD Y EMANCIPACIÓN

Resolución de 21 de julio de 2017 (21.ª)

Recursos sobre tutela, patria potestad y emancipación.–1.º *La tutela de un menor en situación de desamparo declarada y asumida por una entidad pública administrativa por ministerio de la ley, radicalmente distinta de la tutela judicial ordinaria, no es susceptible de inscripción (cfr. art. 218 CC).*

2.º *Tampoco es inscribible la suspensión de la patria potestad ligada a dicha tutela porque no es una suspensión absoluta, sino una consecuencia legal de la situación de hecho de desamparo.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de una tutela administrativa remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la entidad pública promotora contra resolución de la encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca el 11 de noviembre de 2015, Doña M. F. L. C., directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), solicitaba la inscripción en el registro civil de la tutela administrativa declarada por resolución de 16 de enero de 2015 del organismo al que representa en relación con una menor de edad cuya guarda y la de su madre, también menor en aquel momento, estaban delegadas en la dirección de un centro materno infantil de la provincia de Salamanca en la que ambas

residían desde el nacimiento de la niña. Aportaba copia de la resolución de la tutela que se pretendía inscribir.

II

La encargada del registro dictó providencia el 11 de noviembre de 2015 ordenando la devolución de la documentación por considerar que una tutela administrativa como la declarada por el ICASS en este caso no es un hecho inscribible.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que la tutela declarada supone una suspensión de la patria potestad, que es un hecho inscribible porque afecta a la representación legal de la menor y que así está recogido en el artículo 75 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del registro civil, cuya entrada en vigor estaba prevista en ese momento para el 1 de julio de 2017.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Salamanca se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los Artículos 39 de la Constitución Española (CE); 154, 170, 172, 218 y 239 del Código Civil (CC); 1, 46 y 88 de la Ley del Registro Civil (LRC); 180, 284 y 355 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RRC); la resolución de consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de noviembre de 2003 y las resoluciones de 22 de junio de 1996, 30-. de mayo de 2006 y 12-5.^a de diciembre de 2007.

II. Se plantea en este expediente si es o no inscribible en el registro civil la suspensión de la patria potestad y consiguiente asunción de la tutela por parte de una entidad pública de protección de menores.

III. La asunción por parte de una entidad pública de las funciones de tutela respecto de un menor viene impuesta por una circunstancia de hecho a la que la administración tiene que hacer frente por virtud de las obligaciones que le impone la Constitución en orden a asegurar la protección social y económica de los menores (*cf.* art. 39 CE). Aunque el artículo 172 CC se refiera a esa función protectora como una tutela asumida por ministerio de la ley, tal circunstancia, que exige la previa apreciación por parte de los poderes públi-

cos de la existencia de una situación de desamparo, no puede ser asimilada a la tutela ordinaria propiamente dicha, que surge como consecuencia de un acto expreso de constitución –la resolución judicial– y que sí es inscribible en el registro civil porque afecta al estado civil de las personas (*cf.* art. 218 CC). Ese acto de constitución falta, por definición, en la tutela legal prevista en el artículo 172 CC.

IV. El Código Civil es determinante al establecer que «*Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el registro civil*» (art. 218), de donde también se desprende la no aplicación del precepto a un caso como el aquí planteado. Por otro lado, esta tutela por ministerio de la ley debe considerarse supletoria, en el sentido de que, en defecto de patria potestad, deberá procederse al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para él (art. 239 CC), lo que implica que la tutela asumida por las entidades públicas no es propiamente la tutela ordinaria a la que se refiere el artículo 218 del Código Civil, sino la consecuencia que, en orden a la protección del menor y por imperio de la ley, se produce cuando existe una situación de desamparo.

V. Esa situación de desamparo es la que, *de facto*, desencadena todo el procedimiento protector, debiendo cesar tan pronto como desaparezca la causa que la motivó. Teniendo en cuenta que únicamente la autoridad judicial puede adoptar medidas de privación total o parcial de la patria potestad sobre los menores (*cf.* art. 170 CC), hay que concluir que la suspensión a la que se refiere el artículo 172 CC es solo consecuencia del hecho del desamparo o, lo que es igual, se declara el desamparo precisamente porque no se están ejerciendo las obligaciones que la patria potestad conlleva, lo que conduce a la suspensión en su ejercicio pero no en su titularidad, como demuestra el hecho de que no cesan totalmente las facultades de representación sobre el menor desamparado (*cf.* art. 172.1, párrafo tercero, CC). En todo caso, los padres han de poder, si la situación de desamparo desapareciera, solicitar el auxilio de la autoridad judicial para recuperar al menor desamparado (*cf.* art. 154 CC), sin perjuicio de que también puedan confiar su guarda a la entidad pública (art. 172 bis CC). Son estas notas de provisionalidad, junto a la circunstancia de venir impuesta por la realidad de los hechos más que por un acto de autoridad, las que llevan forzosamente a la conclusión de que la tutela administrativa asumida por ministerio de la ley no es inscribible, como tampoco lo es la causa –y al mismo tiempo efecto– de esa situación de desamparo, es decir, la suspensión de la patria potestad.

VI. Cabe señalar, por último, que la entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2017 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, a cuyo artículo 75 se alude en el escrito de recurso, se ha visto diferida al 1 de julio de 2018 en virtud de la reciente Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Salamanca.

7. RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y TRASLADO DE INSCRIPCIÓN

7.1 Rectificación de errores

7.1.1 RECTIFICACIÓN DE ERRORES ARTÍCULOS 93 Y 94 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL

Resolución de 27 de enero de 2017 (16.^a)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.-1.º *Cuando los errores son múltiples y referidos a datos que suscitan cuestión previa sobre la identidad de persona entre la promotora del expediente y la madre del inscrito y afectan a la filiación de este, la rectificación ha de obtenerse por sentencia firme recaída en juicio ordinario.*

2.º *Acreditado de la documentación registral unida al expediente (cfr. art. 2 LRC) que la madre del inscrito no ostenta la nacionalidad española sino la colombiana, procede que se haga constar esta circunstancia al margen de la inscripción de nacimiento del menor.*

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Único de Madrid.

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil Único de Madrid en fecha 8 de octubre de 2014 la Sra. I. M. P. S. expone que en la inscripción de nacimiento del menor X.-D. L. V, nacido el de 2011 en M., se observa la existencia de error en el segundo apellido del

inscrito y primero de su madre, que es P., y en la nacionalidad y la fecha de nacimiento de esta, pues constan como tales española y 14 de septiembre de 1991 en lugar de colombiana y 14 de septiembre de 1983, que es lo correcto. Acompaña certificación literal de inscripción de nacimiento de X.-D. V. S., cuya madre es la ciudadana española I.-M. V. S., en la que consta practicada en fecha 4 de noviembre de 2011 marginal de reconocimiento paterno, en virtud de escritura otorgada ante notario colombiano por ciudadano asimismo colombiano el 16 de mayo de 2011, e indicación de que los apellidos del inscrito son L. V.; copia simple de DNI del menor y de su madre y, como documentación propia, copia simple de pasaporte y registro de nacimiento colombianos y acta de entrega en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de DNI a nombre de la madre, que es retirado por los funcionarios actuantes por haber sido cancelada su nacionalidad española en virtud de título manifiestamente ilegal.

II

En comparecencia de la misma fecha la promotora manifiesta que hace seis años un vecino de su barrio le propuso adoptarla a cambio de dinero para que obtuviera la nacionalidad española, que registró a su hijo con sus papeles españoles, convencida de que jamás iba a tener problema con ellos, pero que en febrero de 2014 fue a la comisaría de V. a poner una denuncia, se encontró con la sorpresa de que la nacionalidad ha sido cancelada por fraude e inconsistencias y ello le obliga a volver a sus apellidos y año de nacimiento originales y, consiguientemente, a cambiar esos datos en la inscripción de nacimiento de su hijo.

III

Por la juez encargada se acordó la incoación de expediente gubernativo de rectificación de errores y que a él se una parte declarativo de nacimiento, se incorporó asimismo de oficio inscripción de nacimiento de la madre, asentada en el Registro Civil Consular de Cartagena de Indias (Colombia) el 7 de noviembre de 2008 con nota de referencia de que el padre de la inscrita adquirió la nacionalidad española en fecha 15 de julio de 2008, según consta en el propio registro civil consular, y con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española formulada por la interesada asistida por sus representantes legales, en la que consta practicada en fecha 12 de junio de 2013 marginal de cancelación de inscripción basada en título manifiestamente ilegal. El ministerio fiscal solicitó que se aporte testimonio de los antecedentes que sobre la inscripción de nacimiento y posterior cancelación obran en el registro civil consular, que se oficie a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que informe sobre las diligencias de las que resultó la retirada del DNI expedido a la madre del menor y que se notifique al padre de este, a fin de que alegue lo que estime oportuno, y el 26 de noviembre de 2014 la juez encargada dictó providencia acordando que en la inscripción de nacimiento del menor se practique con valor simplemente informativo anotación marginal a fin de hacer constar que está en trámite expediente para rectificar la nacionalidad colombiana y no española de la madre en el momento del nacimiento en M. del hijo, anotación que se practicó el 11 de diciembre de 2014.

IV

Una vez realizadas las diligencias interesadas por el ministerio fiscal, este informó que por la documentación unida al expediente estima suficientemente acreditado el error alegado y el 26 de febrero de 2015 el juez encargado, razonando que las rectificaciones pretendidas originan un cambio en la identidad de la madre cuya obtención solo resulta posible mediante sentencia dictada en juicio ordinario, dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada.

V

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que lo pretendido no es un cambio de identidad sino la recuperación de la verdadera y que por ello entiende que, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93 y 94 de la Ley del Registro Civil, han de subsanarse los errores que en sus datos existen en el acta de nacimiento del menor, cuyo segundo apellido es P., el de su madre excepto en los años en los que se gestó el desgraciado proceso de nacionalización, y aportando NIE en el que figuran las menciones de identidad que expresan los documentos colombianos aportados al expediente de rectificación.

VI

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que estima que procede acceder a lo solicitado, y el encargado juez, por su parte, informó que entiende que el alcance de la rectificación, que supone cambiar la identidad de la progenitora en el acta de nacimiento de un menor, excede la competencia del registro civil y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 del Código Civil (CC), 2, 26, 41, 50 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 295, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de noviembre de 1996, 2-2.^a de enero de 1997, 19 de abril de 2000, 12 de abril y 4-5.^a de noviembre de 2003, 3-17.^a de septiembre de 2010, 1-2.^a de diciembre de 2011, 23-1.^a de febrero y 13-2.^a y 4.^a de marzo de 2012, 8-27.^a de octubre y 20-73.^a de diciembre de 2013; 30-25.^a de enero, 18-78.^a de junio y 1-31.^a de octubre de 2014 y 10-3.^a de abril, 28-78.^a de agosto y 23-5.^a de octubre de 2015.

II. Solicita la promotora, de nacionalidad colombiana, que en la inscripción de nacimiento de un menor nacido en M. de padre colombiano y madre española el de 2011 se rectifiquen el segundo apellido del inscrito y primero de su madre y la nacionalidad y la fecha de nacimiento de esta, expo-

niendo que constan como tales V., española y 14 de septiembre de 1991 en lugar de P., colombiana y 14 de septiembre de 1983, que es lo correcto, y el juez encargado, razonando que las rectificaciones pretendidas originan un cambio en la identidad de la madre cuya obtención solo resulta posible mediante sentencia dictada en juicio ordinario, dispone desestimar la petición formulada mediante auto de 26 de febrero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (*cf.* art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro de los errores denunciados.

IV. A excepción del nombre (*cf.* art. 12 RRC), las menciones de identidad de los padres de una persona son en su inscripción de nacimiento datos no esenciales no cubiertos por la fe pública registral (*cf.* art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.3.º de la Ley. En este caso no han llegado a probarse los errores denunciados ya que, unido al expediente de rectificación testimonio de lo actuado en el momento en que se practicó el asiento de nacimiento, se comprueba que quien dio a luz es I.-M. V., que el cuestionario para la declaración de nacimiento fue cumplimentado y firmado, en calidad de madre, por I.-M. V., que consignó estas menciones y las demás que resultaron inscritas y seguidamente suscribió de conformidad el borrador de asiento registral, y lo que en la inscripción consta no queda desvirtuado por el certificado de nacimiento colombiano de I. M. P. que la promotora aporta porque la radical discrepancia entre los datos en él consignados y las menciones de identidad de la madre del inscrito que constan en la inscripción de nacimiento cancelada de esta afectan no solo al primer apellido y a la fecha de nacimiento de la inscrita sino también al nombre, dos apellidos y edad de su padre suscitando cuestión previa sobre la identidad de persona entre una y otra que no puede ser resuelta en expediente gubernativo y habrá de dilucidarse en la vía judicial ordinaria, conforme a la regla general establecida en el artículo 92 LRC.

V. Que, sin perjuicio de lo anterior, de la inscripción de nacimiento de I.-M. V. S., nacida el 14 de septiembre de 1991 en B. (Colombia) hija de W. E. V. Á., nacido en S. L. (Colombia) el 18 de junio de 1961, y de su cancelación, por basada en título manifiestamente ilegal, en virtud de resolución registral de 20 de marzo de 2013 dictada en el oportuno expediente, consta que la madre del inscrito no es de nacionalidad española sino colombiana, circunstancia que, al objeto de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), ha de hacerse constar marginalmente en la inscripción de nacimiento del menor.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
- 2.º Disponer que en la inscripción de nacimiento del menor X.-D. L. V. se haga constar marginalmente que la nacionalidad de la madre del inscrito no es la española sino la colombiana.

Madrid, 27 de enero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (44.ª)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—*Por confrontación con la inscripción de nacimiento prospera el expediente de rectificación en inscripción de matrimonio del nombre de la contrayente.*

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito recibido en el Registro Civil Consular de Tetuán (Marruecos) en fecha 25 de abril de 2014 la Sra. E-Hosnia. M., de nacionalidad marroquí, mayor de edad y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en Tetuán, solicita que en su acta de matrimonio se rectifique el nombre de la contrayente, de modo que pase a ser el arriba reseñado en vez del que consta, E-Hassania, acompañando copia simple de certificación literal de inscripción de matrimonio celebrado el 20 de noviembre de 1985 en Alhucemas (Marruecos) e inscrito en el Registro Civil Central el 2 de marzo de 2010 con nota marginal de constancia de que el contrayente ha adquirido la nacionalidad española en fecha 16 de noviembre de 2004, copia simple de libro de familia español, de DNI del cónyuge y de tarjeta de identidad marroquí propia y actas marroquíes de nacimiento y de matrimonio en las que figura con el nombre que aduce correcto.

II

Citado el cónyuge y manifestada por este su conformidad con lo solicitado, la canciller del Consulado, en funciones de ministerio fiscal (*cf.* art. 54 RRC), informó favorablemente y, por su parte, el encargado informó que a la vista de los documentos presentados cabe la

rectificación instada y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado al Registro Civil Central, en el que tuvo entrada el 26 de junio de 2014.

III

Acordada la incoación de expediente gubernativo, el ministerio fiscal se opuso a la rectificación solicitada, por no haberse acreditado documentalmente el error denunciado, y el 11 de febrero de 2015 el juez encargado, razonando que la inscripción de matrimonio se verificó conforme al certificado del registro local entonces aportado y que no debe darse más valor al ahora presentado en tanto no se acredite que en el primero el dato está equivocado, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación instada, sin perjuicio del derecho que asiste a la interesada de iniciar el procedimiento declarativo correspondiente.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en sendas comparecencias en el registro civil de su domicilio de 10 y 15 de junio de 2015 a los cónyuges, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el acta de matrimonio del registro local el nombre de la contrayente es el que consta en su DNI marroquí y que el que figura en la inscripción de matrimonio es erróneo por un fallo en la traducción.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del auto apelado, y el juez encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución apelada, entiende que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente, junto con el de matrimonio en el que trae causa la inscripción debatida, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 23, 26, 41, 69 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13-2.^a de mayo de 1998, 4-1.^a de abril de 2001, 27-2.^a de abril de 2002, 19-3.^a de septiembre de 2003, 1-8.^a de julio de 2008, 20-1.^a de abril de 2009, 18-1.^a de octubre de 2012, 9-19.^a de mayo y 12-71.^a de diciembre de 2013, 17-45.^a de febrero y 24-118.^a de junio de 2014 y 24-27.^a de abril de 2015.

II. Solicita la promotora que en la inscripción de su matrimonio, practicada en el Registro Civil Central en marzo de 2010 tras haber adquirido el contrayente la nacionalidad española por residencia, se rectifique el nombre de la contrayente, de modo que pase a ser E-Hosnia en vez de E-Hassania, y el juez encargado, razonando que la inscripción de matrimonio se verificó conforme al certificado del registro local en su momento aportado y que no debe darse más

valor al ahora presentado en tanto no se acredite que en el primero el dato está equivocado, dispone que no ha lugar a la rectificación del error denunciado, sin perjuicio del derecho que asiste a la interesada de iniciar el procedimiento declarativo correspondiente, mediante auto de 11 de febrero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por ambos cónyuges.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (*cf.* art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

IV. El nombre de la contrayente es en la inscripción de matrimonio una mención de identidad (*cf.* art. 12 RRC) no cubierta por la fe pública registral (*cf.* art. 69 LRC) de modo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1.º de la Ley. En este caso, unido el expediente de matrimonio en el que trae causa el asiento, se comprueba que el nombre inscrito es el que consta en la certificación del registro local en cuya virtud se practicó y la alegación formulada en el escrito de recurso de que se trata de un fallo de traducción, sobre no acreditarse y ser reconocimiento expreso de la inexistencia de error registral propiamente dicho, ha de estimarse inconsistente, habida cuenta de que el nombre que figura en el acta marroquí es asimismo el que el marido consignó en la declaración de datos para la inscripción que seguidamente suscribió y el que expresa el certificado del Consulado de Marruecos en Madrid entonces presentado. No obstante, al expediente de rectificación se ha aportado acta de nacimiento marroquí de la contrayente que reúne los requisitos establecidos en los arts. 23 LRC y 85 RRC y, sin necesidad de recurrir a la traducción que la acompaña, da constancia al margen, en caracteres latinos, de que el nombre de la nacida es «E-Hosnia». Así pues, acreditado el error denunciado y establecida indudablemente la identidad por las demás circunstancias de la inscripción, procede acordar la rectificación instada, en virtud de lo dispuesto en el art. 93.3 LRC, al objeto de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
- 2.º Disponer que la inscripción de matrimonio se rectifique en el sentido de hacer constar que el nombre de la contrayente es E-Hosnia y no lo consignado por error.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de abril de 2017 (28.^a)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—*La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial.*

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central en fecha 4 de marzo de 2015 doña L-A. S. N., mayor de edad y domiciliada en M., solicita la incoación de expediente de rectificación de error en su inscripción de nacimiento exponiendo que al practicarla se hizo constar que el hecho acaeció el 10 de octubre de 1953 en lugar del 10 de octubre de 1949, que es lo correcto, y acompañando copia simple de DNI, partida de nacimiento peruana que expresa que el año de nacimiento es el que aduce correcto y certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, practicada en el Registro Civil Central el 29 de diciembre de 2000 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 15 de noviembre de 2000.

II

Acordada la incoación del oportuno expediente gubernativo, el ministerio fiscal informó que, al no aparecer suficientemente acreditado el error alegado de la documentación aportada, se opone a la rectificación y el 26 de junio de 2015 el juez encargado, razonando que no puede prevalecer la certificación ahora presentada sobre la que sirvió de base al asiento sin demostración de que esta haya sido rectificadora por el procedimiento legal correspondiente, tal como prevé el artículo 259 del Reglamento del Registro Civil, dictó auto disponiendo que, sin perjuicio de que la promotora solicite rectificación del registro civil peruano, no ha lugar a la rectificación del error denunciado.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ha aportado al expediente certificación de nacimiento en la que consta no solo la fecha correcta sino también que la inscripción se realizó el 13 de octubre de 1949 mediante comparecencia de su padre y que, en todo caso, está tramitando la obtención de resolución de rectificación de error que presentará inmediatamente, a fin de que pueda ser valorada en la resolución del recurso, y aportando constancia de no validez de la copia de la partida de nacimiento que indica que el año de nacimiento es 1953 expedida en fecha 23 de octubre de 2015 por la jefa de la oficina del estado civil de C., su población natal.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, estimando que los razonamientos jurídicos de la resolución impugnada no han quedado desvirtuados por las alegaciones formuladas, interesó la desestimación del recurso y el juez encargado emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado del expediente, junto con lo actuado con ocasión de la inscripción de nacimiento y el expediente tramitado en 2001 a instancia de la promotora, con el objeto de que se rectifique en su inscripción de nacimiento su segundo apellido, y resuelto en los términos interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 16-2.^a de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1.^a de diciembre de 2003; 14-4.^a de mayo de 2004, 18-4.^a y 24-6.^a de octubre de 2005, 18-4.^a y 24-6.^a de octubre de 2005, 13-1.^a y 28-2.^a de marzo y 3-4.^a de abril de 2006, 24-2.^a de abril y 28-2.^a de diciembre de 2007; 3-3.^a de enero, 18-3.^a de junio, 22-6.^a de octubre y 25-8.^a de noviembre de 2008; 9-5.^a de marzo de 2009, 15-5.^a de julio y 6-16.^a de septiembre de 2010, 18-3.^a de noviembre y 1-3.^a de diciembre de 2011, 19-56.^a de diciembre de 2012; 8-53.^a y 15-2.^a de octubre y 11-144.^a y 13-52.^a de diciembre de 2013; 10-2.^a de febrero, 20-7.^a de marzo, 31-238.^a de julio, 1-29.^a de octubre y 19-110.^a de diciembre de 2014; 29-10.^a de mayo, 26-57.^a de junio y 28-75.^a de agosto de 2015 y 29-55.^a de enero de 2016.

II. Solicita la promotora que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil Central en diciembre de 2000 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, se rectifique la fecha en que acaeció el hecho, exponiendo que por error consta que nació el 10 de octubre de 1953 en lugar del 10 de octubre de 1949, que es lo correcto, y el juez encargado, razonando que no puede prevalecer la certificación ahora presentada sobre la que sirvió de título al asiento sin acreditación de que esta haya sido rectificadas por el procedimiento legal correspondiente, tal como prevé el artículo 259 RRC, dispone que no ha lugar a la rectificación del error denunciado, sin perjuicio de que la promotora solicite rectificación del registro civil peruano, mediante auto de 26 de junio de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, presentado el 28 de octubre de 2015, en el que la promotora alega que está tramitando la rectificación de la certificación extranjera y que aportará la resolución inmediatamente, a fin de que pueda ser valorada al examinar la apelación.

III. La fecha de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad (*cfr.* art. 12 RRC) susceptible

de rectificación si se demuestra errónea por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1.º LRC, sino un dato esencial de la inscripción del que esta hace fe (*cf.* art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse en principio por sentencia firme recaída en juicio ordinario, conforme a la regla general establecido en el artículo 92 LRC. En este caso, consta que el asiento de nacimiento se practicó por transcripción de certificación del registro local que expresa que la interesada nació el año consignado en la inscripción, año que asimismo figura en toda la documentación aportada al expediente de nacionalidad, en el acta de juramento o promesa por ella suscrita y en el impreso de declaración de datos que cumplimentó y firmó. A esta constancia la solicitante opone una nueva certificación extranjera que no desvirtúa lo que la primera acredita ya que resulta contradictoria con ella en el dato controvertido pero no da constancia de que la inscripción local contuviera error que, en el lapso que media entre la expedición de una y otra, haya sido rectificado por autoridad competente del registro extranjero a través del procedimiento legal correspondiente (arts. 94.2.º y 295 RRC). Y, a mayor abundamiento, consta en las actuaciones que en 2001 la peticionaria promovió expediente de rectificación de error en su segundo apellido en el que no solo no denuncia que exista también error en la fecha de su nacimiento sino que en el escrito inicial consigna de su puño y letra y firma que nació el 10 de octubre de 1953. Así pues, a salvo lo que resulte en la vía judicial correspondiente, no puede considerarse probado el error denunciado y queda impedida la rectificación instada en vía gubernativa,

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (33.ª)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—*Practicada la inscripción de defunción conforme a la declaración formulada, no prospera el expediente de rectificación del error denunciado respecto al destino final del cadáver que, a mayor abundamiento, es hecho no concerniente al estado civil de la persona y, por tanto, ajeno a la institución registral.*

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de defunción remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

El 19 de marzo de 2015 doña M. d. M. J. L., mayor de edad y domiciliada en M. d. A. (Sevilla), comparece en el Registro Civil de Bormujos (Sevilla) al objeto de promover expediente gubernativo para la rectificación de error existente en la inscripción de defunción de su padre M. J. S., fallecido el 9 de marzo de 2015 en el hospital S. de B. (Sevilla), exponiendo que se ha consignado que el enterramiento será en el cementerio de T. (Sevilla) cuando lo correcto es que ha sido incinerado en C. (Sevilla) y acompañando certificación literal de la inscripción de defunción cuya rectificación interesa, certificado de cremación del cadáver emitido por el Tanatorio Crematorio de Camas y fotocopia compulsada del DNI de la promotora.

II

Recibida la anterior documentación en el Registro Civil de Sevilla, el ministerio fiscal informó que nada opone a lo interesado y el 17 de abril de 2015 el juez encargado, razonando que de las pruebas practicadas se ha evidenciado la existencia del error consistente en haber consignado como lugar de enterramiento «T.» cuando lo correcto es «C.», dictó auto disponiendo que se rectifique dicho dato en la inscripción de defunción.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil de su domicilio de fecha 17 de junio de 2015, a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la resolución dictada no especifica que el cadáver fue cremado y que solicita que en el certificado literal de defunción conste dicho dato para evitar contrariedades cuando próximamente las cenizas salgan al extranjero.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando plenamente ajustada a derecho la resolución apelada, se opuso al recurso y el juez encargado informó desfavorablemente a la pretensión que articula la promotora contra el auto dictado, que debe mantenerse en todos sus extremos, porque el dato del destino final del cadáver es ajeno al concepto de estado civil, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V

A tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 358 del Reglamento del Registro Civil la dirección general acordó, para mejor proveer, oficiar al registro civil que dictó la resolución recurrida a fin de que se una al expediente copia testimoniada del legajo correspondiente a la defunción, con el resultado de que en el cuestionario para la declaración, cumplimentado y firmado por el yerno del finado y cónyuge de la promotora, figura que el enterramiento será en «T. Sevilla»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 81 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 282, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 4-3.^a de septiembre de 2006, 15-3.^a de noviembre de 2007, 4-2.^a de febrero y 15-6.^a de octubre de 2008, 6-5.^a de mayo de 2010, 2-1.^a de noviembre de 2012, 13-8.^a de febrero y 4-124.^a de noviembre de 2013 y 9-7.^a de julio de 2014.

II. Solicita la promotora la rectificación de error existente en la inscripción de defunción de su padre, fallecido el 9 de marzo de 2015, exponiendo que se ha consignado que el enterramiento será en el cementerio de T. cuando lo correcto es que ha sido cremado en C., y el juez encargado, razonando que de las pruebas practicadas se ha evidenciado la existencia de error en la población de enterramiento, dispone que se rectifique dicho dato mediante auto de 17 de abril de 2015 que, en lo que respecta al destino final del cadáver, constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (*cf.* art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

IV. El lugar en el que será al enterramiento es en la inscripción de defunción un dato no cubierto por la fe pública registral (art. 81 LRC) al que cabe hacer referencia, en la inscripción o por nota marginal, si consta en la declaración de defunción (art. 282 RRC). En este caso, incorporado dicho documento a las actuaciones, se comprueba que el declarante, yerno del difunto y cónyuge de la promotora, hizo constar que el enterramiento será en T., no aportada al expediente de rectificación certificación en contrario expedida por autoridad o funcionario competente, no cabe modificar dicha referencia en base a un certificado formulario del Tanatorio Crematorio de C. firmado por persona no identificada y, en consecuencia, la rectificación interesada respecto al destino final del cadáver no puede prosperar. Debe tenerse en cuenta, además, que el registro civil es el órgano en el que se inscriben los hechos y actos con-

cernientes a la personalidad y al estado civil de las personas desde el nacimiento hasta la defunción, a efectos registrales solo son relevantes el hecho de la defunción y, cuando fueren conocidos, la identidad de la persona fallecida y el lugar y la fecha del deceso y, en consecuencia, las actuaciones posteriores a la muerte son ajenas a la institución registral.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 12 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 2 de junio de 2017 (37.^a)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—1.º *No procede la rectificación del primer apellido de una ciudadana ecuatoriana de origen con nacionalidad española adquirida por residencia porque no resulta acreditada la existencia de error.*

2.º *Es posible completar inscripciones firmadas con circunstancias no conocidas en la fecha en que se practicaron aquellas (art. 95.1.º LRC) pero tales circunstancias deben probarse, bien mediante expediente gubernativo o bien en virtud de documento auténtico (arts. 23 LRC y 296 RRC).*

En las actuaciones sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Murcia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2015 en el Registro Civil de Murcia, Doña G-E. L. L., con doble nacionalidad española y ecuatoriana, solicitaba la rectificación de su inscripción de nacimiento para hacer constar su filiación paterna respecto de Don S. V. y que su primer apellido es V., tal como consta en la certificación de nacimiento ecuatoriana y en toda su documentación anterior a la adquisición de la nacionalidad española. Aportaba la siguiente documentación: certificado de empadronamiento, pasaporte ecuatoriano, solicitud de renovación de la autorización de residencia en España, resolución de concesión de permiso de residencia de larga duración, resolución de concesión de la nacionalidad española, acta de comparecencia ante el registro para completar los trámites de adquisición de la nacionalidad, certificación de nacimiento ecuatoriana de G-E. V., nacida

en Ecuador el 28 de octubre de 1942, hija de padre desconocido y de A. L. e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Murcia de G-E. L. L., con marginal de 20 de abril de 2011 de adquisición de la nacionalidad española por residencia.

II

Ratificada la interesada, se incorporó al expediente otra certificación de nacimiento ecuatoriana con tres marginales: la primera de 7 de marzo de 2014 para hacer constar, por resolución de rectificación de 27 de febrero de 2014, que los apellidos de la inscrita son L. L.; la segunda de 26 de marzo de 2014 para hacer constar que los apellidos de la inscrita son V. L. por resolución de rectificación de 25 de marzo de 2013 y la tercera, de 14 de septiembre de 2015, para hacer constar que, por resolución de 11 de septiembre de 2015, la fecha de la resolución que se consignó el 26 de marzo de 2014 será, en adelante, el 25 de marzo de 2014.

III

Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 21 de octubre de 2015 denegando la rectificación pretendida por no considerar acreditada la existencia de ningún error.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la interesada que es hija de S. V. y de A. L., que en todos sus documentos desde que llegó a España y hasta que adquirió la nacionalidad española figura identificada con los apellidos V. L., que cuando se formalizó su inscripción en España se produjo un error al atribuirle los apellidos L. L. y que le dijeron en el registro que podía subsanarlo aportando la certificación de nacimiento ecuatoriana que ya ha incorporado al expediente y donde constan atribuidos los apellidos solicitados.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que no se opuso a la pretensión. El encargado del Registro Civil de Murcia remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 137, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2.^a de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1.^a de diciembre de 2003; 14-4.^a de mayo de 2004; 18-4.^a y 24-6.^a de octubre de

2005; 18-4.^a y 24-6.^a de octubre de 2005; 13-1.^a y 28-2.^a de marzo y 3-4.^a de abril de 2006; 24-2.^a de abril, 28-2.^a de diciembre de 2007; 3-3.^a de enero, 18-3.^a de junio 22-6.^a de octubre y 25-8.^a de noviembre de 2008; 9-5.^a de marzo y 8-3.^a de julio de 2009; 6-4.^a de mayo, 21-10.^a de junio y 1-26.^a de septiembre de 2010; 14-2.^a de enero y 17-3.^a de noviembre de 2011; 13-4.^a de marzo, 26-6.^a de julio y 26-6.^a de noviembre de 2012; 30-4.^a de enero y 19-8.^a de abril de 2013 y 12-28.^a de marzo de 2014.

II. Se pretende por medio de este expediente la rectificación de un supuesto error cometido en la atribución de los apellidos de la promotora al practicar en España su inscripción de nacimiento. Al mismo tiempo, se solicita que se haga constar la filiación paterna de la inscrita. La encargada del registro dictó auto denegando la rectificación solicitada por no considerar acreditado error alguno.

III. En materia de errores registrales la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) y, en todo caso, para que pueda rectificarse por expediente un error del registro, es necesario que quede acreditada su existencia, si bien la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC. Pero ninguna de las circunstancias previstas legalmente se da en este caso. Así, aunque es cierto que en la certificación de nacimiento que sirvió de base para la inscripción en España la interesada tenía atribuido como único apellido V., hay que recordar que los apellidos de los españoles vienen determinados por la filiación y la recurrente solo tiene atribuida filiación materna respecto de A. L., de manera que, por aplicación de la normativa de su nueva nacionalidad, los apellidos que correspondía atribuirle son los que actualmente ostenta. En realidad, lo que se pretende no es tanto rectificar un error como integrar el dato correspondiente a la filiación paterna para completar la inscripción (art. 95.1.º LRC) y, en consecuencia, atribuir a la inscrita el apellido paterno correspondiente, pero, como se ha dicho, en ninguna de las certificaciones ecuatorianas aportadas consta legalmente determinada la filiación paterna de la recurrente.

IV. No obstante lo anterior, vista la documentación aportada y mientras no se pruebe la filiación paterna alegada, la interesada sí puede solicitar ante el encargado del registro que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 137, regla 1.^a, RRC, se complete su inscripción de nacimiento con el dato de que la inscrita es conocida por los apellidos V. L. y que así consta registrada en su país de origen, pues la atribución de un apellido distinto según la ley personal de otro país del que también es nacional es un hecho que afecta al estado civil de una española y, por ello, susceptible de anotación marginal en la inscripción de nacimiento de la interesada (art. 38.3.º LRC) si así se solicita. Pero ha de tenerse en cuenta que este asiento tiene valor meramente informativo y sirve únicamente para contribuir a disipar cualquier duda en orden a la identidad de la inscrita.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 2 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Murcia.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (2.ª)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—*Si el promotor está domiciliado en el extranjero la competencia corresponde al registro civil consular en el que consta la inscripción de nacimiento y no resulta afectada por el hecho de que haya comparecido por medio de letrado apoderado residente en España.*

En las actuaciones sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central en fecha 9 de julio de 2015 Don R. L. S., letrado colegiado en Madrid que actúa en nombre de Don S. M. M. A., mayor de edad y domiciliado en C. (Marruecos), solicita que en la inscripción del nacimiento de su representado se rectifique la fecha en que acaeció el hecho exponiendo que consta que fue el 12 de marzo de 1988 y, según sentencia dictada el 31 de marzo de 1988 por el Juzgado de Primera Instancia de C. en expediente de declaración de nacimiento, nació el 1 de febrero de 1988. Acompaña copia de poder general para pleitos conferido por el promotor al actuante ante el Cónsul General de España en Casablanca, en funciones notariales; certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, practicada en el Registro Civil Consular de Casablanca el 14 de marzo de 1988 en virtud de certificación médica expedida el día del nacimiento y hoja declaratoria de datos suscrita por el padre del nacido; traducción de la orden de inscripción del nacimiento en el registro civil marroquí que invoca, copia simple de requerimiento de 12 de junio de 2014 por el que el Registro Civil Consular de Casablanca interesa la aportación de exequátur de la sentencia marroquí y de acta de nacimiento del registro marroquí, de solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, presentada el 17 de febrero de 2015 por procuradora que actúa en nombre y representación del promotor ante el juzgado de primera instancia de M. que por turno corresponda, y de auto, dictado en fecha 15 de abril de 2015, por el que la titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid dispone abstenerse del conocimiento de la demanda presentada por corresponder el asunto al Registro Civil Central.

II

El 16 de septiembre de 2015 el juez encargado dictó providencia acordando hacer entrega de las actuaciones al ministerio fiscal, a fin de que emita dictamen respecto a la competencia de ese registro civil en relación a la solicitud formulada, el ministerio fiscal informó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 del Reglamento del Registro Civil, al no estar el promotor domiciliado en España es de estimar la competencia del registro civil consular correspondiente y el 11 de diciembre de 2015 el juez encargado dictó auto disponiendo que no ha lugar a resolver sobre lo solicitado por carecer el Registro Civil Central de competencia para ello.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al apoderado, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, conforme a la legislación vigente, el Registro Civil Central debe proceder inexcusablemente a rectificar la fecha de su nacimiento en cumplimiento del auto dictado en fecha 15 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso, y el juez encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución impugnada, entiende que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 27 de la Ley del Registro Civil (LRC) 27 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 22 de febrero, 25-1.ª de abril y 3 de mayo de 1997, 22-1.ª de mayo y 22 de septiembre de 1998, 15 de noviembre de 2001, 22 de febrero de 2003, 24-3.ª de febrero y 1-1.ª de abril de 2004, 28-2.ª de junio de 2005, 17-7.ª de noviembre de 2008, 18-6.ª de febrero, 13-6.ª de abril y 17-2.ª de diciembre de 2009, 24-1.ª de septiembre de 2010, 9-18.ª de mayo de 2013, 4-81.ª de noviembre de 2014 y 10-17.ª de abril de 2015.

II. Solicita el letrado actuante que en el asiento de nacimiento del promotor, español de origen nacido en C. el 12 de marzo de 1988 e inscrito en el registro civil consular de dicha población el 14 de marzo de 1988 en virtud de certificación médica expedida el día del nacimiento y hoja declaratoria de

datos suscrita por el padre del nacido, se rectifique la fecha en que acaeció el hecho exponiendo que, según sentencia dictada el 31 de marzo de 1988 por el Juzgado de Primera Instancia de C. en expediente de declaración de nacimiento, nació el 1 de febrero de 1988, y el juez encargado del Registro Civil Central, razonando que, al estar el promotor domiciliado en C. la competencia corresponde al registro civil consular, dispone que no ha lugar a resolver sobre lo solicitado mediante auto de 11 de diciembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Para decidir en primera instancia un expediente de rectificación de error es competente el encargado del registro civil donde deba inscribirse la resolución pretendida (art. 342 RRC), este precepto reglamentario precisa a continuación que, si la inscripción hubiera de practicarse en los registros consular y Central, la competencia corresponde al primero si el promotor está domiciliado en el extranjero y al segundo si está domiciliado en España y, constando de la escritura de poder acompañada que el interesado reside en C., no cabe que la marginal instada se practique primero en el Registro Central y después, por traslado, en el consular y deberá ser este el que conozca de la rectificación intentada. La anterior conclusión no resulta afectada por el hecho de que el peticionario haya comparecido por medio de representante domiciliado en España porque obviamente este no deviene promotor de las actuaciones por el apoderamiento recibido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (32.^a)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.–*Por incompetencia del registro civil del domicilio de la promotora se declara la nulidad del auto dictado en expediente de rectificación de error en dos inscripciones de nacimiento y una de matrimonio.*

En el expediente sobre rectificación de error en dos inscripciones de nacimiento y una de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Villajoyosa (Alicante).

HECHOS

I

El 6 de mayo de 2015 doña M.-R. R. F., mayor de edad y domiciliada en L. N. (A.), presentó en el registro civil de dicha población solicitud de rectificación de error en las inscripciones de nacimiento de su hijo y propia y en la suya de matrimonio exponiendo que se consignó el apellido R. cuando en realidad es R.-C. y acompañando copia simple de DNI, certificado colectivo de empadronamiento en L. N., certificación literal de las tres inscripciones cuya rectificación interesa y acta de notoriedad, levantada el 9 de abril de 2015 por notario argentino sobre manifestación de la madre de la peticionaria, respecto al apellido compuesto R.-C. de esta y de su padre.

II

Ratificada la promotora en la solicitud presentada, el juez encargado acordó elevar las actuaciones al Registro Civil de Villajoyosa para su posterior remisión al Central y al de Mutxamel (Alicante).

III

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Villajoyosa, el ministerio fiscal informó que considera que no existe ningún error que subsanar, sin perjuicio de que la interesada pueda instar un expediente de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia, y el 8 de febrero de 2016 la juez encargada dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación de la mención interesada en las inscripciones de nacimiento y matrimonio de la promotora y de nacimiento de su hijo, toda vez que de la documental aportada al expediente no ha quedado acreditado el error alegado.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en Argentina la ley establece que solo se tenga un apellido y, por tanto, R.-C. es un solo apellido, aunque compuesto, y que no entiende la desaparición de «C.» en los documentos españoles de su hijo y suyos y aportando copia simple de certificado de nacimiento, de pasaporte y de documento de identidad argentinos a nombre de M.-R. R. C.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que los apellidos de la española nacida en el extranjero fueron correctamente establecidos en el registro civil consular y, por tanto, la afirmación de que R.-C. es el apellido compuesto de su padre debe acreditarse no a través de un acta de notoriedad argentina sino con la inscripción de nacimiento española del progenitor, interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada y el juez encargado del Registro Civil de Villajoyosa informó que,

a la vista de la documentación aportada, considera que no se dan los requisitos legalmente establecidos para proceder a la rectificación de error solicitada y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), 48 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16, 342, 343, 354 y 358 del Registro Civil (RRC) y la las resoluciones, entre otras, de 22 y 24-1.^a de febrero, 25-1.^a de abril, 3 de mayo, 10-1.^a de julio y 17-1.^a de septiembre de 1997; 3-1.^a, 23 y 25 de febrero, 3-1.^a de marzo, 11 de mayo y 22 de septiembre de 1998; 28-2.^a de junio de 2005, 24-1.^a de septiembre de 2010, 10-17.^a de abril de 2015 y 5-33.^a de febrero de 2016.

II. Solicita la promotora que en las inscripciones de nacimiento y de matrimonio propias, practicadas en el Registro Civil Consular de Buenos Aires (Argentina) y en la de nacimiento de su hijo, obrante en el Registro Civil de Mutxamel, se rectifique su primer apellido y el segundo del menor, exponiendo que se consignó como tal R. cuando en realidad es R.-C., y la juez encargada del Registro Civil de Villajoyosa, considerando que de la documental aportada no ha quedado acreditado el error alegado, dispone que no ha lugar a la rectificación interesada, sin perjuicio de que pueda instarse el expediente distinto de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia, mediante auto de 8 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La competencia para decidir en primera instancia un expediente de rectificación de error corresponde al encargado del registro civil donde deba inscribirse la resolución pretendida (art. 342 RRC) que, en este caso, es el Central respecto a las inscripciones de la madre y el de San Vicente del Raspeig (Alicante), a cuyo cargo está el Juzgado de Paz de Mutxamel, respecto a la inscripción del hijo.

IV. Habiendo resuelto el encargado del domicilio, procede acordar la nulidad de actuaciones a partir del dictado del auto (*cfr.* arts. 238 y 240 LOPJ y 48 LEC, aplicables en este ámbito en virtud de la remisión contenida en el art. 16 RRC) y, por razones de economía procesal (*cfr.* arts. 354 y 358, último párrafo, RRC), la remisión del expediente instruido al Registro Civil Central, competente para decidir en primera instancia sobre la rectificación de los asientos de nacimiento y de matrimonio de la promotora.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1.º Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado en fecha 8 de febrero de 2016 por la juez encargada del Registro Civil de Villajoyosa.

2.º Disponer que, a los efectos indicados, el expediente sea remitido al Registro Civil Central.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Villajoyosa (Alicante).

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (37.ª)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.—*Modificada parcialmente en fase de recurso la petición inicial, acreditado en las actuaciones el único error ahora aducido y emitido por el ministerio fiscal dictamen favorable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.1.º de la Ley del Registro Civil prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento de la demarcación administrativa a la que pertenece la población de nacimiento de la inscrita.*

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Eivissa (Illes Balears) en fecha 9 de septiembre de 2015 doña E.-N. N. G., nacida el 8 de octubre de 1994 en S. (Ecuador) y domiciliada en E., expone que en su inscripción de nacimiento se observa la existencia de error en el lugar en el que acaeció el hecho pues consta como tal Riminahui en lugar de Rumiñahui, que es lo correcto y lo que figura en el certificado de nacimiento de su país de origen que obra en el expediente de nacionalidad. Acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, practicada en el Registro Civil de Catarroja el 28 de abril de 2015 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el día 16 de abril de 2015, volante de empadronamiento en E. y copia simple de DNI.

II

Ratificada la promotora en el escrito presentado y acordada la incoación del oportuno expediente, el ministerio fiscal se opuso a lo solicitado, por no haberse aportado certificado de nacimiento del país de origen, y la juez encargada del Registro Civil de Eivissa dispuso la remisión de lo actuado al de Catarroja cuya encargada, constatado de la partida de nacimiento ecuatoriana que sirvió de título para la práctica del asiento que no existe el error reseñado, ya que en ella consta como lugar de nacimiento Ruminahui, dictó auto de fecha 26 de noviembre de 2015 disponiendo que no procede acceder a la rectificación instada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 18 de enero de 2016, a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que el topónimo se escriba como en el certificado de nacimiento de su país de origen.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que informó que, constando como lugar de nacimiento en la partida de nacimiento aportada Ruminahui y Riminahui en la inscripción practicada en el Registro Civil de Catarroja, no se opone al recurso y seguidamente la juez encargada de dicho registro civil dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 23, 41, 46 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 137, 342, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13-2.^a y 20-2.^a de mayo de 1998, 9-1.^a de octubre de 1999, 4-1.^a de abril de 2001, 27-2.^a de abril de 2002, 19-3.^a de septiembre de 2003, 29-4.^a de octubre de 2007, 26-1.^a de marzo y 1-8.^a y 9-7.^a de julio de 2008, 27-8.^a de febrero y 20-1.^a de abril de 2009, 21-81.^a de junio, 2-109.^a de septiembre y 7-44.^a de octubre de 2013 y 17-112.^a de julio de 2014.

II. Solicita la promotora que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Catarroja en abril de 2015 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, se rectifique el error observado en el lugar en el que acaeció el hecho, exponiendo que consta como tal Riminahui en lugar de Rumiñahui, que es lo correcto y lo que expresa el certificado de nacimiento de su país de origen aportado al expediente de nacionalidad, y la juez encargada, constatado que lo que consta en el documento es Ruminahui y, por tanto, no existe el error reseñado, dispone que no procede acceder a la rectificación instada mediante auto de 26 de noviembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, en el que la peticionaria interesa que el nombre se escriba como figura en el registro local.

III. El lugar de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad (art. 12 RRC) susceptible de rectificación si se demuestra errónea por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1.º LRC, sino un dato esencial de la inscripción del que esta hace fe (art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse en principio por sentencia firme recaída en juicio ordinario, conforme establece el artículo 92 LRC.

IV. En este caso en la inscripción de nacimiento se han consignado el término municipal –S.–, el cantón –Riminahui–, la provincia –P.– y el país –Ecuador–; conforme al artículo 137, regla 4.ª, RRC, el lugar de nacimiento debe hacer referencia a población, provincia y país y, siendo el topónimo que se aduce erróneo el de una entidad administrativa intermedia cuya constancia no está reglamentariamente prevista y, por tanto, no integra el concepto legal de «lugar de nacimiento», puede rectificarse por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

V. Aunque la solicitud inicial no puede ser extemporáneamente modificada en fase de apelación y, en principio, no procedería examinar la petición de rectificación en el sentido ahora interesado, visto que no se plantea una cuestión nueva no examinada por el encargado sino que se desiste de una de las dos inicialmente formuladas, que consta del certificado del registro local que el topónimo es como se solicita en la apelación y que el ministerio fiscal ha emitido dictamen favorable al recurso, no hay obstáculo legal para acordar la rectificación instada en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.1 LRC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso.
- 2.º Disponer que el asiento de nacimiento de la recurrente se rectifique en el sentido de que conste que el cantón de nacimiento de la inscrita es Ruminahui y no lo consignado por error.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Catarroja (Valencia).

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (4.ª)

Rectificación de errores-Artículos 93 y 94 LRC.–*Procede la rectificación en la consignación del lugar de nacimiento del inscrito que solo implica su expresión correcta, suprimiendo los dos vocablos que preceden al nombre de la capital extranjera que ya consta (cfr. art. 137.4.ª RRC).*

En las actuaciones sobre rectificación registral del dato sobre el lugar de nacimiento del inscrito remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 3 de diciembre de 2015 en el Registro Civil de Zaragoza, Don L. P. B., de nacionalidad española, solicitó la rectificación del dato sobre el lugar de nacimiento de su hijo, S. P. C., en la inscripción practicada en España para hacer constar únicamente «B.» en lugar de «Asan. Asac. B.», como actualmente figura. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI del promotor; inscripción de nacimiento practicada el 15 de junio de 2015 en el Registro Civil de Zaragoza de S. P. C., nacido en Asan., Asac., B., el 2 de septiembre de 1998, hijo del promotor y de R. C. (de nacionalidad maliense), con marginal para hacer constar la adquisición de la nacionalidad española por residencia del padre en 2014 y la opción a la nacionalidad del inscrito, en virtud del artículo 20 del Código Civil, el 21 de mayo de 2015; certificado literal de nacimiento maliense de S. P., donde consta como su localidad de nacimiento «Asac. / B.» y como lugar del alumbramiento «Asan. / B.»; certificado de error en la inscripción de nacimiento de S. P. (sin traducir); tarjeta de residencia del inscrito, borrador del asiento practicado en España y acta de opción a la nacionalidad española.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto denegando la pretensión por entender que no resulta acreditado el error alegado.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que la localidad de nacimiento del inscrito es la ciudad de B., tal como figura en el pasaporte maliense y en la tarjeta de residencia de su hijo y que «Asan. Asac.» hace referencia al centro médico en el que se produjo el alumbramiento. Con el escrito de recurso se aportaba copia de un certificado de nacimiento maliense expedido el 27 de enero de 2016 en el que ya solo consta como lugar de nacimiento la ciudad de B., si bien el apelante indica que no ha tenido tiempo suficiente para aportar el original legalizado y su traducción.

IV

La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su estimación porque consta en el expediente un documento que, pese a no estar traducido, da cuenta del error que figura en la primera certificación de nacimiento aportada en el sentido de que «Asac.» es el centro sanitario de la ciudad de B. donde tuvo lugar el parto y no un lugar geográfico. La encargada del Registro Civil de Zaragoza se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la ley del Registro Civil (LRC), 12, 137 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 20-1.^a de abril y 13 de noviembre de 2001, 18-4.^a de abril y 3-4.^a de diciembre de 2002 y 20-106.^a de marzo de 2014.

II. Solicita el promotor la rectificación del lugar de nacimiento consignado en la inscripción de nacimiento de su hijo al adquirir la nacionalidad española, de manera que se mantenga la misma ciudad que ahora consta, B., pero suprimiendo los dos vocablos que la preceden, alegando que corresponden al centro sanitario donde tuvo lugar el alumbramiento.

III. No se trata pues de rectificar una inscripción para hacer constar que es otro el lugar de nacimiento del inscrito –lo que, por tratarse de una circunstancia esencial del asiento, requeriría, en principio, acudir a la vía judicial ordinaria: *cfr.* arts. 41 y 92 LRC–, sino de corregir la expresión inexacta del dato para especificarlo con la precisión adecuada. A este respecto, dispone la regla 4.^a del artículo 137 RRC que ha de consignarse el término municipal y, cuando el nacimiento ha tenido lugar en el extranjero, la nación. En consecuencia, aunque no se haya aportado una certificación local convenientemente rectificadora (con expresión del error que figuraba en la anterior y del procedimiento seguido), es notorio y evidente que el nombre de la ciudad, capital de Mali, es exclusivamente B., por lo que, en aras de la claridad registral, basta que sea este, junto al nombre del país, el que figure mencionado en la inscripción. Por otra parte, se ha incorporado al expediente un documento según el cual «Asac.» es el nombre de un hospital de B. y, si bien es cierto que dicho documento carece por sí solo de valor probatorio suficiente para acreditar una rectificación (ni está traducido del francés ni su contenido ha sido trasladado a la certificación registral de nacimiento, ni consta el original legalizado), no cabe tampoco desconocerlo en este caso como un elemento más de juicio en apoyo de la decisión adoptada por los motivos ya indicados y así lo ha considerado también el ministerio fiscal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y rectificar el dato del lugar de nacimiento del inscrito para hacer constar como localidad de nacimiento, únicamente, B.

Madrid, 7 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (9.ª)

Por confrontación con la inscripción de nacimiento del padre prospera el expediente de rectificación en dos asientos de nacimiento del apellido de las inscritas y de su padre y del nombre de este.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripciones de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Zaragoza en fecha 21 de agosto de 2015 el Sr. J. S., mayor de edad y domiciliado en dicha población, expone que en los asientos de nacimiento de su hijas A. y H. S., nacidas en Z. de padre guineano y madre gambiana el 5 de septiembre de 1997, se observa la existencia de error en el nombre del padre de las inscritas, pues consta como «D.» en lugar de lo arriba reseñado, que es lo correcto. Acompaña copia simple de NIE y de pasaporte gambiano propios y certificación literal de las inscripciones de nacimiento de A. y H. S. en las que constan practicadas en fecha 21 de enero de 2005 sendas marginales de rectificación, en virtud de resolución de 17 de enero dictada por el encargado del Registro Civil de Zaragoza, en el sentido de hacer constar que el apellido del inscrito y de su padre es S.

II

Unida de oficio copia testimoniada de los respectivos cuestionarios para la declaración de nacimiento, cumplimentados y firmados por D., que expresan en los correspondientes apartados que el nombre del padre de la nacida y el nombre del declarante es D., ratificado el promotor en el escrito presentado y acordada la instrucción de expediente gubernativo de rectificación de error, la juez encargada dispuso requerir a la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Aragón la documentación que en su momento aportaron los padres de las menores con el resultado de que, dado el tiempo transcurrido, se han destruido los expedientes físicos y en la aplicación informática consta información respecto a J. S., de nacionalidad gambiana y nacido en D. B. (Gambia) hijo de B. y F., de su cónyuge y de seis hijos. Comprobado del informe recibido que J. S. tiene el mismo NIE que D. S., nacido en C. (Guinea), el promotor fue requerido el 28 de octubre de 2015 a fin de que aportara certificación emitida por autoridad correspondiente del país o países, debidamente legalizada y traducida, que acredite los cambios efectuados tanto en su nombre y apellido como en su nacionalidad y lugar de nacimiento y el 1 de febrero de 2016 presentó certificado de nacimiento y declaración jurada de ciudadanía gambianos.

III

El ministerio fiscal informó que, no justificadas las circunstancias alegadas, no resulta procedente realizar lo solicitado y el 18 de febrero de 2016 la juez encargada

dictó auto acordando que, al no haber quedado acreditado en modo alguno el error alegado, no ha lugar a la rectificación instada y que procede rectificar la nota obrante al margen de los asientos de nacimiento de las interesadas en el sentido de que el apellido correcto de las inscritas y de su padre es «S.» y no lo que consta por error, rectificación que fue asentada en las correspondientes inscripciones de nacimiento el 4 de mayo de 2016.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cuando llegó a España tenía nacionalidad guineana y su nombre era D. S., que al adquirir la nacionalidad gambiana de sus padres se modificó la grafía de su nombre y apellido, así como el lugar de nacimiento y la nacionalidad, que por eso en las partidas de nacimiento de las interesadas y de su hijo M. constan los datos anteriores y en 2005 se rectificó el apellido y las inscripciones de sus otros cuatro hijos ya se realizaron con los datos del nuevo NIE y que, habiendo obtenido todos ellos, salvo A. y H., la nacionalidad española, se deberían rectificar los datos erróneos de sus asientos de nacimiento en base a los que constan en el NIE de su padre e inscribirse la nacionalidad española por residencia concedida a sus hijas; y aportando copia simple de permiso de trabajo y de residencia a nombre de D. S. válido entre el 14 de noviembre de 1991 y el 13 de noviembre de 1992.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que informó que, habida cuenta de que los datos del padre de las inscritas no coinciden con los que figuran en la partida de nacimiento del instante respecto al nombre del padre, el nombre de la madre, el lugar de nacimiento, población y país, y la nacionalidad, no es posible acceder a lo solicitado y sí rectificar la marginal obrante en las inscripciones de nacimiento y, por su parte, la juez encargada informó en el sentido de dar por reproducidos los fundamentos jurídicos del auto dictado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 16, 66, 68, 94, 342, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13-2.^a y 20-2.^a de mayo de 1998, 9-1.^a de octubre de 1999, 4-1.^a de abril de 2001, 27-2.^a de abril de 2002, 19-3.^a de septiembre de 2003, 29-4.^a de octubre de 2007, 26-1.^a de marzo y 1-8.^a y 9-7.^a de julio de 2008, 27-8.^a de febrero y 20-1.^a de abril de 2009, 21-81.^a de junio, 2-109.^a de septiembre y 7-44.^a de octubre de 2013, 30-6.^a de abril, 17-112.^a de julio y 1-85.^a de octubre de 2014, 28-7.^a

de agosto y 18-38.^a de diciembre de 2015 y 23-1.^a de marzo y 24-10.^a de junio de 2016.

II. Solicita el promotor la rectificación en los asientos de nacimiento de sus hijas A. y H. S., nacidas en Z. de padre guineano y madre gambiana el 5 de septiembre de 1997, del nombre del padre de las inscritas, exponiendo que consta como tal «D.» en lugar de «J.», que es lo correcto, y la juez encargada, considerando que no ha quedado acreditado en modo alguno el error alegado, dispone que no ha lugar a la rectificación instada y que procede rectificar la marginal practicada en 2005 en los asientos de nacimiento de las interesadas, en el sentido de que el apellido correcto de las inscritas y de su padre es «S.», mediante auto de 18 de febrero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro de los errores denunciados.

IV. El apellido de una persona que, conforme a su ley personal, ostenta únicamente el paterno y el nombre de su padre son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93, apartados 1.º y 3.º, LRC. En este caso, unida al expediente de rectificación copia testimoniada de los respectivos cuestionarios para la declaración de nacimiento, se comprueba que ambos, cumplimentados y firmados por D., expresan en los apartados correspondientes que el nombre del padre de la nacida y el nombre del declarante es D.; y lo que las dos inscripciones de nacimiento acreditan no queda desvirtuado por el certificado de nacimiento gambiano propio que el promotor aporta al expediente de rectificación porque corresponde a una inscripción practicada en fecha posterior a la de requerimiento del documento por la encargada y, por tanto, ha de estimarse que no ofrece garantías análogas a las exigidas por la ley española (*cf.* art. 23 LRC). No obstante, al resolver el recurso no puede prescindirse del hecho de que, durante la tramitación de la apelación, el apellido controvertido de las interesadas y las menciones de identidad de su padre que se aducen correctas han accedido al registro civil español en la inscripción de nacimiento del progenitor, practicada el 7 de febrero de 2017, con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución de la DGRN de 15 de diciembre de 2016 dictada en expediente 8190/12, por transcripción de certificado del registro gambiano anterior y distinto del aquí aportado y por tanto, atendiendo al valor legitimador y probatorio de toda inscripción (art. 2 LRC), ha de concluirse que el apellido de las inscritas y de su padre es «S.» y el nombre de este «J.» y en virtud de lo dispuesto en el artícu-

lo 93.3.º LRC, procede acordar la rectificación instada respecto al nombre del padre y dejar sin efecto la decidida de oficio respecto al apellido de las inscritas y de su padre.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso.
- 2.º Disponer que las inscripciones de nacimiento de A. y H. S. se rectifiquen en el sentido de hacer constar que el apellido de la inscrita y de su padre es «S.» y el nombre de este «J.».

Madrid, 7 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (44.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (39.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (40.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (94.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (15.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (17.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (42.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (36.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 17 de marzo de 2017 (24.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (42.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 21 de abril de 2017 (39.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 28 de abril de 2017 (10.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (24.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (25.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 2 de junio de 2017 (32.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 9 de junio de 2017 (31.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 23 de junio de 2017 (39.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (29.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 7 de julio de 2017 (1.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 7 de julio de 2017 (4.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 28 de julio de 2017 (22.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (17.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (71.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (97.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (100.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (27.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (18.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (2.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (10.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (25.^a). Rectificación de errores. Artículos 93 y 94 L.R.C.

7.1.2 RECTIFICACIÓN DE ERRORES ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL

Resolución de 10 de marzo de 2017 (35.^a)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.—*Declarada la nulidad por incompetencia del encargado del registro civil del auto que autoriza el cambio del primer apellido del padre de la interesada, ha de prosperar el expediente de supresión en las inscripciones de nacimiento y de matrimonio de esta de las marginales de cambio de apellido por consentimiento al del progenitor, cuya inscripción se ha basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal (arts. 95.2.º LRC y 297.3.º RRC).*

En el expediente sobre cancelación en inscripciones de nacimiento y de matrimonio de marginales de cambio de apellido remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo dictado por el juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

Visto el contenido de las comparecencias efectuadas en Registro Civil de Sevilla en fecha 18 de septiembre de 2015 por don R. M. y doña M. G. S.-T., que solicitan que en sus respectivas inscripciones de nacimiento, matrimonio y nacimiento de hijos se asiente el cambio de su primer apellido por «G.-V.», autorizado a su padre, don F. G.-V. H.-R., en virtud de resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Soria, el 23 de septiembre de 2015 el juez encargado acuerda que no ha lugar a practicar las notas solicitadas, ya que la competencia para resolver sobre el cambio de apellido del padre no corresponde al encargado del registro civil sino al Ministerio de Justicia, y que se dé traslado al ministerio fiscal, por si insta la declaración de nulidad del acuerdo de extensión de notas marginales en las inscripciones de nacimiento y de matrimonio de doña M. G.-V. S.-T. y consiguiente cancelación de las practicadas el 27 de agosto de 2015.

II

Unidas las antedichas inscripciones y la de nacimiento del padre, en la que consta marginal de cambio de apellido asentada el 24 de julio de 2015 en virtud de resolución de fecha 15 de junio de 2015 del juez encargado del Registro Civil de Soria, el ministerio fiscal interesó que se incorpore testimonio de las actuaciones que precedieron a la práctica de las marginal y, notificada la interesada de la resolución de 23 de septiembre de 2015 en comparecencia efectuada el día 25, el 1 de octubre presentó recurso en y ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que entiende que sus marginales se realizaron

conforme al procedimiento establecido y la documentación aportada y que durante el mes de septiembre ha cambiado el apellido en todos sus documentos (DNI, bancos, Hacienda...) y solicitando que, atendiendo a los perjuicios que le ocasionaría la anulación del cambio operado, se ratifique.

III

En paralelo, el ministerio fiscal informó que nada opone a que se inicie expediente de oficio, cuya resolución informa favorablemente e, incoado expediente gubernativo sobre cancelación de inscripciones marginales de cambio de apellido, el 26 octubre de 2015 el juez encargado del Registro Civil de Sevilla, razonando que el de Soria ha autorizado un cambio de apellido no regulado en los artículos 59 de la Ley del Registro Civil y 209 de su Reglamento y que el cumplimiento de las normas de competencia es controlable en vía de calificación –art. 27 LRC–, dictó auto disponiendo la cancelación de las notas marginales practicadas en las inscripciones de nacimiento y de matrimonio de la interesada, por basadas en título manifiestamente ilegal.

IV

La resolución fue notificada al ministerio fiscal y, a los mismos efectos, el 28 de octubre de 2015 se libró una primera citación a la interesada, que fue rehusada, y el 26 de noviembre de 2015 una segunda, cuya recepción en forma no consta.

V

De la interposición del recurso contra el acuerdo en el que trae causa el inicio del expediente se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a la apelación e interesó la confirmación de la resolución impugnada, y el juez encargado informó desfavorablemente al recurso, que no desvirtúa el contenido del auto dictado, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 26, 57 y 95.2.º de la Ley del Registro Civil (LRC) y 94, 147, 162, 163, 205, 217, 297.3.º, 306, 342, 349 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 1 de diciembre de 1998 y 20-1.ª de septiembre de 2001.

II. Dos hermanos de la interesada comparecen en el registro civil a fin de solicitar que en sus inscripciones registrales se asiente el cambio de apellido, «G.» por «G.-V.», inscrito a su padre y el juez encargado, visto que la competencia para resolver sobre el cambio de apellido del progenitor no correspondía al encargado del registro civil sino al Ministerio de Justicia, acuerda que no ha lugar a practicar las notas solicitadas y dar traslado al ministerio fiscal,

por si insta la declaración de nulidad de la comparecencia al mismo fin realizada por la interesada el 27 de agosto 2015 y la consiguiente cancelación de las notas marginales extendidas en sus inscripciones de nacimiento y de matrimonio. Esta resolución de 23 de septiembre de 2015, notificada a la interesada haciéndole saber que contra ella puede interponerse recurso en el plazo de quince días ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, constituye el objeto del presente recurso, remitido directamente a este centro directivo mientras en el registro civil del domicilio se incoa expediente gubernativo sobre cancelación de inscripciones marginales de cambio de apellido que concluye con auto de 26 octubre de 2015 cuyo primer intento de notificación a la interesada ha resultado fallido.

III. El acuerdo de 23 de septiembre de 2015, previo a la incoación del expediente y notificado a la interesada en virtud de lo dispuesto en el artículo 349 RRC, no es resolución recurrible conforme al artículo 355 RRC. Sin embargo, habida cuenta de que se le hace saber que sí lo es, que las alegaciones formuladas versan sobre lo posteriormente decidido en la resolución de 26 octubre de 2015 que pone término al expediente y que esta, pese a no haber sido expresamente apelada, no consta inscrita, cabe entender que porque se ha estimado que, afectada por el recurso anterior, no ha adquirido firmeza, resulta pertinente entrar a examinar las alegaciones que sobre la cuestión de fondo formula la recurrente.

IV. Por expediente gubernativo pueden suprimirse los asientos no permitidos o aquellos cuya práctica se haya basado de modo evidente en título manifiestamente ilegal (*cf.* arts. 95.2.º LRC y 297.3.º RRC) y, por tanto, si el encargado comprueba que se han extendido asientos de estas características, por exigencias del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* arts. 26 LRC y 94 RRC) está legitimado para promover el oportuno expediente de cancelación.

V. Dispone el artículo 217 RRC que, para que un cambio de apellido alcance a los descendientes no sujetos a la patria potestad, se requiere la inscripción de su consentimiento, formulado dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del cambio y con sujeción a las reglas formales de reconocimiento ante el encargado y, siendo cierto que, tal como alega la interesada, las marginales de cambio de apellido se realizaron conforme al procedimiento establecido, no lo es menos que la documentación aportada no es título válido ya que, aunque en la inscripción de nacimiento del padre consta practicada el 24 de julio de 2015 marginal de constancia de que su primer apellido, G., será en lo sucesivo G.-V. en virtud de resolución de fecha 15 de junio de 2015 del juez encargado del Registro Civil de Soria, de ella resulta de modo evidente que se ha basado en título manifiestamente ilegal, por cuanto la competencia para autorizar los cambios de apellidos regulados en los arts. 57 LRC y 205 RRC excede de la atribuida al encargado y pertenece al Ministerio de Justicia, y declarada nula dicha resolución por auto de 6 de noviembre de 2015 que asimismo ordena la cancelación de la inscripción marginal de cambio de ape-

lido, nulos son todos los actos de ella derivados y, en consecuencia, procede cancelar las marginales de cambio de apellido asentadas en las inscripciones de nacimiento y de matrimonio de la interesada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 10 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (44.ª)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.–*No es posible modificar un topónimo para hacer constar la denominación oficial actual del lugar, cuya determinación no puede conllevar la alteración de todos los asientos registrales anteriores.*

En el expediente sobre rectificación en inscripción de nacimiento de la denominación del lugar en el que acaeció el hecho remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Mieres (Asturias).

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Mieres en fecha 17 de julio de 2015 don X-L. C. A., nacido el 4 de enero de 1961 en M. y domiciliado en dicha población, manifiesta su voluntad de cambiar su lugar de nacimiento, Murias - Mieres, por su equivalente onomástico en lengua asturiana, Muries - Mieres, acompañando copia compulsada de su DNI, certificación literal de inscripción de nacimiento, Decreto 9/2009, de 4 de febrero, publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 13, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Mieres y volante individual de inscripción en el padrón de Mieres.

II

El ministerio fiscal informó que no se opone a lo solicitado por el promotor y el 23 de septiembre de 2015 la juez encargada, razonando que la posibilidad de adecuación a la

gramática y fonética de la lengua española correspondiente, legalmente prevista para nombres y apellidos, no se extiende a otras menciones y que la modificación interesada tampoco puede ser acogida por la vía de la rectificación de error, ya que no consta que la grafía utilizada en 1961 para designar la demarcación administrativa de la localidad de Mieres en la que radica su residencia sanitaria estuviera equivocada, dictó auto disponiendo denegar la rectificación interesada.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se le ha denegado, primero por la Comisaría de Policía de Mieres del Camín y posteriormente por la Secretaría de Estado de Seguridad, que en su carné de identidad figure el topónimo Muries como lugar de nacimiento y se le ha remitido al registro civil de Mieres, en tanto que órgano competente para cambiar la denominación del lugar de nacimiento.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución dictada, y la juez encargada informó que la solicitud no encuentra cobertura legal en la regulación propia del registro civil y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 37, 41, 54, 55 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 192, 198, 298 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 8 de febrero y 25-1.^a de junio de 1996.

II. Solicita el promotor que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Mieres el 7 de enero de 1961, se cambie el lugar en el que acaeció el hecho, Murias-Mieres, por su equivalente onomástico en lengua asturiana, Muries-Mieres, y la juez encargada, razonando que la posibilidad de adecuación a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente, legalmente prevista para nombres y apellidos, no se extiende a otras menciones y que la modificación interesada tampoco puede ser acogida por la vía de la rectificación de error, ya que no consta que la grafía en su momento utilizada fuera incorrecta, dispone denegar lo interesado mediante auto de 23 de septiembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. No acreditado que la denominación del lugar, perteneciente al municipio de Mieres, en el que radica su residencia sanitaria no fuera «Murias» ni,

por tanto, que se incurriera en error al practicar la inscripción, el cambio posterior no ha de motivar la rectificación masiva, no prevista legalmente, de todas las inscripciones que reflejan topónimos oficiales anteriores.

IV. La solución contraria implicaría un ingente aumento de la carga de trabajo de los registros civiles en detrimento de su eficacia frente a los ciudadanos y, a mayor abundamiento, en este caso no satisfaría la pretensión del recurrente puesto que, aunque pudiera reseñarse que la denominación oficial actual del ente territorial menor de Murias es Muries, tal indicación en nada afecta a la población de nacimiento que, tal como consta de la propia inscripción (arts. 2 y 41 LRC), es Mieres.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 31 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Mieres (Asturias).

Resolución de 12 de mayo de 2017 (37.^a)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.–*Procede la supresión de oficio del asiento de cambio de nombre de la inscrita en su inscripción de nacimiento porque se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal, dado que el cambio autorizado por el registro del domicilio de la interesada incurría en una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre supresión de oficio del asiento de cambio de nombre de la inscrita en una inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

Mediante auto de 18 de septiembre de 2014 dictado por la encargada del Registro Civil de Dos Hermanas (Sevilla), se autorizaba el cambio de nombre solicitado por Doña. A.-B. M.- P., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, por A.-B.-P. tras haber alegado la interesada que es así como se la conoce en su entorno personal y profesional.

II

Tras la comparecencia de la interesada en el registro de su domicilio solicitando que se hiciera efectivo el cambio autorizado, se remitieron las actuaciones al Registro Civil de Sevilla, donde consta la inscripción de nacimiento, para la práctica del asiento correspondiente.

III

El encargado del Registro Civil de Sevilla acordó practicar la marginal de cambio de nombre –que se realizó el 27 de octubre de 2014– pero, simultáneamente, trasladó las actuaciones al ministerio fiscal por si procedía incoar expediente para dejar sin efecto el cambio autorizado a la vista del contenido del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, comunicando todo ello al registro de procedencia.

IV

Previo informe favorable del ministerio fiscal, se ordenó la notificación a la interesada del inicio de las actuaciones de oficio. El encargado del registro dictó auto el 12 de febrero de 2015 acordando la cancelación de la marginal de cambio de nombre practicada porque la modificación autorizada en Dos Hermanas infringía uno de los límites del artículo 54 de la Ley del Registro Civil (LRC), que prevé que no puede consignarse más de un nombre compuesto o más de dos simples.

V

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la interesada que el nombre autorizado por el registro civil de su domicilio es el que ya figura en numerosos documentos relativos a su actividad profesional, que el cambio no infringe el artículo 54 LRC, ya que se trata de un nombre simple y uno compuesto que a su vez es sinónimo de otro nombre simple (R.) y que así consta registrada en su partida de bautismo. Finalmente, añadía que, una vez inscrito el cambio en el registro civil, ya había modificado su libro de familia y su inscripción en la oferta de empleo público del Servicio Andaluz de Salud, entre otros documentos.

VI

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Sevilla se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 27, 54, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 297.3.º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones,

entre otras, 20-1.^a de septiembre de 2001; 3-3.^a de enero, 6-1.^a de marzo y 17-2.^a de mayo de 2003; 20-4.^a de febrero y 5-2.^a de octubre de 2004; 5-3.^a de diciembre de 2005; 16-3.^a de marzo, 9-6.^a y 22-1.^a de mayo, 25-4.^a de junio y 21-4.^a de septiembre de 2007; 6-7.^a de mayo y 27-5.^a de noviembre de 2008; 14 de febrero de 2009; 12-5.^a de abril de 2011; 5-57.^a de junio de 2015 y 5-18.^a de febrero de 2016.

II. La interesada solicitó autorización ante el registro de su domicilio para cambiar su nombre, A.-B, por A.-B.-P., cambio que fue autorizado por la encargada en septiembre de 2014, remitiéndose a continuación las actuaciones al Registro Civil de Sevilla, competente para practicar el asiento dado que es allí donde se inscribió el nacimiento. El encargado de este último registro practicó la inscripción decidida por la encargada del domicilio pero, observando que el cambio autorizado infringía una de las prohibiciones del artículo 54 LRC, inició a continuación, con el acuerdo del ministerio fiscal, el procedimiento pertinente para suprimir el asiento. El auto por el que se acordó tal supresión constituye el objeto del recurso analizado.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado. En este caso la interesada solicitó añadir un tercer nombre a los dos que ya ostentaba y, a pesar de que tal pretensión tropezaba claramente con una de las prohibiciones de los artículos mencionados según la cual no se pueden imponer más de dos nombres simples ni más de uno compuesto, la encargada del registro autorizó la modificación.

IV. Al no coincidir el registro competente para autorizar el cambio (el del domicilio de la interesada) y el competente para practicar el asiento (aquel en el que consta la inscripción de nacimiento), la calificación de la resolución por parte del encargado de este último solo se extendía a la competencia y clase de procedimiento seguido y a las formalidades extrínsecas de los documentos presentados (art. 27 LRC), razón por la cual el encargado de Sevilla acordó la práctica de la marginal correspondiente.

V. Por medio de expediente gubernativo solo pueden suprimirse las circunstancias o asientos no permitidos o aquellos cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal (arts. 95.2 LRC y 297 RRC). Así, si el encargado comprueba que se ha extendido un asiento de estas características, está legitimado para promover el oportuno expediente de cancelación por exigencias del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad (arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC). Eso es lo que ha sucedido en este caso cuando, una vez practicado el asiento, se instó, con notificación al ministerio fiscal y a la interesada, un procedimiento

para cancelarlo al haber constatado que el cambio autorizado por el registro del domicilio infringía claramente uno de los límites legales en materia de nombres, de manera que la marginal se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal, procediendo en consecuencia su supresión.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 12 de mayo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (21.^a)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.–1.º *Mediante expediente gubernativo solo pueden suprimirse los asientos no permitidos o cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal.*

2.º *La rectificación de un error en el primer apellido de la inscrita en una inscripción de nacimiento fue correcta y se basó en título legal.*

En el expediente sobre rectificación de apellido en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra la resolución de la encargada del Registro Civil de Aoiz (Pamplona).

HECHOS

I

Mediante comparecencia el 22 de mayo de 2015 en el Registro Civil de Pamplona, Don J.-A. A. N. y Doña M.-J. B. O., con domicilio en la misma localidad, solicitaban la cancelación de la marginal de rectificación del primer apellido de la inscrita en la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, M. Azcona B., para que vuelva a figurar en la misma forma que el de su hermana mayor, E. Azkona B.. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI de los promotores y de su hija mayor; volante de empadronamiento; certificado literal de nacimiento del Registro Civil de Aoiz de M. Azkona B. (cuerpo principal de la inscripción), nacida el de 2014, con marginal de 20 de febrero de 2015 de rectificación del primer apellido de la inscrita, en virtud de resolución de la encargada del registro de 5 de febrero de 2015, para hacer constar que el correcto es Azcona; certificado literal de nacimiento del Registro Civil de Aoiz de E. Azkona B. (cuerpo principal de la inscripción), nacida el de 2011, con marginal de 17 de junio de 2011 para hacer constar que el primer apellido de la inscrita será en lo sucesivo Azkona en virtud de comparecencia

de sus representantes legales en el Registro Civil de Aoiz el 23 de mayo de 2011 y certificado literal de nacimiento del padre de las menores, J.-A. Azcona N

II

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado de Pamplona remitió el expediente, con informe también desfavorable, al Registro Civil de Aoiz, competente para la resolución.

III

La encargada del Registro Civil de Aoiz dictó providencia el 24 de septiembre de 2015 denegando la pretensión por considerar que la rectificación que se quiere dejar sin efecto fue correcta, dado que el apellido paterno es Azcona y no *Azkona*, y que el asiento que contiene un error es el de la hija mayor. Por ello, al mismo tiempo se acuerda la rectificación de este último para hacer constar que el apellido paterno de E. es Azcona. Finalmente, señala la encargada que para que las dos hermanas puedan ostentar el apellido paterno con la grafía deseada, sería preciso que el padre solicitara previamente la regularización ortográfica de su propio apellido y, si esta fuera admitida, se reflejaría automáticamente en los asientos de nacimiento de sus hijas.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores que, una vez practicada la inscripción de nacimiento de su hija mayor, nacida en 2011, solicitaron inmediatamente la adaptación gráfica al euskera de su primer apellido, que fue admitida y reflejada en el asiento en junio de ese mismo año. Cuando nació su segunda hija, la inscripción se realizó con el mismo apellido que ya ostentaba su hermana mayor pero, al solicitar el DNI de la nacida, se les indicó que el documento no podría expedirse mientras no se rectificara la inscripción de nacimiento de manera que el apellido de la inscrita coincidiera con el de su padre, razón por la cual acudieron al registro de Aoiz, donde se practicó el asiento de rectificación y se les indicó que para que la inscrita volviera a ostentar el apellido Azkona debían dirigirse al registro de su domicilio (en ese momento P.) y solicitar allí el cambio. Así lo hicieron, pero el registro de Pamplona remitió el expediente al de Aoiz por ser competencia de este el cambio pretendido, si bien adjuntaba un informe desfavorable en el que se consideraba que para obtener el apellido deseado para sus hijas, debía ser el progenitor quien modificara previamente su propio apellido, pasando dicha modificación automáticamente a las hijas. La encargada del Registro Civil de Aoiz siguió ese mismo criterio en la resolución que ahora se recurre, si bien los interesados sostienen que no debe ser necesario que el padre modifique su propio apellido, que lo que pretenden no es un cambio sino una corrección ortográfica, mucho más simple y que se hace habitualmente en otros registros, y que modificar ahora el apellido de su hija mayor supondría un grave perjuicio para ella. Con el escrito de recurso aportaban un certificado de la Euskaltzaindia según el cual el apellido conocido en su forma tradicional como Azcona se escribe *Azkona* en euskera y varios documentos acreditativos de uso por ambas menores del apellido en la forma solicitada.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, no se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Aoiz se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 55, 60, 62, 92, 93 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 206 y 297 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 22-1.^a de enero, 1-3.^a de junio, 6-4.^a de septiembre y 11-2.^a de diciembre de 2002; 8 de marzo, 30-4.^a de septiembre y 23-4.^a de octubre de 2003; 18-1.^a y 16-5.^a de febrero y 20-1.^a de octubre de 2005; 6-1.^a de noviembre y 20-3.^a de diciembre de 2006; 30-4.^a de octubre y 30-1.^a de noviembre de 2007; 4-5.^a de julio de 2008; 5-20.^a de septiembre de 2012; 28-6.^a de junio, 12-30.^a de septiembre y 7-40.^a de octubre de 2013; 17-21.^a de marzo y 9-13.^a de julio de 2014; 13-23.^a de febrero y 11-19.^a de diciembre de 2015 y 1-32.^a de julio de 2016.

II. Una vez examinada la documentación incorporada al expediente, se observa cierta confusión, tanto en la elección de los procedimientos adecuados para la obtención de la pretensión de los promotores como en la calificación realizada en algunos de los trámites registrales. Para aclarar las cosas, conviene examinar los hechos siguiendo un orden cronológico.

III. Así, a la primera hija nacida se le atribuyó inicialmente el apellido paterno en la forma que le correspondía, es decir, el mismo que ostenta su padre: Azcona. Después, ambos progenitores solicitaron para la inscrita –presumiblemente, dado que no se especifica en la marginal practicada– la adaptación gráfica del apellido paterno a la que se refiere el último párrafo del artículo 55 LRC, siendo admitida la propuesta por la encargada del registro competente (el del lugar donde está inscrito el nacimiento) y practicado el asiento correspondiente en junio de 2011.

IV. Teniendo en cuenta que la modificación anterior solo afectaba a la hija mayor, cuando nació la segunda, para que ambas hermanas pudieran ostentar el mismo apellido, debió haberse seguido el mismo procedimiento, pues únicamente se podría haber atribuido a M. el apellido Azkona desde el principio si el padre también hubiera modificado el suyo previamente, cosa que no ha sucedido ni es imprescindible para poder modificar el apellido de sus hijas, aunque sí supondría el cambio automático para la hija ya nacida menor de edad, y la atribución inicial del apellido modificado en caso de hijos futuros. Sin embargo, al inscribir el nacimiento de M., se atribuyó a la nacida un apellido que no coincidía con el que ostenta su padre, error que fue adecuadamente corregido mediante resolución de la encargada del registro que dio lugar a la marginal que ahora se quiere dejar sin efecto.

V. En consecuencia con lo anterior, no procede ni la cancelación del asiento de rectificación practicado en 2015, que corrigió un error evidente, ni la promoción de otro expediente de rectificación porque actualmente no consta error alguno. La única vía, en este momento, para que ambas menores ostenten el mismo apellido pasa por que los progenitores soliciten para la más pequeña, a través del registro correspondiente a su domicilio, la regularización ortográfica prevista en el último párrafo del artículo 55 LRC, correspondiendo la autorización, en su caso, a la encargada del Registro Civil de Aoiz. En virtud de esa norma, un apellido vasco inscrito incorrectamente puede ser sustituido, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado (o de su representante legal), por su forma correcta en lengua vasca. Sin entrar a valorar tal cuestión en esta instancia, sí cabe recordar, no obstante, que solo es posible realizar la corrección gramatical de los apellidos propios de una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua, pero no se puede obtener por esa vía ni la traducción de un apellido ni la adaptación gráfica a otra de las lenguas oficiales de apellidos que no sean del acervo propio de esa lengua. Por ello, deberá probarse que el apellido cuya modificación se persigue es específicamente vasco y que existe una incorrección ortográfica en la forma en la que figura atribuido en el registro civil. Si la encargada competente en este caso considera que se cumplen las condiciones descritas, inscribirá marginalmente la modificación interesada en el asiento de nacimiento de la segunda hija. En caso contrario, dictará resolución razonada y, además, deberá dejar sin efecto el cambio autorizado en 2011 para la hija mayor, pues es evidente que, tratándose de menores de edad, la unidad familiar requiere que ambas hermanas ostenten los mismos apellidos.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Aoiz (Pamplona).

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (20.^a)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.—*Dado que solo es posible la cancelación por expediente de un asiento si es no permitido o si su práctica se ha basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2 LRC y 297.3 RRC), no prospera el expediente de cancelación de una inscripción de defunción y práctica de otra referida a una hermana de la inscrita.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de defunción remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Pontevedra.

HECHOS

I

En sendas comparencias efectuadas en el Registro Civil de Pontevedra en fecha 14 de julio de 2014 Doña S., Doña R. y Doña M.-C. S. R., mayores de edad y domiciliadas la primera en S. (B.) y en P. las otras dos, manifiestan que su hermana H. falleció en accidente de tráfico, a la altura de P., el día 10 de marzo de 1964, que tenía un hijo llamado J.-L. S. R. que era pequeño, se quedó con su abuela y, fallecida esta, con otros familiares, percibió una indemnización –desconocen qué juzgado llevó las diligencias– y vive en A. U. (L.); y que la defunción de H. no consta inscrita en el registro civil y, en cambio, se encontró inscripción de defunción con los datos de M.-C. y solicitan que se asiente la defunción de la primera y se cancele la que obra a nombre de la segunda. Acompañan certificación literal de inscripciones de nacimiento de H. y M.-C. S. R., nacidas, respectivamente, el 16 de mayo de 1936 y el 18 de marzo de 1943 en A. U., certificación literal de inscripción de defunción de M.-C. S. R., de veinticinco años, y copia testimoniada del DNI de las tres comparecientes.

II

Acordada la formación de expediente gubernativo de rectificación de error, el 22 de agosto de 2014 un hijo de M.-C. aportó certificación del Ayuntamiento de Pontevedra sobre enterramiento en fecha 12 de marzo de 1964 de M.-C. S. R. y escrito del *Servizo Galego de Saúde* informando de que las historias clínicas y los libros de registro de asistencias del Hospital Provincial depositados en el archivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra fueron destruidos por un incendio el 19 de mayo de 2004. Unida certificación negativa de inscripción de defunción de H. S. R., se requirió a R., por haberlo interesado así el ministerio fiscal, a fin de que aporte certificación de bautismo de H. y aquella presentó primero fe de vida y estado de M.-C. expedida por el Registro Civil de Antas de Ulla y, sucesivamente, certificación en extracto de la partida de bautismo solicitada, que expresa que el 16 de mayo de 1936 fue bautizada la nacida el día 14.

III

El ministerio fiscal informó que nada opone a la cancelación de la inscripción de la defunción de M.-C. y a la inscripción de la defunción de H. y el 28 de enero de 2016 la juez encargada dictó auto disponiendo que, sin perjuicio de lo que pueda resultar en la vía judicial correspondiente, no aportados elementos suficientes de prueba, no procede rectificar en vía gubernativa el nombre y la fecha de nacimiento de la fallecida en inscripción realizada en virtud de «carta-orden de la Superioridad» de la que no obra legajo en el archivo del registro.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a las promotoras, M.-C. interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, con la documentación que ahora acompaña y cuya existencia desconocía en la fecha de inicio del expediente queda plenamente acreditado el error alegado y procede rectificar en vía gubernativa la inscripción de defunción, a fin de que figure el nombre de H. donde figura el de M.-C., y acompañando como prueba certificación literal de inscripción de nacimiento de J.-L. S. R., nacido en A. U. el 16 de junio de 1959 hijo de H., de veintidós años, y acta de manifestaciones efectuadas por José Luis y por la recurrente en fecha 2 de marzo de 2016 ante notario de M. (Lugo) que tiene como anexo acta notarial de fecha 25 de noviembre de 1966 por la que el consejo de familia aprueba las cuentas rendidas por la tutora de J.-L.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, compartiendo las alegaciones efectuadas, toda vez que se acreditó un error evidente a la hora de inscribir cuál de las hermanas era la difunta, se adhirió al recurso, y la juez encargada informó que el auto dictado no se hace a lo solicitado en la vía administrativa, sin perjuicio de lo que pueda resultar en la vía judicial correspondiente, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 39, 41, 81, 92 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 159, 297, 342 y 346 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 2-4.^a de febrero y 18-2.^a de mayo de 2002; 20-1.^a de octubre de 2005 y 19-3.^a de mayo de 2008 y 28-6.^a de febrero y 29-16.^a de octubre de 2012.

II. Se pretende por las promotoras que mediante expediente gubernativo se rectifique en una inscripción de defunción el nombre de la difunta, coincidente con el de la recurrente, sustituyéndolo por el de una hermana, ello supone la cancelación de una inscripción de defunción asentada en 1964 y la práctica de otra referida a persona distinta y la juez encargada, considerando que no se han aportado elementos suficientes de prueba, dispone que, sin perjuicio de lo que pueda resultar en la vía judicial correspondiente, no procede rectificar en vía gubernativa el nombre y la fecha de nacimiento de la fallecida en una inscripción realizada en virtud de «carta-orden de la Superioridad», de la que no obra legajo en el archivo del registro, mediante auto de 28 de enero de 2016 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la interesada y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC), la rectificación aquí interesada implica la supresión de un

asiento, que solo cabe acordar en expediente gubernativo si es no permitido o si su práctica se ha basado «de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal» (art. 95.2.º LRC) y ninguno de estos requisitos se da en el presente caso: la inscripción de defunción es, obviamente, asiento permitido sobre hecho que constituye objeto del registro (art. 297.1.º y 2.º RRC), la nulidad del título no se deduce de la inscripción, practicada en virtud de «carta-orden de la Superioridad» que cabe entender precedida, dadas las circunstancias de muerte que constan por manifestación de las tres promotoras, de identificación del cadáver y es altamente improbable que, de resultas de las actuaciones en su momento seguidas, se acordara asentar la defunción de una de las hermanas de la finada y quedara sin inscribir la de esta. Las pruebas presentadas en fase de recurso no desvirtúan lo anterior porque en la inscripción de defunción practicada en 1964 no se consignó la fecha de nacimiento de la difunta sino su edad, veinticinco años, compatible con la de las dos hermanas, a la sazón de veintiuno y veintiocho años, a las que se refieren las inscripciones de nacimiento aportadas al expediente y, a falta de otros datos, no queda claramente determinado que la fallecida sea quien en la correspondiente inscripción de nacimiento figura inscrita como H. S. R. y no quien figura como M.-C. S. R. Así pues, la cancelación de la inscripción de defunción de la muerta civilmente hace medio siglo habrá de instarse en la vía judicial ordinaria en la que, sin los límites del artículo 2 LRC, son admitidos medios más amplios de prueba.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 3 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Pontevedra.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (27.^a)

Rectificación de errores. Artículo 95 LRC.—*Es correcta la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo en el registro civil del domicilio común de los padres, distinto del de nacimiento, a solicitud de estos y con todos los requisitos exigidos (arts. 16.2 LRC y 68 RRC). En dichas inscripciones se considerará a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento del inscrito es el municipio en el que se ha practicado el asiento.*

En el expediente sobre rectificación en inscripción de nacimiento del lugar en el que acaeció el hecho remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Lleida.

HECHOS

I

En escrito presentado en el Registro Civil de Lleida en fecha 20 de marzo de 2015 don G. S. B. y doña V. D. A., mayores de edad y domiciliados en S. (Lleida), exponen que el 10 de noviembre de 2014 nació su hija D. S. D. en la ciudad de L., que fueron a inscribirla al registro civil de su lugar de residencia, donde únicamente se les informó de los documentos que debían aportar y que, cuando días después fueron a recoger el libro de familia, vieron atónitos que constaba como lugar de nacimiento S.; y solicitan que se rectifique el asiento de nacimiento, a fin de que conste el lugar real, que es el elegido por ellos de común acuerdo, acompañando copia simple de certificación literal de inscripción de nacimiento de la menor y de libro de familia.

II

El ministerio fiscal, a la vista de las manifestaciones efectuadas por los promotores y de que no consta acto formal de elección como lugar de inscripción del nacimiento el de su domicilio, no se opuso a lo peticionado y el 10 de noviembre de 2015 la juez encargada, razonando que los padres comparecieron a inscribir a su hija en el registro civil del lugar de su domicilio y que en la inscripción de nacimiento no se aprecia la concurrencia de ningún error de los previstos en los artículos 93 y siguientes de la Ley del Registro Civil, dictó auto disponiendo denegar la solicitud de corrección de error.

III

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, estos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que han solicitado copia testimoniada del expediente y en él obra una instancia de fecha 14 de noviembre de 2014, presuntamente presentada por ellos en papel sin membrete del registro, que es poco creíble porque no recuerdan haberla firmado, la madre no reconoce su firma, la inscripción la solicitó únicamente el padre y, en todo caso, la remisión al artículo 16.2 de la Ley del Registro Civil es del todo insuficiente, puesto que no se indica lo que implica su aplicación y que, existiendo prueba suficiente de que el nacimiento se produjo en L., rige la regla general del artículo 16.1 y la rectificación interesada tiene cabida en el apartado 3 del artículo 93 de la ley; y solicitando que se dicte resolución por la que se revoque el auto dictado y se acuerde rectificar la inscripción de nacimiento, en el sentido de que la menor conste inscrita en el registro civil del lugar de nacimiento.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista de la documentación aportada y del derecho aplicable, no se opuso y la juez encargada dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V

A tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 358 del Reglamento del Registro Civil la dirección general acordó, para mejor proveer, oficiar al registro civil que dictó la resolución recurrida interesando que se una al expediente copia testimoniada del legajo correspondiente al nacimiento de la menor, con el resultado de que, aportando certificación expedida por el centro sanitario para constancia de que por parte de esa institución no se ha promovido la inscripción, padre y madre firmaron el cuestionario para la declaración de nacimiento y la solicitud de que, conforme al art. 16.2 LRC, su hija sea inscrita en el Registro Civil de Sidamon, que la juez de paz elevó consulta al Registro Civil de Lleida, con remisión de todo lo actuado, y que la juez encargada autorizó la inscripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 68 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 9 de abril de 1999, 9-1.^a de septiembre de 2000, 17-4.^a de noviembre de 2006, 27-9.^a de septiembre de 2007, 16-2.^a de enero y 28-1.^a de septiembre de 2009, 26-3.^a de marzo de 2010, 28-1.^a de junio y 15-16.^a de noviembre de 2013, 31-22.^a de julio y 27-15.^a de noviembre de 2015 y 22-19.^a de abril, 15-30.^a de julio y 25-29.^a de noviembre de 2016.

II. Solicitan los promotores que en la inscripción de nacimiento de su hija, nacida el 10 de noviembre de 2014 en el hospital A. V. de la ciudad de L. e inscrita el 18 de noviembre de 2014 en el Registro Civil de Sidamon, se rectifique el lugar de nacimiento, exponiendo que únicamente se les informó de los documentos que debían aportar y no tuvieron oportunidad de escoger el lugar de nacimiento, y la juez encargada, razonando que los padres comparecieron a inscribir a su hija en el registro civil del lugar de su domicilio y que en la inscripción de nacimiento no se aprecia la concurrencia de ningún error de los previstos en los artículos 93 y siguientes LRC, dispone denegar la corrección instada mediante auto de 10 de noviembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La inscripción dentro de plazo de un nacimiento acaecido en España ha de extenderse, en principio, en el registro municipal correspondiente al lugar del nacimiento. No obstante, la Ley 4/1991, de 10 de enero, introdujo en esta regla general de competencia (art. 16.1 LRC) una excepción que permite la inscripción en el registro municipal correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos, a solicitud de estos de común acuerdo y con las consecuencias que señala el art. 16.2 LRC y desarrolla el artículo 68 RRC, en la redacción dada por el Real Decreto 1063/1991, de 5 de julio. Así pues, si resulta patente que se ha extendido el asiento en registro civil distinto del de nacimiento sin cumplirse las condiciones exigidas, puede sobrevenir defecto formal (*cf.* arts. 95.3.º LRC y 298.1.º RRC) que ha de

corregirse por expediente gubernativo que ordene el traslado de la inscripción practicada y la subsiguiente cancelación de esta.

IV. En este caso, está acreditado que la inscripción de la nacida en la ciudad de L. se ha practicado en el Registro Civil de Sidamon dentro de plazo y por declaración expresa de los dos progenitores que, en escrito firmado por ambos, solicitan que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.2 LRC, la inscripción se practique en S., que es donde tienen su domicilio, aportando certificación expedida por el centro sanitario para constancia de que por el hospital no se ha promovido la inscripción en el registro civil de la población de nacimiento. Por tanto, no hay irregularidad ni defecto formal a corregir y el hecho de que, una vez extendida la inscripción, se considere a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento es el municipio en cuyo registro se ha practicado el asiento es la consecuencia obligada del precepto transcrito, consta de la propia inscripción de nacimiento y no puede alegarse ignorancia respecto a ella (*cf.* art. 6.1 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lleida.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de febrero de 2017 (44.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (34.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

Resolución de 9 de junio de 2017 (23.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

Resolución de 16 de junio de 2017 (24.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

Resolución de 30 de junio de 2017 (25.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

Resolución de 28 de julio de 2017 (23.^a). Rectificación de errores. Artículo 95 L.R.C.

7.2 Cancelación

7.2.1 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

Resolución de 24 de enero de 2017 (8.^a)

Cancelación de inscripción de nacimiento.—*Procede la cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de la promotora porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia).

HECHOS

I

El 13 de junio de 2005, la Sra. R. G. M., mayor de edad y de nacionalidad boliviana, suscribió acta de opción a la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia) basada en la nacionalidad española de su padre. Consta en el expediente la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción, certificado boliviano de nacimiento de la interesada el 19 de noviembre de 1983 (asiento practicado el 10 de mayo de 1984), hija de A. G. P. y de C. M. P., certificado de bautismo e inscripción de nacimiento de A. G. P., nacido en Bolivia el 29 de noviembre de 1955, con marginal de recuperación de la nacionalidad española el 11 de junio de 2002.

II

La encargada del registro civil consular inició actuaciones en 2010 para cancelar la inscripción practicada al tener noticia de que la certificación boliviana de nacimiento pre-

sentada por la interesada para la obtención de su inscripción pudo estar falsificada. Recabada información al respecto a la Dirección General de Registro Civil de Bolivia, dicho organismo remitió informe elaborado por el Registro Civil de Beni (Bolivia) fechado el 3 de mayo de 2010, en el que figura que, entre otras, la partida de nacimiento aportada por la promotora para obtener su inscripción en el registro civil español contiene datos falsos y se recomienda iniciar las acciones legales que correspondan. La notificación del procedimiento en trámite se realizó mediante publicación en el tablón de anuncios del Registro Civil del Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra, por corresponder a esa demarcación consular el último domicilio conocido de la interesada.

III

Previo informe favorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 14 de octubre de 2010 acordando la cancelación de la inscripción por haberse practicado sobre la base de un documento manifiestamente ilegal.

IV

Notificada la resolución, se presentó recurso alegando la interesada que no tuvo conocimiento del procedimiento de cancelación iniciado en 2010 porque desde 2005 reside fuera de Bolivia y se enteró de que su inscripción de nacimiento había sido cancelada al solicitar la renovación de su pasaporte en marzo de 2014. Al mismo tiempo, insistía en que la certificación de nacimiento aportada en su día no es falsa, pues no ha sido anulada, como demuestra con la aportación de una nueva certificación expedida en marzo de 2015 con los mismos datos de filiación.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Paz (Bolivia) se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95.2.º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3.º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1.ª de septiembre de 2001; 5-2.ª de octubre de 2004; 9-6.ª y 22-1.ª de mayo y 21-4.ª de septiembre de 2007; 6-7.ª de mayo y 27-5.ª de noviembre de 2008; 14 de febrero de 2009; 2-36.ª de septiembre, 15-32.ª de noviembre y 13-57.ª de diciembre de 2013; 20-108.ª de marzo de 2014 y 18-33.ª de marzo de 2016.

II. La promotora instó en 2005 su inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española por ser hija de padre español, nacido en Bolivia, que

había recuperado la nacionalidad española en 2002. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro consular inició en 2010 el procedimiento de cancelación por considerar que el acceso al registro se basó en un título manifiestamente ilegal al haber tenido conocimiento de que la certificación boliviana de nacimiento presentada en su día era falsa. Dicha cancelación constituye el objeto del presente recurso.

III. La recurrente alega que, a pesar del informe sobre supuesta falsedad documental de las autoridades locales en el que se basó la cancelación, su inscripción de nacimiento boliviana no ha sido anulada y continúa vigente con los mismos datos de filiación que figuraban en la certificación que sirvió de base para la práctica de la inscripción en el registro civil español y, en prueba de ello, aporta un nuevo certificado expedido por el registro civil boliviano el 3 de marzo de 2015. Sin embargo, aunque, en efecto, los datos de filiación, fecha y lugar de nacimiento, no varían respecto del presentado en 2005, sí se observan otras notables diferencias entre ellos. Así, según el documento expedido en 2005, la inscripción de la interesada se habría realizado el 10 de mayo de 1984 (seis meses después del nacimiento, por tanto) mientras que, según el expedido en 2015, resulta que el asiento se practicó el 7 de noviembre de 1994, constando asimismo números totalmente diferentes en los apartados correspondientes a la oficialía, libro, partida y folio de registro del hecho. Por otro lado, entre la documentación aportada por las autoridades bolivianas consta una inscripción practicada el 7 de noviembre de 1994 (coincidente pues en este punto con el documento incorporado al recurso) correspondiente a R. G. M., nacida el 19 de noviembre de 1978 e hija de B. G. H. y de C. M. P. Llama la atención que dicha inscripción se practicara por declaración de «R.» (no consta más identificación) y que en el apartado de observaciones figure que por «orden judicial» se modifica el año de nacimiento de la inscrita (que pasa a ser 1983) y la filiación paterna (ahora respecto de A. G. P.) en virtud de sentencia de 24 de septiembre de 2008 (hay que recordar que la opción a la nacionalidad española se ejerció en 2005). Nos encontramos así con varios documentos contradictorios, sin que ninguno de ellos haya sido ratificado como veraz y practicado con las debidas garantías por una autoridad superior, y con un informe emitido por el órgano registral boliviano advirtiendo claramente de que el certificado presentado en 2005 (al que identifica con el número de expedición) contiene datos falsos. Pero es que, además, la improcedencia de la práctica del asiento de opción se desprende de forma evidente de la propia inscripción practicada, dado que la inscrita nació el 19 de noviembre de 1983, mientras que su padre recuperó la nacionalidad española en 2002 (datos que, a pesar de las dudas que ahora surgen, la recurrente no discute). Teniendo en cuenta que la opción se ejerció en 2005 en virtud del artículo 20 CC, que el padre nació en Bolivia (lo que excluye la opción por el apartado b del artículo 20.1 CC) y que la mayoría de edad de los bolivianos quedó establecida a los dieciocho años a partir de la reforma operada por la Ley de 5 de mayo de 2000, resulta que la interesada, que solo habría podido optar por el

apartado a) del artículo 20.1 CC, alcanzó la mayoría de edad antes de que su padre recuperara la nacionalidad española, de manera que nunca estuvo sujeta a la patria potestad de un español y, además, había superado el plazo señalado en el artículo 20.2c), indicado en el propio asiento como fundamento de la opción. De manera que, aparte de las fundadas sospechas sobre la falsedad de la certificación boliviana de nacimiento aportada, resulta que tampoco se cumplían los presupuestos legales para el acceso a la nacionalidad española, habiéndose practicado la inscripción sobre la base de un título (el acta de opción) manifiestamente ilegal, concurriendo en consecuencia los requisitos para proceder a su cancelación tal como prevén los artículos 95.2 LRC y 297.3.º RRC.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la cancelación practicada

Madrid, 24 de enero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Paz (Bolivia).

Resolución de 24 de febrero de 2017 (19.ª)

Cancelación de inscripción de nacimiento.–*No procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción del nacido en España en 2008, hijo de progenitores de nacionalidad ecuatoriana y nacidos en Ecuador, una vez acreditado que se cumplen los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador).

HECHOS

I

Mediante resolución registral de fecha 24 de febrero de 2009, dictada por el encargado del Registro Civil de Santander, se declaró con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del menor D. N. Y. Q., nacido el de 2008 en A. (Santander), hijo de los ciudadanos ecuatorianos y nacidos en Ecuador, Don M.-R. Y. L. y D.ª N.-P. Q. M., en base al artículo 17.1.c) del Código Civil.

II

Que, con motivo de la renovación del pasaporte del menor en fecha 10 de enero de 2012, por el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador) se pone de manifiesto a los progenitores del menor que han surgido dudas acerca de la atribución de su nacionalidad española mediante declaración con valor de simple presunción, por lo que se procede a incoar expediente de oficio para declarar si al menor le corresponde la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en los artículos 96.2 de la Ley de Registro Civil y 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil.

III

Con fecha 24 de febrero de 2012, el órgano en funciones de ministerio fiscal, solicita que se instruya expediente que declare destruida la presunción de la nacionalidad española del interesado, al no encontrarse dentro de los supuestos legales para el otorgamiento de la misma y no existir riesgo de apatridia (art. 17.1.c) del Código Civil), fundamento de la nacionalidad española con valor de simple presunción.

IV

Por providencia de 24 de febrero de 2012, el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador) determina que procede se instruya expediente de cancelación de la anotación preventiva de presunción de la nacionalidad española del interesado, en virtud de lo establecido en el artículo 96.2 de la Ley del Registro Civil y artículos 147, 333, 338 y 338 del Reglamento del Registro Civil.

V

Por Auto de fecha 24 de febrero de 2012, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador), se acuerda declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil y remitir el expediente al encargado del Registro Civil de Astillero (Santander) a fin de que se practique la cancelación de la anotación marginal que declara la presunción de nacionalidad española del menor por inexacta.

VI

Notificada la resolución a los promotores, presentan recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo, alegando que la legislación aplicable en el momento del nacimiento del menor es la Constitución ecuatoriana de 1998, por la que solo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o bien se encontraban transitoriamente ausentes del país por cualquier causa. En los demás casos, la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento solo se adquiriría en virtud de un acto posterior, como es el hecho de domiciliarse en Ecuador o bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formu-

lada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero, circunstancia que no se produce en este caso. Aportan, entre otros, certificado emitido por el Consulado de Ecuador en Santander, en relación con la legislación ecuatoriana aplicable de acuerdo con la fecha de nacimiento del menor.

VII

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador) se remita el escrito de recurso y documentos acompañados al Canciller en funciones de ministerio fiscal, dándole plazo para formular alegaciones.

VIII

Con fecha 6 de febrero de 2017, la Canciller del Consulado General de España en Quito (Ecuador), en funciones de ministerio fiscal, emite informe en que indica que, a la vista del recurso interpuesto por los promotores, queda determinado que el menor ostenta la nacionalidad española, por lo que considera procedente que se inscriba dicha nota marginal, anulando la destrucción de la nacionalidad española en base al auto de 24 de febrero de 2012 dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador).

IX

Por oficio de la encargada del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador), registro de salida de 13 de febrero de 2017, se indica que se ha procedido a una nueva revisión y análisis del caso del menor en base a la normativa aplicable y conforme a la doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, por lo que, dado que los padres del optante en el momento de su nacimiento residían en el extranjero, la madre en España y el padre en Suiza, y la Constitución ecuatoriana de 1998, vigente en el momento del nacimiento del menor no otorgaba la nacionalidad ecuatoriana a los hijos de ecuatorianos nacidos en el extranjero, ha quedado determinado que el interesado ostenta la nacionalidad española de origen declarada con valor de simple presunción, concurriendo título suficiente en virtud del artículo 17.1.c) del Código Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, 4-4.^a y

13-4.^a de febrero, 13-1.^a de mayo, 28-1.^a y 3.^a de junio y 5-2.^a de diciembre de 2003; 14-4.^a de enero y 5-3.^a de noviembre de 2004; 30-1.^a de mayo, 30-3.^a de junio y 12-2.^a de julio de 2005; 12-4.^a y 20-2.^a de septiembre, 15-4.^a de noviembre y 27-5.^a de diciembre de 2006; 3-8.^a de abril, 21-5.^a y 27-10.^a de junio de 2007; 22-3.^a de mayo, 3-2.^a de septiembre y 19-3.^a de diciembre de 2008; 18-7.^a de Mayo de 2009.

II. El encargado del Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador) dictó auto el 24 de febrero de 2012 por el que se determinaba que al interesado no le correspondía la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil, que le había sido declarada por resolución registral 24 de febrero de 2009, dictada por el encargado del Registro Civil de Santander, dado que el menor ostentaba la nacionalidad ecuatoriana sin haberse producido en ningún momento una situación de apatridia. Los promotores, progenitores del menor, interponen recurso frente al citado auto. El órgano en funciones de ministerio fiscal y la encargada del Registro Civil Consular emiten informes favorables a la estimación del recurso interpuesto por los promotores.

III. Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de un niño nacido en España el de 2008, hijo de padres ecuatorianos nacidos en Ecuador. La petición se funda en la forma de atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art. 17.1c del Código civil), por lo cual resulta necesario precisar el alcance de la leyes ecuatorianas respecto de la atribución de la nacionalidad ecuatoriana a los nacidos fuera de Ecuador.

IV. Conforme al conocimiento adquirido por este centro de la legislación ecuatoriana hay que concluir que, hasta la publicación de la nueva Constitución del país el 20 de octubre de 2008, sólo adquirirían automáticamente la nacionalidad ecuatoriana los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, si alguno de ellos se encontraba al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o «transitoriamente ausentes del país por cualquier causa»; en cualquier otro caso la nacionalidad ecuatoriana de los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento sólo se adquiriría por virtud de un acto posterior, como era, bien el hecho de domiciliarse en el Ecuador, bien una manifestación de voluntad de ser ecuatorianos formulada a partir de los dieciocho años de edad por los residentes en el extranjero.

El caso actual está comprendido en estas últimas hipótesis, toda vez que el menor nace el de 2008, por tanto, todavía bajo la vigencia de la Constitución ecuatoriana de 1998, por lo que no adquirió la nacionalidad ecuatoriana de sus padres porque estos no estaban al servicio de Ecuador o de un organismo internacional y porque su estancia fuera de Ecuador no puede calificarse de transitoria, a la vista de que su domicilio en España está acreditado por lo que se desprende del padrón municipal aportado al expediente.

V. Se trata, pues, de una situación de apatridia originaria del nacido en la cual la atribución *iure soli* de la nacionalidad española se impone. No ha de importarse que el interesado pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad ecuatoriana de sus progenitores, pues este hecho no puede llevar consigo por sí solo la pérdida de la nacionalidad española, atribuida *ex lege* y de modo definitivo en el momento del nacimiento.

VI. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá, desde que nace, derecho a adquirir una nacionalidad y que los estados parte velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso.
- 2.º Anular la cancelación de la nacionalidad española del interesado y declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (*cf.* art. 340 RRC).

Madrid, 24 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de Quito (Ecuador).

Resolución de 24 de marzo de 2017 (35.ª)

Cancelación de inscripción de nacimiento.—*Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por opción en la inscripción de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Por auto de 17 de marzo de 2011, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de origen, en virtud

de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 a Doña Ú-I. L. C., nacida el 21 de octubre de 1952 en C., L-V. (Cuba), hija de Don G-C. L. R., nacido el 17 de noviembre de 1916 en F. Q., C. (Cuba) y de Doña E. C. M., nacida el 27 de diciembre de 1921 en C. (Cuba). Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; documento de identidad cubano y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado local de nacimiento del progenitor; certificado español de bautismo del abuelo paterno de la interesada, Don A. L. H., nacido el 12 de octubre de 1857 en V. de M., L-P., S. C. de T.; certificado local de defunción del abuelo paterno; certificado local de matrimonio de los progenitores de la interesada y certificados de inmigración y extranjería del abuelo paterno, expedidos el 27 de enero de 2010, donde el formato, cuño y firma de la funcionario que los expide no son los utilizados habitualmente, de acuerdo con el informe emitido por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana.

II

Por providencia dictada el 4 de diciembre de 2013 por la encargada del registro civil consular, se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la interesada, ya que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de «título manifiestamente ilegal», dado que para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno de la promotora, se aportaron certificaciones de las secciones de extranjería y ciudadanía de la Dirección de Inmigración y Extranjería cubanas, con dudas de autenticidad en el formato y la firma del funcionario que rubricó dicho documento, y donde se consigna que el mismo se inscribió en el registro de extranjeros de La Habana, aun cuando su padre nació en C., L. V., de lo que se deduce que los documentos aportados son presuntamente falsos.

III

Por comparecencia de la interesada en fecha 05 de diciembre de 2013 ante la encargada del registro civil consular, se le comunica que se procederá a la cancelación total de su inscripción española de nacimiento, a fin de que formule las alegaciones que tenga por conveniente.

IV

Con fecha 9 de diciembre de 2013, el canciller en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 496, página 81, número 41 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

V

Con fecha 10 de diciembre de 2013, la encargada del registro civil consular dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la cancelación total de la inscripción de nacimiento

de la interesada, que obra en el tomo 496, página 81, número 41, que indebidamente se registró española, siendo incorrecto, dadas las irregularidades detectadas en los documentos presentados para acreditar la nacionalidad española del abuelo, que hacen presumir falsedad documental, no habiendo quedado establecido que el padre de la inscrita haya sido originariamente español.

VI

Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que los documentos de su abuelo, de los cuales se presume falsedad documental, le fueron entregados en la propia Dirección de Inmigración y Extranjería cubana, aportando de nuevo certificado español de nacimiento de la interesada y documentos de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, que ya se encontraban en el expediente.

VII

Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, dado que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo no están expedidos en el formato, cuña y firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide, se aprecia que los mismos presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental, por lo que se procedió a la cancelación total de la inscripción de nacimiento española de la interesada, al no haber quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

VIII

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil Consular de España en la Habana, requiera a la promotora a fin de que aporte nuevos certificado literal de nacimiento de la solicitante y de su progenitor, así como certificado literal de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, debidamente actualizado y legalizado, en relación con la inscripción en el registro de extranjeros cubano del abuelo paterno, y cualquier otra documentación que acredite que el mismo mantenía su nacionalidad española a la fecha del nacimiento de su hijo y padre de la interesada.

IX

Con fecha 14 de marzo de 2017 tiene entrada en el registro general del Ministerio de Justicia, oficio dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana, en el que nos informa que la promotora no compareció a la segunda cita programada el pasado 5 de octubre de 2016, a fin de practicar las diligencias correspondientes y que se procedió a la publicación del edicto en el tablón de anuncios del citado consulado, sin que la interesada hubiese atendido al requerimiento en el plazo establecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95.2.º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3.º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1.ª de septiembre de 2001; 5-2.ª de octubre de 2004; 9-6.ª y 22-1.ª de mayo y 21-4.ª de septiembre de 2007; 6-7.ª de mayo y 27-5.ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II. Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia dictada por la encargada del registro civil consular, se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la interesada, dado que para acreditar la nacionalidad española del abuelo paterno de la promotora, se aportaron certificaciones de las secciones de extranjería y ciudadanía de la Dirección de Inmigración y Extranjería cubanas, con dudas de autenticidad en el formato y la firma del funcionario que rubricó dicho documento, no quedando establecido que el padre de la inscrita haya sido originariamente español y, por tanto, no se cumplían los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acordó la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la interesada. Interpuesto recurso por la promotora, se le requirió aportase nuevos certificados de nacimiento de la solicitante y de su progenitor, así como nuevos certificados de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, y cualquier otra documentación que acreditase que el mismo mantenía su nacionalidad española en la fecha de nacimiento de su hijo y padre de la interesada, no habiendo sido atendido el requerimiento por la reclamante dentro del plazo establecido al efecto.

III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas «cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español», derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello – el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la «certificación literal de nacimiento del padre o

madre originariamente español del solicitante» debiendo «proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal». Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles –*cf.* arts. 1 núm. 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada, y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello, que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –*cf.* Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento– no se ha podido acreditar que el progenitor de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria, al no haber sido atendido por la interesada el requerimiento de documentación solicitado, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas por la encargada del registro civil consular en relación con los documentos de inmigración y extranjería del abuelo de la promotora, que no están expedidos en el formato, cuño y firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide, apreciando que dichos documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de abril de 2017 (2.^a)

Cancelación de inscripción de nacimiento.–*Procede instar expediente para declarar que a una menor nacida en España de madre dominicana no le correspondía la nacionalidad española con valor de simple presunción y la cancelación del correspondiente asiento margi-*

nal de nacionalidad española que consta en su inscripción de nacimiento en España ya que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1c) del Código Civil.

En el expediente sobre rectificación y cancelación de anotación de nacionalidad con valor de simple presunción en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto del encargado del Registro Civil de Cambados (Pontevedra).

HECHOS

I

Mediante comunicación de fecha 4 de mayo de 2015, la División de Documentación de la Dirección General de la Policía pone en conocimiento de la Fiscalía del Registro Civil de Cambados que a su juicio y a la vista de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de marzo de 2007, no procede el otorgamiento de documento nacional de identidad español a la menor de edad, A. R. M., nacida en España y en cuya inscripción de nacimiento consta una anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción, declarada por resolución del encargado del Registro Civil de Cambados con fecha 1 de abril de 2009. Adjunta copia de la certificación de nacimiento presentada por la interesada, en la que consta que nació el de 2005 en C., hija de L. R. M., nacida en S. D. (República Dominicana) en 1988 y sin filiación paterna.

II

Visto lo anterior el ministerio fiscal solicita, mediante escrito de fecha 10 de junio de 2015, al encargado del Registro que se incoe expediente registral para cancelar la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor ya citada, con audiencia a la misma, a través de sus representantes legales, todo ello porque la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de marzo de 2007, relativa a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción en el punto 2 de su anexo especifica que «no son españoles *iure soli* por corresponderles *iure sanguinis* la nacionalidad de uno de sus progenitores los nacidos en España hijos de dominicanos» y, por tanto A. R.M. ostenta desde su nacimiento la nacionalidad dominicana de su madre.

III

Con fecha 3 de septiembre de 2015 el encargado del registro civil dictó auto denegando la incoación solicitada por considerar que no está formulado por órgano con legitimación activa, acordando el archivo de lo actuado y sin otorgar plazo de recurso alguno.

IV

Notificado del auto el ministerio fiscal interpuso recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de lo previsto en los artículos 29 de la Ley del Registro Civil y 355 del Reglamento del Registro Civil y alegando su indudable legitimación en materia de expedientes de registro civil, a su juicio, en cuanto que son los encargados de velar por la realidad y veracidad de los asientos registrales. El encargado remite lo actuado a este centro directivo para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil; 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; 24, 26, 95, 96 y 97 de la ley del Registro Civil; 95, 163, 297 y 355 del Reglamento del Registro Civil.

II. A la menor interesada en el expediente, A. R. M., nacida en España, hija de una ciudadana dominicana e inscrita sólo con filiación materna, le fue declarada en su momento la nacionalidad española con valor de simple presunción basada en el supuesto establecido en el artículo 17.1c) del Código Civil, circunstancia que fue cuestionada posteriormente por las autoridades competentes para la expedición del documento nacional de identidad español para la menor y puesto en conocimiento del ministerio fiscal a los efectos oportunos. El ministerio fiscal mediante escrito instó del encargado del Registro Civil de Cambados la iniciación de expediente para cancelar la anotación marginal de nacionalidad española, solicitud que fue denegada por éste al considerar que el ministerio fiscal no estaba legitimado para instarlo. El recurso presentado ante esa denegación es el objeto de esta resolución.

III. En primer lugar y por lo que se refiere a la competencia, en materia de expedientes de declaración de nacionalidad con valor de simple presunción dicha competencia corresponde al encargado del registro del domicilio del solicitante (art. 335 RRC). Este régimen de competencia lo es tanto para instruir como para resolver el expediente, conforme a lo previsto por el artículo 342 del RRC en la redacción dada por el Real Decreto de 29 de agosto de 1986. Cuando no se respeta esta norma de competencia, al igual que ocurre, en general, con todo tipo de procedimiento, dicha infracción implica la nulidad de lo actuado, nulidad que puede ser declarada por la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando conozca de la misma a través de los recursos entablados. Esa nulidad se desprende de la aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de competencia territorial y de fuero personal de las personas físicas (*cf.* art. 50 LEC 1/2000, de 7 de enero), la cual es aplicable por la remisión que realiza el artículo 16 LRC, que contiene un llamamiento supletorio a las normas de jurisdicción voluntaria.

IV. Una vez establecido lo anterior, es procedente recordar también que por medio de expediente gubernativo sólo pueden suprimirse los asientos no

permitidos o aquéllos cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal (arts. 95.2 LRC y 297 RRC). Si el encargado comprueba que se ha extendido un asiento de estas características, está legitimado para promover el oportuno expediente de cancelación por exigencias del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad (arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC). Igualmente según el artículo 97.1 de la LRC estos expedientes pueden promoverlos o constituirse en parte cualquier persona que tenga interés legítimo en los mismos y además están obligados a ello los que también están obligados a promover la inscripción, entre estos últimos está el ministerio fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3.º de la LRC, por lo que éste órgano estaba cumpliendo con dicha obligación legal cuando instó del encargado la cancelación de la inscripción de nacionalidad, tras haber tenido conocimiento de la posible inexactitud de la misma por la comunicación de otras autoridades, en este caso policiales, que también están obligadas a prestar el auxilio necesario para la concordancia entre el registro y la realidad (artículo 95 del RRC)

V. Establecida la legitimación del recurrente para instar la cancelación, el problema procedimental que se plantea es el del camino adecuado para dejar sin efecto la declaración con valor de simple presunción, ya firme, y la anotación practicada. Recordemos que es un principio básico de la legislación registral civil (arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral. En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su fundamento en hechos descubiertos posteriormente. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de las autoridades de la Dirección General de la Policía con ocasión de la expedición del DNI o de cualquier interesado, y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie de nuevo expediente para declarar con valor de presunción que al nacido le corresponde o no le corresponde la nacionalidad española. La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación practicada y no es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la Ley del Registro Civil y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las «inscripciones» sólo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las «anotaciones», en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del Reglamento del Registro Civil establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en que se acredite la inexactitud.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que procede:

- 1.º Estimar el recurso presentado y dejar sin efecto el auto impugnado.
- 2.º Retrotraer las actuaciones para que por el registro civil competente, que quedará determinado en función del lugar donde el interesado tenga su residencia efectiva, se inicie expediente para declarar que a la menor interesada no le correspondía en el momento de su nacimiento la nacionalidad española con valor de simple presunción y se proceda posteriormente a la cancelación de la nota marginal correspondiente que consta en la inscripción de nacimiento de la menor.

Madrid, 21 de abril de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Cambados (Pontevedra).

Resolución de 2 de junio de 2017 (34.ª)

Cancelación de inscripción de nacimiento.–*Procede cancelar, a petición de los promotores, dos inscripciones de nacimiento y extender a continuación otras nuevas en las que únicamente consten los datos correspondientes tras la inscripción de la filiación materna adoptiva.*

En el expediente sobre cancelación de dos inscripciones de nacimiento y extensión de otras nuevas remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra las inscripciones practicadas por el encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

HECHOS

I

Mediante comparecencia el 8 de mayo de 2015 en el Registro Civil de Marbella, Doña M-D. G. M. y Don J-A. A. B., con domicilio en la misma localidad, solicitaban el traslado a dicho registro de las inscripciones de nacimiento de sus dos hijos menores de edad practicadas en el registro consular de Mumbai con extensión de otras nuevas en las que constaran solamente, además de los datos de nacimiento, las circunstancias de los progenitores después de la adopción y como lugar de nacimiento M., cancelando las inscripciones anteriores.

II

La solicitud se trasladó al Registro Civil Central, desde donde se remitieron las certificaciones literales de nacimiento, practicadas el 19 de noviembre de 2013, de C-M. y L-J. A. T. (cuerpo principal de los asientos), nacidos en M. el 24 de octubre de 2013, hijos de J-A. A. B., de nacionalidad española, y de R. A. T., de nacionalidad india, con marginal de 2 de enero de 2015 de adopción de los inscritos, mediante auto de 8 de abril de 2014 dictado por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 6 de Marbella, por M-D. G. M., de nacionalidad española y cónyuge del padre desde el 9 de abril de 1994, pasando a ser los apellidos de los inscritos A. G.. Consta asimismo en el apartado de observaciones que la inscripción fue promovida por el padre y que no rige la presunción de paternidad del marido de la madre, según consta en el expediente.

III

El encargado del Registro Civil de Marbella transcribió el 7 de septiembre de 2015 el contenido literal de los asientos remitidos haciendo constar que se trataba de un traslado de las inscripciones practicadas en el Registro Civil del Consulado General de España en Mumbai. Notificada la transcripción al Registro Civil Central, se cancelaron los asientos anteriores.

IV

Los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que no se había cumplido su petición expresa de extender las inscripciones en un nuevo folio en el que constaran únicamente los datos de nacimiento de sus hijos, las circunstancias personales de los padres después de la adopción y como lugar de nacimiento M., dejando en la nueva inscripción solo una referencia a la antigua, tal como permiten la Instrucción de la DGRN de 15 de febrero de 1999 y los artículos 77 y 307 del Reglamento del Registro Civil, por lo que solicitaban la práctica de nuevas inscripciones en los términos señalados, cancelando las actuales.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió a la petición. La encargada del Registro Civil de Marbella remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 77, 163, 164, 306, 307 y 342 del Reglamento del Registro Civil, la resolución de consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 20 de octubre de 2005, la resolución-circular de 31 de octubre de 2005 y las resoluciones 8-5.ª de abril de 2008, 13-1.ª de abril de 2011, 26-10.ª de noviembre de 2012, 10-135.ª de enero de 2014 y 26-50.ª de junio de 2015.

II. Los promotores solicitaron el traslado de las inscripciones de sus dos hijos menores de edad desde el registro consular en el que se practicaron al registro de su domicilio, requiriendo al mismo tiempo, además de la cancelación de las anteriores, en las que constan sendas marginales de adopción, la extensión de otras nuevas donde filiación y apellidos actuales figuraran en el cuerpo principal y constara como lugar de nacimiento de los inscritos el del domicilio de los progenitores. Alegaban para ello razones de preservación de la intimidad. La encargada del registro realizó el traslado de las inscripciones pero transcribiendo literalmente el contenido de los asientos originales.

III. La regla general en materia de inscripción de resoluciones firmes de rectificación o corrección y de las que completen un asiento principal es la contenida en el artículo 306 RRC, en virtud del cual la inscripción ha de practicarse en el folio registral al que se refiere la resolución determinando las expresiones que se cancelan y las que las sustituyen o las circunstancias que se agregan y fue así como se practicaron las inscripciones de adopción cuya cancelación se solicita. Sin embargo, el artículo 307 RRC permite excepcionalmente, para mayor claridad del asiento y mayor seguridad de los datos reservados, que se cancele totalmente el antiguo asiento y se extienda otro nuevo, a petición del interesado mayor de edad o de los representantes legales del menor, en caso de rectificación o modificación de sexo o de filiación, añadiendo, además, que en caso de adopción ni siquiera es necesario expediente para proceder al traslado. Es evidente que la pretensión de los promotores entra de lleno en este último supuesto, dado que se ha producido una modificación de filiación por adopción.

IV. Por lo que se refiere a la modificación del lugar de nacimiento de los adoptados, tal posibilidad, como indica la resolución de la consulta citada en el fundamento primero, es factible en los casos de adoptados menores de edad a petición del adoptante o adoptantes de común acuerdo, respondiendo a la idea de que excepcionar la fe pública registral respecto del lugar del nacimiento (*cfr.* art. 41 LRC) puede estar justificado en atención a la superior protección de los intereses del menor de edad.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso.
- 2.º Cancelar, según lo establecido por los artículos 77 y 307 RRC, las inscripciones principales de nacimiento de los menores junto con las marginales de adopción, practicándose otras nuevas, con una referencia a las antiguas, en la que figuren los datos actuales relativos a la filiación y apellidos de los inscritos y como lugar de nacimiento el del domicilio de los progenitores.

Madrid, 2 de junio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Marbella (Málaga).

Resolución de 14 de julio de 2017 (3.ª)

Cancelación de inscripción de nacimiento.—1.º *Es correcta la inscripción de nacimiento realizada en el registro civil correspondiente al domicilio de los progenitores, distinto del lugar real de nacimiento, siempre que la solicitud se formule de común acuerdo por los representantes legales del nacido. En dicha inscripción se considerará a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento del inscrito es el municipio en el que se haya practicado el asiento (art. 16.2 LRC).*

2.º *Mediante expediente gubernativo solo pueden cancelarse los asientos no permitidos o cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal.*

En el expediente sobre cancelación y práctica de una nueva inscripción de nacimiento en el registro correspondiente al lugar real en el que tuvo lugar el hecho inscrito remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado contra resolución de la encargada del Registro Civil de Lleida.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2015 en el Registro Civil de Lleida por Doña M. P. B. Á., suscrito también por su cónyuge, se solicitaba la cancelación del asiento de inscripción de nacimiento del hijo de ambos, nacido el de 2006 en un centro sanitario de Z. e inscrito en el Registro Civil de Lleida, correspondiente al domicilio de los progenitores, para practicar una nueva inscripción en el Registro Civil de Zaragoza. Alegaba la promotora que ella es natural de Z. y que se desplazó expresamente a su ciudad natal para el parto porque quería que su hijo naciera allí, que la inscripción fue tramitada exclusivamente por su marido en la creencia de que, independientemente de dónde se practicara el asiento, constaría Z. como lugar de nacimiento y que si ella hubiera sabido los efectos legales que sobre la determinación legal del lugar de nacimiento tiene la práctica de la inscripción en el registro del domicilio, nunca habría consentido que la inscripción se realizara en L.. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI de ambos progenitores e inscripción de nacimiento del menor en el Registro Civil de Lleida practicada el de 2006.

II

Previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 3 de diciembre de 2015 denegando la pretensión por considerar que no existe error alguno en la inscripción de nacimiento, que se practicó conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley del Registro Civil.

III

Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo en los mismos motivos expuestos en la solicitud inicial. Alegaba que, a su juicio, sí se cometieron errores al practicar la inscripción de su hijo, dado que el nacimiento se produjo en Z. y la decisión practicar el asiento en L. no fue consensuada por ambos progenitores, de manera que el asiento debió practicarse en el lugar real de nacimiento, por lo que considera que existe un defecto formal susceptible de ser corregido mediante expediente gubernativo de acuerdo con el artículo 95.3.º de la Ley del Registro Civil. Finalmente, añadía que, aun en el caso de que se llegara a probar que la recurrente firmó algún documento consintiendo en que L. fuera considerada a todos los efectos legales como el lugar de nacimiento de su hijo, tal circunstancia debería resultar excusable teniendo en cuenta que fue su marido, abogado de profesión, quien tramitó la inscripción y que ella, pendiente en aquellos momentos, básicamente, de atender a su hijo recién nacido, confiaba plenamente en la gestión y el conocimiento legal de su cónyuge.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Lleida remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 16, 41, 92, 93 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 68, 163, 164 y 297 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 18-2.ª de mayo de 2002; 21-3.ª y 4.ª de abril de 2003; 20-1.ª de octubre de 2005; 19-3.ª de mayo de 2008 y 5-1.ª de febrero de 2010; 15-16.ª de noviembre y 5-44.ª de agosto de 2013; 23-10.ª de marzo, 30-31.ª de abril y 27-29.ª de noviembre de 2015 y 24-18.ª de marzo de 2017.

II. Se pretende la cancelación de la inscripción de nacimiento del hijo de los promotores, practicada en el registro civil correspondiente al domicilio familiar, para proceder a la extensión de una nueva en el registro del lugar real de nacimiento. Alega la recurrente que ella siempre quiso que su hijo naciera en Z. y que no tuvo conocimiento, hasta fechas recientes, de las consecuencias de practicar la inscripción en L.

III. La posibilidad de inscribir un nacimiento acaecido en España, por declaración dentro de plazo, en el registro civil del domicilio de los padres –y no, como es la regla general, en el registro correspondiente al lugar del nacimiento– requiere la concurrencia de las condiciones previstas por el artículo 16, apartado 2, LRC en su redacción dada por la Ley 4/1991, de 10 de enero (*cfr.* también art. 68 RRC, redactado por el Real Decreto 1063/1991, de 5 de

julio). Esta posibilidad está subordinada, fundamentalmente, a la solicitud conjunta de los representantes legales del nacido.

IV. Entre la documentación incorporada al expediente figura una copia del asiento original practicado en el Registro Civil de Lleida el 16 de junio de 2006 y firmado por ambos progenitores donde consta expresamente en el apartado de observaciones (justo antes de las firmas) que se considerará a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento del inscrito es el municipio en el que se practica el asiento de acuerdo con el artículo 16.2 LRC. De manera que no cabe alegar ni desconocimiento del contenido y efectos de lo dispuesto en el artículo mencionado ni falta de mutuo acuerdo. El asiento se practicó, según la documentación remitida, de acuerdo con las previsiones legales, sin que se observe la existencia de error alguno. Por otra parte, una vez practicada la inscripción, por expediente gubernativo solo pueden suprimirse *«los asientos no permitidos o cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal»* (art. 95.2.º LRC). En el caso que nos ocupa el nacimiento es, obviamente, asiento permitido (*cf.* arts. 297.1.º y 2.º RRC) y de la inscripción practicada, como se ha dicho, no se desprende la nulidad del título, por lo que no procede su cancelación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la denegación recurrida.

Madrid, 14 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lleida.

Resolución de 21 de julio de 2017 (14.ª)

Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción del nacido en España en 2005, hijo de padres uruguayos nacidos en Uruguay, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el padre del menor, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

I

Que M. A. A. T. nació el de 2005 en S. C. (La Coruña), hijo de padres de nacionalidad uruguaya nacidos en Uruguay, hallándose inscrito el nacimiento en el Registro Civil de Santa Comba. En dicha inscripción consta anotación marginal, practicada el 22 de junio de 2007, por la que se atribuye al inscrito la nacionalidad española con valor de simple presunción en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil, por auto de fecha 5 de abril de 2006 dictado por el encargado del Registro Civil de Negreira (La Coruña), al considerar que al interesado no le correspondía la nacionalidad uruguaya de sus progenitores.

Consta como antecedente, resolución de 17-60.^a de marzo de 2014 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación con la expedición de pasaporte del menor, por la que se inadmitió el recurso por falta de competencia, remitiéndose las actuaciones al Ministerio del Interior, por ser el competente para resolver el recurso contra la denegación de la expedición de pasaporte ordinario.

II

Con fecha 22 de abril de 2014, y tras haberse recibido la solicitud de alta en el registro de matrícula de españoles del Consulado General de España en Montevideo (Uruguay), el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe solicitando se instruya expediente que declare destruida la presunción de la nacionalidad española del interesado, al no encontrarse dentro de los supuestos legales para el otorgamiento de la misma y al no existir riesgo de apatridia (art. 17.1.c) del Código Civil), fundamento de la nacionalidad española con valor de simple presunción.

III

A la vista del informe emitido por el órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay) dicta providencia en fecha 23 de abril de 2014 por la que insta a que se notifique a los padres del interesado, por ser éste menor de edad y se investigue de oficio la certeza de los hechos alegados y de los que hayan de servir de base a la resolución pretendida. Por oficio de fecha 24 de abril de 2014 se notifica a los padres del menor la incoación de expediente de oficio para declarar con valor de simple presunción si le corresponde o no la nacionalidad española, habiendo sido devuelta la notificación por el servicio de correos uruguayo con la indicación de «plazo vencido».

IV

Por providencia de fecha 5 de mayo de 2014, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay) estima que procede que se instruya expediente de cancelación de la anotación de presunción de la nacionalidad española.

V

Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal de fecha 9 de mayo de 2014, en el que se indica que procede declarar destruida la presunción de nacionalidad española del menor, por no cumplir los requisitos legales exigibles, con fecha 12 de mayo de 2014, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay) dicta auto por el que declara que al interesado no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil, toda vez que la legislación uruguaya del año 1989, aplicable a este caso, establece: artículo 1 «Tienen la calidad de nacionales de la República Oriental del Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República» y artículo 2 «Tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior» y la resolución registral de fecha 5 de abril de 2006 dictada por el encargado del Registro Civil de Negreira es posterior a la legislación uruguaya que otorgaba al inscrito la nacionalidad uruguaya desde su nacimiento.

VI

Notificada la resolución, el padre del menor presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revoque la resolución impugnada, declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción a su hijo.

VII

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, interesa la desestimación del recurso por informe de fecha 12 de septiembre de 2016 y el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay) se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la circular de 16 de diciembre de 2008; y las resoluciones de 5-3.^a de abril y 3-3.^a de mayo de 2001; y 10-4.^a de septiembre de 2002.

II. Se pretende por el promotor que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del menor nacido el de 2005 en S. C. (La Coruña), hijo de padres uruguayos y nacidos en Uruguay. En la inscripción de nacimiento del menor consta anotación marginal de fecha 22 de junio de 2007, por la que

se atribuye al inscrito la nacionalidad española con valor de simple presunción, en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Posteriormente, en base al informe emitido por el órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay) incoa nuevo expediente para declarar, con valor de simple presunción, que al interesado no le corresponde la nacionalidad española conforme al artículo 17.1.c) del Código Civil, toda vez que la legislación uruguaya aplicable otorgaba al inscrito la nacionalidad uruguaya desde su nacimiento, por lo que no procede la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil previsto para evitar situaciones de apatridia, que finalizó con el auto de 12 de mayo de 2014, objeto del recurso.

III. Conforme al conocimiento adquirido por este centro directivo de la legislación uruguaya sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay, los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (*vid.* arts. 1 y 2 de la Ley 16.021, de 13 de abril de 1989).

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la citada ley, sólo son españoles *iure soli* los hijos de uruguayos nacidos en España cuando ni el padre ni la madre hubieren nacido en el territorio de la República Oriental de Uruguay, ya que concurriendo esta última condición tales hijos son uruguayos y no apátridas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).

Resolución de 1 de septiembre de 2017 (104.^a)

Cancelación de inscripción de nacimiento.—*Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción de la nacida en España en 2006, hijo de madre guatemalteca y nacida en Guatemala, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código civil.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción marginal de nacionalidad española en principal de nacimiento, remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la madre de la menor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona).

HECHOS

I

Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2006, dictado por la encargada del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona), se declaró con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de la menor F. A. S. Q., nacida el de 2006 en C. (Tarragona), hija de la ciudadana guatemalteca nacida en Guatemala, R. S. Q., en base al artículo 17.1.c) del Código Civil, por entender que se trata de un nacimiento acaecido en España, en donde tiene fijada su residencia la madre de la menor y que la nacionalidad guatemalteca de los nacidos en el extranjero de padre o madre guatemalteco por nacimiento, solo se adquiere en virtud de un acto posterior. Con fecha 4 enero de 2007 se anotó marginalmente la nacionalidad declarada.

II

Con fecha 14 de febrero de 2013, la División de Documentación de la Dirección General de la Policía remite a la Fiscalía del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona) escrito en el que recoge lo establecido en el artículo 144 de la Constitución de Guatemala, sobre la consideración de guatemaltecos de origen de los menores nacidos en el extranjero e hijos de padres guatemaltecos, lo que supondría que la hija de la Sra. S. no era apátrida y por tanto no le era de aplicación el artículo 17.1.c del Código Civil, por lo que se solicita que se inicie expediente de cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad.

III

Con fecha 25 de marzo de 2013, la Sección Territorial del Vendrell, de la Fiscalía Provincial de Tarragona, interesa del Registro Civil que se dicte resolución a través de la cual se proceda a cancelar la nota marginal practicada al margen de la inscripción de nacimiento de la menor.

IV

Por auto dictado por la encargada del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona) en fecha 2 de abril de 2013, se dispone la cancelación total de la inscripción marginal de 4 de enero de 2007, practicada en la del nacimiento de la menor, en la Sección 1.^a, tomo 14, pág. 335 del Registro Civil de Creixell, dejando nota sucinta de ello, toda vez que de acuerdo con el artículo 144 de la Constitución de Guatemala, son guatemaltecos de origen, «los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero».

V

Notificada la resolución a la promotora, madre de la menor, ésta presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hija, aportando como prueba documental copia del Convenio de doble nacionalidad suscrito por España con Guatemala, pasaporte y permiso de residencia de la promotora, documento nacional de identidad de la menor, libro de familia, certificado de inscripción de nacimiento de la menor y certificado de empadronamiento de ésta.

VI

Notificado el ministerio fiscal, interesa la desestimación del recurso y la encargada del Registro Civil se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

VII

Con fecha 19 de mayo de 2015 este centro directivo acordó dejar sin efecto el auto recurrido por apreciar defecto procedimental, instando del registro civil competente retrotraer las actuaciones al momento en que se notifique a la interesada la incoación del expediente de cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad y se le otorgue un plazo para formular alegaciones.

VIII

Con fecha 16 de julio de 2015 se produjo la notificación, mediante comparecencia de la Sra. S. en el Registro Civil de El Vendrell, informándole de que la resolución notificada no era recurrible en vía administrativa, pudiendo formular demanda en la vía judicial civil y se le otorgó un plazo de 30 días para formular las alegaciones que estimara oportunas en relación con el inicio del expediente para cancelar la inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de su hija. Transcurrido el plazo no se había formulado escrito de alegaciones.

IX

Tras nuevo informe del ministerio fiscal, en el sentido de que a la menor interesada no le correspondía la aplicación del artículo 17.1.c del Código Civil por no estar en una situación de apatridia en el momento de su nacimiento, la encargada del Registro Civil de El Vendrell dictó nuevo auto, con fecha 17 de noviembre de 2015, acordando la cancelación total de la inscripción marginal de 4 de enero de 2007, dado que la menor era guatemalteca de nacimiento, según la Constitución de dicho país, y no le correspondía la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

X

Notificada la resolución, la promotora, Sra. S. Q., presenta recurso ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando los argumentos ya expuestos en su escrito anterior, añadiendo que de forma subsidiaria a su hija le correspondería la nacionalidad española por posesión de estado y por residencia según el artículo 22 del Código Civil.

XI

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que se ratifica en su informe anterior y la encargada del Registro propone la confirmación de la resolución recurrida y remite el expediente para la resolución del precitado recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de 16 de diciembre de 2008; y las resoluciones de 5-3.^a de abril y 3-3.^a de mayo de 2001; y 10-4.^a de septiembre de 2002.

II. Se pretende por la promotora que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor nacida el de 2006 en C. (Tarragona), hija de madre guatemalteca y nacida en Guatemala y sin filiación paterna. En la inscripción de nacimiento de la menor consta anotación marginal de fecha 4 de enero de 2007, por la que se atribuye a la inscrita la nacionalidad española con valor de simple presunción, en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil. Posteriormente, en base al informe emitido por el órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil del Vendrell incoa nuevo expediente para declarar, con valor de simple presunción, que a la interesada no le correspondía la nacionalidad española conforme al artículo 17.1.c) del Código Civil, toda vez que la legislación guatemalteca aplicable otorgaba a la inscrita la nacionalidad guatemalteca desde su nacimiento, por lo que no procede la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil previsto para evitar situaciones de apatridia, que finalizó con el auto de 17 de noviembre de 2015, objeto del recurso.

III. Conforme al conocimiento adquirido por este centro directivo de la legislación guatemalteca sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de origen de Guatemala los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero (*vid.* art. 144 de la Constitución de Guatemala). Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la citada norma no son españoles *iure soli* los hijos de guatemaltecos nacidos en España, ya que no son apátridas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell (Tarragona).

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (27.^a)

Cancelación de inscripción de nacimiento.—*No procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción en la inscripción del nacido en España en 2005, hijo de progenitores de nacionalidad colombiana y nacidos en Colombia, una vez acreditado que se cumplen los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, madre del menor, contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia).

HECHOS

I

Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2006, dictado por el encargado del Registro Civil de Ronda (Málaga), se declaró con valor de simple presunción en aplicación de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, la nacionalidad española del menor C.-A. B. S., nacido el de 2005 en R. (M.), hijo de D.^a K.-J. B. S., nacida el 3 de agosto de 1985 en C., V. (Colombia) y de nacionalidad colombiana.

Consta inscripción marginal en el acta de nacimiento del menor, en la que se indica que, en virtud de acta practicada en fecha 27 de septiembre de 2006 ante el encargado del Registro Civil de Ronda, y de comparencia practicada ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá, se procede a reconocer al inscrito por parte de Don C.-A. O., O., nacido en C., V. (Colombia) el día 11 de octubre de 1976, de nacionalidad colombiana, por lo que en adelante el inscrito ostentará los apellidos O. B.

II

Por informe del órgano en funciones de ministerio fiscal del Registro Civil Consular de España en Bogotá de fecha 15 de septiembre de 2016, estima que considera procedente dar curso al expediente de cancelación de la inscripción marginal de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor al encargado del registro civil consular, a fin de que resuelva sobre el mismo.

III

Con fecha 15 de septiembre de 2016, el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá determina que procede se instruya expediente de cancelación de la anotación preventiva de presunción de la nacionalidad española del interesado, indicando que, si bien el encargado del Registro Civil de Ronda, procedió a inscribir, en forma de nota marginal a la principal del nacimiento del menor citado, su nacionalidad española con valor

de simple presunción o, lo que es lo mismo, presumiendo que el inscrito es de nacionalidad española mientras no se demuestre lo contrario, con fecha 2 de agosto de 2006, sus progenitores promovieron la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil colombiano (serial número) de la Notaria Primera de Bogotá (Colombia). En consecuencia, ya no puede aplicarse al menor el artículo 17.1.c) inciso segundo del Código Civil, puesto que ha sido precisamente la legislación colombiana en vigor la que, tras el trámite de inscripción citado, le ha atribuido la nacionalidad colombiana al interesado, por lo que la presunción de nacionalidad española del menor citado ha quedado destruida.

IV

Por oficio de fecha 16 de septiembre de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá, se notifica a los progenitores del menor, la incoación de expediente de cancelación de la inscripción marginal de la nacionalidad española con valor de simple presunción practicada en su día en el Registro Civil de Ronda al menor, a fin de que en el plazo de diez días naturales, si lo estiman pertinente, realicen las alegaciones correspondientes, sin que conste que los promotores formularan alegaciones dentro del plazo establecido.

V

Por Auto de fecha 2 de noviembre de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia), se acuerda que procede cancelar la nota marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado, considerando que no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, ya que ha quedado demostrado en el expediente que la nacionalidad colombiana de sus progenitores le ha sido atribuida al menor tras el trámite de la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil colombiano correspondiente y, en consecuencia, ordenando la remisión al Registro Civil de Ronda, Málaga, a efectos de que se practique la oportuna anotación marginal de cancelación, de acuerdo con el artículo 306 del Reglamento del Registro Civil.

Por resolución registral de 24 de noviembre de 2016, dictada por el encargado del Registro Civil de Ronda, se acordó la cancelación total de la inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del menor, por causa de título manifiestamente ilegal.

VI

Notificada la resolución, la promotora, madre del menor, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su hijo y que se deje sin efecto la cancelación de la inscripción de nacionalidad española, alegando que el menor adquirió la nacionalidad española con valor de simple presunción en virtud de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, que da al adquirente la condición de español de origen, por lo que las únicas causas de pérdida de la nacionalidad española se encuentran tasadas en el artículo 24 del Código Civil, no encontrándose su hijo en ninguno de los supuestos contemplados en dicho artículo y no resultando de aplicación las causas de pérdida de la nacionalidad española establecidas en el artículo 25 del Código Civil para españoles que no lo sean de origen.

VII

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de diciembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, 4-4.^a y 13-4.^a de febrero, 13-1.^a de mayo, 28-1.^a y 3.^a de junio y 5-2.^a de diciembre de 2003; 14-4.^a de enero y 5-3.^a de noviembre de 2004; 30-1.^a de mayo, 30-3.^a de junio y 12-2.^a de julio de 2005; 12-4.^a y 20-2.^a de septiembre, 15-4.^a de noviembre y 27-5.^a de diciembre de 2006; 3-8.^a de abril, 21-5.^a y 27-10.^a de junio de 2007; 22-3.^a de mayo, 3-2.^a de septiembre y 19-3.^a de diciembre de 2008; 18-7.^a de mayo de 2009.

II. El encargado del Registro Civil de Ronda declaró, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen del menor, nacido en R. el de 2005. Posteriormente, sus progenitores promovieron la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil colombiano, por lo que el encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá acuerda iniciar expediente de cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor, al considerar que la presunción de nacionalidad española del mismo ha quedado destruida. Dicho expediente finaliza por auto dictado por el encargado del registro civil consular por el que se acuerda la cancelación de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor. Contra dicho auto se interpone recurso por la promotora, madre del menor, que es el objeto del presente expediente.

III. Reiteradamente tiene establecido esta Dirección General, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (*cf.* art. 96.1.b de la Constitución Política de Colombia de 1991, modificado por el acto legislativo 01 de 2002). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importarse por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus

progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

V. En el presente expediente, la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor, por auto de 10 de marzo de 2006 del encargado del Registro Civil de Ronda, fue dictada con arreglo a derecho, toda vez que el interesado había nacido en España, hijo de madre colombiana y no se encontraba inscrito en el Registro Civil colombiano, por lo que se encontraba incluido en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.c) del Código Civil, en el que se indica que son españoles de origen «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». Por tanto, para evitar una situación de apatridia, se atribuyó al menor *ex lege* la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Posteriormente, con fecha 2 de agosto de 2006, el menor es reconocido por su padre e inscrito en el Registro Civil colombiano, por lo que adquirió desde ese momento la nacionalidad colombiana *iure sanguinis*, adquisición que no puede llevar consigo la pérdida de la nacionalidad española atribuida por la ley en el momento de su nacimiento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso.
- 2.º Anular la cancelación de la nacionalidad española del interesado y declarar con valor de simple presunción que el nacido es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (*cf.* art. 340 RRC).

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (38.^a)

No procede la cancelación por expediente de anotación marginal practicada en 1997, de adopción acordada por sentencia extranjera, porque se trata de asiento permitido y de él no resulta que se haya basado de modo evidente en título manifiestamente ilegal (arts. 95.2 LRC y 297.3 RRC).

En el expediente sobre cancelación de marginal de adopción en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Algeciras (Cádiz).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de Montpellier (Francia) en fecha 21 de agosto de 2015 doña Y. J. E. G., mayor de edad y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en M., promueve expediente gubernativo de cancelación de la inscripción marginal de adopción que consta en su inscripción de nacimiento exponiendo que a la edad de tres años se fue a vivir a Francia con su madre y, fallecida esta el 14 de julio de 1992, sus tíos, de nacionalidad marroquí, solicitaron y el Tribunal de Primera Instancia de Montpellier acordó su adopción simple, aunque ella en ningún momento ha utilizado los apellidos B. G. por petición expresa de su padre a los adoptantes, porque la ley marroquí no reconoce la adopción sino la kafala, uno de cuyos requisitos es que se desconozca la identidad y el paradero de los padres biológicos, y porque la sentencia extranjera no fue aprobada por ningún juez o autoridad españoles. Acompaña certificación literal de inscripción de nacimiento de Y. J. E. G., nacida en A. el 6 de marzo de 1989 hija de S. J. F., de nacionalidad española, y de A. E. G., de nacionalidad española (sic), con una inscripción marginal, de fecha 25 de abril de 1994, de constancia de que, en virtud de auto de 4 de abril de 1994 dictado por el encargado del Registro Civil de Algeciras, se rectifican en el folio registral el nombre, que es K., y otras menciones de identidad de la madre de la inscrita; y una segunda inscripción, practicada el 27 de febrero de 1997 (sic), que expresa que la comprendida en esta nota ha sido adoptada por los cónyuges M. B. y R. G., nacidos en Marruecos, en virtud de resolución dictada el 27 de noviembre de 1997 por el Tribunal de Primer Instancia de Montpellier, Sala de la Familia, que determina que la adoptada se llamará en lo sucesivo Y. B. G.; se practica la inscripción en virtud de testimonio de la referida resolución traducida por el Sr. Cónsul General de España en Montpellier. Aporta asimismo copia testimoniada de pasaporte español, la sentencia en la que trae causa la marginal practicada, con apostilla de 8 de junio de 2015 y traducción jurada hecha el 20 de junio de 2015, tres documentos administrativos franceses datados en 2015, contrato de arrendamiento de vivienda en vigor desde el 1 de agosto de 2013 y certificación literal de inscripción de nacimiento de R. J. E. G., nacido en S. (Francia) en 2014 hijo de Y. J. E. G., hija de S. y A. (sic) y de nacionalidad española, practicada en el Registro Civil Consular de Montpellier el 24 de junio de 2014.

II

Acordada la instrucción de expediente gubernativo y ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, el ministerio fiscal (art. 54 RRC), apreciando que de los documentos acompañados, de las pruebas aportadas y de la legislación vigente se desprende que la inscripción marginal de adopción y cambio de apellidos efectuada en el Registro Civil de Algeciras no se ajusta a lo legalmente establecido, informó que considera que debe procederse a su cancelación y la encargada del registro civil consular, razonando que la interesada fundamenta su solicitud en el art. 93 LRC y que, según el art. 151 RRC,

es posible la cancelación de anotaciones en caso de acreditarse su insuficiencia, dictó auto proponiendo la cancelación de la inscripción marginal de adopción y acordando la remisión del expediente instruido al registro civil competente.

III

Recibido lo anterior en el Registro Civil de Algeciras, el ministerio fiscal informó que se opone a la pretensión por entender que los artículos 28 y 30 a los que aluden las autoridades consulares son de la Ley 54/2007, de adopción internacional, que la adopción constituida por la autoridad extranjera reunió todas las condiciones establecidas en la legislación vigente en la fecha de los hechos, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993 y del que son partes contratantes tanto España como Francia y que en una adopción constituida en Francia respecto a un español es irrelevante que la ley marroquí no reconozca la institución; y el 9 de diciembre de 2015 el juez encargado, infiriendo del examen de la documentación obrante en autos que la adopción fue plenamente válida conforme a la legislación en ese momento vigente y su inscripción en el registro civil español ajustada a derecho, dictó auto disponiendo denegar la rectificación solicitada.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en la inscripción marginal practicada en la de nacimiento no consta que se instruyera expediente alguno para hacer efectiva la adopción ni que esta estuviera certificada conforme al artículo 23, párrafo 1) del Convenio de La Haya, que del asiento se deduce que fue adoptada de forma plena y que en lo sucesivo sus apellidos serán B. G., apellidos que no son los suyos y que nunca ha utilizado a efectos administrativos, como prueban los documentos aportados al expediente, y que su no cancelación cuestiona su propia identidad ya que le otorga unos apellidos que no son los suyos y, consecuentemente, resulta ambigua respecto a su nacionalidad española y la de sus hijos.

V

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, remitiéndose a su informe anterior, impugnó el recurso y el juez encargado del Registro Civil de Algeciras informó que en el escrito de apelación la interesada se limita a ratificar su petición, sin aportar prueba alguna de lo alegado, y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 29, 38, 39, 41, 46, 92 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 145, 159, 162, 297, 342, 343 y 346 del Reglamento

del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 17-2.^a de septiembre y 13-2.^a de octubre de 1998, 11 de julio de 2001, 2-4.^a de febrero de 2002, 19-3.^a de mayo de 2008, 28-6.^a de febrero y 29-16.^a de octubre de 2012 y 8-26.^a de octubre de 2013.

II. La interesada, nacida en A. el 6 de marzo de 1989, promueve en el Registro Civil Consular de Montpellier expediente gubernativo de cancelación de la marginal de adopción que consta en su inscripción de nacimiento, exponiendo que, siendo muy pequeña, se fue con su madre a vivir a Francia y, fallecida esta el 17 de julio de 1992, sus tíos, de nacionalidad marroquí, solicitaron y el Tribunal de Primera Instancia de Montpellier acordó su adopción simple que fue asentada al margen de su inscripción de nacimiento, pese a que la ley de los adoptantes no reconoce la adopción y a que la sentencia extranjera no fue aprobada por juez o autoridad españoles, y el juez encargado del Registro Civil de Algeciras, razonando que la adopción fue plenamente válida según la legislación vigente en la fecha de los hechos, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993 y del que son partes contratantes tanto España como Francia, que en una adopción constituida en Francia respecto a un español es irrelevante que la ley marroquí no reconozca la institución y que, por tanto, su inscripción en el registro civil español es ajustada a derecho, dispuso denegar la rectificación solicitada mediante auto de 9 de diciembre de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La marginal debatida versa sobre una adopción simple constituida en Francia conforme a su legislación nacional, a la que están vinculados adoptantes y adoptada por razón de residencia habitual, que no comporta desplazamiento de la menor entre dos países y que, al no tener ningún elemento transnacional, no queda comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 ni ha de ser reconocida en España lo que no es óbice para que, por afectar al estado civil de un español según una ley extranjera, haya sido anotada con valor simplemente informativo (arts. 38.2.º LRC y 145 RRC) en la inscripción de nacimiento de la interesada.

IV. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC) y la supresión de asientos por expediente gubernativo únicamente cabe cuando sean no permitidos o cuando su práctica se haya basado «de modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal» (art. 95.2.º LRC), lo que no consta que haya sucedido en este caso: la marginal de adopción conforme a una ley extranjera es, obviamente, asiento permitido sobre hecho que constituye objeto del registro (art. 297.1.º y 2.º RRC) y la nulidad del título no se deduce de la propia inscripción, que consta extendida en virtud de testimonio de sentencia judicial extranjera, debidamente traducida, cuya conformidad o equivalencia de efectos con la institución que regula la legislación española es irrelevante puesto que no se trata de una inscripción sino de una anotación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Algeciras (Cádiz).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (43.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 17 de febrero de 2017 (46.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 10 de marzo de 2017 (38.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (18.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (36.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 24 de marzo de 2017 (37.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 21 de abril de 2017 (5.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 28 de abril de 2017 (5.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 16 de junio de 2017 (17.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 16 de junio de 2017 (32.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 23 de junio de 2017 (40.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 14 de julio de 2017 (6.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 14 de julio de 2017 (7.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 21 de julio de 2017 (18.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 28 de julio de 2017 (17.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (2.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (36.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (36.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (18.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (26.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (34.^a). Cancelación de inscripción de nacimiento.

7.2.2 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO

(No hay resoluciones para este apartado)

7.2.3 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN

(No hay resoluciones para este apartado)

7.3 Traslado

7.3.1 TRASLADO DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

(No hay resoluciones para este apartado)

7.3.2 TRASLADO DE INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO

(No hay resoluciones para este apartado)

7.3.3 TRASLADO DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN

(No hay resoluciones para este apartado)

8. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

8.1 Cómputo de plazos

8.1.1 RECURSO INTERPUESTO FUERA DE PLAZO

Resolución de 17 de febrero de 2017 (65.^a)

Recurso interpuesto fuera de plazo.—*No cabe recurso contra la resolución del encargado del registro pasado el plazo de interposición a contar desde la notificación correcta del auto.*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo.

HECHOS

I

Don J-M. R. G. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el registro civil, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 26 de mayo de 2014 con Doña F-V. V. E. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.

II

Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2016 el encargado del registro civil consular deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

III

Notificados los interesados el 15 de marzo de 2016, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha 29 de abril de 2016, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informa favorablemente. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras de 18-3.^a de junio, 17-1.^a de julio, 3-3.^a y 18-2.^a de septiembre de 2003, 20-3.^a de febrero de 2004 y 23-1.^a de marzo de 2006; 9-8.^a de diciembre de 2008; 9-7.^a de febrero y 29-4.^a de mayo de 2009; 22-3.^a de febrero de 2010.

II. Los hoy recurrentes contrajeron matrimonio en La República Dominicana el 26 de mayo de 2014. El encargado del registro civil consular, mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2016, deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento. Dicho acuerdo fue notificado a los interesados el 15 de marzo de 2016. Los interesados interpusieron recurso con fecha 29 de abril de 2016. Este recurso no puede admitirse porque fue presentado una vez transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que se hizo fue correcta, se realizó personalmente con entrega de copia literal del acuerdo en el que consta la indicación del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta días naturales para interponerlo.

III. El recurso no puede admitirse porque fue presentado una vez transcurrido el plazo legalmente establecido y computado conforme al artículo 32 de la Ley del Registro Civil. Por otra parte, la notificación que se hizo fue correcta, se realizó mediante comparecencia personal de los interesados en el Registro Civil del Consulado de España en Santo Domingo, con entrega de copia literal del acuerdo en el que consta la indicación del recurso procedente

ante esta Dirección General y el plazo para interponerlo, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil, constando diligencia de notificación firmada. En cuanto a la fecha de presentación del recurso, cabe señalar que el recurso presentado en el Consulado General de España en Santo Domingo el 29 de abril de 2016.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado inadmitir el recurso, por haberse interpuesto fuera de plazo, y acordar el archivo de las actuaciones.

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 7 de abril de 2017 (46.^a)

Recurso interpuesto fuera de plazo.–*No cabe recurso contra la resolución del encargado del registro pasado el plazo de interposición a contar desde la notificación correcta del acuerdo.*

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Por acuerdo de fecha 5 de octubre de 2016 dictado por el encargado del Registro Civil Central se deniega la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de L. A. E. O., nacido el 19 de mayo de 1999 en Guinea Ecuatorial, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil, toda vez que no se encuentra acreditado que el interesado haya estado sometido a la patria potestad de un español. Dicho acuerdo fue notificado a la promotora, presunta madre del interesado, en fecha 04 de noviembre de 2016, por comparecencia en el Registro Civil de Parla, de acuerdo con diligencia de notificación que consta en el expediente.

II

Con fecha 19 de diciembre de 2016 tiene entrada en el Registro Civil Central escrito de recurso formulado por la promotora, presunta progenitora, solicitando se le conceda la

opción a la nacionalidad española al interesado, alegando que el hecho de no declararle en su expediente de nacionalidad por residencia se debió a un error de interpretación, por lo que mencionó únicamente a sus dos hijos menores nacidos en España.

III

Trasladado dicho recurso al ministerio fiscal por informe de fecha 30 de enero de 2017, interesa la desestimación del recurso y el encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 29 y 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras de 18-3.^a de junio, 17-1.^a de julio, 3-3.^a y 18-2.^a de septiembre de 2003, 20-3.^a de febrero de 2004 y 23-1.^a de marzo de 2006; 9-8.^a de diciembre de 2008; 9-7.^a de febrero y 29-4.^a de mayo de 2009; 22-3.^a de febrero de 2010.

II. El encargado del Registro Civil Central, dictó acuerdo por el que se desestimaba la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado por no haber estado sujeto a la patria potestad de un español. La notificación del citado acuerdo se efectuó el 4 de noviembre de 2016, de acuerdo con diligencia de notificación expedida por el Registro Civil de Parla. En la citada diligencia se indicaba que frente al acuerdo de denegación cabía recurso de apelación, en el plazo de treinta días naturales ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. La promotora, presunta progenitora, interpone recurso por escrito que tiene entrada en el Registro Civil Central el 19 de diciembre de 2016.

III. El recurso interpuesto por el promotor no puede admitirse al constar que fue presentado una vez transcurrido el plazo legalmente establecido y computado conforme al artículo 32 de la Ley del Registro Civil, que establece que «a efectos del Registro Civil son hábiles todos los días y horas del año».

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado inadmitir el recurso, por haberse interpuesto fuera de plazo, y acordar el archivo de las actuaciones.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de noviembre de 2017 (19.ª)

Recurso interpuesto fuera de plazo.—*No es admisible el recurso interpuesto una vez superado el plazo legalmente establecido desde la correcta notificación de la resolución.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento subsiguiente a la adquisición de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Lleida.

HECHOS

I

Tras serle notificada la concesión de la nacionalidad española por residencia, por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de octubre de 2016, la ciudadana congoleña que se identifica con NIE a nombre de A.-M. K. comparece en el Registro Civil de Lleida en fecha 14 de diciembre de 2016 a fin de suscribir el acta de adquisición y, citada nuevamente el 13 de enero de 2017 para que ratifique el borrador de asiento registral, manifiesta que el nombre de su padre es B. y S. J. sus apellidos, aporta certificado al respecto de la Embajada de la República Democrática del Congo en España y solicita ser inscrita con los apellidos K. J.

II

El 20 de enero de 2017 la juez encargada, a la vista del acta de nacimiento de la solicitante que obra en las actuaciones y de lo previsto en los artículos 109 del Código Civil y 55 y siguientes de la Ley del Registro Civil, dicta auto disponiendo denegar la solicitud y que la interesada sea inscrita como A.-M. K. B.

III

Notificada la anterior resolución a la interesada en comparecencia en el registro civil de fecha 31 de enero de 2017, el 28 de abril interpone recurso de apelación alegando que el plazo de un mes se interrumpió, por solicitud de justicia gratuita, el 23 de febrero, se reanudó el 23 de marzo, fecha de recepción de la resolución del Servicio de Orientación Jurídica que deniega la petición por no ser preceptivo abogado para recurrir una resolución del registro civil y, por tanto, el recurso se interpone en tiempo y forma y, respecto a la cuestión de fondo que, constando en las actuaciones que su padre se llama B. J. S., reclama que se incluya en su filiación el apellido paterno y no el nombre de su padre; y aportando como prueba el ejemplar original del certificado de la Embajada de la República Democrática del Congo ya presentado en copia cotejada en el que se ha añadido a lápiz, junto a «1.º Apellido: S.», «S. - 2.º apellido» y, junto a «2.º Apellido: J.», «J. - 1.º apellido».

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso al recurso e interesó la confirmación de la resolución impugnada, y la juez encargada informó que considera procedente la inscripción con los apellidos K. B. ya que en el expediente de nacionalidad por residencia instado por A.-M. K. se dictó resolución concediéndola a M. K. B., cuyo primer apellido consta en autos que es de procedencia materna y el segundo correspondería al padre, inicialmente identificado como S.-J. B., y seguidamente dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 29 y 32 de la Ley de Registro Civil (LRC) y 16, 355, 356 y 362 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 1 de octubre de 1988, 10 de marzo, 10-4.^a y 18-3.^a de junio, 17-1.^a de julio y 3-3.^a y 18-2.^a de septiembre de 2003; 10-2.^a y 20-3.^a de febrero de 2004, 23-1.^a de marzo de 2006, 26-1.^a y 28-9.^a de marzo de 2007, 8-3.^a de enero, 18-5.^a de noviembre y 9-8.^a de diciembre de 2008, 9-7.^a de febrero, 29-4.^a de mayo y 8-2.^a de julio de 2009, 22-3.^a de febrero, 9-6.^a y 18-6.^a de marzo y 5-4.^a de mayo de 2010; 14-15.^a de enero, 15-13.^a de marzo, 6-4.^a de abril y 10-7.^a de junio de 2011; 25-45.^a de enero y 16-3.^a de febrero de 2012, 12-42.^a de septiembre de 2013, 20-18.^a de marzo, 11-90.^a de abril y 18-96.^a de junio de 2014, 17-9.^a de abril, 26-3.^a de mayo y 23-10.^a de diciembre de 2015 y 26-16.^a de febrero y 1-26.^a de julio de 2016.

II. Al adquirir la nacionalidad española por residencia la interesada solicita ser inscrita con los apellidos K. J., que son el apellido único de su madre y el que aduce segundo apellido paterno, y la juez encargada, a la vista del acta de nacimiento del registro local que obra en las actuaciones y de lo previsto en los artículos 109 CC y 55 y siguientes LRC, dispone denegar la solicitud y que la interesada sea inscrita con los apellidos K. B. mediante auto de 20 de enero de 2017 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La resolución dictada, que indica expresamente los recursos que caben y el plazo de treinta días para interponerlos (arts. 29 LRC y 355 RRC), consta notificada personalmente a la promotora, con entrega de copia, el 31 enero de 2017 y no puede estimarse la alegación de que el plazo estuvo interrumpido entre el 23 de febrero y el 23 de marzo porque no se justifica que tal interrupción fuera solicitada y decretada en la forma legalmente prevista y, aunque se acreditara esta circunstancia, igualmente se habría sobrepasado el plazo legal de interposición y, por tanto, no es admisible el recurso presentado el 28 de abril.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado no admitir el recurso, por haberse presentado fuera de plazo.

Madrid, 3 de noviembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lleida.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 27 de enero de 2017 (5.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 17 de febrero de 2017 (81.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 24 de febrero de 2017 (2.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 3 de marzo de 2017 (37.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.

Resolución de 3 de marzo de 2017 (49.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 10 de marzo de 2017 (44.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (50.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 17 de marzo de 2017 (51.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (34.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (45.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 31 de marzo de 2017 (46.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 5 de mayo de 2017 (4.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 5 de mayo de 2017 (19.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 12 de mayo de 2017 (42.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (23.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.

Resolución de 26 de mayo de 2017 (30.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 23 de junio de 2017 (38.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 30 de junio de 2017 (21.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 7 de julio de 2017 (12.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 28 de julio de 2017 (43.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 1 de septiembre de 2017 (101.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (20.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.
Resolución de 22 de diciembre de 2017 (39.^a). Recurso interpuesto fuera de plazo.

8.2 Representación

8.2.1 RECURSO INTERPUESTO POR MEDIO DE REPRESENTANTE

Resolución de 17 de febrero de 2017 (93.^a)

Recurso interpuesto por medio de representante.—*No es admisible el recurso presentado por un tercero sin que conste la representación.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por un tercero, hijo de la promotora, sin que conste la representación, contra auto dictado por el encargado del Registro del Consulado de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Que, con fecha 11 de mayo de 2007 en el Consulado General de España en La Habana (Cuba), se levantó acta de recuperación de la nacionalidad española, por la cual D.^a N. P. G., nacida el 9 de octubre de 1931 en F. L. P., T., S. S. (Cuba), de nacionalidad cubana, declara ser hija de Don J. M. P. M., nacido el 1 de diciembre de 1904 en L. P., Islas Canarias (España), originariamente español, quien ostentaba su nacionalidad de origen al momento del nacimiento de la interesada, siendo su voluntad recuperar su nacionalidad española de origen, prestando juramento o promesa de fidelidad a S.M. El Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes españolas, no renunciando a su anterior nacionalidad.

Adjuntaba la siguiente documentación: carnet de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento de la interesada; certificado español de nacimiento del progenitor de la interesada; certificado emitidos por la dirección de inmigración y extranjería del Ministerio del Interior cubano, en los que se indica que el progenitor de la solicitante no consta inscrito en el registro de ciudadanía y que consta inscrito en el registro de extranjeros, con el núm. de expediente, inscripción formalizada en L. H. con 34 años de edad; cartilla de autorización para emigrar del padre de la interesada, de fecha 21 de octubre de 1922 y certificado cubano de matrimonio del progenitor.

II

El encargado del registro civil dicta auto con fecha 11 de mayo de 2007, denegando la inscripción de nacimiento y el asiento registral de la recuperación de la nacionalidad española, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que la solicitante haya ostentado la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.

III

Notificada la interesada, Don J. M. G. P., hijo de la promotora, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revisión del expediente de su progenitora, no aportándose la acreditación de la representación otorgada por la interesada.

IV

Notificado el órgano en funciones del ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste informa que el auto que se recurre resulta dictado conforme a Derecho y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, teniendo en cuenta que el padre de la solicitante nació en L. P., Islas Canarias, el 01 de diciembre de 1904 y que es hijo de ciudadano natural de J. (Cuba), no se acredita que el mismo sea originariamente español, según la redacción del Código Civil en sus artículos 17, 18 y 19 al momento de su nacimiento. Por ello, no ha quedado establecido que la solicitante haya ostentado nunca la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa exigida en el artículo 26 del Código Civil vigente.

V

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil Consular requiera a la interesada a fin de que aporte la acreditación de la representación o bien que la solicitante se ratifique en el escrito de recurso formulado por Don J. M. G. P.

Atendiendo al requerimiento, la interesada aporta poder notarial especial a favor de su hijo Don R. G. P. a efectos del trámite de su nacionalidad española, no coincidiendo el poder otorgado con el autor del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1280 del Código Civil; 97 de la Ley del Registro Civil; 16, 348 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 23-1.^a de junio de 1998; 11 de noviembre de 1999, 14-2.^a de septiembre de 2004, 23-1.^a de mayo de 2005,

16-2.^a de junio de 2006, 15-4.^a de febrero de 2007 y 22-1.^a de septiembre de 2008; 21-3.^a de julio de 2009.

II. La interesada, nacida en Cuba en 1931, solicitó el 11 de mayo de 2007 la recuperación de la nacionalidad española por ser hija de padre español originariamente español. Por el registro civil consular se dictó auto el 11 de mayo de 2007 denegando la solicitud en base a que no se encontraba acreditado que hubiese ostentado la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación. Frente al mencionado auto se interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por un tercero, sin que se haya aportado el poder de representación por la interesada, a pesar de haberle sido requerido.

III. Los interesados, contra las decisiones de los encargados de los registros civiles, pueden interponer el recurso de apelación que resuelve esta dirección general y que ha de presentarse, según los casos, en los plazos que señala la Ley del Registro Civil. Pero en esta ocasión el recurso formulado frente al auto dictado por el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 11 de mayo de 2007, fue presentado por un tercero, en particular, un hijo de la interesada, según la firma que aparece al final del mismo, cuando, al ser la interesada mayor de edad, tenía que actuar por sí misma u otorgar la representación a un tercero para que lo hiciese en su nombre [*cf.* art. 20.2 c) CC]. Por otro lado, se indica que el poder notarial que aporta la promotora no se corresponde con la persona que firma el escrito de recurso.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado inadmitir el recurso interpuesto por un tercero, sin que conste la representación, y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de julio de 2017 (19.^a)

Recurso interpuesto por medio de representante.—*No es admisible el recurso presentado por la madre de la interesada sin que conste la representación otorgada por el padre del mismo ni su consentimiento al recurso.*

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la representación no acreditada de la madre de la interesada, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Marbella en el año 2012, I. R.A., menor de edad, nacida el de 2012 en M. (Málaga), asistida por su representación legal solicitaba la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por aplicación del artículo 17.1.c del Código Civil al no tener atribuida por nacimiento la nacionalidad colombiana de sus padres, nacidos en Colombia. Consta copia de la inscripción de nacimiento de la menor en el registro civil español, hija de R. R. M. y de P. A. A. Q., ambos nacidos en C.(Colombia).

II

Con fecha 2 de agosto de 2013 el encargado del Registro Civil de Marbella dicta auto denegando lo solicitado por considerar que en el caso de la interesada, nacida en el extranjero e hija de ciudadanos colombianos es de nacionalidad colombiana registrándose en la oficina consular de dicho país.

III

Notificada la resolución con fecha 14 de agosto de 2013, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, a nombre de la Sra. P. A. A., madre de la menor, pero firmado P.A. por persona no identificada, solicitando que se revise su caso por estar en absoluta disconformidad con el contenido del auto impugnado.

IV

Posteriormente este centro directivo requirió, a través del Registro Civil de Marbella, que se acreditara el consentimiento del padre de la menor, Sr. R. M., a la presentación del recurso o bien que lo ratificara con su firma. Según informa el registro civil el Sr. R. es citado telefónicamente para darle traslado del recurso con fecha 19 de noviembre de 2014 sin que cumplimentara lo requerido al no haber comparecido en el registro, según informa éste con fecha 9 de junio de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1280 del Código Civil; 97 de la Ley del Registro Civil; 16, 348 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 23-1.^a de junio de 1998; 11 de noviembre de 1999, 14-2.^a de septiembre de 2004, 23-1.^a de mayo de 2005, 16-2.^a de junio de 2006, 15-4.^a de febrero de 2007 y 22-1.^a de septiembre de 2008; 21-3.^a de julio de 2009.

II. Se ha pretendido por una ciudadana colombiana que sea declarada la nacionalidad española con valor de simple presunción de su hija, menor de edad, nacida en M. el de 2012, alegando que la legislación colombiana no le otorga dicha nacionalidad, que es la de sus progenitores, por lo que se encontraría en el supuesto previsto en el artículo 17.1c) del Código Civil, según el cual son españoles de origen «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. El encargado del Registro Civil de Marbella dictó resolución denegando la solicitud por estimar que la no nacionalidad colombiana de la menor estaba causada por la no inscripción en la representación consular de dicho país en España, hecho del que son responsables los progenitores de la menor.

III. Los interesados, contra las decisiones de los encargados de los registros civiles, pueden interponer recurso de apelación que resuelve esta Dirección General y que ha de presentarse, según los casos, en los plazos que señala la Ley del Registro Civil. Pero en esta ocasión el recurso fue presentado a nombre de la madre de la menor interesada, Sra. A. Q., pero firmada por persona no identificada, cuando al ser menor de 14 años habría sido necesario que sus representantes legales, es decir, ambos padres como titulares de la patria potestad, hubiesen formulado el recurso. Este trámite no consta debidamente acreditado para la madre ni tampoco para el padre al requerimiento efectuado a este.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado no admitir a trámite el recurso interpuesto por falta de legitimación.

Madrid, 28 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (24.^a)

Recurso interpuesto por medio de representante.—*No se admite el recurso en tanto no se acredite de forma auténtica la veracidad de la firma y la calidad en la que actúa el signatario o el escrito de interposición sea ratificado por los interesados.*

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, mediante representante legal, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Castellón.

HECHOS

I

D.^a S. T. M., nacida en España y de nacionalidad española y Don T. B., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí presentaban ante el Registro Civil de Castellón, solicitud para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y copia integral de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

II

Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal no se opone a la autorización del matrimonio. Mediante auto de fecha 15 de abril de 2015, el encargado del registro civil deniega la autorización del matrimonio.

III

Notificados los interesados, éstos no presentan recurso, sino que vuelven a presentar, ocho meses después de serles denegado la autorización para contraer matrimonio, solicitud de autorización para contraer matrimonio. El ministerio fiscal se opone a la autorización. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 4 de julio de 2016, deniega la autorización para contraer matrimonio ya que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a la primera denegación.

IV

Notificada la resolución a los interesados, fue interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante escrito encabezado con el nombre de los interesados con la asistencia de la letrada A. C. T. y con firma ilegible pero con un centro de abogados de A. C. T.

V

El 11 de noviembre de 2016, este centro directivo, mediante oficio dirigido al encargado del Registro Civil de Castellón, acordó «que se notifique de manera fehaciente a los interesados o representante, que para continuar con la tramitación del procedimiento es imprescindible que aporten la autorización o poder notarial que acredite la representación otorgada a favor de la Sr. C. T., o bien que cualquiera de los interesados se ratifique en lo expuesto en el escrito de recurso». Mediante diligencia de fecha 30 de diciembre de 2016, el Registro Civil de Castellón se notifica a los interesados dicho oficio.

VI

Mediante diligencia de fecha 31 de agosto de 2017, se informa a este centro directivo que habiendo sido requeridos los promotores en los términos expresados en la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 11 de noviembre de 2016, los mismos no han aportado la documentación requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 24, 26 y 95 de la Ley de Registro Civil (LRC) y 16 y 348 del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 18-1.^a de marzo de 1994, 7 de marzo de 1996, 27-1.^a de febrero, 16 de mayo y 11 de julio de 1997, 23-1.^a de junio de 1998, 11 de noviembre de 1999, 14-2.^a de septiembre de 2004, 23-1.^a de mayo y 4-4.^a de noviembre de 2005, 27-3.^a de noviembre de 2006, 15-4.^a de febrero de 2007, 29-2.^a de octubre de 2009 y 25-44.^a de enero de 2012.

II. La admisibilidad del presente recurso requiere o acreditación fehaciente de la identidad y representación que ostenta quien, al parecer en nombre de los interesados, suscribe con firma ilegible, pero con sello de un despacho de abogados (A. C. T.) el escrito de interposición o la ratificación de este último por parte de los solicitantes. Si bien los procuradores y abogados pueden asistir a los interesados en los expedientes gubernativos como apoderados o como auxiliares, la persona que actúa en este caso no acredita en cuál de los dos conceptos lo hace, ni la representación que ejerce, ni su condición de letrada, ni siquiera su identidad y, por tanto no puede darse trámite al recurso entablado por un tercero cuyo poder no consta auténticamente (*cf.* art. 1280-5.º CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado no admitir el recurso en tanto no se acredite de forma auténtica la veracidad de la firma y la calidad en la que actúa el signatario o el escrito de interposición sea ratificado por los interesados.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Castellón.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo.

Resolución de 31 de marzo de 2017 (18.^a). Recurso interpuesto por medio de representante.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (17.^a). Recurso interpuesto por medio de representante.

Resolución de 17 de noviembre de 2017 (24.^a). Recurso interpuesto por medio de representante.

8.2.2 REPRESENTACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DEL MENOR INTERESADO

Resolución de 17 de febrero de 2017 (38.^a)

Representación y/o intervención del menor interesado.—*Afectando a una menor se requiere la representación conjunta de ambos progenitores, cotitulares de la patria potestad, o la acreditación de la causa que, conforme a la ley, permite prescindir de la intervención de uno de ellos.*

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Granollers (Barcelona).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Montornès del Vallès (Barcelona) en fecha 10 de junio de 2015 doña M-R. R. S., mayor de edad y domiciliada en M. del V., promueve expediente de cambio del nombre inscrito a su hija E. G. R., nacida en M-V. el de 2003, por «Lis» exponiendo que, aunque este no les fue permitido al inscribir el nacimiento porque en aquel momento no era válido, es el que la menor usa habitualmente y por el que es conocida en todos los actos de su vida y acompañando copia simple de su DNI y, de la menor, certificado de empadronamiento en M. del V., certificación literal de inscripción de nacimiento y copia simple de alguna documental en la que figura con el nombre interesado.

II

Remitido lo anterior al Registro Civil de Granollers, el ministerio fiscal informó que, en ausencia del requisito de justa causa, por cuanto el uso de un diminutivo en el entorno familiar y social es manifestado por la madre pero no acreditado por la menor, que es quien tiene derecho a disponer de su propio nombre, no procede acceder a lo solicitado y el 29 de julio de 2015 el juez encargado, razonando que, conforme a los arts. 54 de la Ley del Registro Civil y 192 de su Reglamento, existe obstáculo para el cambio de nombre solicitado, dictó auto acordando no autorizarlo.

III

Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando la petición y aportando certificación literal de inscripción de nacimiento de una menor llamada «Lys», nacida el 27 de octubre de 2007 en M-V.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, dando por íntegramente reproducido su informe anterior, se opuso al recurso y la juez encargada del Registro Civil de Granollers, ratificándose en el contenido del auto dictado, informó desfavorablemente al cambio de nombre de la menor y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 154, 156 y 162 del Código Civil (CC); 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 205, 206, 209 y 210 y del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 20 de enero de 1989, 30-2.^a de octubre de 2000, 10-2.^a de mayo y 6-4.^a de noviembre de 2001, 26-4.^a de diciembre de 2006, 4-7.^a de febrero de 2009 y 20-2.^o de abril de 2011.

II. Promueve la madre expediente de cambio del nombre, E., inscrito a una menor nacida el 24 de julio de 2003 por «Lis», exponiendo que, aunque este no les fue permitido al inscribir el nacimiento porque en aquel momento no era válido, es el que la interesada usa habitualmente y por el que es conocida en todos los actos de su vida, y el juez encargado, razonando que, conforme a los arts. 54 LRC y 192 RRC, existe obstáculo para lo solicitado, acuerda no autorizar el cambio de nombre de la menor mediante auto de 29 de julio de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto asimismo por la progenitora.

III. Tanto por la consideración jurídica del nombre y los apellidos como derecho subjetivo de carácter privado vinculado al estatuto personal como por la excepcionalidad impuesta por el principio de estabilidad que rige en la materia, no puede interpretarse que un expediente cuyo objeto es cambiar el nombre inscrito a una menor sea una de las actuaciones que, por integrantes del contenido ordinario y habitual del ejercicio de la patria potestad, son realizadas usualmente por uno solo de los progenitores y, en este caso, ni comparece el padre (*cf.* art. 156 y 162 CC) ni consta la causa que conforme a la ley permite prescindir de su intervención (*cf.* art. 154 CC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 17 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Granollers (Barcelona).

8.3 Caducidad del expediente

8.3.1 CADUCIDAD POR INACTIVIDAD DEL PROMOTOR ARTÍCULO 354 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL

Resolución de 10 de marzo de 2017 (47.^a)

Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RCC.–1.º *La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la paralización del procedimiento durante más de tres meses y la previa citación del interesado.*

2.º *No acreditado por parte del registro que la citación a la promotora se realizara correctamente, procede retrotraer las actuaciones y continuar la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de una solicitud de nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

HECHOS

I.

Mediante formulario presentado el 28 de abril de 2014 en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, la Sra. M. C. H., mayor de edad y de nacionalidad cubana, solicitaba la nacionalidad española por residencia. Aportaba los siguientes documentos: tarjeta de residencia en España y pasaporte cubano de la solicitante, certificaciones de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales en su país de origen, certificado de empadronamiento, inscripción en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana del matrimonio de la promotora con J-C. R. Q., de nacionalidad española, celebrado el 15 de febrero de 2010, certificación cubana de nacimiento de E. L. C., hijo menor de edad de la promotora, contrato de trabajo y nóminas, informe de vida laboral, certificado sobre IRPF expedido por la Agencia Tributaria, extracto de cuenta bancaria y escritura notarial de compraventa de inmueble.

II

Ratificada la interesada y practicada audiencia personal, se requirió la aportación del certificado de nacimiento del cónyuge español. Intentada infructuosamente la notificación del requerimiento mediante el servicio de Correos el 1 de julio de 2014, el certificado que contenía la cédula de citación fue devuelto al registro, donde se recibió el 23 de septiembre de 2014.

III

Mediante providencia de 16 de julio de 2015, a la vista del tiempo transcurrido desde el intento infructuoso de notificación del requerimiento, las actuaciones pasaron al ministerio fiscal por si cabía iniciar el procedimiento de caducidad. Interesado el inicio de dicho procedimiento, la caducidad fue finalmente declarada por el encargado mediante auto de 28 de julio de 2015 por paralización del expediente durante más de tres meses por causa imputable a la promotora.

IV

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la solicitante que no tuvo constancia del requerimiento y que no se habían agotado por parte del registro las posibilidades para intentar notificárselo.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1.^a de enero y 30 de julio de 2004; 21-2.^a de junio de 2005; 24-6.^a de noviembre de 2006; 30-4.^a de enero, 16-5.^a de febrero, 20-6.^a de julio de 2007; 16-4.^a de septiembre y 28-8.^a de noviembre de 2008; 14-2.^a de abril de 2009; 13-1.^a de junio de 2011 y 10-44.^a de febrero y 14-43.^a de octubre de 2014 y 8-19.^a de abril de 2016.

II. La promotora presentó solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia y, transcurridos más de tres meses desde el intento fallido de notificación postal de un requerimiento para que aportara determinada documentación complementaria, el encargado del registro declaró la caducidad del procedimiento al considerar que se había paralizado por causa

imputable a la promotora. Contra este auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). En este caso no consta que se hubiera advertido a la promotora en ningún momento de las consecuencias de su inactividad ni que, antes de ser declarada la caducidad, se hubiera intentado la notificación del inicio de dicho procedimiento, razón por la cual ya en principio procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que dicha notificación debió ser realizada. Por otra parte, no resulta acreditado tampoco que el registro realizara las actuaciones precisas para agotar los intentos de poner en conocimiento de la solicitante el requerimiento de documentación (nuevo intento de entrega de la notificación en un horario diferente, posible comunicación telefónica a través de los números facilitados en el formulario de solicitud o mediante correo electrónico y, en última instancia, publicación mediante edictos), de manera que, a la vista de la documentación disponible, no se considera procedente la declaración de caducidad.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad recurrida.
- 2.º Retrotraer las actuaciones al momento en que la interesada debió ser notificada del requerimiento de aportación de documentación complementaria.

Madrid, 10 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Resolución de 17 de marzo de 2017 (57.ª)

Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RCC.—1.º *La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la paralización del procedimiento durante más de tres meses y la previa citación del interesado.*

2.º *No habiendo sido advertido el solicitante del plazo de caducidad y presentada la documentación requerida antes de que aquella fuera declarada, procede retrotraer las actuaciones y continuar la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia.*

En las actuaciones sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra la resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Lleida.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 3 de agosto de 2010 en el Registro Civil de Lleida, el Sr. A. E., mayor de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaba la nacionalidad española por residencia. Aportaba los siguientes documentos: pasaporte marroquí, tarjeta de residencia en España, certificación de nacimiento, certificado de empadronamiento, contrato de trabajo, nóminas, documento de afiliación a la Seguridad Social, declaración de IRPF de 2009 y certificado de retribuciones.

II

Ratificado el promotor, el mismo día de la presentación de la solicitud se practicó el trámite de audiencia personal y se le requirió la aportación de certificados de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales en su país de origen debidamente traducidos y legalizados. El 4 de noviembre de 2010 compareció ante el registro una hija del promotor para manifestar que su padre se encontraba en Marruecos y que a su vuelta presentaría los documentos requeridos.

III

Mediante providencia de 24 de septiembre de 2013 la encargada del registro inició procedimiento de caducidad por paralización del expediente durante más de tres meses por causa imputable al promotor, acordando que se le diera audiencia en relación con el procedimiento iniciado, si bien no hay constancia en las actuaciones de que dicha audiencia se llegara a practicar.

IV

Presentados finalmente los documentos requeridos el 29 de abril de 2014, el ministerio fiscal interesó la declaración de caducidad en informe fechado el 20 de mayo siguiente. La encargada del registro dictó auto el 2 de julio de 2014 declarando la caducidad por haber estado paralizado el expediente durante más de tres meses por causa imputable al promotor.

V

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que no le había sido notificado el requerimiento para que aportara la documentación que faltaba, que el registro no había agotado todos los recursos para intentar hacer efectiva la notificación y que, aun así, se había personado en el registro, donde fue informado de los documentos complementarios que debía presentar, habiéndolos aportado finalmente el 29 de abril de 2014, lo que prueba que no tenía intención de desistir de su solicitud. Añadía que toda su familia había presentado solicitudes de nacionalidad en la misma fecha y que todos, excepto el recurrente, son ya ciudadanos españoles.

VI

Del recurso se dio trasladado al ministerio fiscal, que se adhirió a la pretensión en aras de la economía procesal teniendo en cuenta que, aunque fuera de plazo, ya se había presentado la documentación requerida. La encargada del Registro Civil de Lleida se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1.^a de enero y 30 de julio de 2004; 21-2.^a de junio de 2005; 24-6.^a de noviembre de 2006; 30-4.^a de enero, 16-5.^a de febrero, 20-6.^a de julio de 2007; 16-4.^a de septiembre y 28-8.^a de noviembre de 2008; 14-2.^a de Abril de 2009 y 13-1.^a de Junio de 2011; 12-25.^a de febrero y 6-45.^a de mayo de 2016.

II. El promotor presentó solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia y el mismo día de la ratificación se le requirió la aportación de certificados de nacimiento y de penales de su país de origen debidamente traducidos y legalizados. Transcurridos casi tres años desde que compareciera la hija del interesado para manifestar que su padre se encontraba en Marruecos pero que en cuanto volviera presentaría la documentación que faltaba, la encargada del registro acordó iniciar el procedimiento de caducidad. Meses después, el interesado aportó finalmente la documentación requerida, lo que no impidió que, previo informe del ministerio fiscal, la encargada declarara la caducidad al considerar que el procedimiento había permanecido paralizado durante más de tres meses por causa imputable al promotor. Contra ese auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero, RRC). Aunque en la providencia dictada el 24 de septiembre de 2013 se acordaba dar audiencia al promotor sobre el inicio de las actuaciones de caducidad, no consta sin embargo que tal citación llegara a producirse en algún momento, razón por la cual ya en principio procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que dicha notificación debió ser realizada. Por otro lado, aunque, en contra de lo que sostiene el recurrente, sí se le notificó el mismo día de la ratificación la necesidad de aportar documentación complementaria (además, consta la comparecencia de su hija tres meses después manifestando que su padre se encontraba en Marruecos pero que cumpliría el requerimiento en cuanto regresara), advirtiéndole al mismo tiempo de la posibilidad de archivo de las actuaciones, no consta sin embargo que se le hubiera informado en ningún momento de cuál era el plazo legal de caducidad. Además, la documentación requerida se

incorporó finalmente al expediente y aunque, efectivamente, había transcurrido mucho tiempo desde la última comparecencia sin que el interesado comunicara la causa de la demora o solicitara una prórroga, no habiéndose cumplido adecuadamente por parte del registro el procedimiento que la normativa prevé, no cabe, una vez cumplido el trámite requerido, declarar la caducidad con efectos retroactivos sancionadores para el interesado.

IV. Por lo demás, no habiéndose completado la tramitación del expediente, es oportuno devolver las actuaciones al registro para que se cierre la instrucción con el informe del ministerio fiscal y se eleve a continuación a este centro con la propuesta de la encargada en el sentido que estime adecuado. Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que procede:

1. Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad recurrida.

2. Retrotraer las actuaciones devolviendo el expediente al Registro Civil de Lleida para que se complete la tramitación de la instrucción y se remita todo lo actuado a este centro para la resolución de la solicitud

Madrid, 17 de marzo de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lleida.

Resolución de 14 de julio de 2017 (19.^a)

Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RCC.–*Es conforme a derecho la caducidad que se decreta pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, con informe favorable del ministerio fiscal y previa citación al interesado.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Castellón.

HECHOS

I

Por medio de formulario presentado en el Registro Civil de Castellón el 1 de julio de 2008, la Sra. A. P. M. V., mayor de edad y de nacionalidad colombiana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Cumplidos los trámites reglamentarios, el

expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), desde donde se remitió oficio el 26 de abril de 2011 al registro de procedencia para que se requiriera a la interesada la aportación de determinados documentos necesarios para la resolución de su expediente.

II

Intentada infructuosamente la notificación en el domicilio que figuraba en el expediente, se ordenaron diligencias para la averiguación del nuevo, de las que resultó una nueva dirección postal en la localidad de B. Intentada la notificación en este domicilio, resultó que la promotora ya no vivía allí, por lo que la documentación fue devuelta a C., donde se ordenó realizar la notificación mediante edictos que se mantuvieron publicados en los tablones de anuncios de los registros de C. y de B. entre el 10 de enero y el 29 de febrero de 2012.

III

La encargada del Registro Civil de Castellón dictó providencia de 18 de diciembre de 2012 ordenando la publicación de nuevos edictos, tanto en C. como en B., para notificar, dando plazo de alegaciones, que se iba a proceder a dar caducidad al expediente. Transcurridos quince días desde la publicación de los edictos sin que la interesada hubiera comparecido, las actuaciones pasaron al ministerio fiscal el 11 de febrero de 2013 y el 19 de abril siguiente la encargada dictó auto declarando finalmente la caducidad del expediente por paralización durante más de tres meses por causa imputable a la promotora, ya que había resultado imposible su localización.

IV

Notificada la resolución, la interesada presentó recurso en diciembre de 2016 ante la Dirección General de los Registros y del Notariado comunicando un nuevo domicilio en Castellón.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Castellón se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1.^a de enero y 30 de julio

de 2004; 21-2.^a de junio de 2005; 24-6.^a de noviembre de 2006; 30-4.^a de enero, 16-5.^a de febrero y 20-6.^a de julio de 2007; 16-4.^a de septiembre y 28-8.^a de noviembre de 2008; 3-6.^a y 10-2.^a de junio de 2009; 9-2.^a de febrero, 9-8.^a de junio y 19-16.^a de noviembre de 2010; 28-1.^a de marzo y 2-1.^a de noviembre de 2011; 6-36.^a de julio, 30-4.^a de octubre y 17-48.^a de diciembre de 2012; 1-46.^a de marzo, 18-50.^a de julio y 13-29.^a de diciembre de 2013; 17-42.^a de febrero y 26-57.^a de diciembre de 2014; 31-32.^a de julio, 11-29.^a y 25-20.^a de septiembre de 2015; 13-41.^a de mayo y 16-35.^a de diciembre de 2016.

II. La promotora inició en 2008 un expediente para la obtención de la nacionalidad española por residencia, siendo requerida en abril de 2011 para que aportara determinados documentos complementarios necesarios para la resolución. Intentada infructuosamente la notificación personal por parte del registro, finalmente, ante la imposibilidad de localizar a la interesada, la notificación se realizó mediante edictos. Transcurridos más de tres meses desde que se retiraron los edictos sin que la solicitante hubiera comparecido, se notificó, por el mismo procedimiento, el inicio del procedimiento para declarar la caducidad de las actuaciones, que fue finalmente acordada, previo acuerdo del ministerio fiscal, en virtud de lo establecido en el artículo 354 RRC. Contra el auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). Constan en el expediente los intentos por parte del registro para notificar personalmente a la promotora el oficio remitido en 2011 por la Dirección General de los Registros y del Notariado, así como la notificación finalmente realizada mediante la publicación de edictos, ante la imposibilidad de localizarla. También se advirtió, por el mismo medio, del inicio de un expediente para declarar la caducidad, sin que en todo ese tiempo se haya tenido ninguna noticia de la interesada hasta que presentó el recurso en 2016. Debe recordarse a este respecto que es obligación de los interesados comunicar al registro o al órgano competente para resolver su expediente los cambios de domicilio, por lo que la actuación del registro y la declaración de caducidad se consideran en este caso ajustadas a lo legalmente establecido.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Castellón.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (31.^a)

Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RCC.—*No habiéndose acreditado la correcta notificación de la concesión de la nacionalidad a la promotora, no cabe tampoco considerar que el vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 CC es imputable a aquella, por lo que procede dejar sin efecto la resolución de caducidad de la concesión prevista en el artículo 21.4 CC.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de una concesión de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil de Elche.

HECHOS

I

Por medio de escrito remitido el 22 de marzo de 2013 al Registro Civil de Elche, la Sra. M.-A. C. C., mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, una vez enterada, a través de la página web Ministerio de Justicia, de que se le había concedido la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 27 de diciembre de 2012, solicitó el traslado de su expediente a la Embajada de España en Ecuador para continuar allí los trámites, dado que en ese momento se encontraba residiendo en su país de origen. Consta en el expediente la siguiente documentación: tarjeta de residencia en España, información impresa sobre concesión de la nacionalidad ofrecida por la web del Ministerio de Justicia, resolución de concesión e inscripción ecuatoriana de nacimiento.

II

Desde el Registro Civil de Elche se dirigió exhorto al Consulado de España en Ecuador, fechado el 12 de abril de 2013, interesando la notificación a la interesada de la resolución de concesión y la práctica del trámite de jura o promesa previo a la inscripción.

III

El 15 de abril de 2013 tiene entrada en el consulado español en Quito una solicitud de la interesada en el mismo sentido que la que ya había dirigido directamente al Registro Civil de Elche el 22 de marzo anterior. Recibida la información en este último registro, el encargado acordó, mediante providencia de 24 de septiembre de 2013, la expedición de un nuevo exhorto al registro consular para que se notificara formalmente la resolución de concesión y se practicara el trámite de juramento o promesa.

IV

El registro consular devolvió el exhorto anterior el 19 de noviembre de 2013, al tiempo que comunicaba que no había sido posible localizar a la interesada. Se adjuntaba un justificante de intento de notificación postal (carta y fotocopia de un sobre con la dirección, sin constancia de que fuera certificado), con sello de Correos de 9 de julio de 2013, dirigido al domicilio facilitado por la interesada a efectos de notificaciones.

V

Recibida en el Registro Civil de Elche información por correo electrónico de una nueva dirección de la interesada en Ecuador, se remitió otro exhorto al registro consular el 7 de marzo de 2014 para que se intentara de nuevo la notificación. Desde el Consulado de Guayaquil se remitió escrito el 20 de junio de 2014 comunicando que se había realizado la notificación a la interesada, si bien no figura la fecha en la que se había realizado el trámite ni hay constancia de la recepción.

VI

El encargado del Registro Civil de Elche, visto el tiempo transcurrido sin noticias de la realización de más trámites, dictó providencia el 2 de enero de 2017 acordando iniciar las actuaciones para la declaración de caducidad del expediente. Previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado dictó auto el 23 de febrero de 2017 acordando la caducidad de la concesión y el archivo del expediente por haber transcurrido más de ciento ochenta días desde la notificación sin que la solicitante hubiera comparecido para finalizar los trámites (art. 224 RRC).

VII

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que, enterada a través de la web del Ministerio de Justicia de que se le había concedido la nacionalidad española y encontrándose en ese momento en Ecuador, había solicitado, tanto al Registro Civil de Elche como al Registro Civil Consular en Quito, que se procediera a la notificación formal de la resolución en la dirección que ella misma facilitaba en Ecuador y que se trasladara el expediente al consulado para realizar el trámite de juramento o promesa; que transcurridos casi cuatro años desde su solicitud, el 20 de febrero de 2017, se había recibido en su antiguo domicilio en España la mencionada notificación y que días más tarde, el 21 de marzo de 2017, se había depositado en esa misma dirección un certificado de Correos que fue retirado el día 23 en el que se le comunicaba la decisión del encargado de archivar su expediente; que el auto de archivo se basa muy someramente en la incomparecencia de la interesada una vez notificada, pero no se señala cuándo se realizó dicha notificación; que la única notificación formal de la concesión la recibió, como se ha dicho, el 20 de febrero de 2017 y que cuando se acordó el archivo no habían transcurrido los ciento ochenta días preceptivos; que, una vez conocida a través del letrado de la Administración de Justicia del registro la información remitida por el consulado de Guayaquil en la que se aseguraba que se había realizado la notificación formal, resulta que la apelante nunca recibió dicha notificación, no constando en el expediente acreditación alguna de tal recepción, y, finalmente, que habiendo sido comunicada al registro la nueva dirección de contacto, no se entiende por qué las últimas

notificaciones se dirigieron a su antiguo domicilio en España. Con el escrito de recurso se adjuntaban, entre otros ya incorporados al expediente, los siguientes documentos: información sobre concesión de la página web del Ministerio de Justicia en la que se especifica que no tiene carácter de notificación, justificante de Correos de entrega domiciliaria de carta certificada remitida por el Registro Civil de Elche el 21 de marzo de 2017 y cédula de ciudadanía ecuatoriana de la interesada.

VIII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Elche remitió el expediente con informe desfavorable a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 del Código Civil (CC); 224 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 9-2.^a de enero y 27-6.^a de noviembre de 2007, 20-26.^a de mayo de 2016, 24-11.^a de enero, 24-13.^a de febrero y 1-19.^a de septiembre de 2017.

II. La recurrente tuvo noticia, a través de la web del Ministerio de Justicia, de la concesión de la nacionalidad española que había solicitado en 2010 y, encontrándose en ese momento en su país de origen, solicitó, tanto al registro civil en el que se había tramitado su expediente como al registro consular, que se realizara la notificación formal de la concesión y que se trasladara su expediente a Ecuador para poder completar allí los trámites siguientes. Tras un intento infructuoso y una vez facilitado desde el registro en España un nuevo domicilio de contacto en Ecuador, el consulado remitió un escrito al Registro Civil de Elche asegurando haber realizado la notificación interesada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 224 RRC desde la supuesta notificación sin que la interesada compareciera en el registro, el encargado declaró la caducidad de la concesión y el archivo del expediente. Contra esta resolución se presentó el recurso ahora examinado.

III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que «Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23». En el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC. En este caso, la interesada facilitó un domicilio en Ecuador para que se realizara la notificación formal a efectos de poder continuar después con los trámites de adquisición de la nacionalidad. El registro consular intentó, al parecer infructuosamente, la notificación por correo postal en la dirección facilitada, si bien no consta que se realizara mediante carta certificada o cualquier otro medio que permitiera tener constancia del resultado. En cualquier caso, comunicada esa circunstancia al Registro

Civil de Elche, se contactó desde aquí con un hermano de la interesada residente en España, quien proporcionó un teléfono móvil y otra dirección de contacto en Ecuador, con lo que se expidió un nuevo exhorto al consulado. Tres meses después, el registro consular comunica, sin más datos, que se ha realizado la notificación a la interesada, pero sin aportar acreditación alguna de la fecha, modo y forma en que se practicó dicha notificación ni de la recepción efectiva por parte de la destinataria, quien asegura que nunca la recibió. En consecuencia, independientemente de otros aspectos a los que se refiere el fundamento siguiente, lo cierto es que, a través de la documentación disponible, no se puede dar por acreditada la realidad de la notificación, por lo que no se considera procedente la declaración de caducidad en este caso.

IV. No obstante lo anterior, debe decirse que, salvo en los casos de cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero (*cf.* art. 22.3 CC), la residencia en España es el requisito esencial que dota de sentido al procedimiento en este tipo de expedientes, hasta el punto de que las resoluciones de concesión en las que falte tal requisito serán nulas de pleno derecho, mientras que la falta de otros requisitos como la buena conducta cívica o la integración social en España solo serían causas de anulabilidad. En consecuencia, es el mismo registro civil que tramitó el expediente, correspondiente al domicilio de la interesada en España, el competente para llevar a cabo la formalización del juramento o promesa imprescindible para perfeccionar el proceso de adquisición de la nacionalidad por residencia, no pudiendo ser este realizado, por tanto, en el registro consular.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de archivo.
- 2.º Retrotraer las actuaciones al momento en que la interesada debió ser notificada formalmente de la concesión de la nacionalidad española por residencia.

Madrid, 24 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Elche (Alicante).

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (20.^a)

Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RCC.—1.º *La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la previa citación del interesado.*

2.º *Examinado el fondo del asunto por razones de economía procesal y para evitar dilaciones desproporcionadas, es conforme a derecho la caducidad que se decreta pasados tres meses desde que un expediente se paraliza por culpa del promotor.*

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de solicitud de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Toledo.

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 24 de julio de 2012 en el Registro Civil de Toledo, la Sra. S. N. B., mayor de edad y de nacionalidad boliviana, solicitó la nacionalidad española por residencia. Aportaba la siguiente documentación: permiso de residencia, certificado consular, certificado de empadronamiento, certificados bolivianos de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales, declaración de IRPF, informe de vida laboral, certificado bancario, pasaporte boliviano, contrato de trabajo, nóminas y contrato de arrendamiento de vivienda.

II

Ratificada la solicitud y practicada audiencia reservada, el ministerio fiscal interesó la aportación de certificación literal de nacimiento del hijo menor de edad de la promotora. La notificación del requerimiento se realizó mediante el servicio de Correos el 17 de octubre de 2013 en el nuevo domicilio previamente comunicado por la interesada.

III

El 20 de julio y el 4 de agosto de 2016, se realizaron dos nuevos intentos de notificación de requerimiento de documentación, si bien con resultado infructuoso puesto que se dirigieron al antiguo domicilio de la promotora.

IV

La encargada del registro dictó auto el 28 de septiembre de 2016 declarando la caducidad del expediente por paralización del procedimiento durante más de tres meses por causa imputable a la promotora.

V

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que había presentado en el registro toda la documentación necesaria, tanto para su propio expediente como para los de su marido y su hijo, cuyas solicitudes también se habían tramitado.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Toledo se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 28 de abril de 2003; 7-1.^a de enero y 30 de julio de 2004; 21-2.^a de junio de 2005; 24-6.^a de noviembre de 2006; 30-4.^a de enero, 16-5.^a de febrero y 20-6.^a de julio de 2007; 16-4.^a de septiembre y 28-8.^a de noviembre de 2008; 3-6.^a y 10-2.^a de junio de 2009; 9-2.^a de febrero, 9-8.^a de junio y 19-16.^a de noviembre de 2010; 28-1.^a de marzo y 2-1.^a de noviembre de 2011, 6-36.^a de julio de 2012 y 2-18.^a de octubre de 2015.

II. La recurrente inició expediente para la obtención de la nacionalidad española por residencia el 24 de julio de 2012, siendo requerida posteriormente a instancia del ministerio fiscal para que aportara la certificación de nacimiento de su hijo menor de edad. Transcurridos más de tres meses sin que se aportara dicho certificado o compareciera la interesada en el registro en algún momento, la encargada declaró la caducidad del expediente en virtud de lo establecido en el art. 354 RRC. Contra el auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.

III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). No consta en este caso que antes de ser declarada la caducidad la promotora hubiera sido notificada del inicio de dicho procedimiento, razón por la cual, en principio, procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que debió haber sido citada con carácter previo a la declaración sobre la caducidad del expediente. No obstante, dado el tiempo transcurrido desde la solicitud, se estima oportuno, por razones de economía procedimental y para evitar dilaciones desproporcionadas con la causa (arts. 354, párrafo segundo, y 358, quinto, RRC), entrar a examinar el fondo del asunto y dictar el pronunciamiento correspondiente.

IV. Según se acredita mediante el correspondiente certificado de Correos que se entregó al marido de la interesada en el domicilio familiar, el 17 de octubre de 2013 se notificó el requerimiento para que se aportara el documento que había solicitado el ministerio fiscal, advirtiéndose expresamente en la cédula de notificación de la posibilidad de declarar la caducidad si no se atendía el requerimiento en el transcurso de tres meses. Sin embargo, desde entonces y hasta la emisión de la resolución recurrida, transcurrieron casi tres

años durante los cuales no se ha acreditado comparecencia alguna de la solicitante ante el registro bien para entregar el certificado requerido o bien para alegar que dicho documento ya constaba incorporado al expediente correspondiente a su hijo o al de su marido. Así pues, aunque el documento solicitado no era imprescindible para continuar con la tramitación de la solicitud, la declaración de caducidad en este caso se ajustó a lo establecido en el artículo 354 RRC, una vez constatado que habían transcurrido más de tres meses desde que el expediente se paralizó por causa imputable a la promotora, por lo que debe confirmarse el auto apelado.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Toledo.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (12.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 24 de febrero de 2017 (14.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (40.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 21 de abril de 2017 (41.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 28 de abril de 2017 (13.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (8.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 23 de junio de 2017 (37.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 30 de junio de 2017 (42.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 28 de julio de 2017 (21.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (11.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (29.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 13 de octubre de 2017 (31.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (22.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (30.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 24 de noviembre de 2017 (32.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (1.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (2.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 7 de diciembre de 2017 (3.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (1.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

Resolución de 15 de diciembre de 2017 (32.^a). Caducidad por inactividad del promotor, artículo 354 del RRC.

8.4 Otras cuestiones

8.4.1 RECURSOS EN LOS QUE SE APRECIA VICIO DE INCONGRUENCIA

Resolución de 16 de junio de 2017 (31.ª)

Recursos en los que se aprecia vicio de incongruencia.—*Procede la revocación de la providencia recurrida cuando ha incurrido en vicio de incongruencia, por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal.*

En las actuaciones sobre solicitud de certificado de nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la promotora, madre del interesado, contra providencia dictada por la encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo (Vizcaya).

HECHOS

I

Mediante comparecencia formulada ante el Registro Civil de Gernika-Lumo el día 16 de septiembre de 2015, D.ª M. P. M. B. R., nacida el 14 de abril de 1937 en L. A. (Vizcaya), de nacionalidad española de origen, solicita certificado de nacionalidad española a favor de su hijo, Don M. P. P. B., nacido el 6 de octubre de 1963 en V. (Bruselas), originariamente español, inscrito en el Registro Civil Consular de España en Bruselas (tomo, página, número

Acompaña como documentación: documento nacional de identidad de la progenitora; documento nacional de identidad, pasaporte español y acta de nacimiento del interesado inscrita en el Registro Civil Consular de España en Bruselas; libro de familia de los progenitores, en el que el interesado aparece como hijo segundo; certificado de empadronamiento del interesado en el Ayuntamiento de L. y poder notarial general otorgado por el Sr. P. B., a favor de su madre.

II

La encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo dicta providencia con fecha 25 de noviembre de 2015 por la que se acuerda registrar la solicitud y devolverla a la solicitante, dado que la nacionalidad española con valor de simple presunción debe solicitarse por el propio interesado, pudiendo únicamente solicitarla los representantes legales cuando se trate de un menor de edad o incapacitado.

III

Notificada la providencia al ministerio fiscal y a la promotora, madre del interesado, esta interpone recurso reiterando su solicitud de certificado de la nacionalidad española de su hijo, alegando que el mismo se encuentra en la República Democrática del Congo, necesitando dicho documento para poder trabajar y abrir una cuenta bancaria, indicando que aportó un poder notarial general otorgado por su hijo a su favor, por lo que considera que se encuentra legitimada para solicitar el mencionado certificado.

IV

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que emite informe desestimatorio y la encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil (CC), 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 21, 22 y 25 del Reglamento del Registro Civil (RRC), instrucciones de 9 de enero de 1987 y de 14 de abril de 1999 de la Dirección General de los Registros y del Notariado y las resoluciones de 3 de abril y 15-2ª de diciembre de 2003; 24-1ª de abril, 17-2ª de julio, 11-5ª de octubre de 2006; 2-5ª y 10-3ª de enero de 2007; 28-10 de noviembre de 2008; 27-4ª de febrero y 13 de junio de 2009; 1-1 de febrero de 2010.

II. La madre del interesado, con poder notarial otorgado a su favor por su hijo, solicitó en el Registro Civil de Gernika-Lumo certificación de la nacionalidad española de este. La encargada del Registro Civil de Gernika-Lumo dictó providencia por la que devuelve la solicitud formulada, indicando que la nacionalidad española con valor de simple presunción debe solicitarse por el propio interesado, pudiendo únicamente solicitarla los representantes legales cuando se trate de un menor de edad o incapacitado. Esta providencia constituye el objeto del presente recurso.

III. El acuerdo segundo de la Instrucción de 14 de abril de 1999 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre certificado de nacionalidad española, indica que «el certificado hará fe salvo prueba en con-

trario de que en el día de la fecha determinada persona, identificada suficientemente por su nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, tiene la nacionalidad española», añadiéndose en el acuerdo tercero de la citada instrucción, que «el certificado expresará el lugar de su expedición y la firma, nombre y cualidad del encargado del registro civil del domicilio que lo expida, así como el sello de la oficina».

Por otra parte, en cuanto a la legitimación para solicitar la expedición de dicha certificación, se indica que, de acuerdo con la instrucción de 9 de enero de 1987 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, únicamente para las certificaciones que contengan alguno de los datos reservados enumerados en el artículo 21 del Reglamento del Registro Civil (filiación adoptiva, no matrimonial o desconocida, rectificación de sexo, causas de divorcio, etc.) se necesita autorización especial, circunstancia que no concurre en la certificación de nacionalidad española solicitada, por lo que se considera que la progenitora del interesado se encuentra legitimada para la petición de dicha certificación.

IV. Cabe apreciar una incongruencia entre lo solicitado por la Sra. B. R. y lo resuelto por el registro civil. Así, la solicitud formulada se refiere a la obtención de un certificado de la nacionalidad española de su hijo, Sr. P. B., originariamente español, inscrito en el Registro Civil Consular de España en Bruselas y poseedor de documento nacional de identidad y pasaporte español, y el registro civil resolvió sobre la base incorrecta de que la promotora había pretendido la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción a favor de su hijo conforme al artículo 17 del Código Civil.

La congruencia supone un ajuste acorde entre la parte dispositiva de la resolución y la pretensión del interesado, en tanto que en este caso se aprecia la existencia de una clara desviación entre la causa de pedir y la resolución recurrida (arts. 16 y 358.2 RRC y 218 LEC), por lo que procede la revocación de la providencia dictada por la encargada del registro civil y al propio tiempo, deberían retrotraerse las actuaciones al momento oportuno para continuar el procedimiento sobre la base de la solicitud formulada por la Sra. Baños Rodríguez. No obstante, habida cuenta del tiempo transcurrido y el objeto solicitado, procedería la expedición de la certificación solicitada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado revocar la providencia apelada y retrotraer las actuaciones al momento oportuno para continuar el procedimiento sobre la base de la solicitud de la promotora, procediendo la expedición de la certificación de nacionalidad española a favor del hijo de la reclamante, habida cuenta del tiempo transcurrido y el objeto solicitado.

Madrid, 16 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Guernika-Lumo (Bizkaia).

8.4.2 RECURSOS EN LOS QUE HA DECAÍDO EL OBJETO

Resolución de 7 de abril de 2017 (2.ª)

Recursos en los que ha decaído el objeto.—*Una vez obtenida la pretensión planteada en vía registral, no cabe resolver el recurso por haber decaído su objeto.*

En las actuaciones sobre inscripción de reconocimiento de filiación paterna remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Juzgado de Paz de Paradas (Sevilla) el 22 de enero de 2015, Doña M-E. F. M., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la inscripción de nacimiento de una menor llamada A., nacida el de 2014, alegando que la no inscrita es hija de su hijo A. M. F. y de la ciudadana rumana E. G., ambos en prisión en ese momento, quienes no habían promovido la inscripción de la niña, acogida de hecho por la promotora desde la detención de los progenitores y cuya guardia y custodia legal ya había solicitado. Aportaba la siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento, parte del facultativo que asistió al nacimiento, informe clínico de alta de la madre tras el parto, solicitud de la promotora de atribución de la guardia y custodia sobre la menor presentada el 4 de diciembre de 2014 ante el Juzgado Decano de los de Primera Instancia de Marchena, solicitud de suspensión del procedimiento en tanto se producía el nombramiento de abogado y procurador y solicitud de atribución de la guardia y custodia presentada ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Paradas.

II

Ratificada la promotora, el expediente se remitió al Registro Civil de Sevilla, competente para la inscripción, desde donde se ordenó dar audiencia a ambos progenitores. En comparecencia de 27 de mayo de 2015 ante el Registro Civil de Alcalá de Guadaíra, la Sra. E. G. declaró que la menor es hija suya y que deseaba inscribirla únicamente con el apellido G., dado que no tenía certeza acerca de la paternidad de la nacida. Don A. M. F., por su parte, comparece ante el Registro Civil de Sevilla el 17 de junio de 2015 reconociendo a la nacida como hija suya.

III

El 9 de junio de 2015 la promotora compareció ante el Registro Civil de Sevilla para manifestar que, pocas semanas después del nacimiento de su nieta, su hijo y la pareja de este fueron detenidos e ingresados en sendos centros penitenciarios, que en ese momento la Sra. G. facilitó el nombre de una hermana de la compareciente como familiar a quien entregar a su hija, lo que prueba que reconoce la paternidad de A. M. F., que desde entonces la niña se encuentra acogida por su abuela en un ambiente idóneo de estabilidad con otros familiares directos, que ya había solicitado formalmente la guardia y custodia y que le consta que la madre de la menor tiene un hijo abandonado en Rumanía y otra niña en España cuya custodia le ha sido retirada, por lo que le preocupa que la inscripción se realice solo con filiación materna y que la madre pueda llevarse a su nieta fuera de España.

IV

Previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 1 de julio de 2015 acordando la inscripción de la nacida únicamente con filiación materna por no existir matrimonio entre los progenitores y no concurrir el consentimiento de la madre en cuanto al reconocimiento paterno efectuado.

V

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando el Sr. M. F. que es el padre de la nacida, que mantuvo una relación de aproximadamente dos años con la madre, que la niña no fue inscrita en plazo por dejadez de los progenitores, que el día de la detención de ambos la menor fue entregada a la familia paterna por petición expresa de la madre y que, estando ya en prisión, la Sra. G. le remitió cartas (una de las cuales adjunta al escrito de recurso) de las que resulta claramente que reconoce la paternidad de la niña, si bien la relación entre ambos terminó deteriorándose.

VI

La interposición del recurso se notificó a la promotora de la inscripción, a la madre de la menor y al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil de Sevilla remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 13-3.^a de octubre de 2006, 25-1.^a de febrero, 1-2.^a de julio y 24-10.^a de noviembre de 2008, 11-3.^a de noviembre de 2009, 12-4.^a de marzo de 2010, 16-1.^a de febrero y 17-1.^a de mayo de 2011, 6-20.^a de julio de 2012, 4-91.^a y 96.^a de noviembre

de 2013, 20-105.^a de marzo de 2014, 3-39.^a de julio y 2-15.^a de octubre de 2015, 29-23.^a de julio y 11-43.^a de noviembre de 2016.

II. La promotora solicitó la inscripción de nacimiento, con filiación paterna atribuida a su hijo, de una menor nacida en octubre de 2014 de madre rumana alegando que la nacida no había sido inscrita en plazo, que ambos progenitores se encontraban en ese momento en prisión y que la niña estaba a cargo de la solicitante. Realizadas las audiencias pertinentes y a la vista de las declaraciones de las partes interesadas, el encargado del registro acordó la práctica de la inscripción, pero solo con filiación materna al no resultar determinada la paterna conforme a las previsiones legales, decisión que fue recurrida por quien había declarado ser el padre insistiendo en que la nacida es hija suya. No obstante, se ha podido comprobar a través de la aplicación INFOREG que la inscripción de la filiación paterna pretendida se practicó finalmente el 17 de marzo de 2016 tras la comparecencia del recurrente ante el registro el 18 de febrero anterior para reconocer nuevamente a la inscrita como hija suya, esta vez con el consentimiento de la madre. De manera que, una vez obtenida la pretensión planteada, el recurso ha perdido su objeto y procede darlo por decaído.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a la resolución del recurso presentado por haber decaído su objeto, acordándose el archivo de las actuaciones.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 7 de abril de 2017 (27.^a)

Recursos en los que ha decaído el objeto.—*Habiendo obtenido la promotora la satisfacción de su pretensión en vía registral, al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC), procede acordar el archivo de las actuaciones.*

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción marginal de adopción remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra calificación del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

El 1 de junio de 2015 don S. M. G., mayor de edad y domiciliado en Madrid, presentó en el Registro Civil Central solicitud e impreso de declaración de datos para la inscripción

en el asiento de nacimiento de doña S. G. Á., nacida en M. (Alemania) el 8 de noviembre de 1970, de marginal de adopción por el promotor y su cónyuge, doña S. Á. L., acompañando copia testimoniada del auto, dictado en fecha 4 de febrero de 2015 por el juez de primera instancia número 24 de Madrid, por el que se aprueba la adopción, copia testimoniada de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento de adoptada y adoptantes y, de estos, certificación literal de inscripción de matrimonio y sendos volantes de inscripción en el padrón de Madrid.

II

Practicada la inscripción marginal y remitida certificación literal al promotor, para su entrega a la interesada, esta presentó en el Registro Civil Central escrito solicitando que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 209 del Reglamento del Registro Civil, se rectifique la inscripción marginal de adopción, en el sentido de mantener el apellido de su padre biológico, e indicando que en la misma fecha ha presentado análogo escrito en el Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid), y por el juez encargado se tuvo por interpuesto en tiempo y forma recurso ordinario de apelación contra la inscripción efectuada.

III

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso, y el juez encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución impugnada, entendiéndose que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

IV

En el momento de examinar las actuaciones practicadas y las alegaciones formuladas ha sido conocido por este centro directivo que durante la tramitación de la apelación la promotora ha obtenido la satisfacción de su pretensión en expediente gubernativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 13-3.^a de octubre de 2006; 25-1.^a de febrero, 1-2.^a de julio y 24-10.^a de noviembre de 2008; 11-3.^a de noviembre de 2009, 26-26.^a de julio de 2011, 6-20.^a de julio de 2012, 4-122.^a de noviembre y 11-151.^a de diciembre de 2013 y 30-68.^a de marzo, 17-58.^a de abril y 28-74.^a de agosto de 2015.

II. Practicada en el asiento de nacimiento de una mayor de edad inscripción marginal de adopción con indicación de los apellidos por este hecho determinados (art. 197 RRC), la interesada presenta en el Registro Civil Central escrito solicitando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 209 RRC,

se rectifique dicha marginal, en el sentido de mantener el apellido de su padre biológico, y por el juez encargado se tiene por interpuesto recurso de apelación contra la inscripción efectuada.

III. Dado que, de resultas del escrito de igual contenido presentado simultáneamente por la interesada en el Registro Civil de Colmenar Viejo, consta practicada en su asiento de nacimiento una segunda inscripción marginal que expresa que, en virtud de resolución del encargado de 16 de diciembre de 2015, los apellidos de la inscrita serán en lo sucesivo G. Á., no resulta necesario ni pertinente examinar en esta instancia las circunstancias y los hechos concretos en los que se fundamenta la calificación del juez encargado del Registro Civil Central apelada y, obtenida por la solicitante su pretensión en vía registral, al margen del procedimiento de recurso, este ha perdido su objeto (*cf.* art. 22 LEC y 16 RRC) y procede tenerlo por decaído.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado archivar el recurso por pérdida sobrevenida de objeto.

Madrid, 7 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (24.^a)

Recursos en los que ha decaído el objeto.—*Procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida del objeto, al haber obtenido el interesado la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cf. art. 22 LEC y 16 RRC).*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

El 6 de noviembre de 2012, mediante escrito presentado en el Registro Civil de Irún (Guipuzkoa), A. M. A., nacido según declara en T. (Sahara Occidental) el 2 de febrero de 1952, solicitaba la inscripción de su nacimiento en el registro civil español por haber nacido en el Sahara cuando éste era territorio sometido a administración española. Adjuntaba como documentación, hoja declaratoria de datos en el que consta que es hijo de M. A. A.,

nacido en el Sáhara en 1919 y de T. B. M., nacida en Mauritania en 1922, casados en el Sáhara en 1946, documento nacional de identidad del promotor expedido en C. con validez hasta 2018, literal de inscripción de nacimiento del promotor y de sus progenitores en el Registro Civil del Juzgado Cheránico de Aaiún, en abril de 1970, certificado de empadronamiento en Irún desde el 18 de julio de 2012, vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social que se inicia con un periodo de 2 años en el Sáhara hasta noviembre de 1975 y en España desde 1994, testimonio de ciudadano nacido en el Sáhara en 1959, residente en España que manifiesta conocer al interesado por su convivencia en el Sáhara entre 1970 y 1975 y luego en España, libro de familia expedido por el gobierno español en el Sáhara en 1970 a los padres del promotor y en el que éste consta como el primer hijo, documento del Registro Civil de Sabadell relativo a una anterior solicitud del promotor con el mismo objeto realizada en 1993, que una vez incoado el procedimiento fue remitido con informe favorable al Registro Civil Central.

II

Ratificado el interesado, el ministerio fiscal emitió informe favorable a lo solicitado, tras lo cual el encargado remitió la documentación al Registro Civil Central competente, en su caso, para la inscripción. Posteriormente el encargado del Registro Civil Central solicita a las autoridades correspondientes información sobre la expedición del documento nacional de identidad que ha poseído el promotor, siendo la primera en 1993 y la última en el año 2008, aunque no se conserva la documentación que sirvió de base a la primera expedición.

III

El encargado del Registro Civil Central, tras informe desfavorable del ministerio fiscal, dictó auto el 4 de noviembre de 2014 denegando la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor por considerar que ésta sólo era factible si el hecho había acaecido en territorio español, no siendo el caso, o bien si el hecho afectaba a un español, no constando acreditada la nacionalidad española del interesado pese a haberle sido expedido documento de identidad español.

IV

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, éste mediante representación legal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, invocando que el interesado siempre ha tenido nacionalidad española y ninguna otra y estaba inscrito en el Registro del Sáhara por lo que se sería aplicable el artículo 18 del Código Civil, adjuntando nueva documentación, permiso de conducir español expedido en el Aaiún, documentos expedidos por Cruz Roja española sobre la formación seguida por el promotor en cursos impartidos por dicha organización, tarjeta de afiliación a la Seguridad Social expedida en 1994 y la que consta la nacionalidad española del titular, pasaporte español del promotor expedido en 1993 y válido hasta 2003, vida laboral del promotor hasta el año 2015 y documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática relativos a la procedencia saharauí del interesado y su familia y su estancia en los campamentos de refugiados desde 1976.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste informa que debe ser desestimado y el encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso. Posteriormente la representación legal del promotor presentó diversos escritos en febrero del año 2016, adjuntando documentación relativa a la solicitud que el promotor presentó en el Registro Civil de Granadilla de Abona, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), con fecha 2 de julio de 2015, para que se declare con valor de simple presunción su nacionalidad española de origen, lo que sucedió mediante auto del encargado de fecha 1 de diciembre de 2015, con base en el artículo 18 del Código Civil y remitido al Registro Civil Central para la inscripción de nacimiento del interesado.

VI

Consta a este centro directivo que, con fecha 27 de enero de 2017, el encargado del Registro Civil Central inscribió el nacimiento del Sr. M. A., haciendo constar marginalmente que el inscrito ha sido declarado español con valor de simple presunción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las Resoluciones de 13-3.^a de octubre de 2006 y 25-1.^a de febrero de 2008.

II. Se pretende por el interesado la inscripción de su nacimiento en el registro civil español por ser natural del territorio del Sahara Occidental, nacido en 1952 y por entender que siempre ha ostentado la nacionalidad española de origen. Por el encargado del Registro Civil Central se dictó auto denegando la inscripción solicitada, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Una vez dictado el auto, notificado al interesado y presentado el recurso, el Sr. M. A. instó del registro civil de su domicilio que se declarara con valor de simple presunción su nacionalidad española habida cuenta que estaba inscrito en los libros cheránicos del Registro Civil del Sáhara desde el año 1970 y había estado dotado de documentación de identidad española desde al menos 1993, siendo su única nacionalidad. El encargado del registro civil accedió a lo solicitado en diciembre del año 2015 y se procedió a instar del Registro Civil Central la inscripción de nacimiento correspondiente, accediendo este a lo solicitado, dentro de su competencia, en enero de 2017. Vista la documentación complementaria aportada al expediente y en aras del principio de economía procedimental que rige en materia registral y que obliga a evitar dilaciones o trámites superfluos o desproporcionados con la causa (*cf.* artículo 354.II RRC), procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevinida de objeto, al haber obtenido el recurrente la satisfacción de su

pretensión al margen del procedimiento de recurso (*cfr.* artículos 22 LEC y 16 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a resolver el recurso presentado, por haber decaído su objeto, y que procede acordar el archivo de las actuaciones.

Madrid, 19 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 2 de junio de 2017 (17.ª)

Recursos en los que ha decaído el objeto.—*Procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto, al haber obtenido los interesados la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).*

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

El 18 de octubre de 2006 Don J-J. J. K., nacido en la República de Corea el 29 de julio de 1949 y de nacionalidad española, obtenida por residencia con fecha 29 de mayo de 1995, compareció en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria (Las Palmas) y presentó impreso de declaración de datos para la transcripción de matrimonio civil celebrado el día 1 de abril de 1979 en la República de Corea, según la ley local, con la Sra. K. S. L., de nacionalidad coreana y nacida en la República de Corea el 12 de agosto de 1955. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de familia del registro civil local en el que constan los datos de nacimiento de los promotores y del matrimonio, declarado con fecha 8 de junio de 1979, así como también constan los datos de nacimiento de los hijos habidos y la fecha de pérdida de la nacionalidad coreana del promotor; propia, certificado de nacimiento del registro civil español del promotor, certificado de empadronamiento en Las Palmas de Gran Canaria desde el 1 de mayo de 1996, documento nacional de identidad español del promotor y de sus hijos; y, de la interesada, permiso de residencia en España como familiar de ciudadano español y pasaporte coreano. La documentación es remitida al Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción.

II

Con fecha 31 de enero de 2008 el encargado del Registro Civil Central requiere del promotor, a través del Registro Civil de Las Palmas, la aportación de certificado literal del matrimonio que se pretende inscribir, debidamente traducido y legalizado, ya que del aportado no se desprende la fecha ni el lugar de celebración del acto, sino la fecha de declaración e inscripción. Después de varios intentos el promotor es notificado en comparecencia ante el registro con fecha 12 de junio siguiente.

III

Con fecha 29 de agosto de 2008 el Sr. J. K. comparece y declara que su registro de matrimonio fue anulado en su país de origen al haber perdido la nacionalidad coreana por haber obtenido la española, aportando certificado de matrimonio de su esposa, Sra. L. P., que todavía no había sido anulado por haber obtenido la nacionalidad española recientemente, añadiendo que en la República de Corea los certificados de nacimiento no hacen referencia al lugar ni a la fecha de celebración solo a la fecha de declaración ante el registro y la situación de éste, se adjunta documento nacional de identidad español de la esposa y certificado de matrimonio de la misma expedido por las autoridades coreanas.

IV

El ministerio fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 9 de junio de 2009 el encargado del Registro Civil Central dictó auto acordando denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que el documento aportado para acreditar el hecho que se pretende inscribir no es suficiente ya que faltan datos que han de figurar en la inscripción en el registro civil español, conforme a lo establecido en el artículo 258 del Reglamento del Registro Civil.

V

Con fecha 20 de julio de 2009 se intenta la notificación personal al promotor, mediante personación del funcionario del registro en el domicilio facilitado, resultando que el destinatario de la notificación no reside allí. Consta que se produjo un error en el número de la calle al consignar la dirección. Posteriormente el Registro Civil de Las Palmas ante la imposibilidad de efectuar la notificación devuelve las actuaciones al Registro Civil Central.

VI

Con fecha 2 de febrero de 2012 el promotor presenta escrito en el Registro Civil de Las Palmas, manifestando que presentó la documentación de matrimonio y que no ha recibido resolución, solicitando que se tramite la inscripción de su matrimonio, añadiendo los datos de los cuatro miembros de la familia, todos de nacionalidad española. Posteriormente se aporta escrito del Consulado de la República de Corea en Las Palmas relativo a la forma de registrarse el matrimonio en dicho país, manifestando que la fecha de inscripción es la única y oficial a efectos legales, no siendo necesario que los cónyuges indiquen ora, fecha ni lugar, ni datos del autorizante del matrimonio. Consta también certificado de empadronamiento

actualizado en Las Palmas de Gran Canaria, certificado de nacimiento español de los hijos del matrimonio, con marginal de nacionalidad por la opción del artículo 20 del Código Civil.

VII

Con fecha 27 de marzo de 2012 en comparecencia ante el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria el promotor y la interesada son notificados de la resolución dictada e interponen recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando lo manifestado en anteriores comparecencias sobre el funcionamiento del Registro Civil Coreano.

VIII

Notificado el ministerio fiscal, éste se ratifica en la oposición a la inscripción. El encargado del Registro Civil Central informa en idéntico sentido y dispone la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Posteriormente este centro directivo solicita del Registro Civil Consular español en Seúl (República de Corea) información sobre la legislación coreana en materia de Registro Civil y el funcionamiento de éste, a fin de considerar las alegaciones formuladas por los recurrentes, dicho informe es emitido con fecha 9 de mayo de 2017 y en él se hace constar que efectivamente para el registro civil coreano la única fecha que tiene validez oficial es la que aparece en el registro como fecha de declaración, que es cuando los contrayentes firman todos los documentos de inscripción,

IX

Consta a esta Dirección General de los Registros y del Notariado que, con fecha 11 de marzo de 2014, tras la tramitación de expediente número 593/2013, ha sido inscrito por el Registro Civil Central el matrimonio civil celebrado por el Sr. J. Ji. J. K. y la Sra. K. S. L. P. en la República de Corea el 1 de abril de 1979.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las Resoluciones de 13-3.ª de octubre de 2006 y 25-1.ª de febrero de 2008.

II. Los interesados contrajeron matrimonio *lex fori* en la República de Corea en 1979 y posteriormente instaron su inscripción en el Registro Civil Central. El encargado dictó en fecha 9 de junio de 2009 auto denegatorio cuya impugnación por los interesados constituye el objeto del presente recurso. No obstante se deduce de la documentación del expediente que posteriormente se había solicitado de nuevo la inscripción ante el Registro Civil Central que procedió a inscribir el matrimonio celebrado con fecha 11 de marzo de 2014.

III. Una vez dictado el auto, notificado a los interesados y presentado el recurso, las demás actuaciones practicadas son improcedentes porque en ese momento procedimental la competencia para conocer y resolver no corresponde al registro sino a esta dirección general, que debe resolver el recurso y pronunciarse sobre la procedencia de inscribir un matrimonio, ya inscrito, y que de no estimarse obligaría a cancelar la inscripción practicada.

IV. Aun cuando podría cuestionarse la validez de la inscripción por falta de competencia funcional (*cf.* art. 225.1 LEC y 16 RRC), vista la documentación complementaria aportada al expediente y en aras del principio de economía procedimental que rige en materia registral y que obliga a evitar dilaciones o trámites superfluos o desproporcionados con la causa (*cf.* art. 354.II RRC), procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevenida de objeto, al haber obtenido el recurrente la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (*cf.* art. 22 LEC y 16 RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a resolver el recurso presentado, por haber decaído su objeto, y que procede acordar el archivo de las actuaciones.

Madrid, 2 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de julio de 2017 (18.^a)

Recursos en los que ha decaído el objeto.—*Fallecida la interesada durante la pendency del recurso, se acuerda el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 17 de junio de 2009 en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, A. A. H., ciudadana cubana, solicitaba la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento en el registro civil español en virtud de lo

dispuesto en el apartado I de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que declaró que nació el 30 de octubre de 1954 en C., S. S. (Cuba), hija de A. F. A. D., nacido en C. Á. (Cuba) en 1922 y de F. H. G., nacida en Z. M., S. S. en 1924, casados en 1978, certificación literal de nacimiento de la solicitante, se hace constar que su abuelo paterno era natural de España, carné de identidad cubano de la solicitante, certificación literal de nacimiento española de su padre, Sr. A. D., hijo de R. A. M., nacido en P. (Orense) en 1885 y de nacionalidad española y de O. J. D., de la que no consta su lugar ni fecha de nacimiento pero sí su nacionalidad portuguesa, con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 15 de septiembre de 1999 y certificado literal de matrimonio español de los padres del solicitante, inscrito en junio del año 2001.

II

Previo auto de la encargada del registro de fecha 2 de junio de 2009, se practicó la inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil consular, con fecha 4 de noviembre de 2009, con marginal de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007.

III

Revisada la documentación del expediente anterior, la encargada del registro acordó, mediante providencia, instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la inscripción practicada por considerar que había tenido acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que no resulta acreditado que el padre de la inscrita fuera español de origen al suscitarse dudas sobre la nacionalidad del padre de ésta y abuelo de la inscrita en 1922 cuando nació el padre de la solicitante, ya que en expediente de nacionalidad de una tía paterna de la Sra. A. H. constaba documento de las autoridades de inmigración y extranjería cubanas relativo a que el Sr. R. A. D., natural de Orense, hijo de B. y B., y de 30 años obtuvo carta de ciudadanía cubana el 3 de abril de 1911.

IV

Previo notificación a la interesada, mediante comparecencia en el registro civil consular e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones del ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 9 de septiembre de 2013 acordando la cancelación de la inscripción por haberse practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dado que no ha quedado acreditado que el padre de la inscrita haya sido originariamente español y, en consecuencia, no se cumplen los requisitos para la opción previstos en la Ley 52/2007.

V

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ella obtuvo la nacionalidad española porque su padre era originariamente español aunque no hubiera nacido en España, entendiéndose que esta circunstancia se había acreditado suficientemente, que ha ostentado dicha nacionalidad desde su concesión al igual que lo hizo su padre desde la recuperación de la misma en 1999, por lo que se opone a que el título de su adquisición pueda ser considerado ilegal.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones del ministerio fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto es conforme a Derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se mostró conforme con la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

VII

Posteriormente este centro directivo ante las discrepancias documentales sobre la identidad del abuelo paterno de la interesada, requirió a través del Registro Civil Consular de la Habana aclaración sobre el documento cubano de las autoridades de inmigración y extranjería que motivó el expediente de cancelación de la inscripción. Con fecha 26 de septiembre de 2016 la encargada del registro informa que tras examinar el expediente de la tía paterna de la interesada, nacida en Cuba en 1920, y los nuevos documentos de inmigración y extranjería aportados por un hermano de la interesada para un expediente idéntico y expedidos en 2016, cabe determinar que R. A. M. y R. A. D. son la misma persona, nacida en P. en 1881, que se inscribió en el Registro de Extranjeros cubano en Ciego de Ávila a los 24 años, es decir en 1905 y no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía, pero si lo estaba como R. A. D., desde el año 1911. Consta igualmente copia de la resolución 1263/2016 del Registro del Estado Civil cubano, de fecha 23 de diciembre de 2016, subsanando el error en el segundo apellido del abuelo paterno del interesado, siendo el correcto M

VIII

Consta en el expediente que en su comparecencia en el Registro Civil Consular de La Habana el día 6 de abril de 2016, el hermano de la interesada, Sr. A. A. H., comunicó que aquella había fallecido en agosto del año 2014, circunstancia que recoge la encargada del registro en su informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 4-1.^a y 21-3.^a de enero y 8-2.^a de febrero y 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 15-1.^a de noviembre de 2005; 17-4.^a de enero, 30-5.^a de junio de 2006; 21-5.^a de mayo y 7-4.^a de noviembre de 2007; 16-7.^a de mayo, 6-2.^a de junio, 16-5.^a y 7.^a de julio, 14-3.^a de octubre y 13-1.^a de noviembre de 2008; 28-4.^a de enero y 8-1.^a y 4.^a de abril de 2009.

II. La interesada, nacida en Cuba en 1954, instó en 2009 la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima, apartado 1.º, de la Ley

52/2007, por ser hija de español de origen nacido en Cuba de padre también español. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de cancelación de los asientos una vez que llegó al convencimiento de la existencia de datos de filiación contradictorios del ciudadano originariamente español en parte de la documentación aportada, que afectaban a la acreditación de la nacionalidad española originaria del progenitor.

III. La nacionalidad española del padre no podía pues servir de base para que la interesada optara a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de modo que la inscripción tuvo acceso al registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procede su cancelación, el acuerdo sobre esta constituye el objeto del presente recurso, en el momento de cuya resolución ha sido conocido por este centro directivo que después de la interposición de la apelación, con fecha 18 de septiembre de 2013, la interesada falleció.

IV. Por este hecho no se considera necesario entrar a examinar en esta instancia las circunstancias y hechos concretos en los que la encargada ha fundamentado su decisión denegatoria ya que, fallecida la interesada que declaró en su momento su voluntad de optar a la nacionalidad española y que recurrió posteriormente la cancelación de su inscripción de nacimiento, el recurso ha perdido sobrevenidamente su objeto.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado archivar el recurso interpuesto por pérdida sobrevenida de objeto.

Madrid, 28 de julio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 2 de junio de 2017 (18.^a). Recursos en los que ha decaído el objeto.

Resolución de 23 de junio de 2017 (21.^a). Recursos en los que ha decaído el objeto.

Resolución de 20 de octubre de 2017 (16.^a). Recursos en los que ha decaído el objeto.

8.4.3 VALIDEZ DE SENTENCIAS EXTRANJERAS

Resolución de 28 de abril de 2017 (8.ª)

Validez de sentencias extranjeras.—1.º *Conforme al Reglamento CE núm. 2201/2003, de 27 de noviembre, del Consejo de la Unión Europea, la sentencia de divorcio dictada el 12 de agosto de 2004 en un Estado miembro no precisa ser reconocida por procedimiento especial y es directamente inscribible si se cumplen los requisitos formales exigidos.*

2.º *No aportadas ni la sentencia de divorcio ni la certificación del anexo I del Reglamento previstas en los artículos 37 y 39, no procede acordar la práctica en la inscripción de matrimonio de la marginal de divorcio interesada.*

En las actuaciones sobre inscripción de sentencia extranjera de divorcio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la representación legal de la promotora contra providencia dictada por la juez encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Zaragoza en fecha 23 de septiembre de 2015 doña E. M. T., procuradora de los tribunales que actúa en nombre y representación de don E.-E. A. E., a su vez apoderado de su hermana doña M.-J.-Ú. A. E., solicita que en el asiento de matrimonio de esta se inscriba marginalmente sentencia de divorcio dictada por la corte del condado de Brighton (Gran Bretaña) en fecha 12 de agosto de 2004, que devino firme el 24 de septiembre de 2004, acompañando certificación literal de inscripción de matrimonio celebrado en Z. el 4 de septiembre de 1981 con el ciudadano británico S.-R. S., certificación de firmeza de la sentencia de 12 de agosto expedida el 24 de septiembre por la corte del condado de Brighton, copia simple de auto dictado en fecha 31 de julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Zaragoza, en procedimiento sobre exequátur promovido por la procuradora actuante, disponiendo inadmitir a trámite, por innecesaria, la solicitud de reconocimiento de sentencia de divorcio extranjera; y copia simple de escrituras de poder general otorgado por la promotora a su hermano y de poder para pleitos otorgado por este a la procuradora actuante.

II

El 28 de septiembre de 2015 la juez encargada dicto providencia acordando que no ha lugar a lo interesado, por cuanto no se ha presentado la sentencia de divorcio cuya anotación marginal se solicita sino únicamente certificado de firmeza de la misma, y que, a fin de cumplir los requisitos formales exigidos en los artículos 37 a 39 del Reglamento 2201/2003, de 27 de noviembre, del Consejo de la Unión Europea, la interesada deberá aportar una

copia de la sentencia de divorcio que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad y el certificado expedido por el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que figura como anexo del citado Reglamento.

III

Notificada la resolución a la procuradora, esta interpuso recurso alegando que en Gran Bretaña, donde el procedimiento es distinto que en España, las pensiones alimenticias en favor de los hijos y las cuestiones patrimoniales se deciden en instancias no judiciales y, por tanto, la sentencia se limita a decretar el divorcio solicitado y que con el documento aportado, firme, suficiente y válido a todos los efectos, el registro civil tiene información del hecho del divorcio suficiente para proceder a la inscripción y, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento europeo 2201/2003, el encargado debe dispensar la aportación de los documentos que en la providencia dictada considera necesarios.

IV

De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso, cuyas alegaciones no tienen entidad suficiente para desvirtuar el razonamiento en el que se basa la resolución impugnada, y la juez encargada informó que se debe confirmar en todos sus extremos la providencia dictada y dispuso la remisión del expediente a Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21, 22, 30 y 37 a 39, 42 y 64 del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (RCE); 107 del Código Civil (CC), 41 y siguientes de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIMC); 28 y 76 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 81 y 265 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 4 de mayo y 2-3.^a de noviembre de 2002 y 12-1.^a de noviembre de 2004.

II. La representación legal del apoderado de la promotora solicita que en la inscripción de matrimonio de esta se asiente marginalmente sentencia de divorcio dictada el 12 de agosto de 2004 por un órgano jurisdiccional del Reino Unido, país del que es nacional el contrayente y en el que reside la contrayente, y la juez encargada acuerda que no ha lugar a lo instado, por cuanto no se ha aportado la sentencia de divorcio cuya anotación marginal se solicita sino únicamente certificación de que devino firme el 24 de septiembre de 2004, y que, a fin de cumplir los requisitos formales exigidos en los artícu-

los 37 a 39 RCE núm. 2201/2003, la interesada debe aportar una copia de la sentencia de divorcio que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad y el certificado expedido por el órgano que dictó la resolución que figura como anexo del citado Reglamento. Esta providencia de 28 de septiembre de 2015 constituye el objeto del presente recurso.

III. El reglamento del Consejo de la Unión Europea arriba citado prevé el reconocimiento en un Estado miembro de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro que declaren el divorcio, separación o nulidad del matrimonio sin procedimiento alguno, bastando con que la parte que pretende el reconocimiento presente una copia de la resolución judicial que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad (art. 37 RCE) y certificado expedido por el órgano jurisdiccional que dictó la resolución conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I (art. 39 RCE).

IV. En este caso se presenta únicamente certificación de firmeza en fecha 24 de septiembre de 2004 de la sentencia dictada el 12 de agosto y en el escrito de recurso se aduce que el encargado dispone de suficiente información y, por tanto, puede dispensar la aportación de los documentos previstos en la norma. Tal alegación no desvirtúa los fundamentos jurídicos de la resolución dictada porque el encargado está específica y directamente facultado para controlar la validez y eficacia de la resolución extranjera y su conformidad con la ley española, solo a él compete en el trámite de calificación (*cf.* art. 28 LRC) determinar si puede acordar o denegar el reconocimiento e inscripción de la sentencia de divorcio extranjera sin los documentos que señala el reglamento RCE núm. 2201/2003 y, estimándolos necesarios, ha interesado su aportación en la providencia que se ha estimado oportuno recurrir y no cumplimentar.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Madrid, 28 de abril de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 24 de enero de 2017 (10.^a). Validez de sentencias extranjeras.

8.4.4 EXPEDIENTES EN GENERAL

Resolución de 17 de febrero de 2017 (80.^a)

Procedimiento y otras cuestiones-Recurso contra decisión no comprendida en el artículo 355 RRC.—*No es admisible el recurso entablado contra la devolución de actuaciones por parte de un registro consular en trámite de auxilio judicial requerido por el Registro Civil Central porque no se trata de una resolución recurrible ante la DGRN según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre declaración de opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Mediante formulario presentado el 22 de agosto de 2012 en el Registro Civil Central, Don E. D. R., mayor de edad, de nacionalidad española y residente en Z., solicitaba la inscripción en el registro civil español, previo ejercicio de la opción a la nacionalidad española, de su hijo E. D. Q., nacido en L. H. (Cuba) el 30 de noviembre de 1995. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificado de empadronamiento del promotor en Z.; DNI e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Zaragoza de E. D. R., nacido en Cuba el 11 de noviembre de 1961, con marginal de nacionalidad española por residencia mediante resolución de la DGRN de 2 de junio de 2011 practicada el 6 de septiembre del mismo año; certificación cubana de nacimiento de E. D. Q., nacido en L. H. el 30 de noviembre de 1995, hijo del promotor y de R.-C. Q. J. y certificación cubana de matrimonio de estos últimos celebrado el 14 de febrero de 1987.

II

Desde el Registro Civil Central se requirió al promotor, mediante providencia de 12 de noviembre de 2013 (reiterada el 12 de febrero de 2014 a petición del Registro Civil de Zaragoza porque en la primera no constaba el número asignado al expediente en Zaragoza), la aportación de testimonio del acta de opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.2c) de la persona cuya inscripción se había solicitado.

III

En comparecencia ante el Registro Civil de Zaragoza el 9 de abril de 2014, el promotor declara que su hijo E. D. Q. nunca ha residido en España, teniendo su domicilio en L. H. (Cuba).

IV

A la vista de la declaración anterior, el encargado del Registro Civil Central dictó providencia el 9 de mayo de 2014 remitiendo las actuaciones al Registro Civil del Consulado General de España en La Habana para que se levantara acta de opción a la nacionalidad española por parte del interesado. De dicha remisión se informó al promotor por teléfono el 16 de julio de 2014, según consta en diligencia de tramitación incorporada a las actuaciones.

V

El 9 de noviembre de 2015, la encargada del registro consular en La Habana remite oficio al Registro Civil Central devolviendo la documentación remitida y comunicando que, dado que el optante es mayor de edad y tiene su residencia en L. H., deberá presentar su solicitud de opción por sí mismo en el registro consular.

VI

Mediante providencia de 22 de enero de 2016, el encargado del Registro Civil Central devuelve la documentación original al interesado junto con el oficio recibido del Consulado General de España en La Habana.

VII

Notificado el promotor, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que cuando, con motivo del requerimiento de documentación por parte del Registro Civil Central, declaró que su hijo no residía ni había residido nunca en España, nadie le informó de que había iniciado el expediente de forma incorrecta, habiendo continuado la tramitación que desembocó finalmente en la inadmisión de la solicitud de opción por parte del consulado en La Habana, con la consecuencia de que, debido a la tardanza en la tramitación, cuando fue notificado de la inadmisión, ya había transcurrido el plazo señalado en el art. 20.2c) para solicitar la opción, por lo que considera que se ha producido indefensión, que el transcurso del plazo para optar es imputable a un error del registro y que deben retrotraerse las actuaciones al momento en que se presentó la solicitud de opción.

VIII

Al expediente se incorporó asimismo informe de la encargada del Registro Civil de Zaragoza dando cuenta de las actuaciones realizadas en dicho registro desde que se comunicó al promotor la concesión de su nacionalidad española.

IX

Trasladado el recurso al ministerio fiscal del Registro Civil Central, informó que, aunque en el momento de la solicitud de opción el interesado era aún menor de edad, ya

tenía sin embargo más de catorce años y residía en L. H., de manera que el expediente debió haberse iniciado en el registro consular, si bien el órgano informante considera que también debió haberse informado al promotor con tiempo suficiente para que su hijo hubiera podido solicitar la opción por sí mismo dentro del plazo previsto en el artículo 20.2c) del Código Civil. El encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 27, 28 y 29 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 1-3.^a de diciembre de 2008, 30-6.^a de julio de 2009, 29-20.^a de octubre y 26-2.^a de diciembre de 2012, 30-8.^a de enero y 19-14.^a de abril de 2013, 30-43.^a de enero de 2014 y 31-36.^a de julio de 2015.

II. El interesado presentó ante el Registro Civil Central una declaración de opción a la nacionalidad española para su hijo, de dieciséis años en el momento de la solicitud, en virtud del art. 20.1a) del Código Civil (CC) tras haber obtenido él mismo dicha nacionalidad por residencia. Una vez que el Registro Civil Central tuvo conocimiento de que el optante no residía en España, remitió las actuaciones al Registro Civil del Consulado General de La Habana con el fin de que se requiriera la comparecencia del interesado y se levantara acta de opción con las preceptivas manifestaciones. El registro consular devolvió las actuaciones comunicando que, siendo mayor de edad y teniendo su domicilio en Cuba, para poder tramitar la opción el interesado debía presentar la correspondiente solicitud ante el mencionado registro consular. Contra este oficio de devolución se presentó el recurso examinado.

III. La regulación propia del Registro Civil se contiene en la Ley de 8 de junio de 1957 y en su reglamento, aprobado por decreto de 14 de noviembre de 1958, cuyo artículo 16 dispone que, en las actuaciones y expedientes sujetos a dichas normas, se aplicarán supletoriamente las de jurisdicción voluntaria. Esta normativa registral específica prevé, de un lado, un recurso contra las resoluciones del encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente, recurso que se entablará en el plazo de quince días hábiles (art. 355 RRC) y, de otro, un recurso contra la calificación de los hechos inscribibles efectuada por el encargado del registro con un plazo de interposición de treinta días (art. 29 LRC). Pues bien, es evidente que el oficio de devolución de documentación del consulado de La Habana no tiene encaje legal en ninguno de los preceptos mencionados pues no pone término al expediente iniciado en el Registro Civil Central (solo devuelve las actuaciones al órgano remitente indicando cuál es el procedimiento correcto para solicitar la opción en la demarcación consular) ni el recurrente cuestiona la

calificación de los hechos, pero, sobre todo, proviene de un órgano distinto de aquél ante el que se planteó la solicitud y que era el que debía resolver en el sentido que estimara conveniente, si bien no consta en las actuaciones resolución definitiva alguna.

IV. No obstante, a la vista de la documentación disponible y las alegaciones del recurrente, conviene hacer algunas precisiones. En primer lugar, el art. 20.2 CC prevé expresamente que cuando el interesado es mayor de catorce años debe ser él mismo quien plantee la declaración de opción, aunque asistido de sus representantes legales (art. 20.2b), y que la declaración ha de formularse ante el registro civil del domicilio del declarante (art. 20.2a), de manera que la pretensión planteada por el promotor nunca habría podido llegar a buen término porque ni estaba legitimado para presentar la declaración de opción en nombre de su hijo ni el Registro Civil Central al que se dirigió era el órgano competente para tramitarla. Es cierto que, como informó el Registro Civil de Zaragoza, cuando la opción de un menor de edad se deriva de la adquisición de la nacionalidad española por residencia de alguno de sus progenitores, el mismo registro en el que se haya tramitado dicha nacionalidad (Zaragoza en este caso) mantiene la competencia para la inscripción de la opción siempre que la declaración se presente dentro de los 180 días siguientes a la notificación de la concesión de la nacionalidad española o, en su caso, a la prestación del juramento o promesa ante el encargado del registro, pero el promotor inició las actuaciones para la opción de su hijo cuando ya había transcurrido el mencionado plazo (la aceptación de la nacionalidad se produjo el 6 de septiembre de 2011 y la solicitud de opción se presentó el 22 de agosto de 2012), de manera que la competencia correspondía ya al Registro Civil Central, si el interesado hubiera residido en España, o al registro consular correspondiente en otro caso. De hecho, el promotor presentó su solicitud en el registro de su domicilio en Z. pero dirigiéndola ya al Registro Civil Central, lo que, como se ha dicho, resultó erróneo.

V. También es verdad que en el conjunto de las actuaciones se han cometido diversos errores (singularmente por parte del Registro Civil Central, que debió inadmitir la pretensión cuando tuvo conocimiento de que el interesado, además de ser mayor de edad, no residía en España, en lugar de remitir las actuaciones al registro consular) y se ha incurrido en una demora excesiva que ha podido derivar en perjuicio para el interesado. También es cierto que, tanto el Registro Civil de Zaragoza como el Central pudieron haber advertido al declarante en algún momento de la improcedencia de la pretensión en los términos en que se presentó, pero ello no exime al promotor, en cualquier caso, de conocer el contenido y alcance de las normas que invoca al plantear cualquier solicitud. Finalmente, debe decirse que en ningún momento del expediente consta la comparecencia del propio interesado, quien ya había alcanzado la mayoría de edad cuando su padre comunicó que

no residía en España, lo que, por otra parte, no hizo hasta la comparecencia de abril de 2014.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso.

Madrid, 17 de febrero de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de febrero de 2017 (11.ª)

Procedimiento y otras cuestiones.—*El hecho de que el expediente se haya promovido de oficio no es causa para prescindir de la necesaria audiencia a los interesados.*

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Mediante diligencia de la secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona fechada el 5 de mayo de 2014 se instaba al Registro Civil Central para que inscribiera, en el asiento de nacimiento del menor N. P. S., la sentencia firme dictada por el mencionado órgano judicial el 24 de marzo de 2014. Consta en el expediente la siguiente documentación: inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil del Consulado General de España en Nueva Delhi (India) de N. P. S., nacido en la India el de 2002, hijo de J. P. G., de nacionalidad española, y de R. S.S., de nacionalidad india, y sentencia de 24 de marzo de 2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona dictada en proceso de impugnación de filiación matrimonial por la que se declara que Don J. P. G. no es el padre biológico del menor N. P. S., al que, en consecuencia, no le corresponde el apellido P.

II

Una vez practicada la marginal para hacer constar la modificación de filiación y apellidos del inscrito según el fallo de la sentencia, el encargado del Registro Civil Central inició actuaciones el 17 de octubre de 2014 para proceder a la cancelación total del asiento. Previo informe favorable del ministerio fiscal, el encargado dictó auto el 12 de marzo de 2015 acordando la cancelación de la inscripción porque, una vez modificada la filiación paterna

del inscrito, no concurre ya ninguno de los presupuestos del artículo 15 de la Ley del Registro Civil para practicar la inscripción en el registro civil español.

III

Una vez conocida la cancelación, la madre del menor interesado presentó recurso alegando que reside con su familia en B. desde 2006; que tiene tres hijos, L. y N., de su primer matrimonio con un ciudadano español, y J., hija del ciudadano británico con quien está casada actualmente; que el registro no le había comunicado en ningún momento la cancelación de la inscripción de nacimiento de su hijo, habiéndose enterado de ello a través de la Policía Nacional, desde donde la llamaron, una vez dictada la resolución registral, para que entregara el pasaporte español y el DNI del menor; que la decisión tomada es un error porque el artículo 18 del Código Civil otorga a su hijo la consolidación de la nacionalidad española aunque se haya modificado la filiación y que, de hecho, se ha convertido a su hijo en apátrida vulnerando sus derechos, puesto que para las autoridades indias N. es únicamente español y no tiene otro pasaporte ni documento de viaje válido.

IV

Al expediente se incorporó (no consta si a instancia de la parte interesada o del registro) una carta remitida al Registro Civil Central por la madre del menor (actualmente Sra. R. S. M.) con fecha de entrada de 8 de septiembre de 2015 indicando que había recibido un aviso de Correos para entregarle una carta certificada del Registro Civil Central que no pudo recoger por hallarse fuera de B., por lo que, suponiendo que se trataba de la resolución por la que se había cancelado la inscripción de su hijo, solicitaba que se la enviaran nuevamente. Consta asimismo el mencionado justificante del aviso de Correos fechado el 10 de agosto de 2015 así como el justificante de devolución al registro por no haber sido retirado el certificado.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 26, 95.2.º y 97.3.º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 297, 341, 344, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 25-3.ª de mayo de 2002; 28-1.ª de diciembre de 2010; 28-7.ª de febrero de 2011; 17-18.ª de febrero de 2012; 19-1.ª de abril, 5-60.ª de junio, 5-64.ª de agosto y 8-112.ª de octubre de 2013;

27-45.^a de enero, 31-54.^a de marzo, 20-13.^a de mayo y 21-2.^a de octubre de 2013; 30-16.^a de abril, 5-25.^a y 26.^a de junio y 9-13.^a de octubre de 2015; 23-1.^a de febrero y 28-11.^a de octubre de 2016.

II. Una vez dictada sentencia por la que se modificaba la filiación de un menor inscrito en el registro civil español declarando que no es hijo del ciudadano español que hasta entonces figuraba como padre en la inscripción, el órgano judicial ante el que se había seguido el procedimiento de impugnación de la paternidad lo comunicó al Registro Civil Central para que se procediera a la inscripción pertinente en el asiento registral. Practicada la marginal rectificación de filiación y del primer apellido del inscrito, el encargado del registro inició expediente para cancelar totalmente el asiento a la vista de que la madre es extranjera y el menor no nació en España, por lo que el hecho de su nacimiento no es inscribible en el registro civil español. Previo informe favorable del ministerio fiscal, se dictó auto acordando la cancelación. La madre del menor, una vez conocida dicha cancelación, presentó recurso alegando que el registro no le había notificado la resolución y que, además, la decisión es errónea porque el artículo 18 del Código Civil permite mantener la nacionalidad en este caso y porque se han vulnerado derechos esenciales de su hijo al dejarlo en situación de apatridia, dado que hasta entonces solo tenía nacionalidad española.

III. Al registro civil español solo tienen acceso los hechos inscribibles que afectan a los españoles y los acaecidos en territorio español (art. 15 LRC). La inscripción de nacimiento del menor interesado en este caso, nacido en el extranjero de madre también extranjera, se basó en su nacionalidad española de origen al ser hijo de un ciudadano español. Años después, sin embargo, dicha paternidad se impugnó judicialmente, quedando determinado que tal hecho no era cierto, con lo que desapareció la causa de atribución de la nacionalidad al inscrito. Por otra parte, el principio básico de la legislación del registro civil de procurar la debida concordancia entre el registro y la realidad (*cf.* arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) implica que puede iniciarse de oficio un expediente con el fin de lograr esa pretendida concordancia.

Pero, dicho lo anterior, obviamente han de cumplirse rigurosamente todos los trámites esenciales del procedimiento, pues el hecho de que el expediente se inicie de oficio no implica que pueda prescindirse de ellos, siendo especialmente relevante el referido a la preceptiva audiencia a los interesados (art. 349 RRC) que aquí se ha omitido completamente. No consta en las actuaciones que en ningún momento se pusiera en conocimiento de la representante legal del inscrito la existencia de un expediente de cancelación en curso, de manera que no pudieron presentarse alegaciones, lo que en este caso cobra especial importancia en tanto que la recurrente, como ella misma indica en su escrito, podría haber solicitado, antes de que se cancelara la inscripción, la consolidación de la nacionalidad española del menor basada en los presupuestos del artículo 18 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
- 2.º Retrotraer las actuaciones al momento en que debió comunicarse a la interesada la incoación del expediente de cancelación abriendo plazo de alegaciones.

Madrid, 24 de febrero de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 12 de mayo de 2017 (40.ª)

Procedimiento y otras cuestiones.—*No es admisible el recurso entablado contra providencia por la que se acuerda dejar en suspenso la conversión de una anotación soporte en inscripción definitiva de nacimiento mientras se solicita y obtiene un informe de otro registro civil porque no se trata de una resolución recurrible ante la DGRN según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.*

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra resolución del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado el 15 de noviembre de 2012 en el Registro Civil de San Sebastián de La Gomera, Don H. M. S. H., mayor de edad y de nacionalidad española, solicitó la conversión en inscripción de nacimiento definitiva de la anotación soporte de su nacionalidad española con valor de simple presunción practicada en el Registro Civil Central. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento, cuestionario de declaración de datos para la inscripción, anotación soporte practicada en el Registro Civil Central el 17 de junio de 2011 relativa al promotor, hijo de M. y de F., nacido en B. (Sáhara) el 3 de febrero de 1976, seguida de anotación de nacionalidad española con valor de simple presunción declarada por resolución de 10 de marzo de 2010 del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet y certificado de paternidad expedido por autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y legalizado por autoridades argelinas y españolas según el cual M. S. H., nacido el 2 de febrero de 1943 en W. S., y F. M. B., nacida en 1951 en A., son los padres legítimos de H. M. S. H., nacido el 3 de febrero de 1976 en B.

II

Practicada prueba testifical y publicado edicto, el expediente se remitió al Registro Civil Central con informes favorables del ministerio fiscal y de la encargada del registro del domicilio del promotor. Puestas las actuaciones en conocimiento del ministerio fiscal en el registro de destino, este órgano emitió informe el 3 de abril de 2014 oponiéndose a la inscripción solicitada e interesando la incoación de expediente de cancelación de las anotaciones realizadas por considerar que al interesado no le corresponde la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

III

El encargado del Registro Civil Central dictó providencia el 11 de abril de 2014 acordando dejar en suspenso la práctica de la inscripción de nacimiento solicitada hasta que el Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet comunicara si iniciaba o no expediente para declarar con valor de simple presunción que al interesado no le corresponde la nacionalidad española. Con la misma fecha se dirigió oficio al Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet notificando el contenido del informe del ministerio fiscal y solicitando a dicho registro que notificara a su vez al interesado la providencia del encargado.

IV

Notificada la providencia al promotor, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, antes de suspender el procedimiento, se le debió haber dado audiencia y plazo de alegaciones en relación con el informe del ministerio fiscal que interesaba el inicio de expediente de cancelación de la anotación de nacionalidad.

V

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en la decisión recurrida y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 27 y 29 de la Ley del Registro Civil (LRC); 16, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 1-3.^a de diciembre de 2008, 30-6.^a de julio de 2009, 29-20.^a de octubre y 26-2.^a de diciembre de 2012, 19-14.^a de abril de 2013 y 30-43.^a de enero de 2014.

II. El interesado, a quien se le había declarado la nacionalidad española con valor de simple presunción en 2010 en el Registro Civil de Santa Coloma

de Gramanet, solicitó la conversión de la anotación soporte de dicha declaración que se practicó en el Registro Civil Central en inscripción de nacimiento definitiva. El encargado del registro, previo informe desfavorable del ministerio fiscal en el que, además, se instaba la tramitación de otro procedimiento para cancelar todas las anotaciones relativas al interesado, acordó dejar en suspenso la práctica del asiento pretendido hasta que el Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet, al que seguidamente se remitió solicitud al respecto, hubiera comunicado al Central si, a la vista del informe emitido por el ministerio fiscal, iba a iniciar o no un expediente para declarar que al promotor no le correspondía la nacionalidad con valor de simple presunción. Contra dicha providencia de suspensión se presentó el recurso examinado.

III. La normativa registral prevé, de un lado, un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) contra las resoluciones del encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente que se entablará en el plazo de quince días hábiles (art. 355 RRC) y, de otro, un recurso contra la calificación de los hechos inscribibles efectuada por el encargado del registro con un plazo de interposición de treinta días (art. 29 LRC). Contra las decisiones no comprendidas en los artículos citados solo cabe recurso de reposición (art. 356, párrafo segundo, RRC). Aun cuando en este caso se comunicó al promotor que cabía interponer recurso ante la DGRN, lo cierto es que la providencia dictada no tiene encaje legal en ninguno de los supuestos descritos, ya que únicamente se difería la decisión sobre la práctica de la inscripción solicitada al momento en que otro registro civil remitiera cierta información relativa a un procedimiento distinto instado por el ministerio fiscal al tiempo de emitir informe sobre la petición principal. De hecho, consta en la documentación remitida una providencia del encargado de 10 de noviembre de 2016 acordando la reanudación de las actuaciones y un nuevo informe del ministerio fiscal fechado el 13 de febrero de 2017, si bien aún no ha recaído resolución definitiva. Por ello, aun sin entrar en el fondo del asunto e independientemente del curso que pueda darse al procedimiento distinto de cancelación de anotaciones interesado por el ministerio fiscal, dado el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud, sí cabe incidir en la conveniencia de resolver cuanto antes sobre la petición concreta objeto de este expediente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso, debiendo retrotraerse las actuaciones para que el encargado del Registro Civil Central resuelva acerca de la procedencia o no de practicar el asiento interesado.

Madrid, 12 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 15 de septiembre de 2017 (32.^a)

Procedimiento y otras cuestiones.—*Se retrotraen las actuaciones para que se cite al interesado, se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española y se dicte la resolución que en derecho proceda.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

HECHOS

I

Con fecha 7 de octubre de 2009, la Embajada de España en La Paz (Bolivia) trasladó el expediente correspondiente a Don J. M. D. P., nacido el 2 de noviembre de 1930 en L., D., La Coruña, al Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) al no haber comparecido el interesado en dicha embajada para proceder a la firma del acta de recuperación de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 26 del Código Civil y resultar competente para su resolución. Se indica que el expediente del interesado se inició en la sección consular de la Embajada de España en la Paz antes de la apertura del Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra.

Aportaba, entre otros, la siguiente documentación: certificación manuscrita de bautismo del promotor, celebrado el 3 de noviembre de 1930, expedida por el sacerdote encargado de la parroquia de S. M. D., Diócesis de S. C., La Coruña; copia del certificado de buena conducta del solicitante, emitido por la Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña en diciembre de 1954; copia del permiso español de conducir del solicitante, emitido en La Coruña el 18 de agosto de 1954; copia del certificado negativo de antecedentes penales, emitido por el Ministerio de Justicia español en diciembre de 1954; certificado emitido por el Registro Civil de Vilarmajora (La Coruña), en el que se indica que no pueden emitirse partidas o actas de nacimiento de datos anteriores a 9 de mayo de 1948, fecha en que ardió el citado juzgado; copia del billete de pasaje de emigrante del promotor con salida del puerto de Vigo en fecha 14 de enero de 1955 y certificado expedido por el encargado del Registro Civil de Villarmayor (La Coruña) de fecha 4 de enero de 1955, en relación con la residencia en la parroquia de D. del promotor y su estado civil de soltero;

II

Con fecha 15 de marzo de 2010, el encargado del Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dicta auto por el que se desestima la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española del interesado, toda vez que el peticionario no atendió a los requerimientos que le fueron efectuados para firmar el acta de recuperación de la nacionalidad española, sin aducir ningún motivo de excusa.

III

Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que no pudo acudir a la citación efectuada por el Consulado de España en Santa Cruz de la Sierra para el día 25 de febrero de 2010, por encontrarse bloqueada la ruta, situación ajena a su voluntad.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste emite informe favorable a las pretensiones del reclamante, toda vez que el promotor muestra su voluntad de recuperar su nacionalidad española y ha justificado su no presencia para la firma del acta de recuperación de la nacionalidad española, y el encargado del Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe favorable expresado en los mismos términos que el órgano en funcione de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil; 2, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 4-2.^a, 21-4.^a y 27-2.^a y 3.^a de enero, 4-1.^a de febrero, 1-1.^a, 18-3.^a y 5.^a de marzo, 4-3.^a, 15-1.^a y 2.^a y 19-2.^a de abril, 10-1.^a de mayo, 17-1.^a de junio de 2003; 21-1.^a de abril de 2004; 24-1.^a de mayo de 2005; y 9-2.^a de febrero de 2006.

II. El interesado, nacido el 2 de noviembre de 1930 en L., D., La Coruña (España) solicitó la recuperación de su nacionalidad española de origen ante la sección consular de la Embajada de España en La Paz (Bolivia), expediente que fue trasladado al Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), por resultar competente para su resolución.

Por auto de fecha 15 de marzo de 2010, el encargado del Registro Civil Consular de España en Santa Cruz de la Sierra desestima la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española del interesado, toda vez que citado el peticionario para la firma del acta de recuperación de la nacionalidad española, no atendió al requerimiento que le fue efectuado sin aducir motivo alguno. Frente a dicho auto se interpone recurso por el interesado, que es el objeto del presente expediente.

III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del vigente Código Civil, quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: «Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales».

IV. Según los informes emitidos por el órgano en funciones de ministerio fiscal y el encargado del registro civil consular, a la vista de las pruebas documentales aportadas en fase de solicitud y recurso, el interesado muestra su voluntad de recuperar la nacionalidad española y, para ello, de presentarse en dicho registro, cuando así le sea requerido para la firma del acta de recuperación de la nacionalidad española, habiendo justificado la imposibilidad de atender al requerimiento que le fue formulado por causas ajenas a su voluntad.

Por lo tanto, procede retrotraer las actuaciones para que se cite de nuevo al promotor a efectos de la firma del acta de recuperación de la nacionalidad española y se dicte la resolución que en derecho proceda.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto la resolución recurrida y retrotraer las actuaciones para que tenga lugar la citación al interesado y el levantamiento del acta de recuperación de la nacionalidad española, dictándose por el registro civil consular la resolución que en derecho proceda.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Resolución de 6 de octubre de 2017 (23.^a)

Procedimiento y otras cuestiones.—*No cabe admitir un recurso cuando no hay constancia de la pretensión planteada inicialmente, que constituye su objeto.*

En las actuaciones sobre declaración de renuncia a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución del encargado del Registro Civil de Majadahonda (Madrid).

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado el 8 de agosto de 2013 en el Registro Civil de Majadahonda (Madrid), Doña M. T. O. G., mayor de edad y de nacionalidad española y ecuatoriana, declaraba que había sido nombrada por el Gobierno de Ecuador para desempeñar un cargo oficial que le exigía renunciar a la nacionalidad española adquirida por residencia, por lo que solicitaba la inscripción de la pérdida de dicha nacionalidad por renuncia. Aportaba la siguiente documentación: DNI, acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador, fechado el 25 de junio de 2010, por el

que se nombra a la interesada ministra del Servicio Exterior para desempeñar sus funciones en la embajada de Ecuador en España, pasaporte diplomático ecuatoriano, pasaporte español e inscripción de nacimiento de la promotora, nacida el 10 de marzo de 1961 en Chile, practicada en el Registro Civil de Majadahonda con marginal de 13 de noviembre de 2012 de adquisición de nacionalidad española por residencia, mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de junio de 2012, sin renunciar a su nacionalidad anterior.

II

Ratificada la promotora y previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 5 de febrero de 2014 inadmitiendo la petición y declarando el archivo de las actuaciones porque la interesada reside en España y el artículo 24.2 del Código Civil solo prevé la renuncia para quien, además de ostentar otra nacionalidad, resida habitualmente en el extranjero. Además, el encargado considera relevante el hecho de que la promotora adquirió la nacionalidad por residencia el 13 de noviembre de 2012, mientras que el nombramiento de las autoridades ecuatorianas se produjo en junio de 2010.

III

El 7 de octubre de 2014 el secretario judicial extiende una diligencia para hacer constar la recepción de un escrito de la promotora (no incorporado al expediente y cuyo contenido no se detalla), procediéndose a su devolución a la remitente haciendo referencia a la resolución del encargado de 5 de febrero de 2014.

IV

El 5 de noviembre de 2014 la interesada presentó un escrito solicitando la nulidad de la diligencia anterior y la incoación de un nuevo expediente sobre declaración de renuncia a la nacionalidad española alegando que la devolución de un escrito que contiene la pretensión de una ciudadana ante el registro no es una resolución idónea, debiendo ser el encargado quien, fundadamente y con expresión del recurso que proceda y plazo para interponerlo, rechace o admita la petición planteada.

V

El encargado del registro dictó providencia el 7 de noviembre de 2014 declarando que no cabe recurso contra una diligencia de constancia y que el expediente de renuncia a la nacionalidad española promovido en su día había concluido con auto de 5 de febrero de 2014 que no fue recurrido y adquirió firmeza. Todo ello sin perjuicio de que la interesada pueda instar un nuevo expediente si concurren los requisitos pertinentes.

VI

Notificada la resolución anterior, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando la recurrente que, una vez desestimada su

pretensión inicial por medio de auto de 5 de febrero de 2014, instó un nuevo expediente de pérdida de nacionalidad por renuncia mediante solicitud fechada el 23 de mayo de 2014, registrada en el decanato el 3 de octubre siguiente y que tuvo entrada en el Registro Civil de Majadahonda el 6 de octubre de 2014; que lo que se recurre no es el auto de 5 de febrero de 2014 sino la inadmisión a trámite de una nueva solicitud, si bien, subsidiariamente a la pretensión de nulidad de la providencia de 7 de noviembre, también se pide la revocación del mencionado auto porque la promotora cumple todos los requisitos del artículo 24.2 del Código Civil, dado que, por analogía, del artículo 40 de ese mismo texto legal se desprende que los diplomáticos extranjeros destinados en misión en España no son considerados residentes, al igual que los diplomáticos españoles en misión en el extranjero conservan su domicilio en España.

VII

La DGRN comunicó al registro la interposición del recurso para su notificación al ministerio fiscal solicitando al mismo tiempo la incorporación a las actuaciones, bien por parte del propio registro o bien, si allí no constara, mediante requerimiento a la interesada, de la solicitud presentada en el decanato el 3 de octubre de 2014 a la que hace referencia el escrito de recurso.

VIII

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Majadahonda remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 348 a 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. La interesada solicitó en 2013 la inscripción de su renuncia a la nacionalidad española que había obtenido por residencia en 2012, pretensión denegada por auto del encargado del registro de 5 de febrero de 2014 que no fue recurrido. Según sus alegaciones, el 3 de octubre siguiente presentó una nueva solicitud de inicio de expediente de pérdida de nacionalidad por renuncia que fue rechazada por el secretario judicial, quien devolvió el escrito a la interesada el 7 de octubre de 2014 dejando constancia únicamente de ese hecho pero no del contenido del escrito recibido. La interesada reclamó entonces la nulidad de dicha diligencia y la admisión de su nueva solicitud alegando que debía ser el encargado del registro y no el secretario quien, fundadamente, rechazara o admitiera su pretensión. El encargado rechazó mediante providencia tales alegaciones considerando que contra una diligencia de constancia no cabe recurso alguno y que el expediente de renuncia había finalizado con el auto de 5 de febrero, ya firme, por lo que tampoco era recurrible, sin perjui-

cio de que la promotora instara el inicio de un nuevo expediente. Contra esta resolución se presentó el recurso ahora objeto de estudio, en el que la recurrente alega que, precisamente, lo que ella había solicitado en el escrito rechazado por el secretario era la tramitación de un nuevo expediente, por lo que insta al encargado a iniciarlo. Lo cierto, sin embargo, es que no figura en las actuaciones el escrito supuestamente presentado el 3 de octubre de 2014, pues ni el secretario archivó copia alguna ni la propia interesada lo adjunta tampoco a su escrito de recurso. Este centro ha requerido a las partes la incorporación al expediente del citado documento en dos ocasiones, ambas con resultado infructuoso, por lo que, faltando el documento esencial sobre el que se plantea el objeto del recurso, no es posible proceder a su resolución.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso interpuesto.

Madrid, 6 de octubre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Majadahonda (Madrid).

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (33.ª)

Procedimiento y otras cuestiones.—*Se retrotraen las actuaciones a fin de que sea valorada la documentación aportada y se dicte la resolución que corresponda en el expediente de opción a la nacionalidad española de origen formulado por la interesada en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.*

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

I

Con fecha 17 de diciembre de 2014, en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la que D.ª. L. M. M., nacida el 6 de octubre de 1938 en N., C. (Cuba), declara ser hija de Don F.-A. M. C., nacido el 26 de febrero de 1911 en M. (Cuba), originariamente español, quien ostentaba su nacionalidad española al momento del nacimiento de la solicitante, que es su voluntad

recuperar la nacionalidad española no renunciando a su anterior nacionalidad cubana, al amparo de lo establecido en el artículo 26 del Código Civil.

Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad cubano de la promotora; certificado literal cubano de nacimiento de la interesada y certificado literal cubano de su progenitor.

II

Con fecha 30 de diciembre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), dicta auto por el que se desestima la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española de la interesada, toda vez que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, ya que no ha quedado establecido que la solicitante haya ostentado la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.

III

Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que nunca solicitó la recuperación de la nacionalidad española, sino la opción a la nacionalidad española de origen, en virtud de lo establecido en la ley 52/2007, en base a ser nieta de abuelo español, obteniendo cita el Consulado General de España en La Habana el 13 de julio de 2011 y siendo requerida para que completase la documentación aportada. Indica que, una vez reunida la documentación solicitada, obtuvo nueva cita para el día 17 de diciembre de 2014, recogiendo la funcionaria que la atendió únicamente su inscripción de nacimiento y la de su padre y preguntándole si dicha documentación era para obtener la nacionalidad española, considerando que ha habido una confusión en relación con su solicitud.

Aporta como documentación: resguardo de cita consular de fecha 13 de julio de 2011 para opción a la nacionalidad española; certificado literal cubano de nacimiento de la solicitante; certificado literal cubano de nacimiento del padre de la interesada; certificado español de bautismo del abuelo paterno de la promotora, Don F. M. D., nacido el 8 de marzo de 1882 en G., S. C. T.; certificado negativo de inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Güimar del abuelo paterno; certificado español de matrimonio canónico de los abuelos paternos del solicitante, celebrado en la parroquia de San Pedro Apóstol de G. el 4 de noviembre de 1908; certificados cubanos de entrada en Cuba en fecha 2 de febrero de 1910 procedente de T. y de inmigración y extranjería del abuelo paterno.

IV

Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que la solicitante nunca ha ostentado la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido, premisa exigida por el artículo 26 del Código Civil vigente para su recuperación.

V

Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita información al Registro Civil Consular de España en La Habana en relación con las afirmaciones de la interesada en su escrito de recurso, en el que manifestaba que nunca quiso recuperar la nacionalidad española sino optar por la nacionalidad española de origen, en virtud de lo establecido en la ley 52/2007.

Atendiendo a lo solicitado, el cónsul general adjunto del Registro Civil Consular de España en La Habana, informa que efectivamente la interesada presentó solicitud de opción a la nacionalidad española de origen el 13 de julio de 2011, cuyo expediente se encuentra pendiente de la documentación que ampara la solicitud formulada, que le fue requerida el día de su cita y, que revisados los controles correspondientes al registro general de entrada, no consta que la solicitante haya aportado los documentos que le fueron requeridos, por lo que el citado expediente de opción aún se encuentra pendiente de la aportación de la documentación justificativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95, 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 147, 341, 344, 335, 338, 340, 346 y 349 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción y las resoluciones, entre otras, de 16 de Septiembre de 1997, 4-2.^a de Septiembre de 2003, 16-3.^a de septiembre de 2005, 27-4.^a de diciembre de 2006, 3-5.^a de enero de 2007 y 29-2.^a de febrero de 2008; 9-5.^a y 12-4.^a de Enero, 1-3.^a de Abril y 16-5.^a de Junio de 2009; 1-2.^a de Febrero de 2010.

II. La interesada, nacida en Cuba en 1938 formuló con fecha 13 de julio de 2011 en el Registro Civil Consular de España en La Habana, solicitud de opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, no acompañando los documentos justificativos exigidos, por lo que en dicha fecha le fue requerida por el registro civil consular la documentación que ampara la solicitud formulada. Personada la solicitante en las dependencias del registro civil consular en fecha 17 de diciembre de 2014, acompañando la documentación solicitada, por error, se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española que es firmada por la misma, siendo desestimada por auto de fecha 30 de diciembre de 2014 dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, al no haber quedado establecido que la misma haya ostentado desde su nacimiento la nacionalidad española, premisa esta última exigida por el artículo 26 del Código Civil para acceder a su recuperación.

III. Interpuesto recurso por la interesada, alegado que nunca fue su intención recuperar la nacionalidad española sino optar a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007, considerando que se había producido un error en la consideración de su solicitud y acompañando al recurso copia de la documentación que le había sido requerida por el registro civil consular.

Solicitada información al Registro Civil Consular de España en La Habana, confirman que la solicitante formuló solicitud de opción a la nacionalidad española de origen el 13 de julio de 2011, siendo requerida en dicha fecha a fin de que completara la documentación aportada y que dicha solicitud se encuentra pendiente de las actuaciones correspondientes, dado que no les consta que la solicitante hubiese aportado los documentos requeridos en su día.

Por lo tanto, procede retrotraer las actuaciones a fin de que sea valorada la documentación aportada por la interesada en el expediente de opción a la nacionalidad española de origen, en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, resolviendo el encargado del Registro Civil en el sentido que proceda.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto la resolución recurrida y retrotraer las actuaciones a fin de que se valore la documentación aportada por la interesada en expediente de opción a la nacionalidad española de origen y se dicte por el encargado del registro civil la resolución que en derecho proceda.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (28.^a)

Procedimiento y otras cuestiones. Acta de opción.—*Se retrotraen las actuaciones para que se proceda a levantar el acta de opción a la interesada, en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.c) CC y se realice la declaración establecida en el artículo 23 CC.*

En el expediente de opción a la nacionalidad española, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo citado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Con fecha 17 de agosto de 2015, D.^a M.-E. M. M., nacida el 15 de septiembre de 1970 en J. (República Dominicana), de nacionalidad dominicana y española, adquirida esta última por residencia, presenta solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Código Civil a favor de su hija, D.^a S.-M. B. M., nacida el 13 de noviembre de 1997 en B. (República Dominicana).

Acompaña la siguiente documentación: acta en extracto de nacimiento de la interesada apostillada, expedida por la Junta Central Electoral de la República Dominicana; poder notarial apostillado otorgado por el padre de la interesada, Don C.-A. B. C., de nacionalidad dominicana, a favor de la Sra. M. M. para solicitar la nacionalidad española de su hija; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento de la madre de la optante, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia con efectos de 25 de julio de 2013; pasaporte dominicano, de la optante con visado de familiar ciudadano de la UE y certificado de empadronamiento colectivo, expedido por el Ayuntamiento de Madrid, en el que se incluye a la optante y a su progenitora.

II

Por providencia de fecha 27 de octubre de 2015 dictada por el encargado del Registro Civil Central, se interesa de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, se aporte testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad de la progenitora, en los particulares que han alusión a su estado civil e hijos habidos.

Atendiendo a lo solicitado, se remite copia de la solicitud de nacionalidad española por residencia formulada por la madre de la optante, fechada el 4 de marzo de 2011, en la que menciona la existencia de dos hijas menores de edad, nacidas ambas en B. (República Dominicana), citando expresamente a la optante, nacida el 13 de noviembre de 1997 y a J.-I. M. M., nacida el 10 de abril de 2007.

III

Por acuerdo de fecha 11 de marzo de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil Central, se desestima la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de la interesada, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española, surta los efectos que corresponda, toda vez que la promotora, D.^a M.-E. M. M., en el expediente seguido para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, manifestó en fecha 4 de marzo de 2011, mediante escrito ante el encargado del Registro Civil, que no tenía hijos menores de edad, sin hacer mención a la que ahora opta, que entonces era menor de edad.

IV

Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción alegando que en el expediente de nacionalidad española por residencia de su madre,

ésta citó a sus dos hijas menores, S.-M. B. M. y Y.-I. M. M., mostrando a la funcionaria que recogió su solicitud, la partida de nacimiento de ambas. Asimismo, su madre su requerida en Comisaría, dentro del proceso de nacionalidad por residencia, a fin de que indicara el nombre y edades de sus hijas menores y que se ha reconocido a ambas hermanas la tarjeta de residencia y la de seguridad social.

Aporta la siguiente documentación: actas inextensas de nacimiento, expedidas por la República Dominicana de la interesada y de su hermana menor; documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario, tarjeta sanitaria y pasaporte dominicano con visado estados Schengen de la interesada y dictamen sobre prueba biológica de maternidad de la optante.

V

Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo al no haber quedado sus razonamientos jurídicos desvirtuados por las alegaciones del recurrente y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 y 23 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 24-2.^a de octubre de 2005; 26-2.^a de junio de 2006; 29-2.^a de noviembre de 2007; 27-6.^a de mayo, 2-6.^a de julio y 14-2.^a de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (*cf.* art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, L.R.C.) y siempre que el registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, R.R.C.).

III. En este caso, la madre de la interesada, de nacionalidad dominicana y española, adquirida esta última por residencia con efectos de 25 de julio de 2013, formuló con fecha 17 de agosto de 2015 solicitud de opción a la nacionalidad española en nombre de su hija, nacida el 13 de noviembre de 1997, quien en ese momento tenía 17 años, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.b) del Código Civil, la solicitud de opción debería haberse formulado por la propia interesada, asistida por su representante legal, al ser mayor de catorce años, siendo requisito para la validez de la adquisición de la

nacionalidad española por opción, en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Código Civil «que el mayor de catorce años y capaz de prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes», no constando en el expediente el acta de opción a la nacionalidad española formulada por la solicitante.

IV. Por otra parte, en el razonamiento jurídico segundo de la resolución impugnada, se cita que la progenitora de la optante en el expediente seguido para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, manifestó con fecha 4 de marzo de 2011 mediante escrito dirigido al encargado del Registro Civil, que no tenía hijos menores de edad, sin haber mención a la que ahora opta, que entonces era menor de edad, argumento que justifica la imposibilidad de la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de la interesada.

Sin embargo, consta en el expediente, copia de solicitud de nacionalidad española por residencia de la madre de la interesada, fechada el 4 de marzo de 2011, en la que menciona expresamente a la interesada, nacida el 13 de noviembre de 1997 en Barahona (República Dominicana) como hija menor de edad, así como a otra hija menor, nacida igualmente en Barahona (República Dominicana) el 10 de abril de 2007, de nombre Y.-I.

Por lo tanto, procede retrotraer las actuaciones para que se cite a la interesada y se proceda a levantar el acta de opción a la nacionalidad española de la misma con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil, resolviendo el encargado del Registro Civil en el sentido que proceda.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto la resolución recurrida y retrotraer las actuaciones para que se levante el acta de opción a la nacionalidad española con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (37.^a)

Procedimiento y otras cuestiones. Opción a la nacionalidad española.—*En los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. La vía adecuada para ello es la presentación de una nueva solicitud en el Registro Civil competente ante el que han de acreditarse esos hechos nuevos.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz (Madrid).

HECHOS

I

Mediante comparecencia en el Registro Civil de Torrejón de Ardoz el 2 de junio de 2011, R.-O. N. B. de 15 años, de nacionalidad ecuatoguineana y acompañado de sus padres, R. N. A. y E.-I. B. O., declaraba su voluntad de optar a la nacionalidad española con base en el artículo 20 del Código Civil, como hijo de ciudadanos naturalizados españoles. Aportaba la siguiente documentación: certificado de empadronamiento en T. A. con fecha de último alta el 14 de octubre de 2003, pasaporte ecuatoguineano del optante, nacido en B. (Guinea Ecuatorial) el 30 de diciembre de 1995, permiso de residencia en España como familiar de un ciudadano de la Unión, válida hasta junio del año 2011, inscripción de nacimiento en el registro civil español de la madre del optante Sra. B. O., nacida en Guinea Ecuatorial el 24 de noviembre de 1977, con marginal de nacionalidad española por residencia con fecha 10 de julio de 2007, y documento nacional de identidad de la precitada y del Sr. N. A. En la misma fecha el registro civil requiere del interesado la aportación del certificado de nacimiento propio, en el que consta que fue inscrito fuera del plazo legal en virtud de expediente, tramitado y aprobado por el Juzgado de 1.ª Instancia de B., por auto de 17 de noviembre de 2008, 13 años después de su nacimiento y un año después de la naturalización de la madre del interesado.

II

Con fecha 30 de agosto de 2011, el ministerio fiscal informa que en el peticionario concurren los requisitos de artículo 20 apartados 1 y 2 y por tanto no se opone a lo solicitado. Posteriormente, con fecha 3 de enero de 2013, el padre del menor optante solicita del Registro Civil de Torrejón el documento de nacimiento local del precitado para su aportación al Registro Civil Central para la inscripción de nacimiento.

III

Consta en el expediente, por documentación solicitada por esta Dirección General de los Registros y del Notariado, que con fecha 26 de noviembre de 2012, el menor R.-O. N. B. solicita ante el Registro Civil Central la inscripción de su nacimiento previa opción a la nacionalidad española, adjuntando hoja declaratoria de datos y, con fecha 8 de enero de 2013, el precitado registro inicia expediente que concluye con resolución denegatoria de fecha 5 de noviembre de 2014, que es recurrida en apelación ante esta dirección general, que con fecha 26 de junio de 2015, desestima el recurso y confirma la resolución impugnada.

IV

Posteriormente el Registro Civil Central notifica, a través del Registro Civil de Torrejón de Ardoz, la resolución dictada respecto a su recurso. Con fecha 24 de septiembre de 2015, el encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz dictó auto acordando el archivo de las actuaciones que se habían seguido en el mismo habida cuenta que sobre idéntica pretensión había ya resuelto el Registro Civil Central y, en vía de recurso administrativo, la Dirección General de los Registros y del Notariado

V

Notificada la resolución al ministerio fiscal y al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando lo que ya había alegado en el recurso de apelación que ya había sido resuelto y solicitando que sin necesidad de iniciar nuevo procedimiento se tenga por solicitada la nacionalidad española por residencia, con base en el artículo 22.1 del Código Civil.

VI

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación del auto apelado, ya que no procede la transformación del procedimiento en un expediente de nacionalidad por residencia al no ser homogéneos, sin perjuicio de que puedan conservarse aquellos documentos que puedan servir al nuevo expediente. El encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 4-1.^a y 21-3.^a de enero y 8-2.^a de febrero y 24-2.^a, 24-3.^a de abril de 2003; 2-1.^a de septiembre de 2004; 15-1.^a de noviembre de 2005; 17-4.^a de enero, 30-5.^a de junio de 2006; 21-5.^a de mayo y 7-4.^a de noviembre de 2007; 16-7.^a de mayo, 6-2.^a de junio, 16-5.^a y 7.^a de julio, 14-3.^a de octubre y 13-1.^a de noviembre de 2008; 28-4.^a de enero y 8-1.^a y 4.^a de abril de 2009.

II. El optante, asistido por sus representantes legales, solicitó el reconocimiento de su nacionalidad española basándose en su filiación materna respecto de una ciudadana originariamente ecuatoguineana que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2007, lo que justificaría el ejercicio del derecho de opción del art. 20.1a) CC. Sin esperar a la resolución sobre la citada petición el interesado reprodujo su petición ante el Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción de nacimiento correspondiente, que denegó dicha inscripción previa opción de nacionalidad con fecha 5 de

noviembre de 2014, resolución confirmada en vía de recurso administrativo por esta Dirección General con fecha 26 de junio de 2015.

El encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz, a la vista de la documentación disponible, dictó auto acordando el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en dicho registro al haberse pronunciado el Registro Civil Central sobre la misma pretensión y, también esta dirección general, este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. En el ámbito del registro civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (*cf.* art. 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tomar la primera decisión. En el caso presente no se justifica la concurrencia de nuevos hechos que no hubieran podido tenerse en cuenta al tomar la decisión (*cf.* art. 358 RRC), sino que el promotor inicia un nuevo expediente con idéntica finalidad en otro registro civil, sin aportar documentos que acrediten hechos ni circunstancias nuevas, sin que quepa la continuación del procedimiento cambiando la petición de opción de nacionalidad española con base en el artículo 20 del Código Civil por la concesión de la nacionalidad por el tiempo de residencia en España, basada en el artículo 22 del mismo texto legal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto, confirmando el auto impugnado.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz.

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 17 de febrero de 2017 (37.^a). Procedimiento y otras cuestiones-Nueva solicitud de rectificación de error en inscripción de nacimiento.

Resolución de 21 de abril de 2017 (42.^a). Procedimiento y otras cuestiones-inadmisión solicitud nacionalidad por residencia.

Resolución de 30 de junio de 2017 (1.^a). Procedimiento y otras cuestiones

Resolución de 30 de junio de 2017 (6.^a). Procedimiento y otras cuestiones

Resolución de 8 de septiembre de 2017 (14.^a). Procedimiento y otras cuestiones. Se retrotraen las actuaciones para que sea notificada la interesada.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 (8.^a). Procedimiento y otras cuestiones. Nueva solicitud de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

Resolución de 29 de septiembre de 2017 (23.^a). Procedimiento y otras cuestiones. Se retrotraen las actuaciones para que sean notificados los interesados.

Resolución de 6 de octubre de 2017 (31.^a). Procedimiento y otras cuestiones.

Resolución de 10 de noviembre de 2017 (9.^a). Procedimiento y otras cuestiones. Solicitud de cambio de nombre y apellidos.

Resolución de 22 de diciembre de 2017 (33.^a). Procedimiento y otras cuestiones. Acta de opción.

9. PUBLICIDAD

9.1 Publicidad formal, acceso de los interesados al contenido del Registro Civil

9.1.1 PUBLICIDAD FORMAL, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSULTA DE LIBROS DEL REGISTRO

Resolución de 3 de marzo de 2017 (47.^a)

Publicidad formal-Expedición de certificaciones y consulta de libros del registro.—*Se deniega la expedición de copia de un expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo porque se trata de un caso sujeto a publicidad restringida y el solicitante no ha justificado interés legítimo y razón fundada para obtenerla.*

En las actuaciones sobre solicitud de copia de un expediente registral de inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Elda (Alicante) el 2 de agosto de 2013, Don J-D. V. G., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba la expedición de una copia del expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo de J.-D. V. R., practicada en 1948 en el Registro Civil de Valencia, alegando que el inscrito es la misma persona que su padre, D. V. R., quien, por razones desconocidas, fue inscrito en V. con otra identidad con la que estuvo viviendo entre 1948 y 1958, y desea saber si ese cambio de identidad se realizó o no de forma legal, dado que en la inscripción de nacimiento original de su progenitor en E-B. (A.) no consta marginal alguna de adopción.

Aportaba la siguiente documentación: DNI e inscripción de nacimiento del promotor, nacido en E. el 12 de mayo de 1968, hijo de D. V. R. y de J. G. T.; inscripción de nacimiento practicada en E-B. (A.) el 18 de mayo de 1942 de D. V. R., nacido en la misma localidad el día anterior, hijo de D. V. G. y de C. R. M., con marginal de matrimonio del inscrito contraído el 18 de julio de 1967 con J. G. T.; inscripción de nacimiento practicada en V. el 11 de noviembre de 1948 de J-D. V. R., nacido el 11 de mayo de 1942, hijo de J. V. L. y de J. R. M., con mención en el cuerpo principal del asiento de que la inscripción se practica en virtud de expediente y auto aprobado por la superioridad y una marginal ilegible practicada en 1963; inscripción de defunción de D. V. R. en S. J. d'A. el 27 de septiembre de 2009.

II

A requerimiento del Registro Civil de Valencia el promotor incorporó a las actuaciones la siguiente documentación: certificado de bautismo de D. V. R. con marginal de matrimonio celebrado el 18 de julio de 1967; certificado registral de matrimonio del anterior con J. G. T.; certificaciones de nacimiento de A., D. y J-A., hermanos de D. V. R.; certificación de nacimiento de J-E., hermana de J-D. V. R. nacida el 20 de diciembre de 1944 (inscripción practicada el mismo día que la de su hermano y también en virtud de expediente) y certificación de nacimiento de P. V. G., hermana del promotor.

III

La encargada del Registro Civil de Valencia dictó providencia el 24 de octubre de 2014 denegando la pretensión por no considerar acreditado que D. V. R. y J-D. V. R.. sean la misma persona, dado que solo coinciden el mes y año de nacimiento y el nombre de D., que en la inscripción practicada en V. figura como segundo nombre del inscrito, remitiendo al interesado a la vía judicial para poder hacer valer sus derechos.

IV

Notificada la resolución, se interpuso recurso de reposición ante el registro reiterando la petición y alegando el promotor que su padre vivió en V. hasta el año 58 o 59 con la identidad de J-D. V. R. y que descubrió poco antes de ingresar en el servicio militar que su nacimiento también figuraba inscrito en el Registro Civil de El Bonillo, momento a partir del cual vivió con la identidad de D. V. R., si bien a partir de algún momento dejó de investigar sobre su historia personal. Sin embargo, ante las noticias aparecidas en los últimos años sobre adopciones irregulares y sustracción de menores, el recurrente desea averiguar si el caso de su padre, de quien no es posible recabar directamente más datos porque falleció en 2009, puede ser una de esas adopciones ilegales, razón por la cual solicitó la copia del expediente de inscripción fuera de plazo en Valencia. El promotor considera que esa copia es imprescindible para poder acudir ante cualquier órgano judicial y que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al no habérsela proporcionado el registro. Con el escrito de recurso aporta fotografía de la orla del curso 1958/59 de un colegio de Valencia en la que figura un alumno identificado como J. V. y un certificado del Ejército del Aire de 1964 con la foto del soldado D. V. R.

V

La encargada del registro dictó nueva providencia el 23 de febrero de 2015 desestimando el recurso por no resultar desvirtuados los fundamentos de la resolución anterior.

VI

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado fundado en los mismos motivos que el recurso de reposición y alegando, además, falta de motivación de la resolución recurrida.

VII

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida por sus propios y claros fundamentos. La encargada del Registro Civil de Valencia remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 21, 22, 23, 25 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la instrucción de 9 de enero de 1987 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre legitimación de los particulares para obtener certificaciones del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 4-4.^a y 25-2.^a de octubre de 1996, 12 de septiembre de 1997, 7 de septiembre de 1998, 29-1.^a de noviembre de 2001, 10 de abril de 2002, 28-2.^a de febrero de 2006, 26-2.^a de marzo de 2008, 13-7.^a de febrero y 5-34.^a de julio de 2013 y 24-9.^a de junio de 2016.

II. Solicita el promotor la expedición de una copia del expediente que sirvió de base para una inscripción de nacimiento fuera de plazo practicada en Valencia en 1948 alegando que el inscrito es su padre, cuyo nacimiento ya figuraba registrado con otros datos en una localidad de A. desde 1942, por lo que sospecha que pudo producirse una adopción ilegal y quiere averiguar su verdadero origen. La encargada del registro denegó la pretensión por no considerar acreditado que la persona inscrita en Valencia sea la misma que el inscrito en E-B., cuyos datos se corresponden con los del padre del promotor.

III. El registro civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por ello, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC). Esta regla general no debe hacer olvidar, sin embargo, que hay casos de publicidad restringida (arts. 21 y 22 RRC) porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada.

IV. En este caso, sin embargo, se trata del acceso al legajo correspondiente a una inscripción de nacimiento practicada fuera de plazo mediante expediente. Aunque el artículo 6 de la Ley del Registro Civil no menciona expresamente la publicidad de los antecedentes y legajos de cada inscripción, no hay duda de que estos forman parte de los documentos archivados en los registros civiles a los que sí se refiere el apartado 4º del art. 21 RRC, por lo que no hay razones para excluirlos de la publicidad del registro en favor de quienes tengan interés en conocerlos y estén legitimados para ello. Así se desprende específicamente del artículo 28 RRC, que admite las certificaciones de documentos archivados, y del artículo 33 del mismo texto legal, que regula con detalle la expedición de certificaciones positivas de documentos. En consecuencia, no hay motivos para rechazar la publicidad de legajos, siempre que se conserven (*cf.* art. 104 RRC, párrafo segundo).

V. No obstante, en lo que se refiere a la legitimación del recurrente, debe decirse que cuando se trata de acceder a documentos que contengan alguna de las circunstancias sometidas a publicidad restringida enumeradas en el art. 21 RRC, únicamente se puede expedir certificación o permitir la consulta, sin autorización especial, a las personas que menciona en cada caso el artículo 22 del propio reglamento. Si la certificación la solicita otra persona, es imprescindible que se obtenga la autorización expresa del encargado, justificando previamente su interés legítimo y razón fundada para la petición. Dado que la solicitud en este caso se encuadra en el supuesto del art. 21.4º RRC, la autorización deberá estar condicionada a que el interesado acredite su parentesco con el inscrito, lo que aquí no se ha probado de ningún modo a través de la documentación aportada, pues ni hay evidencia de que el padre del solicitante, D. V. R., sea la misma persona que J-D. V. R. ni consta relación alguna entre ambas inscripciones que permita apreciar la concurrencia de un interés legítimo para acceder a la pretensión por medio de un expediente registral.

VI. Finalmente, no cabe admitir las alegaciones acerca de la supuesta vulneración del derecho a la tutela efectiva, ya que el interesado puede acudir a la vía judicial donde, en su caso, se practicarán las pruebas que el juez determine, ni se aprecia tampoco falta de motivación en la resolución recurrida, donde se indica claramente que la causa de denegación es la imposibilidad de dar por acreditado en vía registral que el inscrito en V. es la misma persona que el padre del solicitante al no coincidir los datos de filiación ni el lugar y el día del nacimiento, por lo que se insta al interesado a acudir a la vía jurisdiccional.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Valencia.

Resolución de 2 de junio de 2017 (35.ª)

Publicidad formal-Expedición de certificaciones y consulta de libros del registro.—*Se confirma la denegación de expedición de varias certificaciones de inscripción de nacimiento y defunción en aplicación de los criterios de la Instrucción de 9 de enero de 1987 de la DGRN porque el promotor no ha justificado interés legítimo y razón fundada para obtenerlas.*

En las actuaciones sobre expedición de certificaciones de varios asientos registrales remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil de Torrelavega (Cantabria).

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado en el Registro Civil de Torrelavega el 26 de octubre de 2015, Don F-R. C. A., mayor de edad y con domicilio en S., solicitaba la expedición de cinco certificaciones literales de nacimiento y tres de defunción relativas a seis personas de su familia.

II

La encargada del registro dictó auto el 28 de octubre de 2015 denegando la pretensión por no haber acreditado el solicitante un interés legítimo.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que el registro civil es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, que los encargados están obligados a facilitar la publicidad registral, que ninguno de los asientos cuya expedición se solicita está sometido a publicidad restringida y que no expresó en su escrito inicial el motivo de su petición porque no se lo indicaron cuando llamó por teléfono al registro para recabar información pero que, en cualquier caso, considera que se trata de un aspecto menor, dado el carácter público del registro, y que la propia normativa presume el interés en conocer los asientos en quien solicita una certificación, y aclara que su petición tiene por finalidad solucionar errores documentales en unas viejas herencias familiares.

IV

Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Torrelavega emitió informe ratificándose en su decisión y añadiendo que en el caso de una de las certificaciones de nacimiento solicitadas se requie-

ría una labor de investigación previa para averiguar la fecha correcta del hecho que no corresponde realizar al registro sino al solicitante, que otra de las certificaciones ya había sido facilitada anteriormente, si bien el promotor pide que se le remita nuevamente con ciertos cambios de reprografía que exceden las posibilidades del registro, dados los medios de los que se dispone y el estado de los libros, y que el escrito de recurso sigue sin justificar el motivo de la solicitud. A continuación, se remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 21, 22 y 30 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de 9 de enero de 1987 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre legitimación de los particulares para obtener certificaciones del registro civil y las resoluciones, entre otras, de 8 de junio de 1995, 4-4.^a y 25-2.^a de octubre de 1996, 12 de septiembre de 1997, 7 de septiembre de 1998, 29-1.^a de noviembre de 2001, 10 de abril de 2002, 28-2.^a de febrero de 2006, 26-2.^a de marzo de 2008, 13-7.^a de febrero y 5-34.^a de julio de 2013 y 15-42.^a de abril y de 2016.

II. El registro civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por eso, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (arts. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a los que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil, a los que se añadió, por orden ministerial de 13 de octubre de 1994, la causa de defunción. No obstante, si bien el interés en conocer los asientos se presume en quien solicita la información, no existe disposición legal alguna que establezca esta presunción cuando se piden varias certificaciones, debiendo el encargado en tal caso valorar la existencia o no de un interés que pueda estar amparado en el derecho fundamental a recibir y difundir información veraz. Además, la instrucción de 9 de enero de 1987 de la Dirección General de los Registros y del Notariado estableció el criterio de que el interés que legitima para obtener certificaciones ha de estar relacionado directamente con la prueba del estado civil de las personas o del contenido del Registro y, tratándose de certificaciones literales de nacimiento, se especifica que solo se expedirán para aquellos asuntos en los que sea necesario probar la filiación (art. 30 RRC). Si el interés se refiere a cuestiones distintas, el encargado puede y debe denegar la certificación en el ejercicio de su función de calificación y es en esta razón, precisamente, en la que ha basado la encargada en este caso su decisión, pues el recurrente no ha justificado de ningún modo la concurrencia de un interés legítimo en los términos descritos. Con carácter general, la doc-

trina de la DGRN es bastante restrictiva sobre esta cuestión y así, aparte de simples motivos comerciales que, naturalmente, no legitiman para obtener listas indiscriminadas de nacimientos y matrimonios, también se han rechazado peticiones de publicidad registral en supuestos en que se alegaba un parentesco no probado, criterio extrapolable al presente caso, en el que, por otro lado, cabe considerar que el eventual interés alegado en la rectificación de algunos datos de antiguos documentos hereditarios, en principio, puede verse satisfecho por otras vías.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 22 de junio de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil en Torrelavega (Cantabria).

Resolución de 7 de julio de 2017 (10.^a)

Publicidad formal-Expedición de certificaciones y consulta de libros del registro.—*Se deniega la autorización para la consulta masiva de los índices de varios libros del Registro Civil de Mieres entre 1884 y 1941 para localizar y, posteriormente, obtener la expedición de varios certificados de nacimiento y defunción porque el examen directo de los libros es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada por razones preferentes de prestación del servicio y porque, pudiendo estar afectados asientos sujetos a publicidad restringida, el solicitante no ha justificado interés legítimo y razón fundada para obtener las certificaciones.*

En las actuaciones sobre solicitud de consulta de índices y posterior expedición de varias certificaciones de nacimiento y defunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Mieres.

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Mieres el 15 de octubre de 2015, Don V. H. G., mayor de edad y con domicilio a efectos de notificaciones en B., solicitaba que se le permitiera consultar los índices de los libros del registro correspondientes a varios años comprendidos entre 1884 y 1941 con objeto de localizar y obtener después las inscrip-

ciones de nacimiento de tres personas y las de defunción de otras dos (cuyas fechas de nacimiento y defunción se desconocen) alegando que son necesarias para la realización del acta de declaración de herederos de una herencia *ab intestato* que se está tramitando en el bufete en el que el solicitante trabaja.

II

Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 10 de noviembre de 2015 denegando la pretensión porque se trata de una consulta muy amplia e indiscriminada que generaría perturbaciones en el servicio ordinario del registro y porque podrían divulgarse datos sometidos a publicidad restringida que solo son accesibles para quien justifique un interés legítimo especial que no concurre en el solicitante.

III

Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que solicitó permiso, no para examinar el contenido de los asientos, sino para consultar los índices de los libros necesarios para obtener posteriormente las partidas de nacimiento y defunción de cinco personas y de sus posibles hermanos, reiterando que la finalidad de su pretensión es que los herederos de un causante concreto puedan justificar legalmente sus derechos hereditarios. Añadía que le resultaba imposible acotar más la búsqueda, que el interés en conocer el contenido los asientos del registro no hay que motivarlo porque se presume y que los únicos requisitos que establece la ley para examinar los libros son pedir autorización, adaptarse al horario del registro en cuestión y hacerlo bajo la supervisión del encargado.

IV

Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación por no haberse acreditado ninguna de las circunstancias alegadas por el promotor y porque lo razonable sería que fueran los propios herederos, por sí mismos o a través de una autorización al recurrente, quienes promovieran la petición. La encargada del Registro Civil de Mieres se ratificó en la decisión adoptada porque el solicitante no ha probado la realidad del encargo del despacho para el que presta sus servicios, insistiendo también en que la amplitud de la consulta generaría disfunciones en la prestación ordinaria del servicio e implicaría la exposición de datos personales de gran número de personas, remitiendo a continuación el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil (LRC); 21, 22, 23, 25 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC), la instrucción de 9 de enero de 1987 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre

legitimación de los particulares para obtener certificaciones del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 4-4.^a y 25-2.^a de octubre de 1996, 12 de septiembre de 1997, 7 de septiembre de 1998, 29-1.^a de noviembre de 2001, 10 de abril de 2002, 28-2.^a de febrero de 2006, 26-2.^a de marzo de 2008, 13-7.^a de febrero y 5-34.^a de julio de 2013, 23-3.^a de abril de 2014, 18-30.^a de diciembre de 2015 y 24-9.^a de junio de 2016.

II. Solicita el promotor la consulta de los índices de varios libros del registro para la localización y posterior expedición de las certificaciones de nacimiento y defunción de varias personas alegando que están relacionadas con la tramitación de una herencia *ab intestato* que se está llevando a cabo en el despacho para el que trabaja. La encargada del registro denegó la pretensión porque la amplitud de la consulta perturbaría la ordinaria prestación del servicio y porque podrían divulgarse indebidamente datos sometidos a publicidad restringida, no habiendo acreditado el solicitante un interés legítimo.

III. El Registro Civil Español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por ello, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC). De manera que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del registro civil, en principio, no tiene que acreditar el interés especial porque este se le presume por el hecho de solicitarlo, pero esta regla general, como recordó la instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que el servicio público se resentiría si el particular, legitimado para obtener una certificación, pudiera a su capricho solicitar el número de certificaciones o consultas que juzgara oportuno. Así, las certificaciones que contengan alguno de los datos reservados enumerados en el artículo 21 RRC (a los que se añadió, por orden ministerial de 13 de octubre de 1994, la causa de defunción), únicamente pueden ser expedidas sin autorización especial a las personas que menciona en cada caso el artículo 22 RRC. Si la certificación la solicita otra persona, es imprescindible que obtenga la autorización expresa del encargado previa justificación de interés legítimo y razón fundada para la petición. Es esta una función de calificación del encargado sobre la concurrencia del interés legítimo en la que deberá aplicar los criterios sentados por este centro directivo en la instrucción, ya citada, de 9 de enero de 1987 en el sentido de que el interés que legitima para obtener certificaciones ha de estar relacionado directamente con la prueba del estado civil de las personas o del contenido del registro. Si el interés se refiere a cuestiones distintas, el encargado puede y debe denegar la certificación. Con carácter general, puede decirse que la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado es bastante restrictiva sobre esta cuestión. La pretensión del recurrente en este caso, tal como ha sido formulada, no puede ser estimada en tanto que la consulta directa de los libros del registro (ya sea de los índices o del contenido de los asientos) es una posibilidad excepcional que no puede extenderse al examen de cualquier libro a elección del consultante porque podría perturbar el normal funcionamiento del servicio y porque es posible que la información requerida afecte a datos de publicidad restringida que solo pueden ser dados a conocer a las personas directamente afectadas o a terceros que justifiquen un interés legítimo especial y razón fundada para pedir el acceso a tal información. No constando en este caso la acreditación de dicho interés legítimo por parte del solicitante, no es posible autorizar la petición cursada.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de julio de 2017.–Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.–Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Mieres (Asturias).

Resoluciones que por tener relación de hechos y fundamentación jurídica coincidente con las anteriores no se publican a texto completo

Resolución de 7 de abril de 2017 (3.^a). Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta de libros del registro.

Resolución de 19 de mayo de 2017 (22.^a). Publicidad formal-expedición de certificaciones y consulta de libros del registro.

9.1.2 PUBLICIDAD FORMAL. LIBRO DE FAMILIA

(No hay resoluciones para este apartado)

9.2 Publicidad material, efectos de la publicidad registral

9.2.1 PUBLICIDAD MATERIAL

Resolución de 26 de mayo de 2017 (27.^a)

Publicidad material.—*Instada de oficio la inscripción de una sentencia de divorcio dictada en España, debe ser extendida porque se trata de un hecho inscribible ocurrido en territorio español (arts. 15 y 76 LRC) y, como soporte de dicha marginal, debe practicarse asimismo anotación de matrimonio (art. 154.1º RRC).*

En las actuaciones sobre inscripción de sentencia de divorcio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

I

Por medio de exhorto fechado el 2 de diciembre de 2014, el secretario del Juzgado de 1.^a Instancia núm. 7 de A. M. (Barcelona) instaba la anotación en el Registro Civil Central, al margen de la inscripción de matrimonio de Y. D. y M. S., del fallo de la sentencia de divorcio dictada por el juzgado exhortante. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificado senegalés de matrimonio celebrado en D. el 6 de agosto de 2000 entre M. S. y Y. D. y testimonio de la sentencia de divorcio dictada el 7 de octubre de 2014 por el Juzgado de 1.^a Instancia núm. 7 de A. M.

II

El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo el 16 de abril de 2015 denegando la práctica de la inscripción de divorcio porque para ello habría que inscribir antes el matrimonio y, a juicio del encargado, el certificado aportado no ofrece suficientes garantías para acceder al registro.

III

Notificada la resolución, la Sra. Y. D. interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la magistrada que dictó la sentencia de divorcio sí consideró suficiente el certificado aportado al procedimiento para acreditar la existencia del matrimonio, pues en caso contrario no habría podido declarar su disolución; que el documento contiene todos los datos esenciales; que las formalidades del matrimonio en Senegal son las propias de ese país, diferentes de las españolas, y que la obtención de un nuevo certificado senegalés resultaría muy complicada.

IV

Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 1, 15, 25, 27, 38 y 76 de la Ley del Registro Civil (LRC); 154, 263 y 264 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 11-1.^a de junio de 2003, 17-2.^a de enero de 2008 y 15-43.^a de abril de 2013.

II. Se pretende la inscripción en el registro civil español de la sentencia, dictada en España, de divorcio de un matrimonio de ciudadanos senegaleses celebrado en Senegal. El encargado del registro deniega su práctica porque, siendo el divorcio objeto de un asiento marginal, antes habría que inscribir el matrimonio y considera que la certificación aportada no ofrece garantías suficientes para practicar el asiento principal.

III. En el registro civil constarán los hechos concernientes al estado civil que afecten a los españoles y los acaecidos en España aunque afecten a extranjeros (arts. 1 y 15 LRC) y una sentencia firme de divorcio pronunciada por órgano judicial español debe ser inscrita de oficio en el registro civil donde conste inscrito el matrimonio que ha quedado disuelto (arts. 76 LRC y 264 RRC). De manera que, si el divorcio ha de inscribirse al margen de la inscripción de matrimonio, es necesario practicar esta previamente, a menos que ello no sea posible por causa legal, como aquí sucede al tratarse de un matrimonio entre extranjeros celebrado en el extranjero que, por el momento, no es inscribible en España –y ello independientemente de la consideración que merezca el certificado aportado en cuanto a su autenticidad y garantías legales–. En estos supuestos procede practicar, no la inscripción, sino una anotación del hecho que no afecta a españoles ni ha ocurrido en España (el matrimonio en este caso) para que sirva de soporte a la marginal, anotación

que debe indicar su carácter especial y que será cancelada cuando desaparezca la situación que la motivó (*cf.*: arts. 15, párrafo segundo, LRC y 154.1º RRC).

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y proceder a la inscripción de la sentencia de divorcio previa práctica de una anotación soporte de matrimonio.

Madrid, 26 de mayo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Central.

10. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL

10.1 Organización y funcionamiento en el Registro Civil

10.1.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL REGIS- TRO CIVIL. INSCRIPCIONES EN EUSKERA

Resolución de 3 de marzo de 2017 (38.ª)

Organización y funcionamiento del Registro Civil. Inscripciones en euskera.—*No procede practicar inscripciones en euskera en los registros civiles no informatizados conforme a la disposición transitoria de la Ley 12/2005, de 22 de junio, y no procede extender las inscripciones en libros distintos de los previstos en la Ley.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento en euskera en libro oficial remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra providencia e instrucción dirigida al Registro Civil de Ataun (Guipúzcoa) por la encargada del Registro Civil de Tolosa (Guipúzcoa).

HECHOS

I

Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Ataun el 2 de septiembre de 2010, D.ª L. M. U. y Don A. G. G., mayores de edad y con domicilio en A., declaraban que iban a ser padres en el mes de diciembre del mismo año y solicitaban que la inscripción de naci-

miento de su hijo se practicara en euskera y que el Libro de Familia y las restantes inscripciones, certificados y anotaciones consten en euskera. Solicitaban asimismo que el encargado del registro gestione y adopte los acuerdos necesarios para obtener los medios materiales que hagan posible lo solicitado. Subsidiariamente, solicitaban la apertura de un libro especial para llevar a cabo las inscripciones en euskera, tal como –según indican y acreditan mediante fotocopia del auto del Registro Civil de Bergara– se ha hecho ya en el Registro de Aretxabaleta, a este último respecto debe significarse que dicha práctica había cesado en dicho registro ya en el año 2009 por no resultar conforme a la normativa registral aplicable.

II

Con fecha 7 de octubre de 2010 la encargada del Registro Civil de Tolosa dicta providencia en la que recuerda que ya se vio en dicho registro un caso idéntico con motivo de la inscripción de nacimiento del anterior hijo de los promotores en el año 2008, y que al igual que entonces tampoco en el caso presente puede accederse a lo solicitado, adjuntando instrucción motivada en dicho sentido para el Registro Civil de Ataun, en la que se advierte que, en tanto no se incorporen al proceso de informatización, los registros civiles no podrán practicar los asientos en lengua distinta del castellano. Con fecha 12 de noviembre de 2010 los promotores interponen recurso contra dicha providencia, en el que añaden una nueva petición, a saber, que si la inscripción no se hace en euskera y sí en castellano se haga constar una anotación marginal relativa a que ha sido en contra de la voluntad de los promotores, en base al artículo 38.1 de la Ley del Registro Civil.

III

Mediante providencia de 25 de enero de 2011, la encargada del Registro Civil de Tolosa se reitera en la suya anterior y respecto a la anotación marginal solicitada tampoco accede a ello, ya que considera que en el artículo 38 de la Ley de Registro Civil no está contemplada la declaración de voluntad solicitada. Procede así mismo a ordenar la inscripción de nacimiento del hijo de los interesados en castellano. Según consta en certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil de Ataun obrante en el expediente, el hijo de los interesados hijo nació el 2 de enero de 2011.

IV

Los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, insistiendo en su pretensión de que se anote marginalmente que la inscripción en castellano es contraria a su voluntad, aportando la inscripción de su hija practicada en castellano y en la que se hizo constar una nota marginal respecto a que la inscripción había sido recurrida y pendía de la resolución definitiva, añadiendo que los interesados no habían renunciado a que la inscripción fuera en euskera, mención que no corresponde a lo solicitado en el caso que ahora se examina y finalmente solicitan que se autorice y ordene al Registro Civil de Ataun a practicar las inscripciones en un Libro de nacimientos redactado en euskera.

V

El Fiscal solicita la desestimación del recurso y la encargada del Registro Civil de Tolosa remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 3, 14 y 149 de la Constitución; el artículo 23 de la Ley del Registro Civil en la redacción dada por la Ley 12/2005, de 22 de junio; los artículos 16, 86, 194, 198, 298, 300, 347, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil; las órdenes ministeriales de 26 de mayo de 1988, 20 de julio de 1989 y 21 de enero de 1993; las sentencias del Tribunal Constitucional 82, 83 y 84/1986, 74/1989, 56/1990, 337/1994 y 87/1997; la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.^a) de 26 de enero de 1993; las circulares de 26 de noviembre de 1980 y de 1 de marzo de 1984; y las resoluciones de 6 de noviembre de 1980, 22 de noviembre de 1985, 20 de octubre de 1987, 27 de junio de 1988, 16 de agosto de 1993, 15 de febrero de 1994, 26 (2.^a) de octubre de 1996, 10 de enero y 2 de julio de 1997, 5 de septiembre de 1998, 28 de octubre de 1999, 22-5.^a de febrero de 2007, 3 (3.^a) y 30 (1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a) de abril de 2009.

II. Cabe advertir en primer lugar que la admisión del recurso plantea serias dudas a este centro directivo, toda vez que la providencia de 25 de enero de 2011 dictada por la encargada del Registro Civil de Tolosa, no es recurrible al no estar comprendidas en el artículo 355 RRC como susceptibles de recurso. No obstante, dado el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias, esta Dirección General entra a resolver sobre el fondo del asunto.

III. El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, diferentes Estatutos de Autonomía, entre ellos el del País Vasco, han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las comunidades autónomas que les corresponden.

El Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 3 de la Constitución supone una habilitación de las comunidades autónomas con lengua propia para que, en el marco establecido en sus Estatutos de Autonomía, puedan regular el alcance del concepto de oficialidad (STC 82/1986, de 26 de junio, y 56/1990, de 29 de marzo), lo cual supone establecer el contenido básico de dicha oficialidad (STC 337/1994, de 23 de diciembre) y, además, determinar las medidas que sean precisas para el fomento o la normalización de su lengua propia (STC 74/1989, de 24 de abril, y 337/1994, de 23 de diciembre).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros han procurado, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacer efectivo dentro del registro civil el principio constitucional de cooficialidad o doble oficialidad del castellano y del idioma oficial propio en el territorio de determinadas comunidades autónomas. Así, el Real Decreto 628/1987, de 8 de mayo, dio nueva redacción al artículo 86 del Reglamento del Registro Civil a fin de permitir que, dentro del territorio de estas comunidades autónomas, pudieran presentarse al registro civil documentos redactados en su idioma oficial propio, sin traducción al castellano; las Órdenes Ministeriales de 26 de mayo de 1988, 20 de julio de 1989 y 21 de enero de 1993 han aprobado los correspondientes modelos oficiales bilingües para todos los impresos relacionados con el registro civil, y la circular de 1 de marzo de 1984 ha aprobado también un modelo bilingüe para la expedición de certificaciones literales de este registro, también Orden JUS/268/2006, de 8 de febrero, por la que se modifican los modelos de asientos y certificaciones del registro civil y del libro de familia, aclarada por la posterior Orden JUS/644/2006, de 6 de marzo, incorpora las distintas versiones de dichos modelos en todas las lenguas cooficiales existentes en España, además del castellano.

IV. La Ley 12/2005, de 22 de junio, que modifica el artículo 23 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, regula por primera vez la redacción de las inscripciones y demás asientos propios del registro civil en lengua distinta del castellano. Esta falta de previsión se ha subsanado en la nueva redacción dada al citado precepto, conforme a la cual «Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que radique el registro civil, según la lengua en que esté redactado el documento o en que se realice la manifestación. Si el documento es bilingüe, se realizarán en la lengua indicada por quien lo presente al registro. Todo ello, siempre que la legislación lingüística de la Comunidad Autónoma prevea la posibilidad de redacción de los asientos de los registros públicos en idioma cooficial distinto del castellano».

En desarrollo y aplicación práctica de esta nueva norma se han llevado a cabo actuaciones de adaptación del aplicativo INFOREG (vid. resolución de 25 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre aprobación de la versión 2.0 del programa Inforeg y nuevos modelos de asientos para los registros civiles informatizados) para incorporar al mismo todos los modelos de asientos existentes en las distintas lenguas oficiales existentes en España.

Normativamente estas iniciativas culminaron en la aprobación de la Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los registros civiles y digitalización de sus archivos que, además de aprobar la versión 4.0 del aplicativo INFOREG, su disposición adicional segunda contiene una regulación relativa al idioma en que se redactarán los modelos de

diligencias de apertura y cierre y asientos de los libros registrales, en los siguientes términos:

«1. Los modelos de diligencias de apertura y cierre incorporados al anexo III de esta Orden ministerial serán bilingües en los registros civiles de las comunidades autónomas con idioma oficial propio, además del castellano, conforme a las traducciones que aprobará la Dirección General de los Registros y del Notariado, a propuesta de los órganos competentes de las respectivas comunidades autónomas.

2. Los asientos registrales que se hayan de redactar en lengua oficial propia de la comunidad autónoma en que radique el registro civil distinta del castellano, en los casos en que proceda legalmente de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, se ajustarán a los modelos en cada momento vigentes con arreglo a la traducción oficial que de los mismos se apruebe, las cuales serán incorporadas a la aplicación Inforeg por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, inmediatamente después de producida su aprobación.»

V. No obstante, ha de recordarse que la regulación contenida en el nuevo párrafo final agregado al artículo 23 de la Ley del Registro Civil por la Ley 12/2005, de 22 de junio, estuvo vinculada por razones operativas y funcionales, en cuanto a su aplicación práctica, a la progresiva informatización de los registros civiles, según se desprende de la disposición transitoria única de la citada Ley, conforme a la cual «A los registros civiles que no estuvieran informatizados a la entrada en vigor de esta Ley, les será de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, según su incorporación efectiva al proceso de informatización». Este aplazamiento de la aplicación práctica del párrafo final del artículo 23 de la Ley registral civil a la informatización de los registros, viene justificada e impuesta por el hecho de que los libros oficiales de los registros no informatizados contienen preimpresos los textos fijos de los respectivos modelos de asientos redactados en castellano, lo cual sin embargo no es impedimento para que las menciones y datos que se han de consignar en los espacios libres de tales modelos puedan ser redactados en lengua oficial distinta del castellano (resolución de 8 de junio de 2007), pero sí para otras fórmulas alternativas de elaboración de libros registrales *ad hoc* confeccionados por el propio encargado, que carecen del adecuado respaldo legal.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállego.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil Tolosa (Guipúzcoa).

11. OTROS

11.1 Otras cuestiones no incluidas en los apartados anteriores

11.1.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN PATERNA NO MATRIMONIAL

Resolución de 1 de diciembre de 2017 (6.ª)

Otras cuestiones. Solicitud de información general sobre inscripción de filiación paterna no matrimonial.–1.º *No cabe estimar un recurso cuando la pretensión principal ha sido atendida en la resolución recurrida.*

2.º *No cabe resolver sobre la segunda pretensión planteada por haber decaído su objeto.*

En las actuaciones sobre petición de información relativa a la forma de inscribir la filiación paterna no matrimonial remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil de Lucena (Córdoba).

HECHOS

I

Por medio de escrito presentado en el Registro Civil de Lucena el 26 de junio de 2015, D.ª C. C. C., de nacionalidad española, y D. N. G. U., de nacionalidad guatemalteca, con domicilio a efectos de comunicaciones en la misma localidad, solicitaban cita con el encargado del registro para que les facilitara información sobre la forma de inscribir la

filiación paterna del hijo que estaban esperando en ese momento, indicando que no estaban casados y que, aunque residían de forma habitual en Guatemala, habían decidido que el bebé naciera en España pero que, por motivos laborales, el padre debía regresar a Guatemala finalizado su periodo de vacaciones y no podría estar presente ni en el momento del nacimiento ni en los treinta días siguientes. Alegaban que habían recibido información confusa e insuficiente por parte del personal del registro y que, finalmente, habían llamado a la Embajada de España en Guatemala, donde les habían indicado que se podía abrir allí un expediente de reconocimiento paterno pero que era requisito necesario presentar constancia firmada y sellada por el encargado del Registro Civil de Lucena –donde se registraría al nacido– de que el padre había comparecido personalmente en dicho registro expresando su intención de reconocer al hijo que iba a nacer y la imposibilidad de estar presente en España en el momento del nacimiento ni dentro del plazo para practicar la inscripción, debiendo quedar reflejado también el asentimiento de la madre. Por todo ello, además de la petición de información veraz, solicitaban la expedición, por parte del encargado del registro, del documento requerido por la delegación española en Guatemala. Consta en el expediente la siguiente documentación: pasaporte guatemalteco, documento nacional de identidad y certificado de nacimiento del promotor; DNI y pasaporte españoles de la promotora; reserva de billetes de avión y certificado de empadronamiento de la promotora en Lucena.

II

El encargado del registro dictó auto el 3 de julio de 2015 denegando la pretensión porque el asesoramiento jurídico no está entre las funciones de los jueces encargados, sin perjuicio de la obligación de la oficina de facilitar los textos normativos y los formularios pertinentes para la inscripción de los hechos que son objeto del registro civil. Y en cuanto a la declaración de paternidad del hijo aún no nacido, señalaba que lo procedente era acudir a un notario, pues las certificaciones del registro se limitan a los hechos inscritos y, si bien el artículo 49 de la Ley del Registro Civil prevé que el reconocimiento de hijos puede hacerse en cualquier momento, es evidente que su inscripción solo cabe una vez ocurrido el nacimiento.

III

Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que en ningún momento había solicitado la inscripción de un nacimiento aún no ocurrido, sino únicamente orientación e información sobre la forma de tramitar el reconocimiento paterno teniendo en cuenta que los progenitores no estaban casados y que el padre iba a estar en el extranjero en el momento del nacimiento y durante el mes siguiente. Añadía que si el registro no tiene la función de asesorar, sí debe orientar al ciudadano facilitándole la normativa necesaria o, al menos, derivándole a la oficina, dependencia o persona que posee la información requerida, por lo que reiteraba su solicitud de que se realizaran las actuaciones necesarias para proporcionar a la recurrente la información precisa y que se le facilitaran el texto de la normativa y los formularios pertinentes.

IV

De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Lucena remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 120 y 124 del Código Civil (CC), 16, 17, 26, 27, 28, 29 y 49 de la Ley del Registro Civil (LRC), 9, 16, 94, 95, 186 y 188 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. El encargado del registro tiene atribuida una pluralidad de funciones que abarcan no solo la registral en sentido estricto (calificación, inscripción y publicidad formal) sino también otras como la corrección del registro a través de expedientes registrales de rectificación y la prueba de situaciones de estado civil mediante expedientes para la declaración con valor de simple presunción. Sin embargo, en lo que se refiere al suministro de información general sobre los distintos procedimientos registrales, la legislación sobre la materia se limita a señalar que en todas las oficinas del registro habrá, a disposición del público, ejemplares de la ley, del reglamento y de los formularios oficiales, previsión que recoge expresamente la propia resolución recurrida. De manera que, independientemente de los puntos de información que puedan y deban habilitarse en cada registro para facilitar los trámites y orientar a los usuarios, y aunque es comprensible, a la vista de la disparidad de la información suministrada a los interesados en diferentes instancias, la pretensión de que fuera el propio encargado del registro en el que se iba a registrar el nacimiento quien les indicara la forma más adecuada de proceder, lo cierto es que no entra dentro de las obligaciones propias de aquél la de suministrar directamente dicha información. Pero, aun así, la realidad es que la resolución apelada, además de confirmar la obligación del registro de poner a disposición de los ciudadanos los textos legales pertinentes, señalaba claramente la posibilidad de proceder a la inscripción de la filiación paterna a través de la formalización del reconocimiento en un documento público notarial que podría haber tenido acceso al registro dentro del plazo para practicar la inscripción (cfr. arts. 186 y 188 RRC expresamente citados en el auto apelado). En ese sentido, se aprecia cierta incongruencia en el escrito de recurso, donde incluso se citan varios artículos del Código Civil y de la Ley del Registro Civil relativos a la determinación de la filiación no matrimonial, por lo que, en definitiva, no se entiende qué tipo de información suplementaria se estaba requiriendo. En realidad, su contenido parece más propio de una queja –legítima, pero canalizable por distinta vía–, por la deficiencia del servicio recibido que de un recurso de la competencia de este centro.

III. En lo que se refiere estrictamente a la posibilidad de realizar el reconocimiento paterno del hijo aún no nacido, es evidente, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, que el objeto de la pretensión en este aspecto ha decaído y se presume que la filiación paterna del nacido habrá quedado ya determinada conforme a alguna de las formas previstas legalmente.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.—Firmado: El Director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gállico.—Sr./a. Juez Encargado del Registro Civil de Lucena (Córdoba).

12. DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones de interés para la Dirección General de los Registros y del Notariado. Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil

A) PUBLICADAS EN EL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»

Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («BOE» de 29 de junio) **2017/7483**

B) NO PUBLICADAS EN EL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»

(No hay resoluciones para este apartado)